COLECCIÓN
JÓVENES INVESTIGADORES

EL CAMBIO CLIMÁTICO A LA LUZ DEL SISTEMA INTERAMERICANO DE DERECHOS HUMANOS

Iraida Angelina Giménez

COLEX READER
eBook en www.colex.es

COLEX

COLEX READER



¡Gracias por confiar en Colex!

La obra que acaba de adquirir incluye de forma gratuita la versión electrónica. Acceda a nuestra página web para aprovechar todas las funcionalidades de las que dispone en nuestro lector.

Funcionalidades eBook

Acceso desde cualquier dispositivo

Idéntica visualización a la edición de papel

Navegación intuitiva

Tamaño del texto adaptable

Puede descargar la APP "Editorial Colex" para acceder a sus libros y a todos los códigos básicos actualizados.

Available on the iPhone App Store

GET IT ON Google play

Síguenos en:

COLECCIÓN
JÓVENES INVESTIGADORES

3

EL CAMBIO CLIMÁTICO A LA LUZ DEL SISTEMA INTERAMERICANO DE DERECHOS HUMANOS

COLECCIÓN
JÓVENES INVESTIGADORES

Directores:

Leticia Fontestad Portalés
Universidad de Málaga

Paulo Ramón Suárez Xavier
Universidad de Málaga
Universidad de Barcelona

Subdirectora:

María de las Nieves Jiménez López
Universidad de Málaga

Coordinadores académicos:

Francesc Pérez Tortosa
Universidad de Málaga

Laura Andrea Flórez Álvarez
Universidad de Málaga

Secretaria académica:

Ester Renedo Santamaría
Universidad Isabel I
Universidad de Burgos

Consejo editorial:

Arturo Álvarez Alarcón
Universidad de Cádiz

María del Coral Arangüena Fanego
Universidad de Valladolid

Silvia Barona Vilar
Universidad de Valencia

Lorenzo Bujosa Vadell
Universidad de Salamanca

Sonia Calaza López
Universidad Nacional de Educación a Distancia

Ignacio Colomer Hernández
Universidad Pablo de Olavide

Montserrat de Hoyos Sancho
Universidad de Valladolid

Mar Jimeno Bulnes
Universidad de Burgos

Rogelio Lasso
University of Illinois Chicago

Verónica López Yagües
Universidad de Alicante

Luiz Guilherme Marinoni
Universidade Federal do Paraná

Fernando Martín Diz
Universidad de Salamanca

Ricardo Perlingeiro Mendes da Silva
Universidade Federal Fluminense

Esther Pillado González
Universidad de Vigo

Helena Soleto Muñoz
Universidad Carlos III de Madrid

David Vallespín Pérez
Universidad de Barcelona

COLECCIÓN
JÓVENES INVESTIGADORES

3

EL CAMBIO CLIMÁTICO A LA LUZ DEL SISTEMA INTERAMERICANO DE DERECHOS HUMANOS

Iraida Angelina Giménez

COLEX 2024

Copyright © 2024

Queda prohibida, salvo excepción prevista en la ley, cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública y transformación de esta obra sin contar con autorización de los titulares de propiedad intelectual. La infracción de los derechos mencionados puede ser constitutiva de delito contra la propiedad intelectual (arts. 270 y sigs. del Código Penal). El Centro Español de Derechos Reprográficos (www.cedro.org) garantiza el respeto de los citados derechos.

Editorial Colex S.L. vela por la exactitud de los textos legales publicados. No obstante, advierte que la única normativa oficial se encuentra publicada en el BOE o Boletín Oficial correspondiente, siendo esta la única legalmente válida, y declinando cualquier responsabilidad por daños que puedan causarse debido a inexactitudes e incorrecciones en los mismos.

Editorial Colex S.L. habilitará a través de la web www.colex.es un servicio online para acceder a las eventuales correcciones de erratas de cualquier libro perteneciente a nuestra editorial, así como a las actualizaciones de los textos legislativos mientras que la edición adquirida esté a la venta y no exista una posterior.

© Iraida Angelina Giménez

© Editorial Colex, S.L.
Calle Costa Rica, número 5, 3.º B (local comercial)
A Coruña, C.P. 15004
info@colex.es
www.colex.es

A mi Madre y a Guinness

ABREVIATURAS Y SIGLAS MÁS UTILIZADAS

ARI| ARWISA	Artículos sobre Responsabilidad del Estado por Hecho Ilícito
CADH|ACHR	Convención Americana sobre Derechos Humanos / Pacto de San José.
CVDT|VCLT	Convención de Viena del Derecho de los Tratados
CDI|ILC	Comisión de Derecho Internacional
CMNUCC| UNFCCC	Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático.
CIJ|ICJ	Corte Internacional de Justicia.
CIDH	Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
CtIDH| IACHR	Corte Interamericana de Derechos Humanos.
CEDH	Convenio Europeo de Derechos Humanos.
CDH/UNHRC	Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
CND/NDC	Contribuciones Nacionales Determinadas
CRC|CDN	Comité de Derechos del Niño
CCPR	Comité de Derechos Humanos
COP	Conferencia de Partes.
DADHH	Declaración Americana sobre Derecho y Deberes del Hombre
DESCA	Derechos Económicos, sociales, culturales y ambientales.
EIA	Evaluación de Impacto ambiental
EPU	Examen Periódico Universal.
FAO	Fondo de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura.
FILAC	Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas
IDEAM	Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales

IPBES	Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services.
IPCC	Panel Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático.
ITLOS	Tribunal Internacional de Derecho del Mar.
NDC	Contribuciones Nacionales Determinadas
ODS	Objetivos de Desarrollo Sostenible
OEA	Organización de Estados Americanos
OIT/ILO	Organización Internacional del Trabajo
TEDH| ECHR	Tribunal Europeo de Derechos Humanos
UNCC	United Nation Climate Change
UNESCO ICO	Intergovernmental Oceanographic Commission of UNESCO.
WMO	Organización Meteorológica Mundial
WHO|OMS	Organización Mundial de la Salud.

SUMARIO

PRÓLOGO 17

INTRODUCCIÓN 23

PRIMERA PARTE

DERECHOS HUMANOS Y CAMBIO CLIMÁTICO

CAPÍTULO PRIMERO

LA PROTECCIÓN DE LA PERSONA Y DEL MEDIO AMBIENTE A TRAVÉS DE LOS DERECHOS HUMANOS

Delimitación de un esquema de protección conjunto 33
Fundamentos de la relación de salvaguarda 33
La modulación de fenómenos ambientales a través de los Derechos Humanos . 61
Caracterización del cambio climático y su régimen normativo 75
El cambio climático: Una amenaza antropogénica multinivel 75
Marco normativo vigente e implicaciones para judicializar su incumplimiento . 85

CAPÍTULO SEGUNDO

APROXIMACIÓN JUDICIAL DEL TRATAMIENTO CLIMÁTICO DESDE EL NORTE Y EL SUR GLOBAL

Recorrido de las litigaciones climáticas a través de la jurisdicción Interna de la India, Países Bajos, Colombia y Pakistán 103
Tribunal Nacional Verde bajo su propia iniciativa v. State of Himachal Pradesh (2014) 111
Hechos del caso por los cuales se avoca el Tribunal. 111
Problema jurídico detectado por el Tribunal Nacional Verde 112
Cuestiones Resueltas por el Tribunal. 112
Decisión 115
Apreciación de la sentencia. 116
Urgenda Foundation v. State of the Netherlands (2015-2019). 116
Primera instancia: Sentencia de la Corte del Distrito de La Haya. 117
Cuestiones procesales 118
Dificultad de la premisa fáctica 120

Decisión 122
Apreciaciones del fallo de primera instancia 123
Segunda instancia: Recurso Interpuesto ante la Corte de Apelaciones de La Haya (2018) 126
Cuestiones resueltas por el Tribunal de Apelaciones 126
Decisión de la Corte de Apelaciones 131
Casación: Recurso interpuesto ante el Tribunal Supremo del Reino de Países Bajos (2019) 131
Apreciación general de la sentencia de casación 132
Futuras generaciones v. presidencia de la República de Colombia (2018) 134
Hechos del caso 138
Cuestiones resueltas por la Corte Suprema de la Nación 139
Decisión 146
Apreciación de la sentencia 146
Leghari v. Federation of Pakistan (2015-2018) 150
Cuestiones Resueltas por el Tribunal Superior de Lahore 151
Cuestiones resueltas por el Tribunal 151
Decisión 154
Apreciación de la sentencia 154
Proyección de los litigios adjudicados favorablemente sobre peticiones climáticas en la India, Francia, Canadá, Perú, Corea del Sur y ante órganos internacionales de protección 158
Pandey v. India (2017) 158
Vulneraciones generadas a consecuencia del cambio climático 160
Puntos de conexión entre los litigios climáticos adjudicados favorablemente 161
Commune de Grande-Synthe v. France (2019) 162
Vulneraciones generadas por el cambio climático 163
Puntos de conexión entre los litigios climáticos adjudicados favorablemente 165
Mathurv. Her Majesty the Queen in Right of Ontario / Canada (2019) 166
Vulneraciones generadas por el cambio climático 167
Puntos de conexión entre los litigios climáticos adjudicados favorablemente 168
Álvarez v. Perú (2019) 169
Vulneraciones generadas por el cambio climático 170
Puntos de conexión entre los litigios climáticos adjudicados favorablemente 172
Do-Hyun Kim Yujin *et al.* v. South Korea (2020) 174
Vulneraciones generadas por el cambio climático 175
Coincidencia con litigios climáticos analizados previamente 176
Lho'imggin v. Her Majesty the Queen/ Canada (2020) 177
Vulneraciones generadas por el cambio climático 178
Coincidencia con litigios climáticos analizados previamente 180

Peticiones ante órganos de protección internacional: el caso Daniel Billy et al c. Australia, el caso Sacchi v. Argentina (2021) y el caso Duarte Agostinho v. Portugal (2020) 181
Daniel Billy et al c. Australia 182
Sacchi v. Argentina 185
Duarte Agostinho v. Portugal. 188

SEGUNDA PARTE

ASPECTOS PROCESALES DEL SISTEMA INTERAMERICANO DE DERECHOS HUMANOS EN EL MARCO DE LA RESPONSABILIDAD CLIMÁTICA

CAPÍTULO TERCERO

EL SISTEMA INTERAMERICANO DE DERECHOS HUMANOS Y LAS LITIGACIONES CLIMÁTICAS

Estructura organizativa del sistema interamericano 197
Rol de la comisión y la corte interamericana en el monitoreo y supervisión de los derechos reconocidos en la Convención 198
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos 198
La Corte Interamericana de Derechos Humanos 206
Marco normativo ambiental del sistema interamericano de Derechos Humanos. 226
Peticiones de tutela climática e implicaciones de las opiniones consultivas sobre medioambiente y cambio climático 243
La construcción de un *locus standi* climático interamericano. 243
Petición 1413-05 Sheila Watt-Cloutier. 249
Petición Athabaskan v. Canadá 253
Petición planteada por los de los niños y niñas en Cité Soleil Haití 258
Implicaciones de la OC 23-17 sobre el litigio climático estratégico 261
Implicaciones de la solicitud de opinión consultiva sobre la Emergencia Climática y Derechos Humanos. 279

CAPÍTULO CUARTO

RESPONSABILIDAD ESTATAL Y LAS LITIGACIONES ANTE LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS

La responsabilidad climática del Estado en el marco de la Convención Americana de Derechos Humanos 283
Pueblos indígenas y tribales como promotores de la justicia climática ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos 283
Identificación de obligaciones sustantivas y procedimentales susceptibles de vulneración en relación con el cambio climático 305
Derecho a la propiedad 305
Derecho a un Medio Ambiente Sano. 315
Obligaciones de procedimiento ambiental aplicable a los derechos a la información, participación y consulta. 336

Determinación de responsabilidad del Estado por la violación de los Derechos Humanos en un contexto climático 347
Delimitación de la responsabilidad del Estado como consecuencia del impacto climático 347
Marco de atribución de responsabilidad por la violación de derechos convencionales 366

RECAPITULACIÓN 387

BIBLIOGRAFÍA 395

¿Pero qué es la historia de América toda sino

una crónica de lo real maravilloso?

Alejo Carpentier, *El Reino de este Mundo* (1949).

PRÓLOGO

7 de julio de 1989. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos dicta sentencia en el asunto *Soering v. Reino Unido*, afirmando por primera vez en su jurisprudencia el concepto de violación potencial de los derechos reconocidos.

14 de junio de 1992. La «Conferencia sobre Medio Ambiente y Desarrollo de las Naciones Unidas» adopta la Declaración de Río sobre Medio Ambiente y Desarrollo, siguiendo la senda iniciada veinte años antes con la Declaración de Estocolmo de 1972.

En 1989, el Prof. Carrillo Salcedo impartía sus clases de Derecho Internacional Público en las aulas de la Universidad de Sevilla, ausentándose una semana al mes para asistir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos en su calidad de juez (habiendo sido antes miembro de la Comisión Europea de Derechos Humanos). En aquel período, como miembro del tribunal discutió y participó en la decisión unánime en el asunto *Soering*. En 1992, el potencial impacto de la Declaración adoptada en la Conferencia de Río no pasó desapercibido a quien fuera maestro de muchas generaciones de internacionalistas. En la época, el Derecho internacional del medio ambiente no constituía una temática tradicional en los manuales al uso. Por ello, el Prof. Carrillo Salcedo impulsó la redacción de una lección específica, que entonces se ofrecía a los estudiantes en la copistería del centro junto con otra dedicada a la protección internacional de los derechos humanos. Ambos momentos —1989 y 1992— marcaron el inicio de mi propia vocación universitaria, incluso de mi vida docente e investigadora, hasta el punto de que me fue encargada la redacción de aquella primera lección sobre medio ambiente, que se impartiría durante años sucesivos, ante la ausencia de materiales editados sobre el tema.

Algo más de tres décadas después, la situación bibliográfica diverge notablemente en relación con ambos subsectores normativos: el Derecho internacional del medio ambiente (DIMA) y el Derecho internacional de los derechos humanos (DIDDHH) acumulan bibliotecas completas dedicadas a la multiplicidad de aspectos que regulan, en proporción, además, a los desafíos que plantean. Sin embargo, está surgiendo una nueva corriente de estudio en la intersección de estos dos sectores contemporáneos del Derecho internacional público y que tiene como corazón la reflexión sobre las responsabilidades de los Estados en relación con el cambio climático, y las consecuencias (in)evitables para la población en el disfrute de los derechos

más esenciales. En un momento caracterizado por el desarrollo progresivo del Derecho internacional en esta confluencia DIMA-DIDDHH, los estudios y reflexiones doctrinales devienen, si cabe, más necesarios.

Tal es el significado, y potencialmente el impacto, de esta obra firmada por la profesora Iraida A. Giménez. La doctora Giménez ofrece la solvencia de una trayectoria investigadora ya consolidada en el área del Derecho internacional del medio ambiente. Miembro de la *Global Network of Peer Reviewers on Climate Litigation* del *Sabin Center for Climate Change Law (Columbia Law School)*, participó en el *Centre for Studies and Research in International Law and International Relations*, durante la sesión mantenida virtualmente por la pandemia de COVID-19. En su contribución publicada por la Academia de Derecho Internacional de La Haya trabajó específicamente la difícil cuestión de las epidemias y el cambio climático en Derecho Internacional. Acumula asimismo diversas publicaciones sobre cuestiones ambientales en relación con minería submarina, vehículos autónomos, matriz energética, derecho de propiedad, desaparición de fronteras, incorporando casi siempre una visión desde los derechos humanos y desde el sistema interamericano de protección. Sin embargo, esta obra constituye su primera monografía.

Este libro, *opera prima* fruto de la tesis doctoral que defendió brillantemente el primero de julio de 2022 en la Universidad de Sevilla, ofrece una aproximación original para el estudio de esta intersección entre DIMA y DIDDHH: la litigación en relación con cambio climático. No aborda un estudio abstracto de principios genéricos del DIMA y de su traslación o superposición con los del DIDDHH en relación con cambio climático. Durante décadas, la academia se ha centrado en el estudio de los distintos instrumentos normativos específicamente ambientales y el surgimiento de un conjunto de principios generales (prevención, información, cooperación, diligencia y compensación). En paralelo, se han estudiado las interpretaciones jurisprudenciales de derechos humanos clásicos que han permitido actualizar la protección derivada de instrumentos tradicionales para cubrir ciertas manifestaciones del derecho a un medio ambiente sano. Esta monografía, en cambio, afronta la gran cuestión de nuestra década: qué responsabilidad tiene el Estado por las consecuencias que el cambio climático tiene en los derechos humanos de las personas bajo su jurisdicción.

La monografía se sitúa en un contexto más amplio que, si bien sólo comenzaba a dibujarse en el horizonte cuando la investigación se llevó a cabo, hoy dota a esta obra de impacto y significado singular. En el último año, tres tribunales internacionales han sido requeridos para pronunciarse sobre sobre diversos aspectos normativos y reparatorios en relación con cambio climático, arrastrando con ellos y «obligando» a posicionarse a un número singular de Estados y organizaciones —gubernamentales y no gubernamentales— en los diversos procesos consultivos. La primera solicitud fue formulada ante el Tribunal Internacional de Derecho del Mar el 12 de diciembre de 2022 por la Comisión de los Pequeños Estados Insulares sobre el Cambio Climático y

el Derecho Internacional. El 9 de enero de 2023, Colombia y Chile presentaron ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos una consulta sobre emergencia climática y derechos humanos. Finalmente, el 4 de abril de 2023, la Asamblea General de las Naciones Unidas solicitó una opinión a la Corte Internacional de Justicia sobre las obligaciones de los Estados en relación con el cambio climático.

En la misma senda, aunque en el ámbito contencioso, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos asiste a una presión creciente de demandas individuales que ya superan la decena, frente a uno o varios Estados en relación con cambio climático. Los tres primeros asuntos han sido reenviados a la Gran Sala: *Duarte Agostinho and Others v. Portugal and 32 Others*, *Verein Klimaseniorinnen Schweiz and Others v. Switzerland*, *Carême v. France*. Serán examinados todos ellos por la misma composición de la Gran Sala, un hecho muy excepcional, mientras que el propio Tribunal ha adoptado una moratoria-suspensión del examen de las demandas posteriores, hasta tanto la Gran Sala no se pronuncie sobre los primeros estableciendo, entendemos, una línea jurisprudencial clara y que se pretende consolidada *ab initio*.

Teniendo en cuenta las diferencias de jurisdicción entre los Tribunales indicados (Derecho del mar, Derecho internacional general, Derecho internacional de los derechos humanos, controversias interestatales v. controversias individuales), puede afirmarse que esta obra se ha escrito en un momento en el que la reflexión es oportuna, relevante y premonitoria.

Alumbrando el camino que puedan seguir todos los tribunales hoy llamados a reflexionar sobre cambio climático, el lector encontrará como aportación singularísima un análisis inductivo a partir de la litigación nacional, interna, en un conjunto de Estados muy diversos: Canadá, Colombia, Corea del Sur, Francia, India, Países Bajos o Pakistán. A ellos suma casos trascendentales litigados ante órganos de tratados de protección de derechos humanos. Esta perspectiva se complementa con un examen del sistema interamericano de protección de derechos humanos tanto desde la dimensión consultiva como contenciosa, objeto de la preocupación central que da título al libro.

En concreto, la autora como gran conocedora del Sistema Interamericano de Derechos Humanos trata de vincular las construcciones previas de este tribunal en relación con medio ambiente (desde su OC-23/17, también solicitada por Colombia, como en su jurisprudencia contenciosa) al desarrollo posible de una estrategia de litigación climática futura en relación con cambio climático. Con una visión definida como «la ecologización definitiva del paradigma humanizador del derecho internacional» y aunque no confiesa expresamente su militancia, la autora encamina su trabajo desde su aspiración de «aplicación de una base de derechos humanos para hacer exigibles conductas más ambiciosas de mitigación».

Iraida A. Giménez identifica el problema crucial de la litigación climática desde la introducción de la obra: la dificultad de establecer el «nexo causal

entre el agente del daño y un evento climático extremo». Ello condiciona sin duda el recurso a los esquemas clásicos de responsabilidad que requieren de la identificación del ilícito y la atribución del mismo a un Estado concreto y, en el contexto de la protección de derechos humanos, la vinculación del daño con un ilícito específico de vulneración de tales derechos.

En tal dirección, a la visión progresista y *pro persona* que caracteriza generalmente las sentencias de la Corte Interamericana debe sumarse su aproximación en relación con la protección de derechos colectivos, en concreto de grupos indígenas y tribales. La Corte ha consolidado un desarrollo jurisprudencial cuasi-único a nivel global desde la perspectiva de los derechos comunitarios, a partir de derechos convencionalmente pensados como derechos individuales. Para la Dra. Giménez esta jurisprudencia constituye una de las claves, quizás la más relevante, para la posibilidad de afirmar la responsabilidad del Estado por la falta de garantía suficiente de derechos frente a las consecuencias del cambio climático. En concreto, los derechos de grupos indígenas y tribales, «fundamentalmente aquellos relacionados con la dimensión colectiva de la propiedad, donde implícitamente se encuentra la protección del entorno natural, así como del medio ambiente de forma autónoma», como colectivos especialmente «vulnerables a través de su cosmovisión representan la oportunidad idónea para establecer nuevas formas de preservación ambiental».

La autora reconoce sin duda que no pueden exigirse del Estado «cargas desproporcionadas o de imposibles cumplimiento con relación a la estabilización del sistema climático». Por ello la obra se detiene sobradamente en la «identificación de obligaciones sustantivas y procedimentales susceptibles de vulneración en relación con el cambio climático» a través de la jurisprudencia de la Corte Interamericana. El estudio se realiza sobre un análisis exhaustivo de la casuística a la que se ha visto sometida la Corte interamericana para llegar a identificar obligaciones «en el marco de la protección de los derechos humanos a la propiedad colectiva, a la identidad cultural, al medio ambiento, a la información, al acceso a la justicia ambiental y al debido proceso a causa del despliegue de actividades con impacto climático en territorios pertenecientes a las comunidades indígenas y tribales, desde una mirada inter e intra generacional».

Más allá de la elaboración del contenido sustantivo de las obligaciones por las que el Estado debe responder, la piedra en la que tropiezan una y otra vez los sistemas jurisdiccionales en esta materia tiene contornos procesales: la definición de un *locus standi* climático es tarea compleja. Algún caso ha sido ya desestimado por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos por ello, y está aún por ver el futuro de muchos otros. La autora del libro analiza esta cuestión y la vincula en la práctica reciente de la Corte Interamericana a la legitimación extendida para la reclamación por derechos colectivos de pueblos originarios e indígenas. En un sistema que permite una legitimación amplia que no requiere la condición de víctima a la hora de plantear la

reclamación ante la Comisión, el control de admisibilidad se vincula con la existencia de una violación de derechos protegidos. Quizás este rasgo que diferencia al sistema interamericano del europeo (que exige la condición de víctima como condición de admisibilidad) nos explica que el concepto de violación potencial —consagrado en el ámbito europeo por el asunto *Soering*— no ha entrado aún en el universo conceptual de la litigación climática en el marco de la Convención Americana. Sin duda, tal y como hemos podido estudiar conjuntamente la profesora Giménez y yo misma, podría llegar a jugar algún papel en relación con aquellos asuntos en los que se discuta la afectación de generaciones futuras por la (in)acción estatal en relación con cambio climático.

Como afirmara en 1928 Max Huber en el laudo *Isla de Palmas*

> La soberanía territorial no puede limitarse a su aspecto negativo, esto es, a excluir las actividades de otros Estados. La soberanía territorial está dirigida a dividir el espacio entre los Estados, espacios sobre los que se desarrollan las actividades humanas, **de tal forma que se asegure a las mismas** [a las actividades humanas] **el mínimo de protección que el Derecho internacional debe garantizar**.

Territorio y soberanía territorial existen para garantizar las actividades humanas. En consecuencia, la pervivencia del género humano y del medio espacial que le es connatural —el medio ambiente— son columna vertebral de la soberanía territorial y del Estado. Y, conforme al *dictum* arbitral, la soberanía territorial debe garantizar el respeto del umbral de protección de las actividades humanas establecido por el Derecho internacional, incluidas hoy las obligaciones ambientales de lucha frente al cambio climático, y las obligaciones de protección de los derechos humanos.

Bien fundamentado desde una perspectiva teórica general, construido sobre el estudio de la litigación climática más relevante a nivel nacional, este libro aporta un estudio único y esencial, profundo, detallado y comprehensivo de la jurisprudencia de la Corte Interamericana —consultiva y contenciosa— que permite anclar la protección de las personas frente al cambio climático en el sistema interamericano de protección de derechos humanos, a través de un esquema de responsabilidad estatal por vulneración —real o potencial como en el asunto *Soering*— de derechos de aquellos bajo la jurisdicción de la Corte Interamericana y/o al amparo del Pacto de San José.

Sirva el modelo planteado en esta monografía como contribución a la búsqueda de una respuesta global de justicia climática. Vivimos tiempos en los que diferentes tribunales internacionales, y la sociedad internacional en la que se insertan, deben tomar conciencia de que la preocupación frente al cambio climático constituye, además, la preocupación por la supervivencia humana, base de la existencia misma del Estado.

Invitamos así al lector de este libro a reflexionar sobre la contribución a la que cada uno de nosotros está llamado para dotar de sentido y contenido a

las palabras de Antonio Augusto Cançado Trindade, quien además de juez y presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, fuera juez de la Corte Internacional de Justicia hasta su fallecimiento en 2022:

> Y aquí, el gran reto de los juristas de las nuevas generaciones reside a mi juicio en concebir y formular la construcción conceptual de la representación legal de la humanidad como un todo (abarcando las generaciones presentes y futuras), conllevando a la consolidación de su capacidad jurídica internacional, en el marco del nuevo jus gentium de nuestros tiempos.
>
> **CtIDH. Caso Comunidad Indígena Sawhoyamaxa v. Paraguay, Fondo, Reparaciones y Costas, Voto razonado del juez A.A. Cançado Trindade (Ser. C) No. 146, §34 (29 de marzo de 2006)**.

Esperemos que su legado en ambos tribunales brille en las opiniones consultivas que cada uno de ellos está llamado a emitir. Como una caja de resonancia, la obra que prologamos y que firma Iraida A. Giménez coadyuva a identificar sendas racionales y jurídico-positivas por las que transitar.

Sevilla, 31 de diciembre de 2023

Eulalia W. Petit de Gabriel

INTRODUCCIÓN

El cambio climático es una amenaza furtiva, que extrapola su impacto sobre los humanos y otras especies, su colisión lenta pero aguda, evidencia daños irreversibles sin distinción de fronteras internacionales. La abrupta transformación del planeta Tierra está causando pérdidas humanas, ambientales, sociales y económicas con un costo incalculable para las generaciones presentes y futuras. En la actualidad, millones de personas deben asumir efectos directos y colaterales del cambio climático peligroso, así como ver exacerbadas las abismales vulnerabilidades socio ambientales. Además, este fenómeno compromete la estabilidad de la que goza la humanidad en el presente, implicando serios desafíos para la supervivencia de las especies y ecosistemas.

Hoy en día, es crucial entender el complejo problema del cambio climático desde una perspectiva multidisciplinaria y holística. En lo que corresponde al Derecho, es oportuno considerar las propuestas que brindan tanto los sistemas nacionales como el derecho internacional, ambos nutridos por la vitalidad de un pensamiento crítico imbuido por el valor intrínseco del medio ambiente y por la profundidad filosófica que requiere la aplicación del derecho ambiental, de los derechos humanos y del pluralismo jurídico. Herramientas disponibles para enfrentar con mayor acierto las amenazas y daños sobre los derechos humanos.

A pesar de la incertidumbre que acompaña estos tiempos, la crisis climática también ofrece oportunidades entre ellas, el manejo conjunto de dos amenazas entrelazadas para el hombre. Por una parte, la protección del individuo, por la otra, la contención de la abrupta transformación del clima del cual dependemos todos los sistemas vivientes.

Desde los tratados internacionales que abordan la cuestión climática aparecen diferentes caracterizaciones, ahora bien, este libro reenfoca el tratamiento de la crisis climática y sustenta su aproximación en la teoría general de los derechos humanos, concretamente desde el pensamiento divergente del Sistema Interamericano.

En este libro se apuesta por la ecologización definitiva del paradigma humanizador del derecho internacional, específicamente dentro de la doctrina de la Corte Interamericana. La adopción de un enfoque multicéntrico incluye una comprensión flexible del ecocentrismo acompasado por el pluralismo jurídico dentro de los derechos humanos. Esta idea es viable si se

consigue impulsar el rol de los órganos jurisdiccionales de protección como mecanismos de vigilancia del cumplimiento de compromisos climáticos frente a las vulneraciones que padecen los individuos y colectivos, cuestión favorecida por la capacidad de las víctimas de activar procesos contenciosos que aseguren la tutela de sus derechos, cuando los Estados no puedan o no estén dispuestos a brindar las garantías necesarias en sede interna.

Resulta imperativo avanzar hacia la siembra de un paradigma multicéntrico en el derecho internacional de los derechos humanos, para lo cual en este libro aplica un acercamiento holístico que protege los derechos humanos y la vida en la Tierra, promoviendo un régimen de integración y cooperación profundo entre los instrumentos interamericanos y el *corpus iuris* internacional ambiental, con miras a expandir las estrategias institucionales climáticas de la región.

El cambio climático presenta una serie de dificultades que hacen cuesta arriba la contención de su impacto en términos directos, especialmente en lo que respecta al riesgo de daño y al efecto perjudicial manifestado sobre el individuo, la sociedad y el ambiente. Esto se debe principalmente a la complejidad de determinar con precisión al menos tres factores: primero, la fuente de las emisiones que causan el riesgo de daño por su dispersión, así como, debido a su absorción por parte de los reservorios naturales. Segundo, la complejidad de determinar la cuota de contribución para efectuar una eventual atribución. Tercero, el impacto proporcional de esa porción de emisión antropogénica sobre un evento climático concretos.

De esta manera el establecimiento del nexo causal entre el agente del daño y un evento climático extremo se ha convertido en una odisea en el campo de la determinación de responsabilidad. A pesar de que desde la década de los 80's los científicos vienen alertando bajo estudios rigurosos sobre incidencia humana en la transformación del clima, cuyo origen antropocéntrico fue confirmado a través de los Informes Panel Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático (AR4, AR5 y AR6).

La aplicación de una base de derechos humanos para hacer exigibles conductas más ambiciosas de mitigación sigue siendo un tema sujeto a caluroso debate. Quienes se encuentran a favor de esta corriente buscan construir un marco teórico que permita su aplicación y exigibilidad tanto en el derecho interno como en el internacional.

En lo que respecta a un abordaje general de la cuestión por parte de la doctrina especializada del Norte Global se encuentran las contribuciones de Mayer, B. (2023). Prompting climate change mitigation through litigation. *International & Comparative Law Quarterly*, *72*(1).; Vilchez Moragues, P. (2022). *Climate in court: defining state obligations on global warming through domestic climate litigation*. Edward Elgar Publishing., Luporini, R. & Savaresi, A. (2023). International human rights bodies and climate litigation: Don't look up?. *Review of European, Comparative & International Environmental Law*.

Igualmente, destacan las cardinales contribuciones de Peel, J. & Osofsky, H. (2020). Climate change litigation. *Annual Review of Law and Social Science*, *16*.; la extensa recopilación de litigaciones realizada por UNEP & SABIN Center (2020). *Global Climate Litigation Report 2020 Status Review.;* la substancial contribución de Wewerinke-Singh., M. (2019) State responsibility, climate change and human rights under international law. Oxford. Hart.; así como el desarrollo argumentativo planteado por Boyle, A. (2018). «Climate change, the Paris Agreement and human rights». *International & Comparative Law Quarterly.*

Mención adicional requieren los trabajos de Burger, M. & Gundlach, J. (2017). The status of climate change litigation: A global review. UNEP.; así como los importantes aportes sobre responsabilidad climática expuestos por de Dupuy, P. M. & Viñuales, J. E. (2015). *International environmental law*. Cambridge University Press, la invaluable aportación de Knox, J. H. (2009). Climate «change and human rights law». *Virginia Journal of International Law*, 50., así como la de Bodansky, D. (2009). Introduction: climate change and human rights: unpacking the issues. *Georgia Journal of International & Comparative Law*, *38*.

Del mismo modo, requieren un especial reconocimiento las significativas contribuciones enfocadas en el estudio de algunas zonas específicas del Sur Global, destacando el trabajo de Tigre, M. A., Urzola, N. & Goodman, A. (2023). «Climate litigation in Latin America: is the region quietly leading a revolution?» *Journal of Human Rights and the Environment*, *14*(1) y el aporte de Rajavuori, M., Savaresi, A. & van Asselt, H. (2023). Mandatory due diligence laws and climate change litigation: Bridging the corporate climate accountability gap? *Regulation & Governance*.

Asimismo, el mapeo de litigaciones climáticas realizado por Savaresi. A. & Setzer, J. (2021) «Mapping the Whole of the Moon: An Analysis of the Role of Human Rights in Climate Litigation», *SSRN*. Asimismo, debe hacerse referencia al excepcional abordaje sobre la litigación en Asia propuesto por Lin, J. & Kysar, D. (2020). *Climate change litigation in Asia Pacific*. Cambridge: Cambridge University Press, y las cardinales aportaciones de Peel, J. & Lin, J. (2019). Transnational climate litigation: the contribution of the global South. *American Journal of International Law*, *113*.

De lo anterior se desprende que, tanto en el Norte Global, como desde los enfoques del Sur Global, aparecen reveladoras aportaciones sobre los procesos de litigación climática estratégica. Si bien es cierto que todos ellos demuestran un creciente interés por la integración del derecho internacional de los derechos humanos como mecanismo procesal de protección frente al cambio climático, debe resaltarse que estas importantes aportaciones no abordan la cuestión desde la aproximación formulada en este libro.

De allí que resulte propicia la oportunidad para abordar la integración entre los derechos humanos y el medio ambiente por parte de la doctrina y juris-

prudencia interamericana, así como por la relación que se produce entre el derecho internacional y el derecho interno, concretamente, del constitucionalismo latinoamericano, fenómeno palpable a través de sus constituciones ecologizada.

La relación anterior impulsa el estudio del impacto de los litigios estratégicos climáticos sobre el Sistema Interamericano tanto en peticiones de carácter contenciosos como en sede consultiva, aproximaciones que favorecen a la filtración de estándares de diligencia climática a través del pluralismo jurídico incorporado por la doctrina ambiental interamericana.

En lo que se refiere exclusivamente al pluralismo, no se han encontrado trabajos específicos que utilicen esta doctrina como un mecanismo de acción dentro del Sistema Interamericano para enfrentar los desafíos intrínsecos de cambio climático. Aunque ciertamente, se tiene conocimiento y se han utilizado como parte de la fundamentación general plural para esta investigación las contribuciones planteadas en la obra colectiva de Rueda, E. C., Rodríguez, F. *et al*. (2021). «Dossier Especial sobre Pluralismo Jurídico en América Latina en tiempos de Crisis en homenaje a André Hoekema». Abyayala*: Revista sobre Acesso à Justiça e Direitos nas Américas*, *5*.

Así como los aportes realizados por Wolkmer, C. (2018). P*luralismo jurídico: fundamentos de una nueva cultura del Derecho*. Dykinson. En el mismo sentido, se debe incluir la investigación de Sánchez Rubio, D. (2008). Pluralismo jurídico y emancipación social. *Pluralismo jurídico y emancipación social*, 111-129.; y, el trabajo de Wolkmer, C. (2003). Pluralismo jurídico: nuevo marco emancipatorio en América Latina., CLACSO.

Sobre el Sistema Interamericano y el cambio climático, el tema ha sido recientemente abordado, enfocándose la doctrina especializada en aspectos distintos a los aquí tratados. En este sentido, reciben una mención especial el estudio comparado de Rocha, A. & Sampaio, R. (2023). Climate change before the European and Inter-American Courts of Human Rights: Comparing possible avenues before human rights bodies. *Review of European, Comparative & International Environmental Law*., así como Auz., J. (2022). So, this is Permanence': The Inter-American Human Rights System as a Liminal Space for Climate Justice. *Melbourne Journal of International Law* (22).

Resulta pertinente incluir los trabajos de la obra colectiva coordinada por Salmón, E., Blanco, C., *et al*. (2020). *Cambio climático y derechos humanos*. Instituto de Democracia y Derechos Humanos PUCP-IDEHPUCP.; y los antecedentes sentados por la doctrina internacionalista ambiental sobre las peticiones *Inuit* y *Athabaskan* de Viñuales, J. E. (2010). Legal techniques for dealing with scientific uncertainty in environmental law. *Vanderbilt Journal of transnational Law.* 43. Obras a las cuales debe sumarse la pionera contribución presentada por De la Rosa-Jaimes, V. (2014). «The Arctic Athabaskan petition: where accelerated Arctic warming meets human rights». *California Western International Law Journal*, *45*.

Es conveniente mencionar que el climático y las posibles vías de litigación que ofrecen los derechos humanos también ha sido objeto de interés por parte del Centro de Investigación y Estudios de *The Hague Academy of International Law*, cuyos resultados serán publicados a final del año 2023 con el título *Climate Change and the Testing of International Law*, obra colectiva bajo la dirección de J. Peel y Maljean-Dubois., S. Esta obra colectiva contempla donde se dedica un capítulo exclusivo al impacto del cambio climático, pueblos indígenas y el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. En la misma línea de interés científico se manifiestó, *The Academy on Human Rights and Humanitarian Law* de la American *University College of Law (2022).*

Sin embargo, debido a que el tema central planteado en este libro no ha sido abordado con anterioridad, se evidencia la necesidad de exponer formas alternativas de tratamiento desde un Derecho cercano a la sociedad interamericana, donde se incluya aspectos pertenecientes a la determinación de responsabilidad tanto en el ámbito sustantivo como procedimental. A diferencia de otras obras, este trabajo incluye la identificación de normas primarias y secundarias de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, imbuidas por el pluralismo indígena latinoamericano, para establecer una hoja de ruta procesal y la consecuente delimitación de la responsabilidad internacional de los Estados en un contexto de riesgo climático peligroso.

Aunque, se es consciente de las limitaciones del estudio, esta obra, en la medida de sus modestas posibilidades, plantea colmar algunos de los vacíos intrínsecos de la aplicación de los derechos humanos a un problema ambiental complejo en pleno desarrollo dentro del ámbito interamericano.

Las razones anteriormente expuestas justifican suficientemente la necesidad de explorar y desarrollar recopilaciones jurisprudenciales desde el derecho comparado e internacional, así como un análisis profundo de las contribuciones de la doctrina ambiental interamericana, iluminadas por el registro holístico realizado por la corte regional. Todo ello, con el propósito de plantear una arquitectura de atribución de responsabilidad en virtud de la vulneración de los artículos 13, 21, 26, 25 y 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos, como consecuencia del impacto climático.

El objetivo de esta obra se centra en proponer herramientas jurídicas disponibles para que los operadores en el terreno puedan localizar fórmulas que soporten los procesos de litigación estratégica climática, optimizando la efectividad de la respuesta judicial ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Esta investigación, enfrenta el desafío de encontrar un punto de equilibrio entre el cumplimiento de la obligación de diligencia sobre la conservación, gestión los recursos, así como el deber de cuidado sobre grupos especialmente vulnerables (como instrumentos de mitigación climática) en conexión con el aprovechamiento sostenible de los espacios naturales.

Concretamente, se aplicó una consulta directa de sentencias provenientes de diversos foros nacionales e internacionales. Para ello, se utilizó la base de

datos de mayor relevancia global, el *Sabin Center Climate Change Litigation Data Base* creada por *Columbia University & Arnold Porter Law Firm*. Herramienta que compila peticiones y decisiones judiciales sobre reclamaciones asociadas al cambio climático, calentamiento global, emisiones de gases de efecto invernadero ante órganos administrativos, judiciales y mecanismos de protección internacional.

Para la selección de la muestra se identificaron quince (15) casos entre decisiones adjudicadas favorablemente y procesos activos pendientes de decisión. La categorización se realizó en función del cumplimiento de los siguientes criterios: i) casos contenciosos; ii) donde la pretensión central era la protección de derechos fundamentales afectados por el cambio climático; iii) en los cuales el sujeto pasivo de la demanda fue un órgano del poder ejecutivo o del poder legislativo, y iv) cuyas decisiones promueven la adopción de medidas de estabilización climática (mitigación y/o adaptación).

Los litigios seleccionados resultan relevantes pues permiten indagar sobre la argumentación jurídica que está siendo utilizada por los jueces en diferentes jurisdicciones, así como el desempeño del rol interpretativo de las autoridades competentes para solucionar la vulneración de derechos humanos enraizada en el cambio climático peligroso. Teniendo presente que el razonamiento en ellas empleado puede ser extrapolable a escala regional y universal.

Asimismo, se consultó la base de datos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a partir de la cual se realizó un profundo análisis de su doctrina ambiental, específicamente en lo que respecta a la protección de los derechos a la vida digna, integridad personal, propiedad colectiva, información y participación ambiental, acceso a la justicia, debido proceso y medio ambiente como derecho autónomo. Además, se estudiaron informes y resoluciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, reportes provenientes de sus relatorías especiales, así como el marco normativo interamericano nutrido por las secciones ambientales que configuran el *corpus iuris* históricamente invocado por la Corte.

En lo referente a la consulta doctrinaria, se han examinado las fuentes de mayor autoridad en la materia, a través de libros, reportes especializados y artículos científicos. Todo ello ha sido posible gracias a la riqueza de la Biblioteca de la Facultad de Derecho de la Universidad de Sevilla, a la extraordinaria diversidad de la Biblioteca del Max Planck Institute de Derecho Público Comparado y Derecho Internacional, así como del fascinante capital bibliográfico provisto por la Biblioteca del Palacio de la Paz de La Haya.

Este libro examina las oportunidades que ofrece la actual crisis climática a través de dos grandes bloques, cada uno compuesto de dos capítulos. La primera parte, analiza el tratamiento general de los derechos humanos y del cambio climático. Concretamente, en el Capítulo I, se aborda la delimitación de la protección del individuo y del medio ambiente a través de los

derechos humanos. Además, se estudia la caracterización del fenómeno peligroso cambio climático y el marco normativo que modula su régimen internacional.

El Capítulo II, se aproxima al tratamiento judicial climático brindado desde la perspectiva del Norte y del Sur Global, por lo cual se realiza un recorrido a través de litigaciones exitosas en la India, Países Bajos, Colombia y Pakistán. En dicho capítulo también se analiza el efecto reflejo de esas primeras litigaciones sobre nuevas peticiones de tutela en la India, Francia, Canadá, Perú, Corea del Sur, así como las novísimas interacciones ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

La segunda parte del libro se refiere al estudio de los aspectos procesales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el marco de responsabilidad climática regional aplicable. Para ello, en el Capítulo III se analiza el rol político y de monitoreo de la Comisión en fase de admisibilidad, así como el papel de supervisión que desempeña la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Además, se presenta un estudio sobre las pioneras peticiones climáticas vinculadas a la protección de los pueblos indígenas y de las futuras generaciones afectadas por el flagelo. Este capítulo cierra con las implicaciones de la Opinión Consultiva sobre el medio ambiente para futuros litigios climáticos, así como de la solicitud del dictamen planteado por Chile y Colombia en 2023, considerando especialmente su influencia sobre los órganos regionales de protección en materia de derechos humanos.

Por su parte, el Capítulo IV se concentra en el estudio de la responsabilidad climática de los Estados a la luz de la doctrina ambiental creada por la Corte Interamericana, para ello se analiza con profundidad el marco de responsabilidad provisto por la Convención Americana en relación con los pueblos indígenas y tribales, así como la identificación de las obligaciones sustantivas y procedimentales susceptibles de vulneración ante el riesgo de daño. Este Capítulo culmina como la arquitectura de atribución de responsabilidad por la vulneración de los derechos convencionales a la propiedad, medio ambiente, información y participación, acceso a la justicia y debido proceso.

PRIMERA PARTE

DERECHOS HUMANOS Y CAMBIO CLIMÁTICO

CAPÍTULO PRIMERO

LA PROTECCIÓN DE LA PERSONA Y DEL MEDIO AMBIENTE A TRAVÉS DE LOS DERECHOS HUMANOS

En este capítulo se analizará la salvaguarda del individuo y del medio ambiente a través de su positivización normativa, así como de su anclaje institucional en la escena internacional contemporánea. Igualmente, se estudiará el origen del cambio climático como problema complejo que afecta de forma transversal al ser humano y a los componentes de la naturaleza, generando impactos multinivel capaces de vulnerar la esfera de protección de los derechos humanos. Se concluirá con un abordaje general sobre el régimen del clima vigente y las implicaciones de su incumplimiento de cara a una eventual judicialización*.

Delimitación de un esquema de protección conjunto

Fundamentos de la relación de salvaguarda

La primera etapa[1] de protección de la persona humana puede situarse a través del derecho interno[2]. Sin embargo, no puede perderse de vista que durante los siglos XVI y XVII se produjo una «decisiva transposición al plano de la subjetividad de los postulados de la ley natural, configurándose una amplia teoría de los derechos naturales»[3] donde se localizan las raíces de la

---

*. Los enlaces web citados se verificaron por última vez el 1 de noviembre de 2023. La redacción de esta obra finalizó el 1 de septiembre de 2023.

1. Pérez-Luño, A. E. (2013). *Los derechos fundamentales*. Madrid: TECNOS, p. 26. Sobre la evolución de los derechos fundamentales señala que: «sus raíces filosóficas se remontan y se hallan íntimamente ligadas, a los avatares históricos del pensamiento humanista».

2. A través de la Carta Magna Libertatum de 1215 de Juan Sin Tierras, la Declaración de Derechos y libertades de los ingleses 1689, la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789 y la Constitución y la Carta de Derechos de los Estados Unidos de 1791.

3. Pérez-Luño, A. E. (2013), *ob. cit*. 26-27.

protección del individuo a través de la defensa de los derechos personales de los habitantes de los territorios americanos colonizados[4].

Así comienza a brotar la humanización en los trabajos de los padres fundadores del derecho internacional[5]. Posteriormente, durante el siglo XIX hasta el final de la Segunda Guerra Mundial[6], se desplegó un marco de salvaguarda individual[7] construido por la constitucionalización[8] de los derechos fundamentales[9]. De manera que la consolidación del pensamiento humanista dentro del derecho internacional se produjo con mayor fuerza en el siglo XX[10], gracias a la evolución de las concepciones tradicionales[11]

---

4. *Loc. cit.* Pérez Luño destaca el rol en este proceso de los juristas españoles Francisco de Vitoria y Bartolomé de Las Casas quienes «sentaron las bases doctrinales para el reconocimiento de la libertad y la dignidad de todos los hombres […] De otro lado el pensamiento ius naturalista de la escuela española, de modo especial Francisco Suárez y Gabriel Vázquez, influyen en el racionalismo humanista de Grocio, incorporándose así y anticipando el decisivo impulso del iusnaturalismo europeo para la evolución de los derechos naturales». Véase también: Koskenniemi, M. (2011). «Empire and international law: the real Spanish contribution». *University of Toronto Law Journal*, *61*(1), 1-36.

5. Cançado-Trindade, A. A. (2020a). *International Law for Humankind* (p. 24). Leiden: Brill Nijhoff. Véase también: Lauterpacht, H. (1943). «The law of nations, the law of nature and the rights of man». *Transactions Grotius Soc'y*, *29*, 1.

6. Koskenniemi, M. (2001). *The gentle civilizer of nations: the rise and fall of international law 1870–1960*. Cambridge: Cambridge University Press.

7. *Loc. cit.* Lauterpacht, H. (1943). *ob. cit*. 252. Desde aquel momento el autor abogaba por la protección de los derechos del hombre a través de una nueva legislación internacional.; Lauterpacht, H. (2013). *An international bill of the rights of man*. Oxford: Oxford University Press. 41-52.

8. Brewer-Carías, A. R. (2007). «La aplicación de los tratados internacionales sobre derechos humanos en el orden interno de los países de América Latina». *Revista Instituto Interamericano de Derechos Humanos*, 46, 219-271.

9. Pérez-Luño, A. E. (2013), *Ob. cit*. 40. Señalando que se emplea «el término de derechos fundamentales para designar los derechos positivisados a nivel interno, en tanto que la fórmula derechos humanos sería la más usual para denominar los derechos naturales positivisados en las declaraciones y convenciones internacionales, así como aquellas exigencias básicas relacionadas con la dignidad, libertad e igualdad de la persona que no han alcanzado un estatuto jurídico positivo».

10. Cançado-Trindade, A. A. (2020a), *ob. cit*. 24.

11. Un antecedente importante del actual régimen de derechos humanos fue la obligación de protección de las minorías impuesta por los Estados vencedores de la I Guerra Mundial, por ejemplo, el Tratado de Minorías entre las Principales Potencias Aliadas y Polonia, de 28 de junio de 1919, así como los tratados y declaraciones sobre minorías específicas, cuyas garantías jurídicas e institucionales se encontraban respaldadas por leyes constitucionales, mientras que cualquier cambio sobre el régimen especial quedaba sujeto a la aprobación previa del Consejo de la Sociedad las Naciones. véase: Ruíz Vieytes. E. (1998) *La protección jurídica de las minorías en la historia europea* (siglos XI-XX). *Cuadernos Deusto de Derechos Humanos.* (3), 39-40.

del derecho de gentes, donde se dio paso a su internacionalización[12]. Hasta generarse el despegue total del derecho contemporáneo de los derechos humanos como respuesta universal[13] a la conmoción causada por el proceso bélico derivado de la Segunda Guerra Mundial[14].

El proceso de internacionalización de los derechos fundamentales supuso «una vuelta a la reivindicación de su carácter universal y supraestatal»[15], la cual estuvo acompañada por una progresiva democratización del derecho internacional, propiciando que los Estados asumiesen el reconocimiento progresivo de los derechos humanos como un presupuesto elemental para la convivencia pacífica en el seno de la comunidad internacional[16].

La etapa de postguerra representó una época fértil para la expansión de las dinámicas interestatales tradicionales, momento en el que comenzó a filtrarse de forma consciente ese pensamiento que daba preminencia a la humanidad[17] sobre la razón de Estado[18]. Esto dio paso a la interacción del individuo dentro de las relaciones internacionales, no solo a través de su participación procesal, sino mediante formas alternativas como el cabildeo e incluso gracias a las litigaciones nacionales, elementos que han contribuido sustancialmente a la evolución del derecho internacional[19].

---

12. Brewer-Carías, A. R. (2007). *ob. cit*. 227.

13. Véase: Carrillo-Salcedo, J. A. (2004). «El entorno histórico de la Declaración Universal de Derechos Humanos». *Anales de la Real Academia Sevillana de Legislación y Jurisprudencia*, (4), 425-436., Koskenniemi, M. (1997). «Lauterpacht: The Victorian tradition in international law». *European Journal of International Law*, 8(2), 245-247. Sobre el aporte del Lauterpacht abogaba desde ese entonces por la creación de instituciones efectivas de salvaguarda de los derechos humanos individuales a nivel universal y regional. «[N]atural rights (that is, individual human rights) are rooted in (Western) legal and political thought, from Greek philosophy to modem Western constitutions. These rights are supported and 'enforced' by natural and international law, the two having developed together from Grotius and Vattel to the doctrine of humanitarian intervention and, finally, to the UN Charter which places human rights 'on the enduring foundations of the law of nature'. To make matters more concrete and to make no mistake about where the tradition is to be found, Lauterpacht identifies it with the 'English sources', the 'powerful tradition of freedom conceived, in the words of the Act of Settlement, as the "birthright of the English people"».

14. Una muestra de ello es la adopción de la Carta de Naciones Unidas, la cual dio nacimiento a un nuevo régimen internacional desde donde surge una estructura de promoción y protección de los derechos humanos. Véase: Organización de Naciones Unidas [ONU]. Carta de las Naciones Unidas.

15. Pérez-Luño. A. E. (2003) *Derechos Humanos, Estado de Derecho y Constitución*. Madrid: TECNOS, p. 129.

16. *Loc. cit.*

17. Cançado-Trindade, A. A. (2020a), *ob. cit*. 20.

18. Cançado-Trindade, A. A. (27/10/2017). «La persona humana en el contencioso interestatal ante la Corte Internacional de Justicia» [video]. Audiovisual Library of International Law | UN Web TV. Recuperado de: http://webtv.un.org/.

19. Gorski, S. (2013). «Individuals in International Law». En: R. Wölfrum (ed.) *The Max Planck Encyclopedia of International Law*. Oxford: Oxford University Press. Recuperado de: https://

Precisamente, este fenómeno universalista encontró en los derechos humanos[20] y en el derecho ambiental sus mayores espacios de crecimiento[21]. En ambas áreas se puede localizar la cristalización de sus aportes más significativos tanto en el marco del contencioso interestatal[22], como en las diversas formas de manifestación de la relación entre el individuo y el Estado[23]. A partir de este momento, este libro elude la expresión derechos fundamentales y retiene la de derechos humanos[24].

Los derechos humanos «conjugan su raíz ética con su vocación jurídica»[25], esta condición axiológica se concreta a través de los valores de la dignidad, libertad e igualdad[26]. Es así como, la dignidad humana representa el núcleo de los derechos de la personalidad, en su dimensión de integridad moral y física[27]. Mientras que la libertad asegura las garantías personales civiles y políticas, a la par que la igualdad es manifestada a través de los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales[28]. Estos valores funcionan bajo una relación de interdependencia[29], configurados por una dinámica

bit.ly/3umFNsB. Además, el autor señala que el impacto del individuo «goes beyond a 'subsidiary means' of interpretation. Cases brought by individuals as well as lobbying, political organization, demonstrating, and other individual activity including domestic litigation, have an impact on the development of international law».

20. Sobre derechos humanos véase: Carrillo-Salcedo, J. A. (2011). «Los derechos humanos y la paz: hacia una relectura de la noción de Estados civilizados». *Tiempo de paz*, (100), 101-104.

21. Cançado-Trindade, A. A. (2020a), *ob. cit* 24.

22. Cançado-Trindade, A. A. (27/10/2017), *ob. cit*.

23. Supuestos de sistema de protección de derechos humanos como la CtIDH, tribunal regional sobre el cual están centrados los dos últimos capítulos de esta obra.

24. Siguiendo a: Faúndez, H. (2004). *El Sistema Interamericano de protección de los derechos humanos. Aspectos institucionales y procesales.* San José de Costa Rica: Instituto Interamericano de Derechos Humanos, p. 4. Tal como señala el autor: «[…] con la expresión «derechos fundamentales» se hace referencia a una categoría de derechos humanos, a los cuales simplemente se consideran más importantes que otros de naturaleza meramente accesoria, o a derechos que tienen un carácter intangible, en cuanto no se pueden suspender en ninguna circunstancia. Tal expresión permitiría distinguir, por ejemplo, entre el derecho a la vida y el derecho a la intimidad —el primero de los cuales sería «fundamental» en cuanto se le percibe como de mayor identidad que el segundo— […], a diferencia —por ejemplo, de la libertad de expresión, cuyo ejercicio puede en ciertas condiciones, restringirse o incluso suspenderse—». Por lo cual no deberían utilizarse como sinónimos.

25. Pérez-Luño, A. E. (1997). *Teoría del derecho. Una concepción de la experiencia jurídica*. Madrid: TECNOS, p. 233.

26. *Loc. cit*.

27. Pérez-Luño, A. E. (2021) *ob. cit*. 234.

28. *Loc. cit*.

29. Sobre la relación de indivisibilidad e interdependencia véase: Essink, J., Quintavalla, A. & Temperman, J. (2023). «The Indivisibility of Human Rights: An Empirical Analysis». *Human Rights Law Review*, *23*(3). Disponible en: https://doi.org/10.1093/hrlr/ngad013

abierta que permite ampliarse para dar respuesta a las continuas necesidades humanas resultantes del devenir cultural e histórico[30].

Los derechos humanos están marcados por una dimensión deontológica que reivindican su legitimidad[31] y aplicación universal en diferentes contextos, aún ante la falta de reconocimiento estatal. De allí que la positivización no solo evolucionó a través de la creación de instrumentos internacionales, sino que permitió desplegar formulaciones mejoradas de tutela y garantía[32]. Es así como los derechos humanos se encuentran claramente vinculados a estructuras normativas e instituciones positivas[33], estas últimas permiten actualizar su ámbito de protección mediante el trabajo realizado por las cortes y tribunales internacionales, así como por los órganos especializados de los tratados en la materia.

A modo de síntesis, los principales instrumentos de derechos humanos[34] con incidencia ambiental[35] son: la Declaración Universal de los Derechos Humanos[36] de 1948, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales[37] de 1966, el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales[38] de 2008. Con relación al grupo vulnerable[39] pueblos indígenas debe incluirse la Declaración de las Naciones

30. Pérez-Luño, A. E. (2021), *ob. cit*. 244

31. Pérez-Luño, A. E. (2021), *ob. cit*. 233.

32. Pérez-Luño, A. E. (2003), *ob. cit*. 129.

33. Pérez-Luño, A. E. (2003), *ob. cit*. 233.

34. En cuanto a su elemento material y formal: Faúndez, H. (2004), *Ob. cit*. 6. refiriéndose «tanto al elemento material como al elemento formal inherentes al concepto de derechos humanos; ella alude al carácter universal de estos derechos —como categoría jurídica propia del Derecho positivo— […], y comprende las obligaciones del Estado tato en lo que se refiere a derechos civiles y políticos como a derechos económicos, sociales, culturales» y ambientales.

35. Sobre una propuesta de marco teórico de los derechos humanos para combatir el cambio climático véase: Salmón, E. (2020). «El enfoque de los derechos humanos en la lucha contra el cambio climático». En: E. Salmón (Coord.) *Cambio climático y derechos humanos*. (pp.17-46). Lima. IDEHPUCP- PUCP.

36. Declaración Universal de los Derechos Humanos. GA. Res. 217A (III), (10 dic. 1948).

37. Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. 16 dic. 1966.

38. Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. 10 dic. 2008.

39. Aunque no son objeto de esta investigación, es importante mencionar que en relación a los grupos especialmente vulnerables al cambio climático pueden incluirse los siguientes instrumentos de corte universal: Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial (1965), Convención sobre Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (1979), Convención sobre los Derechos del Niño (1989) y la Convención sobre Derechos de las Personas con Discapacidad (2006).

Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas[40] y el Convenio de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales[41].

En el ámbito regional objeto de estudio en este libro deben agregarse: la Declaración Americana sobre Derecho y Deberes del Hombre de 1948[42], la Convención Americana sobre Derechos Humanos de 1969[43], el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales[44] de 1988, la Declaración Americana de los Pueblos Indígenas[45] de 2016, y la Convención sobre la Protección de Derechos Humanos de las Personas Mayores[46]. En esta lista es necesario incluir el Acuerdo de Escazú[47].

Mientras que, desde una mirada histórica la positivización de los derechos económicos, sociales, culturales[48] respondió al reflejo del reconocimiento

40. Véase la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas ONU. AGRO 61 Sesión., U.N Doc. A/61/53 (13 sep. 2007).

41. OIT, Convenio sobre Pueblos Indígenas y Tribales, 7 jun. 1989 [Convenio OIT-169].

42. Declaración Americana sobre Derechos y Deberes del Hombre. Acta Final Novena Conferencia Internacional de los Estados Americanos Doc. Res. XXX, 30 mar.1948. [DADH]

43. OEA. Convención Americana sobre Derechos Humanos. Conferencia Especializada Interamericana sobre Derechos Humanos (B-32) 22 nov.1969 [CADH].

44. OEA. Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (A-52), 17 nov. 1988. [Protocolo de San Salvador].

45. OEA. Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. AG Res. 2888 (XLVI-O-16). 14 jun. 2016.

46. OEA. Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores (A-70) 15 jun. 2015, cuyo artículo 25 recoge expresamente la protección del derecho a un medio ambiente sano en los siguientes términos: «La persona mayor tiene derecho a vivir en un medio ambiente sano y a contar con servicios públicos básicos, a tal fin los Estados Parte adoptarán las medidas pertinentes para salvaguardar y promover el ejercicio de este derecho, entre ellas: a) Fomentar el desarrollo pleno de la persona mayor en armonía con la naturaleza. b) Garantizar el acceso de la persona mayor en condiciones de igualdad a servicios públicos básicos de agua potable y saneamiento, entre otros».

47. ONU. Acuerdo Regional sobre Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe [Acuerdo de Escazú]. En vigor (22 abr. 2021). Aunque se trata de un acuerdo para las Américas, se encuentra fuera del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Sin embargo, Escazú puede ser utilizado como una herramienta interpretativa que nutra el alcance y contenido de los tratados nacidos en el seno de la OEA, aunque no de aplicación directa.

48. Morsink, J. (1999). *The Universal Declaration of Human Rights: origins, drafting, and intent*. University of Pennsylvania Press., pp 2-5. La Declaración Universal de Derechos Humanos protege tanto derechos civiles como políticos, solo que, debido al contexto de la época, la comunidad internacional optó por la redacción de dos tratados, separando los derechos. De esta manera se adoptó el Pacto de Internacional de Derechos Civiles y Económicos, en vigor desde 1976. Mientras que el segundo Pacto protegería los derechos económicos, sociales y culturales, también en vigor desde 1976 y actualmente con 171 Estados Parte.

domestico de los derechos fundamentales. En consecuencia, la falta de mención o reconocimiento expreso del derecho humano a un medio ambiente sano en los principales instrumentos universales[49], obedeció a un momento en el cual las constituciones nacionales no reflejaban aún este derecho[50].

Como se ha mencionado anteriormente el derecho interno fue la inspiración para catalogar los derechos humanos dentro del derecho internacional. No obstante, en aquel momento el hombre empezaba a registrar en su conciencia el impacto del daño causado por sus actividades en el medio ambiente[51]. De allí que su falta de registro expreso en aquel entonces no implica de manera alguna su negación como derecho humano autónomo hoy.

Debe recordarse que en las décadas posteriores a 1948, el movimiento ambientalista fue creciendo, evidenciando la importancia que tenía la salvaguarda del medio ambiente[52]. Así emergió el derecho internacional ambiental, sus primeros registros pueden situase a partir de los años setenta, de manera que la preocupación ambiental pasó de las áreas marginales de los derechos humanos al centro a través de la búsqueda del desarrollo social y económico[53].

Esta corriente de pensamiento generó movimientos que incluyeron en la agenda internacional a la problemática de la degradación ambiental como un llamado de atención hacia las consecuencias de la conducta humana sobre su propio medio de vida. El semillero del cambio ambiental en la escena internacional fue la Conferencia de Estocolmo de 1972[54], desencadenando la creación de un nuevo régimen de protección legal internacional[55].

Por su parte, la Declaración de Estocolmo sobre el Medio Ambiente Humano de 1972[56], identificó una serie de principios que dieron paso al

---

49. Durante la década del ochenta comenzó a reconocerse como derecho humano en los textos normativos de la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos (1981), Protocolo de San Salvador (1988) y Carta Árabe de los Derechos Humanos (2004).

50. HRC, Report Independent Expert John Knox on the issue of human rights obligations relating to enjoyment of a safe, healthy, and sustainable environment), U.N. Doc. A/HRC/22/43. (24 dic. 2012). [U.N. Doc. A/HRC/22/43. (24 Dic. 2012).] §7.
U.N. Secretary-General, Report of the Special Rapporteur David Boyd on the issue of human rights obligations relating to the enjoyment of a safe, clean, healthy, and sustainable environment, U.N Doc. A/74/161 (July 15, 2019).

51. U.N. Doc. A/HRC/22/43. (24 dic. 2012). §7.

52. U.N. Doc. A/HRC/22/43. (24 dic. 2012). §7.

53. U.N. Doc. A/HRC/22/43. (24 dic. 2012). §9.

54. Brunnée, J. (2020). *Procedure and substance in international environmental law*. The Pocket Books of The Hague Academy of International Law. 40. Leiden: Brill | Nijhoff., p. 117.

55. Otro hito que debe destacarse en este período lo constituye la creación del PNUMA|UNEP. Véase: GA Res. 2997 (XXVII), (Dec. 15, 1972).

56. *Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente Humano*. Declaración de Estocolmo sobre el Medio Ambiente Humano, Doc. ONU A/CONF.48/14/Rev.1 (16 jun. 1972).

florecimiento del derecho ambiental, inspirando el desarrollo de textos normativos internacionales y nacionales. Tales principios permiten iluminar el camino hacia la búsqueda del balance entre la cada vez más acelerada industrialización y la protección del medio ambiente. Este instrumento además tuvo la virtud mencionar por primera vez a las alteraciones climáticas como parte de las afectaciones ambientales[57], mientras que para otros sus trabajos preparatorios representan la base del reconocimiento del derecho individual a un ambiente sano[58].

Posteriormente, aparecen otros instrumentos de *soft law* como la Carta Mundial de la Naturaleza de 1982[59] donde se promovió la incorporación de sus principios en el derecho y la práctica de los Estados[60]. Seguido en 1983 por la creación de la Comisión Mundial sobre Medio Ambiente, cuyo trabajo desembocó con el *Brundtland Report*[61], donde se definió el concepto del desarrollo sostenible. Este último representó la introducción de la sostenibilidad en el marco normativo nacional e internacional[62].

Nuestro Futuro Común fue la antesala para elevar la preocupación ambiental entrelazada con la humanidad a través de las diferentes capas del derecho internacional. Así, se fueron creando parcelas de protección ambiental dentro de diferentes sectores del derecho. Cabe destacar que la mayoría de estas zonas del derecho internacional[63] se encontraban y se mantienen directamente conectadas con el fenómeno de alteración de sistema climático de la Tierra. De esta manera, comenzaron a surgir regímenes específicos de pro-

57. Informe de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano (1972) UN. Doc. A/CONF.48/14. Rev.1, (5-16 jun. 1972). Véase: Capítulo II. Plan de Acción para el Medio Humano, sección de definición de los agentes contaminantes: Recomendación 70 a). «Se recomienda que los gobiernos tengan presentes las actividades en las que exista un riesgo apreciable de efectos sobre el clima, y a tal fin que: a) Evalúen detenidamente la probabilidad y magnitud de los efectos sobre el clima y divulguen sus conclusiones, en toda la medida de lo posible antes de emprender dichas actividades».

58. Rodríguez-Rivera. L. «The Right to a Healthy Environment. A New, Internationally Recognised, Human Rights». En: A. Von Arnauld, K. Von Der Decken & M. Susi (eds.) *The Cambridge Handbook of Human Rights: Recognition, Novelty, Rhetoric* (pp. 154-162). Cambridge: Cambridge University Press.

59. ONU. Carta Mundial de la Naturaleza. 37 sesión, ONU. Doc. A/Res. 37/7 (28 oct. 1982).

60. Después, la Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó la Declaración sobre el Desarrollo. Véase: ONU. GA Doc. A/Res.41/128 (4 dic. 1986).

61. U.N. Secretary-General. Development and International Co-operation: Environment. Report of the World Commission on the Environment and Development. U.N. Doc. A/42/427 (Aug. 4 ,1987). [Brundtland Report].

62. Mondini, G. (2019). «Sustainability assessment: from Brundtland Report to sustainable development goals» *Valori e Valutazioni*, (23), p. 129-137.

63. Sobre la protección de intereses generales véase: Rodrigo, Á. J. & Abegón, M. (2017). «El concepto y efectos de los tratados de protección de intereses generales de la comunidad internacional». *Revista Española de Derecho Internacional*, 69 (1), 167-193.

tección como el de la capa de ozono[64], la conservación del medio marino[65], la expansión del concepto de preservación de la biodiversidad[66], entre otros instrumentos que miraban al desarrollo desde el ya cristalizado paradigma de la sostenibilidad.

Este proceso dio paso a la Declaración Río sobre el Medio Ambiente y Desarrollo de 1992[67] en el marco de la Cumbre de la Tierra[68]. La Declaración de Río vino a extender el alcance de los principios ambientales mencionados en la Declaración de Estocolmo, así como incorporó el reconocimiento de otras novedosas formas de aproximación legal. Gracias a la reafirmación y a la aceptación universal de su texto[69], muchos de estos principios se transformaron en costumbre internacional. De esta manera, la Declaración fue el punto de partida para la creación de preceptos jurídicos ambientales que hoy en día cuentan con total autoridad normativa.

Igualmente, es de mención obligada la Declaración de Johannesburgo sobre el Desarrollo Sostenible de 2002[70], la cual buscaba detener la pobreza y la degradación del medio ambiente. Así, el desarrollo sostenible continuó siendo uno de los pilares esenciales para generar la ruptura del círculo de pobreza directamente asociada con la vulnerabilidad ambiental. La Declaración expresa la responsabilidad colectiva de promover y fortalecer, en los

64. Yoshida, O. (2001). *The International Legal Régime for the Protection of the Stratospheric Ozone Layer*. Leiden: Brill | Nijhoff.

65. Véase: Proelss, A. (2017) *United Nations Convention on the Law of the Sea: A Commentary*. Oxford: Beck|Hart|Nomos. Sobre la dimensión de los derechos humanos en el derecho del mar véase también: Treves, T. (2010). «Human Rights and the Law of the Sea». *Berkeley Journal of International Law*, 28(1), 1-14.

66. Desde los años sesenta existía un movimiento de conservación de la naturaleza y especies, donde la conservación de la biodiversidad constituía una prioridad. Un ejemplo de estos esfuerzos fue la elaboración y entrada en vigor del Convenio Relativo a Humedales de Importancia Internacional, Especialmente como Hábitats de Aves Acuáticas de 1972, seguido por la Convención de Diversidad Biológica de 1992 y su Protocolo de Cartagena sobre Seguridad de Biotecnología de 2003 y Protocolo de Nagoya sobre Acceso a los Recursos Genéticos y Participación Justa y Equitativa en los Beneficios que se deriven de su utilización de 2014.

67. ONU. Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo. ONU. Doc. A/CONF.151/26 vol. 1 (3-14 jun. 1992). [Declaración de Río]. Considerada como la heredera de los avances de la Declaración de Estocolmo.

68. Cabe destacar que de la Cumbre de la Tierra surgieron las llamadas tres Convenciones de Río para dar vida, fomentando la cooperación a través de los regímenes del clima con la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, actualizar el de biodiversidad mediante la Convención sobre Diversidad Biológica y la Convención de Lucha Contra la Desertificación.

69. Legitimado por la actividad propia de los Estados y la incorporación de sus principios en la legislación interna en tratados y acuerdos de aceptación universal.

70. ONU. Declaración de Johannesburgo sobre el Desarrollo Sostenible. ONU. Doc. A/CONF.199/20 (4 sept. 2002). [Declaración de Johannesburgo].

planos local, nacional, regional y mundial, el desarrollo económico, social y la protección ambiental, como pilares interdependientes y sinérgicos conducente a una meta común.

La comunidad internacional ha continuado en su labor de promoción de la sostenibilidad, meta hoy respaldada por los Objetivos para el Desarrollo «ODS» de la Agenda 2030[71]. Sobre esta importante estrategia se debe señalar que todas sus metas funcionan de forma transversal, para lo cual se aspira revitalizar las alianzas que permitan alcanzar el tan anhelado desarrollo. Actualmente todos estos objetivos tienen una basa de derechos humanos[72] que potencia su aplicabilidad y exigibilidad.

La Agenda presta especial atención a la cuestión de cambio climático a través del ODS 13, en el cual se propone integrar las medidas de cambio climático en las políticas, estrategias y planificación nacionales, así como mejorar la educación, la sensibilización y la capacidad humana e institucional, y la promoción mecanismos para aumentar la capacidad de planificación y gestión eficaz relacionada con el cambio climático en los países menos adelantados. Igualmente, este objetivo se encuentra estrechamente conectado con el ODS 15 sobre la vida en tierra (15.1, 15.2, 15.5), el ODS 11.4 sobre ciudades y comunidades sostenibles, y el ODS 12.2 - 12.7 relativo a la producción y consumo responsable.

El recorrido ambiental anteriormente expuesto no es más que una muestra del proceso de reverdecimiento gradual del concepto de humanización del Derecho Internacional, aunque debe remarcarse que el cambio de paradigma no termina de consolidarse. De manera que la relación de provecho generado por el reverdecimiento comenzó a penas a mostrar sus primeros frutos cuando en los foros internacionales se rescató «a la persona humana, destinataria final de sus normas, como sujeto de derecho, dotado de capacidad jurídica»[73], tanto en su rol activo como pasivo[74].

A partir de ese momento se abrió una nueva dimensión de acceso a la justicia ambiental en el derecho internacional[75]. Es crucial tener en consideración que esta visión universalista sigue en desarrollo y con el pasar del tiempo se percibe con mayor intensidad su impacto a través de la institucionaliza-

71. CEPAL (2019a). *La Agenda 2030 y los Objetivos de desarrollo sostenibles una Oportunidad para América Latina y el Caribe*. Santiago: CEPAL. Recuperado de: https://bit.ly/3LupaCV

72. Boyle, A. (2018). «Climate change, the Paris Agreement and human rights». *International & Comparative Law Quarterly*, *67*(4), 776-777.

73. Cançado-Trindade, A. A. (2020a), *ob. cit*. 24

74. *Loc. cit*.

75. Sobre nuevos planteamientos de protección del medio ambiente desde el derecho internacional véase: Orihuela, E., Fernádez Egea, R. M, *et al.* (2023). «Naturaleza y derecho internacional público». *Revista Electrónica de Derecho Internacional Contemporáneo*, *6*, Recuperado de: https://doi.org/10.24215/2618303Xe050

ción del *corpus iuris gentium* de los derechos humanos[76], el cual ha servido de vehículo para el reconocimiento de las nuevas demandas de los colectivos vulnerables como integrantes de la comunidad internacional[77], donde se incluyen aquellas cuestiones de raíz ambiental, cultural y social, con el objetivo de asegurar un mayor bienestar para la humanidad[78].

Este reconocimiento produjo un salto en el razonamiento procesal tal, que hasta ahora permite proteger con mayor efectividad los derechos individuales y colectivos afectado por un riesgo[79] ambiental. Así, los derechos humanos[80] han sido empleados como una plataforma que da respuesta a afectaciones sobre la persona causadas por disrupciones ambientales[81]. Aunque estos avances han sido progresos tremendamente significativos, los juristas actuales tienen la tarea de expandir los horizontes ya conquistados por la humanización y avanzar hacia el reverdecimiento definitivo del principio *pro-persona*.

Si bien es cierto que el fenómeno de reverdecimiento de la humanización de derecho internacional se viene gestando desde hace décadas, el mismo se manifiesta en diferentes grados de intensidad, dependiendo del foro del que se trate. Aunque debe recordarse que en estas aproximaciones con tiente ecológico mantienen en su núcleo la salvaguardar del individuo, por lo menos en lo que se refiere al ámbito judicial de protección y garantía de los derechos humanos.

---

76. Cançado-Trindade, A. A. (2020a), *ob. cit*..25.

77. Cançado-Trindade, A. A. (2020a), *ob. cit*. 24. «*These developments have disclosed an international legal order which now- adays surely and clearly transcends the old and outmoded strictly inter-State dimension. Non-governmental organizations and other entities of civil society, together with States and international organizations, have shown themselves more open to the demands of the international community as a whole, well above those of individual States, in the common search of responses to the needs of humankind, to the ultimate benefit of all. This appears as the basic feature of the new jus gentium, flourishing in this start of the XXIst century»*.

78. *Loc. cit.*

79. Sobre el riesgo climático véase: IPCC (2022). «Summary for Policymakers». En: H. Portner, D.C. Roberts *et al* (eds.). *Climate Change 2022: impacts, adaptations and vulnerability.* (p. 7). Recuperado de: https://bit.ly/3xAyq3V. Este informe señales que en la serie de reportes AR6 se utiliza el riesgo como un marco para conceptualizar la adaptación, vulnerabilidad, exposición, equidad y justicias. Además, define el riesgo como: *«the potential for adverse consequences for human or ecological system, recognizing the diversity of values and objective associated with such systems».*

80. Sobre un abordaje ambiental con base en los derechos humanos véase: Wewerinke-Singh, M. (2018). *State responsibility, climate change and human rights under international law.* Oxford: Hart Publishing.
Boyle, A. (2018), Ob. Cit. 765-73.; Knox, J. (2009) «Climate change and human rights law 50». *Virginia Journal of International Law* 50(1), 163-218.

81. Savaresi, A. & Setzer, J. (2021), «Mapping the Whole of the Moon: An Analysis of the Role of Human Rights in Climate Litigation». *SSRN*. Recuperado de: https://bit.ly/34cQlvk.

No obstante, durante este proceso de florecimiento ambiental, la meta es la integración de la protección del medio ambiente y de la humanidad, sin encasillarlo en una categoría estrictamente antropocéntrica o ecocéntrica, sino más bien multicéntrica[82]. Por lo tanto, en estas líneas se plantea un balance entre el principio *pro persona* y principio *pro natura.* Así, es como subyace por una parte el aseguramiento del individuo y por la otra un interés de protección de bienes jurídicos naturales como parte de ese pensamiento de ecología ambiental integradora[83], donde se protege la interdependencia entre el medio ambiente y el ser humano como un todo indivisible.

Se trata de una visión del «humanismo antropodescentrado»[84], donde el individuo y los colectivos se decanta por el multigarantísmo de los derechos, el cual se encuentra inspirado por el compromiso ético por lo humano en el marco de unas condiciones dignas y en armonía con la naturaleza[85]. Los mayores avances de esta línea de pensamiento plural en el terreno práctico pueden rastrearse no solo en las constituciones ecologizadas, también existen vestigios de este pensamiento en el seno de algunas organizaciones internacionales y en tribunales domésticos e internacionales.

En la actualidad existen entidades dispuestas a adoptar posturas que rompen con la conceptualización tradicional del derecho en su relación con la protección de la naturaleza. se trata de una aproximación que crece con intensidad en las Cortes Nacionales del Sur Global[86] e inspiran la práctica de Cortes Internacionales, concretamente a la Corte Interamericana de Derechos Humanos[87].

Es así como frente a los obstáculos derivados de la efectividad del derecho internacional ambiental aparecen formulas holística de autocorrección que han llegado a ser positivizadas. Es el caso de la Organización Mundial de la Salud y la incorporación del *«One Health Approach»*[88]*, «Planetary*

82. Los tratados ambientales tienen muchas facetas y encasillarlos en una categoría cerrada puede conducir a una conclusión sesgada.

83. Sánchez-Bravo. A. (2022). «Ecología integral y doctrina social de la iglesia». En: A. Sánchez-Bravo (dir.) *Semper Sapiens: libro homenaje al Profesor Dr. Felipe Rotondo Tornaría.* (p. 32). Madrid: Alma Mater. Haciendo referencia al nuevo paradigma de justicia el autor señala que: «El punto de partida para el establecimiento de una correcta ecología, ambiental, económica y social, debe partir de la consideración del medio ambiente, reiterado en el texto, como una relación entre la naturaleza y la sociedad que la habita».

84. Sánchez Rubio, D. (2022). «Humanismo intercultural biocentrado, una propuesta desde lo común». *Anuario de Filosofía del Derecho*. (38)., 251- 274. Término acuñado por el autor.

85. *Loc. Cit*. 260.

86. Véase el Capítulo II de este libro.

87. Véase el Capítulo III y IV de este libro.

88. WHO. Director-General, Health environment and climate change Draft WHO global strategy on health, environment and climate change: the transformation needed to improve

Health»[89]*,* así como los interesantes avances desarrollados por la UNESCO con relación a *«One Planet, One Ocean»*[90] a través de la Comisión Oceanográfica Intergubernamental, las propuestas del Grupo de Trabajo de la Comisión de Derecho Internacional sobre la Capa de Ozono[91] donde existen matices orientadores hacia el *«One Atmosphere Approach»*[92]*.* Además, debe recordarse que desde 2017 se suman incansables esfuerzos diplomáticos y desde diversos campos del saber para consolidar un pacto global del ambiente con enfoque coordinado desde diversos flancos[93] o la cristalización de la solicitud de opinión consultiva al Tribunal Internacional de Derecho del Mar formulada por la Comisión de Pequeños Estados Insulares sobre Cambio Climático y Derecho Internacional en 2022[94].

Estas son interesantes formas para corregir llamado «tropismo antropocéntrico de los instrumentos jurídicos»[95], aunque generadas desde organismos políticos y especializados en donde se intentan localizar respuestas a las problemáticas ambientales conectadas con el cambio climático. No obstante, sutiles enfoques de corrección y actualización del derecho también se

lives and wellbeing sustainably through healthy environments. WHO. Doc. Res. A72/15 Resolution (18 April 2019).

89. WHO. (2021) «Health Promotion Glossary of Terms 2021: planetary health». En: https://bit.ly/3G3258Z.

90. UNESCO. (2017) One Planet, One Ocean: Intergovernmental Oceanographic Commission of UNESCO. UNESCO. Rescatado de: https://bit.ly/3LdKfBp

91. Int'l Law Comm'n Rep. on the Protection of the Atmosphere of its Seventy-second Session, U.N. Doc. A/76/10 at. 189-197 (2021). [ILC Rep. on the Protection of the Atmosphere].

92. Desde la doctrina se desarrollan interesantes propuestas entorno a: Peters, A. (2021). «COVID-19 as a catalyst for the (re-) constitutionalization of international law: one health-one welfare». En: M. Mbengue & J. D'Aspremont (eds.) *Crisis Narratives in International Law* (pp. 85-99). Leiden: Brill | Nijhoff.; Singer, P. (2016) *One World Now: The Ethics of Globalization*. New Heaven. Yale University Press. Véase en el mismo sentido: Whitmee, S. Haines, A. *et. al*., (2015). «Safeguarding Human Health in the Anthropocene Epoch: Report of The Rockefeller Foundation–Lancet Commission On Planetary Health». *The Lancet*, 386 (10007), 1973-2028.

93. Véase: UNGA. Toward a global pact for the environment. U.N. Doc. A/72/L.51 (7 May. 2018)., U.N. Secretary-General. Report on gaps in international environmental law and environment-related instruments: towards a Global Pact for the Environment: report of the Secretary-General, U.N Doc. A/73/419 (30 Nov. 2018).

94. Véase: ITLOS. Request for an Advisory Opinion submitted by the Commission of Small Island States on Climate Change and International Law (12 dic. 2022). Aunque la pregunta formulada a tribunal no responde a una visión biocentrica, da cuenta de la preocupación de los pequeños estados insulares sobre la protección del medio marino.

95. Bétaille, J. (2021). *État des conaissances. Justice écologie panorama des principals rechercher*. Mission De Recherche Droit & Justice., p.16. Recuperado de: https://bit.ly/3iqsn9g

han registrado a lo largo de las últimas dos décadas en la CIJ[96] y otros tribunales, logrando introducir un signo particular que reafirma el vínculo entre lo ambiental y lo humano, aunque debe reconocerse que la cuestión ambiental es tratada por lo general de forma periférica.

A continuación, se abordará un grupo limitado de decisiones de la CIJ en las que se da cuenta de ese proceso del inicio de una ecologización gradual del derecho internacional, durante el cual se introdujeron giros sustanciales sobre el entendimiento del alcance de las obligaciones ambiental interestatales con impacto en la persona humana. Estos pronunciamientos son punto de referencia obligada para cualquier abordaje que pretenda contribuir a paliar la crisis climática, incluso si el núcleo ambiental de la violación se concentra en instrumentos regionales de derechos humanos.

En las decisiones siguientes, se aplicaron cambios progresivos impregnados de humanidad[97] a las fórmulas tradicionales para adaptarlas a las necesidades sociales trasladadas al plano universal. El ejemplo más emblemático de ello es la respuesta a la solicitud presentada primero, por la Organización Mundial de la Salud y posteriormente por el Secretario de las Naciones Unidas sobre la *Legalidad de la Amenaza o el Empleo de Armas Nucleares*.

En aquel momento la Corte se pronunció sobre el valor intergeneracional del medio ambiente y la obligación estatal de protección ambiental en conexión con la persona humana en el marco del *corpus iuris* internacional ambiental que integra al derecho internacional. Igualmente, se señaló que este deber comprende tanto los actos realizados dentro de los límites territoriales y marítimos de un Estado, así como aquellos localizados más allá de la jurisdicción nacional.

> «the environment is not an abstraction but represents the living space, the quality of life and the very health of human beings, including generations unborn. The existence of the general obligation of States to ensure that activities within their jurisdic-

96. Fernández-Egea, R. (2021). «La protección medioambiental en la jurisprudencia de la Corte Internacional de Justicia: ¿Un reto irresoluble?» En: S. Torrecuadrada (dir.) *Los nuevos retos de la Corte Internacional de Justicia: los desafíos de la Corte Internacional de Justicia y las sinergias entre la Corte y otros órganos jurisdiccionales* (pp. 105-132). Madrid: Wolters Kluwer.

97. Un importante antecedente fue: Corfu Channel (UK Gr. Brit. N. Ir. v. Alb.), Judgment, 1949, ICJ. 22 (April 1949). «*…on certain general and well recognized principles, namely: elementary considerations of humanity, even more exacting in peace than in war*». Por su parte: Fernández-Egea, R. (2021), *Ob. cit*. 106-107. Identifica doce (12) casos contenciosos a lo largo de la historia de la CIJ entre asuntos decididos, pendiente de decisión, inadmisibles o ante los cuales la Corte ha declinado competencia: «los ensayos nucleares (1974); asunto sobre el Proyecto Gabcíkovo-Nagymaros (1997); asunto sobre las Papelerías del Rio Uruguay (2010); asunto de las fumigaciones transfronterizas en Ecuador (2013); asunto de la caza ilegal de ballenas (2014); asunto sobre las obligaciones sobre desarme nuclear (2016); asuntos acumulados sobre actividades transfronterizas de Nicaragua y sobre el río San Juan de Costa Rica (2018); y asunto sobre las aguas del Silala».

tion and control respect the environment of other States or of areas beyond national control is now part of the corpus of international law relating to the environment» [98].

Esta fue la primera vez en la cual la CIJ identificó al medio ambiente como un «espacio vivo», en el sentido de espacio vital para alcanzar una vida digna y asegurar la salud humana. Esta Opinión Consultiva marcó un hito en materia ambiental, pues expuso una serie de elementos críticos que determinaron la importancia del medio ambiente no solo para los Estados, sino para la humanidad, ya que el entorno natural es el escenario donde se desenvuelve el hombre.

Este pronunciamiento es esencial para el tratamiento ambiental por su indiscutible influencia en el desarrollo de la disciplina[99]. Aunque es claramente antropocéntrico, marcó una pauta diferenciadora que dio paso al planteamiento de nuevas formas que hoy permiten reverdecer el derecho internacional con mayor intensidad. La Opinión Consultiva es un eslabón clave para plantear respuestas alternativas desde el derecho en sus diferentes especialidades, brindando la oportunidad de armonizar el pensamiento humanista y el ecologista. Además, el desarrollo argumentativo expuesto por la Corte permite leer entre líneas que las problemáticas ambientales no pueden ser abordadas de forma aislada.

La respuesta a la consulta planteada por el Secretario General de las Naciones Unidas invita al jurista del siglo XXI a releer el problema de fragmentación del derecho internacional ambiental bajo el prisma del sistema y dinamismo interpretativo, ya que las cuestiones ambientales se encuentran indisoluble y profundamente conectadas con los derechos humanos[100], permitiendo ampliar el ámbito de protección frente a amenazas significativas no resueltas como el cambio climático.

Otra decisión histórica de mención obligada es *Gabcíkovo-Nagymaros Project*[101], considerada como la primera disputa sobre desarrollo sostenible en

98. Legality of the Threat or Use of nuclear weapons, Advisory Opinion, 1996 ICJ. 244, § 29. (July 8).

99. Otras decisiones iniciales de la Corte Internacional de Justicia (además de las mencionadas en este apartado), que abordan temas ambientales de vital importancia, aunque sin involucrar directamente al ser humano en la estructura argumentativa utilizada son: Nuclear test case (Austl.v. Fr.), Judgment, 1974 ICJ. 270 § 53 (December 1974).; Certain Phosphate Lands in Nauru (Nauru v. Austl.), Preliminaty Objections, Judgment, 1992 ICJ. 248-250 § 16-21(June 1992).; Certain Activities Carried Out by Nicaragua in the Border Area (Costa Rica v. Nicar.) and Construction of a Road in Costa Rica along the San Juan River (Nicar v. Costa Rica), Judgment, 2015, ICJ. 101-120. (December 2015).

100. Legality of the Threat or Use of nuclear weapons*,* Advisory Opinion, 1996 ICJ. 244, § 35. (July 8).

101. Gabcíkovo-Nagymaros Project (Hung. v. Slovk.), Judgment, 1997 ICJ. § 112 (September 25). Recuperado de: https://www.icj-cij.org/ Este caso implicó la aplicación de una nueva aproximación para el tratamiento de la protección ambiental con relación a la vigilancia y prevención a la luz de los nuevos estándares ambientales.

el derecho internacional, a la luz de la necesidad de reconciliar el desarrollo económico con la protección del medio ambiente[102]. De ella se desprende que el derecho al desarrollo no es absoluto, debiendo balancearse con la protección ambiental[103].

En aquella oportunidad, la CIJ se afianzó en la importancia previamente otorgada al medio ambiente, y aunque no se centró específicamente en el estándar de conducta del Estado, determinó la obligación de evaluar y gestionar el impacto ambiental como reflejo de la diligencia debida[104]. Igualmente, en esta sentencia, el Tribunal Internacional invocó los Artículos sobre Responsabilidad del Estado por Hecho Ilícito Internacional, para analizar el desafiante concepto de estado de necesidad ecológico introducido por Hungría[105], en el marco de un proyecto donde surgía un riesgo grave e inminente para los intereses esenciales del Estado[106].

La CIJ hizo suyo los argumentos de la Comisión de Derecho Internacional (CDI), en cuanto a la preservación del balance ecológico como interés esencial para el derecho internacional contemporáneo, en el sentido de que este concepto abraza a la humanidad. Igualmente, la Corte ordenó negociar en buena fe para alcanzar los objetivos del tratado sobre el que se generó la disputa, invitando de esta manera a la integración de las normas de derecho ambiental y los principios del derecho[107].

Esta decisión representa una pieza cardinal para la construcción de cualquier argumento sobre responsabilidad internacional que pretenda abordar el tratamiento del cambio climático en el marco del desarrollo de actividades permitidas a los Estados que comprometen la integridad de espacios natu-

---

102. Mbengue, M. (2020). «On Sustainable Development: a Conversation with Judge Weeramantry». En: S. Forlati, M. Mbengue & B. McGarry (eds.) *The Gabčíkovo-Nagymaros Judgment and Its Contribution to the Development of International Law* (pp. 166-192). Leiden: Brill | Nijhoff. Además véase: Gabcíkovo-Nagymaros Project (Hung. v. Slovk.), Judgment, 1997 ICJ. § 140 (September 25).

103. Véase: Gabcíkovo-Nagymaros Project (Hung. v. Slovk.), Judgment, 1997 ICJ. 107 (September 25) (Separate Opinion of Judge Weeramantry). 92. Recuperado de: https://bit.ly/3tOFWUY

104. Brunnée, J. (2020), cit. 127.

105. El concepto de estado de necesidad introdujo una nueva mirada sobre la cuestión a pesar de que en su momento fue desestimado por la Corte. Véase: Dobos, D. (2002). «The necessity of precaution: the future of ecological necessity and the precautionary principle». *Fordham Environmental Law Journal*, 13(2), 407. «The inclusion of the precautionary principle in ecological necessity will serve an important part of environmental protection».

106. Esto cuando la CIJ hace referencia al valor del medio ambiente para la humanidad. Véase: Gabcíkovo-Nagymaros Project (Hung. v. Slovk.), Judgment, 1997 ICJ. § 53 (September 25).

107. Gabcíkovo-Nagymaros Project (Hung. v. Slovk.), Judgment, 1997 ICJ. § 141 (September 25). Sobre el derecho de los cursos de aguas internacionales y del derecho ambiental.

rales vitales[108] y afecten obligaciones de derechos humanos. Hasta ahora las emisiones de gases de efecto invernadero han encontrado bajo el cerco de protección que brinda el principio de las responsabilidades comunes pero diferenciadas un escudo impenetrable, aún en presencia de un riesgo de daño significativo al ambiente y al individuo.

Otra muestra interesante de cómo el derecho internacional progresivamente continúa introduciendo la protección de la persona[109] y subsidiariamente del medio ambiente, es el caso *sobre los Derechos de Navegación para zanjar la controversia entre Costa Rica y Nicaragua sobre el Río San Juan*. La CIJ, ponderó la solicitud de Costa Rica sobre el reconocimiento de la obligación de respetar los derechos de pesca de subsistencia a los habitantes de las zonas ribereñas[110], en atención al derecho consuetudinario que les amparaba.

De esta manera, el Tribunal miró hacia los sujetos directamente afectados en el seno de un litigio en principio puramente interestatal, con el fin de proteger los derechos de los seres humanos que necesitaban de la pesca para vivir[111]. Se refirmó la premisa histórica de que «los Estados existen para los seres humanos y no viceversa»[112]. Así se aprecia una integración entre la explotación artesanal de un recurso marino vivo, para proteger la seguridad alimentaria de una comunidad local.

Igualmente, resulta importante mencionar la decisión sobre las *Papelerías del Río Uruguay*[113], entre cuyos grades logros está el exponer que el deber de no causar daños también es una obligación de diligencia debida[114], derivado

---

108. Gabcíkovo-Nagymaros Project (Hung. v. Slovk.), Judgment, 1997 ICJ. § 140 (September 25). *«Owing to new scientific insights and to a growing awareness of the risks for mankind - for present and future generations - of pursuit of such interventions at an unconsidered and unabated pace, new norms and standards have been developed, set forth in a great number of instruments during the last two decades. Such new norms have to be taken into consideration, and such new standards given proper weight, not only when States contemplate new activities but also when continuing with activities begun in the past. This need to reconcile economic development with protection of the environment is aptly expressed in the concept of sustainable development».*

109. Cançado-Trindade, A. A. (2020a), *Ob. cit*. 275-288. «As a result, humankind coexists with States, without replacing them; and States can no longer regard the pursuance of their own interests as the sole motivation for the shaping of International Law».

110. Dispute regarding navigational and related rights (Costa Rica v. Nicar.), Judgment, 2009, ICJ. § 141-144. (13 July).

111. Cançado-Trindade, A. A. (27/10/2017). *ob. cit*.

112. *Loc. cit.*

113. Pulp Mills on the River Uruguay (Arg. v. Uru.), Judgment, 2010, ICJ. 58 §215-221 and 197 (April 20). Además, este caso tiene un impacto sin precedente sobre diligencia debida con relación al principio de prevención de daños ambientales, con relación al deber de adoptar medidas y de monitorear el cumplimiento de estas por parte de los operadores privados.

114. Brunnée, J. (2020), *Ob. cit*.128. «In its 2010 decision, the ICJ pulled together its statements in the *Corfu Channel* case and in the *Nuclear Weapons* Advisory Opinion to confirm that the no harm rule in international environmental law is a due diligence obligation».

del principio de prevención[115]. Además, esta sentencia pone de manifiesto el carácter de costumbre internacional del principio y las obligaciones surgidas del deber de prevención del daño[116]. Entre ellas, la obligación de realizar la evaluación del impacto ambiental y el deber de consulta de los Estados para con las poblaciones[117] posiblemente afectadas por el riesgo derivado de actividades industriales que puedan causar un daño significativo al medio ambiente[118].

Asimismo, se remarca que la obligación de consulta como parte de la evaluación de impacto es una pieza esencial de la dimensión procedimental del derecho ambiental en su vínculo con la protección humana, ya que está directamente conectado con el derecho al acceso a la justicia y también con el respeto de las garantías procesales mínimas que deben tener toda persona que se encuentre en riesgo o vea significativamente afectado el espacio que da soporte a la realización de sus otros derechos humanos.

Dentro de esta mirada ecologizada de la dimensión humana del derecho, debe tenerse en cuenta otro avance expuesto en el caso sobre la protección de las *Ballenas en la Antártida*[119], en el que se da cuenta de la creciente humanización del derecho internacional conectado con la intertemporalidad de la protección de especies no humanas, a través del reconocimiento del principio de equidad intergeneracional[120].

En este caso, la CIJ expresó el interés de proteger estas especies no solo para las generaciones en el presente, sino como proceso que debe extenderse a largo plazo, ya que es un «elemento de conservación que forma parte de la manifestación cultural donde el bienestar humano está integrado con

115. *Loc. cit*.

116. Pulp Mills on the River Uruguay (Arg. v. Uru.), Judgment, 2010, ICJ. 58 §215-221 and 101 and 197 (April 20). Véase también: Brunnée, J. (2020), *Ob. cit*. 129-130. *«…since the duty to prevent is not absolute, due diligence could be said to provide much of the content of the substantive rule, and in any case to provide the parameters for the harm prevention efforts that a State can be expected to make».*

117. Pulp Mills on the River Uruguay (Arg. v. Uru.), Judgment, 2010, ICJ. (April 20). (Separate Opinion of Judge Cançado Trindade).

118. Pulp Mills on the River Uruguay (Arg. v. Uru.), Judgment, 2010, ICJ. 58 §215-219 (April 20).

119. Whaling in the Antarctic (Austl.v. Jap.), Judgment, 2014. ICJ. § 56 (March 31).

120. Whaling in the Antarctic (Austl.v. Jap.), Judgment, 2014. ICJ. (March 31). Austl.v. Jap.), Judgment, 2014. ICJ. § 56 (March 31). Véase también: Whaling in the Antarctic (Austl.v. Jap.), judgment, (Separate opinion of Judge Cançado-Trindade) §61, el cual a su vez remite al argumento expuesto en Pulp Mills on the River Uruguay (Arg. v. Uru.), Judgment, 2010, ICJ. (April 20). (Separate Opinion of Judge Cançado Trindade). §114-131. *«May I move on to inter-generational equity. The long-term temporal dimension marks its presence, in a notorious way, in the domain of environmental protection. The concern for the prevalence of the element of conservation (over the simple exploitation of natural resources) reflects a cultural manifestation of the integration of the human being with nature and the world wherein he or she lives».*

la naturaleza en la que vive»[121]. Además, esta decisión hace uso de una interpretación dinámica de los instrumentos ambientales[122] para adaptarla a las necesidades de los tiempos actuales, fenómeno que también se da en el campo de los derechos humanos.

En todas las decisiones abordadas en los párrafos precedentes, se ha logrado establecer que dentro del principio de humanidad subyace de una manera u otra la preservación, conservación y protección del medio ambiente. En esta selecta jurisprudencia, se encuentra un elemento convergente, la mejoría de las condiciones de vida de los individuos, así como la búsqueda del bien común atendiendo a diferentes ámbitos, entre ellos: la salud, el bienestar, el balance ecológico, el desarrollo sostenible, la equidad intergeneracional, la protección de especies y espacios de interés esencial para la humanidad[123]

Todos estos postulados transcienden a la idea de una soberanía estatal incuestionable[124]. El principio de soberanía y el de explotación de los recursos naturales han evolucionado gracias al puente tendido por la reivindicación de la dignidad del ser humano propiciando un cambio de paradigma en el derecho internacional, «en la medida en que, junto al clásico principio de la soberanía, ha aparecido otro principio constitucional del orden internacional contemporáneo: el de los derechos humanos»[125].

La senda está abierta para ampliar el abanico de protección al hombre y a la naturaleza por su valor propio. Esto no es otra cosa que renovar el *ius*

---

121. Cançado-Trindade, A. A. (2017). «The Evolving Law on Conservation of Living Species». En: A. Cançado-Trindade (ed.) *Judge Antônio A. Cançado Trindade. The Construction of a Humanized International Law* (pp. 635-672). Leiden | Brill Nijhoff. Para el autor: El bienestar humano está directamente relacionado con el sistema natural del que forma parte y del cual surge un deber de diligencia y cuidado con las generaciones pasadas y futuras.

122. Whaling in the Antarctic (Austl.v. Jap.), Judgment, 2014. ICJ. § 56 (March 31). Véase también: Whaling in the Antarctic (Austl.v. Jap.), judgment, (Separate opinion of Judge Cançado-Trindade) §28. «…to secure the survival of the ICRW itself, as a "living instrument" capable of keeping on responding to needs of the international community and new challenges that it faces in the present domain».

123. Véase sobre futuras generaciones y la conceptualización del principio de patrimonio común de la humanidad de preocupación común de la humanidad véase: Cançado-Trindade, A. A. (2020a), *Ob. cit*. 327-352).

124. Sobre decesiones de la CIJ con relación a la explotación de recursos naturales desde una mirada descolonizada véase: Liceras, J. (2021). *La Corte Internacional de Justicia y la descolonización: 1949-2019*. Editorial Reus. Véase también la recensión de la obra realizada por: Remiro-Brotóns, A. «La Corte Internacional de Justicia y la descolonización (1949-2019)». Revista española de derecho internacional, 74(1), 299-300.

125. Carrillo-Salcedo, J. A. (2000). Derechos humanos y derecho internacional. *Isegoría, 22, 69*. Sobre el tema de la soberanía estatal en el plano internacional véase: Carrillo Salcedo, J. A. (2007). «Soberanía de los estados y organización internacional: una tensión dialéctica». In *Anales de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas* (pp. 403-411). Madrid: Ministerio de Justicia.

commune gentium [126] a través del reverdecimiento de la humanización previamente iniciada en el Derecho internacional. Este es uno de los múltiples caminos disponibles para responder a las necesidades de preservación ecológicas y a las demandas socioambientales actuales, donde además deben incluirse a las generaciones presentes y futuras[127]. El reverdecimiento del derecho permite aumentar los estándares de protección ambiental y avanzar hacía un bien superior colectivo.

Los casos previamente analizados, muestran que la transformación del paradigma ambiental[128] es posible, aún frente a las instancias más conservadores del derecho internacional. Sin embargo, un foro universal como la CIJ enfrenta obstáculos para acceder a la tutela ambiental/climática directa debido a: los requisitos de legitimación activa y pasiva, a la necesidad de una disputa interestatal, así como a la naturaleza propia de los mecanismos de control de cumplimiento de los tratados multilaterales que protegen intereses ambientales de la comunidad internacional[129]. De allí la apuesta de las partes interesadas en promover por un pronunciamiento en función consultiva en lugar de uno contencioso, a través de la solicitud acordada por la Asamblea General en 2023.

Resulta idóneo destacar que para alcanzar el objetivo de contención de la amenaza climática y reducir el riesgo de su impacto sobre los derechos humanos se requiere de la introducción de una visión holística frente al entendimiento tradicional del derecho. Ciertamente, será necesario «desmitificar justificaciones seudocientíficas que los Estados desarrollan para encubrir sus acciones con el manto de la legalidad, aunque no sean sostenibles ni sean *lege artis*»[130].

Solo así sería posible comenzar a transformar de forma paulatina pero definitiva la narrativa jurídica ambiental dentro del derecho internacional, hasta consolidar un nuevo orden intersubjetivo[131] con mayor efectividad. El primer

126. Cançado-Trindade, A. A. (2020a), *Ob. cit*. 9-29

127. Sobre la protección de los derechos humanos de las futuras generaciones en el marco de las obligaciones estatales véase: Liebenberg., S; Khalfan., A.; Sepúlveda, M. *et al.* (2023) *The Maastricht Principles on the Human Rights of Future Generations*. Recuperado de: https://www.rightsoffuturegenerations.org/the-principles.

128. Oliveira, R. (2011). «La ecologización de la Corte Internacional de Justicia». *Anuario Mexicano de Derecho Internacional*, *11*,45-76.

129. Fernández Egea, R. (2021), *Ob. cit*. 112-116.

130. Peter, A. (2017). «The Rise and Decline of the International Rule of Law and the Job of Scholars». *Max Planck Institute for Comparative Public Law & International Law*. Research Paper Serie No. *(2017-16),9.* Recuperado de: https://bit.ly/3rrt7Ai *«It remains a crucial task of scholarship to debunk pseudo-justifications which states advance to cloak their actions with the mantle of lawfulness and reveal that these are not sustainable and not lege artis».*

131. Harari, Y. N. (2014). *Sapiens: A brief history of humankind*. Londres: Random House.132-133. El autor cuando trata de explicar la evolución de la humanidad identifica el fenómeno

paso para esta ambiciosa meta es adoptar una interpretación sistémica integrada entre el medio ambiente ramificado[132] a través de diversos regímenes autocontenidos[133], junto con otras disciplinas, enmarcadas por los principios *pro natura* y *pro persona*, lo cuales deber ser constantemente revitalizados por los principios cooperación y de solidaridad[134] intergeneracional.

La mejor oportunidad para alcanzar este objetivo está servida en la solicitud de opinión consultiva propuesta el 29 de marzo de 2023 por los Estados a la Asamblea General de las Naciones Unidas[135], mediante la histórica Resolución A/77/276[136], la cual permite elevar de forma acelerada la consulta sobre cambio climático a la CIJ[137]. La solicitud de opinión consultiva a diferencia de un potencial caso contencioso contra alguno de los principales emisores de gases de efecto invernadero, es una vía jurisdiccional que permite superar obstáculos procesales, particularmente aquellos vinculados a la admisibilidad de un caso.

Asimismo, esta petición abre el camino para que un tribunal con autoridad global pueda pronunciarse sobre la interpretación en materia de implementación de reglas de derecho internacional desde una perspectiva integrada, brindando claridad sobre cuál es la hoja de ruta a seguir por parte de los Estados en materia de cambio climático, derechos humanos y medioambiente.

---

intersubjetividad como una red de comunicación construida sobre conceptos objetivos y subjetivo, aceptados por la consciencia de muchos individuos, que solo puede ser alterado por el cambio simultaneo de la consciencia colectiva.

132. Véanse las conclusiones del informe presentado por el Secretario General de las Naciones Unidas en el Marco de la consolidación del un pacto global del ambiente: U.N. Secretary-General. Report on gaps in international environmental law and environment-related instruments: towards a Global Pact for the Environment: report of the Secretary-General, U.N Doc. A/73/419. (30 nov. 2018).

133. Véase en la misma línea, aunque en materia de protección a la atmosfera el reporte 2021 de Comisión de derecho internacional. ILC Rep. on the Protection of the Atmosphere (p. 39). *«The rules of international law relating to the protection of the atmosphere and other relevant rules of international law, including, inter alia, the rules of international trade and investment law, of the law of the sea and of international human rights law, should, to the extent possible, be identified, interpreted and applied in order to give rise to a single set of compatible obligations, in line with the principles of harmonization and systemic integration, and with a view to avoiding conflicts».*

134. Véase: Llano, F. (2020). «Sobre la solidaridad como concepto, valor y principio». En: A. Sánchez. & D. Sánchez., D (eds.) *Temas de teoría y filosofía del derecho en contextos de pandemia* (pp. 55-77) Madrid: Dykinson.

135. Competencia atribuida por el artículo 96 de la Carta de las Naciones Unidas.

136. Véase el Proyecto de resolución: UNGA Res A/77/L.58 (1 Mar. 2023). Request for an advisory opinion of the International Court of Justice on the obligations of States in respect of climate change.

137. Sobre un análisis temprano de la opinión consultiva véase: Bodansky, D. (2023) «Advisory opinions on climate change: Some preliminary questions». *Review of European, Comparative & International Environmental Law.* Recuperado de: https://doi.org/10.1111/reel.12497.

Cabe destacar que esta solicitud de dictamen encuentra sus antecedentes en el impacto generado por los efectos del calentamiento global en las islas de la Micronesia[138]. Precisamente, el Estado precursor de elevar los desafíos climáticos ante la CIJ fue la República de Palau, a través de su presidente el Sr. Johnson Toribiong, quien en su discurso ante el pleno de la Asamblea General de las Naciones Unidas en 2011[139], sembró la semilla para impulsar la idea de consultar a la máxima autoridad judicial global sobre las consecuencias jurídicas del cambio climático.

Cabe destacar que estos esfuerzos iniciales para presentar un caso contencioso se vieron minimizados entre otras razones políticas y jurídicas, por la necesidad de lograr una mayor aceptación y participación frente a la adopción del Acuerdo París en diciembre de 2015. Sin embargo, ante la falta de cumplimiento y efectividad de los acuerdos alcanzados, la propuesta de acción climática de las islas del pacífico fue evolucionando hasta encontrar el *momentum* para su capitalización definitiva[140], esta vez por parte de la República de Vanuatu.

La elaboración de un marco de consulta alternativa fue acompañada por una intensa campaña de promoción y defensa de derechos humanos frente al cambio climático. La iniciativa fue desplegada, en principio, en los pequeños Estados insulares[141], con el soporte instrumental e inestimable de los jóvenes estudiantes de derecho de las islas del pacífico[142], a quienes se debe reconocer como los

138. Véase: Mayer, B. (2023). «International Advisory Proceedings on Climate Change». *Mich. J. Int'l L.*, 44, 43. El autor destaca que en su momento Tuvalu se planteó exigir compensación contra Estados Unidos por las consecuencias del cambio climático, aunque no activo paso alguno para presentar el caso ante la CIJ.

139. En su momento, el Presidente de la República de Palau se encontraba apoyado por la representación de las Islas Marshall en la búsqueda de una opinión consultiva para determinar la responsabilidad internacional de los Estados por las emisiones de gases de efecto invernadero emitidos dentro de su territorio, es decir, planteó una formulación basada en la compleja cuestión de daño y responsabilidad ambiental internacional. Véase: UN News. (2011, 22 de Septiembre). «Palau seeks UN World Court opinion on damage caused by greenhouse gases». [comunicado de prensa] Recuperado de: https://news.un.org/en/story/2011/09/388202. Véase también: Beck, S. & Burleson, E. (2014). Inside the System, Outside the Box: Palau's Pursuit of Climate Justice and Security at the United Nations. Transnational Environmental Law, 3(1), 17-29. doi:10.1017/S2047102514000028.

140. Sobre un análisis temprano de la opinión consultiva véase: Bodansky, D. (2023) «Advisory opinions on climate change: Some preliminary questions». *Review of European, Comparative & International Environmental Law.* Recuperado de: https://doi.org/10.1111/reel.12497.

141. Pacific Islands Forum Secretary. Forum *comuniqué* fiftieth (50th) Pacific Islands Forum (13–16 Aug 2019). Recuperado de: https://www.forumsec.org/wp-content/uploads/2019/08/50th-Pacific-Islands-Forum-Communique.pdf

142. Desde 2019 *Pacific Island Students Fighting Climate Change* (PISFCC)/University of South Pacific, iniciaron su trabajo de defensa frente al cambio climático. Este grupo de jóvenes traspasó las fronteras de pacífico hasta convertirse en una organización regional con alcance global. Es así como a lo largo de los años generaron una estrategia de difusión

artífices de una innovadora línea de litigación estratégica climática, la activación de la vía consultiva en sustitución de la jurisdicción contenciosa ante la CIJ.

La cristalización de esta propuesta transitó por la convocatoria y movilización inicial de los Estados más vulnerables localizados en esta misma área geográfica, y se extendió más tarde hacia Australia y Nueva Zelanda. Los esfuerzos anteriores terminaron de consolidarse extraoficialmente en la COP 26[143], donde Vanuatu estableció alianzas con otras naciones especialmente castigadas por el impacto del cambio climático[144]. Posteriormente, de este conjunto de Estados surgiría el grupo de redactores[145] finales del proyecto aprobado en la Asamblea General en 2023.

Fue en la COP 27, donde se terminaron de afinar las propuestas y de asegurar la mayoría de los votos para elevar el proyecto de resolución a el pleno de la Asamblea. Aunque la iniciativa de consulta solo necesitaba la aprobación de noventa y siete (97) Estados, el trabajo de diplomacia, complementado por la campaña de defensa y promoción logró que la resolución presentada por dieciocho (18) miembros, fuese copatrocinada por ciento treinta y dos (132)[146] Estados parte de las Naciones Unidas.

Lo anterior se traduce en una resolución adoptada por consenso, es decir, apoyada por más del 80 % de los Estados miembros, con lo cual no fue requerida la votación formal para autorizar la presentación de la cuestión ante la Corte. Esto fue posible gracias a la compleja y delicada tarea de negociación tanto en las discusiones no oficiales de las COP[147] como en otros

climática sin precedente, donde convocaron y movilizaron a los líderes hasta conseguir un espacio en los foros internacionales que les permitiera promover la solicitud de opinión climática ante la CIJ. Ciertamente, en este movimiento de justicia climática participaron académicos del Norte y Sur Global, gobiernos y la sociedad civil.

143. La Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP26) celebrada en Glasgow entre 1 oct 2021 – 12 nov 2021. Véase: UNFCC. (2021) «Vanuatu - High-level Segment Statement COP 26». Recuperado de: https://unfccc.int/documents/310886.

144. Concretamente con los Estados de Antigua y Barbuda, Bangladesh, Costa Rica, Estados Federados de Micronesia, Marruecos, Mozambique, Nueva Zelanda, Portugal, Samoa, Sierra Leona, Singapur, Uganda, Vanuatu, y Vietnam.

145. A este grupo se le sumaria Alemania.

146. Vanuatu ICJ Iniciative. (2023, 23 de marzo) ICJ Resolution. [comunicado de prensa] Recuperado de: https://www.vanuatuicj.com/resolution

147. De hecho, fue la falta de avances significativos en las Conferencias de Estados Parte de la CMNUCC la que propició la búsqueda de una salida alternativa, ante lo cual surgió la activación paralela de dos vías judiciales en función consultiva, la primera: cristalizaría a través de la solicitud presentada el 12 de diciembre de 2022 ante el Tribunal Internacional de Derecho del Mar (ITLOS) por parte de la Comisión de Pequeños Estados Insulares sobre Cambio Climático y Derecho Internacional (COSIS) conformada por Vanuatu, Antigua y Barbuda y Tuvalu. La segunda: La solicitud de opinión consultiva vía Asamblea General de la ONU ante la CIJ. Sobre el procedimiento ante ITLOS véase: Feria-Tinta, M. (2023) «On the request for an advisory opinion on climate change under UNCLOS before the

foros internacionales, así como el uso de diplomacia tradicional en el ámbito regional y bilateral, todo esto unido a la puesta en funcionamiento de diversas formas efectivas de diplomacia blanda y paradiplomacia.

De esta manera, se logró delimitar el contorno de las preguntas objeto de clarificación jurídica. Concretamente, los Estados patrocinadores de la consulta buscaron plantear cuestiones que no generasen mayor crispación política, pero que condujesen a la protección directa de intereses comunes de la comunidad internacional, hasta ahora solo considerados de forma subyacente por el régimen del clima[148]. Concretamente se hace referencia a la profunda conexión del cambio climático y la vulneración de los derechos humanos tanto de las generaciones presentes como de las futuras.

Desde el punto de vista sustantivo, la consulta jurídica[149] planteada ante Corte se concentra en dos preguntas generales. La primera, sobre las obligaciones de los Estados en virtud del derecho internacional de garantizar la protección del sistema climático, el medio ambiente con respecto a otros Estados, a las generaciones presente y futuras[150]. Mientras, que la segunda pregunta, a su vez subdividida en dos apartados especiales[151], se dirige a clarificar cuáles son las consecuencias jurídicas de esas obligaciones estatales: i) sobre otros Estados particularmente vulnerables; y, ii) el efecto de esas obligaciones sobre el individuo, colectivos, generaciones presentes y futuras afectados por el impacto del cambio climático.

International Tribunal for the Law of the Sea». *Journal of International Dispute Settlement*. Recuperado de: https://doi.org/10.1093/jnlids/idad012

148. Artículo 3 CMNUCC, el preámbulo del Acuerdo de París y artículo 2, respectivamente.

149. Artículo 96 de la Carta de Naciones Unidas. Véase también el artículo 65 del Estatuto de la CIJ, así como la jurisprudencia sobre el alcance de su competencia consultiva sobre cualquier materia, siempre y cuando sea jurídica Véase: Conditions of Admission of a State to Membership in the United Nations (Article 4 of the Charter), Advisory Opinion, 1948, (28 May) 61.; Certain Expenses of the United Nations (Article 17, paragraph 2, of the Charter), Advisory Opinion, 1962 ICJ. (July 20). Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons, Advisory Opinion, 1996. 244, (July 8). 234 §13; Legal Consequences of the Construction of a Wall in the Occupied Palestinian Territory, Advisory Opinion, 2004. (9 July) 155 §41.; Accordance with International Law of the Unilateral Declaration of Independence in Respect of Kosovo, Advisory Opinion, 2010 (22 July) 415 §26-27.

150. UNGA Res A/77/L.58 (1 Mar. 2023) a. ¿Cuáles son las obligaciones de los Estados en virtud del derecho internacional de garantizar la protección del sistema climático y otras partes del medio ambiente frente emisiones antropogénicas de gases de efecto invernadero para los Estados y para las generaciones presente y futuras?

151. UNGA Res A/77/L.58 (1 Mar. 2023) b. ¿Cuáles son las consecuencias jurídicas de estas obligaciones para los Estados en los que ellos, por sus actos y omisiones, han causado un daño significativo al clima sistema y otras partes del medio ambiente, con respecto a: i) Estados, incluidos, en particular, los pequeños Estados insulares en desarrollo, que por sus circunstancias geográficas y nivel de desarrollo, son heridos o especialmente afectados por o son particularmente vulnerables a la efectos adversos del cambio climático? (ii) Pueblos e individuos de las generaciones presentes y futuras afectados por los efectos adversos del cambio climático?

Las preguntas presentadas a la Corte Internacional de Justicia[152] se mueven entre esferas profundamente conectadas del derecho internacional. En este sentido, debe destacarse que la solicitud de opinión consultiva incluye los instrumentos normativos que proporcionan la base para la protección de derechos específicos como una suerte de orientación sobre las normas a las cuales debe remitirse el tribunal[153] a la hora de considerar el alcance del dictamen.

En este punto, resulta oportuno destacar dos aspectos del preámbulo de la Resolución 77/276. El primero, es que toma en consideración los hallazgos de la ciencia y el consenso internacional sobre los informes del Panel Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático. El segundo, deja de manifiesto el incumplimiento de acuerdos alcanzados en el marco del órgano político del régimen del clima, evidenciado una vez más el limitado alcance del sistema jurídico especial para hacer frente a un problema global que continúa permeando todos los niveles de la sociedad con consecuencias devastadoras para el medio ambiente y para la vida humana tanto a corto como largo plazo.

Asimismo, la resolución de la Asamblea General acierta al incluir los argumentos jurídicos centrales que han sido aplicados en el razonamiento judicial de las litigaciones climáticas nacionales adjudicadas favorablemente en los últimos años[154]. También, debe destacarse que la resolución incorpora la protección de un grupo especialmente vulnerable, el cual ha despertado interés global por el impacto desproporcional que recibe frente a las consecuencias del cambio climático peligroso, concretamente se refiere a la salvaguarda de derechos de los niños, niñas, adolescentes y las futuras generaciones[155].

---

152. Sobre la OC véase: Fernández Egea. R. M. (2023). «La función consultiva de la CIJ al servicio de la lucha contra el cambio climático», en: Torrecuadrada García-Lozano, S. y Rubio Fernández, E. (eds.), *La contribución de la Corte Internacional de Justicia al imperio del Derecho Internacional en tiempos convulsos: aproximaciones críticas*, Aranzadi. 209-237

153. Para ello, la Asamblea General ha pedido que se tenga consideración la Carta de las Naciones Unidas, la Declaración de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la CMNUCC, el Acuerdo de París, la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, el Convenio de Viena para la Protección de la Capa de Ozono, el Protocolo de Montreal relativo a las Sustancias que Agotan la Capa de Ozono, el Convenio sobre la Diversidad Biológica y la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación en los Países Afectados por Sequía Grave o Desertificación, en Particular en África, el deber de diligencia debida, el principio de prevención y el deber de proteger y conservar el medio marino.

154. Véanse: Urgenda Foundation v. State of the Netherlands; Futuras Generaciones v. Presidencia de la República de Colombia; Leghari v. Federation of Pakistan; caso Sacchi v. Argentina (este último desestimado por cuestiones de admisibilidad).

155. Sin duda un tema en plena expansión, el cual requiere de tratamiento en el ámbito jurisdiccional internacional. Véase: Nolan, A., Skelton, A. & Ozah, K. (2023). «Child Rights Strategic Litigation: Key Principles for Climate Justice Litigation». Recuperado de: https://ssrn.com/abstract=4486226

Ahora bien, debe recordase que la opinión consultiva en discusión no es más que un eslabón, aunque importante, de una impresionante movilización sobre la búsqueda de justicia climática global. Tan solo entre 2022 y 2023, el mundo ha sido testigo de la activación de los tribunales para abordar la inactividad climática de los Estados, a través de una serie de peticiones estratégicas enfocadas en la promoción del desarrollo del derecho internacional[156], donde se promueve la integración de regímenes especializados como una vía coordinada para sumar a la búsqueda de soluciones[157].

Ahora bien, con respecto al papel que jugará un eventual pronunciamiento de la CIJ frente al cambio climático aparece la expectación, pues a pesar de la evidencia del reverdecimiento y humanización progresiva del derecho internacional en las decisiones de la CIJ, no puede obviarse que este tribunal puede llegar a aplicar una aproximación conservadora capaz de impactar negativamente en los avances conquistados desde otros mecanismos de protección de derechos humanos.

Ante estas perspectivas, debe tenerse en consideración al menos dos cuestiones fundamentales. Primero, ha de recordarse que la CIJ está lejos de establecer a una solución única a la problemática climática global, esto en caso de emitir el dictamen sobre la consulta formulada, pues a la luz de las facultades conferida por su estatuto, la CIJ puede determinar con total libertad si se pronuncia o no sobre el asunto. Segundo, la CIJ tiene la potestad de dibujar los contornos sobre los cuales se pronunciaría, por lo tanto, puede elegir sobre cuales áreas concretas emitirá el dictamen. Ante esta realidad jurídica, afloran las dudas de si el tribunal será capaz de abordar los más controvertidos e interesantes aspectos intrínsecos de la consulta.

A pesar de lo dicho, el panorama es prometedor, pues incluso ante un pronunciamiento relativamente restringido, la Corte tiene una incuestionable oportunidad entre las manos, pues sería la primera vez en la cual el tribunal entraría a considerar el objeto y propósito de un tratado de derechos humanos[158] en un

156. Sobre el efecto de la función consultiva véase: Lauterpacht, H. (1958). *The development of international law by the International Court*. Cambridge: Cambridge University Press. 156.

157. Se han solicitado en orden cronológico las opiniones consultivas ante: ITLOS (12 de diciembre de 2022), la Corte Interamericana de Derechos Humanos (12 de diciembre de 2022), y se espera que en los próximos meses pueda materializarse una cuarta solicitud ante la Corte Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos. Sobre la Corte Africana véase: ESC-Net. (10 Nov. 2022) «Network members exchange on access to international justice for climate- related human rights». En: https://bit.ly/3r2cixX. Igualmente, debe mencionarse el Proyecto de Estudio de la Comisión Africana sobre el impacto del cambio climático en los derechos de las personas y pueblos en África, abierto a consulta pública durante el 77° período de sesiones ordinario de la Comisión Africana celebrado en Arusha, Tanzania, del 20 de octubre al 9 de noviembre de 2023. Recuperado de: https://bit.ly/3u4ACRq

158. Aunque lo ha hecho antes en la opinión consultiva sobre las Consecuencias Jurídicas de la construcción del Muro y en otros casos de aplicación de tratados sobre derecho internacional humanitario y derechos humanos. Véase el capítulo de Espósito, C. (2023) «The

asunto ambiental con impacto global. El dictamen le permitiría a la Corte incorporar como voz autorizada universal, los avances desarrollados por las Cortes Regionales de derechos humanos[159].

Aunque la CIJ no es un tribunal especializado en derechos humanos[160], a lo largo de su historia ha tratado el tema de manera incidental, por lo cual se ha ocupado su protección[161]. En consecuencia, la Corte pudiese iluminar el camino y delimitar los estándares mínimos exigibles en las obligaciones internacionales de los Estados frente al medio ambiente y concretamente ante el cambio climático peligroso.

Sin lugar a duda, la oportunidad es propicia para realizar una interpretación armónica e integrada del derecho internacional que permita a todos los Estados del mundo tener una visión clara sobre el estándar de cumplimiento de sus obligaciones de diligencia debida con relación al cambio climático y su impacto sobre los derechos humanos y medioambiente. Hasta ahora, parece evidente la invocación de una interpretación dinámica de los instrumentos climáticos con una base sólida de derechos humanos a través de la aplicación de la Convención de Viena sobre derecho de los Tratados en sus artículos 31 al 33.

Debe recordarse que las obligaciones de los Estados en materias de cambio climático existen, han sido identificadas a lo largo de la última década tanto por los Relatores Especiales de las Naciones Unidas sobre Derechos Humanos, Medioambiente y Cambio Climático, así como también por algunos mecanismos de protección de tratados del sistema universal, por órganos cuasijurisdiccionales regionales como la Comisión Interamericana.

International Court of Justice and Human Rights». En: Espósito, C. & Parlett, K. (Eds.), *The Cambridge Companion to the International Court of Justice* (pp. 486-528).

159. Sobre vulneración de derechos humanos en contextos ambientales adversos, particularmente la Corte Interamericana y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, este último con casos contenciosos pendientes de decisión: Duarte Agostinho and Others v. Portugal and 32 Other States1 (no. 39371/20); Verein KlimaSeniorinnen Schweiz and Others v. Switzerland (application no. 53600/20); Carême v. France (no. 7189/21); Müllner v. Austria (no. 18859/21); The Norwegian Grandparents' Climate Campaign and Others v. Norway (no. 19026/21); Soubeste and four other applications v. Austria and 11 Other States4 (nos. 31925/22, 31932/22, 31938/22, 31943/22 and 31947/22); Engels v. Germany (no. 46906/22).

160. En contraste con el Tribunal Europeo de derechos Humanos, la Corte Interamericana de derechos Humanos y la Corte Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos.

161. Así lo registra: Espósito, C. (2023) «The International Court of Justice and Human Rights». En: Espósito, C. & Parlett, K. (Eds.), *The Cambridge Companion to the International Court of Justice* (pp. 486-528) Cambridge University Press. En su análisis el autor señala que la CIJ ha encontrado una práctica interpretativa adecuada en materia de derechos humanos, donde se muestra un tribunal capaz de aplicar principios y métodos asociados con la interpretación de los derechos humanos, para ello da cuenta de los casos relativos a la aplicación de la Convención para la Prevenir y Castigar el Crimen de Genocidio, concretamente en los asuntos Ahmadou Sadio Diallo, así como el de las Actividades Armadas en el Congo. De allí que Espósito identifica en la Corte una *«potential relevant voice in the conversation on human rights and the narrative on the humanization of international law».*

Por otra parte, no pueden perderse de vista los pilares ambientales sentados por pronunciamientos de avanzada en contexto ambientales adversos en las tres cortes regionales de derechos humanos[162]. Los anteriores pronunciamientos judiciales han permitido aceleración y consolidación de una *opinio iuris* sobre las consecuencias jurídicas del impacto de daños ambientales significativos en el ser humano[163], al menos a nivel regional. Estos aportes regionales deberían abonar el terreno para consolidar la protección del individuo y del ambiente en su conjunto en un dictamen de la CIJ.

Así las cosas, a la CIJ se le ha encomendado la tarea de pronunciarse sobre el valor jurídico de las obligaciones climáticas y las consecuencias de su incumplimiento[164]. Es necesario mantener presente que, si bien los dictámenes de la Corte no son vinculantes, estos permiten el desarrollo del derecho[165] mediante una interpretación judicial autorizada sobre su aplicabilidad[166], así como sobre el alcance de las normas de mitigación y derechos humanos desde una perspectiva que facilite zanjar el evidente problema de la fragmentación del derecho internacional[167].

Este libro se inclina por una perspectiva de progreso ambiental y climático en el seno de la Corte, aunque no puede perderse de vista la confirmación más reciente sobre como este tribunal puede llegar a evadir cuestiones espinosas, cuando prefiere que sean los propios Estados quienes resuelvan el asunto. Concretamente, en este punto se hace referencia a la decisión de

---

162. Véanse, por ejemplo: Bursa Barosu Başkanlığı *et al* v. Turkey, No. 25680/05. ECHR 2018.; Cordella *et al* v. Italy, No. 54414/13 y 54264/15, ECHR 2019.; CtIDH. OC/ 23/17 2.; CtIDH. Escaleras Mejía y otros v. Honduras. Sentencia (Ser. C) No.361. (26 Sept. 2018).; CtIDH. Asociación Lhaka Honhat v. Argentina, Fondo, Reparaciones y Costas (Ser. C) No 400. § (6 Feb. 2020).; African Commission on Human and Peoples' Rights. The Social Economic Rights Action Center & The Center for Economics and Social Rights/ Nigeria (Ogoni People) v. Nigeria. 155/96 (2001).; African Commission on Human and Peoples' Rights. Centre for Minority Rights Development (Kenya) and Minority Rights Group International on behalf of Endorois Welfare Council v. Kenya, 276/2003.; African Court on Human and Peoples' Rights. African Commission on Human and Peoples' Rights (Ogiek people) v. Republic of Kenya (2017).

163. Tigre, M.A, Urzola, N. & Goodman, A. (2023) «Climate litigation in Latin America: is the region quietly leading a revolution?» *Journal of Human Rights and the Environment*,14 (1), 2023, pp.67-93.

164. Savaresi., A., Kuovesi., K. & Van Asselt., H. (17 Dic 2021). «Beyond COP26: Time for an Advisory Opinion on Climate Change?» *Ejil:Talk!.* Recuperado de: https://www.ejiltalk.org/beyond-cop26-time-for-an-advisory-opinion-on-climate-change/

165. Bodansky, D. (2023). «Advisory opinions on climate change: Some preliminary questions». *Review of European, Comparative & International Environmental Law*. Recuperado de: https://doi.org/10.1111/reel.12497.

166. Mayer, B. (2023). *Ob. cit*.

167. Las expectativas giran sobre una interpretación integrada y sistémica del derecho internacional. Sin embargo, no puede perderse de vista que siempre existirá el riesgo de fragmentación frente al progreso de cuatro consultas en paralelo ante diferentes órganos jurisdiccionales.

2022 sobre el Estatus y Uso de las Aguas del Silala (Chile v. Bolivia), donde la CIJ emitió un pronunciamiento ambiguo que genera incertidumbre en el derecho internacional al no resolver la disputa planteada[168].

Por último, es imperativo considerar que el desafío del cambio climático se plantea en la actualidad en términos morales[169], la situación planetaria está respaldada por la ciencia[170], mientras que la búsqueda de soluciones recibe cada día más apoyo de la opinión pública, el activismo climático efectivo crece a través de la presión generada por los grupos de interés[171], por lo cual se espera que el derecho evolucione de la mano con una interpretación suficiente de la CIJ.

La modulación de fenómenos ambientales a través de los Derechos Humanos

Aunque el tratamiento de los fenómenos ambientales a través de los derechos humanos no es nuevo[172], este campo representa una oportunidad extraordinaria para dar respuesta a fenómenos complejos[173] que afectan

168. Véase en este sentido la declaración de la Jueza Charlesworth: Dispute over the Status and Use of the Waters of the Silala (Chile v. Bol.), Judgment, 2022. ICJ. (December 2022)., (Declaration of Judge Charlesworth). Véase también la ambigüedad y controversia generada por la: Advisory Opinion, 1962 ICJ. (July 20). Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons, Advisory Opinion, 1996. 244, (July 8).

169. Sands, P. (2017). «Climate change and the rule of law: Adjudicating the future in international law». In *The Pursuit of a Brave New World in International Law* (pp. 114-134). Brill Nijhoff. Sobre el cambio de la opinión pública y su impacto el autor incluye la encíclica del Papa Francisco Laudato Si. Sobre el cuidado de la creación véase: Francisco. (2015) «Carta encíclica *"Laudato si"* del Santo Padre Francisco sobre el cuidado de la casa común». Pará. 23-26. Recuperado de: https://www.vatican.va

170. IPCC (2022). «Summary for Policymakers». En: H. Portner, D.C. Roberts *et al* (eds.). *Climate Change 2022: impacts, adaptations and vulnerability.* Recuperado de: https://bit.ly/3xAyq3V.

171. Rogers, N. (2023). «Intergenerational Climate Justice in the Courtroom». *Australian Humanities Review*, 1-8. Recuperado de: doi: 10.56449/14243389

172. Savaresi, A. & Setzer, J. (2021), *Ob. cit*. «human rights remedies often provide the only avenue for affected individuals and groups to seek relief and protect rights, as well as the value of real estate and/or the amenity of the landscape».

173. Brunnée, J. & Toope, S. (2010). Climate change: Building a global legal regime. En: J. Brunnée,. & S., Toope. *Legitimacy and Legality in International Law: An Interactional Account* (pp. 126-219). Cambridge: Cambridge University Press. Véase también: Broude, T. (2019) «Complexity rules (or ruling complexity) comment on Jutta Brunnée». En: Krieger, H., Véase: Brunnée, J. (2019) «The Rule of International (Environmental) Law and Complex Problems» En: Krieger, H., Nolte, G. & Zimmermann, A. (Eds.), *The International Rule of Law: Rise or Decline?* (p. 240). Oxford: Oxford University Press. Sobre el impacto de los cuerpos religiosos sobre el estado de Derecho véase: Garcia-Oliva, J. & Hall, H. (2017). «The rule of law and the religious character of the Constitution and the wider legal framework». En *Religion, Law and the Constitution* (pp. 156-224). Londres: Routledge.

directamente al individuo y a los ecosistemas que hacen posible el balance del sistema climático de la Tierra.

La práctica de los tribunales regionales de derechos humanos ha demostrado la profunda conexión desarrollada con el medio ambiente a través del marco de protección humanista[174]. La protección ambiental a través del cristal de los derechos humanos permite asegurar la vinculación obligatoria de los Estados a esas normas, el seguimiento y supervisión de los derechos humanos, así como el acceso de los individuos a estas Cortes regionales en caso de incumplimiento del Estado[175]. Por lo cual resulta difícil concebir el tratamiento del impacto del cambio climático desde una perspectiva disociada del aseguramiento de las garantías de protección de los derechos humanos.

Para teorizar esta relación se han planteado tres aproximaciones principales. La primera, el medio ambiente como un requisito para el goce y realización de otros derechos humanos[176]. La segunda, como una herramienta útil para abordar los complejos problemas de derecho adjetivo y sustantivo, que surgen al intentar aplicar el derecho ambiental de forma aislada[177]. Tercero, aquella que busca identificar tanto la preservación del medio vital y de los derechos humanos como parte de la conceptualización de desarrollo[178] sostenible[179].

La idea de protección conjunta puede plantearse desde el enfoque sistémico del derecho internacional, tema extensamente estudiando por la

---

174. En lo que respecta al Sistema Interamericano véase: CtIDH. (2019) «Cuadernillo de jurisprudencia de la Corte Interamericana Nro. 22: Derechos económicos, sociales culturales y ambientales». Recuperado de: https://bit.ly/3FghW1n. La sección 3.4 del cuadernillo recoge una extensa jurisprudencia donde se protege el medio ambiento a través de la protección de otros derechos humanos en el marco de su interdependencia, progresividad e indivisibilidad.

175. Fernández Egea, R. M. (2015). «La protección del medio ambiente por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos: últimos avances jurisprudenciales». *Revista Jurídica Universidad Autónoma de Madrid,* 31 (2015-I), 163-204. Recuperado de: https://bit.ly/37fitVO.

176. Boyle, A. (2018), *Ob. cit*. 776.

177. *Loc. cit.* A modo de ilustrar el planteamiento del autor, resulta conveniente traer a colación un ejemplo práctico en el Sistema Interamericano, el asunto de demarcación de territorios indígenas y de protección de las garantías judiciales de los defensores ambientales, véase: CtIDH. Nogueira de Carvalho v. Brasil. Excepciones Preliminares y Fondo (Ser. C) No.161 §74- 77. (28 nov. 2006).

178. Aunque como señala: Llano-Alonso, F. (2013). «El derecho al desarrollo en el sistema de derechos humanos: entre los derechos de la personalidad y la actividad del Estado». *Anuario de filosofía del derecho*, (XXIX). 367-395. «…el derecho al desarrollo también adolece de una manifiesta falta de concreción conceptual, lo cual no sólo compromete la adecuada fundamentación, sino también la eficaz puesta en práctica de un derecho con una dimensión ético-jurídica tan universal».

179. Boyle, A. (2018), *Ob. cit*. 776.

doctrina[180]. De hecho, las conclusiones de la CDI[181] sobre la fragmentación, permiten identificar dos relaciones básicas al abordar los procesos de integración entre diferentes regímenes. La primera, una relación de interpretación, a partir de la cual las normas de una parcela asisten a la clarificación y aplicación de la otra en una relación conjunta[182] y bidireccional. La segunda, donde pueden surgir relaciones de conflicto, supuesto que se da cuando existen dos normas válidas y aplicables, pero incompatibles para alcanzar una decisión[183].

Quienes se inclinan por aplicar una integración interpretativa al problema de la fragmentación[184], encuentran una oportunidad para abordar fenómenos en pleno desarrollo, como lo sería el cambio climático. Precisamente, en este libro se apuesta por la interpretación sistémica de los instrumentos normativos pertenecientes a varios regímenes especiales, aunque principalmente centrados en el marco ambiental y del derecho internacional de los derechos humanos. Ambas áreas surgieron en su momento como expresión positiva y sana de la expansión del derecho internacional a través de la regulación de intereses generales, especializaciones y normas autónomas emergentes[185].

Lo anterior conduce a interpretar las normas de derecho ambiental, destacando las relativas al cambio climático, desde una visión integradora directamente entrelazadas con otros regímenes autocontenidos[186] y con normas

180. Véase : Dupuy, P. M. (1998). «The danger of fragmentation or unification of the international legal system and the International Court of Justice». *NYU Journal of International Law & Politics*, *31*, 791-807; Kingsbury, B. (1998). «Foreword: Is the proliferation of international courts and tribunals a systemic problem». *NYU Journal of International Law & Politics, 31*, 679-695; Koskenniemi, M. & Leino, P. (2002). «Fragmentation of international law? Postmodern anxieties». *Leiden Journal of International Law*, *15*(3), 553-579; Simma, B. (2003). «Fragmentation in a positive light». *Michigan. Journal of International Law*, *25*, 845-848. Hafner, G. (2003). «Pros and cons ensuing from fragmentation of international law». *Michigan. Journal of International Law*, 25, 849-863.

181. Escobar-Hernández, C. (2015). «Naciones Unidas y el impulso del Derecho Internacional: la labor de la Comisión de Derecho Internacional». En: Xavier Pons Rafols (Dir). *Las Naciones Unidas desde España: 70 aniversario de las Naciones Unidas: 60 aniversario del ingreso de España en las Naciones Unidas* (pp. 391-410). Asociación para las Naciones Unidas en España.

182. Int'l Law Comm'n Rep. on the Fragmentation of International Law: Difficulties Arising from the Diversification and Expansion of International Law of its Fifty-eighth Session, U.N. Doc. A/CN.4/L.682 at 178 (April 13, 2006). [ILC Fragmentation Report]. Recuperado de: https://bit.ly/3iu3cTo.

183. *Loc. cit.*

184. Wewerinke-Singh., M. (2018), *Ob. cit*. 72-78.

185. Siguiendo la conclusión del reporte del grupo de estudio liderado por el Sr. Martti Koskenniemmi. ILC Fragmentation Report, *Ob. cit*. 176 § 242-246.

186. Simma, B. & Pulkowski, D. (2006). «Of planets and the universe: self-contained regimes in international law». *European Journal of International Law*, 17(3), 492. *«Social systems cannot exist in splendid isolation from their environment […] Without the 'omnipresence*

especiales relativamente autónomas, que permiten robustecer un régimen caracterizado por compromisos blandos, a la par de brindar la oportunidad de minimizar las posibles relaciones de conflictos entre las normas.

Aunque no se desconoce la potencialidad de conflictos normativos y riesgos de incompatibilidad entre normas, principios y sistemas, a los cuales también aludió la CDI en su reporte. Sin embargo, en esta obra se evalúa la potencialidad de la relación entre dos o más regímenes especiales en un marco de funcionalidad. Concretamente, el derecho ambiental internacional como régimen autocontenido[187], posee una extensa riqueza normativa188, aunque fragmentada[189], caracterizada por normas en su mayoría de derecho indicativo, por lo cual sus disposiciones suelen ser ambiguas y no vinculantes[190].

Como se ha expuesto a lo largo de estas líneas, (salvo casos concretos), en la práctica el derecho ambiental por sí solo[191], no alcanza a producir efectos que obliguen al cumplimiento de los estándares de protección necesarios para asegurar la subsistencia de los componentes de la naturaleza que

of "general law" a special legal subsystem may, as Georges Abi-Saab put it, mutate into 'a legal Frankenstein' that 'no longer partakes in the same basis of legitimacy and formal standards of pertinence».

187. Klein, E. (2008). «Self-Contained Regime». En: R. Wölfrum (ed.) *The Max Planck Encyclopedia of International Law*. Oxford: Oxford University Press. Recuperado de: https://bit.ly/3umFNsB. *«Accordingly, a regime (Regime Theory) could be considered to be self-contained, if it comprises not only rules that regulate a particular field or factual relations laying down the rights and duties of the actors within the regime (primary rules), but also a set of rules that provide for means and mechanisms to enforce compliance, to settle disputes (Peaceful Settlement of International Disputes; Judicial Settlement of International Disputes), to modify or amend the undertakings (Treaties, Amendment and Revision), and to react to breaches (secondary rules), with the intention to replace and through this to exclude the application of general international law (General International Law [Principles, Rules, and Standards]), at least to a certain extent».*

188. Una visión general sobre el número actualizado de acuerdos ambientales suscritos hasta el 2020, indica que existen más de 1300 tratados multilaterales ambientales, más de 2200 acuerdos bilaterales ambientales, y más de 90.000 acciones de membresía catalogadas como otra categoría de acuerdos ambientales. Véase: Mitchell, R. B., (2002-2022). «International Environmental Agreements», *Database Project (Version 2020.1).* University of Oregon. Recuperado el 30 de noviembre de 2023 de: https://bit.ly/3K5Ldie.

189. Morgan, J. C. (2016). «Fragmentation of International Environmental Law and the Synergy». *Vermont Journal of Environmental Law*, 18(1), 135. «The outcome of the international agreement method is the proliferation of Multilaterals Environment Agreements, which inevitably creates fragmented regimes».

190. Voigt, C. (2020). «ANZSIL conference keynote 2019: climate change, the critical decade and the rule of law». En D. Greig, D. Rothwell, I. *et al* (eds.) *The Australian Year Book of International Law*. (50-62). Leiden: Brill | Nijhoff.

191. Simma, B. & Pulkowski, D. (2006), *Ob. cit*. 492. «…legal subsystems coexisting in isolation from the remaining bulk of international law are inconceivable. There will always be some degree of interaction, at least at the level of interpretation».

aspira salvaguardar a nivel global. Solo a título ilustrativo debe considerarse la condición actual del océano, los bosques, las selvas, los humedales, los glaciares, la biodiversidad, la conservación de especies, entre otra extensa lista de elementos.

Tradicionalmente, las obligaciones ambientales consagradas en instrumentos multilaterales o principios orientadores quedan solapados por la aplicación preferentes de otros que terminan transformando el contenido de estas disposiciones en medidas con una eficacia limitada frente a emergencias ambientales. Las metas de estabilización del clima de la Tierra son un reflejo de las limitaciones que plantea la aproximación parcelada del derecho frente a un problema multicapas.

De allí que, sea poco asertivo considerar al derecho ambiental y en particular al régimen del clima como áreas aisladas de otros sectores del derecho, la articulación es necesaria para dotar de soluciones a una problemática de escala global[192]. Por el contrario, es natural observar numerosas dinámicas dentro de las diferentes parcelas del derecho internacional que favorecen a la consecución de las metas de mitigación de los efectos del cambio climático[193].

Ahora bien, es necesario que estas interacciones sean respaldadas por diversas manifestaciones de diplomacia, entre ella diplomacia de ciudades[194], así como por estrategias de cooperación que permitan potenciar acciones conjuntas e interacciones normativa desde múltiples flancos, tanto a nivel sustantivo, adjetivo[195] e institucional[196].

A los fines de ilustrar el planteamiento anterior, debe mencionarse que el cambio climático como objeto de estudio dentro de este sistema general del derecho está profundamente conectado por su impacto[197] sobre los

192. Morgan, J. C. (2016), *Ob. cit*. 135. «International environmental law notoriously treats issues in isolation and lacks the capacity to deal with the constant push and pull between humans and nature».

193. Van Asselt, H., Sindico, F. & *et. al.* (2008). «Global climate change and the fragmentation of international law». *Law & Policy*, *30*(4), 423-449.

194. Sobre la manifestación de la diplomacia de cuidades en la gestión de retos globales véase: Jiménez-García, F. (2023). «La localización en red de la comunidad internacional. El future de las ciudades ante los desafíos globales del derecho internacional». *Anuario Español de Derecho Internacional*, *39*, 209.

195. Sobre salidas prácticas a cuestiones de derecho adjetivo y sustantivo en materia de derecho ambiental véase: Brunnée, J. (2020), *Ob. cit*. 13-212.

196. Van Asselt, H., Sindico, F. & Mehling, M. A. (2008). «Global climate change and the fragmentation of international law». *Law & Policy*, *30*(4), 423-449. Los autores concentran su estudio en la interacción entre el régimen del clima, el de biodiversidad y del sistema multilateral del comercio.

197. Sobre la vulnerabilidad y exposición del riesgo sobre ecosistemas y personas, así como sobre la identificación de riesgos tanto a mediano como a largo plazo, sumado al complejo

derechos humanos y normas que regulan: la gobernanza de la salud[198], el derecho de daños[199], el derecho del mar[200], el derecho financiero[201], migraciones[202], biodiversidad, así como otros regímenes especiales[203]. Todas estas áreas encuentran el mismo punto de convergencia, el hombre, como sujeto de protección y destinatario final de la salvaguarda que genera el Estado al cumplir en esas normas[204].

De allí que, el régimen internacional de los derechos humanos representa el crisol, para integrar estos regímenes normativos con el objetivo de crear un frente jurídico unificado e implementable contra el cambio climático peligroso. Además, la posibilidad de utilizar el cumplimiento coercitivo mejora la implementación de los derechos humanos[205], brinda mayor visibilidad a la problemática, aunado a que puede promover la participación de los grupos

efecto en cascada del cambio climático véase: IPCC (2022), *Ob. cit*. 14-20. Con relación a su antecedente inmediato véase: IPCC. (2021). «Summary for Policymakers». En: Masson-Delmotte, V., P. Zhai, A *et al* (eds.) *Climate Change 2021: The Physical Science Basis. Contribution of Working Group I to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change* (p.15). Recuperado de: https://bit.ly/3lrsMt5. «This SPM provides a high-level summary of the understanding of the current state of the climate, including how it is changing and the role of human influence, the state of knowledge about possible climate futures, climate information relevant to regions and sectors, and limiting human-induced climate change».

198. Giménez. I. (2021a) Ep*idemics and climate change in international law*. En: S. Murase & S. Zhou (dir.) *Epidemics and International Law*. (pp. 411-33). Leiden: Brill | Nijhoff.

199. Amini, A., Abedi, M., Nesari, E., *et al.* (2023). The Paris Agreement's approach toward climate change loss and damage. *World Affairs*, *186*(1), 46-80. Véase también: Wyns, A. (2023). COP27 establishes loss and damage fund to respond to human cost of climate change. *The Lancet Planetary Health*, *7*(1), e21-e22.

200. Jarvis, R. M. & Young, T. (2023). «Pressing questions for science, policy, and governance in the high seas». *Environmental Science & Policy*, *139*, 177-184.

201. Kouwenberg, R. & Zheng, C. (2023). «A Review of the Global Climate Finance Literature». *Sustainability*, *15*(2), 1255. Recuperado de: https://doi.org/10.3390/su15021255

202. Pentinat, S. B. (2023). «Las migraciones climáticas: viviendo en un limbo jurídico». *Revista Catalana de Dret Ambiental*, *14*(1).

203. Véase el programa de: Centre for Studies and Research. (2022) *The Hague Academy of International Law*. Recuperado de: https://bit.ly/3LFT3j1. La Academia de la Haya propuso abordar el tema del cambio climático y su interconexión con otras áreas del derecho debido a su importancia creciente y también como una forma de poner a prueba el derecho internacional frente a este desafío.

204. En líneas generales da cuenta de una perspectiva jurídica antropocéntrica, con fuertes matices androcéntricos si se analiza la cuestión desde la dimensión práctica de aplicación de normas sobre protección del medioambiente.

205. Charlesworth, H. (2017). «A regulatory perspective on the international human rights system». En: P. Drahos (ed.) *Regulatory Theory: Foundations and Applications*, (p. 360). *«A typical prescription for improving the implementation of human rights principles relies on coerced rule compliance. An example is the sporadic campaign for a global human rights court to implement the human rights treaties when national systems fail to do so».*

afectados en los mecanismos de reparación y por ende expande el espectro de protección de cara a violaciones futuras[206].

Es posible afirmar que en la actualidad existe consenso generalizado en cuanto a aceptar que las obligaciones ambientales están respaldadas por los derechos humanos[207]. En el caso de los sistemas de derechos humanos[208], es posible encontrar una relación armoniosa de interpretación[209] integrada con otras áreas para exigir un cumplimiento[210] más eficientes de fórmulas ambientales[211], la cuales pueden ser trasladables a estrategias más uniformes de mitigación. Sin embargo, esta postura se ha criticado señalando que responde a una errónea asimilación del principio de interpretación sistémica del Derecho internacional[212].

En materia de interpretación se requiere del aporte brindado por medios suplementarios para esclarecer disposiciones ambiguas u obscuras. De allí que el intérprete se enfrenta al desafío de aplicar principios que recaen en la

206. A favor de la aplicación de una base de derechos humanos para abordar el cambio climático: Wewerinke-Singh., M. (2018) *Ob. cit*. 151-155.; Boyle, A. (2018) *Ob. cit*. 765-773.; Knox., J. (2009), *Ob. cit*. 163-218. Contra: Mayer, B. (2021a) Climate change mitigation as an obligation under human rights treaties? *American Journal of International Law,* 115 (3) 409-451.

207. Burger, M. & Wentz, J. (2019). Climate change and human rights. M. Faure (ed.) *Elgar Encyclopedia of Environmental Law* (pp. 198-212). Cheltenham: Edward Elgar Publishing.

208. Siguiendo la definición propuesta por: Pérez-Luño. A. E. (2003), *Ob. cit*. El autor identifica los sistemas «como un conjunto de facultades e instituciones que, en cada momento histórico, concretan las exigencias de la dignidad, de la libertad y de la igualdad humanas, las cuales deben ser reconocidas positivamente por los ordenamientos jurídicos a nivel nacional e internacional».

209. A título ejemplificativo, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos lo tutela a través del derecho a la vida, vida privada y familiar. Véanse: Öneryildiz Turgut v. Turk., No. 1411/03; 2008, §§. 86 to 90; Papastavrou v. Greece, No. 46372/99. 2003, §§ 33, 36 to 39; López Ostras v. Spain No. 16798/90 1994; y Guerra v. It. No. 116/1996/735/932/1998 90. 1998.

210. Fernández-Egea (2021), *Ob. cit*. 117. Sobre el desarrollo propiciado por el Tribunal Europeo señala que: «los ataques al derecho de respeto del domicilio no solo son aquellos de carácter material o corporal —sino también los ataques inmateriales o incorporales, tales como los ruidos, las emisiones, los olores u otras injerencias—. Si esos daños ambientales son graves podrán afectar el bienestar de la persona y privarles del disfrute de su domicilio y menoscabo de su vida privada y familiar».

211. Por su parte, la Corte Interamericana protege el medio ambiente a través del derecho a la vida, integridad física, la propiedad colectiva, identidad cultural y medio ambiente, aspectos abordados en profundidad en el Capítulo IV de este libro. En lo que respecta al sistema universal véase: U.N. Secretary-General, (July 15, 2019) *Ob. cit*. Documento que recoge diferentes obligaciones de derechos humanos y medio ambiente.

212. Mayer, B. (2021a), *Ob. cit*. 413. «Scholarship and judicial practice have misconstrued this principle when assuming that, for a state to comply with its mitigation obligation implied from a human rights treaty, it must fully comply with all its general mitigation obligations. Rather, the Article suggests that human rights treaties open only a certain window onto the applicability of general mitigation obligations».

discrecionalidad, en lugar de la obligatoriedad. De esta manera la interpretación de los instrumentos internacionales termina siendo más un arte que una ciencia exacta[213], guiada por las reglas recogidas en la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados (CVDT).

Así, los jueces de derechos humanos han creado líneas jurisprudenciales capaces de alejarse de las confrontaciones, apostando por «la integración inteligente de los derechos»[214]. Con relación al Tribunal Interamericano, jurisdicción estudiada con especial interés en este libro, la interpretación aplicada obedece a la evolución de los tiempos, a la necesidad de adaptarse a las condiciones de vida actual[215], anclándose en su competencia para interpretar «toda disposición concerniente a la protección de derechos humanos»[216].

Conforme a esta visión, la evolución de los derechos humanos encuentra soporte y se expande a través del *corpus iuris* internacional, cuerpo normativo que cuenta con una gran riqueza en su vertiente medio ambiental, lo cual fortalece la interconexión entre instrumentos internacionales. El fundamento normativo permanece en las reglas generales de interpretación contenidas en el artículo 31.2 y artículo 31.3 CVDT.

---

213. Int'l Law Comm'n. Draft of articles on the law of treaties with commentaries on its Eighteen Session, U.N. Doc. A/CN.4/183 at 218 § 4 (1966). Recuperado de: https://bit.ly/3twemgy. Artículo 28 comentario (4): «In other words, recourse to many of these principles is discretionary rather than obligatory and the interpretation of documents is to some extent an art, not an exact science».

214. Véase: Petit de Gabriel., E. (2021). «Intertwining consular and human rights law: a European contribution to the humanization of the international law». *Espaço Juridico Journal of Law*, vol. 22 (1) 11-44. 35. *«The term 'smart human rights integration' has been previously used in the context of the proliferation of human rights standards, instruments, institutions and remedies. In the same vein, different interpretative pathways could be explored to achieve normative integration».*

215. Véase: CtIDH. Comunidad Indígena Comunidad Indígena Yakye Axa v. Paraguay, Fondo, Reparaciones y Costas (Ser. C) No. 125, §125-126. (17 jun. 2005). Véanse los antecedentes en: CtIDH. Hermanos Gómez Paquiyauri v. Perú, Fondo, Reparaciones y Costas (Ser. C) No. 110 §165. (8 jul. 2004).; CtIDH. Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni v. Nicaragua, Fondo, Reparaciones y Costas (Ser. C) No. 79, §146 (31 ago. 2001).; CtIDH. «Niños de la Calle» Villagrán Morales y otros v. Guatemala, Fondo (Ser. C) No .63, §193 (19 nov. 1999). Véanse también las opiniones consultivas sobre: El derecho a la información sobre la asistencia consular en el marco de las garantías del deido proceso legal. CtIDH. OC-16/99 (Ser. A) No. 16, §114 (1 oct. 1999).; La titularidad de derechos de las personas jurídicas en el Sistema Interamericano de derechos humanos. CtIDH. OC- 22-16 (Ser. A) No. 22, §49 (26 feb. 2016).; Obligaciones estatales en relación con el medio ambiente CtIDH. OC-23/17, (Ser. A) No. 23 §104 (15 nov. 2017) [CtIDH. OC 23/17].

216. Opinión consultiva sobre «Otros Tratados» objeto de la función consultiva de la Corte. CtIDH. OC-1/82 (Ser. A) No. 1, §58 (24 sept. 1982). «...sobre toda disposición, concerniente a la protección de los derechos humanos, de cualquier tratado internacional aplicable en los Estados americanos, con independencia de que sea bilateral o multilateral, de cuál sea su objeto principal o de que sean o puedan ser partes del mismo Estados ajenos al Sistema Interamericano...».

A los fines de ahondar sobre este punto, es posible invoca la interpretación sistémica para considerar de forma indirecta las normas internacionales ambientales con el objeto de reforzar el contenido de las propias disposiciones de derechos humanos[217]. Para ello, como se señaló en el párrafo precedente debe acudirse a la CVDT, ya que es el instrumento que codifica la costumbre internacional y dicta la pauta para abordar sus relaciones interpretativas.

En concreto, el artículo 33.3.c) dispone que a la hora de interpretar un tratado debe tenerse en cuenta «toda norma pertinente de derecho internacional aplicable en las relaciones entre las partes»[218]. Esto puede implicar la incorporación de la costumbre internacional y los principios del derecho en aquellas cuestiones no resueltas expresamente[219] en el texto de los instrumentos internacionales involucrados.

En el caso que ocupa este libro, la columna vertebral lo constituyen los tratados regionales de derechos humanos, específicamente la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH). Por una Parte, la CADH establece directrices interpretativas propias en el artículo 29[220], las cuales deben ser complementadas armoniosamente a la luz del artículo 33 de la CVDT[221]. Por la otra, en lo que respecta a al régimen del clima, la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC) establece que las controversias interpretativas deben ser dilucidadas según los parámetros fijados en el artículo 14[222], aplicable *mutatis mutandi*s al Acuerdo de París.

---

217. CtIDH. OC 23-17 §44.

218. ONU. Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, 23 may.1969, U.NT.S, vol. 1155. [CVDT].

219. ILC Fragmentation Report *Ob. cit*. 180, §18-19.

220. Artículo 29 CADH: «Normas de Interpretación: Ninguna disposición de la presente Convención puede ser interpretada en el sentido de: a) permitir a alguno de los Estados Partes, grupo o persona, suprimir el goce y ejercicio de los derechos y libertades reconocidos en la Convención o limitarlos en mayor medida que la prevista en ella; b) limitar el goce y ejercicio de cualquier derecho o libertad que pueda estar reconocido de acuerdo con las leyes de cualquiera de los Estados Partes o de acuerdo con otra convención en que sea parte uno de dichos Estados; c) excluir otros derechos y garantías que son inherentes al ser humano o que se derivan de la forma democrática representativa de gobierno, y d) excluir o limitar el efecto que puedan producir la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre y otros actos internacionales de la misma naturaleza».

221. En contra de esta visión se encuentra: Mayer, B. (2021a), *Ob. cit*. 444. «Thus, the principle of systemic integration does not justify a monolithic application of international law where a court, having jurisdiction to interpret a treaty, could apply any related rule of international law. Richard Gardiner's guide to treaty interpretation highlights the distinction to be drawn, under Article 31(3)(c) of the Vienna Convention on the Law of Treaties, *"between using rules of international law as part of the apparatus of treaty interpretation and applying the rules of international law directly to the facts in the context of which the treaty is being considered." As Gardiner points out, "[t]he former is within the scope of the Vienna rules, the latter is not"».*

222. ONU. Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, 20 ene. 1994, ONU Doc. A/RES/48/189. [CMNUCC]. Artículo 14 CMNUCC.

Esta lógica interpretativa no representa un obstáculo para que el tribunal regional de derechos humanos nutra y actualice las disposiciones de la Convención Americana con la CMNUCC. En todo caso, esta aproximación no implica arrogarse una competencia *ultra vires*, pues no se estaría interpretando directamente el o los instrumentos del clima, sino dando respuesta a las afectaciones de derechos humanos derivadas del cambio climático peligroso.

El objetivo es utilizar las bases otorgadas por la CVDT para dotar de contenido y definir el alcance de aquellos derechos humanos que se ven afectados por una amenaza ambiental, en este caso por el cambio climático. De hecho, ante la actual solicitud de opinión consultiva[223] o frente un eventual litigio, la interpretación evolutiva de varios instrumentos conectados con el medio ambiente y los derechos humanos es la salida para enriquecer y legitimar la argumentación jurídica que le permita al tribunal decidir sobre las vulneraciones de los derechos conculcados[224].

La integración inteligente de los derechos humanos con otras áreas especiales como lo es el régimen ambiental y el clima proporcionan interesantes beneficios como el evitar la regresión de derechos ya asegurados[225]. Esto debido a que la aplicación fragmentada solo facilita «una oportunidad para manipular las fuentes de derechos humanos con el fin de enmascarar violaciones»[226].

La visión integradora puede cercar los caminos a la impunidad que se viene perpetuando con relación al impacto del cambio climáticos sobre los derechos humanos[227], a la par de elevar los estándares de protección hacia metas más ambiciosas en el marco de tratamiento de una amenaza global. Se trata de entender el derecho como un todo capaz de evadir las parcelas artificiales de la fragmentación[228].

La aplicación de los derechos humanos al cambio climático representa una luz al final del túnel mediante la cual se da respuesta a esa relación directamente proporcional entre el aumento de emisiones y la intensidad cada vez

223. Solicitud de Opinión Consultiva sobre Emergencia Climática y Derechos Humanos a la Corte Interamericana de Derechos Humanos de la República de Colombia y la República de Chile (9 ene 2023). (fecha de última consulta: 28 de junio de 2023): https://bit.ly/3C-QwLsa

224. Debe tenerse en cuenta que la CtIDH es la autoridad interpretativa de la CADH, es decir, interprete exclusivo con capacidad de marcar el alcance y contenido de la Convención Americana. La CtIDH es ampliamente reconocida por su audacia y progresivo abordaje de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales.

225. Brems, E. (2018). «Smart human rights integration». En E. Brems & S. Oual-Chaib (ed.) *Fragmentation and Integration in Human Rights Law: Users' Perspectives* (p. 3). Cheltenham: Edward Elgar Publishing. Recuperado de: https://bit.ly/35xBgLh.

226. *Loc. cit.*

227. Peel, J. & Osofsky, H. M. (2020). «Climate change litigation». *Annual Review of Law and Social Science*, *16*, 21-38.

228. Brems, E. (2018), *Ob. cit*. 3.

más frecuente en los cambios abruptos de los patrones del clima, mediante los cual se amplifican los riesgos para las personas y los sistemas naturales[229]. En suma, ante la capacidad de impacto sobre una extensa lista de derechos humanos, se deben reforzar las obligaciones de respeto y garantía.

Para abordar con eficiencia la cuestión climática desde los derechos humanos es necesario considerar una extensa gama de fuentes normativas ambientales regionales y multilaterales de manera integrada. Estas herramientas interpretativas son propulsoras del cambio en el derecho, dando cabida a la protección de los sistemas vivientes en su conjunto[230]. Así los derechos humanos pueden ayudar a modular la amenaza bajo estudio.

Sin embargo, la transición no se producirá de la noche a la mañana. Para ello, es fundamental nutrir los cimientos del derecho internacional con enfoque multicéntrico, sería imperdonable perder los progresos alcanzados y permanecer anclados en el pasado, pues esto implicaría dejar atrás la supervivencia de las especies incapaces de adaptarse al cambio radical de los ecosistemas. Es necesario registrar sin temores, pero con racionalidad la idea de la dimensión ecológica evolutiva en la narrativa actual del derecho internacional de los derechos humanos.

Debe aclarase que la aproximación propuesta, no puede asimilarse a la adopción de ecocentrismo puro[231] dentro del derecho internacional, ni a lo que un sector de la doctrina latinoamericana ha llamado «derechos ambientales humanos»[232]. Primero, porque los componentes de la naturaleza y ecosistemas

229. CIDH. «Emergencia climática alcance de las obligaciones interamericanas en materia de derechos humanos», CIDH Doc. 3/21 (31 dic. 2021), p. 4. Recuperado de: https://bit.ly/34QfzG8.

230. La profundización sobre estas aproximaciones representa el camino para avanzar hacia la protección del sistema viviente conocidos por la ciencia de la ecología como Gaia, por los pueblos indígenas americanos como *Pachamama*, o por el ciudadano de a pie como *planeta Tierra.* Sobre los derechos de Pachamama véase la interesante investigación de: Sólon, P. (2018). «The rights of mother earth». En V. Satgar (ed.) *The climate crisis. South African and global democratic eco-socialist alternatives* (pp. 107-130). Johannesburg: Wits University Press.

231. Preston, B. J. (16 Sep.2011). «Internalising Ecocentrism in Environmental Law». [transcripción del discurso] 3rd *Wild Law Conference: Earth Jurisprudence – Building Theory and Practice. Griffith University, Queensland*. Recuperado de: https://bit.ly/3tu5l7z. El reconocido juez entiende a la Tierra no solo como instrumento para la realización de los derechos sino como parte de una comunidad a la que todos pertenecemos, para identificarse de esta manera con el ecocentrismo

232. Véase: Chacón, M. P. (2020). «Derechos humanos ambientales». *Revista Jurídica (FURB)*, *24*(53), 9063. El autor orienta su enfoque hacia la justicia ecológica dentro de los derechos humanos. Para hacer referencia a los derechos adjetivos y sustantivos con contenido ambiental, específicamente aquellas ramificaciones del derecho a un medio ambiente sano. Este autor además señala que la OC 23-17 de la CtIDH permite ampliar el elenco de protección de sujetos dentro del derecho ambiental para reconocer de forma directa los derechos de la naturaleza.

no son víctimas directas, ni siquiera en caso de un daño ecológico concreto[233]. Segundo, es la persona el sujeto de protección, y quien tiene la posibilidad de ser asegurada por una acción de tutela ante un órgano jurisdiccional[234].

De allí que no se comparte la idea de unos de unos derechos humanos ambientales para asegurar la protección directa de componentes vivientes no humanos como sujetos de derecho. El discurso sobre paridad del razonamiento debe ir acompañado de las acciones emprendidas por los guardianes o depositarios de la protección de la naturaleza, quienes actualmente están provisto de *locus standi* por el derecho[235]. El multicentrismo[236] viene a matizar y adaptar las propuestas estrictamente ecocéntrica, encontrando en los derechos humanos el medio propicio para el florecimiento de aproximaciones integradoras[237] que apuesten por la interdependencia de los derechos humanos, así como por la protección insoslayable de la vital relación de dependencia entre el ser humano y la naturaleza.

En cualquier caso, el panorama jurídico actual muestra que ni el enfoque ecocéntrico, ni el biocéntrico han cristalizado dentro del derecho internacional. Sin embargo, subsiste esa corriente de pensamiento multidimensional que reclama la expansión del concepto de justicia climática[238] mediante el establecimiento de un diálogo balanceado entre el derecho, la ecología y los medios procesales[239].

---

233. Bétaille, J. (2021) *Ob. cit*. 16.

234. *Loc. cit.*

235. Stone, C. D. (1972). «Should trees have standing? –Toward legal rights for natural objects». *Southern California Law Review*. 45, 450-501. La exploración de esta interesante conceptualización de la ética ambiental apostaba por el reconocimiento de derechos «especiales» a la naturaleza como única salida. Sin embargo, el derecho ha evolucionado hasta conectar la evolución del individuo como sujeto del derecho internacional lo cual le permite representar la naturaleza. Sobre las teorías ecocéntrica véase: Callicott, J. B. (1984). «Non-anthropocentric value theory and environmental ethics». *American Philosophical Quarterly*, *21*(4), 299-309. En el mismo sentido: Leopold, A. (1987). *The land ethic* (pp. 201-226). Oxford: Oxford University Press.

236. Sobre el cambio de paradigma a través del pensamiento complejo véase: Morin, E. & Pakman, M. (1994). *Introducción al pensamiento complejo*. Barcelona: Gedisa. (pp. 77-84 y 107).

237. Sánchez Rubio, D. (2022). *Ob. cit*. 251- 274. El autor expone las bases filosóficas de un humanismo antropodescentrado en el derecho.

238. IPCC (2022), *Ob. cit*. 9. *«Justice is concerned with setting out the moral or legal principles of fairness and equity in the way people are treated, often based on the ethics and values of society. Social justice comprises just or fair relations within society that seeks to address the distribution of wealth, access to resources, opportunity and support according to principles of justice and fairness. Climate justice comprise justices that links development and human rights to achieve a rights-based approach to addressing climate change».;* Schlosberg, D. & Collins, L. B. (2014). «From environmental to climate justice: climate change and the discourse of environmental justice». *Wiley Interdisciplinary Reviews: Climate Change*, 5(3), 359-374.

239. Martinez, A. N. & Porcelli, A. M. (2020). «Aportes a una nueva visión del mundo: la dimensión ecológica en el derecho ambiental argentino». *LEX*, 26 (2020-II), 13-47.

Es por ello que la base de análisis aquí empleada trabaja los derechos humanos en un contexto ambiental, es decir, en una relación donde el *principio pro persona* y el *principio pro natura* se enriquecen de forma bidireccional para asegurar la protección de colectividades e individuos afectados por el riesgo ambiental significativo[240]. Este proceso puede calificarse como una etapa en transición en la que se pretende dotar con contenido jurídico multinivel a las normas de derechos humanos a través de la integración de diferentes regímenes, permitiendo así la optimización del marco normativo para hacer frente a fenómenos ambientales globales.

Debido a ello, se aboga por la protección cultural dentro de las comunidades indígenas y tribales, utilizando a su vez la conexión que ofrece el Acuerdo de París en su preámbulo y el artículo 7.5[241]. De manera que es posible realizar la articulación de los derechos humanos y la protección ambiental basada en el *Corpus Juris* ambiental de carácter universal. Como se verá en los siguientes capítulos, esto es viable si se utiliza como base las garantías que se desprenden de los derechos humanos analizados bajo el cristal del pensamiento del Sur Global.

A favor de la transformación paradigma estrictamente humanizador está la imperiosa obligación de adaptar el derecho como producto de la evolución constante frente a las necesidades contemporáneas de la sociedad. La historia muestra que existen momentos concretos para capitalizar el cambio permitiendo la dinamización del derecho. Ahora, corresponde hacer lo propio con el medio ambiente en el marco de los derechos humanos.

La teoría general de los derechos humanos continúa en movimiento, durante este proceso busca trascender en la práctica judicial a la visión puramente utilitarista del medio ambiente. Sin embargo, hasta hace poco encontró acogida en los tribunales constitucionales y en los tribunales regionales de derechos humanos. Es así como se puede apreciar que en la actualidad existen diferentes formas de aproximación jurídica sobre el tema.

---

240. Véase la propuesta de: Boyle, A. (2007). «Human rights or environmental rights? A reassessment». *Fordham Environmental Law Review*, 18 (3), 471-511. Igualmente, véase: Petersmann, M. C. (2021). «Contested Indigeneity and Traditionality in Environmental Litigation: The Politics of Expertise in Regional Human Rights Courts». *Human Rights Law Review*, 21 (1), 132-156.

241. CMNUCC. Acuerdo de París, 12 dic. 2015, U.N Doc. FCCC/CP/2015/L.9/Rev.1. [Acuerdo de París]. Artículo 7.5 Acuerdo de París: Las Partes reconocen que la labor de adaptación debería llevarse a cabo mediante un enfoque que deje el control en manos de los países, responda a las cuestiones de género y sea participativo y del todo transparente, *tomando en consideración a los grupos, comunidades y ecosistemas vulnerables*, y que dicha labor *debería basarse e inspirarse* en la mejor información científica disponible y, *cuando corresponda, en los conocimientos tradicionales, los conocimientos de los pueblos indígena y los sistemas de conocimientos locales,* con miras a integrar la adaptación en las políticas y medidas socioeconómicas y ambientales pertinentes, cuando sea el caso. (cursivas nuestras).

Por un lado, emerger una interesante visión del Sur Global donde se integran formas plurales de pensamiento mediante la creación de nuevos sujetos de derechos, a través de la interpretación dinámica[242], especialmente de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, así como mediante auténticas manifestaciones de transformación del derecho a través de las comunidades de prácticas trasnacionales[243].

Mientras que desde el Norte Global el tratamiento de este tipo de derechos[244] se ha reforzado desde la búsqueda de una justicia mundial en el marco de la era de la globalización económica[245], acompañada por la aproximación de la protección de los ecosistemas (donde está incluido el hombre), a través de la ampliación del acceso a la justicia ambiental[246]. De esta manera, sobre

242. Shlütter, B. (2012). «Aspects of human rights interpretation by the UN treaty bodies». En H. Keller & G. Ulfstein (eds.) *UN Human Rights Treaty Bodies, Law and Legitimacy* (pp. 261-318). Cambridge: Cambridge University Press. «…the main methods utilized by them are the contextual, effective, dynamic and systemic treaty interpretations. This development is perhaps a reflection of the particular dynamism inherent to human rights law. It deals directly with the relationship of the individual and the state and is thus one of the areas of law where a change in social realities and conditions can exercise a direct influence on the applicable law. […] A growing consensus may also legitimise an evolutive interpretation, which is supported by other methods in the VCLT».

243. Sobre el rol de la comunidad de prácticas para explicar el funcionamiento del constitucionalismo transformados en América Latina véase: Von Bogdandy, A. & Urueña, R. (2020). Comunidad de práctica en derechos humanos y constitucionalismo transformador en América Latina. *Anuario de Derechos Humanos*, 24. «la comunidad latinoamericana de derechos humanos comparte un marco: sus instituciones, sus actores y los desafíos a enfrentar, es decir, un sentido de propósito y sus realidades. En este marco existen muchos puntos de vista sobre los derechos humanos interamericanos, pero la interacción continua establece el significado de una norma internacional para un caso dado». «El punto es un propósito compartido de transformación social a través del derecho».

244. Véanse las importantes aportaciones derivadas de los principios de Limburgo de 1986 sobre la aplicación del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; las Directrices de Maastricht de 1997 sobre las Violaciones de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, así como los Principios de Maastricht de 2011 sobre las Obligaciones Extraterritoriales de los Estados en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, con el objetivo de iluminar el alcance de las obligaciones estatales para alcanzar de forma efectiva la realización de este tipo de derechos.

245. Coomans, F. (2023). «Towards 2122 and beyond: Developing the human rights of future generations». *Netherlands Quarterly of Human Rights*, *41*(1), 53-60.

246. Bétaille, J. (2021), *Ob. cit*. 31. El autor señala que: *«Néanmoins, la proposition de Stone ne sera retenue ni aux États-Unis, ni en Europe. Plutôt que de conférer à la nature une personnalité, c'est la voie d'un élargissement de l'accès à la justice en matière d'environnement qui a été suivie de part et d'autre de l'Atlantique. En témoigne l'agrément des associations de protection de l'environnement».* Un ejemplo interesante de nuevas formas de justicia Ambiental y protección de ecosistemas del Norte Global fue el otorgamiento de personalidad jurídica a la Laguna del Mar Menor en España a través de la Ley 19/2022, de 30 de septiembre. Véase: Krämer, L. (2023). «Rights of Nature in Europe: The Spanish Lagoon Mar Menor Becomes a Legal Person». *Journal for European Environmental & Planning Law*, *20*(1), 5-23.

la mesa servida para el Sur y Norte Global es posible entablar un diálogo abierto que permita tratar y contener de forma oportuna las problemáticas generadas por la transformación del sistema climático de la Tierra.

La necesidad de protección ambiental frente a problemas ambientales complejos clama por un derecho dinámico tanto en el Norte como en el Sur, adaptable a los tiempos corrientes, donde precisamente la integración del pensamiento jurídico holístico es capaz de abrir puertas hacia protección efectiva de los efectos adversos del cambio climático. Las condiciones actuales representan el impulso necesario para adoptar una visión donde se reconozca «el valor intrínseco de todo lo que está vivo»[247], sin que esto implique minimizar la importancia de aquellos que son guardianes de esos espacios vitales.

Caracterización del cambio climático y su régimen normativo

El cambio climático: Una amenaza antropogénica multinivel

La Tierra a lo largo de su evolución ha transitado por diversos procesos de cambio climático, oscilando entre temperaturas cálidas y períodos de glaciación. Originalmente, esas etapas fueron consecuencia de procesos naturales como la deriva continental, ciclos astronómicos, actividad volcánica y variaciones de ciclos solares[248]. Todos estos fenómenos producidos a lo largo de millones de años avanzaron hasta llegar al período de balance conocido como el Holoceno.

Precisamente, el Holoceno representó una era de estabilidad climática que le permitió al hombre alcanzar un nivel de evolución y dominio que a nuestros días le ha convertido en la especie dominante del planeta[249]. Esta capacidad se ha traducido en grandes avances para el hombre, aunque paradójicamente el modelo de desarrollo elegido representa un serio riesgo para la humanidad, debido al impacto de sus actividades, su contribución en el aumento de gases de efecto invernadero y, en consecuencia, en la aceleración del cambio climático peligroso.

---

247. Bosselmann, K. (2009). «Environmental Ethics». En: Wölfrum, R. (ed.). *The Max Planck Encyclopedia of Public International Law*. Oxford: Oxford University Press. Recuperado de: https://bit.ly/3umFNsB.

248. WHO. (2003). *Climate change and human health: risks and responses*. WHO. Recuperado de: https://bit.ly/3qZ9e2L.

249. Véase sobre este punto: Attenborough. D. (2020) *A life on our planet My Witness Statement and a Vision for the Future*. New York: Penguin Random House.

Este desbalance ha conducido al Antropoceno[250], las evidencias científicas[251] demuestran que la civilización tal y como la conocemos cruzó el umbral hacia una nueva era geológica[252]. Esto se traduce en una acelerada metamorfosis[253] de las interacciones entre la atmósfera, la hidrosfera, la biosfera y la geosfera. Esta transformación del sistema climático es el resultado de la dominación humana y de la repercusión de las actividades intensiva de explotación de los componentes que integran la naturaleza[254].

En concreto, el fenómeno climático actual es definido como «un cambio de clima atribuido directa o indirectamente a la actividad humana que altera la composición de la atmósfera mundial y que se suma a la variabilidad natural del clima observada durante períodos de tiempo comparables»[255]. Las prin-

250. A pesar de las señales de transformación climática del planeta, debe destacarse que la idea de una nueva era geológica sigue siendo objeto de discución en la comunidad cientifica. A favor: Crutzen, P. J. (2006). The «Anthropocene». In *Earth system science in the anthropocene* (pp. 13-18). Berlin|Heidelberg: Springer. En contra: Autin, W. J. (2016). «Multiple dichotomies of the Anthropocene». *The Anthropocene Review*, *3*(3), 218-230.

251. IPCC (2022), *Ob. cit*. 11. En el mismo sentido: IPCC. (2018). «Summary for Policymakers». En: Masson-Delmotte, V., P. Zhai, A *et al* (eds.) *Global Warming of 1.5°C.* An IPCC Special Report on the impacts of global warming of 1.5°C above pre-industrial levels and related global greenhouse gas emission pathways, in the context of strengthening the global response to the threat of climate change, sustainable development, and efforts to eradicate poverty (pp. 4-5). Recuperado de: https://www.ipcc.ch/sr15/chapter/spm/. Véase también: Guilloux, B. G. (2020). «Ocean and Climate Regime Interactions». En: A. Chircop, S. Coffen-Smout & M. Mcconnell (eds.) Ocean Yearbook Online (pp. 43-88) Leiden: Brill | Nijhoff. 46. Campbell, K. M. & Parthemore, C. (2008). «National security and climate change in perspective». En: K. Campbell (ed.) *Climatic Cataclysm: The Foreign Policy and National Security Implications of Climate Change* (pp. 1-25). Washington, D.C: Brookings Institution Press.

252. Kloepfer, M. & Neugärtner, R.D. (2021). «Fundamental questions». En: W. Kahl & M. Weller. (eds.) *Climate change litigation.* (p.32). Munchen: Beck | Hart | Nomos. «…the present, in many ways human-dominated, geological, epoch, having started in the latter part *of the eighteenth century (…) supplementing the Holocene. During the Anthropocene, humankind has become a global geological force in its own rights»*. Para otro sector de la doctrina el Antropoceno representa un evento geológico en curso que refleja las interacciones históricas y actuales de los humanos con el ambiente en un espacio temporal de heterogeneidad: Gibbard, P., Walker, M., Bauer, *et. al.* (2022). «The Anthropocene as an Event, not an Epoch». *Journal of Quaternary Science*, *37*(3), 395-399. https://doi.org/10.1002/jqs.3416

253. Beck, U. (2017). *La metamorfosi del mondo*. Gius. Laterza & Figli Spa.

254. Working Group on the Anthropocene & Max Planck Society. (2023, 12 de Julio). «Anthropocene Working Group proposes Crawford Lake as GSSP candidate site of the Anthropocene series». [comunicado de prensa Max Plank Institute of Geoanthropology]. Recuperado de: https://www.shh.mpg.de/2347073. «Selecting Crawford Lake marks a significant step in the AWG's effort to test the geological validity of the Anthropocene hypothesis and towards the scientific, and thereby also political and social recognition of the scale and severity of planetary transformation processes unleashed by industrialized humanity».

255. Artículo 1.2 CMNUCC.

cipales causas de estas alteraciones se atribuyen a la quema indiscriminada de combustibles fósiles, el deterioro de los sumideros naturales de carbono, la agricultura y ganadería intensiva, la aplicación de matrices energéticas no sostenibles, así como la afectación de elementos no humanos esenciales para mantener el balance del sistema de la Tierra.

En pocas palabras, el Antropoceno[256] es consecuencia del impacto del hombre[257] sobre la biosfera y los demás elementos interconectados[258] con el sistema climático, generando procesos ecológicos irreversible que inexorablemente conducirán al colapso, salvo que la causa de esta vertiginosa variación sea modulada, de manera que la humanidad se abstenga de continuar cruzando las fronteras planetarias[259].

El cambio climático ha llegado a un punto de inflexión, donde la mayoría de los espacios del planeta se hacen cada día menos resilientes y más vulnerables, se transforman aceleradamente los ecosistemas. Así, es palpable el cambio de los océanos, suelo submarino, la tierra, bosques, selvas, biodiversidad, casquetes polares, eventos transversales que dan cuenta de la pérdida del Edén. Estas alteraciones quedaron evidenciadas en reportes científicos altamente confiables como los informes[260] elaborados por el Panel Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC)[261], así como por otros estudios desarrollados por diversas agencias especializadas[262].

---

256. Crutzen, P. & McNeill, J. (2011). «The Anthropocene: conceptual and historical perspectives». *Philosophical Transactions of the Royal Society A: Mathematical, Physical and Engineering Sciences*, *369*(1938), 842-867.

257. Kloepfer, M. & Neugärtner, R.D. (2021), *Ob. cit*. 32. Los autores señalan que la era se encuentra dividida en 3 etapas: la industrialización, la gran aceleración posterior a 1945 y etapa actual en pleno desarrollo en la cual se ha comenzado a desarrollar conciencia del impacto del hombre y una nueva visión sobre su interacción con el sistema de la tierra. Williams, M., Leinfelder, R., Barnosky, A., *et al.* (2022). «Planetary-scale change to the biosphere signalled by global species translocations can be used to identify the Anthropocene». *Palaeontology*, *65*(4), e12618. Recuperado de: https://doi.org/10.1111/pala.12618

258. Waters, C. N., Williams, M., Zalasiewicz, J., *et al.* (2022). «Epochs, events and episodes: Marking the geological impact of humans». *Earth-Science Reviews*. Recuperado de: https://doi.org/10.1016/j.earscirev.2022.104171

259. Véase: Steffen, W., Richardson, K., Rockström, J., *et al.* (2015). «Planetary boundaries: Guiding human development on a changing planet». *Science*, *347*(6223), 1259855. Recuperado de: https://doi.org/10.1126/science.1259855

260. IPCC. (2021). *Ob. cit*..; IPCC. (2018), *Ob. cit*. 240-281.

261. IPCC. (2014a). «Climate Change 2014: Synthesis Report». En: R. Pachauri & L. Mayer (eds.) *Contribution of Working Groups I, II And III To The Fifth Assessment Report of The Intergovernmental Panel on Climate Change*. Geneva: IPCC. Recuperado de: https://bit.ly/377ka4g.; IPCC. (2007) «Climate Change 2007: Synthesis Report». En: R. Pachauri & A. Reisinger. (Eds.) *Contribution Of Working Groups I, II And III To The Fourth Assessment Report of The Intergovernmental Panel On Climate Change.* Geneva: IPCC. Recuperado de: https://bit.ly/3DaH4H1.

262. IEA. (2020). «Global Energy Review 2020». IEA. Recuperado de: https://bit.ly/36Rkpnt. Véase igualmente: GISTEMP (2022) *NASA GISS surface temperature analysis*. Recupe-

Todos ellos, evidencian la exacerbación de los riesgos a causa de las profundas transformaciones, así como la urgente necesidad de adoptar acciones y medidas tendientes a alcanzar una rápida transición en la sociedad, con miras a disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero. Esta vez no con el propósito de estabilizar el clima de la Tierra, sino de anclar la temperatura entre los 1.5 C[263] o por lo menos mantenerla por debajo de los 2 C a niveles preindustriales, pues en teoría esto permitiría desacelerar el cataclismo climático[264].

Si se observa el problema por grupos de emisión, es necesario considerar que un significativo conjunto de países desarrollados[265] no están dispuestos a cambiar sus patrones de consumo y modo de vida[266], generando condiciones adversas que impiden lograr una contención efectiva del riesgo climático peligroso. A pesar de su efecto transfronterizo, este tipo de conductas representan un desafío para la aplicación extraterritorial de instrumentos internacionales de protección, pero también pone de manifiesto las alternativas regionales y locales que pueden ser implementadas.

En lo que respecta a las emisiones conjuntas de América Latina[267], las mismas están lejos de alcanzar a los flujos de los países industrializados. Sin embargo, es razonable prever un aumento considerable en las emisiones provenientes de estos países en desarrollo durante el proceso de superación del umbral de sus necesidades básicas[268]. A pesar de ello, tanto los Estados

---

rado el 22 de enero 2022 de: https://go.nasa.gov/3uROpYo.; UNEP (2018). *Emissions Gap Report 2018*. UNEP. Recuperado de: https://bit.ly/3AYMF2g; NCE. (2018). *Unlocking the Inclusive Growth Story of the 21st Century: Accelerating Climate Actions in Urgent Times*. Recuperado de: https://bit.ly/3gDq3el.

263. Objetivo difícil de mantener pues tan solo en el verano de 2023 se han producido una serie de eventos climáticos que rompieron el récord de mediciones anteriores de la temperatura. Véase: Copernicus Europe's Eyes on Earth. (2023, 8 de agosto) «July 2023 sees multiple global temperature records broken». [comunicado de prensa Copernicus Europe's Eyes on Earth & Clamete Change Service]. Recuperado de: https://climate.copernicus.eu.

264. Guilloux, B. G. (2020), *Ob. cit*. 45. El autor destaca igualmente que: *«CO_2 emissions must decline by about 25 percent by 2030 and reach net zero around 2070. If humanity achieves this target, it will only have to negotiate the extinction of the world's tropical reefs, sea level rise of several meters, and the abandonment of the Persian Gulf»*.

265. PNUMA. (2019) «Informe sobre la disparidad en las emisiones de 2019». *PNUMA*. Recuperado de: https://bit.ly/34rgxYX. Las económias industrializadas representan el 75 % de las emisiones globales.

266. Rajamani, L. (2020). *Innovation and Experimentation in the International Climate Change Regime*. Recueil des Cours / Collected Courses. 404 (1), 27.

267. Sobre los datos de emisiones de CO_2 proveniente de actividades humanas por país en América Latina véase: *Global Carbon Atlas* (2021). Emisiones CUT. Recuperado de: https://bit.ly/3GCOPpj

268. Grupo Banco Mundial. (2022) *Hoja de ruta para la acción climática en América Latina y el Caribe 2021-2025*., 3. Recuperado de: https://bit.ly/3MCEYFN. «América Latina y el

industrializados como aquellos en desarrollo, deben promover las bases de acceso a políticas y planes climáticos que tienda a la disminución del riesgo en un marco temporal específico. En concreto, deberán trabajar en la adopción de medidas de cooperación para la efectiva mitigación y adaptación conducente a la meta global de emisiones cero[269].

Particularmente en la región de América del Sur[270], debe mirarse con cautela el impacto climático por el cambio del uso del suelo[271] y el impacto de la deforestación. Así como, la incidencia de las actividades intensivas sobre sumideros de carbono particularmente en Brasil, México, Argentina[272] y en los países de la cuenca amazónica[273] debido a la grave incidencia de las actividades de explotación de estos territorios y su conexión tanto con la alteración del clima como con afectaciones a los derechos humanos de las poblaciones que habitan estos territorios[274].

Caribe genera el 8 % de las emisiones de GEI a nivel mundial y el 12 % de las emisiones de los países prestatarios del Banco Mundial. Sin embargo, esta proporción relativamente modesta aumentaría de manera significativa si los países de ingreso alto y mediano alto reducen sus emisiones para limitar el calentamiento global a 1,5 ° C, mientras que los países de ingreso mediano bajo y bajo de la región continúan con el desarrollo habitual. Además, la contribución de la región a las emisiones a nivel mundial podría aumentar considerablemente si se alcanzara un punto de inflexión en la cuenca del Amazonas que provocara una transición de la vegetación de bosque a la de sabana, con el potencial de liberar el equivalente a varios años de emisiones de GEI a nivel mundial».

269. Aunque los países desarrollados deben hacerlo primero. Véase: Dubash, N.K., Winkler, H. and Rajamani, L. (4 de Mayo de 2021). «Developing countries need to chart their own course to net-zero emissions». *The Conversation.* Recuperado de: https://bit.ly/3GwIGuJ

270. Grupo Banco Mundial. (2022). *Ob. cit*. 3. «Casi todos los países de la región han actualizado su contribución determinada a nivel nacional (CDN) […] Sin embargo, hasta el momento, solo unos pocos países han presentado estrategias a largo plazo (ELP) para lograr este objetivo de cero emisiones netas, entre ellos Chile, Uruguay, Costa Rica, Guatemala, México y Colombia».

271. Sobre el impacto histórico del cambio en el uso del suelo en la región: *Global Carbon Atlas* (2021). Emisiones CUT. Recuperado de: https://bit.ly/3GCOPpj

272. Grupo Banco Mundial. (2022). *Ob. cit*. 3. Véanse también las recomendaciones del PNUMA en: PNUMA. (2019) *Ob. cit*. VI.

273. Brasil, Perú, Colombia, Bolivia, Venezuela y Ecuador. Igualmente, puede incluirse a Guyana y Surinam, Estados parte del Tratado de Cooperación Amazónica. Se ve con preocupación la falta de avances tangibles y ausencia de acuerdos de implementación derivados de la Cumbre amazónica 2023 del Tratado de Cooperación Amazónica. De la reunión surgió la Declaración de Belém, la cual aborda la cuestión de los pueblos indígenas, gestión de la salud y recursos hídricos, así como las posiciones de negociación común de cara a la COP30 de 2025. Véase también: Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Federativa de Brasil (2023, 8 de Agosto) «Presidencial por ocasião da Cúpula da Amazônia – IV Reunião de Presidentes dos Estados Partes no Tratado de Cooperação Amazônica». [comunicado de prensa Nro. 331]. Recuperado de: https://www.gov.br/mre/pt-br.

274. CIDH. *Pueblos indígenas comunidades afrodescendientes industrias extractivas* CIDH Doc. 47/15 (31 dic. 2015). Recuperado de: https://bit.ly/3otZ0qs.

Igualmente, debe tenerse en cuenta que sigue creciendo la preocupación sobre la incidencia climática en las zonas costeras de la región, no solo por las implicaciones del aumento del nivel del mar[275], también debe sumarse el riesgo de inundaciones, erosión de playas, el impacto sobre los ecosistemas marinos, su incidencia sobre la infraestructura costera y portuaria, así como la exacerbación del impacto sobre las actividades perjudiciales ya desplegadas por el hombre en la zona[276].

Está demostrado que el cambio climático genera problemas multinivel con impactos directos e indirectos sobre el hombre y sus derechos humanos[277]. Al observar la amenaza desde el ámbito concreto de afectación se identifica que el cambio climático exacerba el riesgo, especialmente en la seguridad alimentaria a través de la amenaza de la producción de alimentos y su calidad[278]. Por otra parte, altera los patrones de los recursos hídricos, afectando zonas rurales y urbanas[279]. Mientras que en lo referente a la biodiversidad y bosques propicia su desaparición, la perdida de especie y de servicios ecosistémicos[280].

Además, con relación a la pobreza, el aumento de la temperatura disminuye los ingresos de las poblaciones vulnerables, aumentando de desigualdad[281]. Mientras que, con relación al impacto sobre la salud[282], los modelos de proyección diseñados para evaluar parte de la incidencia de los extremos

---

275. Ciertamente el fenómeno de desaparición de islas a causa del cambio climático es alarmante. Un caso emblemático es la situación inestable de la Isla de Aves en Venezuela, territorio de importancia geoestratégica debido a que le permite al país agregar 75.000 km de mar territorial y Zona Económica Exclusiva, aumentando la tensión sobre disputas de delimitación marítima no zanjadas en la región. Sobre este tema véase: Giménez, I. (2018). «Efectos del Cambio Climático sobre Territorios Insulares: una Perspectiva Jurídica sobre la Desaparición de Fronteras». *Revista Internacional de Direito Ambiental* (20), 139-158.

276. CEPAL (2015). *La economía del cambio climático en américa latina y el caribe, paradojas y desafíos del desarrollo sostenible*. Santiago: CEPAL. (pp. 40-43). Recuperado de: https://bit.ly/3GOFHxL.

277. Sobre la afectación de derechos humanos concretos en el contexto climático actual véase: Aylwin, V., Betroni, S. & Castilla, K. (2023). *Impacto del cambio climático en los derechos humanos.* Institut de Drets Humans de Catalunya. Recuperado de: https://www.idhc.org/es.

278. CEPAL (2015), *Ob. cit*. 26.; Grupo Banco Mundial. (2022). *Ob. cit*. 2, 10.

279. CEPAL (2015), *Ob. cit*. 32-33.

280. CEPAL (2015), *Ob. cit*. 44.; Grupo Banco Mundial. (2022). *Ob. cit*. 2 y 11.

281. CEPAL (2015), *Ob. cit*. 26.; Grupo Banco Mundial. (2022). *Ob. cit*. 1, 20-24.

282. Es relevante hacer notar que reconocer el cambio climático como una situación de riesgo es una oportunidad para promover la salud pública. Por ello la Organización Mundial de la Salud ha desarrollado un programa educativo para difundir y asistir a los individuos más vulnerables con el fin de promover acciones climáticas y sanitarias concretas a lo largo de los últimos 15 años, véase: Prats, E. V., Neville, T., Nadeau, K. C. & Campbell-Lendrum, D. (2023). «WHO Academy education: globally oriented, multicultural approaches to climate change and health». *The Lancet Planetary Health*, *7*(1). Recuperado de: https://doi.org/10.1016/S2542-5196(22)00252-2.

fenómenos climáticos sobre la población mundial a mediano plazo indican que entre el 2030 y 2050 se espera un incremento de la tasa de mortalidad en aproximadamente 250.000 muertes más por año[283].

Estas estimaciones se atribuyen directamente al aumento de la temperatura[284], inundaciones en zonas costeras, desnutrición, malaria, dengue[285], entre otras enfermedades infecciosas[286] transmitidas por vectores que ven alterado su ciclo de vida por las transformaciones de su entorno[287]. En este mismo sentido, se ha pronunciado el IPBES *(Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services*[288]*)*, en cuyo reporte pone de manifiesto la estrecha conexión que existe entre el cambio climático y su interacción en el proceso de transmisión de enfermedades zoonóticas que han dado lugar a epidemias globales tan devastadoras como el Covid-19[289], así como otras enfermedades infecciosas[290], que afectan especialmente a grupos vulnerables[291].

---

283. WHO. (2014). *Quantitative risk assessment of the effects of climate change on selected causes of death*, 2030s and 2050s. Ginebra: WHO. Recuperado de: https://bit.ly/373n5La. Véase: WHO (12 de octubre de 2023). «Climate Change». WHO. Recuperado el 7 de noviembre de 2023 de: https://bit.ly/40tRu07. Desde el ámbito de la salud se propuso: WHO (2022) «Alliance for Transformative Action on Climate and Health (ATACH)». Recuperado de: https://bit.ly/460jUzT.

284. Agarwal, S., *et al.* (14 May. 2020) «The Link Between Climate Change and Human Health», *Jurist.org*. Recuperado de: https://bit.ly/3zJksKF. «Extreme changes in climatic *conditions pose a threat to human health because they affect the determinants of human health which include air quality, supply of safe drinking water, nutrition level in food, secure shelter, etc*.»

285. IPCC. (2018), *Ob. cit*. 240-281.

286. Carlson, C. J., Albery, *et al.* (2020). «Climate change will drive novel cross-species viral transmission». *BioRxiv*. Recuperado de: https://bit.ly/3wtNMGE

287. *Loc. cit.*

288. Plataforma intergubernamental establecida por la Asamblea General de Naciones Unidas, sobre sus modalidades institucionales véase: GA Res. 65/162, (20 dic. 2010). Esta es una plataforma independiente integrada por noventa y cuatro (94) Estados cuyo objetivo es fortalecer las políticas de interconexión entre biodiversidad y servicios ecosistémicos, con el propósito de alcanzar una mejor conservación y uso sostenible de la biodiversidad en beneficio de la humanidad y del desarrollo sostenible.

289. IPBES (2020): «Workshop on Biodiversity and Pandemics». Recuperado de: https://bit.ly/3Lxg3Ao.

290. IPCC. (2014b). «Climate Change 2014: Impacts, Adaptation, and Vulnerability. Part A Global and Sectoral Aspects». En: C. Field, V. Barros *et al* (eds.) *Contribution of Working Group II to the Fifth Assessment Report of The Intergovernmental Panel on Climate* (p. 1054). Cambridge, Cambridge University Press.

291. UNHRC. (2020). «COVID-19 is devastating indigenous communities worldwide, and it's not only about health», *Special Rapporteur on the rights of indigenous peoples*, Mr. Francisco Cali Tzay. Recuperado de: https://bit.ly/3NJHv00. Véase también: Marcos del Cano, A.M. (2020). «La vulnerabilidad como criterio normativo para el derecho y las políticas públicas». En: A.M., Marcos del Cano (edit). *En tiempos de vulnerabilidad: reflexión desde los derechos humanos* (p. 18) Madrid. Dykinson. La autora identifica el término como: «aquellos que se encuentran en desventaja social, debido a factores de exclusión, como

A pesar del devastador efecto de la pandemia actual, la crisis de salud global ha permitido colocar en perspectiva la capacidad que tienen los Estados para reducir drásticamente las emisiones de gases de efecto invernadero[292]. Tan solo en 2020 la Agencia Internacional de Energía estimó que durante las restricciones de viajes y de movilidad adoptadas por los Estados durante el primer trimestre del año, se logró reducir en un 5 % la demanda mundial de petróleo, así como se detuvo la comercialización de combustibles fósiles en la industria marítima debido a la caída de la actividad económica[293]. Esto demuestra la habilidad de todos los estamentos del Estado, así como de la sociedad global para adaptarse y modificar sus patrones de movilidad[294].

Si bien es cierto, que la industria de transporte[295] por sí sola no resolverá el problema del cambio climático, es una muestra clave de modulación de conductas públicas y privadas en un corto período de tiempo. De allí la necesidad de buscar también un tratamiento sostenible en otras áreas, lo cual se traduce en un interesante abanico de posibilidades de reducción de emisiones de CO_2 y otros gases de efecto invernadero.

Aunque en principio se pensó que la crisis de salud global minimizaría la degradación ambiental. Hoy, se mantienen encendidas las alarmas, pues una vez superadas las mayores barreras de movilidad, no solo continuó, también se intensificó la pérdida dramática de biodiversidad y sobre todo, la exacerbación del riesgo climático como consecuencia de la forma en la cual se relaciona el hombre con su entorno natural. La nueva normalidad devela serios abusos a la naturaleza, así como severas consecuencias sobre los derechos humanos[296].

---

puede ser la etnia, la raza, la salud, la identidad, la edad, etc y necesitan la protección explicita para llegar a vivir en una igualdad con respecto al resto de la sociedad».

292. Jiménez, H. & Lucatello S. (2020): «Cambio climático, COVID-19 y la transición inaplazable». En: F. Huber (coord.) *La emergencia sanitaria COVID-19 a la luz de la emergencia climática* (p. 27). Bogotá: Heinrich Böll Stiftung. Recuperado de: https://bit.ly/3qXHZFQ

293. IEA (2020), *Ob. cit*.

294. Bogojević, S. (2020). «COVID-19, Climate Change Action and the Road to Green Recovery». *Journal of Environmental Law*, *32*(3), 355-359.

295. Véase: International Transport Forum (2020), «Restoring air connectivity under policies to mitigate climate change», COVID-19 Transport Brief. Recuperado el 30 de noviembre de 2023: https://bit.ly/3LGGOmj.

296. Trigre. M. (10 Agosto 2020). «How is COVID-19 affecting Amazonia. Violations to human rights and environment». *Völkerrechtsblog.* Recuperado de: https://bit.ly/3up3GBn; Véanse igualmente los reportes periodisticos en los que se expone la deforestación sistemática del segundo pulmón vegetal del planeta: Flora Charner (15 mayo 2020). «Deforestation in the Amazon is accelerating despite coronavirus». *CNN*. Recuperado de: https://cnn.it/3L9B58Z; Tapia. A. (8 abril 2021). El vertido de petróleo y la triple pandemia que azota la Amazonía ecuatoriana. *El País.* Recuperado de: https://bit.ly/3gs5Qru; Poliszuk, J., Rámirez. M & *et al*. (30 enero 2022). «Corredor furtivo, las pistas ilegales que bullen en la selva venezolana». El País. Recuperado de: https://bit.ly/35KTubX.

Al anterior panorama, debe sumarse la aproximación limitada del problema por parte del marco climático internacional. En pocas palabras, la crisis ecológica de raíz climática persiste, con el agravante de continuar descansando las respuestas sobre la voluntad de los miembros de la comunidad internacional, quienes hasta ahora no han logrado consolidar acciones suficientes para abordar esta dificultad colosal[297].

Desde el punto de vista fáctico, la proyección sobre el rápido ascenso de las temperaturas es desalentadora[298] a pesar de los compromisos establecidos en el régimen del clima. Se observar con preocupación como la mayoría de los Estados parte de la CMNUCC y del Acuerdo de París, fallaron en alcanzar las metas de reducción necesarias para estabilizar la temperatura. De hecho, gran parte de estos miembros han incrementado las emisiones de CO_2 en un 20 % (2015-2019) en comparación con el período comprendido entre 2001 al 2015, según los hallazgos de las evaluaciones realizadas por la Organización Meteorológica Mundial[299].

A pesar de que doce (12) de los principales países emisores de CO_2 han apostado por establecer la tan anhelada neutralidad de carbono para el 2050[300] aún queda como asignatura pendiente el establecimiento e implementación[301]

---

297. Etty, T., Heyvaert, V., Carlarne, C., *et al* (2020). «Transnational Environmental Law in a Transformed Environment». *Transnational Environmental Law*, *9* (2), 197-209. Los autores coinciden en que a pesar de que ha caído la contaminación significativamente en algunas regiones, así como se han alcanzado metas de reducción en otros, se requieren mayores compromisos.

298. Johnson, G. C. & Lyman, J. M. (2020). «Warming trends increasingly dominate global ocean». *Nature Climate Change*, *10*(8), 757-761; NASA. (2023, 21 de Agosto) «The Ocean has a Fever» [comunicado de prensa]. Recuperado de: https://earthobservatory.nasa.gov. NASA. (2023, 14 de Agosto) «NASA Study Reveals C ompounding Climate Risks at Two Degrees of Warming» [comunicado de prensa]. Recuperado de: https://climate.nasa.gov «*The predictions were originally generated by 35 of the world's leading climate models – specifically, contributors to the Coupled Model Intercomparison Project (CMIP), which includes models developed by the NASA Goddard Institute for Space Studies. CMIP provides climate projections that help the Intergovernmental Panel on Climate Change and other international and national climate groups understand historical, current, and future climate changes»*.

299. Véase: GIESCR, *et al*. (2020) «Impact of Covid-19 on Environment and Climate Change. Joint Written Statement, Global Initiative for Economic, Social and Cultural Rights, Franciscans International, Amnesty International, the Center for International Environmental Law (CIEL) and Earthjustice». Recuperado de: https://bit.ly/3rFDJKm. Igualmente véase: WMO. (2019). «The global Climate in 2015-2019». Ginebra: WMO. Recuperado de: https://bit.ly/3x28aiy

300. UNEP. (2021) *The heat is on: A world of climate promise not yet delivered*. UNEP. 26.Nairobi: UNEP. Recuperado de: https://bit.ly/3ozY3MR.*«To summarize, eight G20 members have so far not set net zero targets, whereas 12 (covering 54 per cent of global domestic GHG emissions) have»*.

301. Dubash, N.K., Winkler, H. & Rajamani, L. (4 de mayo de 2021), *ob. cit*. *«More than 30 countries have net zero targets set or proposed in law and existing policies, while more than 120 countries are discussing their own net zero targets».*

de planes concretos para su consecución[302]. Por otra parte, existe otro grupo de países que mantiene su intención de seguir explotando e incluso incrementar la producción de combustibles fósiles para los años próximos[303], así como el aprovechamiento intensivo de recursos naturales en jurisdicciones con mayor flexibilidad regulatoria ambiental.

El informe UNEP sobre la brecha de producción 2021 arroja que los gobiernos planean duplicar la producción de fuentes de emisiones, lo que en realidad representaría un aumento del 110 % de la producción total[304], una prueba de ello es que se han destinado mayores fondos al financiamiento de combustibles fósiles que a energías limpias desde el inicio de la crisis de salud global causada por el COVID-19[305]. Esto se traduce en un catalizador exponencial sobre la causa principal del calentamiento global.

Si estas proyecciones son colocadas en perspectiva, el continuo asenso de las temperaturas será inevitable. Es vital cerrar la brecha de producción a través de un enfoque multinivel y sobre todo multidisciplinario en las áreas donde se localizan las materias primas. Este abordaje debe incluir tantas garantías de participación y consulta, acompañadas de estrategias tecnológicas y acciones globales coordinadas, amparadas por mecanismos de exigibilidad jurídicos para garantizar los mínimos de cumplimiento con relación a la protección de las personas y del entorno natural.

Claramente, el cambio climático es una amenaza furtiva, que extrapola su impacto sobre los humanos y otras especies, su colisión lenta pero segura evidencia daños irreversibles sin distinción de fronteras internacionales[306]. La abrupta transformación de la Tierra está causando pérdidas humanas, ambientales, sociales y económicas con un costo incalculable para las generaciones presentes y futuras.

Hoy, millones de personas deben asumir efectos directos y colaterales. Además, sus consecuencias comprometen en general el sustento y la supervivencia de las especies como las conocemos. El ser humano debe tener presente que, si pierde la habilidad para resistir la investida de esta crisis ambiental, está en riesgo de perder su capacidad de resiliencia[307].

---

302. UNEP. (2021) *Ob. cit*. 60. *«[…]net-zero pledges across countries and organizations have different timings, sectoral coverage, gas coverage and legal statuses».*

303. UNEP (2021), Report: «The production Gap Executive Summary». UNEP. 3 Recuperado de: https://bit.ly/3GutYVf

304. UNEP (2021), *Ob. cit*. 4. «*In 2030: governments' production plans and projections would lead to around 240 % more coal, 57 % more oil, and 71 % more gas than would be consistent with limiting global warming to 1.5 °C».*

305. UNEP (2021), *Ob. cit*. 5 En: https://bit.ly/3GutYVf *«G20 countries have directed nearly USD 300 billion in new funds towards fossil fuel activities since the beginning of the COVID-19 pandemic».*

306. Etty, T., Heyvaert, V., Carlarne, C., *et al* (2020), *Ob. cit*. 197-209.

307. Sánchez-Bravo, A. (2020). Covid-19: «Impactos y efectos. Una reflexión desde el inicio del fin del confinamiento». En: L. Pilau (Ed), *Covid-19 e seus paradoxos* (p. 77). Itajaí: Prefixo.

Lo anterior implica revisar y replantear las estrategias[308] para buscar una mayor efectividad desde las vías complementarias para hacer posible la consecución de las metas actuales de recorte de emisiones, así como aquellas vinculadas a los objetivos transversales de desarrollo sostenible[309]. Dentro de la actualización post pandemia sobre la acción por el clima[310] se han incluido: la promoción hacia la transición verde, la cooperación internacional y la gestión de riesgos climáticos con el fin de recuperar las economías[311]. Sin embargo, no todos los países parecen ir en esta dirección[312]. De allí la necesidad de identificar las alternativas de preservación ambiental y de protección de los colectivos vulnerables.

Marco normativo vigente e implicaciones para judicializar su incumplimiento

Ahora bien, para entender la dimensión del problema desde el punto de vista jurídico, corresponde posar la mirada sobre los límites y virtudes del régimen internacional destinado desacelerar la crisis del clima[313]. Debido a ello, debe partirse de la CMNUCC, donde descansan las bases jurídicas y políticas elegidas para preservar la estabilidad del clima del Tierra desde 1992. Como su nombre lo indica es un tratado de encuadre normativo gene-

308. Destaca especialmente la iniciativa del Pacto Verde de la Unión Europea, véase: Panarello, D. & Gatto, A. (2023). «Decarbonising Europe–EU citizens' perception of renewable energy transition amidst the European Green Deal». *Energy Policy*, *172*, 113272.

309. La acción por el clima debe ser fortalecida a través de los vínculos entre: Objetivo 13, Objetivo 15.1, 15.2, 15.5, Objetivo 17.9, Objetivo 11.4 y 12.2, 12.7.

310. European Commission, Directorate-General for Communication, (2021). *European green deal: delivering on our targets*, Publications Office. Recuperado de: https://bit.ly/3qw7Ww1. CIDH. (2020, 13 de agosto). *Las Américas: los gobiernos deben fortalecer, no debilitar, la protección del medio ambiente durante la pandemia de la COVID-19* [comunicado de prensa CIDH 198-20]. Recuperado de: https://bit.ly/3JAqDpX.

311. ONU. «Objetivos de Desarrollo Sostenible» *ODS*. 13 Acción por el Clima. Recuperado de: https://bit.ly/34kAOPR. Obsérvense con especial atención los ODS 13.2, 13.3. 13.b).

312. Debe seguirse con especial interés los pasos del grupo de países del BRICS (originalmente conformado por Brasil, Rusia, la India, China y Sudáfrica), quienes en agosto de 2023 aprobaron los acuerdos de adhesión para incorporar a Argentina, Arabia Saudí, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Etiopía e Irán, países que representan el 36 % del PIB mundial, con una riqueza de extraordinaria en materias primas y combustibles fósiles. Lo anterior les posiciona en unas condiciones especialmente ventajosas dentro de la estructura del comercio internacional y promueve el intercambio del poder dentro de la geopolítica global.

313. Aunque escapa del alcance de esta obra, no se desconoce la existencia de interesantes relaciones que pueden incluir obligaciones jurídicas entorno a la Convención sobre la Protección del Patrimonio Mundial articuladas bajo el mismo patrón integrador propuesto en esta investigación.

ral, por lo cual no contiene obligaciones exigibles a los Estados en caso de incumplimiento, solo crea bases para generar soluciones multilaterales[314].

Debe tenerse en cuenta que tan solo Cuba y Los Países Bajos han aceptado la jurisdicción contenciosa de la Corte Internacional de Justicia para dirimir controversias interestatales relacionadas con la Convención[315]. Mientras que las Islas Salomón se sometieron a la jurisdicción del Tribunal en materia de arbitraje. Esto aleja en principio la posibilidad de acudir ante este Tribunal para demandar acciones en el marco de las obligaciones establecidas en esta Convención[316].

La CMNUCC, es un instrumento especialmente rico tanto por sus implicaciones históricas como por los principios de derecho ambiental en ella desarrollados[317], los cuales cobran un protagonismo único pues buscan alcanzar un imperativo de justicia intergeneracional. Estos postulados informan la regulación climática universal, influenciando la interpretación y aplicación de las normas[318], así como la creación de nuevas prácticas en el orden internacional y nacional. Cabe destacar que estos principios guían por igual al Protocolo de Kioto y al Acuerdo de París.

Los principios ambientales «encarnan los estándares legales, cuyo contenido es más general que compromisos o acciones particulares»[319]. Esto les permite buscar soluciones en el marco de los vacíos localizados en los textos normativo. Por lo tanto, funciona como la guía para quienes tienen la competencia y el deber de impartir justicia, así como de aplicar poderes discrecionales durante el proceso de creación y adopción de políticas públicas y practicas gubernamentales[320].

---

314. Stewart, R. B., Oppenheimer, M. & Rudyk, B. (2013). «Building a more effective global climate regime through a bottom-up approach». *Theoretical Inquiries in Law*, *14*(1), 273.

315. Ramírez, J. (2021). «El cambio climático frente al derecho internacional» *Revista Electrónica De Derecho Internacional Contemporáneo*, *4*(4). Recuperado de: https://bit.ly/3Au0ROw. *«Furthermore, we have the advisory jurisdiction of the International Court of Justice (UN News, 2011) and the mechanisms of the various treaty committees (Convention concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage, 1972, art 4; Kyoto Protocol to the United Nations Framework Convention on Climate Change, 1997, art 7). So far, the only case brought to an international monitoring mechanism and the international arbitration procedures […] is the UN Human Rights Committee, is the Torrest Strait Islanders in 2019 (UNHRC, 2020)».*

316. Aunque siempre existirá luz verde para acudir a la vía consultiva por parte de los órganos autorizados de las Naciones Unidas.

317. Véase: Artículo 3 CMNUCC, el preámbulo del Acuerdo de París y el artículo 2.

318. Winter, Greg. (2004) «Teh legal nature of environmental principle in international, EC and German law». En: Richard Marory *et al* (Eds.)., *Principles of European Law*. Groningen: European Law Publishing., p. 16.

319. Sands, P. & Peel, J. (2012). *Principles of international environmental law*. Cambridge University Press., p. 200.

320. Winter, Greg. (2004), *Ob. cit*. 16.

Además, es necesario considerar que en ciertos principios subyace la justificación necesaria para invocar la aplicación de reglas de atribución de responsabilidad[321], ayudando a romper la barrera de la relación de causalidad directa mediante la modulación de la incertidumbre científica[322]. Como se ha observado, estos principios se localizan tanto en la jurisprudencia, en la práctica estatal, tratados vinculantes y normas de derecho indicativo[323].

De allí que, es recomendable enfocar la atención en los principios incorporados dentro del artículo 3 CMNUCC, a través de los cuales se abordan importantes cuestiones como el derecho al desarrollo sostenible, la cooperación, equidad intergeneracional[324] y el tratamiento de las obligaciones que nacen a partir de las responsabilidades comunes pero diferenciadas[325]. Cada uno de ellos es esencial para el tratamiento del problema de climático desde un enfoque de derechos humanos.

Los mencionados principios funcionan como imperativos optimizadores[326] de los cuales se desprenden técnicas legales para abordar la incertidumbre que se teje sobre los límites de la responsabilidad derivada del impacto del cambio climático sobre los derechos humanos de grupos especialmente vulnerables. La articulación de principios entorno a la problemática climática implica que los Estados tienen la obligación general de preservar la biodiversidad, así como de actuar con la diligencia debida para proteger al individuo frente al cambio climático. Sin embargo, la implementación efectiva de estos objetivos requiere de solidaridad, cooperación y asistencia mutua.

---

321. Dworkin, R. (2006). *Justice in robes*. Harvard University Press., p. 143-145. Ilustrando su magistral exposición con el caso Case Sindell v. Abbott Labs. - 26 Cal. 3d 588, 163 Cal. Rptr. 132, 607 P.2d 924 (1980).

322. Viñuales, J. E. (2010). Legal techniques for dealing with scientific uncertainty in environmental law. *Vanderbilt Journal of transnational Law.* 43, 437-503.

323. Sands, P. & Peel, J. (2012), *Ob. cit*. 232. Algunos de estos principios son la prohibición de causar daños transfronterizos, derecho al desarrollo sostenible, responsabilidades comunes pero diferenciadas, adopción de acciones preventivas cooperación, precautorio, y contaminador pagador

324. Véase: Sands, P. & Peel, J. (2012), *Ob. cit*. 256. Destacan: «having been relied upon as early as 1893 by the United States in the Pacific Fur Seals Arbitration. It is also expressly or implicitly referred to in many of the early environmental treaties».

325. Gaete, P. (2020). «La esencialidad del principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas en el régimen internacional del cambio climático». *Revista de Derecho Ambiental*, (13), 39-58. Véase también: French, D. (2000). «Developing states and international environmental law: The importance of differentiated responsibilities». *International & Comparative Law Quarterly*, *49*(1), 35-60.

326. Proelss, A. (2010). «International environmental law and the challenge of climate change». *German Year Book of International Law, 53*, 67.

De manera, los colectivos especialmente afectados[327] por el impacto del cambio en los patrones meteorológicos requieren la identificación de herramientas jurídicas y su incorporación a través de mecanismos de tutela que permitan asegurar la progresión de sus derechos en términos de sostenibilidad. Los principios orientadores en el régimen del clima son también esenciales para la protección de los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales «ESCA».

Debe recordarse que estos principios ambientales rectores del clima están marcados por la interdependencia[328]. El concepto de desarrollo sostenible constituye una meta para asegurar que las necesidades de las generaciones actuales no comprometan la habilidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades[329], además este principio provee un marco de interpretación para tratados internacionales con capacidad de inspirar los procesos de tomas de decisiones de los sujetos del derecho internacional[330]. Esto implica balancear las presiones impuestas por el Estado, la tecnología y la propia sociedad sobre los recursos ambientales en contraste con la capacidad de la biosfera para balancear el impacto de la actividad del hombre[331] en el marco de la superación de los umbrales de pobreza global.

En lo referente al principio de cooperación[332], el mismo da cuenta de esa estrecha relación con aspectos económicos, sociales y comerciales asociados al desarrollo, así como a la aplicación de fórmulas de contribución reciproca en materia de promoción y protección del medio ambiente[333]. Este principio

---

327. Sobre el rol de convergencia entre desigualdades y vulnerabilidades potenciadas en personas y sociedades en un contexto de cambio climático véase: Castilla, K. (2022). «Cambio climático e interseccionalidad». *Working Papers «El Tiempo de los Derechos» 23. Recuperado de:* https://www.idhc.org/.

328. Knox, J. H. & Morgera, E. (2022). *Human Rights and the environment: the interdependence of human rights and a healthy environment in the context of national legislation on natural resources*. FAO. Roma.

329. Brundtland Report *Ob. cit*.

330. Rodrigo, Á. J. (2015). «El desafío del desarrollo sostenible». *Los principios del Derecho Internacional relativos al desarrollo sostenible*. Madrid: Marcial Pons.

331. *Loc. cit.* Este principio ha sido extensamente desarrollado y a nivel instrumental se encuentra recogido diferentes instrumentos internacionales.

332. Lavrik, M. (2022). «Customary Norms, General Principles of International Environmental Law, and Assisted Migration as a Tool for Biodiversity Adaptation to Climate Change». *Jus Cogens*, 1-31. Recuperado de: https://bit.ly/3LaCewl. *«The principle of cooperation is rooted in Article 74 of the UN Charter and then distilled in Principle 24 of the Stockholm Declaration and Principle 27 of the Rio Declaration. […] Article 74 does not articulate environmental issues as a matter of concern explicitly. It mentions only social, economic, and commercial blocks. However, the further interpretation of the treaty in light of the post-1945 development allows the inclusion of the environmental issues under the requirement to cooperate».*

333. Respecto a este principio véase: Sands, P. & Peel, J. (2012). *Ob. cit*. 249. *«in relation to social, economic and commercial matters has been translated into the development and application of rules promoting international environmental cooperation».*

es primordial para la articulación y puesta en práctica acciones climática entre Estados[334]. Particularmente entre los Estados Interamericanos quienes se encuentran arropados por el espíritu de una intensa cooperación continental establecido en la Carta de la Organización de Estados Americanos[335].

El artículo 3 CMNUCC, incluye además el extensamente aceptado principio de prevención, norma consuetudinaria directamente conectada con la obligación de no causar daño a otros Estados[336]. De este principió brota el deber de prevenir la generación del daño dentro de la propia jurisdicción de los Estados[337], como fuera de las fronteras nacionales[338]. El mismo puede ser también localizado en el principio 2 (soberanía sobre la explotación de recursos naturales) de la Declaración de Rio, el cual va de la mano con el principio 19, ya que este último exige la notificación y consulta previa frente a posibles daños ambientales.

Claramente, para dar cumplimiento efectivo a ambas obligaciones internacionales resulta necesaria la adopción de medidas tempranas. En la actualidad, es incuestionable el carácter de norma vinculante de la obligación de prevención, además de ser una herramienta de gran valor en la lucha climática. A su favor tiene que la mayor parte de los Estados le han incorporado como parte de su normativa interna[339], generando un doble refuerzo al momento de operacionalizar la exigibilidad del cumplimiento de una conducta diligente de cara al futuro.

El principio de prevención envuelve la realización de la evaluación de impacto ambiental[340] antes del inicio de actividades que puedan causar

---

334. Un caso interesante que hace referencia a este principio el marco de un asunto ambiental es: The MOX Plant (No. 10) (Ir. v. U.K.), Case No. 10, Provisional Measures of Dec. 3, 2001, ITLOS Rep., 110 §82.

335. OEA. Carta de la Organización de Estados Americanos. 30 abr. 1948. U.N.T.S. No. 1609. Vol. 119. Última reforma a través el Protocolo de Reformas a la Carta de la Organización de Estados Americanos. 10 jun. 1993 [Carta OEA]. Véase el preámbulo de la Carta OEA.

336. Véase: Sands, P. & Peel, J. *(2012), Ob. cit. 241. «…reflects a rule of customary international law, placing international legal constraints on the rights of states in respect of activities carried out with in their territory or under their jurisdiction. Saying that Principle 21/Principle 2 reflect customary international law is not, however, decisive, and will be of only partial assistance in support of an international claim»*.

337. Sands, P. & Peel, J. (2012), *Ob. cit*. 246-249.

338. Trial Smelter (U.S v. Can) 3 R.I.A.A. 1907-1965 (1941).

339. Sands, P. & Peel, J. (2012), *Ob. cit*. 246-249. El autor señala que este principio fue implícitamente soportado por *Trail Smelter case* y *Lac Lanoux Arbitration*, directamente reconocido por la Corte Internacional de Justicia en los casos *Gabcikovo-Nagymaros* y *Pulp Mills,* evidenciando su extendido reconocimiento.

340. Pulp Mills on the River Uruguay (Arg. v. Uru.), Judgment, 2010, ICJ. 58 § 101, 203-219 (April 2010).; Certain Activities Carried Out by Nicaragua in the Border Area (Costa Rica v. Nicar.) and Construction of a Road in Costa Rica along the San Juan River (Nicar v. Costa Rica), Judgment, 2015, ICJ. § 101-105, 146-162 (December 2015).

daños significativos, especialmente aquellos que se despliegan en un contexto transfronterizo y sobre recursos compartidos[341]. Lo anterior resulta especialmente revelador en el contexto del cambio climático, pues el propio preámbulo de la CMNUCC reconoce su preocupación por el impacto sobre el ecosistema natural. Adicionalmente, debe recordarse que esta es una obligación continuada que se extiende incluso en la fase de monitoreo para determinar los alcances de cualquier proyecto hasta su ejecución definitiva[342].

Otra mención que no puede omitirse es la incorporación de las medidas o enfoque precautorio, también consagrado en la Declaración de Río como principio 15[343]. A partir de este período, puede situarse el principio en una zona difusa donde aún se debate sobre su obligatoriedad. Un sector de la doctrina sostiene su carácter vinculante[344] basado en el reconocimiento jurisprudencial y en la práctica estatal[345].

El enfoque precautorio o principio precautorio, independientemente de si se adopta un reconocimiento de obligación vinculante o no, es esencial para enfrentar la incertidumbre científica que hasta ahora se mantiene como justificación para los escépticos lobbies climáticos, quienes buscan negar la cuota de responsabilidad humana en el rápido ascenso de calentamiento de la Tierra.

En el marco de la CMNUCC, la adopción de medidas precautorias tempranas permite modular el riesgo ambiental al asumir una postura preventiva ante la incertidumbre de riesgos «significativo o irreversibles»[346]. Aunque

---

341. Pulp Mills on the River Uruguay (Arg. v. Uru.), *Judgment, 2010*, ICJ. 58 §204 and 197 (April 2010).

342. Los estándares para su aplicación dependen de la práctica de cada Estado, aunque un ejemplo de delimitación de los mismo está la Convention on Environmental Impact Assessment in a Transboundary Context (1991) «Espoo Convention».

343. Aunque sus orígenes se remontan al alrededor de 1939, se ha consolidado su progresiva aceptación en el plano interno e internacional ambiental. Véase: Sands, P. & Peel, J. (2012), *Ob. cit*. 267.

344. Cançado-Trindade, A.A. (2015). «Principle 15», En: J. Viñuales (ed.) *The Rio Declaration on Environment and Development: A Commentary* (p. 409) Oxford: Oxford University Press.

345. Kerbrat, Y. & Maljean-Dubois, S. (2019). «The Role of International Law in the Promotion of the Precautionary Principle». En: C. Oliveira, G. Lima, F. Ramos (dir.), *A interpretação do princípio da precaução no direito brasileiro, no direito comparado e no direito internacional* (pp. 275-284). Pontes. Recuperado de: https://bit.ly/3iXFUoB. Véase su reconocimiento como costumbre internacional en: Responsibilities and Obligations of States with Respect to Activities in the Area (No. 17) Case No. 17, Advisory Opinion of Feb. 1, 2011, ITLOS Rep., 10.

346. Los cuales siguen considerándose ambiguos, véase: A. A. Cançado Trindade (2015), *Ob. cit*. 410. Véase también: Int'l Law Comm'n. Draft of articles on prevention of transboundary harm from hazardous activities with commentaries on its Fifty-third Session U.N. Doc. A/56/10 (Apr. 23-jun.1 & jul. 1- Aug. 10). Recuperado de: https://bit.ly/3L2uKva. Artículos 1, 2 y 3.

puede resultar borroso el estándar de certeza requerido para su aplicación[347], su finalidad está orientada a la suspensión de actividades que funcionan como catalizadores sospechosos de riesgo e impacto desconocido, en el caso concreto de estudio sobre su contribución a la inestabilidad del sistema climático.

Otro aspecto importante, es que gracias a este principio se puede flexibilizar la carga de la prueba[348], así como revertirla ante los Estados que pretendan argumentar la inocuidad de un comportamiento potencialmente peligroso o ante la necesidad de tomar medidas urgentes frente al riesgo[349]. Aspecto especialmente útil ante casos climáticos, pues no se requiere la ocurrencia del daño significativo o su certeza para exigir al Estado la adopción de medidas razonables. En todo caso, quien despliegue la actividad debe demostrar la ausencia o riesgo mínimo en su ejecución, asumiendo la carga de la prueba.

En resumen, el principio o aproximación precautoria dentro de la CMNUCC tiene como fin guiar el desarrollo y aplicación del derecho ambiental internacional ante la incertidumbre científica. En la actualidad puede afirmarse que es un principio en plena progresión, por lo cual no tiene requisitos específicos y su formulación suele ser ambigua.

Otro aspecto para tener en consideración sobre la CMNUCC es su órgano político, la Conferencia de las Partes «COP», establecida en los términos del artículo 7 de la Convención. Las COP han impactado significativamente el marco institucional del clima ya que las mismas tienen como fin examinar su aplicación, así como evaluar y seguir el progreso de los instrumentos jurídicos climáticos derivado del consenso de los 197 Estados Parte que integran este instrumento Marco.

De las sesiones de las COP se derivan resoluciones, recomendaciones y decisiones, las cuales dan lugar al desarrollo de nuevos estándares internacionales, incluidas reglas de procedimiento para su implementación[350]. Por ejemplo, durante la COP3 se adoptó el Protocolo de Kioto, mientras que en la COP21 nació el Acuerdo de París, ambos instrumentos responden a la evolución del régimen del clima.

---

347. Schröder, M. (2014) «Precautionary Approach/Principle». En: Wölfrum, R. (ed.). *The Max Planck Encyclopedia of Public International Law*. Oxford: Oxford University Press. Recuperado de: https://bit.ly/3umFNsB.

348. Viñuales, J. E. (2010), *Ob. cit*. 480. El autor refiere a los casos del Tribunal Internacional del Mar No.12 concerning Land Reclamation by Singapore in and around the Straits of Johor (Malaysia v. Singapore), y No. 3-4 the Southern Bluefin Tuna (New Zealand. v. Japan, Australia. v. Japan).

349. Proelss, A. (2010), *Ob. cit*. 74.

350. Dupuy, P. M. & Viñuales, J. (2015). *International environmental law*. Cambridge: Cambridge University Press (p.36). Los autores identifican estos procesos como «Droit dérivé»

En lo que respecta al Protocolo de Kioto[351], además de contener un presupuesto de emisiones dentro de un marco temporal definido, debidamente reforzado por un sistema de cumplimiento[352], dejó una lección histórica derivada de la falta de consenso internacional para asegurar la estabilidad de la propuesta jurídica en él establecida. Entre sus mayores obstáculos, se encontró con no lograr la participación de los actores más importante en termino de emisiones, además de adoptar un enfoque de recorte de tipo marginal, lo que condujo al fracaso del cumplimiento de sus objetivos, bloqueando la continuidad de su segundo período de vigencia[353].

No obstante, corresponde rescatar sus valiosos lineamientos con relación a los mecanismos de desarrollo limpio, basados en la idea de «cooperación en la promoción y la transferencia de tecnologías, conocimientos especializados, prácticas y procesos ecológicamente racionales en lo relativo al cambio climático y la ejecución de programas de educación y capacitación»[354], así como a la incorporación de un mercado de emisiones que buscaba reducir los costos intrínsecos de su cumplimiento[355]. En materia de exigibilidad, se ha llegado a señalar que el Protocolo permitía la atribución de responsabilidades como consecuencia de una violación directa de los compromisos asumidos por los países atados al Anexo I CMNUCC[356].

Cabe destacar que más allá de la atribución de responsabilidad, se han puesto en práctica once (11) procedimiento de no cumplimiento presentados bajo el mecanismo de exigibilidad del Protocolo de Kioto[357], estrategia

---

351. Protocolo de Kyoto de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático (11 Dec. 1997), en vigo (16 Feb. 2005) U.N.T.S 2303 148. Vigente hasta el 31 de diciembre de 2020. Véase: Artículo 2.2.

352. Rajamani, L. & Wersman, J. (2021). «Climate Change». En: L. Rajamani & J. Peel, (eds.). *The Oxford handbook of international environmental law*. (p. 496) Oxford: Oxford University Press. «The Kyoto Protocol's first commitment period running from 2008 to 2012 covered 24 % of 2010 global emissions. The 2012 Doha Amendment to the Kyoto Protocol contains a second commitment period running from 2013 to 2020, which covers only a fraction of global emissions».

353. Boyle, A. & Ghaleigh, N. S. (2016). «Climate change and international law beyond the UNFCCC». En: K Gray, R. Tarasofsky &C. Carlane (eds.) *The Oxford Handbook of International Climate Change Law*. (pp. 29-28). Oxford: Oxford University Press.

354. Ruiz, J. J. (2008): «El derecho internacional frente al desafío del cambio climático». *Cursos de derecho internacional y relaciones internacionales de Vitoria-Gasteiz= Vitoria-Gasteizko nazioarteko zuzenbide eta nazioarteko herremanen ikastaroak*, (1), 19-80. Recuperado de: https://bit.ly/3uDrJLt.

355. Rajamani, L. & Wersman, J. (2021), *ob. cit*. 496.

356. Fernández Egea, R. M. (2011). State Responsibility for Environmental Harm, «Revisited» within the Climate Change Regime. En: S. Maljean-Bubois. & L. Rajamani, (dir.). *Implementation of international environmental law*. (p. 397). Leiden. Brill |Nijhoff.

357. Véase: Non-compliance Procedure of Greece Under the Kyoto Protocol (2007) Report. CC-2007-1/ Greece/E/B.; Non-compliance Procedure of Croatia Under the Kyoto Protocol

utilizada para establecer las consecuencias de la falta de observancia de los compromisos asumidos por los Estados Parte. Sin embargo, dada la limitación de los Estados participantes son decisiones que no logran impactar sobre las metas de mitigación que necesita alcanzar el planeta.

Por su parte, el Acuerdo de París[358], aunque da continuidad al régimen del clima se separa sustancialmente del modelo asumido en el Protocolo de Kioto. Su objetivo central es mantener la temperatura de la tierra dentro del umbral definido por su artículo 2 para evitar el peligro intrínseco del aumento exponencial del calentamiento del Planeta. Este compromiso se cumple a través de los objetivos de recortes establecidos por las propias partes para un ciclo inicial de cinco (5) años[359] con la expectativa de aumentar esos recortes de conformidad con el artículo 4.3 del Acuerdo. Estos compromisos primarios van acompañados por estrategias de financiamiento, adaptación y mitigación a largo plazo[360].

Este pacto multilateral ofrece interesantes innovaciones, entre ellas expone nuevas aristas de la problemática y remarca que el *cambio* en el sistema climático de la Tierra representa una preocupación común de la humanidad[361], concepto de vital importancia pues tiene la potencialidad de ampliar las obligaciones ambientales exigiendo la cooperación de todos los Estados[362] para abordar la emergencia actual.

(2009) Report. CC-2009-1-8/ Croatia/E/B.; Non-compliance Procedure of Canada Under the Kyoto Protocol (2008) Report. CC-2008-1/Canada/EB.; Non-compliance Procedure of Bulgaria Under the Kyoto Protocol (2010) Report. CC-2010-1-17/Bulgaria/E/B.; Non-compliance Procedure of Lithuania Under the Kyoto Protocol (2011) Report. CC-2011-3-8/ Lithuania/E/B.; Non-compliance Procedure of Ukraine Under the Kyoto Protocol (2011) Report. CC-2011-2-9/ Ukraine E/B.; Non-compliance Procedure of Romania Under the Kyoto Protocol (2011) Report. CC-2011-1-8/ Romania/E/B.; Non-compliance Procedure of Slovakia Under the Kyoto Protocol (2012) Report. CC-2012-1-9/ Slovakia E/B.; Non-compliance Procedure of Ukraine Under the Kyoto Protocol (2016) Report. CC-2016-1-6/ Ukraine E/B.; Non-compliance Procedure of Monaco Under the Kyoto Protocol (2018) Report. CC-2018-1/ Monaco/E/B.; y, Non-compliance Procedure of Kazakhstan Under the Kyoto Protocol (2019) Report. CC-2019-1/ Kazakhstan/E/B. (pending).

358. Al 11 de noviembre de 2023 el Acuerdo de París cuenta con 194 Estados parte más la Unión Europea (195 partes en total).

359. Rajamani, L. & Wersman, J. (2021), *Ob. cit*. 502.

360. *Loc. cit.*

361. Sobre el alcance del término preocupación común de la humanidad véase: Bowman, M. (2010). «Environmental protection and the concept of common concern of mankind». En: M. FitzMaurice, M, D. Ong & P. Merkouris (eds.) *Research Handbook on International Environmental Law*. (p. 501) Cheltenham: Edward Elgar Publishing.

362. Brunnée, J. (2007). «Common areas, common heritage, and common concern». En: D. Bodansky., J. Brunnée & E. Hey. (eds.) *The Oxford handbook of international environmental law* (p, 566). Oxford: Oxford University Press. *«…the concept of common concern has the potential to significantly widen the range of environmental protection obligations owed erga omnes. All states would have concomitant legal interests and could demand others to*

Igualmente, el acuerdo realiza una referencia cruzada vital al destacar la conexión que existe entre la peligrosa aceleración de la temperatura planetaria y el impacto sobre las obligaciones asumidas en materia de derechos humanos[363], especialmente en el caso de grupos vulnerables. De allí que los Estados deban encaminar sus esfuerzos a controlar estas oscilaciones de las temperaturas a través del recorte o disminución en la intensidad de las emisiones para proteger los derechos humanos severamente afectados por el flagelo climático.

> «[…]las Partes deberían respetar, promover y tener en cuenta sus respectivas obligaciones relativas a los derechos humanos, el derecho a la salud, los derechos de los pueblos indígenas, las comunidades locales, los migrantes, los niños, las personas con discapacidad y las personas en situaciones vulnerables y el derecho al desarrollo, así como la igualdad de género, el empoderamiento de la mujer y la equidad intergeneracional»[364].

Otra calificación de importancia brindada por la arquitectura del Acuerdo de París lo constituye la redefinición del principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas, mediante el cual las distinciones se formulan a través de compromisos individualizados matizados por la auto diferenciación en la mitigación y en capacidades del Estados[365]. Esto deja abierta la determinación de la progresión de esas contribuciones, quedando implícitas en la delimitación que fije cada Estado Parte[366].

Además de la progresión en las estrategias de mitigación, se creó otro compromiso de carácter colectivo con relación a un requerimiento más ambicioso expandido hasta alcanzar a las medidas de adaptación y apoyo financiero[367] como coadyuvante para conseguir la meta de desaceleración climática. La clave se localiza en el respaldado brindado por el sistema de supervisión, comunicación y transparencia en el marco del cumplimiento de buena fe de los compromisos asumidos.

---

adjust their conduct accordingly. Of course, unless a treaty converts what might otherwise be an (emerging) obligation erga omnes into an obligation erga omnes partes, all the constraints of the law of state responsibility that were sketched earlier would still obtain. It may be more helpful, therefore, to conceive of the concept of common concern as entitling, perhaps even requiring, all states to cooperate internationally to address the concern».

363. Sobre un enfoque de derechos humanos y clima véase: Boyle, A. (2018), *Ob. cit*. 759-777.

364. Acuerdo de París Preámbulo.

365. Rajamani, L. & Wersman, J. (2021), *Ob. cit*. 502.

366. Rajamani, L. (2016). «Ambition and differentiation in the 2015 Paris Agreement: Interpretative possibilities and underlying politics». *International & Comparative Law Quarterly*, *65*(2), 493-514. Recuperado de: https://bit.ly/3soktln «The provision on progression is not prescriptive in relation to how progression (ie in form or rigor) is determined, and it is ambiguous on who determines progression, thus implicitly leaving progression to self-determination».

367. *Loc. cit.* En el mismo sentido se manifestó recientemente: CIDH. «Emergencia climática alcance de las obligaciones interamericanas en materia de derechos humanos», CIDH Doc. 3/21 (31 dic. 2021) § 4, 15 y 37.

A diferencia del Protocolo de Kioto, el cual establecía obligaciones sustantivas ejecutable a partir de procedimiento *top down*[368], el Acuerdo de París pasó a un enfoque fundamentado en la estructura *bottom up*[369] con particulares pinceladas de una ordenación *top down.* Es decir, una mezcla entre un enfoque descendente y un enfoque ascendente, con una forma de filtración progresiva en las que se incrementan los compromisos autoimpuestos.

A pesar de ser una fórmula innovadora donde se condensan compromisos voluntarios con procedimentales de naturaleza obligatorias[370] capaz de actualizar obligaciones internacionales para cada uno de los Estados[371], no tiene efectividad inmediata en cuanto a asegurar la meta establecida en el artículo 2.1.a) del Acuerdo. Primero, debido a que apenas en la COP26 se terminó de ajustar el esquema de funcionamiento del París Rule Book. Mientras que en la COP 27 se continuaban revisando los mecanismos de implementación de esta guía. Segundo, debido a que existe una brecha significativa en las emisiones declaradas en las comunicaciones nacionales y los recortes necesario para lograr el objetivo climático[372].

Originalmente, el Acuerdo de París[373] se publicitó como la solución mesiánica a la crisis climática, pero la realidad es que no existe una salida única para resolver la amenaza global. El sistema vigente pareciera proyectar menos

---

368. Manifestación del derecho administrativo global dentro del régimen del clima, mediante el cual se propone un enfoque descendente, más cercano al derecho internacional tradicional por medio del cual se establecen mecanismos de rendición de cuentas a nivel mundial, estamos ante la institucionalización de un auténtico régimen administrativo climático global. Para una mayor comprensión sobre las estrategias y teoría del diseño institucional véase: Kingsbury, B., Krisch, N. & Stewart, R. B. (2005). «The emergence of global administrative law». *Law and contemporary problems*, *68*(3/4), 43-44.

369. Brunnée., J. (2020), *Ob. cit*. 89. *«The 2007 Kyoto Protocol to the UNFCCC enshrined binding emission reduction targets for industrialized and transition countries and sought to reinforce these substantive obligations through robust procedural elements, including detailed inventory and reporting requirements and an automatic compliance assessment procedure. However, it proved impossible to turn the protocol into a long-term emissions regime for all countries*».

370. Atapattu, S. (2016). Climate Change, Human Rights, and COP 21. *Georgetown Journal of International Affairs*, 17 (2), p 48. «*The Paris Agreement adopts an innovative legal architecture that is unprecedented in international law. It encapsulates voluntary commitments made by states in a binding document that requires them to provide progress reports, update their commitments every five years, and account for their nationally determined contributions (NDCs)».*

371. *Loc. cit.*

372. Fernádez-Egea, R. M (14 Nov. 2021) «"Código rojo". La lucha contra el cambio climático: lo que se pudo y no se pudo avanzar en la COP 26 en Glasgow». *Aquiescencia*. Recuperado de: https://bit.ly/3HhKcTj.

373. Rodrigo, Á. J. (2018). «El Acuerdo de París sobre el cambio climático: un nuevo tipo de tratado de protección de intereses generales». En: S. Borràs Pentinat & P. Villavicencio. *El Acuerdo de París sobre el cambio climático: ¿Un acuerdo histórico o una oportunidad perdida?: análisis jurídico y perspectivas futuras* (pp. 69-98). Aranzadi Thomson Reuters.

avances que sus antecesores, ya que París está sustentado en compromisos híbridos o binarios, sostenidos por aproximaciones de derecho indicativo y flexibles[374]. Por lo tanto, una aproximación carente de la necesaria columna temporal para lograr anclar las temperaturas dentro del umbral considerado menos peligros para la humanidad.

A los fines de ilustrar el punto, solo debe pensarse en elenco de las obligaciones climáticas, entre ellas el compromiso de preparar y comunicar los esfuerzos asumidos en el marco de las Contribuciones Nacionales Determinadas (NDC), lo cual responde a ese *enfoque ascendente* mediante la adopción metas autodefinidas, aunque encausadas por negociaciones internacionales[375], así como por las evaluaciones de quinquenios[376], diseñadas para monitorear las progresiones iniciales, impulsadas por una perspectiva de análisis colectivo[377] y a largo plazo[378], *enfoque descendente*.

Si bien, París cuenta con mecanismos de facilitación y cumplimiento que están orientados a la consolidación de los esfuerzos nacionales, no están presentes sanciones o formulas coercitivas de acatamiento[379]. En consecuencia, si un Estado no cumple con los compromisos autoimpuestos simplemente se incrementan los efectos adversos del cambio climático sobre las personas y el

374. La protección del interés público global que representa la reducción de los riesgos asociados al cambio climático a través de los mecanismos establecidos en el *París Rule Book* es una manifestación normativa que refleja el desdoblamiento de categorías tradicionales mientras basa su efectividad en el refuerzo de mecanismos institucionales nacionales y del propio régimen internacional del clima. Sobre la nueva dimensión de las normas internacionales véase: Huesa, R. (2015). «La protección del interés público global: una nueva dimensión para las normas y obligaciones internacionales». En: N. Bouza., C. García., Á. Rodrigo & P. Pareja (coord.). *La gobernanza del interés público global: XXV Jornadas de la Asociación Española de Profesores de Derecho Internacional y Relaciones Internacionales*. Barcelona, (253-286). Tecnos.

375. Rajamani, L. (27/09/2021) «The International Climate Change Regime Evolution and Challenges» [video]. *Audiovisual Library of International Law | UN Web TV*. Recuperado de: https://bit.ly/39IlsUB. Véase el artículo 3 del Acuerdo de París. Igualmente, en este contexto deben considerarse los estándares de transparencia y comunicaciones establecidos en el marco de los artículos 4.2 y 4.8 del Acuerdo de París.

376. Artículo 4.9 Acuerdo de París: «Cada Parte deberá comunicar una contribución determinada a nivel nacional cada cinco años, de conformidad con lo dispuesto en la decisión 1/CP.21 y en toda decisión pertinente que adopte la Conferencia de las Partes en calidad de reunión de las Partes en el presente Acuerdo, y tener en cuenta los resultados del balance mundial a que se refiere el artículo 14».

377. Rajamani, L. (27/09/2021), *Ob. cit*.

378. Artículo 4.19 Acuerdo de París: «Todas las Partes deberían esforzarse por formular y comunicar estrategias a largo plazo para un desarrollo con bajas emisiones de gases de efecto invernadero, teniendo presente el artículo 2 y tomando en consideración sus responsabilidades comunes pero diferenciadas y sus capacidades respectivas, a la luz de las diferentes circunstancias nacionales».

379. Rajamani, L. (27/09/2021), *Ob. cit*.

medio vital, sin implicaciones para su exigibilidad ni en materia de responsabilidad internacional. Así, está probado que por sí solo el Acuerdo de París no es suficiente para modular el riesgo intrínseco del cambio climático peligroso.

De hecho, persiste una de las críticas sobre la regresión implícita en el Acuerdo de París en comparación con la CMNUCC y el brazo ejecutorio provisto por el Protocolo de Kioto, ya que este último estaba construido sobre la base de normas sustantivas desde donde nacían obligaciones internacionales con mayor exigibilidad para los países del Anexo I, en comparación el mecanismo vigente[380]. En este sentido, el Acuerdo de París, vino a funcionar más como una guía, en lugar de «una genuina acción climática global a largo plazo»[381]. París apuesta el 100 % a obligaciones de procedimiento que se transformarán progresivamente en vinculantes, todas ellas, basadas en la transparencia, en la gestión de datos y en la verificación de cumplimiento de los procedimientos en el establecidos[382].

Así, el Acuerdo de París por sí solo representa una intensión de progreso, pues dentro de su núcleo no existe la posibilidad de exigir de forma directa una determinada conducta climática a los Estados[383]. Aunque, es necesario reconocer que el enfoque binario[384] permite incluir provisiones más o menos vinculante[385], las cuales buscan romper con la falta de agilidad natural asociada a ciertos tratados multilaterales sobre protección de intereses generales de la comunidad internacional. Sin embargo, solo representará una carta ganadora

380. Rajamani, L. (2020), *Ob. cit*.90.

381. Brunnée., J. (2020), *Ob. cit*. 89.

382. *Loc. cit.*

383. En lo que respecta a la reducción concreta de emisiones, su configuración es claramente no vinculantes.

384. Véase a Shi, Y. (2016). «Climate Change and International Shipping: The Regulatory Framework for the Reduction of Greenhouse Gas Emissions». En: D. Freestone (ed.) *Legal Aspect of Sustainable Development* (pp. 118-176). Leiden: Brill |Nijhoff. *«Theoretically the Paris Agreement is a treaty within the meaning of the Vienna Convention on the Law of Treaties, and it can contain both binding and non-binding provisions based on whether legal obligations are created. According to the Paris Agreement, the communication of NDCs is legally binding, but their contents and targets are not and there is no legal mechanism to ensure the implementation of these commitments»*. La autora sigue el análisis desarrollado durante las fases preparatorias y negociaciones del Acuerdo de Paris de: Rajamani, L. (2015). «The devilish details: Key legal issues in the 2015 climate negotiations». *The Modern Law Review*, *78*(5), 826-853. Recuperado de: https://bit.ly/3wBlzOa. Quien tiene el acierto de remarcar que en efecto las partes estaban comprometidas en alcanzar un acuerdo vinculante, aunque sin establecer metas de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, así como evitando establecer otros compromisos mandatorios desde el punto de vista estrictamente legal.

385. Bodansky, D. (2015). «Legally binding versus non-legally binding instruments». En: S. Barrett, C. Carraro & J. De Melo. *Towards a workable and effective climate regime*. Recuperado de: https://bit.ly/3L43RXM.

si se le combina con la garantía temporal que brota de otras ramas del derecho. En pocas palabras, su efectividad a corto y mediano plazo está supeditada a la dimensión de exigibilidad y cumplimiento desde donde se le mire.

De allí que no todo está perdido, pues el propio Acuerdo de París abre la ventana a un abordaje integrado con otras áreas de especialidad dentro del derecho internacional. En este orden de ideas debe hacerse notar que, por primera vez en la historia del régimen de clima, se plasmó una referencia expresa a la sinergia normativa entre el cambio climático y los derechos humanos[386], aunque fuese limitada al preámbulo del acuerdo. Precisamente, esta convergencia entre parcelas jurídicas puede potenciar resultados tangibles en materia de contención, mitigación y adaptación climática.

Esta referencia viene a recordar que las obligaciones internacionales de los Estados sobre la protección de los derechos humanos permanecen vigentes[387]. Aunque la sola mención no crea obligaciones vinculantes dentro del Acuerdo, es esencial a los efectos de iluminar la interpretación del tratado. Debe recordarse que las formas de *hard law y soft law* en materia de derecho ambiental ha tenido la cualidad de ser un vehículo para generar consenso internacional, o incluso demostrarlo, además de propiciar una práctica consistente y extendida entre los Estados[388].

Esto quiere decir que, el Acuerdo de París puede convertirse en el punto de partida para la construcción de puentes con otros regímenes[389], lo cual permitiría operativizar salidas jurídicas anteriormente vetadas por la aplicación en puridad del régimen del clima. Siempre y cuando, las misma se articulen adecuadamente en el marco del deber de cumplimiento de obligaciones primarias sobre derechos humanos violados en un contexto climático, en particular con relación a grupos vulnerables[390].

Atendiendo a la síntesis presentada con relación al alcance del régimen del clima, resulta fundamental identificar otras herramientas jurídicas dis-

386. Atapattu, S. (2016), *Ob. cit*. 49. Aunque de los trabajos preparatorios *«contained a reference to human rights in both the Preamble and Article 2».*

387. Atapattu, S. (2016), *ob. cit*. 49. *«even in the absence of any reference to human rights in the agreement, human rights are still relevant because states' international obligations do not operate in a vacuum. States are required to give effect to their international obligations whether they are environmental, human rights, or economic in nature, and these obligations will be applicable when fulfilling their obligations under climate agreements».*

388. Boyle, A. (2019). «The Choice of a Treaty. Hard law versus Soft Law». En: S. Chesterman, D. Malone, S. Villalpando (eds.) *The Oxford Handbook of United Nations Treaties.* (p. 103). Oxford: Oxford University Press.

389. *Loc. cit.*

390. Atapattu, S. (2016), *Ob. cit*. 50. *«In addition, the agreement refers to Mother Earth and climate justice, both of which are important to indigenous communities and other vulnerable groups… its inclusion suggests that the international community is willing to recognize that some states and groups may be disproportionately affected as a result of climate change».*

ponibles en el presente[391], pero desde una visión holística. Esto a los fines de poner a prueba la viabilidad de las nuevas fórmulas de contención de la amenaza climática, entre ellas la litigación estratégica[392]. El objetivo es mejorar el acceso a la justicia frente a un fenómeno ambiental complejo, a la par de impulsar una transformación estructural del abordaje del sistema climático actual.

Si se logran detectar las falencias en los mecanismos disponibles, se podrá concebir una reingeniería del enfoque jurídico y adecuarlo a las necesidades demandas por la sociedad frente a emergencia climática. Los tiempos actuales exigen a los principales emisores de gases de efecto invernadero[393], incluidos aquellos Estados catalogados como grandes países en desarrollo, la incorporación de medidas ambiciosas de control de emisiones[394], así como también se requiere de un actuar diligente por parte de los países menos desarrollados. La cuestión es como presionar a los todos Estados para adoptar medidas eficientes en este sentido.

La crisis climática requiere de acciones inmediatas y mecanismo legales que encaminen a los miembros de la comunidad internacional a mantener la temperatura entre los 1.5 °C y por debajo de 2 °C a niveles pre-industriales, avanzando sustancialmente hacía el objetivo de la descarbonización de las economías a nivel global. No obstante, hasta ahora, las instituciones de gobernanza climática, las organizaciones internacionales, así como la mayoría de los Estados se han caracterizado por un actuar con excesiva resisten-

391. Bétaille, J. (2021), *Ob. cit*. 15 *«Parmi elles, les recherches relatives au droit et à la justice ont un rôle déterminant à jouer dans la mesure où la régulation juridique est l'un des principaux outils utilisés par la puissance publique en faveur de la protection de l'environnement et de la transition écologique».*

392. Coral, A., Londoño B. & Muñoz, L. (2010). «El concepto de litigio estratégico en América Latina: 1990-2010». *Vniversitas*, *59*(121), 49-76. Recuperado de: https://bit.ly/3vwr1iN. «Tanto en países que pertenecen a la tradición jurídica del common law como en países de tradición romano-germánica, diversos grupos, como clínicas del derecho, ONG y otros han acudido a estrategias de litigio para lograr cambios importantes y estructurales en lo concerniente a demandas de justicia» Sobre litigación climática véase: Savaresi. A & Setzer, J. (2021), *Ob. cit*... Véase también: ESCR-NET. (2020) «On climate justice and human rights: reflections from ESCR-NET members». Recuperado de: https://bit.ly/3nKu701.

393. Nevitt, M. (2020). «Is Climate Change a Threat to International Peace and Security?» *Michigan Journal of International Law*, *42*, 2021. Señala que: *«China, for example, contributes more Greenhouse Gas emissions than any other nation on an annual basis, while the U.S. is the largest GHG emitter on a historical basis».* Véase Tambien: Boyle, A. (2018), *Ob. cit*. *«If climate change is to be tackled successfully then China, India and other industrialized developing States have to be brought into the greenhouse gas emissions and carbon management control regime. Paris does at least reflect reality: it recognizes that climate change is not caused only by developed States and that it cannot meaningfully be addressed by simplistic ideas of historic responsibility. This development is an important milestone in the evolution of the UN climate regime».*

394. Boyle, A. & Ghaleigh, N. S. (2016), *Ob. cit*. 31.

cia[395] ante una problemática que requiere respuestas coordinadas, ágiles, dinámicas, precisas y rápidas[396].

Sin lugar a duda, los bloques regionales[397], así como las organizaciones internacionales[398] cuyas funciones están intrínsecamente vinculadas al tratamiento ambiental y del cambio climático por el propio objeto de su actividad, necesitan adoptar un rol coordinado más activo que marque la pauta de contención sobre las emisiones para abordar con mayor efectividad el riesgo y el daño derivado del calentamiento global[399], contribuyendo a la modulación las conductas climáticas estatales que afectan los derechos humanos.

Es conveniente traer a colación que los temas que involucran el medioambiente, atmosfera y cambios en el entorno, son fenómenos en pleno desarrollo, por lo cual implican un análisis jurídico complejo, influenciados por una extensa variedad de disciplinas. De allí que es fundamental ajustar los mecanismos existentes y plantear nuevas estrategias que garanticen estándares mínimos de eficiencia sostenible en materia climática, donde se robustezca el sistema de protección humana y ambiental.

No es de extrañar que los informes científicos reafirmen la necesidad de reevaluar y mejorar las estrategias de mitigación y adaptación actuales. En pocas palabras los resultados sobre la condición planetaria evidencian la incapacidad de alcanzar la meta trazada en el Acuerdo de París, su efectividad sigue en tela de juicio. Incluso hasta el más optimista de los escenarios, donde se incluye la contabilización de las emisiones negativas, aparece lejano el anclaje de la temperatura de la Tierra en 1.5 °C.

En cualquier caso, todos los escenarios proyectan daños irreversibles para el planeta, pues en tales condiciones implican la perdida de ecosistemas, biodiversidad y la alteración de patrones meteorológicos peligrosos[400]. En

395. Debe recordarse tal como señala: Rajamani, L. (2020), *Ob. cit*. 23. *«…the issue of climate change has proven remarkably resistant to resolution. There are many reasons for such resistance. Climate change poses a complex, polycentric, and "super wicked" policy challenge24. Climate change is caused by a wide range of production and consumption processes. Its causes and effects are global, and require complex collective action. It can be addressed only if all the major GHG emitters are willing to undertake potentially costly, large-scale transformations in their economic and energy systems. Yet, since the benefits of climate change mitigation are shared by the international community as a whole rather than just the countries that take action, the major emitters have little incentive to act on their own».*

396. Boyle, A. & Ghaleigh, N. S. (2016), *Ob. cit*. 31. Señala que las políticas climáticas requieren coordinación dentro y fuera del sistema de naciones unidas.

397. Comunidad Andina de Naciones, MERCOSUR, ASEAN

398. Entre ellas la Organización de las Naciones Unidas, Grupo Banco Mundial, Unión Europea, Organización de Estados Americanos, entre muchas otras.

399. Rajamani, L. (2020), *Ob. cit*. 28-29.

400. IPCC Report (2018), *Ob. cit*.

consecuencia, cualquier análisis jurídico planteado con relación al cambio climático debe tener en cuenta el importante desafío asociado a la protección de los más vulnerables a esta inminente realidad, así como las vías disponibles de acceso a la justicia climática y la creación de incentivos para propiciar la judicialización, como parte de la estrategia de contención de la amenaza.

Claramente, la reducción de las emisiones solo es una meta posible si el hombre es capaz de readaptar su estilo de vida y sus métodos de producción hacía estándares sostenibles. A lo cual debe sumarse el rol de una sociedad civil avocada en la exigencia de cambios sustanciales a los creadores de las políticas climáticas que permitan superar la crisis ecológica. La civilización del siglo XXI necesita encontrar una forma viable de relación con el planeta[401]. De allí que un llamado a la acción desde los derechos humanos, concretamente desde los tratados regionales, así como desde los mecanismos universales de protección permitiría fortalecer los puentes hacia la generación de compromiso sustentados por la exigibilidad de estrategias climáticas concretas.

Esta visión favorece una interpretación articulada que encaja con la más reciente aproximación integracionista[402] donde la protección de derechos humanos, la estabilización del clima, la preservación de la madre tierra y el acceso a una justicia ambiental expandida van de la mano con los cambios exigidos por la sociedad contemporánea, es decir hacia un balance intergeneracional del espacio vital donde habita el hombre[403].

El problema del impacto del cambio climático sobre el hombre y medio natural requiere una aproximación que permita suplir el vació entre los acuerdos multilaterales del clima y la protección efectiva de los individuos. Este acercamiento intermedio, lo propician especialmente los tribunales regionales en materia de derechos humanos, pues se erigen como foros internacionales accesibles a los individuos[404], quienes al ver bloqueada la tutela de derechos dentro de la jurisdicción nacional pueden acudir a la internacional.

---

401. Lindsey, R. (14 ago. 2020). «Climate change: atmospheric carbon dioxide». *National Oceanographic and Atmospheric Administration, News & Features*. Recuperado de: https://bit.ly/3JABAYn La cantidad promedio de dióxido de carbono alcanzó en 2019 la cantidad de 409.8 partículas por millón, un volumen sin precedentes.

402. Proelss, A. (2010), *Ob. cit*. 65-88.

403. Meyer, L. H. (Ed.). (2017). *Intergenerational justice*. Introduction. Routledge.

404. Petit, E.W. (2020). «Derechos humanos y pandemia: entre normas excepcionales y excepciones a las normas». En: G.C. Bravo. (Ed.), *Coronavirus y Derecho en el Estado de Alarma* (p. 165). Sevilla: REUS «…en el ámbito de derechos humanos existe la posibilidad de una jurisdicción abierta a los particulares, en el marco de tratados específicos». Sobre el acceso del individuo véase también: Hampson. F., Martin, C. & Viljoen, F. (2018), *«Inaccessible apexes:* Comparing access to regional human rights courts and commissions in Europe, the Americas, and Africa». *International Journal of Constitutional Law*, 16(1), 161-86.

Además, los tratados regionales dejan filtrar los compromisos climáticos dentro de la actualización temporal de sus normas, contribuyendo al cumplimiento de sus obligaciones con la exigibilidad que caracteriza a cada sistema de protección de derechos humanos. De allí que los sistemas regionales como el Interamericano, el Africano y el Europeo son una puerta para impactar las políticas y planes de acción climática a escala regional.

CAPÍTULO SEGUNDO

APROXIMACIÓN JUDICIAL DEL TRATAMIENTO CLIMÁTICO DESDE EL NORTE Y EL SUR GLOBAL

En este capítulo se analiza el problema multinivel del cambio climático desde el análisis discursivo de los litigios estratégicos. La primera parte profundiza en las propuestas jurídicas provenientes de *landmark cases* adjudicados dentro de las jurisdicciones de la India, Países Bajos, Colombia y Paquistán, en las cuales se ha aplicado un esquema de protección basado en los derechos humanos. La segunda parte, se concentra en peticiones climáticas pendiente de decisión y en etapa de apelación, inspiradas en los litigios adjudicados favorablemente, se exploran demandas presentadas en la India, Francia, Perú, Canadá y Corea del Sur. Por último, la tercera se exponen dos solicitudes de tutela climática presentadas ante los órganos de protección internacional, Comité de Derechos del Niño, Comité de Derechos Humanos y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

Recorrido de las litigaciones climáticas a través de la jurisdicción Interna de la India, Países Bajos, Colombia y Pakistán

Las emisiones actuales de CO_2 a la atmósfera constituyen un daño significativo al medioambiente, el cual se ha ido extendiendo en el tiempo hasta causar una mella significativa sobre los derechos humanos. A pesar de la codificación internacional existente, el tratamiento efectivo del problema sigue representando un desafío para la ciencia, la tecnología y para el derecho. La búsqueda de respuesta desde el ordenamiento tanto nacional como internacional es una constante, por lo cual persiste el interés de localizar soluciones alternativas para minimizar el riesgo asociado con el cambio climático.

Cuando se habla de acceso a la justicia en materia climática, en primer término, debe destacarse que este fenómeno tiene la capacidad de expandir las

nociones tradicionales de justicia ambiental[405], enfocando su despliegue en las vulnerabilidades[406], el funcionamiento cultural y la resiliencia de las comunidades más amenazadas por su impacto[407]. Es así como el acceso a la justicia climática funciona como mecanismo de acción que permite satisfacer necesidades mínimas y proteger derechos, mientras refuerza las garantías fundamentales de las personas y los colectivos afectados en su núcleo más profundo.

En segundo lugar, debe recordarse que la justicia climática encuentra fundamento en los derechos sociales y a través de ellos se atiende al problema desde una perspectiva que permite proteger los derechos e intereses desde un enfoque intergeneracional[408]. Así surgen alternativas desde las constituciones nacionales y los tratados sobre derechos humanos para modular el riesgo, a la vez que se consideran los elementos básicos de la justicia distributiva[409]. De allí que el acceso a la justicia ambiental y en particular, a la justicia climática intergeneracional[410] se erigen como una vía idónea para avanzar

---

405. Schlosberg, D. (2013). «Theorising environmental justice: the expanding sphere of a discourse». *Environmental politics*, *22*(1), 37-55. En: https://bit.ly/3qtycXK. *«Examined in this way, as environmental justice extends into climate justice, it pushes beyond the qualifier's 'environment' or 'climate', and into an understanding that justice itself depends on a stable and predictable set of environmental conditions».*

406. Sobre la vulnerabilidad véase: Marcos del Cano, A.M (2020), *Ob. cit*. 17-33. La autora señala que en los derechos humanos el concepto de vulnerabilidad entra a corregir la noción de autonomía mientras que a su vez concreta esas exigencias atadas a la dignidad humana.

407. UNEP. (2023). «Environmental rule of law: tracking progress and charting future directions». UNEP. Recuperado de: https://doi.org/10.59117/20.500.11822/43943. *«Environmental rule of law is necessary for a justice system to be legitimate and fair […] The justice system encompasses processes and institutions for resolving disputes, addressing grievances, holding violators accountable and providing reparations, remediation, restoration and compensation for damage. In addition, the justice system ensures equity and protects the rights of affected communities, including populations that have been marginalized».*

408. Caney, S. (2005). «Cosmopolitan justice, responsibility, and global climate change». *Leiden journal of international law*, *18*(4), 747-775. *«[…]an adequate theory of justice in relation to climate change must explain in what ways global climate change affects persons' entitlements, and it must do so in a way that (i) is sensitive to the particularities of the environment; (ii) explores the issue that arise from applying principles at the global rather than the domestic level; and (iii) explores the intergenerational dimension of global climate change»*; Meyer, L. H. (Ed.). (2017). *Ob. cit*. xviii - xxi.; UNEP (2023). *Environmental…Ob. cit*. 110. *«Framing interests of future generations in terms of obligations or benefits instead of rights is one way to navigate around the key conceptual problem in granting rights to future generations: the fact that they do not (yet) exist».*

409. Sobre el enfoque de justicia a través de la distribución igualitaria de uso de la atmosfera y distribución de las emisiones per-capital véase: Jamieson, D. (2010). «Ethics, public policy, and global warming». En: S. Gardiner, S. Caney *et al* (eds). *Climate ethics: Essential readings* (pp.77-86). Oxford: Oxford University Press. En el mismo sentido: Shue, H. (1999). «Global environment and international inequality». *International affairs*, *75*(3), 531-545.

410. Rogers, N. (2023). Intergenerational *Ob. cit*, 1-8.; Meijers, T. (2023). Climate Change and Intergenerational Justice. In *Handbook of Philosophy of Climate Change* (pp. 1-23). Cham: Springer International Publishing.

hacia la consolidación de un ámbito de protección que ampare, al individuo y colectivos vulnerables, mientras se promueve la sostenibilidad ambiental.

Los litigios son uno de los puentes que comunica la justicia con su vertiente climática, a través de este transitar judicial[411] se crea conciencia sobre un problema global sin precedente, así como se mueve al derecho más allá de los límites tradicionales con el fin de acompañar el proceso de cambio social[412]. Por una parte, los litigios climáticos orientan las conductas estatales y por la otra dan respuestas a las demandas ambientales de la sociedad repensando el alcance del contenido normativo vigente[413].

La justicia climática involucra el estudio de casos que no se encuentran necesariamente basados en el discurso tradicional de derecho ambiental de los primeros tiempos, donde se localizaba con precisión la fuente de generadora de la contaminación[414]. Esta visión ha evolucionado a través del trabajo de los movimientos ambientalista, la participación ciudadana y la teorización normativa del derecho ambiental, los cuales buscan dar respuesta al tratamiento de serias amenazas antropogénicas que exacerban el riesgo de daño hacía el hombre y diversos componentes de la naturaleza[415].

El derecho al acceso a procesos climáticos intercepta diversos problemas de la justicia[416]. De allí que su obstaculización también exacerba las desigual-

411. Véase el creciente movimiento de constitucionalismo climático a nivel global en: Ghaleigh, N. S., Setzer, J. & Welikala, A. (2022). «The complexities of comparative climate constitutionalism». *Journal of Environmental Law*, *34*(3), 517-528. Los autores destacan especialmente las constituciones latinoamericanas de República Dominicana (artículos 67 y 194), Venezuela (preámbulo y artículo 127), Ecuador (artículo 414), Bolivia (artículos 9.6, 33, 108.15 407), y Cuba (artículos 16 y 75), cuyas disposiciones normativas incluye de forma expresa la protección frente a la cuestión climática.

412. Sobre justiciar climática a través del litigio estratégico véase: Tigre. M.A., Carvarho. D. & Setzer, J. (21 Dec. 2021). «IEA v. Brazil: When a Court accepts the legally disruptive nature of climate change». *Climate Law Blog Sabin Center for Climate Change Law*. Recuperado de: https://bit.ly/32iKObu. *«Such explicit recognition can be important in raising awareness about the climate crisis and might have consequences in how a court treats scientific evidence and uncertainties».*

413. Sobre el estatus del acceso a la justicia y el rol del poder judicial en las litigaciones climática véase: UNEP (2023). *Environmental…Ob. cit*. 123-128.

414. Vanderheiden, S. (2016). «Environmental and climate justice». En: T. Gabrielson, C. Hall, *et al* (eds.) *The Oxford handbook of environmental political theory* (pp. 321-332). Oxford: Oxford University Press, p. 321.

415. *Loc. cit.*

416. Atapattu, S. (2016), *Ob. cit*. 52. *«Climate justice intersect with a multitude of other justice issues, including human rights that are unenforced, dependence on an ever- expanding global economy that has already outgrown its resource base, international legal architecture that rewards the status quo*, *and political inertia. To this list, one can add poverty, inequality, various forms of discrimination, and historic marginalization. These forces act together to create the myriad forms of injustices that are in existence today. Climate change will exacerbate these existing inequalities, creating a perfect storm».*

dades existentes. Por lo tanto, la sola posibilidad de accionar contra el Estado para revisar o supervisar el método de abordaje empleado frente a la problemática del cambio climático, acerca a las personas a la protección de otros derechos[417], así como también propicia una transición desde el concepto de conciencia individual hacía la conciencia colectiva.

En lo que respecta a los litigios climáticos instaurados en las diversas jurisdicciones nacionales, en el Norte Global el centro de atención continúa girando sobre los avances propuestos por Estados Unidos, Reino Unido, Países Bajos, Nueva Zelanda y Australia[418]. Mientras que, en el Sur Global, capturan particularmente la atención las progresistas decisiones provenientes de la India, Pakistán y Colombia, así como el florecimiento de peticiones climáticas surgidas de espacios geográficos con poblaciones especialmente vulnerables ante los devastadores efectos del cambio climático[419].

Es importante tener en cuenta que hoy por hoy existen aproximaciones jurídicas distintas, aunque con claros puntos de convergencia. Debe destacarse que especialmente Asia Pacífico ha develado con éxito mecanismos alternativos para la presentación de litigios climáticos[420]. Tanto las querellas presentadas en el Norte Global como en el Sur Global representan una oportunidad extraordinaria para comprender la orientación y el desarrollo actual de la justicia transnacional climática[421].

Una comprensión integrada de los audaces abordajes propuestos tanto por el Norte Global y del Sur Global es fundamental para contribuir a la lucha

---

417. La cuestión de la efectividad de los procesos está asociada al diseño legal de las normas, pero más importante aún depende de la capacidad y efectividad de las instituciones para su implementación. Como bien lo señala UNEP (2023). *Environmental…Ob. cit*. 29. *«Strong and capable institutions are a prerequisite for environmental rule of law. Effective institutions have been empirically linked to better environmental outcomes, including lower levels of pollution, reduced greenhouse gas emissions and better water quality (Dasgupta and De Cian 2018). Beyond their role in enforcement, institutions provide resources and guidance to improve capacity for compliance, engage the public to foster trust and inform rulemaking, and monitor implementation and effectiveness of environmental law to ensure accountability and identify areas for improvement».*

418. Peel, J. & Lin, J. (2019). «Transnational climate litigation: the contribution of the global South». *American Journal of International Law*, *113*(4), 679-726, 681.

419. Peel, J. & Lin, J. (2019), *Ob. cit*. 682. «[…] a fuller understanding of transnational climate litigation – one than consider Global South – underscores that judicial contribution to global climate governance is not purely a Global North phenomenon».

420. Lin, J. & Kysar, D. (2020). *Climate change litigation in Asia Pacific*. Cambridge: Cambridge University Press. (pp. 1-414). Véase Tambien: Ganguly, G., Setzer, J. & Heyvaert, V. (2018). «If at first, you don't succeed: Suing corporations for climate change». *Oxford Journal of Legal Studies*, *38*(4), 841-868. Recuperado el 30 de noviembre de 2023 de: https://doi.org/10.1093/ojls/gqy029. Los autores identifican como un trampolín clave de la Segunda ola de litigaciones climática el caso Philippines Reconstruction Movement and Greenpeace v Carbon Majors Case No CHR-NI-2016-0001/2015.

421. Lin, J. & Kysar, D. (2020), *Ob. cit*. 3.

frente al cambio climático desde el derecho sustantivo y objetivo, a la par de fomentar el acceso a la justicia[422]. Estas decisiones nacionales son *landmark cases* con implicaciones en la escena global[423]. Esto debido a que los tribunales nacionales han diseñado el camino y las estrategias jurídica necesarias para hacer posible que los órganos jurisdiccionales internacionales tengan sobrados argumentos para adjudicar favorablemente litigios de esta naturaleza.

El progresista entendimiento del tema climático en las jurisdicciones domesticas permite localizar métodos holísticos que puede ser trasladados y aplicados a nivel internacional. Las decisiones climáticas favorables evidencian un proceso en crecimiento enraizado en los derechos humanos[424], el cual empieza a superar la falta de exigibilidad de obligaciones de los mecanismos asociados a los instrumentos de mitigación y adaptación de contenido exclusivamente climático.

Un análisis comparativo de este tipo de litigios permite identificar las diferentes técnicas de razonamiento empleadas en la actualidad por los jueces[425]. El estudio de los casos desde diferentes legislaciones expone el discurso actual de la justicia ambiental y climática en un contexto cultural diverso, donde se puede identificar si está operando o no una transformación de la narrativa jurídica con relación al cambio climático[426].

Resulta de vital importancia tener en cuenta la contribución de los tribunales que han abordado la problemática climática, ya que generan un cambio de paradigma que influye más allá de las partes del proceso. Estas decisiones proporcionan coherencia y consistencia sobre la interpretación y aplicación tanto de normas como de principios legales a nivel nacional e internacional[427].

---

422. Peel, J. & Lin, J. (2019), *Ob. cit*. 682.

423. Payandeh (2021) «The role of courts in climate protection and the separation of powers». En: W. Kahl & M. Weller (eds.) *Climate change litigation* (p. 67). Munchen: Beck | Hart | Somon.

424. Woods, K. (2016). «Environmental human rights». En: T. Gabrielson, C. Hall, *et al* (eds.) *The Oxford handbook of environmental political theory* (pp. 333-345). Oxford: Oxford University Press. *«The advocate of human rights may rightly point out that human rights do not constitute a total ethical theory -They are minimum standards because they are the most basic and fundamental, and thus, most morally urgent demands. One need not stop there. It is perfectly consistent to defend human rights approach to securing some particular environmental goods at the same time as advocating a stewardship approach (say) which takes us beyond de minimum».*

425. Sobre análisis comparativo y legitimidad de fallos con alto componente científico y tecnológico en el campo del derecho ambiental véase: Sulyok, K. (2020). *Science and Judicial Reasoning: The Legitimacy of International Environmental Adjudication*. Cambridge: Cambridge University Press. (p.13, 141-144).

426. Vanderheiden, S. (2016), *Ob. cit*. 321.; Ganguly, G., Setzer, J. & Heyvaert, V. (2018). *Ob. cit*.

427. Peel, J. & Osofsky, H. (2015). *Climate change litigation*: Regulatory Pathway to cleaner energy. Cambridge: Cambridge University Press. (p. 16) *«Courts can play a significant role in shaping individual decisions at this level, both through the direct legal change their judg-*

Aunque no se desconoce que existen críticas asegurando que estos juicios generan expectativas ilusorias.

Sobre los litigios climáticos nacionales seleccionados, debe adelantarse que en ellos se localiza un alto componente científico en sus decisiones. Precisamente, este reconocimiento en el campo del derecho le brinda legitimidad a esos hallazgos a la hora de exigir la incorporación de acciones contundentes dentro de las políticas públicas nacionales para enfrentar la problemática climática, en el marco de una relación simbiótica entre legitimidad y efectividad de los fallos[428]. Además, es posible apreciar un abordaje multidisciplinar que favorece a la protección humana y ambiental.

Los casos líderes tratados a continuación tienen la capacidad de iluminar el camino para trabar litigaciones nacionales e internacionales mediante «la elaboración de un procedimiento que asegure la racionalidad del derecho»[429], es decir, bajo una estructura jurídica a seguir para hacer frente al cambio climático desde el campo judicial, donde las potenciales líneas de acción sirven de vehículo para permitirle al juez ejercer su rol de garante, así como para proteger a los individuos y colectivos afectados por el impacto del cambio climático.

El análisis de los fallos locales expuestos a continuación ofrece una panorámica refrescante, con mayor capacidad de concreción que los propios instrumentos consensuados sobre el clima, incluso para aquellos países que no se encuentran considerados en las metas de recorte del Anexo I de la CMNUCC, cuestión de capital importancia considerando que cada día se acorta la justificación de los países en desarrollo para adoptar medidas de contención climática.

Este análisis discursivo conducirá a una propuesta de tratamiento para la cuestión específica de la degradación ambiental de los sumideros naturales de carbono, utilizando para ello la vía procesal disponible a nivel interno o internacional. A lo largo de este apartado se realizará un análisis de las decisiones más representativas donde se ha impartido justicia climática[430] a través del modelo argumentativo utilizado por los tribunales objeto de estudio.

---

ments bring about and through the indirect influence they exert over boarder social norms and value. Moreover, over time, a series of judicial opinions can aid in providing coherence to policies and decision making through courts' consistent application of legal principles and consolidation of a body of case law […] will continue to make a critical contribution in addressing the large, globalized problem of climate change».

428. Véanse las notas introductorias de: Cohen, H., Grossman, N., *et al.* (2018). *Legitimacy and International Courts*. Cambridge: Cambridge University Press.

429. Alexy, R. (1994). *El concepto y la validez del derecho*. Barcelona: Gedisa.

430. Donde se revisará si los casos han sido decididos de forma correcta, lo que implica en palabras de: Pérez-Luño, A. (2009) «¿Qué significa Juzgar?» *DOXA Cuadernos de Filosofía del Derecho*, 32. (151-176). Que la labor de juzgar sea el resultado de «la síntesis de unas actividades de percepción, de argumentación racional y decisión».

Hasta el momento de escribir esta sección se han procesado un total de seiscientos treinta y ocho (638) casos relacionados con el cambio climático en cincuenta y un (51) jurisdicciones alrededor del mundo[431], incluyendo peticiones climáticas centrales y periféricas presentadas en foros nacionales. Mientras que ante órganos jurisdiccionales internacionales se han presentado ciento treinta (130) peticiones de tutela climática[432]. Los casos de mayor interés para este libro corresponden a reclamaciones relativas a los grupos vulnerables afectados en sus derechos humanos[433].

A la cifra anterior deben sumarse, las peticiones presentadas dentro de la jurisdicción de Estados Unidos, tan solo en este país se han instaurado dos mil sesenta y seis (2066) procesos judiciales[434] y cuasijudiciales basados en el Estatuto Federal, en Leyes Estatales, así como casos contenciosos, fundamentados en el Derecho Federal de los Estados, acciones de *public trust claim*, procedimientos vinculados con regulaciones de seguridad y finanzas, revisión de acuerdos comerciales, demandas fundadas en leyes y regulaciones usadas para impulsar esfuerzos de adaptación en los diferentes niveles de gobierno y por parte de actores privados[435]. Estos casos quedan expresamente excluidos de la investigación debido a que escapan del ámbito de protección aquí estudiado.

Tan solo entre el año 2018 y 2023 ha aumentado el número de casos climáticos[436] dentro de jurisdicciones nacionales. Aunque esto es un signo positivo que refleja la evolución sobre el tratamiento jurídico del tema, también deja en evidencia la disparidad entre las ambiciones climáticas y la falta de

---

431. Véase: SABIN & Columbia University (2023). «Climate Change Litigation Data bases | Global climate change Litigation». Recuperado (última consulta 1 septiembre 2023) de: https://climatecasechart.com/non-us-climate-change-litigation/.

432. Hasta el 29 de agosto los casos se encuentran distribuidos de la siguiente manera: Naciones Unidas (19), Unión Europea (69), International Centro Internacional para la Resolución de Controversias sobre Inversiones /CIADI (9), CIJ y CPI Internacionales (5), Cámara de Comercio de Estocolmo (3), organización Mundial del Comercio (3), Tribunal de Justicia de África Oriental (1), Comité Europeo de Derechos Sociales (1), Tribunal Europeo de Derechos Humanos (12), Sistema Interamericano de Derechos Humanos (6), ITLOS (1), Corte Permanente de Arbitraje (1). Véase SABIN & Columbia University. «Climate Change Litigation Data bases | Climate Change Litigation Data bases | Global climate change Litigation»

433. Para una introducción sobre las litigaciones climática planteada hasta 2014 véase: Wilensky, M. (2015). «Climate change in the courts: an assessment of non-US climate litigation». *Duke Environmental Law Policy & Forum.*, *26,* 171-179.

434. SABIN & Columbia University (2023). «Climate Change Litigation Data bases | Climate Change Litigation Data bases | Global climate change litigation».

435. *Loc. cit*. La decisión climática de mayor impacto hasta la fecha de esta investigación dentro de Estados Unidos es Montana District Court. Held v. Montana CDV-2020-307, judgment (14 Aug. 2023). (Recuperado el 29 de agosto de 2023) de: https://climatecasechart.com/case/11091/.

436. Asociados a los criterios de selección de casos analizados en esta obra.

compromiso por parte de la mayoría de los Estados para dar cumplimiento a la meta de mantener la temperatura de la tierra a 1.5 grados.

Estos casos representan una muestra fehaciente de la creciente brecha entre los caminos seguidos por los diferentes países que integran la comunidad internacional, a pesar de que todos ellos forman parte del mismo esquema de regulación climática. De allí que resulta enriquecedor indagar sobre la creatividad y el uso de las formas de argumentación jurídica desplegada por los actores procesales para amparar sus derechos dentro de los distintos sistemas pertenecientes al derecho continental, derecho civil y mixto, con el objeto de mejorar las posibles argumentaciones judiciales.

A los fines de seleccionar los litigios expuestos a continuación se aplicaron los criterios siguientes: i) el sujeto demandado es el Estado, por lo cual se excluyen en este trabajo las litigaciones climáticas contra empresas, ii) tienen un enfoque basado en derechos humanos y iii) son litigaciones climáticas de tipo central. Estos tres parámetros permiten identificar las fórmulas argumentativas con el fin de trasladarlas a litigaciones internacionales en un contexto de derechos humanos.

Del universo de casos existente, se efectuará un análisis de cuatro decisiones correspondientes a jurisdicciones nacionales localizadas en Asia, Europa y América. Las sentencias bajo análisis tienen la particularidad de haber sido objeto de interés, para el sector judicial, académico y la sociedad civil, ya que dan cuenta del despertar de mayores demandas socioambientales ante la inercia de las autoridades nacionales e internacionales, quienes en principio tenían delegada la tarea de recortar las emisiones para sumar al anclaje de la temperatura del planeta.

Los casos de estudio seleccionados resumen una interesante composición de vías de acceso a la justicia climática, principalmente a través del constitucionalismo nacional[437], reforzado con el reconocimiento y adopción de normas internacionales[438]. Mientras que las más novedosas solicitudes de tutela inspiradas en estos casos tienden a la incorporación del mecanismo binario del Acuerdo de París[439], reforzado por las obligaciones de derechos humanos.

Por lo antes expuesto se analizará el discurso jurídico aplicado a las decisiones del Tribunal Nacional Verde *Green National Tribunal on its own motion v. State of Himachal Pradesh, Urgenda Foundation v. State of the Netherlands*

437. Ramírez, J. (2021). «El cambio climático frente al derecho internacional». *Revista Electrónica De Derecho Internacional Contemporáneo*, (4). Recuperado de: https://bit.ly/3Au0ROw. El autor menciona como ejemplo las Constituciones de Sudáfrica (1996), Costa Rica (1949) y Portugal (2005).; Carvalho, D. W. & da Rosa, R. S. M. (2023). «Climate Constitutionalism as a Foundation for Climate Litigation in Latin America». *Journal of Human Rights Practice*. Recuperado de: https://doi.org/10.1093/jhuman/huad055.

438. *Loc. cit.*

439. *Loc. cit.*

(2015-2019), *Futuras Generaciones v. la Presidencia de la República de Colombia et al* (2018), y *Leghari v. Federation of Pakistan* (2015-2018).

Tribunal Nacional Verde bajo su propia iniciativa v. State of Himachal Pradesh (2014)

A pesar de que la India es considerada el tercer emisor de gases de efecto invernadero solo por detrás de Estados Unidos y China, es uno de los países que cuenta con mayor nivel de desarrollo jurídico con relación a la protección del medio ambiente. En este caso, la instancia utilizada para establecer estándares mínimos de emisiones sobre el área que comprende el glaciar de *Rohtang Pass,* un espacio rico en biodiversidad, pero de particular sensibilidad ecológica localizado en Los Himalaya, ha sido el Tribunal Nacional Verde.

Este órgano jurisdiccional especialmente creado para gestionar conflictos ambientales[440], ha sido pionero a nivel mundial al pronunciarse sobre el problema de las emisiones de carbono negro avocándose al conocimiento del asunto a través de una moción propia. El Tribunal observó con preocupación el deterioro progresivo al cual estaba siendo sometido el paso de *Rohtang,* debido a la alta densidad turística que recibía la zona, generando un uso inadecuado de los recursos naturales, así como un desarrollo poco sostenible de infraestructura turística[441].

Hechos del caso por los cuales se avoca el Tribunal

Según los reportes de centros de investigación especializados en la India, el 40 % del deshielo del principal glaciar de la zona respondía a la incidencia del fenómeno del carbón negro[442] sobre las capas de nieve. Esto a razón de: i) el aumento de los picos de emisiones de carbono negro coincidía con los años de mayor afluencia de vehículos turísticos y de carga pesada en la zona. ii) los altos niveles de emisiones (superiores a los permitidos por ley nacional), eran una fuente altamente confiable de generación de las partículas oscuras, posteriormente depositadas en la nieve, acelerando su fusión temprana. El resultado de estos eventos desembocó en el desequilibrio del hábitat, de la flora y de la fauna local.

---

440. Nain Gill, G. (2010). «A green tribunal for India». *Journal of environmental law, 22 (3), 461-474.*

441. Green National Tribunal on its own motion Sher Singh v. State of Himachal Pradesh *et al*. (6 Feb. 2014). Recuperado de: https://climatecasechart.com/non-us-case/sher-singh-v-state-of-himachal-pradesh/

442. Gas de efecto invernadero resultante de la combustión incompleta de combustibles fósiles provenientes principalmente de vehículos, actividad agrícola, industria, plantas de energía y uso doméstico

En general, las transformaciones climáticas registradas a causa del aumento de emisiones provenientes de la quema de combustibles fósiles, reflejaba una disminución substancial en la calidad del agua y del aire, erosión, cambios en el ciclo del agua y de la nieve. El Tribunal observó con especial atención la relación existente entre el aumento del tráfico vehicular (87.3 % de los cuales correspondía a actividades turísticas), y el continuo aumento del índice de contaminación del aire, así como el oscurecimiento de los mantos de nieve.

En este orden, el Juzgador identificó dos causas principales del daño. Una directa, asociada a la presencia excesiva del turismo, y otra indirecta derivada del tipo infraestructura y servicios turístico. Con lo cual, la causa aparente del daño ambiental era el resultado de un factor indirecto. Sin embargo, esta situación se perpetuó en el tiempo por la actitud pasiva de las autoridades gubernamentales.

Problema jurídico detectado por el Tribunal Nacional Verde

Lo expuesto en el apartado anterior se traduce en un problema jurídico de naturaleza ambiental y climático, pues las actividades asociadas al turismo en esta región del Himalaya cruzaron los límites tolerables de explotación de un recurso natural de importancia nacional e internacional, acarreando serios daños ambientales. Por lo cual se requería un remedio jurídico urgente, so pena de pérdida total de un extraordinario espacio natural.

El Tribunal Nacional Verde se encontró ante la disyuntiva de tutelar o no el derecho a un ambiente decente y saludable frente al crecimiento económico de la región por su importancia turística. A lo cual respondió mediante la articulación de argumentos jurídicos y fácticos que justificaron el establecimiento de remedios ambientales para asegurar la subsistencia del paso del glaciar *Rohtang.*

De forma conjunta, el Tribunal Nacional Verde tuvo que enfrentar la problemática de si debía o no condenar al Estado por su conducta omisiva. Ante esta cuestión, respondió negativamente y se desmarcó de cualquier patrón de establecimiento de responsabilidades, no por falta de elementos de convicción, sino en aras de proveer una solución jurídica efectiva en términos ambientales, económicos y de ejecución viables para para el contexto particular del Estado de *Himachal Pradesh*. Sin duda, esta decisión funda las bases jurisprudenciales para modular la conducta del Estado en el contexto climático actual.

Cuestiones Resueltas por el Tribunal

Este Tribunal se enfrentó a la dificultad de justificar adecuadamente las siguientes cuestiones: i) localizar cuáles eran las normas aplicables al impacto de las emisiones y del carbón negro sobre los mantos de nieve en

el paso de *Rohtang* para justificar la vulneración de derechos; y ii) sortear un problema factico sobre la complejidad de la prueba, lo cual requirió analizar los testimonios de expertos reconocidos, así como informes y reportes científicos. Todo ello, con el objetivo de disipar en mayor medida la incertidumbre relacionada con el carbono negro, la deforestación, la gestión de residuos como fuentes del deshielo.

I) Dificultad en la localización de la ley aplicable

Precisamente la respuesta a esta problemática constituye la mitad del núcleo argumentativo de la decisión. Ante la cuestión, el juez tomó como punto de partida la norma fundamental del ordenamiento jurídico de la India. Es así como invocó el artículo 48-A de la Constitución, que consagra la obligación del Estado de proteger y mejorar el ambiente, así como salvaguardar la selva y vida salvaje del país, concatenado con el artículo 51-A, el cual establece el deber de los ciudadanos de proteger el entorno natural en todas sus manifestaciones.

El Tribunal procedió a definir el concepto de ambiente y de derecho a un medio ambiente sano. Este último, dotado de un contenido extensamente desarrollados en la legislación India a través de la obligación de protección establecida en la Ley de Protección Ambiental (*Environment Protection Act,* 1986*),* Ley de Prevención y Control de la Contaminación del Aire (*Air Prevention and Control of Pollution Act,* 1981*),* Ley de Prevención y Control de la Contaminación del Agua *(Water Prevention and Control of Pollution Act,* 1974), Ley de Protección de la Vida Salvaje (*Wildlife Protection Act*, 1972), Ley de Conservación de la Selva (*Forest Conservation Act*, 1980), Ley de la Selva de la India (*Indian Forest Act, 1927*) y Ley de Diversidad Biológica (*Biological Diversity Act,* 2002).

A pesar de que estas normas fueron invocadas para fundamentar la importancia de proteger el ambiente conforme al derecho positivo y a los valores que sustenta al Estado Indio, la columna vertebral de la argumentación estaba en la protección del derecho fundamental a la vida, consagrado en el artículo 21 de la Constitución y la forma en la que se lesiona este derecho junto con el derecho a la salud cuando ocurre la degradación del medio ambiente. Este derecho funciona como amalgama entre todos los preceptos normativos invocados, pues en su dimensión extendida se encuentra incluido el derecho a una vida digna y el derecho a gozar de un ambiente decente.

Para arribar a la conclusión anterior el Tribunal trajo a colación la evolución histórica de la jurisprudencia ambiental de la Suprema Corte de la Nación sobre el derecho a la vida y su expansión progresiva hasta incluir como parte intrínseca del mismo el derecho de toda persona a disfrutar de un ambiente sano, pues reconoce que el artículo 21 incluye libertades no articuladas entre las que necesariamente está implícito. El Tribunal prosigue su argumento con la dimensión positiva del derecho en su vertiente calidad de vida, donde el medio ambiente sano es parte esencial para la realización de la vida humana.

Esto le permitió al Tribunal centrarse en la obligación estatal de proteger y preservar el derecho a la vida a través del establecimiento de políticas que garanticen condiciones medioambientales dignas. Este razonamiento es justificado doblemente con doctrina y jurisprudencia nacional. Es interesante mencionar que el Tribunal Verde recalcó el papel del Estado como administrador de los recursos naturales, por lo que debe preservarlos para que puedan ser usados y disfrutados por la sociedad[443]. De allí que el gobierno en sus diferentes niveles tiene la obligación de establecer políticas de desarrollo sostenible sobre los recursos naturales, así como la obligación de conservarlos tanto para las generaciones presentes como para las futuras.

El tribunal también abordó la ponderación de los diferentes bienes jurídicos afectados por las emisiones de carbono negro y, en su conjunto del derecho al ambiente como un medio para la realización de otros derechos en contraposición con el derecho al empleo y el derecho a percibir ingresos derivados de la actividad turística. Ante tal evaluación, le otorgó protección prioritaria al ambiente, pero sin menospreciar la importancia del desarrollo (con énfasis en el concepto de sostenibilidad).

De seguida, el Tribunal introdujo la importancia del principio precautorio, principio contaminador-pagador, principio de proporcionalidad y principio de desarrollo sostenible como mecanismos idóneos a ser utilizados por las autoridades competentes para alcanzar la preservación del ambiente. Aunque también reconoció que en ocasiones las agencias del gobierno no cuentan con recursos suficientes, ni personal para cumplir con los estándares fijados por la ley.

A pesar de que el Tribunal Verde de la India no estableció directamente la responsabilidad del Estado[444], justificó su falta de atribución amparándose en que su objetivo no era la determinación de responsabilidad, ante la ausencia de contienda entre partes o disputa[445], por lo cual su finalidad como garante de derechos era localizar un remedio ambiental a la problemática que aquejaba a la zona. No obstante, es posible vislumbrar el nacimiento de una línea jurisprudencial que da pie a la ciudadanía para compeler al Estado ante su deficiente gestión climática.

Adicionalmente, es importante destacar que el Tribunal hizo uso de la moral social en este caso al subrayar que todas las partes llamadas al proceso veían con preocupación el deterioro ambiental de la zona. Posteriormente, convocó al gobierno, a las autoridades y a los ciudadanos a que fuesen conscientes de la responsabilidad que tiene de restaurar el glaciar y prevenir daños futuros.

443. La ampliamente conocida *Public trust doctrine*.

444. Esto se debe a que el Estado no contaba con infraestructura para asumir las implicaciones de una condena de esta naturaleza.

445. El Tribunal se avocó al conocimiento del asunto.

II) Dificultad de la prueba

El Tribunal acertadamente empleó los recursos científicos que tenía a su disposición para evaluar la situación de un acontecimiento climático puntual como lo es el deshielo del glaciar, así como las transformaciones del entorno generadas por esos cambios drásticos de los patrones climáticos en la zona. De esta manera introdujo el estudio científico de Instituto de Tecnología Indio de Kamrup, donde se señalaba que la principal causa del deshilo era el carbón negro en las capas del glaciar y a su vez recomendó como mecanismo de mitigación eficiente a corto plazo la reducción de dichas emisiones para desacelerar el deshielo.

Igualmente, el Tribunal utilizó el Informe del Comité de Expertos constituido por la Corte de *Himachal Pradesh* para medir el número de turistas y el medio de transporte utilizado para acceder al área en cuestión. El Informe de Supervivencia de la Selva de la India fue empleado para demostrar la reducción de la densidad forestal del área y la fragilidad de su ecosistema. Mientras que el Reporte de la Organización Mundial de Meteorología fue utilizado para evidenciar que el subcontinente indio es una de las zonas más afectadas por el calentamiento global, siendo el glaciar de *Rohtang Pass* propenso a sufrir mayor afectación por su fragilidad ecológica. Con base en los mencionados elementos, se encentró probado el daño ambiental, ecológico e incluso paisajístico del área que comprende el *Rohtang Pass*. Por consiguiente, el Tribunal procedió a brindar los remedios ambientales.

Decisión

El Tribunal, en etapa de reparaciones hizo eco del principio ambiental de prevención, para lo cual propuso la implementación de medidas restrictiva del tránsito vehicular. Como acciones complementarias ordenó la revisión periódica de los vehículos que transitan la zona e instó a la participación coordinada de las autoridades involucradas para adoptar otras medidas apropiadas que condujesen a prevenir el daño y, en caso de subsistir este, minimizarlo lo más posible.

En este mismo sentido, invocó el principio contaminador pagador para reiterar que los efectos de la conducta contaminante no deben ni pueden ser trasladados a las autoridades locales o a los habitantes del *Estado Himachal Pradesh*. A partir del desarrollo argumentativo de este principio, propuso el establecimiento de un pago abonado por los sujetos que transitan la zona, esto a los fines de compensar el daño y reinvertir estos ingresos en mecanismos de mitigación frente al deshielo.

En esta misma línea, el Tribunal Nacional Verde ordenó al Gobierno del Estado de *Himachal Pradesh* introducir las normas BS-IV, cuyo objetivo es regular las emisiones vehiculares; así como también ordenó explorar las posibilidades de incorporar medios de transporte alternativos A modo de sín-

tesis, instruyó la creación de normas para la gestión de residuos en la zona, implementar estrategias de reforestación y conservación a través de planes de trabajo específico y la creación de un comité de monitoreo para verificar el cumplimiento de lo ordenado por el Tribunal.

Apreciación de la sentencia

En este fallo, el Tribunal Nacional Verde tuvo la habilidad para compeler a las autoridades pública al cumplimiento de las normas ambientales del país. Aunque no sancionó bajo los cánones tradicionales la responsabilidad del Estado, dejó ver entre líneas su actuación negligente, aunque justificada en cierta medida por circunstancia socio económicas propias del Estado *Himachal Pradesh*.

Este fallo representa a la fecha de elaboración de este libro un precedente inédito para impulsar el cumplimiento de nuevos estándares de mitigación frente a una de las fuentes del calentamiento global más temidas, el carbono negro. Igualmente, el Tribunal tuvo el acierto de recordar al gobierno regional e implícitamente al nacional, la obligación de proteger y mejorar el ambiente conforme al mandato constitucional y demás leyes nacionales. De esta manera, dotó de efectividad al derecho a un medio ambiente sano frente al calentamiento global.

Así las cosas, el Tribunal encontró una solución plausible a la problemática. Su conclusión está justificada jurídicamente a través de la articulación de los argumentos normativos y fácticos de forma congruente. Adicionalmente, se debe destacar a su favor que es una respuesta asertiva a la problemática social, económica y ambiental del Estado *Himachal Pradesh*. Esta es una sentencia base para impulsar la justicia climática no solo en la India sino en otros países en desarrollo alrededor del mundo, el fallo judicial goza de universalidad[446] y otorga una respuesta a la problemática planteada.

Urgenda Foundation v. State of the Netherlands (2015-2019)

El caso Urgenda, es hasta ahora el más famoso de los litigios climáticos[447]. Esto se debe principalmente a que, desde la primera instancia, la Corte de

446. Tal como señala: Pérez-Luño, A. E. (2007). *Trayectorias contemporáneas de la Filosofía y la Teoría del Derecho*. Madrid: TEBAR. «Mediante el ejercicio de la racionalidad práctica, los jueces tienden a apoyar sus decisiones en criterios universalizables, es decir rebasan objetivos particulares para perseguir aquellos valores generalizados e institucionalizados en la práctica social, que legitiman la observancia del derecho».

447. A pesar de que Urgenda ha eclipsado al mundo, para algunos especialistas dan este lugar al caso *Masachusetts v.EPA* en los Estados Unidos, donde se dictaminó que la Agencia Federal Ambiental había actuado ilegalmente al rehusarse a aplicar la Ley del Aire Lim-

Distrito de La Haya emitió una sentencia en la que atribuyó responsabilidad al Estado por el negligente tratamiento del cambio climático. Es decir que, ante el problema jurídico bivalente de condenar o no al Estado, optó por la primera. Decisión que fue confirmada por la Corte de Apelaciones de La Haya y posteriormente por la Suprema Corte de los Países Bajos. De allí la relevancia de un análisis del razonamiento judicial aplicado por las tres instancias.

Primera instancia: Sentencia de la Corte del Distrito de La Haya[448]

La demandante principal, *Urgenda Foundation*» Urgenda» agotó los canales amistosos al tratar de entablar un diálogo con el poder ejecutivo sobre la mejora del índice de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. A pesar de la preocupación de las autoridades sobre el tema climático no pudo alcanzarse consenso alguno sobre la meta de recorte nacional para el año 2020.

Así, Urgenda actuando en nombre propio y en representación de ochocientos ochenta y seis (886) peticionarios civiles demandó a los Países Bajos. Concretamente, al Ministerio de Infraestructura y Ambiente, para exigir la disminución de las emisiones de gases de efecto invernadero del país, así como el establecimiento de responsabilidad en vista del incumplimiento del deber social de cuidado hacia sus ciudadanos, ante la falta de adopción de medidas suficientemente que permitieran lograr las metas climáticas asumidas internacionalmente.

El problema principal al que se enfrentó el juez de primera instancia fue determinar si la conducta del Estado constituía una actuación contraria al deber de cuidado establecido en el derecho holandés. Es decir, ¿tenía o no el Estado la obligación de limitar sus emisiones de gases de efecto invernadero? De ser así, ¿era el Estado responsable por adoptar una conducta negligente en cuanto al establecimiento de políticas inadecuadas de mitigación y adaptación frente al cambio climático?[449] Para ello, dio respuesta a una serie de dificultades que pueden ser subdivididas en: i) cuestiones procesales, ii) problema de determinación de la ley aplicable y iii) cuestiones asociadas a la premisa fáctica.

---

pio *«Clean Air Act»* como mecanismo de regulación de las emisiones provenientes de vehículos automotores como medio para combatir el cambio climático. Véase: Percival, R. V. (2007). «Massachusetts v EPA: Escaping the common law's growing shadow». *The Supreme Court Review*, 2007 (1), 111-160.

448. The Hague District Court. Urgenda Foundation v. State of the Netherlands, judgment (24 jun. 2015). Recuperado de: https://climatecasechart.com/non-us-case/urgenda-foundation-v-kingdom-of-the-netherlands/

449. La cuestión litigiosa se centraba en si existía o no una falla en el deber de cuidado del Estado hacía sus ciudadanos, lo cual determinaría si la conducta estatal era un ilícito susceptible de ser justiciable.

Cuestiones procesales

El Estado cuestionaba una parte de la legitimación de la Fundación para peticionar o defender los derecho e intereses de las generaciones futuras de ciudadanos holandeses a perpetuidad, pues consideraba que representaba los intereses genéricos de grupos intergeneracionales pertenecientes a otros países. La Corte permitió a *Urgenda* continuar su reclamo con base en el Libro 3, Sección 303a del Código Civil, pues catalogó a la Fundación como una organización ambiental que podía entablar reclamos con el propósito de proteger el entorno, sin que fuese necesario representar a un grupo específico de personas. Adicionalmente, la Corte reafirmó su argumento procesal haciendo eco del objeto social de Urgenda, donde aparece como fin principal alcanzar la sostenibilidad de la sociedad holandesa y su compromiso ambiental más allá del ámbito territorial de Países Bajos.

I) Aplicabilidad del artículo 21 de la Constitución[450]

El artículo 21 constitucional imponía al Estado la obligación de obrar con diligencia con relación a la preservación del medio ambiente. Sin embargo, la norma constitucional no especificaba la manera en la cual tal obligación de cuidado hacia sus ciudadanos debía ser cumplida, quedando a discrecionalidad del Estado los medios para hacer efectivos esa protección y mejora al medio ambiente.

Los Países Bajos habían mostrado su compromiso en el marco de los instrumentos del clima, así como en el seno de la Unión Europea. Cabe destacar que la Unión a pesar de establecer una política ambiental general[451] y de trabajar en aras de conseguir un mayor consenso a nivel continental, permite a los Estados Miembro adoptar medidas más ambiciosas si se trata de preservar el medio ambiente.

II) El Convenio Europeo de Derechos Humanos

Los peticionarios alegaron la violación del derecho a la vida (artículo 2 CEDH) y derecho a la vida privada y familiar (artículo 8 CEDH) en virtud de la política climática adoptada por Países Bajos. Ante estas presuntas violaciones, la Corte distinguió claramente la condición de personas naturales y de las personas morales, esto en virtud de la naturaleza individual de estos derechos.

El juzgador en primer lugar señaló, que *Urgenda* no podía ser considerada como víctima directa o indirecta de la violación de los mencionados

450. Gw. [Constitution] art. 21. Recuperado de: https://bit.ly/3NbFUj4 «Article 21: It shall be the concern of the authorities to keep the country habitable and to protect and improve the environment».

451. Cuyo objetivo era la reducción del 30 % de las emisiones para el año 2020 en comparación con las emisiones de 1990, en vista de adoptar una aproximación más eficiente para del crecimiento de grandes economías en desarrollo alrededor del mundo.

derechos conforme a lo dispuesto por el artículo 34 CEDH[452]. Sin embargo, remarcó la importancia de las decisiones del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), por lo cual podía usarlas como una guía interpretativa que permitiera reforzar la protección de estos derechos a nivel local. De esta manera, se concentró en analizar la dimensión positiva del derecho a la vida con el propósito de enfatizar el deber de las autoridades nacionales de adoptar medidas que permitan garantizar el goce efectivo de los mismos, independientemente de que las amenazas provengan de entes privados, aunque no estén directamente conectados con actuaciones estatales.

Con respecto a las interpretaciones del artículo 8 CEDH, la Corte señaló que la degradación del medio ambiente no necesariamente implica la vulneración de este derecho, pues no existe una referencia expresa al mismo en la norma. No obstante, reconoció que el máximo Tribunal de Derechos Humanos en Europa ha establecido que las autoridades públicas tienen la obligación de informar sobre los riesgos ambientales, así como el deber de evaluar la situación caso por caso. Bajo este fundamento la Corte de Distrito tomó en consideración los principios de interpretación que han nacido del desarrollo jurisprudencial de los artículos 2 y 8 del CEDH, pero en ninguno de los dos supuestos encontró una violación directa por parte del Estado.

III) Aplicabilidad del Código Civil de los Países Bajos

Hasta este punto la Corte parecía haber desestimado las alegaciones de los demandantes, pero dio un giro inesperado a través del contenido del Libro 5, sección 37 del Código Civil de, norma relativa al *nuisance*[453], tipo de *Tort*[454] que le permitió analizar el deber cuidado y la posibilidad de emplear la doctrina de la negligencia peligrosa. Es interesante, cómo la Corte reconoció la novedad del caso, así como la dificultad de encontrar un precedente que le fuera aplicable. Sin embargo, dadas las características propias del riesgo implícito en el cambio climático, consideró que este fenómeno podía encajar en la fórmula de la negligencia peligrosa a los fines de valorar el proceder del Estado ante la situación de riesgo grave[455].

---

452. Este punto se desarrollará en el análisis de la sentencia de apelación pues fue el elemento central de la solicitud de revisión la Fundación Urgenda

453. Es un tipo de *Tort* dentro de los sistemas del *common* law mediante el cual cualquier individuo afectado por daño derivado de la acción o inacción de sus vecinos le permite reclamar la disminución o cese de la acción dañosa. Comúnmente usada para perturbaciones ambientales. Véase: EPSTEIN, R. A. (1979). «Nuisance law: corrective justice and its utilitarian constraints». *The Journal of Legal Studies*, *8*(1), 49-102. *«Nuisance is a very old branch of the tort law, dating back to the early assizes, and at its core it protects the quiet possession and enjoyment of land».*

454. De forma genérica puede traducirse como derecho de daños.

455. La Corte utilizó el caso *Kelderluik* (5 nov. 1965) para establecer parte de las características de un sujeto responsable de causar una situación peligrosa.

A la luz de la mencionada doctrina, la Corte analizó: a) la naturaleza y extensión del daño producto del cambio climático, b) el conocimiento y la previsibilidad del daño, c) la probabilidad de que ocurriera un cambio climático peligroso, d) la naturaleza de los actos u omisiones del Estado, e) el costo de la adopción de medidas, f) el margen de apreciación del Estado para la ejecución de sus deberes públicos, g) los conocimientos científicos disponibles, h) las técnicas para su aplicación, e i) el costo beneficio de las mismas.

IV) Instrumentos Internacionales del Clima

La Corte de Distrito realizó una interesante argumentación con relación a la alegación presentada por los demandantes según la cual Países Bajos había quebrantado el orden internacional al usar su territorio para causar daños a otros Estados, en virtud de las emisiones de gases de efecto invernadero generadas por encima de los límites acordados internacionalmente. En este orden, se alegó que tal comportamiento constituía una ruptura de los compromisos asumidos por el Estado en la CMNUCC, Protocolo de Kioto y su posterior enmienda.

Así las cosas, la Corte estimó que en el caso no existía vulneración directa de estas obligaciones, puesto que tales relaciones se producen en el plano internacional, es decir, entre los Estados. No siendo posible que los ciudadanos aleguen el incumplimiento con respecto a ellos, razón por la cual la ruptura de este tipo de obligaciones asumidas no es susceptible de judicialización ante las cortes nacionales. Esto debido a que no era posible apreciar un vínculo que conectase a todos los ciudadanos con esas obligaciones climáticas internacionales. En palabras de la Corte, las normas establecidas en los instrumentos del clima no tienen un efecto reflejo sobre el derecho interno de conformidad con los términos del artículo 93 de la Constitución[456].

Igual tratamiento argumentativo utilizó la Corte para desestimar la alegación de los demandantes sobre la violación del artículo 191 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea relativo a los objetivos de la política medioambiental del bloque. Por consiguiente, concluyó que era inexistente la violación directa de los instrumentos internacionales invocado por los demandantes.

Dificultad de la premisa fáctica

Particular atención merece el tratamiento de los argumentos de orden facticos invocados durante la fase probatoria. Sin lugar a duda, fue crucial la forma en la cual este tribunal de primera instancia valoró los hallazgos científicos del IPCC, así como el desarrollo argumentativo utilizado para otorgarle fuerza vinculante a estos informes dentro del caso.

456. Constitution article 93: *«Provisions of treaties and of resolutions by international institutions which may be binding on all persons by virtue of their contents shall become binding after they have been published».*

La Corte de Distrito puso de manifiesto la cuestión sobre el tratamiento legal de la incertidumbre científica asociada al cambio climático, cuestión que resolvió mediante el mecanismo de modulación aplicado por el IPCC bajo la fórmula del «grado de probabilidad de la incidencia de las acciones humanas sobre el clima». El mismo ofrece un modelo de regulación del riesgo basado en parámetros objetivos, a través de la ponderación del nivel peligro y la probabilidad de impacto del cambio climático sobre planeta y sobre el hombre[457].

El juzgador dedicó tiempo a la evaluación actual de la ciencia del clima y de las políticas climáticas establecidas tanto a nivel nacional como internacional. Ante lo cual realizó una profunda consideración de los Informes IPCC 2007[458] e IPCC 2013[459] donde se estableció la alta probabilidad de que factores antropogénicos, particularmente la quema de combustibles fósiles y la deforestación fuesen las principales causas del calentamiento global desde mediados del siglo pasado. Igualmente, trajo a colación resultados altamente confiables en los cuales se proyectan consecuencias devastadoras para la Tierra si la temperatura aumenta más de 2 grados centígrados por encima de niveles preindustriales.

En el discurrir argumentativo del Tribunal, dejaron de estar sujetos a debate los serios impactos del cambio climático sobre las personas y el entorno en donde se desenvuelven. Pues el juzgador tomó como base cierta los resultados arrojados por los reportes del IPCC, así como su recomendación de mantener la temperatura de la Tierra lo más cerca posible a los 1.5 grados y ante todo evento por debajo de los 2 grados centígrados.

De allí que, el Tribunal en primera instancia dejó establecida la autoridad de los informes, basándose en la credibilidad de las voces científicas autorizadas que integraron el grupo de expertos. Para ello señaló: Primero, el reconocimiento de los ciento noventa y cinco (195) Estados Parte de CMNUCC, entre ellos el consentimiento registrado de Países Bajos. Segundo, el valor que la comunidad internacional ha atribuido a las recomendaciones de IPCC, considerando que las mismas han servido como punto de partida para la adopción de decisiones de vital importancia en las COP.

En suma, la Corte atribuyó a los informes el carácter de conocimiento respaldado científicamente y de estándar internacionalmente aceptado. Por lo que, que a partir de la información disponible sobre el estado de la ciencia concluyó que:

- En aras de alcanzar la meta de mitigación de riesgo, las emisiones de los países del Anexo I CMNUCC debían reducir sus emisiones entre 25 % - 40 % por debajo de los niveles de 1990 para el 2020.

457. The Hague District Court. Urgenda Foundation v. State of the Netherlands, judgment (24 Jun. 2015). 32, §4.14 and 33, § 4.19.

458. IPCC. (2007a), *Ob. cit*.

459. IPCC. (2014), Ob. Cit.

– Países Bajos se comprometió en la Conferencia de Cancún a reducir entre 25 % - 40 % para el 2020.
– Países Bajos acordó con la Unión Europea solo una meta de reducción del 20 % para el 2020.

En consecuencia, la meta de recorte europea asumida como definitiva por el demandado estaba por debajo de los estándares científicos internacionales considerados como necesarios. De hecho, la Corte apreció que se encontraba por debajo del techo de emisiones necesarias para enfrentar la crisis climática. Por lo cual, el Tribunal consideró como altamente probable la ocurrencia de daños irreversibles y graves a causa del cambio climático.

Decisión

Sobre la base de los argumentos esbozados, la Corte concluyó que el exceso de gases de efecto invernadero emitidos por Países Bajos desde el momento de la decisión hasta el 2020 era atribuible al Estado, pues tenía el poder de dictar normas y adoptar medidas para reducir las emisiones y no lo hizo. Esto a la luz de la doctrina civil de negligencia peligrosa, bajo la cual determinó lo siguiente:

– Reconocimiento por parte del Estado y de la comunidad internacional[460] de la existencia de un alto riego de ocurrencia de catástrofes naturales vinculadas al calentamiento global. En suma, el cambio climático fue catalogado como un fenómeno peligroso.
– Aunque el Estado no era un emisor de gases de efecto invernadero propiamente, y por ende no causaba de forma directa el calentamiento global, tenía dentro de sus competencias la capacidad de controlar las emisiones nacidas en su el territorio, por lo que debía exigirse un alto nivel de cuidado.
– Existían obligaciones de reducción de emisiones que el Estado asumió en el marco de los instrumentos climáticos y a los cuales se encontraba jurídicamente vinculado. En consecuencia, tenía la obligación de establecer un marco jurídico efectivo y adecuado para reducir suficientemente las emisiones en el país.
– A criterio de la Corte resultaba rentable en términos económico adoptar acciones de mitigación avaladas científicamente, que permitieran prevenir el peligro asociado al cambio climático. En consecuencia, Países Bajos tenía el deber de mitigar tan pronto como fuese posible, dado que resultaba más eficiente adoptar medidas de mitigación que posponerlas.

460. A través de la adopción de objetivos y metas de reducción de emisiones globales en la CMNUCC, Protocolo de Kioto, Enmienda de Doha y Acuerdo de París.

– El margen de apreciación del Estado no era ilimitado. Debido a que: Primero, el Estado no demostró obstáculos macroeconómicos para alcanzar las acciones de mitigación necesarias. Segundo, el demandado no logró desvirtuar que el aumento de la meta de reducción era significativo a escala mundial. Tercero, fue insuficiente el argumento sobre una contribución mínima al calentamiento global[461]. Cuarto, Países Bajos no desvirtuó su obligación de adoptar medidas, así como tampoco cumplió con su deber de cuidado hacia los terceros. El Estado no logró establecer que la legislación europea impedía la adopción de una meta nacional más ambiciosa para 2020, y finalmente, sexto, el tribunal consideró infundado el argumento sobre invasión de competencias del poder judicial hacía un campo exclusivo del poder ejecutivo.

En lo que respecta a los instrumentos del clima, la Corte concluyó que no se justificaba la falta de adopción de medidas bajo el argumento de incertidumbre del daño climático, por cuanto existían acciones anticipativas disponibles con base en los principios ambientales esbozados, los cuales actuaban como un marco de conducta para que los Estados puedan desplegar sus poderes.

En cuanto a la naturaleza del perjuicio, la Corte estableció que el daño producto del cambio climático es concreto y determinado para las generaciones presentes y futuras. Sin embargo, no encontró violados los artículos 21 de la Constitución, 2 y 8 del CEDH, así como tampoco de los artículos pertenecientes a los instrumentos universales del clima.

La Corte concluyó con la declaración de negligencia peligrosa de Países Bajos hacia los demandantes, por establecer un insuficiente objetivo de reducción para 2020 en virtud del menoscabo del estándar de cuidado delineado por el Libro 6, Sección 162 del código civil holandés. La Corte ordenó al Estado limitar el volumen de emisiones de gases de efecto invernadero al menos en un 25 % a fines de 2020 en comparación con el nivel de emisiones del año 1990.

Apreciaciones del fallo de primera instancia

Este fallo tiene la fortaleza de establecer cuotas de responsabilidad históricas. De hecho, reconoció que el cambio climático a nivel global está ocurriendo y ha ocurrido (en parte) debido a las emisiones de Países Bajos. Por lo cual, hizo un llamado a la moral, esperando que el Estado realizase una contribución mayor a la que ha aplicado hasta el presente para prevenir el peligro asociado al cambio climático.

461. Esto con relación a la cuota de emisiones que aportaba Países Bajos a un problema a escala mundial.

Es importante reconocer la interesante aproximación que realizó la Corte con relación al argumento de separación de poderes[462], razonamiento usualmente empleado en jurisdicciones como la estadounidense, para desestimar los litigios que involucran la revisión de políticas ambientales[463]. Con relación a los estándares de mitigación es posible encontrar su violación cuando un Estado se ha comprometido a una reducción vinculante, pero la tarea de exigir una meta más ambiciosa a la establecida originalmente reviste gran complejidad, pues en ausencia de reglas específicas en la legislación o cuando se deduce un estándar o una obligación de principios generales, la Corte puede pasar la esfera de competencia judicial a la política[464].

En este caso, se dejó claro que no existe propiamente una violación del principio, pues en un Estado de Derecho el poder judicial está dotado de competencia para ofrecer protección legal, por lo que la revisión del caso no escapa del dominio de la Corte y cualquier decisión que adopte el Tribunal le permite al Estado decidir cómo aplicarla o cómo materializar esa orden. Igualmente, estableció que la decisión no interferiría con las negociaciones políticas que realizaba el Estado en el ámbito internacional.

Este fallo marcó un antes y un después para los litigios climáticos, dado que presenta un camino viable para articular reclamos en los que se requiera un trabajo sinérgico entre el derecho público y derecho privado, derecho nacional y derecho internacional[465]. Aunque este es solo el primero de tres interesantes revisiones judiciales del caso Urgenda, es imperativo reseñar que, este fallo contó con una novedosa motivación donde se aprecia un conocimiento profundo del problema a pesar del desafío que trae implícito el discernimiento sobre aspectos científicos del clima para los profesionales del derecho.

---

462. Colby, H., Ebbersmeyer, A, Heim, L. & *et al* (2020). «Judging climate change: The role of the judiciary in the fight against climate change». *Oslo Law Review*, 7(3), 168-185. *«The relation between the trias politica in the Netherlands is not a strict separation of powers but rather a balanced system in which the judiciary reviews the legality of governmental actions in individual cases»*. El argumento del juez de primera instancia sería posteriormente desarrollado por el tribunal de alzada profundizando sobre las implicaciones de la revisión judicial.

463. Véase la comparación realizada por: Farah, P. D. & Ibrahim, I. A. (2023). «Urgenda vs. Juliana: Lessons for Future Climate Change Litigation Cases». *University of Pittsburgh Law Review*, *84*, 1.

464. Payandeh (2021), *ob. cit*. 77-78. *«In the absence of concrete legally binding mitigation target the determination of specific limits by court is problematic. The determination of a concrete emission threshold is an inherently political task […] this not imply that Courts are unsuitable to deal with climate change but rather indicates the need for judicial capacity- building in climate related matters».*

465. Una relación histórica, aunque vigente, profundamente desarrollada por la doctrina, véase: Stevenson, J. R. (1952). «Relationship of Private International Law to Public International Law», *The. Columbia. Law. Review.*, *52*, 561., Goldsmith, J. & Levinson, D. (2009). Law for states: international law, constitutional law, public law. *Harvard Law Review*, 1791-1868.

Sin embargo, esta decisión muestra una ruptura del diálogo entre la aplicación directa del CEDH y el reconocimiento de este como parte integrante del derecho interno de los Países Bajo. Afortunadamente, esta cuestión de derecho sustantivo fue rectificada con posterioridad por la Corte de Apelaciones de La Haya, lo cual ha terminado de blindar jurídicamente la condenatoria del Estado.

A pesar de lo anteriormente expuesto, este fallo ha dado una respuesta certera al problema bivalente de si el Estado tenía la obligación de limitar sus emisiones, así como a la distinción de los problemas subyacentes de esta pregunta inicial. La sentencia emplea una estructura lógica que permite identificar con claridad la arquitectura argumentativa del juez al resolver las dificultades asociadas a la ley aplicable y a la prueba.

Debe tenerse en cuenta que cuando un tribunal decide abordar la problemática climática con base en los derechos humanos, derecho de daños o haciendo uso de los principios de derecho ambiental siempre podrá estar sometido controversia el razonamiento adoptado[466]. Pero si en su labor logra evadir las contradicciones la legislación existente, haciendo uso adecuado de los preceptos normativos y de los principios ambientales que informan los vacíos, la decisión quedará ratificada dentro del ámbito de su competencia judicial[467].

Sin lugar a duda, esta sentencia aborda cuestionamientos morales de vital importancia para nuestros tiempos y reafirma el deber del Estado en su rol de garante y protector de las obligaciones positivas derivadas de derechos reconocidos en el ordenamiento jurídico nacional. Finalmente, esta sentencia resuelve el problema central ordenando el recorte de emisiones y decide de forma coherente y bajo parámetros de razonabilidad. Este caso ha tenido un impacto profundo tanto en la litigación climática nacional[468] como internacional[469].

---

466. Payandeh (2021), *Ob. cit*. 77.

467. *Loc. cit*.

468. The Hague District Court. Milieudefensie *et al*. v. Royal Dutch Shell plc., judgment (26 May. 2021). Recuperado de: https://climatecasechart.com/non-us-case/milieudefensie-et-al-v-royal-dutch-shell-plc/. Este es un ejemplo palpable de cómo el caso Urgenda ha sido motor para nuevos litigios y decisiones climáticas. Esta decisión en particular está inspirada en la estructura argumentativa empleada en el caso origina solo que extendida al caso de sujetos de las empresas. Para ello empleó la doctrina del efecto horizontal *(drittwirkung)* de los derechos humanos que también compromete a los privados en el cumplimiento de las obligaciones de respeto de los derechos reconocidos por la Convención Europea de Derechos Humanos en relación con el Código Civil. De donde surge un deber de cuidado durante el ejercicio de sus actividades. Así la Corte ordenó la reducción del 45 % de las emisiones de la empresa para el 2030.

469. Por ejemplo: Sacchi *et al* v. Argentina.; Duarte Agostinho v. Portugal *et al*. (analizados en el apartado 2.7 de este Capítulo), así como el caso de los niños y niñas del Distrito Residencial Cité Soleil v. Haití (estudiando en el Capítulo III de este libro). Asimismo, debe destacarse la

Segunda instancia: Recurso Interpuesto ante la Corte de Apelaciones de La Haya (2018)

Tanto el Estado como la Fundación Urgenda apelaron la decisión de la Corte de Distrito de La Haya bajo diferentes argumentos. En lo que respecta al Estado, presentó veintinueve (29) motivos de naturaleza procesal y sustantiva para justificar su solicitud de apelación. Por su parte, Urgenda planteó una apelación cruzada donde manifestaba su desacuerdo en cuanto a la fundamentación utilizada por el juez *A Quo* para decidir sobre la improcedencia de la violación directa de los artículos 2 y 8 CEDH. El juez *Ad Quem* decide revisar la totalidad de la controversia.

Cuestiones resueltas por el Tribunal de Apelaciones[470]

Desde el inicio de la contienda, la participación de Urgenda fue cuestionada por el Estado. Sin embargo, la legitimación para peticionar fue aceptada por el juez *A Quo*, aunque este último no dio cabida a la moción realizada por Urgenda como sujeto pasivo de la violación directa de los derechos a la vida, vida privada y familiar en los términos establecidos en el Convenio Europeo de Derechos Humanos. Sin embargo, la Corte de Apelaciones desde otra perspectiva profundizó en el tratamiento de esta cuestión procesal a través del análisis del artículo 34 CEDH.

En este sentido, el juez *Ad Quem* procedió a modificar la decisión. Asimismo, reconoció la legitimación activa de Urgenda en el marco del proceso civil en Países Bajos, por lo cual podía invocar la protección de los artículos 2 y 8 CEDH. Para ello, aclaró que el artículo 34 hace referencia al *locus standi* del demandante ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Por lo cual, mal puede aplicarse una cuestión meramente procesal de acceso a la jurisdicción internacional a un litigio nacional que contiene sus propias normas para reglar el *iter* procesal.

En este orden, el Tribunal en su rol de revisor trajo a colación lo dispuesto en el Libro 3, sección 305a del código civil holandés relativo la figura de *Class action*[471], ya que en virtud de este tipo de acciones se permite la tutela

---

marcada influencia argumentativa de Urgenda sobre los casos pendientes de decisión ante el TEDH, véase, por ejemplo: Verein KlimaSeniorinnen Schweiz and Others v. Switzerland (application no. 53600/20); Carême v. France (no. 7189/21); Müllner v. Austria (no. 18859/21); The Norwegian Grandparents' Climate Campaign and Others v. Norway (no. 19026/21); Soubeste and four other applications v. Austria and 11 Other States4 (nos. 31925/22, 31932/22, 31938/22, 31943/22 and 31947/22); y Engels v. Germany (no. 46906/22).

470. The Hague Court of Appeal. Urgenda Foundation v. State of the Netherlands, judgment (9 oct. 2018) Recuperado de: https://climatecasechart.com/non-us-case/urgenda-foundation-v-kingdom-of-the-netherlands/

471. Mulheron, R. (2004). *The class action in common law legal systems: a comparative perspective*. Oxford: Bloomsbury Publishing. *«Class action: Legal procedure which enables the*

de derechos colectivos. Según esta disposición normativa *Urgenda* tenía la capacidad de agrupar a las personas naturales localizadas bajo la jurisdicción de Países Bajos. Por consiguiente, podían invocar la violación de los artículos 2 y 8 CEDH. De esta manera, la Corte consideró fundado el motivo de la apelación de Urgenda, por lo tanto, fue posible entrar a revisar si la actuación de las autoridades públicas constituía o no una conducta susceptible de configurar la violación de estos Derechos Humanos.

En lo que respecta a la falta de legitimación para actuar en nombre de las generaciones presentes y futuras tanto holandesas como extranjeras, el de Tribunal desestimó el alegato del Estado, al considerar que ante todo evento, Países Bajos tiene la obligación de respetar los derechos humanos de las personas bajo su jurisdicción en los términos del artículo 1 del CEDH[472], completando su tesis al señalar que no existía duda de que las generaciones actuales en un sentido amplio, debían lidiar con los problemas causados por el cambio climático. De esta manera se resolvió la dificultad procesal planteada[473].

I) Convenio Europeo de Derechos Humanos

El Tribunal se dedicó a revisar el argumento planteado por Urgenda sobre la conducta ilegítima del Estado a la luz de los artículos 2 y 8 Convenio. En este sentido, el juzgador partió de la premisa de que la protección del derecho a la vida puede verse afectada por situaciones que perturban el medio ambiente. Por otra parte, recordó que el derecho a la vida familiar y privada puede ser menoscabado de forma independiente en casos donde se produzcan vulneraciones medioambientales. Así las cosas, entró a evaluar la severidad de la perturbación, para concentrarse en las obligaciones positivas del Estado. El tribunal tradujo esta carga estatal en un deber de cuidado hacia los ciudadanos bajo su jurisdicción.

El juez *Ad Quem* analizó la interpretación de la jurisprudencia del TEDH y a pesar de reconocer que la obligación positiva que recae en cabeza del Estado estaba sujeta a limitaciones, es decir, que el gobierno solo tenía la

claims (or part of the claims) of a number of persons against the same defendant to be determined in the one suit. In a class action, one or more persons ("representative plaintiff") may sue in his or her own behalf and on behalf of a number of other persons ("the class") who has a claim to a remedy for the same or a similar alleged wrong to that alleged by the representative of the plaintiff, and who has claims that share question of law or fact in common with those of the representative plaintiff ("common issues")».

472. Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, nov. 4, 1950. [CEDH]. Artículo 1: «Las Altas Partes Contratantes reconocen a toda persona bajo su jurisdicción los derechos y libertades definidos en el Título I del presente Convenio».

473. Aunque sin entrar a clarificar la definición de generaciones futuras o la titularidad de su representación. Véase la interesante aproximación jurídica y procesal propuesta para futuros litigios de esta naturaleza: Donger, E. (2022). «Children and youth in strategic climate litigation: Advancing rights through legal argument and legal mobilization». *Transnational Environmental Law*, *11*(2), 263-289.

obligación de tomar medidas razonables y concretas frente a una amenaza real e inminente. El Tribunal expuso que tal obligación de hacer era extensible a las actividades públicas y privadas[474], incluidas actividades industriales que representasen un riesgo para el derecho a la vida y para el derecho a la vida privada y familiar. De esta manera quedó disipada cualquier duda sobre la aplicabilidad directa del CEDH dentro del orden nacional.

II) Revisión de la prueba

Una vez dilucidada las cuestiones procesales anteriores, el Tribunal entró a evaluar la peligrosidad del cambio climático a los fines de determinar si procedía o no el establecimiento de la violación de los artículos 2 y 8 CEDH. Para ello realizó una clasificación de las conclusiones arrojadas por los informes científicos[475] en materia climática de los cuales se desprendía lo siguiente:

- El aumento progresivo de la temperatura de la tierra y las proyecciones del calentamiento global respaldadas por informes científicos. Con referencia específica a los reportes IPCC 2007, IPCC 2014, datos de la Administración Nacional del Espacio de Estados Unidos (NASA), del Informe Anual del Programa Ambiental las Naciones Unidas, así como información de la Base de Datos Europea para la Investigación Atmosférica Global («EDGAR»).
- El establecimiento del vínculo causal entre el aumento las emisiones de gases de efecto invernadero a razón de las actividades humanas, con énfasis en las emisiones resultantes de la quema de combustibles fósiles.
- Consecuencias catastróficas del aumento de la temperatura de la tierra a más de 2 grados centígrados.
- Un enfoque tendiente a una mayor reducción de emisiones de gases de efecto invernadero distintos al CO_2 por parte de Países Bajos en los últimos años.

A lo anterior se le sumó el consenso entre los litigantes de evitar el aumento de la temperatura de la tierra a más de 2 grados centígrados, y el fijar como meta razonable la estabilización del clima en 1.5 grados centígrados a niveles preindustriales. Aspiración concordante con las metas internacionales fijadas en el Acuerdo de París.

Posteriormente, el Tribunal de Apelaciones entró a evaluar la conducta del Estado con relación a su deber de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. La revisión de esta parte de la sentencia constituye la respuesta central al problema binario de si era o no responsable el Estado y si debía o

474. El efecto de este pronunciamiento se puede evidenciar en: The Hague District Court. Milieudefensie *et al*. v. Royal Dutch Shell plc., judgment (26 May. 2021).

475. Todos estos puntos abordados y valorados por el tribunal *A Quo*.

no el Estado ser condenado por la conducta desplegada con relación al tratamiento otorgado a las emisiones de CO_2 por ser el componente con mayor incidencia sobre el avance del calentamiento global.

La determinación de la legalidad o ilegalidad de la conducta resultó fundamental para el establecimiento de responsabilidad. En este sentido el Tribunal analizó los argumentos de apelación presentados por el Estado a la luz de las pruebas consignadas por las partes. Especial énfasis se otorgó a los informes IPCC, así como a la opinión autorizada del consejero de la Academia de Ciencias Europea.

Dadas las pruebas presentadas, el Tribunal de Apelaciones concluyó que la amenaza del cambio climático era inminente y grave para las generaciones que enfrentaran pérdida de la vida e interferencia arbitraria en su vida familiar. Por lo cual existe un deber de protección especial en cabeza del Estado con relación al cambio climático. En este orden, el Tribunal *Ad Quem* desestimó el alegato del Estado, pues consideró probado que la reducción realizada por Países Bajos fue insuficiente debido a que:

- Su actuación fue lenta con relación a los objetivos internacionales trazados a corto plazo[476]. Tanto así que la meta nacional al 2020 (20 %) se encontraba disociada con el objetivo de alcanzar una reducción del 95 % de las emisiones al 2050.
- La meta fijada en el IPCC 2007 fue incumplida, pues se requería entre 25 %-40 % de reducción de emisiones para los países donde estaba incluido el demandado.
- Aunque el IPCC 2014 ciertamente ofrecía múltiples vías de reducción[477], se requería la materialización de emisiones negativas en el territorio del Estado, tecnologías no disponibles al momento de dictar la sentencia, por lo que resultaba irreal usar este parámetro para determinar la disminución de la temperatura de la tierra.
- Adicionalmente, se requería de una disminución drástica (no contemplada) de las emisiones provenientes de los sectores aviación, marítimo y agricultura.
- Así como mantener las emisiones de gases de efecto invernadero a un máximo de 430 partículas por millón[478] meta que no estaba siendo contemplada por el Estado, pues sus proyecciones reconocidas se centraban en 450 partículas por millón[479].

476. Para el momento de la sentencia Países Bajos proyectaba reducir tan solo el 20 % al 2020.

477. No implicaban necesariamente el recorte de 25 %-40 % al 2020.

478. Para mantener la temperatura de la tierra a 1.5 grados centígrados

479. Para mantener la temperatura de la tierra por debajo 2 grados centígrados de niveles preindustriales. La Corte remarcó que incluso en el escenario de reducción 25 %-40 % el riesgo aún se mantiene, por lo cual no hay certeza sobre si la meta será alcanzada.

– El Estado reconoció la necesidad de recortar las emisiones entre un 25 %-40 % desde el año 2007[480] y mantuvo esta postura hasta el año 2011, momento a partir del cual decidió elevar su cuota de emisiones sin basamento científico.
– Por lo tanto, el Tribunal consideró que, aunque la meta necesaria no fuese establecida mediante un estándar legal, se requería un recorte de entre 25 %-40 % por parte de Países Bajos para evitar un cambio climático peligroso.

La Corte de Apelaciones igualmente desestimó la justificación del Estado sobre la inamovilidad del límite único de emisiones establecido por la Unión Europea, para ello aplicó cuatro (4) argumentos centrales.

Primero, el estándar europeo fijado originalmente no imposibilitaba a Países Bajos adoptar medidas de mayor protección ambiental conforme a las disposiciones del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (artículo 193). Segundo, la adopción de mayores cuotas de reducción de emisiones no constituía una interferencia con el funcionamiento del sistema de comercio de emisiones. Tercero, otros Estados como Alemania, Francia y Suecia habían apostado por planes más ambiciosos de reducción sin que se viera afectada la estrategia climática regional. Cuarto, el Estado no demostró de qué manera una política de reducción más ambiciosa antes de 2020 pudiese generar los fenómenos económicos de fuga de carbono y afectación del campo de juego nivelado

En cuanto a la falta de valoración de las acciones de adaptación como mecanismo de compensación para subsanar la falta de adopción de medidas efectivas de mitigación por parte del Estado, la Corte señaló que no se aclaró como este tipo de medidas podían prevenir las devastadoras consecuencias climáticas. Por cual también desestimó la alegación presentada.

En este fallo merece una referencia especial, el llamado realizado por el juzgador a la teoría de la distribución equitativa de emisiones per-capital, pues representa una aproximación clara al concepto de justicia climática distributiva. En este sentido, la Corte consideró que los estándares de reducción de emisiones asignadas a los países del Anexo I CMNUCC debían ser también aplicable a Países Bajos debido a que tiene uno de los índices de emisiones per-capital más altos en comparación con otros integrantes de esta misma categoría.

En lo que respecta a la posición del Estado sobre el mínimo impacto que su reducción de emisiones tendría a escala global, la Corte consideró que, ciertamente una meta más ambiciosa por parte del demandado no resolvería por sí solo el problema del calentamiento global. Sin embargo, esto no se

480. La Corte señaló que este conocimiento de la situación fue remarcado por las COPs de Bali, Cancun, Durban, Doha y Warsaw, con lo cual el Estado difícilmente puede negar el reconocimiento del peligro.

traducía en un eximente a la obligación de adoptar medidas de protección frente al cambio climático peligroso.

Otro argumento de impugnación del Estado de especial interés es la ausencia de vínculo causal en la condena realizada por el juez de primera instancia. La Corte de Apelaciones acertadamente respondió que, a diferencia de las obligaciones de resultado, donde se requiere probar el origen y conexión de la actuación estatal con el daño, en materia de obligaciones de medios el establecimiento del vínculo causal se encuentra limitado a la demostración de la existencia del peligro real.

En cuanto al argumento del Estado sobre la invasión de competencia del poder judicial hacia la esfera del poder ejecutivo como resultado de la orden emitida por el Tribunal de Distrito, el juez *Ad Quem* señaló que debía ser rechazado pues la orden dictada en la sentencia no establecía el contenido a ser plasmado en la legislación, ni la forma en que debía ser cumplida, así como tampoco hacía alusión a los múltiples mecanismos a disposición del Estado para ejecutar la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero.

Decisión de la Corte de Apelaciones

El juzgador concluyó la evaluación de los argumentos de las partes, para dictaminar que: el Estado no cumplió su deber de cuidado sobre la protección de los derechos contenidos en los artículos 2 y 8 CEDH al fallar en la reducción eficientemente las emisiones en al menos un 25 % para finales del año 2020. El juez de alzada confirmó la sentencia de primera instancia y solo difieren en que el juez *Ad Quem* consideró que el Estado había fallado en la obligación de diligencia debida por la directa violación los derechos reconocidos en el CEDH y no solo basado en la legislación holandesa. Igualmente, la Corte de Apelaciones declaró que el Estado no tenía margen de apreciación sobre la meta de reducción del 25 %.

Casación: Recurso interpuesto ante el Tribunal Supremo del Reino de Países Bajos (2019)[481]

A finales de diciembre del 2019, el máximo Tribunal de Países Bajos rechazó la apelación del Estado, confirmando así la decisión de segunda instancia y sustentado parte de sus argumentos en el CEDH[482]. A lo largo de la

481. Supreme Court of Netherlands. Urgenda Foundation v. State of the Netherlands, judgment (20 dic. 2019). Recuperado de: https://climatecasechart.com/non-us-case/urgenda-foundation-v-kingdom-of-the-netherlands/

482. Nollkaemper, A. & Burger., L. (06 jun. 2020). «A New Classic in Climate Change Litigation: The Dutch Supreme Court Decision in the Urgenda Case» *EJIL: Talk!*. Recuperado de:

motivación del recurso de casación, el juzgador reafirmó el deber del Estado de tomar las medidas apropiadas frente a los peligros ambientales que amenazan a la población en general.

En la casación de la sentencia, se destacó la importancia del rol de los Tribunales nacionales como los llamados a proveer un remedio jurídico efectivo frente a la violación de derechos humanos contenidos en el CEDH antes de que el caso tuviese que llegar al Tribunal regional. El mayor acierto estuvo en la vinculación a la CMNUCC con los artículos 2 y 8 CEDH, en virtud del grave riesgo de que situaciones asociadas al cambio climático peligroso afecten la vida y bienestar de las personas localizadas dentro de la jurisdicción de Países Bajos.

La Corte señaló que la sola existencia de un riesgo cierto hacía exigibles las obligaciones positivas intrínsecas en los artículos 2 y 8 de la Convención. La clave de la cuestión estaba en que, si un fenómeno representa una amenaza directa a la vida de las personas, debían desplegarse la protección del derecho, independientemente de que sus consecuencias no se materialicen. En este caso, la inminencia se refería específicamente a la amenaza del derecho. Por tanto, el Estado tenía la obligación de adoptar medidas ante el peligro cierto e inaplazable que implica el cambio climático.

La sentencia consolidó la argumentación desde el punto de vista sustantivo mediante la invocación de normas derivadas del CEDH, así como del artículo 191 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, ya que este último introduce la posibilidad de activar el principio precautorio ante las políticas o acciones estatales que puedan causar daños como una medida de mitigación del riesgo ambiental.

El juzgador también hizo uso de los principios de derecho ambiental, especialmente el principio precautorio como el mecanismo por excelencia para impulsar la adopción de medidas de salvaguarda ante el peligro del cambio climático, por lo cual debía reducir las emisiones de manera urgente. En general, la decisión reafirmó cada uno de los ítems abordados por la Corte de Apelaciones, quien a su vez ya había establecido la condena del Estado por su falta de deber cuidado.

Apreciación general de la sentencia de casación

La determinación de responsabilidad estatal en primera instancia, en apelación y su posterior confirmación en casación, han transformado el reclamo de Urgenda en el litigio climático más importante de todos los tiempos,

https://bit.ly/3DJN5sI *«The Urgenda judgment, that has been heralded as the 'strongest' of all, makes clear that the fact a state is only a minor contributor compared to many other actors, does not preclude its individual responsibility. The judgment contains important pointers that plaintiffs and courts can rely on in similar cases».*

tenido un impacto exponencial tanto en Países Bajos[483] como en las diferentes latitudes del globo, incluidos países con tradiciones jurídicas distintas[484]. Esto se debe fundamentalmente a las siguientes razones:

Primero, a la claridad con la cual los tribunales decidieron abordar la cuestión de la diligencia debida, como un mecanismo eficaz para dar respuesta los obstáculos jurídicos que representaba el establecimiento del vínculo causal del daño ante el multifactorial fenómeno del calentamiento global. Segundo, a la estructura argumentativa en primera instancia, pues esto permitió a los tribunales de alzada profundizar en la cuestión de la afectación de derechos para impartir justicia a los peticionarios.

Tercero, el sistema de *Case Law*[485] propio de los países del *Common Law*, les proporcionó a los jueces las herramientas para impartir la justicia climática mediante las instituciones jurídicas del *Tort*[486] (*nuisance*[487]) y negligencia peligrosa, así como la entidad procesal *class action*, pues los argumentos desarrollados alrededor de estas figuras fueron la base general que permitió el establecimiento de la *ratio decidendi* del caso. Cuarto, la madurez del sistema de justicia que además de su coherencia argumentativa, consideró

---

483. El caso *Urgenda* fue la base para el desarrollo exitoso de otros litigios basados en el deber de cuidado, siende el más representativo. The Hague District Court. Milieudefensie *et al.* v. Royal Dutch Shell, Judgment (26 may. 2021).

484. Por mencionar otros litigios influidos fuera del continente europeo véase: Tribunal Regional Federal Da 4 Region. Institute of Amazonian Studies (IEA) v. Brazil, (7 dic. 2021) [Institute of Amazonian Studies (IEA) v. Brazil]. Recuperado de: https://climate-casechart.com/non-us-case/institute-of-amazonian-studies-v-brazil/, donde una Corte Regional reconoció el derecho fundamental a la estabilidad climática para las presentes y futuras generaciones.

485. Véase: Cox, R. (2016). «A climate change litigation precedent: Urgenda Foundation v. The State of the Netherlands». *Journal of Energy & Natural Resources Law*, *34*(2), 143-163. Conforme al sistema jurídico de los Países Bajos los juzgadores pueden considerar la aplicación de normas de soft law, como lo serían los instrumentos internacionales principales en materia de cambio climático que, aunque no establecen normas primarias que permitan la atribución de responsabilidad directa si permiten establecer estándares de responsabilidad social con relación al deber de cuidado sobre su ciudadanía.

486. Ganguly, G., Setzer, J. & Heyvaert, V. (2018). *Ob. cit*. Los autores identifican un paralelismo con los argumentos utilizados en las litigaciones sobre tabaco y asbesto «with respect to causation, the court found that although it was impossible to pinpoint which employer had directly caused the harm, the defendant corporation Glenhaven had nonetheless materially increased the risk of harm to the plaintiff and was found to be jointly and severally liable. Similarly, in the 1990s and early 2000s, plaintiffs began to experience greater levels of success in US tobacco litigation. In 2002, an individual plaintiff in tobacco litigation secured a major victory against the Philip Morris company».

487. *Loc. cit*. Con relación a las obligaciones de diligencia debida en materia civil, a través de la cual los jueces contaban con la facultad de ponderar ampliamente los hechos y circunstancias intrínsecas del cambio climático y su impacto.

el llamado de la sociedad holandesa hacia la construcción de una transición energética sostenible[488].

Quinto, otro aspecto destacable de la sucesión de fallos es que los juzgadores reconocieron como evidencia conclusiva que los informes del IPPCC tenían valor probatorio sólido, debido a haber emanado del consenso internacional y debido a que sus hallazgos cuentan con el respaldo de una comunidad científica integrada por las autoridades más prominentes[489].

Futuras generaciones v. presidencia de la República de Colombia[490] (2018)

América Latina es una región en la que recientemente ha comenzado a impartirse justicia climática[491]. De hecho, la interposición de litigios de esta naturaleza se encuentra en pleno desarrollo[492]. Sin embargo, son las características propias de los razonamientos empleados en las peticiones y decisiones, los que han convertido esta novísima aproximación climática en un referente internacional, pues plantean una forma alternativa de protección ambiental desde una mirada descolonizada, con impacto en foros tanto regionales[493] como universales[494].

---

488. Etty, T., Heyvaert, V., Carlarne, C., *et al* (2020), *Ob. cit*. *«However, by constructing this narrative through the most high-profile cases, including many 'unsuccessful' cases, a pattern of gradual learning emerges that helps those on the 'quest' to better define their holy grail. Within this narrative, the initial Urgenda judgment is referenced as an important first victory, despite being relatively conservative in its ambition and outcome, compared with earlier cases within the climate litigation tradition».*

489. Esto reafirma el planteamiento que otorga valor de aceptación internacional a los informes del IPCC: Maljean-Dubois, S. (2018). «Climate change litigation». En: H. Ruiz-Fabri (ed.) *The Max Planck Encyclopedia of Procedural Law*. Recuperado de: https://bit.ly/3xkfLpm; Maljean-Dubois, S. & Wemaëre, M. (2017). *Biodiversity and climate change*. M. Faure (ed.) *Elgar Encyclopedia of Environmental Law* (pp. 198-212). Cheltenham: Edward Elgar Publishing.; Viñuales, J. E. (2010), *Ob. cit*. 437.

490. Véase. Solicitud de tutela presentada ante la Corte Suprema de Colombia. Futuras Generaciones v. la Presidencia de la República de Colombia *et al*. (29 Ene. 2018). Recuperado de: https://climatecasechart.com/non-us-case/future-generation-v-ministry-environment-others/

491. Tigre, M. A., Urzola, N. & Goodman, A. (2023). *Ob. cit*. 67-93.

492. Al 1 de noviembre 2023, el panorama de acciones climáticas por país es el siguiente: Argentina (13), Brasil (77), Chile (8), Colombia (14), Ecuador (3), México (20) y Perú (1). Véase: SABIN & Columbia University (2023). «Climate Change Litigation Data bases | Non U.S climate change Litigation». Recuperado de: https://climatecasechart.com/non-us-jurisdiction/.

493. Murcott, M; Tigre, M.A & Zimmermann, N (22 Mar. 2022) «What the ECtHR Court could learn from courts in the Global South». *Verfassungblog on matters constitutional*. Recuperado de: https://bit.ly/44sHLII.

494. Especialmente por su aproximación hacia la protección de grupos vulnerables como pueblos indígenas, infancia, adolescencia y futuras generaciones.

Si se compara la creciente ola de peticiones climáticas en las Américas con el enfoque de justicia brindado por países del Norte Global como Australia[495], Nueva Zelanda[496] o la aproximación europea de la cuestión[497], es posible verificar sustanciales diferencias en el tratamiento de asuntos ambientales tanto desde las periferias como en el aspecto medular de la cuestión. De allí que el tratamiento judicial brindado por los tribunales nacionales de países latinoamericanos brinda una oportunidad única para explorar otras dimensiones de la aproximación de salvaguarda ambiental desde el Sur Global.

Además, es relevante destacarse que en América Latina[498] también están floreciendo un número de casos relevantes relacionados con la transición climática justa[499], en su mayoría casos subordinados a otro asunto central de naturaleza laboral y social. Se espera que el panorama de la región sur despegue exponencialmente con el incremento de solicitudes de tutela climática en sus diversas manifestaciones para asegurar una mayor y mejor protección de derechos humanos en los próximos años.

Lo anterior debido a que cada vez es más frecuente la promulgación de leyes y políticas climáticas, cuya implementación genera nuevos desafíos que requieren tutela[500]. Asimismo, influyen significativamente el activismo

---

495. Al 1 de noviembre 2023, cuenta con ciento treinta (134) peticiones climáticas en sede judicial. SABIN & Columbia University (2023). «Climate Change Litigation Data bases | Global climate change Litigation» |Australia.

496. Al 1 de noviembre 2023, bajo su jurisdicción se contabilizan veintinueve (30) litigios entre pendientes y resueltos. SABIN & Columbia University (2023). «Climate Change Litigation Data bases | Global climate change Litigation» |Nueva Zelanda.

497. Véanse también los setenta y tres (73) casos ventilados ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, Defensor del Pueblo Europeo y Tribunal General de la Unión Europea (General Court): Sabin Center Data base. European Court of Justice. Estos casos no incluyen aquellos pendientes de decisión ante el TEDH. Por su parte en lo que respecta a la justicia española se han registrado diecisiete (17) litigios climáticos encuadrados en las categorías de: Asignación individual de derechos de emisión y nulidad de asignación de plan de emisiones ante el Tribunal Supremo Español. Aunque estos casos europeos no corresponden al perfil de litigios seleccionados en esta investigación son muestra de la creciente ola de peticiones de contenido climático periférico.

498. Para contextualizar los antecedentes de la situación climática de los países americanos véase: OEA. (2016). *Climate Change: A Comparative Overview of the Rights Based Approach in the* Americas. Washington D.C, OEA. Recuperado de: https://bit.ly/3urxQ58.

499. Tigre, M. A., Zenteno, L., Hesselman, M., *et al* (2023). «Just transition litigation in Latin America: an initial categorization of climate litigation cases amid the energy transition». *Sabin Center for Climate Change law*. Recuperado de: https://bit.ly/3JBW7hx. Véase también: Johansson, V. (2023). «Just Transition as an Evolving Concept in International Climate Law». *Journal of Environmental Law*. 35, (2). 229-249. La transición energética justa es un asunto abordado con éxito y desde larga data en Europa, véase. Pianta, M. & Lucchese, M. (2020). «Rethinking the European Green Deal: An industrial policy for a just transition in Europe». *Review of Radical Political Economics*, 52(4), 633-641.

500. Como evidencia de la importancia que va adquiriendo la protección de los derechos humanos en el contexto climático actual en la región véase: Pobreza, cambio climático y DESCA

ambiental de colectivos vulnerables, la difusión de estrategias de litigación[501], el empoderamiento de las comunidades afectadas fortalecidas por experiencias de éxito. Por último, aunque no menos importante, se debe sumar la incorporación de compromisos internacionales[502] en el derecho interno de los países, mediante los cuales se exige la implementación de acciones concretas, cuyas omisiones serían susceptibles de revisión a la luz del derecho interno o incluso por parte del sistema regional de derechos humanos.

Hasta el verano de 2023, la región solo contabiliza cuatro (4) decisiones con valor de cosa juzgada[503], en los cuales se ha adoptado una respuesta climática afirmativa con un enfoque de protección enraizado en los derechos humanos. Estas decisiones están localizadas en Colombia, Brasil[504] y Ecuador[505]. Para este estudio se ha seleccionado la jurisdicción colombiana, en virtud de haber sido la primera en la región en impartir justicia climática con la aproximación antes indicada, sirviendo de modelo de exportación para los países que conforman el bloque latinoamericano.

La instauración de este tipo de doctrina judicial en Colombia no es casual dada la evolución jurídica del tratamiento de las cuestiones ambientales[506] por sus tribunales, especialmente por la Corte Constitucional[507] que es el retrato vivo del constitucionalismo transformador latinoamericano. De allí

---

en Centro América y México en el contexto de movilidad humana, CIDH /REDESCA. OEA/Ser.L/V/II.doc.158/23 (28 jul. 2023). Recuperado de: https://www.oas.org/es/cidh/informes

501. Véase: UNEP (2017). *The status of climate change litigation: a global review. UNEP/SABIN Center for Climate Change*. New York: UNEP/SABIN. Recuperado de: https://bit.ly/3tB196j. Mientras que, sobre la evolución de las litigaciones hasta julio de 2023, véase: Burger, M & Tigre, M. A. (2023) *Global Climate Litigation Report: 2023 Status Review.* New York: UNEP/SABIN. Recuperado de: https://doi.org/10.59117/20.500.11822/43008

502. Concretamente el acuerdo de Escazú, para profundizar sobre el temprano aporte de este instrumento internacional véase: Medici-Colombo, G. & Ricarte, T. (2023). «The Escazú Agreement contribution to environmental justice in Latin America: An exploratory empirical inquiry through the lens of climate litigation». *Journal of Human Rights Practice*, Recuperado de: https://doi.org/10.1093/jhuman/huad029

503. Existe un significativo número de decisiones en fase de apelación, dada su falta de firmeza al 29 de agosto de 2023 no han sido incluidas en el estudio.

504. Véase especialmente: Supremo Tribunal Federal. Partido Socialista Brasileito (PSB) *et al.* v. Presidente da la República *et al*. Véase SABIN & Columbia University (2023). «Climate Change Litigation Data bases | Global climate change litigation» | Brasil. Recuperado de: https://climatecasechart.com/non-us-case/psb-et-al-v-federal-union/

505. Corte Provincial de Justicia de Sucumbío, Sala Multicompetente. Herrera Carrion *et al*. (29 jul. 2021). Recuperado de: https://climatecasechart.com/non-us-case/herrera-carrion-et-al-v-ministry-of-the-environment-et-al-caso-mecheros/

506. Colombia reconoce su constitución como una de tipo ecologizada donde la protección directa del medioambiente brota de los artículos 8, 79 y 95 de la Constitución.

507. Véanse: Corte Constitucional de Colombia, Sentencias T-411/92 (17 jun. 1992), C-431/00 (12 abr. 2000), C-032/19 (30 Ene. 2019), T-614/19 (16 dic. 2019), T- 622 (10 nov. 2016).

que, sus tribunales hayan sido pioneros en la calificación y protección de la naturaleza, primero a través de la tutela de la flora y fauna como intereses superiores; y posteriormente, mediante el reconocimiento judicial de la personalidad jurídica de sus componentes en las sentencias T622/16[508] y C035/16[509]. Asimismo, destaca la protección de intereses desde la justicia climática intergeneracional[510].

Cabe destacar que el país caribeño además cuenta con interesantes aportaciones jurisprudenciales en sede contenciosa administrativa, pertenecientes a la categoría litigiosa de transición justa y equitativa, concretamente, *Procuraduría General de la Nación v. la Presidencia de la República de Colombia*[511]*, Río Combeima*[512]*, Josefina Huffington Archbold v. la Presidencia de la República de Colombia*[513]*, y Miembros de la comunidad indígena «Gran Cumbal» v. SVP Business SAS et al*[514]., solo por mencionar algunos. Ahora bien, con respecto

508. Corte Constitucional de Colombia, sentencia T622/16 (27 Ene. 2015). Recuperado de: https://bit.ly/3ycWGXI. El juez constitucional confirió el reconocimiento como sujeto de Derecho al Río Atrato localizado en la región del Chocó, con el propósito de asegurar su protección y conservación. A pesar de lo anterior no se desconocen las críticas sobre su eficacia, véase: Sagre, L. M. & Callejas, M. A. G. (2022). «El giro en el constitucionalismo colombiano. De la lectura moral de los derechos fundamentales al problema de su eficacia». *Vniversitas*, *71*.

509. Corte Constitucional de Colombia, sentencia C-035/16. (8 Feb. 2016). Recuperado de: https://bit.ly/373Ximf. Mediante la cual se estableció la protección del páramo como sistema de captura de carbono, así como también por su rol de desacelerador del cambio climático e instrumento de regulación del ciclo hídrico, este último enlazado a la protección del derecho fundamental al agua. Sin embargo, este caso no fue seleccionado como parte de la muestra para análisis debido a que el tratamiento jurídico otorgado al páramo se derivó del impacto directo que causaba la industria minera.

510. Este tipo de justicia contempla la reestructuración de planes, diseños legislativos, instituciones y políticas climáticas para salvaguardar intereses a largo plazo.

511. Tribunal Administrativo de Cundinamarca. *Procuraduría General de la Nación v. la Presidencia de la República de Colombia. Rad:* 25000234100020220155l-00 (23 Feb.2023). *Posteriormente, la decisión de primera instancia fue apelada ante el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso administrativo.* Rad: 25000-23-41-000-2022-01551-01 (27 abr. 2023).

512. Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso administrativo. Personería Municipal de Ibagué v. y Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible *et al*. Rad: 73001-23-31-000-2011-00611-03 (14 Sept. 2020).

513. Corte Constitucional de Colombia, Josefina Huffington Archbold v. la Presidencia de la República de Colombia *et al*., sentencia T333/22 (26 Sept. 2022). Recuperado de: https://www.corteconstitucional.gov.co/Relatoria/2022/T-333-22.htm Para asuntos pendiente de decisión. Véase SABIN & Columbia University (2023). «Climate Change Litigation Data bases | Global climate change Litigation» | Colombia.

514. Juzgado Promiscuo Municipal de Cumbal-Nariño. *Diana Patricia Puenguenán et. al, «Gran Cumbal» v. SVP Business SAS et al.* Acción de tutela N.° 522274089001-2023-00095-00 (21 jul. 2023). Donde se cuestión la legalidad de un acuerdo sobre compra de créditos de carbono entre entidades privadas y la autoridad indígena en violación del derecho a la consulta previa, libre e informada. En este caso se encuentran vinculados el Ministerio de Interior de Colombia.

a la protección frente al cambio climático desde los derechos humanos, esta sección se concentra en el caso *Futuras Generaciones v. la Presidencia de la República de Colombia*[515].

Hechos del caso

La sentencia emitida abordó el tratamiento de la deforestación y su incidencia en la acumulación de emisiones de gases de efecto invernadero. Este caso en particular está constituido por una pretensión de tutela constitucional solicitada por veinticinco (25 niños), niñas, adolescentes y adultos jóvenes con edades comprendidas entre los siete (7) y veinticinco (25) años, quienes consideraron afectados sus derechos debido a la inacción del ejecutivo nacional[516] frente al tratamiento de las emisiones de gases de efecto invernadero a la atmosfera. La pretensión de los solicitantes fue desestimada en primera instancia[517]. El juez *A Quo* consideró que la acción utilizada para invocar la protección de los derechos era incorrecta conforme a la legislación nacional.

Los peticionarios aducían en su solicitud que debido a su rango de edad estaban obligados a enfrentar los efectos adversos del cambio climático, producto de las inadecuadas estrategias de mitigación asumidas. Específicamente, con relación a la omisión del Estado frente a la progresiva deforestación de la región amazónica colombiana. Para los representantes de las generaciones presentes y futuras[518], el proceso de degradación de la selva

515. Corte Suprema de Colombia. Futuras Generaciones v. la Presidencia de la República de Colombia *et al*., sentencia 4360-2018 (5 de abr. 2018).

516. Concretamente la querella fue contra la Presidencia de la República, Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, Unidad Administrativa Especial Parques Nacionales Naturales, Corporación para el Desarrollo Sostenible del Norte y el Oriente Amazónico, Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonía, Corporación para el Desarrollo Sostenible de la Macarena ,la los municipios de San Vicente del Caguán, Cartagena del Chairá, San José del Guaviare, Calamar, La Macarena, Puerto Leguízamo, Solano, Uribe, El Retorno, Puerto Guzmán, Puerto Rico, Miraflores, Florencia y Vistahermosa; y a las gobernaciones de Amazonas, Caquetá, Guainía, Guaviare, Putumayo y Vaupés.

517. Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá. Salamanca, Gabanzo. v. Presidencia de Colombia *et al*., sentencia (12 Feb. 2018).

518. Los demandantes menores y jóvenes constituyen un canal para proteger y asegurar los derechos de las futuras generaciones, pero a través de sí mismos, es decir, se plantea la tutela como un grupo determinado que ve afectado sus derechos en la actualidad, así como en la vida adulta y la vejez. De esta forma, se deconstruyó el argumento de grupo indeterminado. Véase: Corte Suprema de Colombia. Futuras Generaciones v. la Presidencia de la República de Colombia *et al*., sentencia 4360-2018 (5 de abr. 2018)., 9, §3.2.1. «las actividades relacionadas con la intervención del ambiente sano y el derecho fundamental al mismo, por sí, amén de los daños que puedan generar a la comunidad, conllevan riesgos para todas las personas, para la naturaleza, para el patrimonio y para los derechos fundamentales de las futuras generaciones y para la supervivencia de la humanidad y de los recursos naturales ante su degradación en este planeta».

tropical más grande del mundo constituía la principal fuente generadora de dióxido de carbono.

Su argumento se basaba en que la desaparición de este sumidero de carbono por efecto de la acción humana incrementaría la liberación de CO_2 a la atmósfera, agravando el calentamiento global en el presente y por ende exacerbando el peligro sobre las condiciones de vida de los peticionarios. Adicionalmente, señalaron que Colombia había asumido, en el marco del Acuerdo de París, el compromiso internacional de reducir la tasa neta de deforestación nacional a cero para el año 2020 y que el mismo resultó incumplido de forma flagrante.

El principal problema detectado por la Corte Suprema de la Nación giraba en torno a determinar si la conducta del Estado constituía una omisión susceptible de generar afectación directa en los derechos humanos de los peticionarios tanto de forma colectiva como de forma individual. En suma, la Corte debía establecer si ¿El Estado tenía la obligación de adoptar acciones para reducir la deforestación amazónica? y de ser así determinar si ¿Era el Estado responsable por el aumento de las emisiones en Colombia?

Cuestiones resueltas por la Corte Suprema de la Nación

I) Ley aplicable

El juzgador se enfrentó a las características dificultades asociadas a los litigios climáticos. Tuvo que abordar la localización de la ley aplicable a través de la revisión del razonamiento del *A Quo,* así como la determinación de la vía procesal correcta para la solicitud de la tutela de derechos claramente marcados por un enfoque colectivo e intergeneracional.

En lo que respecta a la motivación de la sentencia objeto de revisión, el Juez *A Quo* solo entró a conocer la cuestión procesal previa y desestimó la solicitud antes de estudiar el fondo del asunto[519]. Sus argumentos pueden resumirse en: 1) subsidiaridad, existencia de medios ordinarios a ser agotados antes de solicitar la activación del remedio excepcional de tutela constitucional; 2) identificación de la acción popular como acción procesal idónea para el objeto de la petición; 3) ausencia de un daño inminente que requiriese de tratamiento urgente; 4) falta de acreditación del perjuicio irreparable; y, 5) falta de complejidad correspondiente a la adopción de medidas.

La Corte Suprema de la Nación se aproximó a la revisión de la cuestión procesal reconociendo que, en principio, la tutela de derechos constitucionales no procedía en el caso de intereses colectivos y/o difusos[520], pues era

519. Razón por la cual en este caso no se incluye el análisis discursivo de la decisión construida por el juez superior del Distrito Judicial del Bogotá.

520. Para los cuales existe la Ley 472 de 1998 mediante la cual se desarrolla la acción contenida en el artículo 88 de la Constitución Colombiana. Constitución Política de Colombia

una acción destinada a brindar protección a derechos de los sujetos individualmente considerados. Sin embargo, en su fallo recordó que por desarrollo jurisprudencial operaba una excepción a la aplicación de esta regla ante el agravio de intereses colectivos que afectasen garantías individuales, es decir, si se han visto afectados de forma subyacente derechos individuales a causa de las transformaciones climáticas extremas. Así las cosas, el juez *Ad Quem* entró a verificar si se cumplían los requisitos que avalaran la procedencia de la excepción, es decir:

- Conexidad de los derechos colectivos y la subsecuente violación de uno o varios derechos humanos. En este sentido, la Corte señaló que los derechos a la vida, a la salud, al mínimo vital, a la libertad y a la dignidad son determinados por el ambiente donde se desenvuelven las personas. Por lo cual, el deterioro al medio ambiente constituye una amenaza grave a la vida tanto en el presente como en el futuro, así como también implica un deterioro de otros derechos humanos. De allí que la Corte encontró cumplido el requisito.
- Verificación de la cualidad de los actores como sujetos pasivos del daño. El Tribunal en revisión verificó que los menores de edad estuviesen debidamente representados y que los adultos actuasen en nombre propio, por lo cual consideró cumplido el requisito de legitimación para instaurar la acción de tutela sobre los derechos a un medio ambiente sano, vida y salud.
- Evaluación para determinar si se trataba de hechos hipotéticos o reales. En este caso, el juzgador reconoció la existencia del cambio climático y su amenaza sobre el ser humano, por lo que concluyó que los peticionarios reclaman daños actuales y no meramente hipotéticos en relación con las transformaciones que vive la Amazonía y las alteraciones que este fenómeno causaba y causaría en sus localidades. Por último, verificó que la orden judicial era capaz de reestablecer la situación jurídica individual infringida.

A partir del razonamiento judicial anterior, concluyó que resultaba procedente la vía procesal delineada por el artículo 86 de la Constitución Colombiana[521] y su reglamento contenido en el Decreto 2591 de 1991[522]. Por lo

[C.P.C]. CPC Artículo 88: «La ley regulará las acciones populares para la protección de los derechos e intereses colectivos, relacionados con el patrimonio, el espacio, la seguridad y la salubridad públicos, la moral administrativa, el ambiente, la libre competencia económica y otros de similar naturaleza que se definen en ella. También regulará las acciones originadas en los daños ocasionados a un número plural de personas, sin perjuicio de las correspondientes acciones particulares. Asimismo, definirá los casos de responsabilidad civil objetiva por el daño inferido a los derechos e intereses colectivos».

521. Véase: el artículo 86 CPC.

522. Véase: L 2591, noviembre 19, 1991. Diario Oficial [D.O] (Colomb.) No. 40.165, mediante el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política.

cual, los peticionarios correctamente invocaron la solicitud de tutela constitucional de sus derechos. Cabe destacar que la acción del artículo 86, es el equivalente al juicio de amparo en otros países de la región.

El juzgador inició su desarrollo discursivo a través de la exploración de la situación actual del ambiente y especialmente del cambio climático, haciendo alusión a los evidentes peligros que se ciñen sobre los ecosistemas, biodiversidad y el hombre, quienes debe enfrentase a fenómenos meteorológicos extremos. Ante el reconocimiento de estos eventos como una realidad causada por el hombre, planteó el creciente desarrollo de la concepción ecocéntrica-antrópica y la obligación moral de cambiar el comportamiento del hombre en la sociedad, hasta trascender al concepto de sostenibilidad donde exista un equilibrio entre el ámbito social, económico y ambiental.

Interesante reflexión *ius filosófica* planteó la Corte en el desarrollo argumentativo, al destacar la labor de la judicatura en el Estado Constitucional, que está enfocada en la protección de derechos esenciales de la persona humana como valores supra legales, estrechamente conectados con los derechos colectivos. Esta visión representa la postura tradicional de protección por vía refleja de los derechos humanos.

Sin embargo, la Corte no perdió la oportunidad de recordar que la esencia de ese Estado Constitucional, al que todos los miembros del colectivo se someten, requiere que la sociedad pase de una ética privada a una ética pública donde los valores morales permitan alcanzar una justicia social redefiniendo el concepto de derechos, donde la existencia de derechos implica a su vez el establecimiento de deberes[523], en relación con otras personas, incluso las no nacidas, así como con otras especies animales y vegetales.

Para el magistrado ponente, los derechos relacionados con el medio ambiente encuentran su base intergeneracional[524] en el deber ético de solida-

523. Corte Suprema de Colombia. Futuras Generaciones v. la Presidencia de la República de Colombia *et al.*, sentencia 4360-2018 (5 de abr. 2018)., p. 18.

524. Corte Suprema de Colombia. Futuras Generaciones v. la Presidencia de la República de Colombia *et al.*, sentencia 4360-2018 (5 de abr. 2018)., p. 10 §3.2.1 «Se trata de una responsabilidad que busca tutelar los derechos de las generaciones presentes, de las futuras y de la naturaleza entroncados con la protección del suelo, el aire, el agua, la flora, la fauna, las condiciones vitales, el paisaje natural, pero también el artificial y el cultural. Por ello se edifica en los principios de soberanía y responsabilidad, buena vecindad y cooperación internacional, acción preventiva, precaución, obligación de indemnizar por daños como reparación plena y de protección de las víctimas, responsabilidad común y diferenciada, desarrollo sostenible, equidad intergeneracional, desarrollo sostenible de recursos naturales, integración del derecho fundamental al medio ambiente y desarrollo, amplio espacio de participación ciudadana e, in dubio pro natura en cuanto guía de hermenéutica jurídica en la materia; entre otros. Todos esos criterios reseñados, están previstos y decantados en un catálogo amplio y difuso de tratados y convenciones internacionales, principios generales de derecho, jurisprudencia internacional y nacional e inclusive la costumbre internacional, pero también en la Constitución Política colombiana de 1991 y en desarrollos normativos específicos como el Código Civil y el Código Nacional de Recursos Naturales».

ridad entre especies y el valor propio de la naturaleza[525]. Este último valor, se traduce como un «respeto a la parte de sí mismo que está compuesta por la naturaleza, y de la que formaran parte, a su vez las futuras generaciones»[526]. Así, se plantea una relación jurídica obligatoria de los derechos ambientales intergeneracionales, como una prestación de no hacer que limita la libertad de acción de las generaciones presentes, estableciendo mayores compromisos ambientales[527] «a tal punto que asuman una actitud de cuidado y custodia de los bienes naturales y del mundo humano futuro»[528].

La conservación de la naturaleza es lo que permite mantener la vida humana a través de la concepción de solidaridad colectiva directa con el entorno, como medio esencial para asegurar el equilibrio de un todo. En este sentido, el juez *Ad Quem* reconoció una suerte de colisión entre la relación jurídica que nace de los derechos de las futuras generaciones y la conducta omisiva de las generaciones presentes, lo cual produce desproporcionadas cargas ambientales que inexorablemente son trasladadas las generaciones venideras[529].

La Corte igualmente recordó que el origen de la justicia ambiental tiene sus raíces en la desigualdad social, motivo por el cual los grupos más vulnerables son los más afectados por los daños ambientales. Esto resulta tremendamente valioso en el marco de un litigio climático desarrollado en el corazón de la región más desigual del mundo[530]. De manera tal que reaparece esta necesidad latente de transición socioambiental, haciendo un llamado a la extensión del principio de solidaridad no solo hacia el vecino sino también hacia las generaciones futuras.

---

525. Corte Suprema de Colombia. Futuras Generaciones v. la Presidencia de la República de Colombia *et al*., sentencia 4360-2018 (5 de abr. 2018)., p. 19.

526. Corte Suprema de Colombia. Futuras Generaciones v. la Presidencia de la República de Colombia *et al*., sentencia 4360-2018 (5 de abr. 2018)., p. 21.

527. En este punto en particular el juzgador plantea que los niños, niñas y jóvenes, en tanto son parte de la sociedad actual, funcionan como un vehículo (procesal/representación) para proteger los intereses de las generaciones futuras.

528. Corte Suprema de Colombia. Futuras Generaciones v. la Presidencia de la República de Colombia *et al*., sentencia 4360-2018 (5 de abr. 2018)., p. 21.

529. Corte Suprema de Colombia. Futuras Generaciones v. la Presidencia de la República de Colombia *et al*., sentencia 4360-2018 (5 de abr. 2018)., p. 21. Alianza. Para el juzgador se plantea una relación jurídica obligatoria de los derechos ambientales de las generaciones futuras, «como la prestación de no hacer cuyo efecto se traduce en una limitación de la libertad de acción de las generaciones presentes, al tiempo que esta exigencia implícitamente les atribuye nuevas cargas y compromisos ambientales, a tal punto que asuman una actitud de cuidado y custodia de los bienes naturales y del mundo humano futuro».

530. UNDP. (2021) «Atrapados: Alta Desigualdad y Bajo Crecimiento en América Latina y el Caribe». *Informe Regional de Desarrollo Humano 2021.* Recuperado de: https://www.undp.org/es/latin-america/publications/capitulo-1-irdh2021

Posteriormente, la Corte invocó elementos argumentativos derivados de los instrumentos ambientales internacionales de derecho indicativo como una guía de orientación para la conducta del Estado. Aunque, estos fueron respaldados por aquellos tratados internacionales vinculantes para Colombia, así como el contenido verde de su constitución. Particularmente, el Tribunal señaló el compromiso del Estado con la reducción de la deforestación de la Amazonía y la creación del Fondo *Visión Amazonía*[531] durante la COP21 como parte de la iniciativa «Colombia Sostenible». Para la Corte, estos documentos constituyeron la fuente de una obligación internacional, con lo cual quedó claramente establecido el deber del ejecutivo nacional de reducir los índices de deforestación desde el año 2016.

El discurrir argumentativo de la sentencia continuó al señalar la importancia de la Amazonía, no solo para Colombia sino para el mundo, por lo cual se dio a la tarea de exponer sus dimensiones, diversidad, distribución poblacional entre otros elementos que dejaban en evidencia el valor de este bien común para la humanidad. Esto le dio pie a la Corte para colocar a la selva amazónica en el centro del discurso, por ser el mecanismo natural de regulación del clima del país. Así concluyó que la protección de este sumidero de carbono era una obligación tanto de orden nacional como mundial que requería atención y tratamiento inmediato.

Para justificar la existencia de la relación causal del daño entre la conducta desplegada por el Estado y las afectaciones a los derechos individuales de los peticionarios, la Corte se vio en la necesidad de concentrar su argumentación en la Constitución, donde el derecho a un medio ambiente sano tiene el grado de derecho fundamental colectivo. Para lo cual, evaluó con detenimiento la situación de forestal de los municipios San Vicente de Caguán, Cartagena de Chairá, San José de Guaviare, Calamar, La Macarena, Puerto e Leguízamo, Solano, Uribe, El Retorno, Puerto Guzmán, Puerto Rico, Miraflores, Florencia y Vistahermosa, en relación con la implementación de estrategias de mitigación desplegada por el gobierno.

Así las cosas, enfrentó el desafío de vincular el cambio climático y la creciente pérdida de cobertura forestal, esto a pesar de que el origen primario de la deforestación estaba asociado a la expansión de la frontera agrícola, narco cultivos, minería, tala indiscriminada con la afectación de derechos individuales. De manera que la Corte se vio forzada a construir un vínculo subsidiario entre la degradación medio ambiental causada por el calentamiento global como consecuencia del aumento de CO_2 generado por la deforestación amazónica, y la violación del artículo 79, que a su vez generaba la vulneración de los derechos individuales de los peticionarios a una vida digna (artículo 1 y 11), a la salud (artículo 49), a la alimentación (artículo 1 y 65), así como al agua (artículo 95). Todos ellos de la Constitución.

---

531. Véase el estatus del proyecto: MINIAMBIENTE. (2022). *Visión Amazonía*. Recuperado el 30 de noviembre de 2023 de: https://bit.ly/3D9F9T9.

II) Complejidad de la prueba

A los fines de determinar la relación de causalidad la Corte entró a considerar los elementos probatorios presentados por los peticionarios y el gobierno, los cuales eran el resultado de investigaciones científicas realizadas por instituciones estatales[532]. Entre ellos el estudio del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales «IDEAM», el cual confirmaba un aumento de la tasa de deforestación como producto del acaparamiento ilegal de tierras en un 60-65 %, cultivos ilícitos causantes del problema en 20-22 %, explotación ilegal de minerales, con un impacto aproximado del 7-8 %, a cuyos datos además debía sumarse el desarrollo de infraestructura, cultivos agrícolas y tala indiscriminada local.

Los reportes del IDEAM también arrojaban como resultado altamente confiable una proyección del aumento de la temperatura media anual en Colombia, donde se estimaba el incremento de 1.6°C para el período 2041- 2070, mientras que para el período 2071-2100 la temperatura aumentaría hasta 2.14°C aproximadamente. Todo ello, a causa de la deforestación de la Amazonía.

A criterio de la Corte, estos factores se traducían en un perjuicio grave e inminente a corto, mediano y largo plazo, tanto para los peticionarios como para toda la generación presente y futura localizada en Colombia. Para la Corte, estos informes constituían sin duda razonable, que la deforestación del Amazonas colombiano aceleraba las emisiones de CO_2 y el calentamiento global. Tal situación causaba la transformación del ecosistema, cambios en los ciclos hídricos, degradación del suelo, bloqueo del acceso al agua, amenaza a la biodiversidad y en general daños ecológicos irreversibles a un hábitat con características únicas.

Según las proyecciones de los informes presentados, la reducción de la masa forestal causaría una disrupción de la conectividad ecológica con los Andes. En consecuencia, serios daños a su integridad. En cuanto al aumento de emisiones de gases de efecto invernadero, estos transformarían el ciclo hídrico generaban alto riesgo de inundación en unas regiones, mientras que otras zonas del país se verían sometidas a intensos períodos de sequía. La Corte,

532. IDEAM, PNU, Cancillería. (2016). *Inventario Nacional y Departamental de Gases de Efecto Invernadero-Colombia.* Tercera Comunicación Nacional de Cambio Climático. Recuperado el 30 de noviembre de 2023 de: https://bit.ly/356qNpU, IDEAM, PNU, Cancillería. (2015). *Nuevo Escenarios de Cambio Climático para Colombia 2011-2100*.; Ministerio del Ambiente. (2017) Boletín de alerta temprana de deforestación 2017. IDEAM. Estrategia integral de control a la deforestación y gestión de los bosques en Colombia (2016). Recuperado el 30 de noviembre de 2023 de: https://bit.ly/37YltWS, IDEAM, P. & MADS, D. (2015). Cancillería, — Nuevos Escenarios de Cambio Climático para Colombia 2011-2100 Herramientas Científicas para la Toma de Decisiones-Enfoque Nacional-Departamental: Tercera Comunicación Nacional de Cambio Climático. Instituto de Hidrología. *Meteorología y Estudios Ambientales.* La Corte también consideró el informe de ONG's como: WWF. (2016). *Living Amazon Report 2016: a regional approach to conservation in the Amazon.* Recuperado el 30 de noviembre de 2023 de: https://bit.ly/3IzZTo7.

señaló que permitir estos eventos estando a disposición principios ambientales como el de precaución, constituía una transgresión a la Constitución y un desconocimiento de los compromisos asumidos a la luz de derecho internacional en materia climática. En pocas palabras, falta de diligencia debida.

Así las cosas, la Corte procedió a invocar la aplicación del principio de precaución en virtud de la gravedad del daño y la certeza científica de los perjuicios que causaría el progresivo deterioro de la selva tropical, así como sus implicaciones sobre el aumento de gases de efecto invernadero a la atmósfera. En este punto se aprecia una confusión entre el principio de prevención[533] y precaución[534] invocado por la Corte, sin embargo, esto no invalida su conclusión.

Por otra parte, la Corte consideró probada la vulneración del principio de equidad intergeneracional, debido a los altamente confiables datos que demuestran el acenso de las temperaturas durante los años en los cuales los peticionarios esperaban desarrollar su vida. De seguida, el juzgador cuestionó al Estado por la falta de aplicación del principio de solidaridad en virtud del deber y corresponsabilidad subyacente que le obligaban a reducir las emisiones producto de la deforestación. Así, sobre el Estado descansaba una expectativa de movilización para adoptar medidas de mitigación frente al riesgo de daño y daño ambiental.

Por último, no puede dejar de mencionarse uno de los elementos más destacables del fallo, la designación de la selva amazónica colombiana como «sujeto de derechos, titular de protección, de la conservación, mantenimiento y restauración a cargo del Estado y de las entidades territoriales que lo integran»[535]. Sin duda esto es producto del propio desarrollo del derecho a través de la jurisprudencia constitucional establecida en la Sentencia T-622 de 2016, en la cual se reconoció la personalidad jurídica a una entidad natural viviente[536], como resultado de un enfoque ecocéntrico donde el juzgador

---

533. Jordano Fraga, J. (2007). «El derecho ambiental del siglo XXI». En: F. Contreras, A. Caraballo *et. al.* (coord.) *Cultura verde: ecología, cultura y comunicación*. (114-140). Sevilla: Junta de Andalucía. «El principio de precaución debiera excluir tomar una decisión que permita dañar legalmente el medio ambiente en el futuro». Debe tenerse en cuenta que el principio de prevención se aplica para casos donde existe certeza de ocurrencia de daño

534. Mientras que este principio se debe aplicar en caso de riesgo de daño ambiental y existencia de incertidumbre científica, es decir, posibles amenazas para el medio ambiente, como sería el caso del calentamiento global/cambio climático. Este principio se encuentra directamente conectado con la debida diligencia de los Estados.

535. Corte Suprema de Colombia. Futuras Generaciones v. la Presidencia de la República de Colombia *et al*., sentencia 4360-2018 (5 de abr. 2018)., 45.

536. Corte Suprema de Colombia. Futuras Generaciones v. la Presidencia de la República de Colombia *et al*., sentencia 4360-2018 (5 de abr. 2018)., p. 39-41. Esta designación responde a la aplicación de la teoría de los bioculturales para armonizar la relación de las comunidades locales con el ambiente e impulsar su rol de protectores de la selva. Véase igualmente: Corte Constitucional de Colombia, sentencia T622/16 (27 Ene. 2015). Fallo donde se reconoce la interdependencia y transversalidad de la protección del medio

expresamente presenta la adjudicación de personalidad como parte de la solución para enfrentar los desafíos de legitimidad procesal medioambiental ante el impacto causado por el hombre.

Decisión

Con base en la línea argumentativa expuesta, la Corte concluyó que las autoridades competentes tenían el deber de responder con eficacia ante la situación climática que atravesaba el país. Por lo tanto, se requería del Estado la adopción de medidas correctivas y de mitigación. De esta manera, no solo encontró una transgresión de la Constitución, sino que además verificó un incumplimiento de los instrumentos internacionales que integran el orden público ecológico mundial, con especial énfasis en compromisos individuales presentados por Colombia en 2015. Concretamente, la meta de deforestación cero.

La Corte concluyó que el gobierno debía adoptar medidas correctivas y paliativas para conservar el territorio amazónico, pues hasta el momento de la decisión no lo abordó de forma eficiente. En este sentido, se puede apreciar que la posición del Tribunal es conciliadora en cuanto a que no sanciona al Estado por su conducta, sino que apuesta directamente por localizar remedios para afrontar la problemática.

En suma, la Corte respondió afirmativamente al problema bivalente que se presentó al inicio del tratamiento del caso, por lo cual sentenció que el Estado tenía la obligación de adoptar acciones para reducir la deforestación amazónica, aunque no se haya sancionado al Estado Colombiano en los términos tradicionales de condena y de la dimensión moral de la reparación.

Apreciación de la sentencia

Como se señaló desde el inicio, esta sentencia tiene un valor extraordinario por marcar un precedente único en la región a través de una formulación ecocéntrica con respecto a la protección del sistema climático y contención de la deforestación. La sentencia plantea cuestiones interesantes en cuanto al tratamiento de la moral y el derecho, así como de la aplicación de justicia distributiva, justicia social, justicia ambiental y más específicamente sobre las futuras generaciones[537] y justicia climática.

---

ambiente «Postura de especial relevancia en el constitucionalismo colombiano, teniendo en cuenta el principio del pluralismo cultural y étnico que lo soporta, al igual que los saberes, usos y costumbres ancestrales legados por los pueblos indígenas y tribales».

537. Bajo una línea argumentative que sigue los argumentos trazados originalmente por Weiss, E. B. (1988). *In fairness to future generations: international law, common patrimony, and intergenerational equity.*, Weiss, E. B. (1990). «Our rights and obligations to future generations for the environment». *American Journal of International Law*, *84*(1), 198-207.

Como aspectos a destacar, este fallo logra resolver el problema planteado disipando las dudas que originalmente se suscitaron sobre la vía procesal seleccionada. El caso bajo análisis posee una creatividad jurídica extraordinaria considerando que los países pertenecientes al sistema de derecho civil no habían localizado la manera de establecer las líneas argumentativas requeridas para impartir justicia climática.

Hasta antes de la publicación de la sentencia colombiana, los únicos modelos de éxito se habían dado a través de la aplicación del *Tort (nuisance)* y la doctrina de la confianza pública (*Public Trust*[538]*)* en el marco del derecho constitucional y civil. Por lo cual llegó a pensarse que, al ser instituciones desconocidas en los ordenamientos de raíz continental, sería poco probable encontrar casos de éxito en países latinoamericanos a corto plazo. No obstante, el juzgador, fundó su decisión en la tradicional protección de derechos y la riqueza propia del pluralismo jurídico, cultural y ético del país, mediante el cual se amplifica el espectro de protección ambiental y la participación de las comunidades.

En opinión de quien escribe, del análisis del fallo se desprenden al menos cuatro (4) aspectos que requieren de un tratamiento pormenorizado: El primero, es importante aclarar como bien señala la sentencia que efectivamente no toda afectación ambiental implica *per se* la vulneración de derechos humanos. No obstante, cuando nos encontramos en situaciones de grave riesgo o donde se ha materializado el daño, corresponde evaluar cual es el tipo de obligación que pudiese haber infringido el Estado mediante sus acciones u omisiones. Por lo tanto, el paso inicial es identificar si se trata de obligaciones de medio o de resultado.

En el caso de la prevención de daño ambiental/climático que a su vez impacta sobre los derechos de individuos no existe propiamente la necesidad de establecer un vínculo causal entre un hecho concreto y el daño, ya que en el caso de los derechos abordados por la sentencia se tratan obligaciones de medio. Ante este tipo de obligaciones concretas lo procedente es la evaluación de la conducta estatal a la luz de unos estándares específicos, en este caso constitucionales, cuya valoración permitiría demostrar si se ha actuado o no con la diligencia debida. Si se encuentra que la actuación es insuficiente y existían otras medidas razonables para enfrentar el riesgo o daño y el Estado no actuó en este sentido, estaría probada la vulneración de los derechos en cuestión.

538. Véase: Wood, M. & Woodward IV, C. (2016). Atmospheric trust litigation and the constitutional right to a healthy climate system: judicial recognition at last. *Washington Journal of Environmental Law & Policy*, *6*, 634-678. Según señala la autora este mecanismo legal del common law permite proteger y garantizar los recursos naturales para el bienestar y existencia de las generaciones presentes y futuras generaciones. Esta doctrina suele ser invocada con frecuencia en litigios climáticos, pero aún no ha sido reconocida en esta materia de forma extendida.

La segunda, el desafío intrínseco de la protección ambiental por parte de las futuras generaciones[539] en el marco de protección que brindan los derechos fundamentales. El rol de los niños, niñas y jóvenes para promover la evolución de la protección ambiental a nivel judicial es incuestionable, sobre este sector de la población parece haberse descargado la titánica tarea de proteger los intereses del futuro.

Ahora bien, es necesario seguir elaborando sobre este papel de representación, sobre la deconstrucción de un grupo aparentemente *in abstracto* y sobre el rol que juegan tanto las generaciones nacidas, así como aquellas que están por nacer o incluso otras fórmulas de representación procesal frente al cambio climático peligroso, las cuales favorezcan la tutela judicial de sus intereses. Estas son importantes cuestiones que requieren de madures y profunda justificación, por lo cual la decisión bajo análisis abre la puerta para desarrollar la argumentación sobre justicia intergeneracional climática en términos propios.

La tercera, se refiere a la complejidad en la implementación y efectiva aplicabilidad de los derechos otorgados a la naturaleza[540], ya que en la práctica este tipo de decisiones suele tener un efecto simbólico en el terreno. De hecho, si se analiza el impacto de la sentencia Futuras Generaciones sobre la protección de los recursos maderables de Amazonía, el estado de cumplimiento es incluso inferior al esperado.

Concretamente, la tasa de deforestación en la región Amazónica colombiana aumentó en lugar de reducirse. Además, hasta 2019 los municipios involucrados no habían implementado sus planes de ordenación territorial, mientras que apenas se reportó el complimiento moderado por parte del ejecutivo con respecto a la adecuación de una normativa de carácter reglamentaria para reducir la deforestación[541].

---

539. Sobre la situación de la representación y tutela de derechos tanto de las futuras generaciones como de la naturaleza véase: Belloso., N. (2019). *El debate sobre la tutela institucional: generaciones futuras y derechos de la naturaleza*. Madrid: Universidad de Alcalá. Véase también sobre las futuras generaciones: de-Shalit, A. (2005). *Why posterity matters: Environmental policies and future generations*. Routledge.; Abate, R. S. (2019). *Climate change and the voiceless: Protecting future generations, wildlife, and natural resources*. Cambridge University Press.; y, Sulyok, K. (2023). «A rule of law revolution in future generations' litigation: intergenerational equity and the rule of law in the Anthropocene».

540. Véase: Belloso, N. (2022). «Un intento de fundamentar derechos de los no-humanos (derechos de la naturaleza) a partir del desarrollo sostenible». *Revista Catalana de Dret Ambiental*, *13*(1).; Molina, J. A. (2020). «Derechos de la naturaleza. Elementos para un debate». En: M.P García Pachón, *Reconocimiento de la naturaleza y sus componentes como sujeto de derecho*. Universidad Externado de Colombia. Recuperado de: https://doi.org/10.57998/bdigital.handle.001.2917.; Chacón, M.P. (2018). «La Revolución de los Derechos Humanos Ambientales y de los Derechos de la Naturaleza». *Diario Ambiental DPI*, (28).

541. Véase: Dejusticia (2020). «Informe de seguimiento al cumplimiento de la sentencia STC 4360 de 2018 de la Corte Suprema de Justicia». Recuperado de: https://bit.ly/3XxSBKx.

Esta realidad invita a replantear la cuestión de si es realmente necesario otorgar personalidad jurídica como parte de la estrategia procesal ambiental, y por ende cuestiona si es una herramienta útil para promover el cambio del paradigma ambiental actual, especialmente en regiones donde hay un problema estructural en el sistema judicial e institucional que debilita el cumplimiento de las progresistas decisiones climáticas[542].

La cuarta, aunado a las reflexiones anteriores será necesario resolver el abordaje de los daños y sus formas de reparación de manera eficiente. Resulta imperativo hacer notar que una de las razones para que prosperase la acción de tutela y no la acción popular era precisamente la vulneración conexa de derechos individuales y por ende la necesidad de reparar el daño.

Aun así, en la sentencia ninguno de estos derechos fueron sujetos a una medida de protección específica a través de los cuales se impidiese la continuidad de la violación. Si bien es cierto que las medidas ordenadas representan remedios adecuados para la protección de derechos colectivos, las mismas no se tradujeron en soluciones concretas a las lesiones individuales causadas. Desde la perspectiva de esta investigación, la transgresión de los derechos se continuará materializando hasta que se consiga la implementación efectiva del fallo, con lo cual no es efectiva.

Claramente, la reparación ambiental destaca por ser de las cuestiones más compleja a la hora de evaluar el cumplimiento de las sentencias, sin embargo, esta experiencia invita a promover formas alternativas y eficientes para materializar las garantías de restitución y no repetición. Parece evidente que el abordaje profundo de las cuatro (4) cuestiones anteriores serán tareas que la jurisprudencia venidera, mientras que la doctrina actual tendrá la compleja labor de abonar el camino promoviendo formas complementarias que permitan avanzar en la construcción de conceptos y bases teóricas útiles para los actores ambientales[543].

---

542. Sobre la efectivad de las decisiones climáticas en contextos sociales y económicos desfavorables véase: Sato, M., Gostlow, G., Higham, C., Setzer, J., *et al.* (2023). «Impacts of climate litigation on firm value». *Center for Climate Change Economics and Policy Working Paper 421/ Grantham Research Institute on Climate Change and the Environment Working Paper 397*. LSE. Recuperado de: https://bit.ly/435Xqfi. Véase también sobre el rol de las instituciones en el estado de derecho ambiental: UNEP (2023). *Environmental…Ob. cit*. 29.

543. Claramente esta decisión es un referente que contribuye a la evolución del derecho internacional, concretamente a la interpretación del esquema de protección de derechos humanos, especialmente, cuando observamos que las problemáticas asociadas al cambio climático, respeto y garantía de derechos humanos, así como el aseguramiento de intereses de las futuras generaciones se encuentra en el ojo del debate planteado por la solicitud de opinión consultiva ante la CIJ, la CtIDH, los casos contenciosos ante el TEDH, la Comisión Africana en el *Zero Draft In relation to the Study on the Impact of the Climate Change on Human and Peoples´ Rights in Africa*; en la propuesta de las Misiones Permanentes de los Países Bajos y Fiji ante las Naciones Unidas en el Documento de Elementos de la Declaración para las Generaciones Futuras (2022). Asimismo, el tema aparece en la agenda de foros universales como se evidencia en: CRC. Observación General No. 26

Este fallo es el inicio de una era donde la justicia climática ha llegado para quedarse, aunque debe evolucionar hasta el punto de exigir la responsabilidad a los Estados, mediante la adopción de mecanismos concretos que permitan enfrentar de forma eficiente y urgente el cambio climático. A pesar de los puntos susceptibles de aclaración a través de los fallos venideros, este precedente se erige como un modelo orientativo para los países que luchan contra la destrucción de la Amazonía[544] y el aumento de emisiones, pues es un problema que se reproduce a diferentes escalas en Brasil, Bolivia, Perú, Ecuador y Venezuela, cuyos modelos constitucionales cuentan con acciones similares para hacer frente a vulneraciones de derechos individuales, derechos colectivos e intereses difusos.

Leghari v. Federation of Pakistan (2015-2018)

El presente caso[545] trata de una litigación de interés público instaurada en el 2015 por un agricultor de la región de Punjab, área de mayor densidad poblacional de Pakistán. El peticionario solicitó protección judicial ante la inacción climática de las autoridades públicas. Para ello, alegó el retraso y bloqueo por parte del gobierno federal de Pakistán[546] y del gobierno de Punjab[547] en la implementación de acciones establecidas en política nacional climática[548]. En la demanda, el peticionario expuso como agravios las amenazas a la seguridad alimentaria, energética y el acceso al agua, eventos que conducían a la vulneración de sus derechos a la vida, a la salud y a un medio ambiente sano.

(2023), CRC/C/GC/26.; *United Nations System Common Principles on Future Generations* (4 May 2023); *Maastricht Principles on The Human Rights of Future Generations* (3 Feb. 2023).

544. Con relación al impacto climático en el véase: de la Torre, A., Fajnzylber, P. & Nash, J. (2009). *Low carbon, high growth: Latin American responses to climate change*. Washington, D.C: The World Bank. (p. 8) *«The Amazonian rainforest plays a crucial role in the climate system. It helps to drive atmospheric circulation in the tropics by absorbing energy and recycling about half of the rainfall that falls upon it. Furthermore, the region is estimated to contain about 10 per cent of the global stock of carbon stored in land ecosystems, and to account for 10 percent of global net primary productivity».*

545. Lahore High Court. Leghari v. Federation of Pakistan, judgment (4 Sep. 2015). Recuperado de: https://climatecasechart.com/non-us-case/ashgar-leghari-v-federation-of-pakistan/.

546. Específicamente demandó al Ministerio de Cambio Climático, Ministerio de Finanzas, Ministerio de Relaciones Exteriores, Coordinación Ministerial Interprovincial, Ministerio de Derecho y Justicia, Ministerios de Seguridad Alimentaria e Investigación, Ministerio del Agua y Energía, Departamento de Irrigación y a la Autoridad Nacional de Manejo de Desastres.

547. Departamentos de: Agricultura, Protección del Medio Ambiente, Alimentos, Silvicultura, Vida Silvestre y Pesca, Salud, Ingeniería de Vivienda, Desarrollo Urbano y Salud Pública, Planificación y Desarrollo, Riego, Derecho y Asuntos Parlamentarios y Departamento de Gestión de Desastres.

548. Government of Pakistan. «Framework for Implementation of Climate Policy» (2014-2030). Recuperado el 30 de noviembre de 2023 de: Government of Pakistan. Framework for Implementation of Climate Policy (2014-2030).

A pesar de que el Estado contaba con instrumentos legales que le otorgaban herramientas de acción, el demandante expresó la afectación de su esfera de derechos personales, por cuanto su sustento estaba en peligro debido a la falta de conservación estatal de los recursos hídricos y ante la inadaptabilidad de los cultivos al calor. Por lo tanto, el demandante sometió a revisión judicial la conducta omisiva del Estado y solicitó la tutela de sus derechos en virtud del riesgo exacerbado de pérdidas de cara a las transformaciones climáticas que Pakistán estaba padeciendo.

Cuestiones Resueltas por el Tribunal Superior de Lahore

El problema principal al que se enfrentó el juez fue cómo hacer efectiva una norma, que además de contener el cambio climático protegía los derechos del peticionario. En este tipo de casos, el desafío se localiza en encontrar un mecanismo que permitan remediar la vulneración de derechos, así como transformar la letra muerta de la ley en un instrumento de modulación eficiente de la conducta climática de las autoridades del país.

Cuestiones resueltas por el Tribunal

A diferencia de otros, el caso *Leghari* escapó de cuestionamientos procesales y de la complejidad de localizar la ley aplicable. En Pakistán claramente estaban vigentes la Ley de Cambio Climático y su correspondiente mecanismo de implementación desde el 2014 hasta el 2030. En este caso, las omisiones del Estado generaban la lesión del derecho a la vida reconocido en el artículo 9 de la Constitución[549] en relación con el artículo 14[550] sobre inviolabilidad de la dignidad humana, donde se entendían incluidos el derecho a la salud y a un medio ambiente sano.

De esta manera, la actuación del Estado no solo vulneraba derechos reconocidos constitucionalmente, sino también principios ambientales como el desarrollo sostenible, el principio precautorio, el principio de equidad intergeneracional, así como los principios a la igualdad, a la justicia económico-social, a la democracia, y la doctrina del *Public Trust*[551].

En cuanto a las defensas esgrimidas por el Estado, el demandado reconoció la exclusión de la mitigación como herramienta de lucha contra el cambio climático, ya que el esfuerzo estaba concentrado en los procesos de adaptación debido a la vulnerabilidad de Pakistán a las inundaciones y periodos de extrema sequía en los últimos años.

549. Pakistán Const. Recuperado de: https://bit.ly/3D9KI9B: Article 9 «No person shall be deprived of life or liberty save in accordance with law».

550. Pakistan Const. Article 14: «1) The dignity of man and, subject to law, the privacy of home, shall be inviolable. 2) No person shall be subjected to torture for the purpose of extracting evidence».

551. Véase: Wood, M. C. & Woodward IV, C. (2016), *Ob. cit*. 634-635.

Por lo tanto, el Estado consideraba cumplido su deber en virtud de la aplicación de estrategias de adaptación. Igualmente, señaló que la ley y su correspondiente política climática eran instrumentos sujetos a constantes cambios, por lo cual resultaba difícil determinar cuándo tales eventos dañosos se producirán, obstaculizando así una acción anticipativa de su parte.

En suma, el Estado se limitó a exponer las amenazas climáticas sobre el agua, la alimentación, la ganadería, los cultivos, las inundaciones, la degradación del suelo, los eventos climáticos extremos y sobre el sector forestal, con lo cual operó un reconocimiento expreso del riesgo grave e intrínseco del calentamiento global. De esta manera, el juez pudo evidenciar que la denominación de los títulos normativos solo hacía referencia a medidas de adaptación, dejando la mitigación en un limbo.

El contenido no correspondía a estrategias específicas que implicasen algún proceso de preparación de las poblaciones, ni de los espacios naturales ante las amenazas generadas por el cambio climático. Ante lo expuesto por las partes y sobre la base de los informes científicos valorados por el Tribunal, el juzgador llegó a la conclusión de que existió una falta total de la implementación de acciones climáticas preventivas.

En este punto, fue evidente que una sentencia no resolvería por si sola el problema, por lo cual acudió a la figura procesal de *rolling review* o *continuing mandamus*[552] (mandato de revisión continua), fórmula usada con éxito en litigios ambientales en países como India[553] y Filipinas, la cual permite al Tribunal realizar un monitoreo judicial durante períodos largos[554] de tiempo para garantizar que las autoridades gubernamentales den cumplimiento a sus obligaciones y deberes públicos derivados del proceso.

Durante este espacio temporal, el Tribunal adoptó la decisión de constituir una Comisión sobre Cambio Climático, con el propósito de proteger los derechos de la población de Punjab. La función central de esta Comisión era la efectiva implementación de la política nacional climática y su programa marco, para lo cual el Tribunal ordenó a la Comisión realizar un trabajo coordinado con el gobierno en la búsqueda de objetivos y acciones viables para hacer frente al cambio climático. Como parte de las ordenes preliminares, el

552. Véase: Lahore High Court. Writ Petition No. 840 of 2019 *Muhammad Ahmad Pansota et al. v. Federation of Pakistan*. Recuperado de: https://bit.ly/3tBhuI4. *«Continuing Mandamus is a writ of mandamus issued to an authority by the High Court under Article 199 of the Constitution in general public interest asking the officer of the authority to perform its task expeditiously for an unstipulated period of time to prevent miscarriages of justice. The Doctrine of Continuing Mandamus, at times also referred to as structural interdict or structural injunction, in other words, is a relief given by a Court of law through a series of ongoing orders over a long period of time, directing an authority to do its duty or fulfill an obligation in general public interest».*

553. Véase: Poddar, M. & Nahar, B. (2017). «Continuing Mandamus-A Judicial Innovation to Bridge the Right-Remedy Gap». *NUJS Law Review*, *10*, 555-608. Recuperado de: https://bit.ly/3NtNTIC

554. En este caso desde 2015 hasta el 2018.

juzgador incluyó un mecanismo de monitoreo a través de la presentación de informes regulares al Tribunal.

Así, la Comisión emitió una serie de recomendaciones relacionadas a la presentación de un plan e informes trimestrales sobre el progreso de los objetivos previamente establecidos. Entre las propuestas para el gobierno, se encontraban recomendaciones presupuestarias, compromiso de aumentar el número y alcance de los proyectos, guías y herramientas para desarrollar programas sobre cambio climático inteligente, así como orientación para acceder a proyectos de financiamiento internacional.

El Tribunal reconoció la necesidad de establecer una transición de la justicia ambiental hacía la justicia climática[555]. Esto producto de la progresión que ha tenido Pakistán en el tratamiento de asuntos vinculados al ambiente, los ecosistemas y la biodiversidad. Así esta comprensión de justicia verde logró revestir los derechos afectados con los principios del derecho ambiental internacional dentro del sistema jurídico nacional y provincial. En esta sentencia, la conceptualización de la justicia climática está directamente relacionada con el respeto y garantía de los derechos humanos, especialmente en los casos donde se encuentran involucran sujetos vulnerables (trabajadores de la tierra).

El juez del caso señaló que el punto de partida para alcanzar la justicia climática en Pakistán implicaba considerar las bases científicas disponibles e implementar una administración equitativa de los recursos naturales. También reconoció que no era tarea sencilla enfrentarse a un agente contaminador complejo y difícilmente identificable.

Sin embargo, para el Tribunal Pakistaní la justicia climática iba más allá de la tradicional concepción de justicia ambiental, pues implicaba la participación comprometida de los sujetos en el diálogo, incluso de aquellos usualmente excluidos de los planes ambientales. Asimismo, tuvo en cuenta las múltiples dimensiones de ese tipo de justicia, entre ellas sus implicaciones sobre la salud, la seguridad alimentaria, la gestión de desastres naturales, el desplazamiento forzado de personas, la agricultura, las tecnologías, los recursos humanos, entre muchas otras.

Aunque le Tribunal admitió que la piedra angular en la lucha contra el cambio climático para Pakistán se concentraba en las estrategias de adaptación, también reconoció la importancia de las estrategias de mitigación. En este caso, los esquemas de adaptación efectiva solo podían alcanzarse a través de la justicia climática, donde los tribunales tienen un rol fundamental al permitir la interconexión de todos los participantes y la protección de sus derechos.

---

555. Una referencia actualizada que también promueve la transición hacia la justicia climática a través de la litigación estratégica regional central, utilizando el caso *Leghari* como parte de su fundamentación fue planteada por: Institute of Amazonian Studies (IEA) v. Brazil, (7 dic. 2021). Mientras que a nivel interno debe mencionarse su influencia sobre las peticiones realizadas en los casos: Sheikh Asim Farooq v. Federation of Pakistan (2018).; Maria Khan *et al*. v. Federation of Pakistan (2019).

El juzgador realizó una mención especial a un subtipo de justicia climática, la justicia del agua[556], por el especial impacto que los recursos hídricos tienen sobre los derechos humanos. En la sentencia se estableció que: *«Climate Justice and Water Justice go hand in hand and are rooted in articles 9 and 14 of our Constitution and stand firmly on our preambular constitutional values of social and economic justice»*[557].

Finalmente, al emitir la decisión del 2018, el Tribunal transformó la Comisión en una entidad permanente, con miras a asegurar el trabajo conjunto y un canal de diálogo climático entre el Poder Ejecutivo, la Comisión y el Tribunal. Si bien es cierto que el caso *Leghari* se archivó, este no se cerró, pues la Magistratura siempre quedará abierta para revisar la vulneración de los derechos que sean presentados por la Comisión, con el fin de hacer seguimiento de esta materia para proveer la asistencia que sea requerida.

Decisión

En el fallo definitivo, el Tribunal no condenó al Estado, pero si impartió justicia climática. En esta sentencia el juez invitó al trabajo conjunto, para hacer efectiva la protección de los derechos humanos, así como para formular respuestas adecuadas a las problemáticas vinculadas con la amenaza climática. Esta sentencia se traduce en una estrategia conciliadora, bajo una fórmula en la cual se le otorgó una oportunidad al Estado para remediar su conducta y cumplir con su deber de diligencia frente a la adaptación climática.

Apreciación de la sentencia

La sentencia del caso *Leghari* da fe de la evolución del tratamiento del cambio climático desde la perspectiva jurídica del Sur Global, a su vez es reflejo de la creciente preocupación de la sociedad frente a las transformaciones climática que afectan derechos reconocidos en el sistema interno. El cambio climático dejó de ser un problema lejano, para convertirse en una situación actual que afecta con rudeza a los países con menos capacidades económicas y de infraestructura, lo que les hace más vulnerables a los eventos extremos.

La sentencia bajo análisis colocó de manifiesto la realidad de países que cuentan con instituciones, instrumentos normativos, así como políticas de adaptación, sin ninguna o poca operatividad en el terreno. Es decir, que representan un compromiso vacío carente de contenido por la situación eco-

556. Lahore High Court. Leghari v. Federation of Pakistan, judgment (4 Sep. 2015)., p. 24. En la sentencia el juez identifica el concepto de justicia del agua con: «the access of individuals to clean water. More specifically, the access of individuals to clean water for survival (drinking, fishing, etc.) and recreational purposes as a human right».

557. Lahore High Court. Leghari v. Federation of Pakistan, judgment (4 Sep. 2015)., p. 24.

nómica de las naciones. De allí que los Estados no se ven obligados a cumplir con las metas climáticas para proteger a sus respectivas poblaciones. Esto a pesar de la progresividad intrínseca de los compromisos climáticos.

Sin embargo, esta situación cambia radicalmente cuando el problema del calentamiento global se mira desde la lupa de los derechos humanos, momento en el que se aprecia un serio deterioro tanto del núcleo de derechos fundamentales, así como de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, obligando a los órganos de justicia a revisar las situaciones jurídicas infringidas y a emitir pronunciamientos que conduzcan a la reparación del daño.

El modelo de aproximación procesal a la problemática y el desarrollo argumentativo de esta sentencia es de gran valor, pues logra sentar las bases para la aplicación del *continuing mandamus* climático. Además, el Tribunal desarrolló una argumentación coherente sobre el tratamiento de las premisas normativas a través de la interpretación de derechos, aunque las normas no preveían expresamente el derecho a un medio ambiente sano[558].

A pesar de que Pakistán es un país que pudiese tener una larga lista de eximentes para justificar la falta de adopción de medidas de mitigación y adaptación, el Tribunal optó por avanzar y consolidar un mecanismo que permitía responder, en principio, de forma urgente a la amenaza climática que acechaba al país[559].

Esta sentencia deja una lección al mundo, pues los países no tienen que ser una potencia, tampoco tienen que estar obligados por el Anexo I de la CMNUCC, ni ser uno de los mayores contaminantes de mundo para accionar contra el cambio climático[560]. El juzgador en este caso dio un salto sin resquemor e impartió justicia, en su rol de supervisor y revisor de la legalidad de la actuación del Estado.

Igualmente, es meritorio del Tribunal la correcta valoración de la data científica para ordenar el cumplimiento de las obligaciones de hacer del Estado. El Tribunal, desarrolló una sentencia holística y equilibrada que goza de aceptabilidad y además tuvo la agudeza de otorgar una respuesta acertada a la compleja cuestión de implantación de acciones climáticas en un país con las características sociales, políticas y culturales tan particulares como las de Pakistán.

---

558. Esta conclusión preliminar fue producto de la utilización de precedentes ambientales en Pakistán.

559. Véase: Barritt, E. & Sediti, B. (2019). «The Symbolic Value of Leghari v Federation of Pakistan: Climate Change Adjudication in the Global South». *King's Law Journal*, 30(2), 203-210.

560. De la Torre, A., Fajnzylber, P. & Nash, J. (2009), *ob. cit*. 17. *«Developing countries' participation, however, would be needed not only to guarantee effectiveness but also to ensure that stabilization targets are reached efficiently, that is, at the least possible global cost» […] «Clearly, developing countries' engagement is indispensable if those targets are to be met, so strong incentives to become part of the solution are in everyone's best interest».*

Por otra parte, desde una perspectiva general sobre los cuatro (4) litigios estudiados, debe destacarse un patrón en el que prima la ausencia de condena estatal en las sentencias provenientes del Sur Global. Si bien es cierto que en todas las sentencias hay determinación de la responsabilidad, no hay una sanción por el incumplimiento. Quizá este tipo de sentencia sea el modelo de respuesta que más se adapte a los Estados con estructuras socioeconómicas especiales, ya que pueden ser el vehículo para asegurar el cumplimiento del deber de diligencia a través del diálogo judicial, donde el Estado más que constreñido se sienta «invitado» a participar.

Asimismo, los cuatro (4) litigios climáticos tienen en común el haber diseñado una hoja de ruta para asegurarla protección de colectivos vulnerables a través de los derechos humanos en un contexto climático. Entre las peticiones más destacadas se encuentran la defensa de derechos intergeneracionales[561], pueblos indígenas[562] y grupos de ciudadanos afectados en su esfera de intereses individuales y colectivos. La columna vertebral de los litigios climáticos analizados converge en el deber diligencia debida.

Igualmente, estas peticiones respaldaron los compromisos del clima con principios generales del derecho y con principios ambientales a los fines de elaborar y consolidar un correcto proceso discursivo que permitió justificar el establecimiento de las cuotas de responsabilidad, así como el alcance de un remedio plausible en términos prácticos, además de impactar en el tejido social de la colectividad.

Los múltiples fallos analizados presentaron procesos argumentativos complejos, en todos ellos estuvo presente la racionalidad discursiva, donde se evidenció un conocimiento profundo del sistema de derecho, la verosimilitud de la pretensión, así como una base normativa robusta que sustentó cada decisión. Fue precisamente la deconstrucción de la dialéctica del juzgador al alcanzar la respuesta correcta en las sentencias, la que permitió determinar cuáles son los parámetros que inicialmente deben ser cubiertos para modelar un litigio con mayores probabilidades de éxito[563].

---

561. La necesidad de proteger y fomentar el valor de solidaridad intergeneracional viene siendo expuesta desde la Unión Europea. Véase en este sentido: Sánchez-Bravo, A. (2013a). «Cambio Climático y Agua en la Unión Europea». *Revista Direito em Debate*, *22*(40), 130-154. «Debemos esforzarnos por mantener aquello que las generaciones anteriores nos legaron, intentar reducir lo que de mal hicieron, e intentar legar al futuro una sociedad mejor y más vivible. La Unión Europea, una vez más, se muestra precozmente sensible con un problema mundial, e inicia el camino para intentar adaptarse y reducir sus efectos. El objetivo es no estar solos, nuestras inquietudes deben ser las de todos, y las soluciones también».

562. Véase: McGregor, D., Whitaker, S. & Sritharan, M. (2020). Indigenous environmental justice and sustainability. *Current Opinion in Environmental Sustainability*, *43*, 35-40.

563. Estas cuestiones serán adaptadas al Sistema Interamericano de Derechos Humanos en el Capítulo IV.

Aparte de las características particulares de cada caso, debe destacarse la madurez jurisprudencial lograda por los sistemas de la India, Países Bajos, Colombia y Pakistán en materia ambiental, pues fueron factores que condicionaron el éxito de las pretensiones instauradas. No obstante, aunque en los cuatro (4) litigios se han logrado avances en el terreno, siempre el mayor desafío permanece en las instituciones guardianas de la ejecutoriedad de las sentencias.

En principio, si se cumplen adecuadamente los extremos anteriormente mencionados sería posible ir dibujando un modelo de litigio que permita acudir a instancias nacionales y/o internacionales con un caso climático viable. En el presente, aunque son pocos, es cada vez más frecuente encontrar tribunales que han comenzado a impartir justicia climática frente al Estado como sujeto demandado[564], por lo cual resultó esencial conocer y analizar el tratamiento brindado por esos órganos jurisdiccionales[565] para trasladarlo a potenciales foros.

Los casos aquí estudiados recuerdan que la ventana de tiempo para responder al cambio climático se hace más estrecha cada día. Sin embargo, los derechos humanos permiten invocar una protección del individuo/ambiente, pues son el eslabón que hermana al sistema ambiental global con esos derechos que protegen al hombre. De allí que es posible utilizar el acceso a la justicia como fórmula de protección y de estabilización climática para frenar su impacto sobre los derechos humanos, a la para que se contribuye a la preservación del sistema climático de la Tierra.

En todo caso, será necesario analizar las características del caso concreto para determinar la potencialidad de éxito, además de su compatibilidad con la línea jurisprudencial del órgano de protección donde se pretenda instaurar la solicitud. En el supuesto de existir más de uno, también es crucial evaluar la duración del litigio y la capacidad financiera para sostener la querella a corto, mediano y largo plazo.

Igualmente, debe recordarse que los elementos anteriormente identificados requieren de investigación científica que permitan innovar en el contenido de los derechos, así como en algunos casos extender el alcance de protección a través de las peticiones iniciales. Si bien es cierto, que estos modelos son nacionales, sin duda alguna, inspiran a localizar fórmulas jurídicas más ambiciosas para lograr el tan anhelado anclaje de las temperaturas del planeta.

---

564. Sobre justicia climática véase: Shue, H. (2014). *Climate justice: Vulnerability and protection*. Oxford: Oxford University Press.

565. Pérez-Luño, A. (2009), *Ob. cit*. Quien concibe «los procesos hermenéuticos del Derecho como una instancia crítica, dinámica y abierta a una serie de alternativas y a un pensamiento lleno de posibilidades *(Möglichkeitsdenkens)*, que no sería sino el correlato metódico de la apuesta política a favor de una sociedad abierta y pluralista».

Proyección de los litigios adjudicados favorablemente sobre peticiones climáticas en la India, Francia, Canadá, Perú, Corea del Sur y ante órganos internacionales de protección

Cada vez es más frecuente encontrar peticiones de tutela provenientes de colectivos vulnerables afectados en sus derechos[566] por las consecuencias de eventos climáticos extremos. Estos casos dejan en evidencia que los litigios climáticos exitosos tienen un efecto domino trasnacional sobre la presentación de nuevas reclamaciones. Se revela apropiado incluir los siguientes asuntos, ya que son un reflejo de los casos estudiados en el apartado anterior. Por una parte, muestran la evolución en el razonamiento del juzgador en los casos decididos, y, por la otra, dan cuenta del desarrollo argumentativo en las solicitudes de tutela, particularmente sobre cuestiones abordadas tangencialmente en las primeras adjudicaciones climáticas favorables.

A continuación, se presenta una relación de casos con contenido climático central, sometido en jurisdicciones asiáticas, europeas y americanas. Concretamente, se abordarán: *Pandey v. India* (2017), presentado ante el Tribunal Nacional Verde de la India, *Commune de Grande-Synthe v. France* (2019), presentado ante el Consejo de Estado de Francia*, Mathur v. Her Majesty the Queen in Right of Ontario* (2019), presentado ante la Corte Superior de Justicia de Ontario; *Álvarez v. Perú* (2019), presentado ante la Corte Superior de Lima; *Do-Hyun Kim Yujin v. South Korea* (2020), presentado ante la Corte Constitucional de Corea del Sur; y *Lho'imggin. v. Her Majesty the Queen/ Canada* (2020), presentado ante la Corte Federal de Canadá.

Pandey v. India (2017)

En esta sección, se analizará la petición realizada por la ciudadana *Ridhima Pandey*[567] ante el Tribunal Nacional Verde[568]. Debe recordarse que fue ese mismo Tribunal quien se pronunció en 2014 sobre la cuestión del carbono

566. Para una lista actualizada de litigio climático al 2023 véase: Burger, M & Tigre, M. A. (2023) *Global Climate… Ob. cit*.

567. Véase solicitud de tutela: The National Green Tribunal Pandey v. India (25 Mar. 2017). Sabin Center for Climate Change Law. Recuperado de: https://climatecasechart.com/non-us-case/pandey-v-india/

568. Gill, G. N. (2016). «Environmental Justice in India: The National Green Tribunal and Expert Members». *Transnational Environmental Law*, *5*(1), 175-205. Recuperado de: https://bit.ly/3DgV95W. Como se ha reseñado con anterioridad el Tribunal Verde se encarga de dilucidar litigios de interés público con el propósito de generar respuestas ambientales positivas para hacer frente a la inacción de agencias estatales en el desempeño de sus funciones o frente acciones ilícitas que vulneran algún derecho reconocido constitucionalmente

negro en el estado de *Himachal Pradesh*[569]. En esta petición se enmarcó en el principio de equidad intergeneracional.

La víctima de la vulneración era una niña de nueve (9) años, quien simboliza la preocupación de los más jóvenes frente al impacto que el cambio climático causa en sus vidas. La demandante actuó en nombre propio, aunque bajo representación legal. El sujeto pasivo de la acción judicial fue el gobierno central de la India, el Ministerio del Ambiente, Selva y Cambio Climático en conjunto con la Junta Central de Control de Contaminación.

De la petición se desprende un interés legítimo directo[570] para solicitar una acción de revisión de la actuación de la administración en materia de cambio climático, debido a que la peticionaria invocó ser parte de un grupo etario constantemente impactado por los efectos de la contaminación climática, fenómeno generador de un elevado número de muertes infantiles, así como de múltiples afecciones a la salud.

La demandante identificó un mayor factor de riesgo sobre afectaciones a la integridad físicas de los niños de su generación[571]. Además, esta realidad climática se vio exacerbada por la escasez de alimento, de agua, entre otras problemáticas de raíz ambiental que hacen a este grupo etario especialmente vulnerables frente a condiciones climáticas extremas. Igualmente, la peticionaria incluyó en su reclamo judicial el menoscabo a su integridad psíquica, así como la cuestión de la inequidad generacional, factor que conduce al bloqueo de la participación de los niños y adolescentes[572] en procesos de toma de decisiones que pudiesen asegurar un mejor ambiente para su futuro y para su generación.

---

569. *Tribunal Nacional Verde bajo su propia iniciativa v. State of Himachal Pradesh* (2014).

570. La cuestión de la afectación directa, legítima y personal es importante desde una perspectiva comparada, pues algunos sistemas de protección de derechos humanos exigen su vínculo como requisito previo a la revisión del asunto, con lo cual este modelo de razonamiento brinda claridad sobre el camino. Véase: Cangi *et al.* v. Türkiye (no. 48173/18), ECHR 14.11.23 §36-38. En este libro, nos inclinamos hacia la posición del Juez Frédéric Krenc manifestada en el voto parcialmente disidente de este mismo asunto, donde cuestiona la aproximación adoptada por la mayoría del tribunal §6-13.

571. Aunque la cuestión de las futuras generaciones no es nueva, el toque de innovación lo brinda la posibilidad de hacer este riesgo sobre los intereses protegidos justiciable. Es interesante tener en cuenta que hablamos de estos riegos sobre derechos humanos desde la Declaración UNESCO sobre las Responsabilidades de las Generaciones Actuales para con las Generaciones Futuras, 12 nov. 1997. Véanse también los trabajos preparatorios de la Declaración de la Laguna en: Mac Farlane, K. (1997). «Los derechos humanos de las generaciones futuras (La contribución jurídica de J. Costeau)». *Ultima década*, (8), 8.

572. En la misma línea formulada por la demandante, véanse las recomendaciones del Relator Espacial en la A/HRC/37/58 §a) y d) donde se destaca la importancia de facilitar la participación de los niños y niñas en el marco de los procesos de toma de decisiones vinculadas con el medio ambiente, así como la necesidad de eliminar las barreras de acceso a la justicia: U.N. Secretary-General, A/HRC/37/58 Report of the Special Rapporteur on the issue of human rights obligations relating to the enjoyment of a safe, clean, healthy and sustainable environment.

Vulneraciones generadas a consecuencia del cambio climático

En el caso *Pandey v. India*, puntualmente se alegó la afectación de los derechos consagrados en el artículo 48-A relativo a la protección y mejora del ambiente, artículo 52-A inherente al deber de los ciudadanos de proteger el ambiente natural y la doctrina de *Public Trust*[573] contenida en el preámbulo constitucional y en los artículos 14, 39(b), 298, 299. Todos ellos de la Constitución India.

La estrategia de atribución de responsabilidad intentada por los representantes de la peticionaria fue señalar al Ministerio del Ambiente, Selva y Cambio Climático como responsables por la falta de adopción de políticas y programas de conservación sobre los recursos naturales. Esto a pesar de que tales órganos contaban con elementos científicos suficientes para reducir progresivamente las emisiones de gases de efecto invernadero.

Por una parte, dentro del argumento principal se cuestionó la capacidad de aplicar el marco normativo ambiental vigente[574] para implementar estrategias eficientes de mitigación. Mientras que, por la otra, se demandó también a la Junta Central de Control de Contaminación atendiendo a que este cuerpo colegiado tenía la facultad de los asesorar al gobierno central para mejorar las estrategias de prevención y control de la contaminación del aire. Para ello, se invocó la aplicación del principio precautorio y de desarrollo sostenible bajo la sección 20 y 14 del *National Green Tribunal Act (2010),* así como el principio de igualdad intergeneracional y la doctrina del *Public Trust*.

La peticionaria basó su alegación en la jurisprudencia pacífica del Tribunal Verde sobre medio ambiente, especialmente en lo concerniente al rol del Estado como administrador los recursos naturales del país. Lo anterior en virtud del deber fiduciario otorgado por la confianza pública depositada en las autoridades, es decir, en la obligación de mitigar los efectos de cambio climático a través de acciones eficientes, así como la obligación de proteger los recursos naturales a favor de las generaciones actuales y futuras.

Para la demandante, el gobierno central podía adoptar estrategias de mitigación, metas de reducción de gases de efecto invernadero, y establecer estándares de mitigación a través de la política ambiental. Sin embargo, para la accionante el Estado se inclinó por priorizar planes de desarrollo. Todo esto, en contradicción con el reconocimiento estatal sobre del impacto adverso del cambio climático en los esquemas de precipitaciones, la degradación de la selva, afectaciones al agua, ecosistemas, agricultura, recursos costeros y marinos, entre otros daños previsibles.

---

573. *Doctrina del common law* que contiene elementos para solicitar el acceso a la justicia climática en nombre de la protección de intereses colectivos.

574. Específicamente en el fallo se citan: *the Forest (Conservation) Act, 1980, the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981, the Environment (Protection) Act, 1986, Environmental Impact Assessment Notification, 2006, Biological Diversity Act (2002), Environment (Protection) Act.*

Finalmente, la demandante incluyó en su petitorio: a) girar instrucciones al gobierno central para incorporar evaluaciones climáticas en todos los proyectos que requieran de autorizaciones ambientales (evaluación de impacto ambiental y social), b) ordenar a las autoridades centrales la realización de estudios que puedan tener impacto sobre la diversidad de la selva, c) ordenar la elaboración de un inventario de emisiones y un presupuesto de carbono, d) la creación de un plan de recuperación bajo el marco normativo legal existente, así como la implementación de otros métodos de secuestro de carbono específicos, y e) ordenar la creación de un comité de cumplimiento para reporte al Tribunal sobre el progreso de las medidas que pudiesen ser adoptadas. De lo anterior se desprende que, en la solicitud de tutela de *Pandey v. India* se logró articular una cadena argumentativa coherente, concluyendo con la invitación a una acción climática contundente por parte del gobierno central.

Puntos de conexión entre los litigios climáticos adjudicados favorablemente

Desde el aspecto procesal de la prueba en *Pandey v. India* se emplearon los informes científicos que respaldaron el aumento del riesgo, tal como en su momento se hiciera con el Pasaje de *Rohtang*. Por otra parte, se presentaron de forma clara los vínculos de los niños con una situación de riesgo patente, así como se identificaron elementos de corte intergeneracional que fueron contemplados en la petición inicial de 2015 del caso *Juliana v. Estados Unidos*[575].

A pesar de que la peticionaria trasladó una argumentación similar a la desarrollada por el mismo Tribunal en el caso de *Himachal Pradesh*, su requerimiento de salvaguarda fue desestimado. El Tribunal verde consideró que la cuestión del cambio climático se encontraba cubierto por la evaluación de impacto ambiental recogida por la legislación nacional, con lo cual no podía argumentante que las metas climáticas establecidas en el Acuerdo de París estaban fuera de las políticas ambientales nacionales[576].

El Tribunal perdió una valiosa oportunidad para pronunciarse sobre la interesante y compleja modulación de la problemática intergeneracional. Sin embargo, este caso ha servido para extender los argumentos en litigaciones climáticas alrededor del mundo, pues permite abordar las implicaciones entre el principio de solidaridad intergeneracional, desarrollo sostenible y la protección de los derechos humanos de los grupos más vulnerables de la sociedad.

---

575. Véase sobre este caso: Case Comment. (2021). Federal Courts — Justiciability — Ninth Circuit Holds that Developing And Supervising Plan To Mitigate Anthropogenic Climate Change Would Exceed Remedial Powers of Article III Court. — *Juliana v. United States*, 947 F.3d 1159 (9th Cir. 2020). Harvard Law Review., 134, 5., p. 1929-1936. Recuperado de: https://bit.ly/3hzU6nk.; véase también: United States District Court District of Oregon Eugene Division. Juliana v. United State. Sabin Center Climate Change Law. En: https://bit.ly/47pnlln.

576. El caso fue desestimado en fecha 15 Ene. 2019.

Esta demanda tenía interesantes probabilidades, sin embargo, como en toda litigación climática la mayor complejidad se concentraba en sortear obstáculos procesales, especialmente aquellos asociados a la admisibilidad, mientras que un eventual análisis de fondo, habría dejado en una encrucijada al Tribunal a la hora pronunciarse sobre cómo balancear el derecho al desarrollo y las necesidades de superación del umbral de pobreza, en un país el que la mayor parte de la población vive en condiciones extremas.

Desde la perspectiva de la litigación estratégica, una derrota judicial —incluso *in limine litis*— no siempre es un fracaso, pues la petición permite delimitar contornos sobre nuevas estrategias procesales, así como enseña a perfilar con mayor claridad la posible vulneración de derechos. Por las razones expuestas, no es de extrañar que alguno de los argumentos del asunto *Pandey* encontrasen eco en *Futuras Generaciones v. Colombia* y hasta en el Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas[577]. Por lo tanto, se cumple la hipótesis de influencia de las decisiones climáticas originales sobre la petición formulada.

Commune de Grande-Synthe v. France (2019) [578]

El caso *in comento* tiene la particularidad de ser la segunda demanda[579] sobre justicia climática presentada contra el Estado bajo la jurisdicción francesa, en esta ocasión la vía judicial seleccionada fue ante el Consejo de Estado. En este litigio se depositaron grandes esperanzas sociales de justicia climática, ya que los peticionarios plantearon la necesidad de un recorte inminente de emisiones a nivel nacional, para ello fundamentaron su solicitud en un interés legítimo que atendía a la amenaza cierta y directa sobre la municipalidad donde habitaban.

La demanda presentada por el municipio de *Grande-Synthe* es conocida como el caso francés del siglo. Esto se debe al apoyo popular que recibió la

577. Burger, M & Tigre, M. A. (2023) *Global Climate…Ob. cit*. 54. [...] *«The disproportionate effects of climate change give rise to claims for equal treatment (Gradoni and Mantovani 2022). The United Nations Committee on the Rights of the Child recognized the merits of this type of claim by stating that children "are particularly affected by climate change, both in terms of how they experience its effects and the potential of climate change to affect them throughout their lifetimes, particularly if immediate action is not taken"* (Sacchi *et al.* 2021). *Cases generally focus on (i) insufcient efforts to reduce carbon emissions and meet climate commitments, (ii) insufcient efforts to implement mitigation and adaptation measures and (iii) specifc regulatory approvals that are expected to have dramatic climate impacts* (Parker *et al*. 2022)».

578. Conseil d'Etat. Commune de Grande-Synthe v. France, judgment (11 jun. 2021). Recuperado de: https://climatecasechart.com/non-us-case/commune-de-grande-synthe-v-france/

579. Seguido por: Notre Affaire à Tous and Others v. France, judgment (14 oct. 2021). Recuperado de: https://climatecasechart.com/non-us-case/notre-affaire-a-tous-and-others-v-france/

iniciativa elevada por el alcalde de la municipalidad demandante[580]. La petición forma parte de la ola de litigios climáticos globales que ha sido impulsada por el caso *Urgenda Foundation*. Al igual que los ciudadanos holandeses, en esta petición se interpuso una reclamación nacional por falta de diligencia del Estado con relación al deficiente deber de protección hacía los ciudadanos y ante el incumplimiento de la obligación de garantizar un bien común superior, prevenir el riesgo del cambio climático[581].

Los demandantes manifestaron en su escrito que la municipalidad estuvo y continuará sometida a los efectos de las transformaciones climáticas extremas. Especialmente, en lo que se refiere a la pérdida de biodiversidad, aumento del nivel del mar y erosión de sus costas. Esto debido a que *Grande-Synthe* es una localidad que se encuentra construida sobre un dique, protegida por sistemas hidráulicos con los que a diario combate la penetración de agua. Su ubicación geográfica evidencia una especial vulnerabilidad contrastadas con falta de adopción de medidas nacionales tendientes a minimizar las principales fuentes de emisiones de CO_2 a la atmosfera.

Vulneraciones generadas por el cambio climático

El municipio de *Grande-Synthe* optó por acudir a la jurisdicción contencioso-administrativa para exigir el control de la actuación del gobierno tras agotar la vía de diálogo interno entre el municipio y el ejecutivo[582]. Para ello, los demandantes invocaron la vulneración de los artículos 2[583] y 8[584] del CEDH, las disposiciones contenidas en los artículos 2 y 3 de la CMNUCC, así como los artículos 2, 3 y 4 del Acuerdo de París y la Carta Ambiental Francesa. En la solicitud de tutela se exigió la adopción de medidas regulatorias concretas que permitiesen la reducción significativa de gases de efecto invernadero, la prohibición de acciones que aumentasen las emisiones, aunado al cumplimiento efectivo de los compromisos climáticos internacionales asumidos por Francia.

Debe tenerse en cuenta que Francia se había comprometido en el marco de la Unión Europea a luchar contra los efectos nocivos del cambio climá-

---

580. Véase : Cournil, C. (2019). «L'affaire du siècle» devant le juge administratif Les ambitions du futur premier recours «climat» français. *L'Actualité juridique. Droit administratif* (437-442). En: https://bit.ly/3LdAUJ6 . El autor hace referencia a los antecedentes del caso y destaca el protagonismo de ley ante la inacción climática de las autoridades públicas.

581. Torre-Schaub, M., D'ambrosio, L. & Lormeteau, B. (2019). *Rapport final de recherc: Les dynamiques du contentieux climatique. Usages et mobilisations du droit pour la cause climatique*. Paris: Droit & Justice https://bit.ly/3L9rSwH

582. Véase: Cournil, C. (2019), *Ob. cit*.., hacienda referencia a los antecedentes del caso.

583. Derecho a la vida.

584. Derecho a la vida privada y familia.

tico[585]. Sin embargo, los documentos de autos daban cuenta de una extralimitación en los presupuestos de carbono entre 2015 al 2018. Aunque también arrojaban indicios sobre una curva de reducciones de emisiones en los periodos comprendidos entre 2019 al 2023, tras la introducción de cambio legislativos en el país.

Las pretensiones de los peticionarios pueden resumirse en: i) Anular la decisión por silencio administrativo del Ejecutivo Nacional con relación a la solicitud presentada por los demandantes antes del inicio de la querella[586], ii) ordenar acciones de adaptación frente al cambio climático y iii) generar medidas legislativas y reglamentarias para hacer obligatorio el cumplimiento de la prioridad climática.

En lo que respecta a la etapa preliminar de la querella[587], es pertinente resaltar que la petición superó satisfactoriamente los filtros de admisibilidad, dando lugar a la participación como interesados de otros sujetos, entre ellos: la región de París, la Villa de *Grenoble*, así como la intervención de las asociaciones sin fines de lucro como *Oxfam France, Greenpeace France, Notre Affaire A Tous, y la Fondation pour la Nature et l'Homme*. Todos estos intervinientes demostraron un interés directo y legítimo en la causa.

Sin embargo, en esta etapa se rechazó la solicitud de designación de prioridad climática por incompetencia del Tribunal sobre la materia. Igualmente, se ordenó la realización de una investigación adicional para pronunciarse sobre la negativa de adopción de medidas que permitiesen doblegar la curva ascendiente de emisiones de gases de efecto invernadero. La decisión sobre la admisión de la causa condujo a trasladar el análisis de este último aspecto al fondo del asunto y a concentrarlo en los compromisos asumidos por Francia.

Con respecto al fondo del asunto, en fecha 1 de julio de 2021 el Consejo de Estado Francés se pronunció instando a la Presidencia a adoptar medidas útiles para reducir la curva de emisiones, hasta hacerla compatible con el Código de Energía Francés y el Reglamento (UE) 2018/842 de 30 de mayo de 2018. De esta manera, el Consejo de Estado otorgó un plazo límite al 30 de mayo de 2022 para generar e implementar medidas climáticas suficientes[588].

---

585. La Unión Europea se había comprometido a una reducción en bloque del 40 % de la Contribuciones Nacionales Determinadas en contraste con las emitidas en el año 1990, meta reajustada a través del Reglamento (UE) 2018/842, de 30 de mayo de 2018 con el fin de alcanzar una reducción entre 2021-2030 de un 30 % en comparación con los niveles de 2005, asignando a Francia un recorte del -37 %.

586. El fundamento legal radicaba en el deber de cumplimiento de los compromisos internacionales y nacionales asumidos por el país (reducir las emisiones).

587. Conseil d'Etat. Statuant au Contentieux N° 427301 Commune de Grande-Synthe v. France (19/11/2020).

588. Igualmente se ordenó el pago de cinco mil (5.000) euros en cumplimiento del artículo L. 761-1 del Código de Justicia Administrativa y se desestimaron las demás solicitudes de los intervinientes.

En consecuencia, se anuló la decisión del Estado de no adoptar medidas en el marco de la de silencio administrativo asumido por el Ejecutivo, cuando no respondió a la petición inicial formulada por los demandantes.

Puntos de conexión entre los litigios climáticos adjudicados favorablemente

Este caso tendrá un impacto en la transformación del obrar de las estructuras administrativas francesas y sobre la toma de decisiones en materia de regulación de emisiones de gases de efecto invernadero. Particularmente, en lo referente a la supervisión del cumplimiento de las obligaciones climática a cargo del ejecutivo nacional, quien debe adoptar medidas razonables para ajustar las emisiones.

Ahora bien, debe destacarse que la petición presentada ante el Consejo de Estado Francés guardaba similitud con el caso *Urgenda Foundation,* particularmente en lo relativo a la identificación de vulnerabilidades frente al cambio climáticas, así como en la exigencia del deber de cuidado hacía sus ciudadanos y el cumplimiento de los compromisos internacionales. Por otra parte, es posible identificar en la solicitud planteada, algunos elementos provenientes del fallo *Leghari v. Federation of Pakistan*, en concreto sobre la necesidad de adoptar medidas de adaptación climática, así como el fomento la actuación del Estado, sin establecer una declaratoria de responsabilidad.

Aunque, debe reconocerse que la decisión final del Consejo de Estado Francés no acogió los argumentos asociados a la vulneración de los derechos consagrado en el CEDH, los demandantes acertadamente emplearon la tesis central provenientes de litigios decididos favorablemente. De hecho, la mayor evidencia, es que los actores fueron capaces de trasladar esta argumentación a un sistema de justicia como el francés. De allí que se cumple la hipótesis de un efecto reflejo (al menos en las peticiones). En consecuencia, hay un impacto en el diálogo social que facilita el acceso a la justicia climática.

Debe destacarse que en *Grande-Synthe*, la decisión fue sustentada en los compromisos asumidos por Francia ante la Unión Europea, los cuales encontraban conexión directa con la CMNUCC y con el Acuerdo de París, así como en el derecho interno. Aunque la postura del Consejo Francés se aleja sustancialmente de la línea seguida por los litigios analizados en el apartado anterior, su resultado final se traduce en una nueva alternativa para compeler a los Estados al cumplimiento de su deber de cuidado. En pocas palabras, es otra victoria para fomentar la salud planetaria.

En definitiva, la máxima autoridad contenciosa administrativa de Francia creó una nueva corriente en materia de acceso a la justicia climática con un impacto sustancial no solo sobre las políticas ambientales francesas, sino también sobre los países alrededor del mundo. Especialmente, aquellos que han adoptado el modelo civil y administrativo francés. La postura asumida

por el juzgador ha causado efecto en otras latitudes, desde donde se seguía con gran interés el avance hacía una vía de acción subsidiarias a las adoptadas por los sistemas anglosajones, cuyas decisiones se han amparado en el *derecho de daños* del *Common Law*[589].

En definitiva, *Grande-Synthe* es reflejo de otro entendimiento de la justicia climática. Los nuevos litigios traen ideas innovadoras para expandir las propuestas originales, por lo cual la incorporación de estructuras argumentativas diversas enriquece la clave de diálogo judicial frente a un tema tan complejo como lo es el cambio climático, la búsqueda de remedios eficientes, y una eventual determinación responsabilidad del Estado en el futuro.

Mathurv. Her Majesty the Queen in Right of Ontario / Canada (2019)

En este apartado, el efecto reflejo de los litigios climáticos decididos favorablemente se manifestó en Canadá, con un reclamo para hacer valer los derechos de las futuras generación ante la Corte Superior de Ontario[590]. El abordaje de la justicia intergeneracional aportado por la decisión colombiana de 2019 se ha posicionado como la estrategia procesal más utilizada en los casos donde existe afectación de derechos sobre niños y adolescentes, especialmente en atención a la falta de acciones para alcanzar las metas de reducción con la finalidad de anclar la temperatura del planeta ente 1.5 y 2 grados a niveles preindustriales.

Las peticiones de *Mathur et al* descansan sobre un grupo de niños, niñas y jóvenes (7) con edades comprendidas entre doce (12) y veinticuatro (24) años, quienes interpusieron una acción judicial contra el gobierno de Ontario al considerar que la nueva meta de reducción de gases de efecto invernadero impuesta por la provincia afectaba sus intereses legítimos de forma directa, por ser insuficiente de cara a la meta de anclaje de temperatura global.

De esta manera, dejaron en evidencia que la *Cap and trade Cancellation Act (2018),* articulada a través del plan de preservación y protección del ambiente para las generaciones futuras[591], no respondía a las necesidades de la pobla-

589. En estos sistemas de derecho puede resultar más sencillo adecuar los precedentes a las necesidades dictadas por la actualidad que en los sistemas de derecho continental, para Dowrkin el problema de las lagunas jurídicas puede ser resuelto a luz del derecho interno (como ocurrió en el caso futuras generaciones v. Colombia) y del sistema de responsabilidad local. Véase: Dworkin, R (2006), *Ob. cit*.

590. Ontario Superior Court of Justice. Mathur, *et al.* v. Her Majesty the Queen in Right of Ontario, complaint (25 Nov. 2019). Recuperado de: https://climatecasechart.com/non-us-case/mathur-et-al-v-her-majesty-the-queen-in-right-of-ontario/

591. Véase el plan Ambiental de Ontario: Ministry of Environment, Conservation and Parks. «Preserving and Protecting our Environment for Future Generations: A Made-in-Ontario Environment Plan». Recuperado el 30 de noviembre de 2023 de: https://bit.ly/3qzxlzp

ción, violando sus derechos[592]. La medida gubernamental solo establecía un umbral máximo de reducción para el 2030 de un 30 % por debajo de los niveles emitidos por la provincia en el año 2005, pero no de los niveles de 1990 como se había fijado con anterioridad, apreciándose una regresividad en la política climática.

Los peticionarios a lo largo de su demanda señalaron que las autoridades públicas realizaron una inadecuada gestión de mitigación de los riesgos asociados al cambio climático, debido a que habían fijado una meta poco ambiciosa de reducción de gases de efecto invernadero para el año 2030. Igualmente, consideraron que el gobierno había fallado en proveer una meta de reducción continuada para el año 2050.

Lo anterior convertía el plan de mitigación en débil y alejaba a Canadá de la meta establecida en el Acuerdo de París de mantener la temperatura de la tierra por debajo de los 2 grados centígrados a niveles preindustriales. En la demanda, hicieron un llamado a aplicar el principio de no regresión en materia climática, puesto que aceptar la meta de reducción de tan solo un 30 % por debajo de los niveles emitidos en 2005, implicaba un retroceso grave en comparación con los logros alcanzados en el pasado.

Para los demandantes, la situación anteriormente expuesta conduciría a que la población de la provincia de Ontario enfrentase una devastadora transformación climática, lo cual inexorablemente afectaría la vida, la salud y la forma de vivir al menos tal y como se conocía al momento de presentar la querella. Para los peticionarios estas consecuencias deberán ser asumidas desproporcionalmente por las comunidades más vulnerables y por los ciudadanos pertenecientes a los grupos etarios que ellos representan.

Para respaldar sus argumentos, los jóvenes hicieron uso de los informes científico del IPCC con el propósito de demostrar la previsibilidad del riesgo y la necesidad urgente de reducir o al menos balancear las emisiones. Igualmente, los peticionarios invocaron como prueba del reconocimiento del peligro climático en el Decreto mediante el cual el gobierno declaró un estado emergencia climática. Así consideraron probado su interés legítimo en prevenir las catástrofes climáticas que amenazaba de forma inminente la salud y el bienestar de su generación y de las futuras.

Vulneraciones generadas por el cambio climático

Desde el punto de vista normativo, los demandantes alegaron que la política climática aprobada violentaba el artículo 7 de la Carta de Derechos y Libertades Canadiense. Esta disposición recoge el principio constitucional

592. Canadian Charter of Human Rights and Freedoms. Article 7: «Everyone has the right to life, liberty and security of the person and the right not to be deprived thereof except in accordance with the principles of fundamental justice».

de preservación social, según el cual el gobierno debe abstenerse de adoptar conductas que puedan generar daños futuros, sufrimiento o muerte de un número significativo de sus ciudadanos.

El mencionado principio contiene una variedad de valores sociales que han sido reconocidos por la jurisprudencia canadiense y por el derecho internacional a lo largo de los años, como lo son la dignidad humana, la inviolabilidad de la vida humana y la protección pública de los sujetos bajo su cuidado. Adicionalmente, el artículo 7 contempla el derecho a un sistema climático capaz de proveer un futuro sostenible para las generaciones presentes y futuras, establecido de forma intrínseca en el derecho a la vida, libertad y seguridad.

En el petitorio de los demandantes se solicitó: a) la derogatoria de la Ley de Mitigación de Cambio Climático y Economía Baja de Carbono, y b) el establecimiento de un nuevo límite de emisiones acorde con la base científicas disponible para la Provincia de Ontario. Aunque, acertadamente no se impone un porcentaje exacto de reducción. De esta manera se le permite al Juez realizar una ponderación entre mínimos y máximos para ajustar las metas sin imposiciones arbitrarias.

Este caso se encuentra en pendiente de decisión, superando satisfactoriamente la compleja etapa de admisión[593]. El avance procesal más reciente se produjo en fecha 22 de septiembre de 2022 con la respuesta al petitorio de los demandantes. Previo a este paso, el 12 de noviembre de 2020, el Tribunal rechazó la argumentación preliminar del Estado para la desestimación de la causa y reconoció que los peticionarios cumplían con el examen de legitimidad procesal en nombre de las futuras generaciones[594]. Dado que las partes no han alcanzado una negociación amistosa se espera la decisión final de la causa en los próximos meses.

Puntos de conexión entre los litigios climáticos adjudicados favorablemente

Mathur es otro litigio en el que se puede apreciar las similitudes con los casos climáticos analizados originalmente. Primero, los ciudadanos de Ontario son quienes reclaman la revisión del estándar aplicado al recorte de emisiones, de la misma manera en la que lo hicieran en su momento los ciudadanos de La Haya en el caso *Urgenda*. Segundo, para la solicitud la atribución de responsabilidad de la Provincia de Ontario, se empleó la fórmula de dili-

593. Ontario Superior Court of Justice. Mathur v. Her Majesty the Queen in Right of Ontario, decision motion to dismiss denied (12 Nov. 2020).

594. Concretamente, problemáticas judiciales y substanciales en el orden constitucional, interés genuino y directo, un caso de interés público provincial, ausencia de conflicto de intereses públicos y privados que afectasen los derechos de terceros. Cabe destacar que no fue necesario demostrar la prueba del daño.

gencia debida, en virtud de que el Estado contaba con la potestad de regular los principales sectores de emisiones de gases de efecto invernadero en la región, pero no lo hizo. Igualmente, se acogió al constitucionalismo climático para abordar la vulneración de derechos fundamentales.

Por otra parte, también se identificaron elementos coincidentes con el caso *Futuras Generaciones v. Colombia,* específicamente en lo atinente a la vulneración de derechos intergeneracionales, a partir lo cual se incorporó el argumento de inequidad generacional y justicia intergeneracional, por cuanto el rango etario de los demandados les imposibilitaba para influenciar las decisiones políticas que determinarían el futuro en el que se desarrollarán su vida.

Es así como se cumple la hipótesis de influencia de las decisiones climáticas originales sobre la petición formulada por el grupo de jóvenes que conformó la demanda *Mathur* con base a la vulneración de derechos fundamentales. Sin embargo, para el que el caso prosperé será necesario demostrar el riesgo previsible y la falta de adopción de medidas acordes a la inminencia del peligro climático por parte del Estado. En pocas palabras demostrar la falta de diligencia en un contexto de razonabilidad. Este caso, se encuentra en deliberaciones finales.

Álvarez v. Perú (2019)

En diciembre de 2019 fue presentado ante la Corte Superior de Lima el primer litigio climático del país por vía constitucional[595]. En este caso, siete (7) niños y adolescentes domiciliados en la capital peruana, nacidos entre el año 2005 y el año 2011, demandaron al Estado en virtud de la falta de adopción de medidas de mitigación frente al aumento de emisiones de gases de efecto invernadero. Los demandantes reclamaron la implementación de un modelo de aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, donde se respetasen los principios ambientales de precaución y de prevención, para cumplir con los postulados intrínsecos del Estado social y de derecho, así como con los principios de solidaridad[596] y equidad intergeneracional[597].

La legitimación activa de los peticionarios se fundamentó en el artículo 40 del Código Procesal Constitucional[598], el cual habilita el acceso de cualquier

595. Véase: Corte Superior de Lima. Álvarez v. Perú (16 Dic. 2019), demanda de amparo ambiental. Recuperado de: https://climatecasechart.com/non-us-case/alvarez-et-al-v-peru/

596. Reconocido mediante la sentencia No 0009-2005-AI/TC del Tribunal Peruano

597. Reconocido mediante la sentencia No 0048-2004-PI/TC del Tribunal Peruano

598. Código Procesal Constitucional de Perú. Artículo 40: «Asimismo, puede interponer demanda de amparo cualquier persona cuando se trate de amenaza o violación del derecho al medio ambiente u otros derechos difusos que gocen de reconocimiento constitucional, así como las entidades sin fines de lucro cuyo objeto sea la defensa de los referidos derechos».

persona a un recurso extraordinario de amparo cuando se encuentra frente a una amenaza o violación del derecho al medio ambiente u otros derechos difusos reconocidos constitucionalmente. La acción colectiva interpuesta respondió a la necesidad de proteger a las generaciones jóvenes ante las trasformaciones climáticas actuales y venideras, exacerbadas por la presunta incapacidad del Estado peruano para doblegar la deforestación del Amazonas.

Concretamente, se identificaron como las áreas de mayor impacto climáticos las regiones amazónicas de Loreto, Ucayali, Madre de Dios, Amazonas y San Martín, puesto que en esos territorios no se habían adoptado medidas concretas o acciones adecuadas dentro de los planes y políticas ambientales de alcance nacional[599]. Los peticionarios señalaron la violación del derecho a un medio ambiente sano en cuanto a la conexión con las áreas geográficas previamente identificadas. En este caso, se alegó la vulneración tanto en lo que respecta al derecho a gozar de un medio ambiente sano (dimensión subjetiva), así como del derecho a que ese medio ambiente se preserve a través de la adopción de medidas de protección (dimensión objetiva).

Los demandantes expusieron la problemática climática global y nacional a partir de la base científica provista por los reportes del IPCC[600] y la Estrategia Nacional Peruana de Cambio Climático, presentada por el ejecutivo nacional en el año 2015[601]. A partir de estos instrumentos técnicos mostraron valores objetivos, según los cuales la principal fuente de emisiones de gases de efecto invernadero era la utilización y el cambio de uso de suelo, tema directamente vinculado con la deforestación de la Cuenca Amazónica y con el impulso de monocultivos por parte de los poderes públicos. Para los peticionarios, tal situación afectó y continuará afectando gravemente la biodiversidad y flora de la selva tropical, repercutiendo en cómo se relacionan las generaciones futuras con el medio ambiente.

Vulneraciones generadas por el cambio climático

Para los demandantes, el deber de cuidado del Estado no podía quedar diluido en acciones dispersas y aisladas carentes de efectividad. De esta manera, se planteó al Tribunal la responsabilidad estatal por omisión, esto a la luz de la doctrina del riesgo previsible y evitable, puesto que Perú contaba con un umbral temporal suficiente para adoptar medidas de mitigación razonables que ralentizasen el deterioro y la pérdida progresiva de la cobertura forestal Amazónica, sin embargo, no lo hizo.

599. Véase: Ministerio del Ambiente de la República del Perú. Política Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (2013). Asimismo, véase la Política Nacional del Ambiente (2009). Recuperado el 30 de noviembre de 2023 de: https://bit.ly/3809AQf

600. IPCC (2007), ob, cit.

601. Ministerio del Ambiente de la República del Perú. Estrategia Nacional ante el Cambio Climático (2015). Recuperado el 30 de noviembre de 2023 de: https://bit.ly/3IBg9VZ

El objetivo de este litigio era preservar el medio ambiente y mantener el entorno en condiciones adecuadas de disfrute para las generaciones presentes y futuras. Según los peticionarios, para alcanzar esta meta el Estado debía proteger de forma efectiva el derecho a un medio ambiente sano. Es por lo que, los demandantes invocaron no solo la vulneración de las normas nacionales, también incluyeron la violación de los derechos reconocidos a nivel internacional[602] .

Igualmente, solicitaron la protección de su derecho a la dignidad humana con base en la Constitución Política, específicamente, el artículo 1 relativo a la defensa de la persona y respeto a su dignidad, así como del artículo 2.1 referente al derecho a la vida, integridad, libre desarrollo, bienestar, y el artículo 44 inherente a los deberes del Estado[603]. De esta manera esgrimieron la violación de sus condiciones de existencia digna, entendidas en el marco de la interpretación brindada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (artículo 4 CADH), en conexión con el artículo I de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre.

Los preceptos anteriores fueron igualmente entrelazados con artículo 6.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y el artículo 6 de la Convención sobre los Derechos del Niño. Además, los demandantes invocaron la vulneración del proyecto de vida[604], la violación del derecho a la salud, acceso al agua[605] y del medio ambiente sano como bienes jurídicos que permite la materialización de todos los anteriores[606].

Especial mención merece la solicitud de reconocimiento jurídico de la Amazonía como sujeto de derecho. A pesar de que el ordenamiento peruano no prevé esta figura para ningún recurso natural, los peticionarios solicitaron al juez constitucional, la adopción de una interpretación progresiva tanto de

602. Constitución Política del Perú. Artículos 44: «Son deberes primordiales del Estado: defender la soberanía nacional; garantizar la plena vigencia de los derechos humanos; proteger a la población de las amenazas contra su seguridad; y promover el bienestar general que se fundamenta en la justicia y en el desarrollo integral y equilibrado de la Nación».

603. Los demandantes incluyeron también en la base legal el artículo 1 de la de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

604. Los demandantes incorporaron el pronunciamiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en cuanto una extensión de la interpretación clásica del derecho a la vida. La violación del derecho al proyecto de vida comprende más que la simple privación física de existencia humana e incluye la falta de acciones del Estados para acentuar la protección del derecho a la vida y a vivir con dignidad de personas en situación de riesgo, quienes de por sí, ya se encuentran privados de desarrollar el derecho de alentar un proyecto de vida. Esta idea es el desarrollo concreto de la jurisprudencia planteada en el caso de los «Niños de la Calle» Villagrán Morales y otros v. Guatemala (1999), Instituto de Reeducación del Menor v. Paraguay (2004), y Loaiza Tamayo v. Perú (1998).

605. Véase: Artículo 7-A de la Constitución Política del Estado.

606. ONU. AG. Convención sobre los Derechos del Niño (1989). UNTS. Vol. 1577 (20 nov. 1989). Para dar efectivo cumplimiento a los derechos del niño conforme al artículo 4.

la constitución como del derecho internacional de los derechos humanos. Según la postura esgrimida, se le permitiría dotar a la Amazonía de una categoría especial correspondiente a la cosmovisión de «selva viva», para ello, propusieron seguir los pasos iniciados por Estados como: Ecuador[607], Bolivia[608], Colombia[609], Nueva Zelanda[610] y la India[611], quienes desde una visión ecocéntrica han reconocido la condición de sujeto de derecho a espacios naturales dentro de sus fronteras[612].

Puntos de conexión entre los litigios climáticos adjudicados favorablemente

Tal como se puede apreciar, esta demanda tomó como base el caso *Futuras Generaciones v. Presidencia de la República de Colombia*, tanto en la vía de acción constitucional, como en el motivo de la solicitud, es decir, en la salvaguarda de derechos. Esta petición judicial confirma el efecto dominó de tutela climática que produjo el caso colombiano en su mayor expresión dentro de la región Latino Americana[613]. Aunque, con sutiles variaciones, como lo es el hecho de que la petición peruana se decantó por la vía de amparo colectivo[614], de manera que encontró una figura procesal propia que se adecuaba más a la pretensión de los jóvenes demandantes.

607. Constitución de la República del Ecuador (2011). Artículos 7 -74.

608. Estado que reconoció los derechos básicos de la naturaleza a través de la a Ley de la Madre de Tierra. Ley No. 71 (21 dic. 2010).

609. Corte Constitucional de Colombia, sentencia C-035/16. (8 Feb. 2016) y sentencia T622/16 (27 Ene. 2015).

610. Véase el trabajo especial sobre el reconocimiento del rio como una entidad jurídica separada e independiente con derechos y deberes sujeto a una tutela especial de: Hutchison, A. (2014). The Whanganui River as a legal person. *Alternative Law Journal*, *39*(3), 17-182.

611. Corte Alta de Uttarakhand de Nainital. Petición Writ (PIL), No 126. Sentencia (20 Mar. 2017). Véase sobre este punto el trabajo de: O'Donnell, E. & Talbot-Jones, J. (2018). «Creating legal rights for rivers». *Ecology and Society*, *23*(1). Recuperado de: https://bit.ly/36rDR9Z.

612. En este caso se puede apreciar el traslado exacto de las medidas que por moción propia adopto el juez colombiano con relación a la Amazonía. Sobre el reconocimiento de derechos a entidades naturales véase: Estupiñan, L., Storini, C., *et al* (2019). *La Naturaleza como Sujeto de Derecho en el Constitucionalismo Democrático*. Bogotá: Universidad Libre. Igualmente, véase: Zaffaroni, E. (2011) *La Pachamama y el Humano*. Buenos Aires:COLIHUE.

613. A partir del caso *Futuras Generaciones v. Presidencia de la República de Colombia* se han incrementado la presentación de este tipo de litigaciones. A título ejemplificativo véase: Corte Suprema de Justicia de Brasil. PSB *et al.* v. Brazil (on Climate Fund) (06 May. 2020); PSB *et al.* v. Brazil (on deforestation and human rights) (11 nov. 2020), Sacchi *et al.* v. Argentina. (10 ago. 2021).

614. En el fallo de Colombia no fue posible acudir a la vía de la acción popular, que sería el equivalente de esta acción de amparo colectiva en Perú.

En la petición revisada también se pueden apreciar elementos del caso *Urgenda* con relación al deber de cuidado que tienen los Estados hacia su población, esta vez acentuada en la situación de un grupo vulnerable concreto. Esto, a pesar de que no se menciona el caso holandés de forma expresa. Adicionalmente, en la formulación de sus pretensiones se hizo énfasis en bases doctrinales y jurisprudenciales de raíz ambiental, algunas de ellas no invocadas por los litigios climáticos adjudicados favorablemente[615].

Por otra parte, esta demanda tuvo el acierto de apelar a los conceptos interpretativos desarrollados por la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, lo cual corresponde con la figura de control de convencionalidad difuso aplicable por los tribunales nacionales de los países miembros del Sistema regional. Desde la perspectiva de análisis utilizada en este capítulo se identifica el efecto espejo entre los litigios climáticos estudiados en la primera parte y la presentación de solicitudes basadas en la vulneración de derechos humanos.

Por otra parte, debe mencionarse que la vía de protección aplicada por los peticionarios presenta debilidades de orden procesal, por lo cual tiene altas probabilidades de desestimación in *limine litis*. Sin embargo, esto puede ser una estrategia para formalizar el agotamiento de la vía interna, requisito esencial para elevar en el futuro cualquier petición al Sistema Interamericano de Derechos Humanos[616]. En este orden se procede a identificar algunos obstáculos a los cuales posiblemente se enfrente esta petición[617] en el ámbito nacional:

- El amparo es un recurso extraordinario que procede cuando no existen medios ordinarios para cesar la violación de derechos, en este caso las políticas ambientales señaladas y la suspensión de autorizaciones de cambio de uso de bosques en la región amazónica podían ser impugnadas por vía administrativa y contenciosa administrativa, pero no se hizo.
- La demanda de amparo no solicita propiamente el cese de la amenaza o la vulneración de los derechos presuntamente violados, por el contrario, el petitorio de este caso se enfoca en la exigencia del establecimiento de la meta concreta de deforestación cero para 2025, lo cual puede resultar contraproducente pues escapa de la esfera competencial del juzgador[618].

615. Se incluyeron referencia a *leading cases* ambientales del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, así como de la Corte Interamericana, jurisprudencia nacional enfocada en la situación de cada una de las provincias afectadas.

616. Dado el abordaje aplicado a casos ambientales, la CtIDH se manifiesta como un foro idóneo para la tutela de derechos humanos vulnerados en un contexto climático, especialmente después de la Opinión Consultiva sobre medio ambiente. véase: CtIDH. OC 23/17.

617. Al 30 de noviembre de 2023, este caso sigue pendiente de admisibilidad.

618. Se recuerda que la determinación de este tipo de metas corresponde a la competencia del poder ejecutivo y no del judicial. En el caso de Colombia fue procedente pues existía

– Al igual que el caso colombiano el reconocimiento de la Amazonía como sujeto de protección[619], aunque representa un progreso significativo en materia de derecho ambiental, es solo un acto simbólico, por sí solo no detiene las graves violaciones invocadas en un juicio de amparo.

Do-Hyun Kim Yujin *et al*. v. South Korea (2020)

Esta petición presentada a inicios del 2020 ante la Corte Constitucional de Corea del Sur por diecinueve (19) miembros de la Asociación *Youth 4 Climate Action*[620], es una acción colectiva contra la Asamblea Nacional y el presidente del país por la presunta vulneración de derechos[621]. La solicitud inicial fue complementada en mayo de 2020 y posteriormente en septiembre del mismo año con informes científicos mediante los cuales se trata de exponer la vulneración de derecho a un medio ambiente sano, el deber de protección frente a desastres naturales, la salud y la seguridad ciudadana.

Los demandantes señalaron la inconstitucionalidad de las insuficientes acciones tomadas por el gobierno para alcanzar la reducción de gases de efecto invernadero, específicamente la falta de adecuación de medidas legislativa, así como las omisiones normativas que pueden proteger los derechos ambientales. En este orden, alegaron la existencia de un riego grave para su generación, basados en los informes científicos del IPCC, según los cuales la infra aplicación de las medidas de mitigación conduciría (con alta probabilidad), a un aumento de más de 2 grados centígrados en la temperatura de la tierra para el final del siglo XXI, violentado así los límites del Acuerdo de París[622].

---

un compromiso internacional expreso en ese sentido. En este caso hubiese sido positivo permitirle un margen de apreciación al ejecutivo nacional para consolidar un objetivo razonable a mediano y largo plazo.

619. Véase la solicitud de amparo ambienta presentada en Corte Superior de Lima. Álvarez *et al* v. Perú (16 dic. 2019), «ente sujeto de derechos a la protección, conservación, mantenimiento y restauración a cargo del Estado y los pueblos indígenas que la habitan».

620. Quienes promueven la protección de los derechos humanos y la equidad intergeneracional alrededor del mundo.

621. S&L Partners/ SFOC. Summary of complaint. Constitutional Court. Do-Hyun Kim Yujin *et al*. v. South Korea (13 Mar. 2020). Sabin Center Climate Change Law. Recuperado el 30 de noviembre de 2023 de: https://climatecasechart.com/non-us-case/kim-yujin-et-al-v-south-korea/

622. Chesterman, S., Owada, H. & Saul, B. (2019). *The Oxford Handbook of International Law in Asia and the Pacific*. Oxford: Oxford University Press. En Corea del Sur conforme al artículo 6 de la Constitución un tratado incorporado a su derecho interno tiene el mismo valor que la ley nacional. […] *«Under the South Korean legal system, codified laws are the primary source of law, which include: (1) statutes passed by the National Assembly; (2) decrees issued by the President and various ministries; (3) rules and regulations adopted by government agencies and local governments; and (4) international agreements».*

Para los peticionarios, el recorte de la meta de emisiones adoptada por el gobierno central y por la Asamblea Nacional contraviene los compromisos internacionales asumidos por Corea del Sur. Por lo tanto, los demandantes argumentaron que la conducta del Estado es fuente generadora de daños irreversibles para las generaciones jóvenes. Los peticionarios tienen la tarea de demostrar a la luz de los informes científicos la existencia de un riesgo real e inminente a nivel global y en Corea del Sur, es decir una situación peligrosa previsible sobre sus derechos para poder exigir la responsabilidad del Estado.

Para ello deben realizar una evaluación de las obligaciones de medio esperada por un Estado con el nivel de desarrollo, como lo es Corea del Sur. En consecuencia, será necesario estudiar el desempeño del rol gubernamental con relación a su deber de garantizar un medio ambiente sano a través de la adopción de medidas razonables de mitigación y adaptación frente al cambio climático. De esta manera la atribución indirecta resultará viable tal y como ha sido estructurada en los litigios climáticos como el caso *Urgenda*, *Leghari*, y *Futuras Generaciones.*

Vulneraciones generadas por el cambio climático

Los demandantes utilizaron como argumento central la existencia de una clara inequidad intergeneracional entre quienes hoy toman las decisiones ambientales, también agentes generadores del daño por omisión[623] y, las generaciones de jóvenes, quienes serán los receptores de los efectos perjudiciales a consecuencia de la falta de control de las emisiones antropogénicas generadas en el presente.

Los demandantes argumentaron la vulneración del artículo 10[624] relativo al derecho a la vida, búsqueda de la felicidad y resistencia contra de la extinción humana, el artículo 11[625] referente al derecho a la igualdad enfocado desde la perspectiva intergeneracional, el artículo 34[626] concerniente a la vida digna, seguridad, obligación de prevenir desastres y de proteger a los ciudadanos

623. Quienes además tienen el privilegio de disfrutar de un clima global placentero.

624. Daehanminkuk Hunbeob [Hunbeob] [Constitution] (S. Kor.). *«Article 10: All citizens shall be assured of human dignity and worth and have the right to pursue happiness. It shall be the duty of the State to confirm and guarantee the fundamental and inviolable human rights of individuals».*

625. *Constitution (S. Kor.). Article 11: «1) All citizens shall be equal before the law, and there shall be no discrimination in political, economic, social or cultural life on account of sex, religion or social status. 2) No privileged caste shall be recognized or ever established in any form. 3) The awarding of decorations or distinctions of honoring any form shall be effective only for recipients, and no privileges shall ensue therefrom».*

626. Constitution (S. Kor.). *Article 34: «1) All citizens shall be entitled to a life worthy of human beings. 2) The State shall have the duty to endeavor to promote social security and welfare»(…) «6) The State shall endeavor to prevent disasters and to protect citizens from harm therefrom».*

de peligros ambientales, así como del artículo 35[627] en relación al derecho a la protección del medio ambiente, todos ellos de la Constitución.

Asimismo, los jóvenes coreanos reclamaron la inconstitucionalidad de la disposición legal y Decreto Presidencial por medio del cual se promulgó la Ley de Bajo Carbono y Crecimiento Verde de 2019[628], en virtud de la doctrina de no delegación de poderes para asuntos sin autorización expresa legal de conformidad con en el artículo 75[629] de la Constitución del país.

Coincidencia con litigios climáticos analizados previamente

Desde tiempo atrás, se planteaba la construcción teorética de litigios intergeneracionales[630] basados en la justicia ambiental de los derechos humanos consolidados a través de los derechos intergeneracionales[631]. Precisamente, la materialización de justicia climática intergeneracional lograda

627. Constitution (S. Kor.). Article 35: *«1) All citizens shall have the right to a healthy and pleasant environment. The State and all citizens shall endeavor to protect the environment. 2) The substance of the environmental right shall be determined by Act. 3) The State shall endeavor to ensure comfortable housing for all citizens through housing development policies and the like».*

628. Norma que estableció un recorte a la meta originalmente propuesta por la política climática nacional. Cabe destacar que el anterior objetivo de reducción era acorde con los estándares propuestos por los instrumentos internacionales. Véase: En el 2009 el ejecutivo sur coreano realizó ambiciosos progresos en materia climática que se han visto seriamente disminuidos a partir de la entrada en vigor de la nueva ley. Véase: Cho, S. (2014). «Legal and Policy Implications on the Post-Kyoto Protocol System: A Korean Lawyer's Viewpoint». *Journal of East Asia and International Law*,*7*, 489.*«[…] ex-President Lee's promised cut of 30 percent of GHG emissions by 2020 was more of a political gesture, rather than a reasonable prediction based on current Korean conditions. In 2010, Korea emitted 669 million tons of carbon dioxide, exceeding the previous estimation of 644 million tons by about 4 percent. In 2013, the emission level was 899 million tons, which was more than 10 percent greater than the 811 tons targeted for 2020. Thus, the target to cut GHG emissions 30 percent by 2020 is considered as almost impossible achievement».*

629. Constitution (S. Kor.). Article 75: «The President may issue presidential decrees concerning matters delegated to him by Act with the scope specifically defined and also matters necessary to enforce Acts».

630. Entre los pioneros se encuentran: 1. Tribunal Supremo de Filipinas. Menores Oposa v. Secretario del Departamento de Medio Ambiente y Recursos Naturales. (1991); y, 2. Corte Suprema de Chile. Empresa Forestal Trillium Ltda (19 de mar. 1997) §13. Donde el Tribunal expandió la legitimación activa de los solicitantes «Diputados» considerando que el resguardo de intereses colectivos a pesar n encontrar un daño directo en la esfera individual es suficiente para otorgar tutela conforme a la norma constitucional.

631. Otro ejemplo que demuestra la posibilidad de judicializar la protección de intereses de las futuras generaciones es el reciente caso ante: German Federal Constitutional Court in Neubauer, *et al.* v. Germany (24 Mar. 2021). Sabin Center Climate Change Law. En: https://bit.ly/3QSC0hB. Donde la Corte estableció que: *«the fundamental rights - as intertemporal guarantees of freedom - afford protection against the greenhouse gas reduction burdens imposed by Art. 20a of the Basic Law being unilaterally offloaded onto the future».*

en *Futuras Generaciones v. Colombia* ha sido exportada a Corea de Sur con ciertos matices.

Al igual que en el caso colombiano, los jóvenes hacen un llamado de atención a sus autoridades públicas con el propósito de alcanzar una orden judicial que exhorte al Ejecutivo, en este caso se añade al poder legislativo. Entre otras similitudes, resulta oportuno destacar que ambos sistemas constitucionales tutelan el derecho a un medio ambiente sano de forma expresa, lo cual brinda una base jurídica ecológica más ventajosa a la hora de entablar un litigio de esta naturaleza.

Como era de esperarse el caso tiene elementos clave que pertenecen al litigio climático U*rgenda Foundation*. De hecho, salvo los puntos de coincidencia anteriormente señalados con la litigación colombiana sobre futuras generaciones, los jóvenes coreanos calcan la fórmula holandesa. Esto no es casual, pues el sistema jurídico de Corea del Sur está históricamente influenciado por el Derecho Estadounidense, de allí la afinidad con las fórmulas empleadas por el sistema del *common law*. Por otra parte, este litigio se funda sobre la base de un recorte abrupto de una meta más acorde a los límites de emisiones del Acuerdo de París, a través de la promulgación de una ley nacional con proyecciones de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero menos ambiciosas.

En suma, *Do-Hyun Kim Yujin et al.* representa un ejemplo de simbiosis jurídica entre los litigios de Países Bajos y Colombia. De esta manera se puede apreciar que los peticionarios toman el desarrollo discursivo utilizado en las decisiones exitosas y lo incorporan en sus demandas con el objetivo de alcanzar resultados similares.

Dada la importancia de la preservación del medio ambiente[632] y especialmente de los recursos hídricos en Corea del Sur, la autora considera altamente probable que el juzgador constitucional se incline por tutelar los derechos de los peticionarios, priorizando las defensas climáticas frente a su concepción de crecimiento económico «*faster and faster*»[633]. Este asunto aún no supera la etapa de admisibilidad.

Lho'imggin v. Her Majesty the Queen/ Canada (2020)

Las comunidades indígenas pertenecen a un grupo especialmente vulnerables frente al cambio climático, principalmente debido a la relación de estos pueblos con el entorno natural, su dependencia del territorio para sub-

632. Jeong, H., Kim, H. & Kim, H. (2020). «Optimization Procedure for Climate Change Adaptation Investment Planning: Case of Flood Disaster Prevention in Seoul». *Journal of Water Resources Planning and Management*, *146*(2). Recuperado de: https://bit.ly/3JCIkWN

633. Cho, H. S. (1999). «An Overview of Korean Environmental Law». *Environmental Law.*, *29*, 501-513.

sistir y preservar su cultura, sumado a patrones históricos de discriminación que les obliga a asumir una carga desproporcionada de efectos adversos. De allí que los litigios estratégicos representan una oportunidad para romper con formas sistemáticas de vulneración de sus derechos humanos.

A inicios de febrero de 2020 el pueblo indígena *Wet'suwet* localizado en la Columbia Británica, interpuso una demanda[634] contra Canadá. En concreto se demandó al Parlamento Nacional y a la dependencia encargada de regular la política ambiental climática. El argumento central de la querella giró sobre el hecho de que las comunidades que integran las casas *Likhts'amisyu*, estaban experimentando una seria amenaza a sus derechos a consecuencia del cambio climático ya que su interacción con el territorio se estaba viendo obstaculizada.

En este sentido, los demandantes plantearon que el Parlamento canadiense incurrió en reiteradas fallas en virtud de las insuficientes acciones legislativas y políticas creadas durante las últimas tres décadas para mitigar el impacto del fenómeno climático peligroso. De esta manera, aseguraron que el país incumpliría los compromisos internacionales asumidos, pues las acciones tomadas por Canadá no conducirían a la estabilización del volumen de emisiones entre 2030 y 2050[635].

Concretamente, el colectivo demandante hizo referencia al impacto ambiental que tiene sobre sus territorios y a nivel nacional la aprobación y puesta en marcha de proyectos de combustibles fósiles, pues de los mismos se proyecta un alto porcentaje de emisión de gases de efecto invernadero anual, durante los próximos 40 años. Para el pueblo indígena afectado en sus derechos, el nivel emisión actual es tan alto que solo medidas drásticas podrían minimizar el riesgo de padecer calamidades climáticas.

Vulneraciones generadas por el cambio climático

De la petición formulada se desprende el incumplimiento de la Sección 91 *Constitution Act,* 1867[636], por la vulneración del deber de regular las emisiones provenientes de vehículos, así como de las empresas *offshore* de combustibles fósiles ubicadas en el Ártico y en territorios del Noreste canadiense. Igualmente, dejaron en evidencia la omisión del Estado por la falta de promulgación de medidas que pudieron coadyuvar a la preservación del medio, pero no fueron adoptadas.

634. Federal Court. Lho'imggin v. Her Majesty the Queen in the Right of Canada, complaint (10 Feb. 2020). Recuperado de: https://climatecasechart.com/non-us-case/gagnon-et-al-v-her-majesty-the-queen/

635. Conferencia Internacional de Cambios a la Atmosfera (1988) CMNUCC, Protocolo de Kioto, Acuerdo de Copenhague, Acuerdo de Cancún y Acuerdo de París.

636. Donde se establece la obligación del Senado de dictar leyes para la paz, el orden y el buen gobierno de Canadá cuando no interfieran con las competencias de las provincias. Por interpretación residual corresponde al Parlamento federal

Además, los demandantes manifestaron que, a pesar del alcance de la competencia del Parlamento, este órgano del poder público continuaba aprobando leyes[637] que promovían el desarrollo de proyectos altamente emisores de gases de efecto invernadero, bloqueando cualquier posibilidad de que tales desarrollos de hidrocarburos fuesen modificados o suspendidos por la actual declaratoria de emergencia climática nacional.

En lo que respecta a la base normativa de la demanda, se señaló que el Estado incumplió el Acuerdo de París por no contribuir suficientemente a la meta de mantener la temperatura de la tierra a 1.5 grados o por debajo de 2 grados centígrados. Lo anterior en atención a que el plan de recorte de Canadá está limitado a reducir un 30 % de sus gases de efecto invernadero para 2030 en comparación con los niveles emitidos en 2005. Según los peticionarios la meta fijada por el país representa menos de una décima parte de la cuota necesaria para alcanza el objetivo del artículo 2 del Acuerdo de París.

El pueblo indígena concentró su argumentación fáctica en que los proyectos de extracción de hidrocarburos incidían directamente sobre el volumen de emisiones de gases en la región habitada por las comunidades, exacerbando los efectos del cambio climático sobre su población. De están manera, veían vulnerados sus libertades y derechos constitucionales, puesto que el cambio climático constituía una amenaza directa a su identidad cultura y subsistencia.

Los eventos climáticos puntuales sufridos en los últimos años daban cuenta de cambio radicales en la migración de especies, así como incendios, cambios generalizados en los ecosistemas terrestres y acuáticos, disminución de fuente primaria de alimentación animal, donde se incluye la disminución de la pesca de salmón. Todos estos fenómenos intensificados por la falta de adopción de medidas de mitigación por parte de las autoridades. En suma, estas alteraciones se tradujeron en daños físicos y psicológicos sobre la población indígena.

Los demandantes remarcaron el deber del legislar[638] para proteger los derechos a la vida, libertad y seguridad, principios de justicia fundamental[639] en el marco de la *public trust doctrine*, así como para dar cumplimiento a los acuerdos internacionales y las declaraciones públicas de compromiso reali-

637. Canadá cuanto con un nutrido cuerpo legislativo en materia de protección del medio ambiente entre las que se incluyen: *Canadian Environmental Assessment Act,* S.C. 1992, c. 37, *the Canadian Environmental Assessment Act, 2012,* S.C. 2012, c. 19, s. 52 y *the Impact Assessment Act,* S.C. 2019, c. 28, s. 1. Sin embargo, las mismas no contemplan la reducción del proyecto una vez el mismo se encuentra operativo.

638. Sección 91 de la Ley Constitucional de 1867 sobre el debe de legislar en la materia objeto de litigio por interpretación de la competencia residual del Parlamento Federal.

639. Sección 7 Carta Canadiense de Derechos y Libertades.

zadas por el Estado, en concordancia con la garantía de igualdad y no discriminación[640] recogidos por la Carta Canadiense de Derechos y Libertades.

Coincidencia con litigios climáticos analizados previamente

Este litigio presenta similitudes con el caso *Urgenda Foundation v. State of the Netherlands,* aunque en este caso el legitimado pasivo cambia del poder ejecutivo al parlamento, órgano bicameral que corresponde a las funciones del poder legislativo. Igualmente se alega el incumplimiento de las metas establecidas en el Acuerdo de París y la vulneración de derechos.

Quizá el aspecto más destacable de esta solicitud fue plantear el tratamiento climático desde la perspectiva del grupo vulnerable pueblos indígenas, con lo cual se requiere una aproximación diferenciada con relación a la ocupación de sus territorios en virtud del Convenio 169 OIT, del cual es parte Canadá. Además, se invocó el análisis de la diligencia debida y una argumentación muy cercana a la plasmada originalmente en el caso *Athabaskan v. Canadá*[641] ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

El caso *Lho´imggin et al.,* fue desestimado en noviembre de 2020 por la Corte Federal[642], considerando que no existían bases suficientes para adjudicar las pretensiones esgrimida por los demandantes. Primero, debido a la incompetencia del tribunal para pronunciarse sobre aspectos que pertenecían a la competencia otras ramas del gobierno central. Segundo, determinó que se trataba de una cuestión de índole política que podía tocar cuestiones morales, estratégicas, ideológicas e históricas de las otras ramas del gobierno. Tercero, ante falta de idoneidad en los remedios solicitados por los peticionarios. Cuarto, en ausencia de vínculo con violaciones específicas de la ley canadiense. Este caso se encuentra pendiente de apelación ante la Corte Federal desde octubre de 2020.

Debe subrayarse que este caso presenta importantes similitudes con el dictamen favorable que en septiembre de 2022 emitiera el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en el asunto *Daniel Billy et al c. Australia*[643]*,* donde se determinó que Australia había causado a los isleños del Estrecho de Torres (grupo indígena) un perjuicio significativo por la vulneración del deber de protección frente a la subida del nivel del mar, el aumento

640. Sección 15 Carta Canadiense de Derechos y Libertades.

641. Petition to the Inter-American Commission on Human Rights Seeking Relief from Violations of the Rights of Arctic Athabaskan Peoples Resulting from Rapid Arctic Warming and Melting Caused by Emissions of Black Carbon by Canada. En: https://climatecasechart.com/wp-content/uploads/non-us-case-documents/2013/20130423_5082_petition.pdf

642. Federal Court. Lho'imggin *et al*. v. Her Majesty the Queen in the Right of Canada, decision granting motion to strike and dismissing the case (16 Nov. 2020).

643. CCPR/C/135/D/3624/2019. *Daniel Billy et al v. Australia* (21 jul. 2022).

de la temperatura, en otros efectos climáticos que alteraban los modos y medios de vida de la comunidades[644]. Claramente, el derecho internacional se mueve hacia la creación de un umbral de protección mayor, por lo cual, de superarse las cuestiones de admisibilidad durante la apelación el caso *Lho´imggin* mantiene expectativas de éxito razonables.

Peticiones ante órganos de protección internacional: el caso Daniel Billy et al c. Australia, el caso Sacchi v. Argentina (2021) y el caso Duarte Agostinho v. Portugal (2020)

Desde el punto de vista del derecho ambiental internacional, el tema de los daños transfronterizos ha sido objeto de amplio tratamiento por parte de la doctrina[645]. Sin embargo, la consideración del cambio climático como daño ambiental sujeto a exigibilidad sigue estando en el centro del debate[646]. Por eso, no es de extrañar que la construcción de un marco teórico holístico pueda aportar a la identificación de métodos para minimizar el riesgo de daño y para determinar responsabilidad internacional.

Actualmente, los defensores ambientales continúan la incansable labor de obtener justicia climática, aunque el camino transitado no refleja aún victorias judiciales ante los órganos de protección regional de derechos humanos, si aporta un importante aprendizaje para litigaciones pendientes de decisión y futuras. De allí que las expectativas sobre la consolidación de justicia climática en el marco de un órgano jurisdiccional internacional siguen en ascenso.

---

644. Giménez, I &. Petit de Gabriel. E. (24 oct. 2022) «Cambio climático y derechos humanos: el caso de los Isleños del Estrecho de Torres», *Aquiescencia. Blog de Derecho internacional.* En: https://bit.ly/44aD5Hm.

645. Véase: Peel, J. (2015). «Unpacking the elements of a state responsibility claim for transboundary pollution». En: S. Jayakumar., T. Koh., *et al* (eds.) (pp. 51-78). *Transboundary Pollution: Evolving Issues of International Law.* Cheltenham: Elgar Publishing. Véase también: Dupuy, P. M. & Viñuales, J. (2015), *Ob. cit*. En este mismo sentido: Murphy, S. D. (1994). «Prospective liability regimes for the transboundary movement of hazardous wastes». *American Journal of International Law*, *88*(1), 24-75.; Hoffman, K. B. (1976). «State Responsibility in International Law and Transboundary Pollution Injuries». *International & Comparative Law Quarterly*, *25*(3), 509-542.

646. Boyd, D. R. (2017). «Recognizing the rights of nature: lofty rhetoric or legal revolution». *Natural Resources & Environment*, *32*(4), 13-17.; Peel, J. & Osofsky, H. M. (2015), *Ob. cit*..; Gerrard, M. & MacDougald, J. (2013). «An introduction to climate change liability litigation and a view to the future». *Connecticut Insurance Law Journal*, 20(1), 153-163.; Kysar, D. (2011). «What climate change can do about tort law». *Environmental Law*, 41 (1), 1-71. Yamin, F. & Depledge, J. (2004). *The international climate change regime: a guide to rules, institutions and procedures*. Cambridge: Cambridge University Press. Sands, P. (1998). «International environmental litigation and its future». *University of Richmond. Law Review*, *32*, 1619-1641. Solo por citar algunas de las voces más representativas en la materia.

Debe mantenerse presente que es necesario identificar uno o varios patrones procesales para guiar las peticiones de tutela. Los instrumentos sobre derechos humanos aunque no se refieren expresamente a la problemática climática, tienen la potencialidad de aplicar una interpretación enfocada en el propósito del tratado, es decir en la protección de los derechos del individuo incluyendo aquellos supuestos donde este escudo se ve vulnerado por un fenómeno ambiental complejo, con la ventaja de permitir a las potenciales víctimas exigir la tutela directa de sus derecho, en contraste con las dinámica exclusivamente estatales que se derivan de otras fórmulas internacionales[647].

La posibilidad de que las presuntas víctimas y sus representantes puedan centrar la mirada argumentativa en el objeto y propósito del tratado les permite ir más allá del texto literal de la norma, con lo cual es posible aplicar una interpretación dinámica de los instrumentos de derechos humanos en un mundo sometido a constantes cambios y ávido de nuevas formas jurídicas de protección frente al cambio climático[648].

Partiendo de la premisa de que los foros complementarios para brindar una respuesta climática alternativa son los mecanismos internacionales de derechos humanos, resulta imprescindible mencionar, los avances arrojados por la decisión del Comité de los Derechos del Niño en 2021 sobre el caso *Sacchi et al v. Argentina et al.*, el dictamen del Comité de Derechos Humanos en el asunto *Daniel Billy et al c. Australia,* así como por la litigación climática internacional presentada en el 2020 ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en el caso *Duarte Agostinho et al v. Portugal et al*. A continuación, se expone una síntesis de los elementos más destacados de estos casos, con el fin de ilustrar las propuestas de tratamiento climático en el plano internacional.

Daniel Billy et al c. Australia

La petición presentada por los Isleños del Estrecho de Torres represente un hito sin precedentes en la lucha frente al cambio climático, pues por primera vez un órgano del sistema universal emitió una respuesta contundente para frenar el mayor desafío de la humanidad. Este caso paradigmático tiene su origen en la Comunicación No. 3624/19, presentada por 13 denunciantes (7 adultos y 6 niños), pertenecientes a un grupo minoritario indígena Australiano[649].

En lo que respecta al análisis de admisibilidad, este caso superó satisfactoriamente una de las cuestiones más problemáticas en la litigación climática estratégica a nivel internacional, la falta de agotamiento de recursos internos. Un aspecto clave para tener en cuenta durante la revisión del caso es

647. Wewerinke-Singh., M. (2018), *Ob. cit*. 32-33

648. *Loc. cit.*

649. CCPR/C/135/D/3624/2019. *Daniel Billy et al v. Australia* (21 jul. 2022).

que el Estado no se consideraba obligado a proveer remedios internos para proteger derechos —afectados por el cambio climático— ante su falta de reconocimiento expreso dentro del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos[650]. Dado que en la Comunicación del grupo indígena se alegaba la vulneración de derechos humanos reconocidos en el Pacto, pero afectados por circunstancias climáticas adversas, el Comité consideró que no era posible deslindar este elemento de la cuestión preliminar. En consecuencia, el Estado no pudo evadir el análisis sobre el fondo.

Otra cuestión importante, fue la determinación de competencia debido a la materia, pues el Comité aclaró que podía conocer del asunto dado que la comunicación no buscaba la reparación por la violación de otros tratados, por el contrario, estaba referida a la interpretación de las obligaciones estatales dentro del Pacto[651]. En este sentido, señaló que la evaluación sobre las medidas de adaptación climáticas se encontraba bajo su competencia, ya que las mismas son parte de las obligaciones positivas para asegurar la protección de las personas bajo la jurisdicción australiana. Al igual que las medidas mitigación en virtud del alcance y contenido de los Art. 1 y 2 del Pacto.

Durante el análisis de fondo, aunque el Comité recordó la obligación de adoptar medidas adecuadas y suficientes para proteger la vida de los individuos frente a las amenazas ambientales, así como también reconoció expresamente que la degradación del medio ambiente compromete el disfrute tanto de este como de otros derechos. Sin embargo, se vio forzado a *desestimar* la alegación debido a la falta de identificación por parte de los peticionarios de daños concretos, así como ante la ausencia explicitada de un riesgo real, razonable y previsible a la salud, a la integridad física, a la vida (incluida vida digna) de los denunciantes[652]. Además, el Comité consideró a

650. Planteamiento en consonancia con la decisión de la Corte Suprema Australiana y con el reciente fallo de la Corte Federal en pleno, según el cual los órganos estatales estaban exentos de cumplir con la obligación de diligencia debida por la falta de regulación de daños ambientales en menores de 18 años.

651. Giménez, I &. Petit de Gabriel. E. (24 oct. 2022) Cambio climático… *Ob. cit*. «El Comité, en esta última línea y para mantener su competencia sobre la comunicación afirma que no se trata de determinar la responsabilidad del Estado —Australia, en este caso— por violación de tratados ambientales, sino la violación de determinados derechos del Pacto de los que son titulares los comunicantes con independencia de que los actos u omisiones del Estado que potencialmente generan su vulneración derivan de medidas de adaptación climáticas y las medidas de mitigación de impacto, que pueden ser exigibles conforme a otras obligaciones internacionales además de los artículos 1 y 2 del Protocolo facultativo PIDCP. Desde esta perspectiva, las normas de Derecho internacional ambiental son parámetros de interpretación —y no de control— de las obligaciones del Estado».

652. Véanse los comentarios de: Tigre. M.A. (27 Sept. 2022) «U.N. Human Rights Committee finds that Australia is violating human rights obligations towards Torres Strait Islanders for climate inaction». *Climate Law a Sabin Center blog*. En: https://blogs.law.columbia.edu/climatechange/2022/09/27/u-n-human-rights-committee-finds-that-australia-is-violating-human-rights-obligations-towards-torres-strait-islanders-for-climate-inaction/

la luz de la información disponible, que las medidas de adaptación aplicadas por Australia tampoco representaban un peligro directo al derecho a la vida.

En lo que respecta al análisis del derecho a la familia y a la vida privada, el Comité consideró el grave impacto del cambio climático sobre los medios de subsistencia, el estilo de vida tradicional y la dependencia de los denunciantes a su territorio, así como esa estrecha relación con la salud del ecosistema donde habitan[653]. A pesar de tomar en cuenta la inversión y obras generales realizadas por Australia, el Comité detectó que el Estado no había justificado la falta de implementación de medidas de contención sobre el impacto climático en la fuente de alimentos de los peticionarios, así como tampoco lo hizo sobre las ceremonias culturales que debían desarrollarse en sus territorios insulares, elementos que en su conjunto constituían parte de la vida privada, familiar y del derecho a un hogar. Es así como, el Comité declaró la vulneración por la falta de adopción de medidas positivas de adaptación para proteger el derecho enmarcado en las prácticas culturales de los isleños.

De seguida, el Comité entró a evaluar la conformidad de la conducta de Australia con respecto a la protección de minorías étnicas, esto considerando que los denunciantes pertenecían a Comunidad de los Isleños del Estrecho de Torres. El Comité nuevamente se inclinó a utilizar los estándares de protección cultural relacionado con la forma de vida de los pueblos indígenas, su conexión con el territorio y el uso de los recursos para asegurar la supervivencia cultural. De esta manera declaró la violación debido a la falta de protección del derecho de la minoría étnica, al no implementar las medidas de adaptación oportunas para proteger su habilidad de mantener el modo de vida tradicional, así como la transmisión de esta cosmovisión a sus hijos y futuras generaciones. Dado que el Comité encontró vulnerados los derechos consagrados en los artículos 17 y 27 del Pacto, consideró innecesario pronunciarse sobre la vulneración de los derechos del niño.

La decisión del Comité de Derechos Humanos resulta especialmente interesante pues está dotada de un respaldo casi unánime por parte de los miembros examinadores de la Comunicación. De hecho, las opiniones individuales[654] concurrentes que acompañan la decisión dan indicios de una mayor ambición al momento de reevaluar los estándares de cumplimiento del Estado con respecto al derecho a la vida. Sin embargo, esto no es casual pues, esta aproximación responder trabajo conjunto realizado por el sistema en el ámbito de los derechos humanos, del medio ambiente y de los pueblos

653. Feria Tinta. M. (27 Sept. 22) «Torres Strait Islanders: United Nations Human Rights Committee Delivers Ground-Breaking Decision on Climate Change Impacts on Human Rights». *Ejil: Talk!*. En: https://www.ejiltalk.org/torres-strait-islanders-united-nations-human-rights-committee-delivers-ground-breaking-decision-on-climate-change-impacts-on-human-rights/

654. Sobre la opinión disidente véase: Giménez, I &. Petit de Gabriel. E. (24 oct. 2022) Cambio climático… *Ob. cit*.

indígenas y tribales. De allí que, no puede perderse de vista la labor previa de los diferentes órganos de las Naciones Unidas. Primero, por el Consejo de Derechos Humanos a través de una extensa batería de resoluciones, entre las más recientes: el reconocimiento del derecho a un medio ambiente sano y la creación de un mandato especial sobre la promoción y la protección de los derechos humanos en el contexto del cambio climático.

Aunado a lo anterior, deben tenerse en cuenta los avances obtenidos por el Comité de Derechos del Niño, a través de la decisión desestimatoria *Sacchi et al v. Argentina et al.*, la cual aportó una extraordinaria riquesa argumentativa ante una eventual expansión de responsabilidad a la luz de conductas climáticas indebidas.

Los argumentos plasmados en este dictamen, pueden ser utilizados para propiciar el cumplimiento de derechos con contenido climático y con impacto intergeneracional así como transversal dentro del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Político. Tanto la petición como el dictamen dejan una huella en la identificación expresa de estándares de protección y cumplimiento de derechos humanos frente a las consecuencias del cambio climático. Esta decisión contribuye a la interpretación dinámica de los derechos y además, representa una extraordinaria oportunidad para revitalizar el rol de los órganos del sistema universal ante el desafiante avance de la crisis climática. Este dictamen tendrá un impacto significativo en los tribunales internacionales[655], tanto en los asuntos contenciosos ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, asi como en las solicitudes de opinión consultiva ante la Corte Internacional de Justicia y la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Sacchi v. Argentina

La comunicación *Sacchi et al v. Argentina et al*[656]*.,* fue presentada por dieciséis (16) jóvenes en 2019 ante el Comité de Derechos del Niño, mediante la activación del procedimiento especial establecido en el artículo 5 del Protocolo Opcional de la Convención de Naciones Unidas sobre Derechos del Niño, por la vulneración de las garantías de protección a la vida, a la salud, al interés superior del menor y a la cultural (este último, en aquellos casos en los cuales los peticionarios pertenecían a comunidades indígenas).

El fundamento normativo se localizó concretamente en el Artículos 6 relativo al derecho a la vida, en razón de la falta de prevención razonable del impacto tanto a nivel doméstico como trasnacional. Específicamente, frente a las olas de calor, aumento de enfermedades infecciosas, incendios en los

655. Sobre el *momentum* de la litigación climática internacional en 2023 véase: Fernández Egea. R.M & García. M. (31 Mar 2023). «La era de la judicialización del derecho internacional». *Aquiescencia. Blog de Derecho internacional.* En: https://aquiescencia.net

656. Committee on the Rights of the Children. Sacchi v. Argentina, communication (23 Sep. 2019).

bosques, inundaciones, y alteraciones drásticas de los patrones meteorológicos, fenómenos que directamente amenazan la vida de los demandantes conforme la interpretación de la Convención sobre Derechos del Niño.

Igualmente, se reclamó la vulneración del artículo 24 sobre el derecho a la salud, ya que la conducta omisiva y en otros casos insuficiente de los Estados perpetuó la crisis climática causando lesiones físicas y psíquicas, con impacto en la salud de las presuntas víctimas. Además, se incluyó el artículo 30 sobre el derecho a la cultura, ya que según los peticionarios el impacto del cambio climático comprometía las prácticas tradicionales milenarias de comunidades indígenas de Alaska, Islas Marshall y Sapmy.

Es importante destacar que las vulneraciones planteadas fueron amalgamadas por el principio y norma de procedimiento que evalúa el interés superior del niño en el contexto actual de la crisis climática global. Todo ello, conforme a los parámetros del artículo 3 de la Convención sobre los Derechos del Niño, teniendo en cuenta que su aplicación implica también el reconocimiento progresivo de derechos asociados al desarrollo.

Por otra parte, la estrategia para la determinación de las vulneraciones estuvo fundamentada en el deber de protección y cuidado de los derechos de los niños (diligencia debida), atendiendo a que estos se encuentran informados por los principios del derecho ambiental, por lo cual debían responder también a esos estándares de protección. En este orden se planteó: i) La falta de prevención razonable doméstica y extraterritorial frente a violación de los derechos humanos, ii) insuficiente cooperación internacional frente a la amenaza global, iii) la ausencia de aplicación del principio precautorio para proteger la vida ante la incertidumbre del daño, y iv) la cuestión de justicia intergeneracional.

A pesar de que la argumentación jurídica desplegada en el caso era robusta, esta no superó la etapa de admisibilidad. La comunicación fue desestimada por la falta de agotamiento de recursos internos, un remedio procesal que permite a los Estados responder a la violación en la sede interna, bajo el principio de subsidiariedad del sistema internacional.

Sin embargo, debe destacarse que el pronunciamiento del Comité[657] aunque desestimatorio, resulta alentador, pues desarrolló una extraordinaria motivación sobre la eventual extensión de responsabilidad a la luz de la conducta climática indebida de los Estados. Además, acompañó su pronunciamiento con una exposición centrada en la posibilidad de invocar la aplicación extraterritorial de la Convención. Para ello, hizo uso de la prueba de jurisdicción ambiental en un contexto de derechos humano, figura originalmente planteado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en su Opinión Consultiva 23/17.

657. CRC. Decision adopted by the Committee on the Rights of the Child under the Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on a communications procedure in respect of Communication No. 104/2019, Doc. CRC/C/88/D/104/2019. §10.7

Como se desprende del párrafo anterior, esta decisión constituye una clara evidencia sobre la fertilización cruzada[658] entre los órganos de tutela de derechos humanos, así como también dibuja una ruta para futuras litigaciones climáticas[659] donde se trate el impacto transfronterizo del fenómeno sobre individuos y colectivos. En pocas palabras, conforme al artículo 5.1 de Protocolo Opcional, cuando la afectación trasnacional se produce, se considera que los niños se encuentran bajo la jurisdicción del Estado donde se originan las emisiones[660].

Aunque es necesario demostrar el vínculo causal entre las acciones/omisiones y el impacto. La determinación de esta relación no es otra cosa que un examen de diligencia debida derivado de la obligación de prevención, debido a la previsibilidad de la amenaza frente a la abrumadora evidencia científica disponible. Además, el Comité recordó que el cambio climático, aunque es un problema de naturaleza global, no es obstáculo para esperar el cumplimiento de las obligaciones de tipo individual de los Estados[661].

Igualmente, debe destacarse que este litigio estratégico buscaba impulsar la cooperación entre los Estados a través medidas de mitigación exigibles en un marco universal[662], esto más allá de la una determinación de responsabilidad en puridad. Por otra parte, esta comunicación esperaba tener un impacto simbólico a través de una declaratoria de crisis climática para los derechos de los niños. Sin embargo, aunque su objetivo inicial no fue alcanzado, se permitió mostrar la dimensión ambiental del derecho a la libertad de expresión de este grupo especialmente vulnerable[663].

Ciertamente, la decisión *Sacchi et al v. Argentina et al.,* no representa una victoria en términos de adjudicación de responsabilidad, pero como litigio estratégico logró su cometido al proporcionar al Comité una oportunidad para pronunciarse sobre los deberes y obligaciones climática de los Estados.

---

658. En lo que respecta al diálogo trasnacional sobre derechos humanos véase: Belloso, N. (2021a). «El diálogo euro-americano mediante los "diálogos judiciales": ¿otras formas de cooperación regional para la armonización de la jurisprudencia sobre derechos humanos o algo más?» *Revista de Humanidades y Ciencias Sociales*, 8(1), 331-359.

659. Tal y como se ha probado en CCPR/C/135/D/3624/2019. *Daniel Billy et al v. Australia* (21 jul. 2022) y más recientemente en las solicitudes de opinión consultiva donde se interroga a las autoridades judiciales sobre el papel de las futuras generaciones y la protección de sus intereses en el contexto de los derechos humanos.

660. Committee on the Rights of the Children. Doc. CRC/C/88/D/104/2019. §10.7

661. Committee on the Rights of the Children. Doc. CRC/C/88/D/104/2019. §10.8 -10.10.

662. Nolan. A., (20 oct. 2021). «Children's Rights and Climate Change at the UN Committee on the Rights of the Child: Pragmatism and Principle in Sacchi v Argentina». *EJIL:Talk!*. Recuperado de: https://bit.ly/3oTKxnv

663. Parker, L., Mestre, J., *et al.* (2021). «When the Kids Put Climate Change on Trial: Youth-Focused Rights-Based Climate Litigation around the World». *Journal of Human Rights and Environment*. 13 (1). Recuperado de: https://bit.ly/3uq7mkL

Esta comunicación deja una estela que pueden y deben seguir las peticiones climáticas futuras, pues la decisión sobre la misma abordad complejas cuestiones de naturaleza procesal que representan un faro de luz para superar los filtros preliminares de comunicaciones y demandas que aspiran consolidar la protección de grupos afectados por el cambio climático peligros en sede internacional.

Duarte Agostinho v. Portugal

En lo que respecta a *Duarte Agostinho v. Portugal*[664]*,* seis (6) jóvenes litigantes portugueses (Sofía, André, Martim, Mariana, Claudia y Catalina), presentaron ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos «TEDH» una solitud de tutela contra treinta y tres (33) países[665] por la vulneración de sus derechos como consecuencia del cambio climático peligroso, fenómeno razonablemente previsible, pero ante el cual los demandados presuntamente no han adaptado medidas suficientes, en abierta contravención del CEDH[666].

El fundamento normativo de las vulneraciones se localizó en tres de los derechos base utilizados generalmente por este Tribunal para tratar asuntos ambientales. El derecho a la vida (artículo 2), en el cual se establece la obligación estatal de adoptar medidas legislativas y administrativas para suprimir sus amenazas. El derecho al respeto a la vida privada y familiar (artículo 8), según el cual es necesario adoptar medidas razonables y suficientes ante afectaciones sustanciales. Así como, la vulneración de la prohibición de discriminación por la edad (artículo 14), atendiendo a que las generaciones adultas tienen una mayor esperanza de vida en contraste con los demandaste, quienes deberán hacer frente a peores condiciones derivadas de los impactos climáticos.

Mientras que la plataforma fáctica para articular la violación se concentró en: Primero, la vulneración conjunta del derecho a la vida y a la vida privada, ya que los efectos del cambio climático continúan exponiendo a los demandantes al daño y/o riesgo de daño a la vida, la salud, la vida familiar, en

664. Véase: ECHR. Duarte Agostinho v. Portugal (2020). 3971/20 (02 Sep. 2020) Complaint Law. Recuperado de: https://climatecasechart.com/non-us-case/youth-for-climate-justice-v-austria-et-al/

665. Austria, Bélgica, Bulgaria, Chipre, República Checa, Alemania, Grecia, Dinamarca, Estonia, Finlandia, Francia, Croacia, Hungría, Irlanda, Italia, Lituania, Luxemburgo, Letonia, Malta, Países Bajos, Polonia, Portugal, Rumanía, República Eslovaca , Eslovenia, España, Suecia, Noruega, Rusia, Suiza, Turquía, Ucrania y Reino Unido.

666. Sobre la litigación climática ante el TEDH véase: Keller, H. & Heri, C. (2022) «The Future is Now: Climate Cases Before the ECtHR». *Nordic Journal of Human Rights*. Recuperado de: https://bit.ly/3sOZHMV. Véase igualmente: Keller, H. & Pershing, A. (2021). «Climate Change in Court: Overcoming Procedural Hurdles in Transboundary Environmental Cases», *European Convention on Human Rights Law Review*, *3*(1), 23-46.

una escala temporal presente y futura. Los demandantes alegaron impactos directos como el riesgo de padecer problemas de salud debido a los incendios forestales, alergias, problemas de sueños, dificultades respiratorias y altas temperaturas durante la estación de calor[667].

Por otra parte, los jóvenes demandantes solicitaron la evaluación del riesgo conforme a los parámetros del principio precautorio y del principio de integridad generacional articulando la interpretación con el artículo 32 de la Convención de Derecho del Niño, ya que precisamente conforman una de la categoría especialmente vulnerable frente al fenómeno climático peligros.

Igualmente, es interesante resaltar que la argumentación de los demandantes asume la vulneración a partir de la debida diligencia de los Estados y no desde el establecimiento de una relación física de causalidad directa frente del daño. En este caso se plantea de la misma manera en que ha sido formulado en el litigio *Urgenda*[668], evidenciando el impacto e influencia de los avances conquistados en foros locales y su trasposición a los internacionales.

Otro elemento, que merece especial atención es el planteamiento de la cuestión de la extraterritorialidad de la aplicación de un instrumento de derecho humanos a un problema de raíz ambiental. Para ello los demandantes alegaron que los actos y omisiones de los Estados causan efectos fuera de su territorio, con lo cual están sujetos a la responsabilidad internacional derivada esa conducta. Las principales razones expuestas para hacer exigible el cumplimiento de los derechos ante el tribunal regional pueden sintetizarse en lo siguiente:

- El marco normativo climático de los Estados demandados continúa permitiendo la liberación de gases de efecto invernadero que contribuyen al problema.
- Los Estados tienen el deber de concientizar el impacto del cambio climático sobre las personas.
- El impacto del cambio climático se percibe tanto dentro como fuera de la jurisdicción de estos Estados.

---

667. ECHR. 39371/20 Duarte Agostinho v. Portugal *et al*, Statement Request No. (13 nov. 2020). *«The applicants assert that the forest fires which Portugal has experienced each year for a number of years, and particularly since 2017, are the direct result of this global warming. The applicants allege being at risk of contracting health problems owing to these fires and having already experienced, following or during the forest fires, trouble sleeping, allergies and breathing difficulties all exacerbated by the very high temperatures during the hot season. […]The fifth and sixth applicants highlight that climate change causes very powerful storms in winter and assert that their home, located in Lisbon, is very close to the sea and potentially in danger of suffering the ravages of such storms».*

668. Urgenda Foundation v. The Netherlands case (Véase en la sección 1.2 de este Capítulo)

- Los Estados demandados tienen el control sobre el territorio y los recursos, mientras son usados para emitir.
- Los Estados explotan, exportan e importan combustibles fósiles cuya quema es la principal causa del calentamiento global.
- Las compañías domiciliadas en sus territorios tienen operaciones en el exterior, y sus actividades contribuyen al cambio climático.
- Todos los Estados son parte del régimen del clima y por ende tienen el deber de prevención del daño, requiriendo acciones para mitigar y alcanzar la meta de cumplimiento del Acuerdo de París.
- Los demandados se encuentran bajo el ámbito de protección de la CEDH.

Aunque este caso sigue pendiente de decisión, durante su *iter* procesal se ha avanzado en cuanto a la intervención de terceros, entre ellos debe destacarse la participación de la Comisión Europea de Derechos Humanos[669], quien introdujo argumentos jurídicos que favorecen la petición de los demandantes, igualmente, la Comisión exaltó la política climática de la Unión. La última actualización del caso se produjo el 27 de septiembre de 2023 con las audiencias ante la Gran Sala. Existen grandes expectativas sobre las resultas de este juicio, sin embargo, deberán superarse primero los complejos filtros de admisibilidad[670], así como demostrar el mérito de las vulneraciones esgrimidas.

Los tres casos anteriormente expuestos aportan significativos progresos para sumar a cuestiones preliminares y de mérito, todas estas fundamentales para el éxito de la judicialización climática en un futuro cercano. Es claro que la experiencia jurisprudencial de los órganos de protección sobre vulneraciones en diferentes contextos ambientales[671] posibilitan una interpretación evolutiva atendiendo a una extensa gama de derecho suscepti-

669. Council of Europe Commissioner for Human Rights. ECHR No. 39371/20 Duarte Agostinho v. Portugal. Third party intervention (5 May. 2021).

670. Cabe destacar que el tribunal ya declaró inadmisible los casos: *Humane Being and Others v. the United Kingdom* (no. 36959/22); *Plan B. Earth and Others v. the United Kingdom* (no. 35057/22). Mientras que siguen pendientes de decisión: *Verein Klimaseniorinnen Schweiz and Others v. Switzerland* (no.53600/20); *Müllner v. Austria* (no. 18859/21); *Carême v. France* (no. 7189/21); *Greenpeace Nordic and Others v. Norway* (no. 34068/21); *The Norwegian Grandparents' Climate Campaign and Others v. Norway* (no. 19026/21); *Engels v. Germany* (no. 46906/22).

671. Para ilustrar el punto véase: CRC. Draft General Comment No. 26 (2023) on Children's Rights and the Environment with a special Focus on Climate Change. Recuperado de: https://bit.ly/3uAo18E; OHCHR. General Comment No. 24 on State Obligations under the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights in the Context of Business Activities. E/C.12/GC/24 (23 Jun. 2017).; OHCHR. General Comment No. 15 (2003) on the Right to Water E/C. 12/ 2002/11. (20 Jan 2003). Véase igualmente: CtIDH. OC/23/17.

bles de vulneración climática[672]. Asimismo, *Daniel, Duarte* y *Sacchi,* dejan en evidencia que los órganos de protección sobre derechos humanos tienen la potencialidad de abordar con mayor efectividad la compleja cuestión de la exigibilidad de obligaciones climáticas[673].

Los litigios abordados a lo largo de este capítulo son sinónimo de progreso y de la construcción de una vía de acceso judicial para alcanzar justicia material climática, concretamente justicia climática intergeneracional. Los mismos, representan la oportunidad para los Estados de dar respuesta en sede interna a las violaciones ocurridas dentro de su jurisdicción y a la vez permite a los órganos de protección internacional brindar iluminación sobre la forma en la cual deben interpretarse las obligaciones de garantía y protección frente a un peligro climático concreto. De allí que no se puede perder de vista «la relevancia de la función judicial como fuente del Derecho y sus repercusiones para la garantía de la seguridad jurídica»[674].

Es por lo que, el análisis discursivo de las peticiones anteriores, así como de los pronunciamientos judiciales que han llegado a término permiten identificar la forma en la cual los jueces están seleccionando las reglas de derecho aplicable, la utilización de las máximas de presunción racional para la valoración probatoria del complejo fenómeno cambio climático, la coherencia y fundamentación de los argumentos jurídicos para responder a la problemática[675].

Debe reconocerse que las decisiones adjudicadas favorablemente en jurisdicciones nacionales se encuentran circunscritas a un ámbito territorial reducido, por lo cual, aunque inciden en la primavera climática actual, no tienen la capacidad suficiente de impactar en la escala colectiva requerida por un problema de la magnitud del cambio climático. Por lo tanto, la experiencia que brindan los litigios nacionales y aquellas demandas en desarrollo, son una fuente de inspiración argumentativa que permite a los movimientos socio ambientales desarrollar un nuevo discurso de justicia climática.

Debe tenerse en cuenta que para generar una verdadera transformación de la narrativa en un contexto de derechos humanos ha sido necesario trasladar este tipo de reclamaciones a foros internacionales con un impacto exten-

672. Knox, J. (2009), *Ob. cit*. 170.

673. Wewerinke-Singh., M. (2018), *Ob. cit*. 22-34. En el mismo sentido se pronuncia: Ramírez, J. (2021), *Ob. cit*.

674. Pérez-Luño, A. E. (2014). «El juez en el estado constitucional». En: de Julios-Campuzano. *El horizonte constitucional: Ciencia jurídica, Derechos Humanos y Constitucionalismo Cosmopolita* (p. 113). Madrid. DIKYNSON. Además, «constituye un capítulo insoslayable de las trayectorias más recientes de la cultura jurídica».

675. Véase: Peel, J. & Osofsky, H. M. (2015), *Ob. cit*. Las autoras analizaron los efectos directos en indirectos de las litigaciones climáticas en los Estados Unidos y Australia, así como la influencia de estos casos en las regulaciones gubernamentales y el comportamiento de las empresas, impulsando un cambio social con respecto al problema.

dido bien a nivel regional[676] o universal[677]. Resulta fundamental utilizar estas plataformas con capacidad de filtrar sus decisiones para influir en un mayor número de Estados, esto con el fin de propiciar la modificación de los objetivos autoimpuesto hacia metas climáticas más ambiciosas que aseguren la protección de los grupos más vulnerables a la amenaza climática.

En este libro se confirma, como de hecho se ha planteado entre 2022 y 2023 que los foros internacionales viables, en principio, resultarían ser la Corte Interamericana de Derechos Humanos[678], el Tribunal Europeo de Derechos Humanos[679], el Tribunal Africano de Derechos Humanos y de los Pueblos[680] y las vías ofrecidas por los procedimientos especiales de protección en el sistema universal.

En este sentido, el activismo judicial[681], la visualización regional y global de las problemáticas asociadas al cambio climático son una forma de coadyuvar

676. Solicitud de opinión consultiva realizada por la República de Chile y la República Colombia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre emergencia climática y derechos humanos del 9 de enero de 2023. Asimismo, véanse los casos contenciosos ante el TEDH: *Duarte Agostinho and Others v. Portugal and 32 Others* (no. 39371/20); *Uricchio v. Italy and 31 other States* (application no. 14615/21) and *De Conto v. Italy and 32 other States* (no. 14620/21); *Soubeste and 4 other applications v. Austria and 11 other States* (nos. 31925/22, 31932/22, 31938/22, 31943/22, and 31947/22); *Verein Klimaseniorinnen Schweiz and Others v. Switzerland* (no.53600/20); *Müllner v. Austria* (no. 18859/21); *Carême v. France* (no. 7189/21); *Greenpeace Nordic and Others v. Norway* (no. 34068/21); *The Norwegian Grandparents' Climate Campaign and Others v. Norway* (no. 19026/21); *Engels v. Germany* (no. 46906/22).

677. Véanse: ITLOS, Case n. 31, *Request for an Advisory Opinion submitted by the Commission of Small Island States on Climate Change and International Law (Request for Advisory Opinion submitted to the Tribunal)*, introduced on 12 December 2022.; A/RES/77/276, de 4 de abril de 2023, *Solicitud de una opinión consultiva a la Corte Internacional de Justicia sobre las obligaciones de los Estados con respecto al cambio climático*.

678. En función contenciosa y consultiva. Véase la Solicitud de opinión consultiva realizada por la República de Chile y la República Colombia.

679. Gross. T. (2021). «Climate change and duties to protect with regard to fundamental rights». En: W. Kahl & M. Weller (eds.) *Climate change litigation* (p. 87-88). Munchen: Beck | Hart | Somon. En el mismo sentido véase: Payandeh. (2021), *Ob. cit*. 67-68. Este último autor agrega el rol del Tribunal de Justicia de la Unión Europa destacando que en sus sentencias se ha caracterizado por ser favorable al medio ambiente al mismo tiempo que balancea los diferentes intereses económicos y ambientales.

680. Payandeh (2021), *Ob. cit*. 68. Debe destacarse que la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos examina en su proyecto de informe las obligaciones de los Estados en relación con el cambio climático y aclara el papel de la Comisión en el sistema africano. Igualmente, debe tomarse nota del African Commission on Human and People's Rights. Zero Draft In relation to the Study on the Impact of the Climate Change on Human and Peoples' Rights in Africa. Recuperado de: https://bit.ly/3u4ACRq.

681. García, F. J. (2023). «Cambio climático antropogénico, litigación climática y activismo judicial: hacia un consenso emergente de protección de derechos humanos y generaciones futuras respecto a un medio ambiente sano y sostenible». *Revista Electrónica de Estudios Internacionales*, (46), 7-61.

a los Estados, así como de fomentar la cooperación cuando estos no logren alcanzar el estándar de mitigación y adaptación climática mínimo para asegurar las metas fijadas en el Acuerdo de París. Sin la cooperación integrada, la estabilización del clima será imposible de alcanzar[682].

Enfrentar el cambio climático requiere en primer lugar de la voluntad y compromiso de todos los órganos del Estado, tarea que se materializa a través del refuerzo de las políticas climáticas nacionales desde abajo hacia arriba *(button up)*. Esta labor debe ir acompañada por mecanismos *vinculantes* que entren en funcionamiento ante el cumplimiento defectuoso de los compromisos iniciales, si estos resultan en el menoscabo de los derechos humanos. Es decir, por una aproximación de arriba hacia abajo *(top down)*, que pueda ser invocada en el marco del principio de subsidiariedad.

De allí la importancia de identificar una guía internacional de protección climática con mecanismos de exigibilidad tangibles, principalmente a través del monitoreo en el cumplimiento de las obligaciones de protección y de garantía de los derechos humanos reconocidos por tratados regionales y universales en la materia. Esto atendiendo a la necesidad de adoptar una respuesta al menos temporal basada en un régimen subsidiario que permite asegurar en la medida de lo posible la indemnidad del individuo, grupos y del medio donde estos se desenvuelven.

Este libro propone seguir entre las múltiples alternativas disponibles, el acceso a la justicia climática basado en los derechos humanos reconocidos por la Convención Americana[683], como método de reorientación de conductas estatales. Cabe destacar que el Sistema Interamericano ha sido pionero en recibir peticiones de tutela sobre este tema a través de los innovadores planteamientos[684]. De allí que los capítulos siguientes están dedicados al rol potencial de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en un contexto de afectación climática peligrosa.

---

682. Según la teoría del juego del célebre matemático John Nash explicada a través del dilema del prisionero se necesita la aplicación de la cooperación de integrada entre los actores. Si esto se extrapola a nivel nacional la cooperación entre los poderes públicos nos acercaría a los objetivos del acuerdo de París. De esta manera, nos da mayores posibilidades de éxito como sociedad frente a las consecuencias climáticas. Véase: Irwin, T. (2009). «Implications for climate-change policy of research on cooperation in social dilemmas». En: World Bank (ed.) *Policy Research Working Paper*. World Bank. Recuperado de: https://bit.ly/3wwHne5.

683. Aproximación que fue expresamente resaltada por el órgano cuasijurisdiccional del Sistema, véase: CIDH. Res. 3/21 (dic. 31, 2021). «Emergencia climática alcance de las obligaciones interamericanas en materia de derechos humanos», p.9.

684. Esto en referencia a la solicitud de opinión consultiva en curso (2023), así como a las peticiones presentadas por los representantes del *Pueblo Inuit* frente al comportamiento de los Estados Unidos en el 2005, así como del *Pueblo Athabaskan* contra Canadá en el año 2013, y la más reciente petición de 2021 presentada por *Los Niños y Niñas del Distrito Residencial Cité Soleil* contra Haití, casos sobre los cuales se volverá en el Capítulo III de este libro al analizar el *locus standi* climático del grupo vulnerable pueblos indígenas y de las futuras generaciones en la región americana.

SEGUNDA PARTE

ASPECTOS PROCESALES DEL SISTEMA INTERAMERICANO DE DERECHOS HUMANOS EN EL MARCO DE LA RESPONSABILIDAD CLIMÁTICA

CAPÍTULO TERCERO

EL SISTEMA INTERAMERICANO DE DERECHOS HUMANOS Y LAS LITIGACIONES CLIMÁTICAS

A lo largo de este capítulo se analiza la potencialidad de las litigaciones climáticas ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Esta sección del libro se divide en dos Partes. La primera, estudia la arquitectura de los órganos de protección regional, la Comisión, la Corte y el marco normativo que acompaña su función de garante. La segunda, evalúa el impacto de las peticiones climáticas presentadas por los pueblos *Inuit*, *Athabaska* y la solicitud de tutela interpuesta por los niños de *Cité Solie*. Asimismo, la segunda parte es complementada por la contribución de la Opinión Consultiva 23/17 sobre medio ambiente en la promoción de las obligaciones ambientales de los Estados para proteger los derechos humanos, como antesala al examen preliminar de solicitud de opinión consultiva de 2023 sobre la emergencia climática y derechos humanos.

Estructura organizativa del sistema interamericano

El tema procesal climático frente a la Corte Interamericana de Derechos Humanos («CtIDH»/«Corte») requiere de un breve análisis de la composición y estructura del Sistema Interamericano[685].Por una parte, se analizará el funcionamiento de la Comisión («CIDH» /«Comisión»), cuya función cuasi-jurisdiccional le permite filtrar las peticiones climáticas judicializables[686], y por la otra, la CtIDH, como único interprete autorizado de la CADH, quien tiene la competencia regional para determinar si efectivamente el cambio climático viola los derechos humanos reconocidos en el tratado.

685. Sobre la perspectiva histórica del Sistema Interamericano explicado en tres etapas véase: Grossman, C. (2020). «Promoting Social Change through Treaties and Customary International Law: the Experience of the Inter-American Human Rights System». En: D. Bradlow & D. Hunter (eds,) *Advocating Social Change through International Law* (pp. 33-54). Leiden: Brill | Nijhoff.

686. CtIDH. Viviana Gallardo y otras v. Costa Rica, decisión del (13 nov. 1981) § 21.

Rol de la comisión y la corte interamericana en el monitoreo y supervisión de los derechos reconocidos en la Convención

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos

La actual CIDH nace del mandato otorgado por la Quinta Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores de 1959[687], cuya acta de reunión final determinó que el Sistema Interamericano debía establecer una Comisión para velar por la promoción y respeto de los derechos humanos[688], mientras se iniciaban los trabajos preparatorios de la futura CADH[689]. El rol de la CIDH se vio reforzado en 1960 por el Consejo de la Organización de Estados Americanos «OEA», al aprobarse su Estatuto, según el cual esta entidad autónoma promovería los derechos reconocidos por la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre «DADDH».

Puede decirse, que el Sistema Interamericano se fue construyendo por bloques, entre lo normativo y lo institucional[690]. La primera etapa a partir de la DADDH, mientras que la segunda se consolidó a través de la creación de la CIDH[691]. El 3 de octubre de 1960 fue instalado formalmente el primer órgano de derechos humanos en la región, la Comisión, cuya sede se encuentra en la ciudad de Washington D.C., desde donde desempeña las extensas facultades que le fueron conferidas[692].

Sus primeras funciones estaban limitadas al diálogo y monitoreo de derechos humanos[693]. No obstante, el rol de la CIDH ha ido evolucionando con el mismos Sistema, de hecho, se ha visto reforzado en sus competencias gracias a la reforma de la Carta de la Organización de los Estados America-

687. OEA. Acta Final de la V Reunión de Consulta de Ministros de Asuntos Exteriores. Doc. OEA Res. VIII (12-18 ago. 1959). Recuperado de: https://www.oas.org/es/cidh/mandato/Basicos/Acta-final-Quinta-reunion-Chile-1959.pdf

688. Sobre el origen del Sistema Interamericano véase: Goldman, R. (2009) «History and Action: The Inter-American human rights system and the role of the Inter-American Commission on Human Rights», *Human Rights Quarterly*, 31(1), 856-886.

689. Sobre la CIDH véase: Faúndez, H. (2004), *Ob. cit*., 142-166. Igualmente: CtIDH, CIDH & OEA. (2018) *Documentos básicos en materia de derechos humanos en el Sistema Interamericano.* Ciudad de México. CIDH. (pp. 15-18).

690. Salmón, E. (2019). *Introducción al Sistema Interamericano de derechos humanos*. Lima: FEPUCP. (p. Viii).

691. *Loc. cit.* «[…] su desarrollo se asemeja más al Sistema Universal de Naciones Unidas que al Sistema Europeo, donde el diseño normativo e institucional fue establecido desde el primer momento en el Convenio Europeo».

692. Artículo 41 CADH. Véase también: OEA. Estatuto de la Comisión Interamericana. Doc. OEA Res. 447, oct. 1979. [Estatuto de la CIDH] artículo 18.

693. Sobre este tema véase: Salmón, E. (2019), *ob. cit*.

nos en 1967[694] y a la sanción del Reglamento de la CIDH en 1980[695]. De esta manera, la Comisión pasó de ser un promotor de derechos a convertirse en agente de cambio regional con competencias «duales»[696] expandidas, que abarcan tanto las facultades políticas de promoción, como las de protección de derechos humanos frente a los treinta y cinco (35) Estados miembros de la OEA, brindando un mayor alcance a sus informes, aunque los mismos no son de carácter vinculante[697].

La Comisión está compuesta por siete miembros, elegidos a título personal[698], quienes son personas de alta autoridad moral y de reconocida versación en materia de derechos humanos[699]. La selección de los integrantes de la CIDH se realiza a través de la Asamblea General de la OEA a partir de una lista propuesta por los Estados que la integran[700]. La CIDH una vez constituida representa a todos los Estados de la Organización. En consecuencia, tiene el deber velar por la protección y aseguramiento tanto del núcleo duro de los derechos humanos, como por la vigencia de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales «DESCA»[701].

Es importante tener en cuenta que la CIDH ha creado una serie de Relatorías y grupos de trabajo con miras a mejorar el cumplimiento de sus funciones[702]. Precisamente, con el fin de dar respuesta a las cada vez más crecientes demandas sociales relacionadas con la implementación de los DESCA, en 2014 se creó una Relatoría especial para atender estos derechos, llamada

694. Sobre la historia de la Comisión véase: Morales, F. G. (2009). «La Comisión Interamericana de Derechos Humanos: antecedentes, funciones y otros aspectos». *Anuario de Derechos Humanos*, (5), 35. Cabe destacar que la Carta de la OEA ha sido modificada sucesivamente en los años 1985.1992 y 1993.

695. Reglamento posteriormente modificado en el año 2013. Sobre los aspectos históricos de este órgano del sistema véase: OEA (2022) Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Recuperado el 30 de noviembre de 2023: https://bit.ly/3r0cwTp.

696. Faúndez, H. (2004), *Ob. cit*. 151-153. El autor a partir de un concienzudo análisis histórico normativo le atribuye funciones políticas, de trámite, cuasi-jurisdiccionales y asesoras a la CIDH.

697. Ciertas atribuciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. CtIDH. OC 13/93, (Ser. A) No. 13, § 53 (16 jul. 1993).

698. Por lo cual en ningún caso representan al Estado del cual son nacionales.

699. Artículo CADH, artículo 2 Estatuto CIDH. Véase igualmente: CIDH. Reglamento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Modificado 147 Ses. (2. Sept. 11). En vigor (1 ago. 2013) [Reglamento CIDH] artículo 1.3 Reglamento CIDH. Recuperado de: https://bit.ly/3IMMTvA

700. Artículo 36 CADH y artículo 3 Estatuto de CIDH.

701. Tarea especialmente encomendada por el artículo 42 CADH a través del reenvío realizado por la Carta OEA, instrumento que incorpora los derechos económicos al Sistema Interamericano y que tras su interpretación evolutiva incluye los derechos ambientales.

702. Artículo 15 Reglamento de la CIDH.

la «REDESCA»[703]. De esta manera la Comisión ha mostrado su especial compromiso en la protección de los derechos ambientales[704], llegando a centrar su mirada en las implicaciones del cambio climático en los derechos humanos[705]. Para esta importante labor, la CIDH ha elegido a un Relator Especial e independiente[706].

A pesar del largo camino que aún queda por recorrer con respecto al tratamiento de cuestiones medioambientales en el seno de la CIDH, se puede apreciar la creciente estimulación brindada por este órgano cuasi-jurisdiccional[707], para asegurar la vigencia de los derechos cargados con un importante componente climático[708]. Hasta el momento, el mayor aporte en la materia

703. OEA. (2022) CIDH, «Relatoría sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales, Origen». Recuperado el 30 de noviembre de 2023 de: https://bit.ly/3Lk5eld

704. CIDH|REDESCA. (2019). *Empresas y Derechos Humanos: Estándares Interamericanos*. Doc. OEA /Ser.L/V/II. | CIDH/ REDESCA INFO 1/19. 1 nov. 2019. § 233-253. Recuperado de: https://bit.ly/3ABPtAx.Véanse igualmente: REDESCA. Informes Anuales 2015, 2017. 2018. Recuperado el 30 de noviembre de 2023 de: https://bit.ly/3uPisQa.

705. Véase: CIDH. «Emergencia climática alcance de las obligaciones interamericanas en materia de derechos humanos», CIDH Doc. 3/21 (31 dic. 2021), p. 7. CIDH. (2020). Informe Anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 2019. III Informe Anual de la REDESCA. Doc. 5 OEA/Ser.L/V/II, p. 204-206. Recuperado de: https://bit.ly/3DvFLCz. Además, es de vital importancia tomar en consideración: CIDH, Audiencia «Cambio climático y DESCA de mujeres, NNA, pueblos indígenas y comunidades rurales». 173 período de Sesiones. 25 sep. 2019; y CIDH. Audiencia sobre cambio climático, acceso al agua y derechos humanos. 141 período de Sesiones. 28 mar. 2011 Con relación el impacto de las audiencias temáticas, véase: Salvioli, F. (2020). *El Sistema Interamericano de protección de los derechos humanos. Instrumentos, órganos, procedimientos y jurisprudencia*. Querétaro: Instituto de Estudios Constitucionales del Estado de Querétaro., p. 202. Quien señala que: «El mecanismo de audiencia temática es una vía valiosa para lograr la atención pública y de la propia Comisión sobre algún aspecto concreto de derechos humanos en uno o más Estados […] La realización de una audiencia temática representa un procedimiento de gran utilidad para quienes tienen interés en efectuar acciones de litigio estratégico».

706. El relator en funciones desde el 30 de noviembre de 2023 es el sr. Javier Palummo Lantes. Debe recordarse que, a pesar de los avances ambientales de este órgano del Sistema, debe tomarse en consideración que la REDESCA funciona con apoyo financiero de países mayoritariamente europeos.

707. Así la califica Faúndez, H. (2004). *El Sistema Interamericano de protección de los derechos humanos. Aspectos institucionales y procesales*. IIDH. 3ra. Edi. p. 151. Debido a «que está sometida a procedimientos pre-establecidos, que suponen un examen de la situación planteada por el peticionario, confiriendo las mismas oportunidades procesales tanto al denunciante como al Estados denunciado y que requieren de un pronunciamiento sobre la base del Derecho» y que posteriormente participa ante la Corte.

708. Entre ellos, la Relatoría contemplaba la cuestión del cambio climático como temática de impacto emergente sobre los derechos humanos desde 2017. Véase: CIDH. OEA/Ser.L/V/II.161 Doc. 27/17. 20 mar. 2017. CIDH. Plan Estratégico 2017-2021. Recuperado el 30 de noviembre de 2023 de: https://bit.ly/3tgiZeo. Seguido por la Agenda Estratégica 2021-2023 de la REDESCA.

lo constituye la Resolución 3/21 de diciembre de 2021 mediante la cual la CIDH en respaldo de la REDESCA reconoció el cambio climático como una de las amenazar de mayor impacto para los derechos humanos[709], además de identificar y sistematizar una serie de obligaciones especiales en cabeza de los Estados con el fin de exhortarles a la creación de políticas públicas con un enfoque basado en derechos humanos[710].

En este punto, la CIDH exige un enfoque de derechos humanos en las políticas, planes y normas climáticas adoptadas por los países interamericanos, a la par de identificar por lo menos quince (15) deberes regionales en materia de cambio climático, así como otras obligaciones especiales asociadas a la protección de grupos vulnerables, donde los pueblos indígenas cobran un protagonismo especial[711]. Ante este panorama, es posible tener una apreciación positiva hacia las eventuales peticiones climáticas que se presenten ante la Comisión, aunque, no puede perderse de vista su carácter de órgano político.

Así las cosas, la CIDH funciona como un escalón previo para determinarla viabilidad de una posible judicialización, para lo cual las peticiones deben superar unos mínimos de admisibilidad. Durante esta fase inicial del procedimiento, cualquier persona, grupo de personas o entidad no gubernamental[712], estará legitimada para presentar en nombre propio o de tercero peticiones[713]. Los Estados pueden presentar comunicaciones alegando que otro Estado ha incurrido en violaciones de derechos humanos[714]. Por otra parte, la CIDH siempre conserva la facultad de estudiar una situación a *motu pro-*

709. CIDH. «Emergencia climática alcance de las obligaciones interamericanas en materia de derechos humanos», CIDH Doc. 3/21 (31 dic. 2021).

710. CIDH. «Emergencia climática alcance de las obligaciones interamericanas en materia de derechos humanos», CIDH Doc. 3/21 (31 dic. 2021). §9. «Los Estados deben cumplir sus obligaciones internacionales de proteger y garantizar el disfrute y ejercicio de los derechos humanos de todas las personas que, a consecuencia de impactos ambientales, incluyendo aquellos atribuibles al cambio climático, se vean significativamente afectadas tanto individual como colectivamente».

711. *Loc. cit.* Además, la CIDH, dedica parte de su resolución a desarrollar los derechos de acceso a la información, participación pública y al acceso a la justicia climática y ambiental. Otro aspecto de vital importancia es la atención brindada a la extraterritorialidad y a la responsabilidad de las empresas en un contexto climático.

712. Siempre que este reconocida legalmente por algún Estado de la OEA.

713. Artículo 44 CADH y artículo 23 del Reglamento CIDH relativo a la legitimación para presentar peticiones ante la Comisión.

714. Artículo 45 CADH sobre sometimiento a la CIDH y legitimación para presentar comunicaciones. Véase: Salvioli, F. (2020), *ob. cit*. 210-211. El autor destaca que esta vía ha sido activa solo en dos ocasiones: la primera por Nicaragua frente a Costa Rica el 06/02/2006 por la situación de los migrantes nicaragüenses. La segunda, Ecuador frente a Colombia en el año 2009 a razón del operativo militar Fenix.

prio[715] y de adoptar por si o a iniciativa de parte medidas cautelares durante cualquier etapa del procedimiento[716].

Las peticiones o comunicaciones deben ser presentadas ante la Secretaría de la CIDH, quien efectúa una revisión inicial de las misma[717]. Todas las solicitudes deben superar los requisitos mínimos establecidos en el artículo 28 del Reglamento de la CIDH y ser tramitadas conforme a los parámetros fijados por el artículo 29 del mismo instrumento. Al igual que la CtIDH, la Comisión puede establecer su competencia basada en la concurrencia de los supuestos de *ratione personae*[718] respecto del denunciado, el denunciante y la víctima, *ratione materiae*[719]*, rationes locit*[720] *y ratione temporis* sobre los hechos ocurridos durante la vigencia del tratado presuntamente vulnerado[721].

Se da inicio al procedimiento de admisibilidad, a partir del momento en el cual se transmite al Estado los fragmentos pertinentes de la solicitud y se le otorga un plazo de dos (2) meses para dar contestación[722]; aunque en caso de gravedad o urgencia se puede instar al Estado a agilizar su respuesta[723]. Durante esta etapa, la CIDH tiene la difícil tarea de verificar el efectivo agotamiento de los remedios internos existentes dentro del Estado[724], esto con el fin de asegurar el respeto del principio de subsidiariedad de Sistema Interamericano[725]. Los Estados siempre deben tener la posibilidad de resolver con sus propios medios procesales las controversias suscitadas dentro de su

715. Artículo 24 Reglamento CIDH relativo a la tramitación a *motu proprio*

716. Artículo 25 Reglamento CIDH.

717. Artículo 26 Reglamento CIDH sobre la revisión inicial. De no cumplirse los requisitos puede pedir al peticionario su subsanación.

718. Artículo 1.2 y 44 CADH, artículo 23 Reglamento CIDH.

719. Artículo 33.a CADH, artículo 1.2 del Estatuto CIDH y 23 del Reglamente CIDH.

720. Artículo 1.1 CADH

721. Sobre el establecimiento de competencia de la CIDH véase: Faúndez, H. (2004), *Ob. cit*. 240-268.

722. En caso de existir contestación se presumirán como verdaderos los hechos presentados en la petición según el artículo 38 Reglamento CIDH.

723. Artículo 30 Reglamento CIDH relativo al procedimiento de admisibilidad.

724. 46.1.a CADH y 31.1 Reglamento de la CIDH. Igualmente, véase: OEA|CIDH. *Digesto de decisiones sobre admisibilidad y competencia de la Comisión interamericana de Derechos Humanos*. Doc. OEA/Ser.L/V/II.175. 4 mar. 2020, p. 13. Recuperado de: https://bit.ly/3uu4Euq. La doctrina de la Comisión señala que: «el análisis sobre los requisitos previstos en los artículos 46 y 47 de la Convención debe hacerse a la luz de la situación vigente al momento en el que se pronuncia sobre la admisibilidad o inadmisibilidad del reclamo».

725. Sobre la subsidiariedad véase: Contesse, J. (2016). «Contestation and Deference in the Inter-American Human Rights System». *Law and Contemporary Problems*, 79(2), 123-145.

jurisdicción[726], oportunidad que se extiende hasta que la CIDH decida formalmente sobre la admisibilidad de la petición[727].

Ahora bien, esta condición de inadmisibilidad encuentra su excepción si los recursos internos existentes son inadecuados e inefectivos[728] haciendo inútil su agotamiento. Además, la propia CADH reconoce que en ausencia de legislación interna, ante la falta del debido proceso para tutelar el derecho presuntamente conculcado[729], frente a la imposibilidad de acceder a estos recursos[730] o si los mismos no son decididos en un plazo de tiempo poco razonable[731], mal puede dotarse de efectividad a mecanismos procesales nacionales, los cuales son en realidad letra muerta en el sistema interno del Estado denunciado, perpetuando el ciclo de impunidad.

Otro elemento sujeto a al examen preliminar es la duplicidad de procedimientos: litispendencia[732] y *res iudicata*[733]*.* En estos casos se requiere que la situación planteada no esté pendiente de otro proceso internacional[734] y que no sea la reproducción de una petición ya revisada por la CIDH u otro organismo internacional[735]. Para que prosperen estas causales de inadmisibilidad debe darse no solo la identidad de partes, de objeto y base legal. Además, el organismo revisor anterior o en paralelo, debe contar con competencia para adoptar decisiones y medidas efectivas sobre los hechos expuestos en la petición presentada ante la CIDH[736]. Es decir, las meras revisiones generales son insuficientes, pues de no tener efectos vinculantes, restitutorios e indem-

726. Aunque en principio ni la CIDH, ni la CtIDH pueden funcionar como una cuarta instancia. Se habla de una doctrina excepcional de la cuarta instancia cuando la CIDH ha admitido a trámite casos de sentencias nacionales que vulneran los derechos reconocidos en CADH donde se ha declarado competente. Véase: OEA|CIDH. *Digesto de decisiones sobre admisibilidad y competencia de la Comisión interamericana de Derechos Humanos*. Doc. OEA 20. OEA/Ser.L/V/II.175. 4 mar. 2020, p. 63.

727. CIDH, Informe No. 4/15, Petición582-01. Admisibilidad. Raúl Rolando Romero Feris. Argentina. 29 de enero de 2015, §40. En este informe la CIDH destacó que la opción de resolver con mecanismo internos está abierta hasta que la Comisión decida sobre la admisibilidad.

728. Artículo 46.2 CADH

729. Artículo 46.2.a CADH. A título ilustrativo véase sobre demarcación de territorios indígenas directamente conectado con medio ambiente: CIDH, Informe No. 30/17, Petición 1118-11. Admisibilidad. Comunidad Maya Q'eqchi' Agua Caliente. Guatemala. 18 de marzo de 2017, §37 y 38.

730. Artículo 46.2.b CADH. En esta categoría entra: impedimento material, el temor fundado de prestar asistencia legal a las presuntas víctimas lo cual les impide acceder a los recursos, costos de justicia, falta de información.

731. Artículo 46.2.c CADH y 31.2.c Reglamento CIDH.

732. Artículo 46.1.c CADH, artículo 28.9 y 33.1 del Reglamento CIDH

733. Artículo 47.d CADH y 33.1 del Reglamento CIDH

734. Litispendencia

735. Cosa Juzgada

736. CIDH, Informe No. 67/15, Petición 211-07. Admisibilidad. Jorge Marcial Tzompaxtle Tecpile y otros. México. 27 de octubre de 2015, §34.

nizatorios bajo la dinámica víctima-Estado, debe continuarse con el curso de la petición en el Sistema[737].

La CIDH, ha considerado la inexistencia de litispendencia en casos presentados ante la Corte Internacional de Justicia, el Comité de Libertad Sindical de la OIT, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, Examen Periódico Universal, en procedimientos especiales de grupos de trabajo de la ONU y en temas abordados en informes de la propia CIDH[738]. Mientras que desestimó asuntos idénticos previamente presentado ante el Comité de Derechos Humanos en el marco del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y del Comité contra la Tortura[739].

Otro aspecto de vital importancia es que la petición sea presentada dentro de los seis (6) meses contados a partir del momento en que el presunto lesionado en sus derechos ha sido notificado de la decisión definitiva[740]. De allí que una petición extemporánea será automáticamente inadmisible. Una vez considerada las posiciones de los intervinientes la CIDH procede a pronunciarse sobre la admisibilidad o no de la petición a través de la adopción de un informe[741]. En caso de ser admitida, se registra propiamente el caso[742] y se continua hacia la etapa de fondo. Debe tenerse en cuenta que la CIDH puede diferir el pronunciamiento de admisibilidad y trasladarlo al informe de fondo[743].

De esta manera, se llega la etapa de fondo en los términos del artículo 37 del Reglamento de la CIDH, fijándose un nuevo plazo para que las partes presenten sus observaciones[744]. Igualmente, se brinda la oportunidad procesal para que entre ellas alcancen una solución amistosa[745]. De continuar abierta la controversia, se procederá a la etapa probatoria[746]. Durante esta fase la CIDH también puede realizar investigaciones *in loco*[747]. Llegado el momento

737. OEA|CIDH. *Digesto de decisiones sobre admisibilidad y competencia de la Comisión interamericana de Derechos Humanos*. Doc.OEA 20. OEA/Ser.L/V/II.175. 4 mar. 2020., p. 32.

738. *Loc. cit.*

739. *Loc. cit.*

740. Artículo 46.1.b CADH

741. Artículo 40 Reglamento CIDH.

742. Es importante mantener presente que antes de este momento procedimental, solo se trata de una petición o queja contenida en una comunicación dirigida a la CIDH.

743. Artículo 36.3 Reglamento CIDH.

744. La CIDH puede solicitar la asignación de un defensor público a las presuntas víctimas sin medios económicos suficientes. Sobre este punto véase: Gozaíni, O. A. (2014). *Derecho procesal transnacional. Los procedimientos en la Comisión y ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.* México D.F: Tirant Lo Blanch., p. 210-211 p. 206-207.

745. Artículo 40 del Reglamento CIDH.

746. Véase el interesante aporte de Gozaíni, O. A. (2014), *ob. cit*. 170-178.

747. Artículo 39 Reglamento CIDH. Este tipo de visitas en terreno son parte de la actividad de la CIDH para colectar información sobre los hechos denunciados.

de las audiencias públicas[748], las partes pueden proporcionar información verbal y escrita, hacer seguimiento a las recomendaciones del informe de admisibilidad, adopción y/o seguimiento de medidas cautelares[749]. Estas audiencias son parte de las garantías del debido proceso del que gozan las partes en el procedimiento ante la CIDH.

Solo después de superada estas etapas, la Comisión procede a la adopción de una decisión a partir de la cual determina si existen elementos suficientes para identificar la vulneración o no de un derecho reconocido en el tratado de derechos humanos (confidencial preliminar[750]). En caso de encontrar violaciones se realizan proposiciones y recomendaciones, que son trasladadas al Estado, otorgando un plazo de tres meses[751] para informar a la CIDH sobre su estatus[752]. En caso de no adoptarse las recomendaciones, la CIDH emitirá un informe final que puede ser publicado ante la Asamblea de la OEA[753], momento en el que se da clausura al procedimiento para aquellos Estados que no forman parte de la CADH[754].

Este último informe tiene serias implicaciones para los Estados Parte de la CADH. De hecho, algunos autores[755] señalan que las recomendaciones tienen carácter vinculante, pues la Convención le otorga las bases suficientes para establecer que los Estados tiene la obligación de cumplir con las recomendaciones de la CIDH[756]. Además, para estos Estados se contempla la posibilidad de someter el caso ante la CtIDH en los términos del artículo 43.3 literales a), b) y c). De esta manera se estructura el procedimiento previo al sometimiento formal de un caso a la Corte.

---

748. Artículo 64 y 68 Reglamento CIDH

749. Artículo 62 Reglamento CIDH.

750. Artículo 50 CADH. Véase sobre los informes: Pinto, M. (1993). *La denuncia en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos*. Buenos Aires: El Puerto, p. 140.

751. Artículo 51 CADH.

752. Sobre esta compleja etapa véase: Faúndez, H. (2004), *Ob. cit*. 466; y Gozaíni, O. A. (2014), *Ob. cit*. 203-230.

753. Artículo 51 CADH. véase también: Faúndez, H. (2004). El Sistema Interamericano de protección de los derechos humanos. *Aspectos institucionales y procesa*. Faúndez, H. (2004), *Ob. cit*. 466. En este momento termina el procedimiento para los Estados no parte de la CADH, publicándose las conclusiones y recomendaciones en el informe anual de la CIDH.

754. Salvioli, F. (2020), *Ob. cit*. 209. Señala que los informes definitivos «representan la última palabra del sistema, por lo que devienen jurídicamente vinculantes en virtud del principio de buena fe», para todos los Estados de la OEA.

755. Salvioli, F. (2003). «Un análisis desde el principio pro-persona sobre el valor jurídico de las decisiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos». En: V. Bazan (Coord.) *Defensa de la Constitución: libro homenaje a Germán Bidart Campos* (pp. 143-155) Buenos Aires: Ediar S.A.; Faúndez, H. (2004), *Ob. cit*. 482-484.

756. *Loc. cit.*

Ahora bien, si se sitúa este marco procesal en las peticiones climática, tiene que agregarse que las presuntas víctimas o sus representantes deben tener la agudeza de demostrar que la inestabilidad climática afecta tan gravemente los derechos humanos reconocidos en la CADH, por lo cual se requiere un pronunciamiento de la CtIDH. Asimismo, deberán exponer con claridad la necesidad de allanar esta realidad en sede contenciosa para sentar jurisprudencia interamericana, justificando su consecuente impacto en los Estados que integran el Sistema Interamericano, ya que sus decisiones son auto ejecutivas y además han logrado consolidar un verdadero *Ius Commune* transformador en América latina[757].

Así las cosas, la Comisión puede someter el caso ante la CtIDH, este trámite se realiza a través del envío de una comunicación donde remite copia del informe al que hace referencia el artículo 50 de la CADH, acompañado de la copia del expediente construido (con exclusión de los documentos de trabajo interno), datos de la víctima, evaluación de cumplimiento por parte del Estado, motivos que impulsaron el sometimiento del caso a la CtIDH, designación de sus delegado, pruebas y cualquier otra información que a criterio de la Comisión resulte de utilidad[758]. Igualmente, en esta remisión la CIDH puede solicitar que se acuerden medidas provisionales a favor de las presuntas víctimas[759].

De lo anteriormente expuesto se desprende que hay suficientes elementos normativos para subsumir los supuestos de afectación de derechos humanos en un contexto climático. Además, este órgano con competencia cuasi-jurisdiccional y de control de admisibilidad está consciente de la problemática regional y así se ha pronunciado públicamente en este sentido. Ante la concurrencia de tales factores corresponde a los defensores ambientales y víctimas impulsar las peticiones. Debe recordarse que la Comisión fue pionera en el conocimiento de solicitudes centrales climática, pero el derecho interamericano no se encontraba en el punto de maduración necesario para brindar una respuesta.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos

En lo que respecta a la CtIDH[760], es el pilar judicial autónomo[761] del Sistema Interamericano y la autoridad interpretativa de la Convención Americana de

757. Sobre la figura de este *ius commune* latinoamericano véase: Von Bogdandy, A. (2015). «Ius Constitutionale Commune en América Latina: una mirada a un constitucionalismo transformador». *Revista Derecho del Estado*, (34), 3-50. Véase sobre el constitucionalismo global y medio ambiente la propuesta de: Ferrajoli, L. (2022). *Por una Constitución de la Tierra: La humanidad en la encrucijada*. Trotta.

758. Artículo 74 y 75 Reglamento CIDH.

759. Artículo 76 Reglamento CIDH.

760. Véase: Salvioli, F. (2020) , *ob. cit*.

761. OEA. Estatuto de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Doc. OEA Res. 448, oct. 1979 [Estatuto de la CtIDH]. Artículo 1 Estatuto CtIDH.

Derechos Humanos. Nació con la creación de la CADH, adoptada en Conferencia de San José de 1969, instrumento que entró en vigor el 18 de julio de 1978[762]. Desde 1978, la CtIDH tiene sede permanente en San José de Costa Rica[763], su formal instalación tuvo lugar en el año 1979.

La competencia contenciosa del Tribunal proviene de la manifestación del consentimiento expresado por los Estados, lo cual presupone la aceptación automática del derecho «de la Corte a resolver cualquier controversia relativa a su jurisdicción»[764]. Actualmente, veinte (20) Estados de la región americana[765], veintiuno (21) si se cuenta el reingreso de Venezuela[766] han reconocido su competencia contenciosa.

Las normas que regulan su funcionamiento se encuentran recogidas en el capítulo VIII de la CADH, en su Estatuto[767] y en su Reglamento[768], instrumentos que le dotan de vida y funcionalidad. El Tribunal Interamericano está integrado por siete (7) jueces[769], cada uno vinculado a la nacionalidad de

---

762. Tal como señala: García-Ramírez, S. (2018). «La Corte Interamericana a cuarenta años de su establecimiento». *Revista del Posgrado en Derecho de la UNAM*, (9), 29. Con la entrada en vigor de la CADH «la Corte Interamericana adquirió cuerpo y misión».

763. Véase: Sede para la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Doc OEA. AG/RES.372 (VII-0/78) de 1 jul. 1978. Sin embargo, la CtIDH puede celebrar reuniones en el territorio de cualquier Estado miembro de la OEA en que lo considere conveniente por mayoría de sus miembros y previa aquiescencia del Estado respectivo en los términos del artículo 58 de la CADH.

764. Rousset-Siri., A. & Bayardi. C (2021) «Breves notas sobre Sistema Interamericano de derechos humanos. Mendoza: Universidad Nacional de Cuyo»., p. 57. Recuperado de: https://bit.ly/3AzOZLx

765. Argentina, Barbados, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Surinam y Uruguay.

766. Sobre el ambito de competencia de la Corte con respecto a Venezuela existen posiciones encontradas. Véase, por una parte: de Casas., I. (22 Sep. 2020). «Venezuela y el Sistema Interamericano: los derechos humanos son para proteger personas no para hacer política». *Aquiescencia*. Recuperado de: https://bit.ly/35i09ul; Por otra parte, véase: Giménez., I. & Petit de Gabriel., E. (08 Mar. 2021). «Venezuela ante la CPI». *Aquiescencia.* Recuperado de: https://bit.ly/3wIrjWB. Sobre el reingreso al Sistema véase también: Giménez, I. (2021b). «Gobernanza de la salud y acceso a la vacuna en Venezuela». *Revista Iurisprudentia.* 10,(19), 122-123. Recuperado de: https://bit.ly/36uDtI7.

767. Véase el Estatuto CtIDH.

768. CtIDH. Reglamento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. 49 Ses. (16-25 nov. 2000). Modificado 85 Ses. (16-28 nov. 2009). [Reglamento CtIDH]. Recuperado de: https://bit.ly/3NsO6M4.

769. CtIDH. (2022, 7 de febrero). *Inauguración del año judicial Interamericano 2022*. [comunicado de prensa CtIDH 10/2022]. Recuperado de: https://bit.ly/3MEcbPB. Actualmente, la CtIDH está integrada por los Jueces: Ricardo Pérez Manrique, Presidente de la Corte (Uruguay); Humberto Antonio Sierra Porto, Vicepresidente de la Corte (Colombia); Eduardo Ferrer Mac-Gregor Poisot (México); Nancy Hernández López (Costa

un Estado miembro de la OEA, sin que pueda existir más de un juez con la misma nacionalidad[770].

La elección de los jueces viene determinada por los criterios establecidos en el artículo 52 de la CADH, según el cual son seleccionados «a título personal entre juristas de la más alta autoridad moral, de reconocida competencia en materia de derechos humano»[771]. Este nombramiento se produce por mayoría absoluta de voto de los Estados en la Asamblea General de la OEA[772]. La vigencia de su mandato judicial es de seis (6) años, reelegibles una sola vez[773].

En cuanto al brazo administrativo de la Corte, la misma cuenta con una Secretaría principal y otra auxiliar, cuyas funciones están centradas en notificar las actuaciones de la CtIDH, llevar las actas de las sesiones, tramitar la correspondencia, asistir a las reuniones de la Corte, certificación de documentos, la dirección administrativa del Tribunal, gestionar el trabajo del personal y las demás establecidas en el Reglamento y Estatuto[774].

En lo que respecta al objetivo de la CtIDH, este se concentra en proteger y velar por el cumplimiento de los derechos humanos entre los Estados miembros de la CADH. Esta actividad judicial es realizada a través de tres vías fundamentales: la consultiva, la contenciosa y la cautelar.

A través de su esfera de competencia contenciosa, que puede juzgar y determinar la responsabilidad internacional de los Estados que violen la Convención, siempre que los mismos no sean perseguidos y castigados dentro de la jurisdicción del Estado sujeto a supervisión[775]. La Corte, puede adoptar medidas provisionales[776] y medidas urgentes[777] en cualquier etapa del proceso, así como supervisar el cumplimiento de sentencias.

Rica); Verónica Gómez (Argentina); Patricia Pérez Goldberg (Chile); y Rodrigo Mudrovitsch (Brasil).

770. Artículo 52 CADH. Sobre la composición de la Corte véase también el Capítulo II del Estatuto CtIDH y el Título I Reglamento CtIDH.

771. Artículo 52 CADH

772. Artículo 53 CADH.

773. Artículo 54 CADH.

774. Artículo 10 Reglamento CtIDH.

775. Durante la etapa de excepciones preliminares, la CtIDH evalúa nuevamente los criterios de admisibilidad.

776. Se trata de aquellas medidas adoptadas por la Corte en pleno, siempre que se encuentren cumplidos los extremos del artículo 63.2 CADH. Como toda cautelar su propósito es evitar daños irreparables.

777. Estas últimas a cargo del Presidente(a) de la CtIDH. Sobre este tipo de medidas véase: González, F. (2010) «Las Medidas Urgentes en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos». *Revista Internacional de Derechos Humanos*, 7(13), 5-72. Recuperado de: https://bit.ly/3rSau79

Adicionalmente, tiene una importantísima función consultiva[778] complementaria de la actividad judicial del tribunal[779], «sus extensas opiniones sirven de guía para iluminar el camino tanto de los órganos de la OEA[780], como de los Estados miembro de la organización»[781]. Su despliegue consultivo no solo se limita a la CADH, sino que se expande hasta «otros tratados de derechos humanos»[782].

La CtIDH al emitir una opinión consultiva ejerce una «función jurisdiccional»[783], con un efecto virtual que repercute en la actividad estatal[784]. Como método alterno, la función consultiva contribuye al cumplimiento de las obligaciones estatales, además de ser utilizadas como auto-referencia dentro de la jurisprudencia contenciosa[785], con lo cual terminan filtrándose en la legislación interna de los países signatarios de la Convención.

En lo que respecta a sus primeros pasos[786], estos iniciaron a través de la atribución de jurisdicción en el asunto de *Viviana Gallardo y otras*[787]*,* aunque a la larga terminaría declinando su competencia para conocer, uno de los aspectos más interesantes de la decisión fue la utilización de un abordaje más cercano a la función consultiva que a la contenciosa[788]. Pos-

778. Artículo 64 CADH. Es importante mantener presente que puede solicitar opinión cualquier Estado de la OEA, la CIDH y la Comisión Interamericana de la Mujer. Sobre el impacto e importancia de la contribución de la función de la CtIDH al derecho internacional véase: Cançado-Trindade., A. (2020b). «Reflections on the realization of justice in the era of contemporary international tribunals». *Recueil des Cours / Collected Courses*. 408 (1), 26-28.

779. Salvioli, F. (2004). «La competencia consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos: marco legal y desarrollo jurisprudencial». En: S. Fabris (ed.) *Homenaje y Reconocimiento a Antônio Cançado Trindade*. (p. 431). El autor señala que «basta que el instrumento a interpretar posea una norma concerniente a la protección de los derechos humanos para que el Tribunal tenga competencia, independientemente de que el objeto general de aquel esté o no dirigido a la protección de los derechos humanos».

780. Véase: Capítulo X Carta OEA.

781. Giménez. I. (2022). «El derecho a un medio ambiente sano y la Corte Interamericana de Derechos Humanos». En: Sion. A., (ed.) *Ensaios sobre GSE.* (pp. 409-432). Rio de Janeiro: Synergia. Recuperado de: https://bit.ly/3Hy8liy

782. Artículo 64 CADH.

783. Nikken, P. (2003). «La función consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos». En: CtIDH (ed.) *Memoria del seminario: el Sistema Interamericano de protección de los derechos humanos en el umbral del siglo XXI*. (p. 172.) San José C.R: CtIDH. «Ejerce una función jurisdiccional en los términos contemplados en la Convención Americana y en el Estatuto de la Corte».

784. *Loc. cit.*

785. Nikken, P. (2003), *Ob. cit*. 174.

786. Sobre los inicios de la CtIDH véase: Pasqualucci, J. M. (2012). *The practice and procedure of the Inter-American Court of Human Rights*. Cambridge: Cambridge University Press.

787. CtIDH. Viviana Gallardo y otras v. Costa Rica, decisión del (13 nov. 1981).

788. Sobre este punto véase: Buergenthal, T. & Cassel, D. (2004). «Recordando los inicios de la Corte Interamericana de Derechos Humanos». *Revista IIDH*, *39*, 11-31.

teriormente, la Corte inició el ejercicio formal de la facultad otorgada por el artículo 64 CADH en las OC 1/82[789] y OC 2/82[790]. A partir de lo cual fue ganando reconocimiento por su actividad interpretativa hasta convertirse en la más activa de las Cortes regionales de derechos humanos en la actualidad. La CtIDH, suma en su haber un total de (29) veintinueve opiniones consultivas[791], casi igualando a los pronunciamientos de la Corte Internacional de Justicia[792].

A través de esta función, la Corte busca modelar la conducta de los Estados introduciendo novísimos pronunciamientos con serias implicaciones a nivel regional. De allí que las opiniones consultivas son una fórmula transformadora tendiente a la modificación de la conducta estatal y por ende las realidades socioambientales en el marco de la protección de los derechos humanos. La actuación en sede consultiva es una herramienta vigorosa y eficaz, pero que debe ser adecuadamente incorporada para lograr traspasar el texto de sus declaraciones, asegurando el mantenimiento de la legitimidad[793] de la Corte como voz autorizada y seguida por los Estados.

Originalmente, las Opiniones Consultivas de la Corte estaban concentradas en su carácter definitivo y concluyente, el cual atendía a la certeza y finalidad brindada por el texto convencional[794], aunque sin dotarlas de obligatoriedad[795]. Se entendía que la labor de la Corte estaba concentrada en utilizar

789. «Otros Tratados» objeto de la función consultiva de la Corte. CtIDH. OC 1-82 (Ser. A) No. 1 (24 sept. 1982).

790. El efecto de las reservas sobre la entrada en vigor de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. CtIDH. OC 2-82 (Ser. A) No. 2 (24 sept. 1982).

791. Al 30 de noviembre de 2023 la CtIDH ha emitido veintiocho (29) Opiniones Consultivas, siendo la última de ellas la OC 29/22 sobre Enfoques diferenciados respecto de determinados grupos de personas privadas de la libertad (Interpretación y alcance de los artículos 1.1, 4.1, 5, 11.2, 12, 13, 17.1, 19, 24 y 26 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y de otros instrumentos que conciernen a la protección de los derechos humanos). Actualmente, se encuentra pendiente de pronunciamiento sobre la solicitud planteada por Colombia y Chile sobre emergencia climática y derechos humanos del 9 de enero de 2023.

792. Contesse, J. (2021). «The Rule of Advice in International Human Rights Law». *American Journal of International Law*, *115*(3), p. 369.

793. Véanse los interesantes cuestionamientos sobre la legitimidad de la Corte planteados por: Zúñiga, N. (2022). *The Inter American Court of Human Rights: The Legitimacy of International Courts and Tribunals*. Routledge.

794. Faúndez, H. (2004), *Ob. cit*. 991-992.

795. Un sector de la doctrina mantiene la postura de no obligatoriedad. Véase: Vio Grossi, E. (2018). «La naturaleza no vinculante de las opinions consultivas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos». *Revista Jurídica Digital UANDES* (2) 2, 200-214. Recuperado de: https://bit.ly/3HpZ0yQ. Ventura R. & Zovatto, G., D. (1989). *La Función Consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos: Naturaleza y Principios*. Instituto Interamericano de Derechos Humanos. Madrid. CIVITAS. (pp. 161-166)

el desarrollo interpretativo de sus opiniones, para potenciar su «valor jurídico innegable», encontrando un efecto reflejo de cumplimiento voluntario histórico entre los Estados parte de la Convención[796].

Así, el despliegue de la competencia consultiva de la CtIDH ha estado constantemente marcado por la riqueza de sus opiniones, como faro que guía la compleja navegación en las sinuosas aguas de la interpretación de la Convención, respaldada por su autoridad científica, moral[797] y de confianza[798]. Estas características marcan la ruta para ayudar a los Estados y órganos de la OEA en la protección efectiva de los derechos convencionales[799]. Por ello, no es de extraña que sus opiniones sean consideradas como una interpretación pura y autentica de la CADH, aunque necesiten de un posterior desarrollo en casos contenciosos concretos para delimitar el alcance en materia de responsabilidad.

No obstante, debe reconocerse que parte de doctrina[800], había puesto de manifiesto desde inicios del nuevo milenio que el tribunal regional más que «opiniones» pronunciaba dictámenes con carácter vinculante, utilizando como fundamento la base normativa del artículo 64 de la CADH, acompañado por la naturaleza y el régimen jurídico definido en el artículo 1 del Estatuto CtIDH[801]. Según los cuales el Tribunal interamericano tiene «competencia para emitir interpretaciones autorizadas de la Convención y de otros tratados concernientes a la protección de derechos humanos»[802].

---

796. Hitters, J. C. (2008). «¿Son vinculantes los pronunciamientos de la Comisión y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos? (control de constitucionalidad y convencionalidad)». *Revista Iberoamericana de Derecho Procesal Constitucional*, *10*(19), 149-150. Quien cita a título de ejemplo la OC 3/83 del 8/09/1983 sobre restricciones a la pena de muerte donde «el gobierno de Guatemala luego que se expidió la Corte regional dispuso la abolición de ese castigo máximo».

797. *Loc. cit.*

798. Sobre la confianza en el derecho véase: Greco.T. (2021). *La legge della fiducia: alle radici del diritto.* Roma. Laterza.

799. CtIDH. OC 23/17, §24. «[…]en el marco de las relaciones interestatales, las obligaciones "coadyuvar a los Estados Miembros y a los órganos de la OEA para que cumplan de manera cabal y efectiva sus obligaciones internacionales en la materia y definan y desarrollen políticas públicas en derechos humanos […]interpretaciones que contribuyan a fortalecer el sistema de protección de los derechos humanos». En el mismo sentido: La denuncia de la Convención Americana de Derecho Humanos y de la Carta de la Organización de Estados Americanos y sus efectos sobre las obligaciones en materia de derechos humanos. CtIDH. OC 26-20 (Ser. A) No. 26 §31 (09 nov. 2020).

800. Faúndez, H. (2004), *Ob. cit*. 989-994; Salvioli, F. (2004), *Ob. cit*. 417-472.

801. Artículo 1 Estatuto CtIDH: «La Corte Interamericana de Derechos Humanos es una institución judicial autónoma cuyo objetivo es la aplicación e interpretación de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Corte ejerce sus funciones de conformidad con las disposiciones de la citada Convención y del presente Estatuto».

802. Faúndez, H. (2004), *Ob. cit*. 991.

A partir de ello, se llegó a señalar que la función consultiva de la Corte no podía, ni debía ser equiparada a una mera asesoría[803]. Ciertamente es innegable su valiosa e influyente función interpretativa. No obstante, lo que resulta cuestionable es que los términos «interpretación autorizada» sirvieran de corolario para convertir en obligaciones pronunciamientos surgidos de una actividad orientativa y clarificativa en los términos del propio texto convencional, desafiando así el principio de soberanía[804] al abordar cuestiones políticas para las cuales el Estado no ha brindado su consentimiento[805].

Aunque la CtIDH, no siguió la fundamentación inicial de la doctrina, si empezó a introducir en el plano consultivo una postura gradual que ha llegado a expandirse más allá de los límites del texto convencional. Así la idea de obligatoriedad comenzó a afianzarse a través del llamado efecto jurídico ineludible de las opiniones. El proceso de revestimiento de poderes especiales[806] de la función consultiva se puede ubicar específicamente a partir de las OC 16/99[807] y OC 18/03[808].

La visión anterior encontró perfecta acogida en la doctrina del control de convencionalidad propuesta por el Juez García Ramírez[809] y finalmente

803. *Loc. cit*. De hecho, para el autor solo emitiría una opinión consultiva en el caso de «la compatibilidad de la legislación interna de un Estado con la Convención u otro tratado concerniente con la protección de derechos humanos»… «incluso en esa situación, la opinión de la Corte tendría un efecto jurídico notable, que el Estado no podría ignorar».

804. Gargarella, R. (2013). «Sin lugar para la soberanía popular. Democracia, derechos y castigo en el caso Gelman». Yale Law School SELA (Seminario en Latinoamérica de Teoría Constitucional y Política) *Papers SELA*. Recuperado de: http://hdl.handle.net/20.500.13051/17481.

805. Bailliet, C. (2018) «The Strategic Prudence of the Inter-American Court of Human Rights: Rejection of Requests for an Advisory Opinion». Revista de Dereito Internacional. (15),1, 255-276.

806. Contesse, J. (2021), *Ob. cit*. 387. El autor señala que durante la presidencia del Juez Cançado Trindade «these two opinions allowed the Court to use advisory jurisdiction as a vehicle to construe international norms in a remarkably expansive way». En una línea similar véase: Zúñiga, N. (2022). *The Inter American… Ob. cit*.

807. Véase: El derecho a la información sobre la asistencia consular en el marco de las garantías del debido proceso legal CtIDH. OC 16-99, (Ser. A) No. 16, (1 oct. 1999).

808. La condición jurídica de los migrantes indocumentados OC 18-03 (Ser. A) No. 18, (7 Sep. 2003).

809. Rousset-Siri, A. (2021). «Reparaciones y jurisdicción interamericana: cinco aportes en los votos de Sergio García Ramírez». En: L., Camarillo. & A., Rousset-Siri. (eds.) *Proteger y reparar. Aportes de la Jurisdicción interamericana (Libro Homenaje al Profesor Emérito Sergio García Ramírez)* (p. 281) Tijuana: UABC. Sobre el pensamiento del Exmagistrado interamericano: «El control de convencionalidad —ha dicho en sus votos— es una expresión o vertiente de la recepción nacional, sistemática y organizada, del orden jurídico convencional internacional (o supranacional). Constituye un dato relevante para la construcción y consolidación de ese sistema y ese orden, que en definitiva se traducen en el mejor imperio del Estado de Derecho, la vigencia de los derechos y la armonización del

incorporada a la jurisprudencia de la Corte en el caso *Almonacid Arellano v. Chile*[810] (2006). De estos antecedentes surgió un nuevo entendimiento sobre el alcance tanto de las sentencias como de las opiniones consultivas. En lo que respecta a esta últimas, su obligatoriedad sería finalmente confirmada en la OC 21/14[811], mientras que esta caracterización obligatoria continua su irradiación en la actualidad, haciendo eco materias de impacto social como medio ambiente y matrimonio igualitario[812].

Así las cosas, la Corte pasó de ejercer una función puramente interpretativa (OC 1/82[813] y OC 3/83[814]), caracterizada por su rol coadyuvante[815] de fuente auxiliar en el cumplimiento de las obligaciones interamericanas[816], a convertirse en una competencia consultiva súper poderosa capaz de traspasar los límites orientativos y de guía para los que habían sido originalmente diseñada. Esto a pesar de que tal expansión no encuentra sustento claro en el espíritu de la norma, ni en los trabajos preparatorios de la Convención Americana[817]. En pocas palabras, la CtIDH pasó de una forma de adjudicación

ordenamiento regional inter-americano (puesto que me estoy refiriendo al control ejercido con base en instrumentos de esta fuente) con vistas a la formación de un ius commune del mismo alcance geográfico-jurídico».

810. CtIDH. Almonacid Arellano y otros v. Chile. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas (Ser. C) No. 154, (26 sep. 2006).

811. Los derechos y garantías de niñas y niños en el contexto de la migración y/o en necesidad de protección internacional. CtIDH OC 21-14 (Ser. A) No. 21, (18 ago. 2014).

812. Pasando por la OC 23/17. §28 donde hace referencia al carácter vinculante a través del control de convencionalidad, hasta sus tumultuosas implicaciones políticas y diplomática con la opinión consultiva sobre identidad de género e igualdad y no discriminación a parejas del mismo sexo. OC 24-17 (Ser. A) No. 24, (24 nov. 2017).

813. «Otros Tratados» objeto de la función consultiva de la Corte. CtIDH. OC 1-82 (Ser. A) No. 1 §51 (24 sept. 1982).

814. Restricciones a la pena de muerte. CtIDH. OC 3-83 (Ser. A) No. 3 §32 (08 sep.1983). «La Corte, en este ámbito, cumple una función asesora, de tal modo que sus opiniones no tienen el mismo efecto vinculante que se reconoce para sus sentencias en materia contenciosa».

815. Informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. CtIDH. OC 15-97 (Ser. A) No. 15 §26 (14 Nov. 1997). Consecuentemente la Corte advierte que el ejercicio de la función consultiva que le confiere la Convención Americana es de carácter multilateral y no litigioso, lo cual está fielmente reflejado en el Reglamento de la Corte, cuyo artículo 62.1 establece que una solicitud de opinión consultiva será notificada a todos los «Estados Miembros», los cuales pueden presentar sus observaciones sobre la solicitud y participar en las audiencias públicas respecto de la misma. Además, aún cuando la opinión consultiva de la Corte no tiene el carácter vinculante de una sentencia en un caso contencioso, tiene, en cambio, «efectos jurídicos innegables».

816. Nikken, P. (2003), *Ob. cit*. 176. «Ejerce una función jurisdiccional en los términos contemplados en la Convención Americana y en el Estatuto de la Corte».

817. Contesse, J. (2021), *Ob. cit*. 387. «The Convention's drafters never intended to confer such a power to the Inter-American Court. Nor did it need to, as many Latin American constitutions already vest domestic courts with such power by virtue of their own national law».

anticipada a imponer decisiones mediante opiniones con el fin de forzar un cambio rotundo en la conducta de los Estados[818].

El carácter vinculante de las opiniones consultivas sigue siendo objeto de caluroso debate en la doctrina contemporánea e incluso dentro de los integrantes de la propia Corte[819]. No obstante, tal como señala Contesse ha sido la figura del bloque de constitucionalidad y del control de convencionalidad[820] (más no el texto de la Convención), los que han servido de soporte para legitimar el nuevo paradigma «*ruling through advice*»[821]. Es decir que el diálogo entre las Cortes Constitucionales nacionales y el Tribunal Interamericano[822], de alguna manera han escuchado y amparado el uso expansivo del *corpus iuris* interamericano abriendo la puerta a ese alcance automático, directo, inmediato, *erga omnes* vinculante de las opiniones consultivas. Aunque no han dejado de encontrar resistencia en algunos Estados Americanos[823].

Lo anteriormente expuesto, lleva a replantear la cuestión de la legitimidad de la propuesta transformadora de la función consultiva de la Corte que, a pesar de encontrar respaldo en los jueces latinoamericanos, no aclara su aceptación por parte de la legislación interna y tampoco de las mayorías que

818. Contesse, J. (2021), *Ob. cit*. 370.

819. Vio Grossi, E. (2018), *Ob. cit*. 212. «[...]las OC de la Corte no son, por su propia esencia y estrictamente, obligatorias o vinculantes, ni aun para el Estado u órgano de la OEA que la haya requerido y menos aún para los demás Estados y órganos interamericanos».

820. Contesse, J. (2018) «The international authority of the Inter-American Court of Human Rights: a critique of the conventionality control doctrine». *The International Journal of Human Rights*, 22,9, p. 1170. *«What is new about the doctrine is its creation of domestic judicial power by an international court. The Inter-American Court seeks to transfer authority to domestic judges, bypassing domestic legislatures. The court claims that national judges should also follow the court's interpretations of the American Convention, increasing the authority of international judges at the expense of state signatories of the convention».*

821. Sobre el modelo de decisions a través de opinions véase: Contesse, J. (2021), *Ob. cit*. 370.

822. Contesse, J. (2021), *Ob. cit*. 388.

823. Véase: Ministerio de Relaciones Exteriores de Paraguay (2019, 24 de Abril). «Gobiernos de Argentina, Brasil, Chile, Colombia y Paraguay se manifiestan sobre el Sistema Interamericano de Derechos Humanos». [comunicado de prensa]. Recuperado de: https://bit.ly/3noZXym. Sobre el análisis del Backlash véase: Tigroudja, H. (2020). «Procedural Developments at International Human Rights Courts and Bodies». En: F. Baetens & R. Bismuth (eds.) *The Law & Practice of International Courts and Tribunals*, (pp. 306-307). Leiden: Brill | Nljhoff. *«[…] in April 2019, some Latin American States parties to the ACHR adopted a Statement on the Inter-American System, with the aim to 'improve and reinforce' the mechanism, and to call for a strengthening of the place of the subsidiarity principle, the 'margin of appreciation' doctrine, and the 'strict interpretation' of the sources of international human rights law used by the Commission and the Court. The Statement was a direct reaction to the extensive use of an international corpus juris by the Inter-American organs, when they interpret the States' obligations under the ACHR;11 to the 2017 Advisory Opinion of the Court on Gender identity;12 and to specific judgments against the concerned States».* Sobre este mismo punto: Contesse, J. (2021), *Ob. cit*. 369;

integran la sociedad civil democrática, piedra angular del Sistema Interamericano. Estos otros actores, más allá de los jueces nacionales[824] también pudiesen asignar expresamente el carácter de obligatoriedad a las decisiones de la CtIDH, pero no lo han hecho. Sin una correspondencia y reconocimiento favorable, resulta cuesta arriba seguir sosteniendo que la aceptación de esta nueva forma de incorporar obligaciones por parte de la CtIDH hacia los Estados pueda permanecer enmarcada en una actuación legitimidad[825]. Debe mantenerse presente que será la voluntad y consentimiento del Estado los que en última instancia definan la aceptación de una determinada forma de interpretación de la CADH.

Aunque ciertamente la función consultiva de la CtIDH tiene el valiosísimo efecto de autoridad moral y por ende contribuye al cumplimiento de la CADH, su fin último es iluminar el camino de los Estados para orientarles hacia una autorregulación voluntaria de respeto y garantía efectiva de derechos humanos actualizados con la realidad contemporánea.

Sin embargo, esto no implica que las opiniones consultivas de la Corte *per se* deban aceptarse como vinculantes, pues no puede perderse de vista que la CADH debe analizarse, renovarse y aplicarse a los Estados a la luz del caso concreto para que pueda tener efecto *inter-partes*. Pues de lo contrario, implicaría una actuación *ultra vires*, que desnaturaliza el fin para el cual fue creada la función consultiva de la CtIDH. Además de contribuir al creciente y peligroso fenómeno del *backlash* —que vive el Sistema[826]—, por lo cual se requiere una actuación más reflexiva, conmensurada, e «inteligente de la discreción judicial»[827].

Las implicaciones de la función consultiva siguen siendo un tema abierto a discusión, donde no existe patrones inamovibles en cuanto al rol que asuma la CtIDH. Con lo cual es difícil predecir «continuará desarrollando la ciencia de

824. Von Bogdandy, A. (2019). «El mandato transformador del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Legalidad y legitimidad de un proceso iurisgenerativo extraordinario». En: Von Bogdandy., A, Ferrer-McGregor. & *et al.* (coord.) *Cumplimiento e impacto de las sentencias de la Corte Interamericano y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos transformando realidades.* (p. 102). Querétaro: Instituto de Estudios Constitucionales. Para el autor: «Cada juez nacional se convierte en un juez interamericano, lo que expande enormemente el alcance de la Convención Americana».

825. Véase: «Identidad de género e igualdad y no discriminación a parejas del mismo sexo». OC 24-17 (Ser. A) No. 24, (24 nov. 2017). (Voto individual del Juez Eduardo Vio Grossi) §149-150. Recuperado de: https://bit.ly/3vCt4C2. Con quien se coincide en el planteamiento del carácter no vinculante de las opiniones.

826. Sobre el backlash interamericano véase: Tigroudja, H. (2020), *Ob. cit*. 304-341.; Contesse, J. (2019). «Resisting the Inter-American Human Rights System». *Yale Journal of International Law* 44, 179-237.; Soley, X. & Steininger, S. (2018). Parting ways or lashing back? Withdrawals, backlash and the Inter-American Court of Human Rights. *International Journal of Law in Context*, *14*(2), 237-257.; Contesse, J. (2018), *Ob. cit*. 1191.

827. Sobre el modelo de decisión a través de opiniones véase: Contesse, J. (2021), *ob. cit*. 378.

la opinión consultiva de manera amplia o restringida»[828]. Ahora bien, la ventaja para el tema bajo estudió es que la OC 23/17[829] se encuentra catalogado dentro de ese grupo de decisiones encubiertas por función consultiva que extienden el ámbito de protección convencional, aunque a diferencia de otras opiniones, esta se encuentra abrazada por el respaldado de las diversas formas de reconocimiento ambiental nacional gestadas y tipificadas dentro de los ordenamientos locales incluso antes de la publicación de la opinión consultiva[830], así como el creciente trabajo de las comunidades de prácticas[831].

En consecuencia, la evolución en el tratamiento del medio ambiente interamericano se encuentra legitimado por los sistemas nacionales y aunque perfectible, abona el camino para avanzar en el desarrollo de litigios climáticos americanos. De la OC-23-17 se desprenden avances y cambios sustanciales en el entendimiento de la protección del medio ambiente para los Estados que integran el Sistema. La opinión sobre medio ambiente es una referencia constante de evolución jurisprudencial que facilita el camino para activar las dinámicas individuos-grupos frente a Estados[832], abriendo la puerta «de una manera cautelosa y pragmática, a reclamos transfronterizos de derechos humanos que surgen de impactos ambientales transfronterizos»[833], como el cambio climático.

Ciertamente, la CtIDH puede recibir inspiración de su jurisprudencia[834] con relación al tratamiento de derechos humanos seriamente afectados por

---

828. Bailliet, C. (2018), *ob. cit*. 275. En: https://bit.ly/3B8g6gK. Además, destaca que: «It may be argued that the Court, as other international tribunals, is more likely to follow sine wave patterns, rather than linear paths when addressing political cases».

829. CtIDH. OC 23/17, § 30. Debe tenerse en cuenta que las opiniones consultivas tienen «relevancia para todos los Estados miembros de la OEA, así como para los órganos de la OEA cuya esfera de competencia se refiera al tema de la consulta».

830. Las constituciones latinoamericanas se encuentran desde hace años cubiertas por el movimiento de reverdecimiento legislativo.

831. Se espera que haga lo propio con la solicitud de opinión consultiva sobre la emergencia climática.

832. Feria-Tinta, M. & Milnes, S. (26 Feb. 2018). «The Rise of Environmental Law in International Dispute Resolution: Inter-American Court of Human Rights issues Landmark Advisory Opinion on Environment and Human Rights». *EJIL: Talk!* Recuperado el 30 de noviembre de 2023 de: https://www.ejiltalk.org/the-rise-of-environmental-law-in-international-dispute-resolution-inter-american-court-of-human-rights-issues-landmark-advisory-opinion-on-environment-and-human-rights/ *«Perhaps most importantly, it is a landmark in the evolving jurisprudence on 'diagonal' human rights obligations, i.e. obligations capable of being invoked by individual or groups against States other than their own».*

833. *Loc. cit.*

834. Aunque la CtIDH no está obligada por su propia jurisprudencia es coherente en el seguimiento de la evolución de su línea interpretativa. La Corte utiliza cuidadosamente los casos para marcar una pauta interpretativa sobre cuestiones que necesitan ser zanjadas en la región. Precisamente, en materia ambiental, la CtIDH ha construido un rico compen-

problemáticas de naturaleza ambiental, así como de la propia autorreferencia interpretativa derivada de la OC 23/17[835], en la cual se establecieron los cimientos para abrir paso a posibles reclamaciones enraizadas en violaciones de derechos humanos surgidas por afectaciones ambientales transfronterizas como el cambio climático[836].

Los avances propuestos por la OC 23-17 sobre medioambiente son esenciales para el tratamiento climático interamericano, pues la misma es muestra de la evolución en el entendimiento de las cuestiones ambientales. De forma tal, se erige como un innovador puente interpretativo que busca dar respuestas a la afectación de derechos humanos en un contexto ambiental. En el 2023, puede mirarse hacia atrás y encontrar que, a partir de esta opinión consultiva, la Corte estableció puntos de partida que han sido los promotores de grandes cambios en la comprensión de las complejas realidades ambientales en la región y que sin duda serán invocados tanto en la nueva solicitud de dictamen sobre emergencia climática, así como en los futuros casos contenciosos. Muestra de ello es la judicialización del derecho a un medio ambiente sano en tiempos actuales[837] y las preguntas formuladas por Chile y Colombia en enero de 2023.

En lo que respecta a la función «contenciosa, preventiva y ejecutiva»[838] de la Corte, la misma que también goza de autoridad y reconocimiento global por sus progresistas visiones. Durante los primeros años, la CtIDH se concentró en el tratamiento de casos de violaciones del núcleo duro de los derechos civiles y políticos, debido a la inestabilidad del estado de derecho

dio de decisiones que permiten proteger a la persona humana y de forma subyacente al medio ambiente, es importante tener en cuenta que, ante la novedad del tema, incluso puede observar el tratamiento jurisprudencial desarrollado a nivel interno por países que no forman parte del Sistema Interamericano.

835. Feria-Tinta, M. & Milnes, S. (26 Feb. 2018)., *Ob. cit*.. *«Perhaps most importantly, it is a landmark in the evolving jurisprudence on 'diagonal' human rights obligations, i.e. obligations capable of being invoked by individual or groups against States other than their own. The AO opens a door – albeit in a cautious and pragmatic way – to cross-border human rights claims arising from transboundary environmental impacts».*

836. *Loc. cit. «The Court's reasoning on the jurisdiction' issue could be used to support an argument that a State's contribution to the accumulation of greenhouse gases in the atmosphere should result in State responsibility and accountability under the ACHR to victims living in other States, e.g. persons whose lands have become submerged or uncultivable due to rising sea levels».*

837. Véase: Ronconi, L. & Barraco, M. (2021). «La consolidación de los DESCA en la Corte Interamericana de Derechos Humanos: reflexiones a propósito del caso Lhaka Honhat v. Argentina». *Revista de la Facultad de Derecho*, (50). En: https://bit.ly/3uzjy2H. Sobre la relación de interdependencia «entre el derecho a un medio ambiente sano —incluido en el artículo 26 CADH— y los demás derechos humanos».

838. Véase: García-Ramírez. (2018), *Ob. cit*. Debe recordarse que el primer caso contencioso de la CtIDH fue: Velásquez Rodríguez v. Honduras, Excepciones Preliminares (Ser. C) No. 1, (26 jun. 1987).

y de las debilitadas instituciones democráticas de la región. Posteriormente, la CIDH comenzó a remitir asuntos donde se planteaba la protección subyacente de los derechos económicos sociales, culturales y ambientales.

La Corte ha desempeñado un papel fundamental durante las diferentes etapas de transición hacia la democracia de los países de la región, considerándosele como una suerte de tribunal constitucional interamericano[839]. A través de esta compleja labor ha logrado constitucionalizar el derecho interamericano de los derechos humanos en el orden interno de los Estados Americanos[840].

La función contenciosa de la CtIDH representa un aspecto crucial para este trabajo de investigación, en primer lugar, ante la solicitud en curso y, en segundo lugar, debido a que representa la ventana de judicialización climática del núcleo duro de derechos humanos, así como de los DESCA. La Corte es el órgano judicial provisto «de competencia para aplicar e interpretar normas internacionales que hacen a la protección de los derechos y las libertades fundamentales que son inherentes a la persona»[841] y que se ven afectados por el cambio climático.

La competencia contenciosa se encuentra limitada a los Estados Parte de la CADH. Esto quiere decir, que en principio solo puede atender a las violaciones suscitadas dentro del territorio de uno de estos Estados. Es importante tener en cuenta que también podrá tener de forma excepcional competencia extraterritorial, en supuestos concretos entre los que se incluyen las afectaciones ambientales transfronterizas[842]. De esta manera la CtIDH trata de cumplir su fin máximo de protección a las víctimas que puedan resultar de estas alteraciones ambientales.

En lo que se refiere a la legitimación procesal para presentar un caso de contenido climático ante la CtIDH, esta corresponde exclusivamente a los Estados[843] y a la CIDH[844] de conformidad con lo establecido en el artículo 61.1

839. Burgorgue-Larsen, L. (2014) «La Corte Interamericana de los Derechos Humanos como tribunal constitucional». En: Von Bogdandy, A., M. Morales, Fix-Fierro, H.. (Ed.) *Ius constitucionales Commune en América Latina: rasgos, potencialidades y desafíos.* (pp. 421-457). Ciudad de México: UNAM.

840. Burgorgue-Larsen, L. (2014), 429. Sobre el constitucionalismo transformador interamericano véase: Von Bogdandy, A. & Urueña, R. (2020). «International transformative constitutionalism in Latin America». *American Journal of International Law*, *114*(3), 403-442.

841. Sobre el término judicialización aplicado al Sistema Interamericano véase: Salvioli, F. (2004), *Ob. cit*. 417-418. El autor además señala que: «El fenómeno que definimos como judicialización indica que el derecho internacional público adquiere un fortalecimiento que le es indispensable como corpus jurídico y establece una tendencia irreversible», hacia la consolidación jurídica del derecho internacional de los derechos humanos.

842. CtIDH. OC 23/17, § 81-104.

843. La fórmula de remisión se encuentra recogida en el artículo 36 del Reglamento CtIDH.

844. La remisión de la CIDH se realiza según los artículos 74 al 76 del Reglamento CIDH.

de la CADH. El Sistema Interamericano no admite el sometimiento directo de un asunto por parte de la víctima. Aunque debe destacarse que, a partir de la última modificación del Reglamento de la Corte, las presuntas víctimas pueden participar activamente del proceso, dejando de ser meros espectadores[845], siempre que el caso haya sido efectivamente sometido con anterioridad por la CIDH.

Una vez presentado el caso climático[846] contencioso, la Corte realiza de oficio un análisis exhaustivo para determinar si se cumplen o no los extremos de la competencia material[847], competencia personal en relación con el Estado demandado, el actor y la víctima, así como una evaluación para establecer si el espacio temporal durante el cual ocurrieron los hechos se encuentra cubierto por la validez temporal de CADH. Este examen no impide al Estado demandado interponer las excepciones preliminares que estime convenientes.

De seguida la Corte debe realizar la verificación preliminar del caso remitido por la CIDH y examinar el cumplimento de las formalidades procedimentales. Esto a los fines de atender al efectivo respeto de las garantías procesales establecidas en la propia Convención. En caso de encontrar alguna deficiencia solicitará la subsanación en un plazo de 20 días[848]. Superado el examen, la Secretaría procede a librar las notificaciones correspondientes conforme al artículo 39 del Reglamento. Una vez practicadas las notificaciones los representantes de la víctima tendrán dos (2) meses para presentar de forma autónoma un escrito de solicitudes, argumentos y pruebas[849]. En el supuesto de que las presuntas víctimas no cuenten con un defensor acreditado, la Corte designará a un Defensor Interamericano de oficio que les representará durante todo el proceso[850].

Por su parte, el Estado puede reconocer total o parcialmente su responsabilidad. En caso contrario cuenta también con un plazo de dos (2) meses para la introducir su contestación[851]. Este es el momento procesal

845. Artículo 40 del Reglamento CtIDH.

846. Conforme al artículo 51 Reglamento CtIDH. Transcurridos tres (3) meses a partir de la remisión del informe el caso puede ser sometido por la CIDH o bien por el Estado a la CtIDH.

847. Artículo 63.3 CADH.

848. Artículo 38 Reglamento CtIDH.

849. Artículo 41 Reglamento CtIDH.

850. Artículo 37 Reglamento CtIDH. Sobre esta figura véase: Becerra, M. & Cappuccio, E. (2013). «El Defensor Interamericano: Un nuevo sujeto procesal para garantizar el acceso a la justicia de las víctimas de violaciones de derechos humanos». *Revista Institucional de la Defensa Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires*. 3 (4), 61-66. Recuperado de: https://bit.ly/3wGhKY7

851. Artículo 41 Reglamento CtIDH.

oportuno para presentar las excepciones preliminares, dar contestación a la demanda y presentar pruebas, la excepciones en ningún caso suspenden el curso del procedimiento, ni alteran los lapsos del proceso[852]. Es discrecional de CtIDH fijar una audiencia para el tratamiento de estas excepciones.

La Corte puede diferir el tratamiento de las excepciones preliminares y trasladarlas como parte de la revisión del fondo del asunto. Si las decide con anterioridad, el resultado puede dar lugar a la inadmisibilidad total o parcial de la demanda. Entre las excepciones más frecuentes se encuentran la falta de agotamiento de los recursos, falta de competencia y de jurisdicción, duplicidad, litispendencia (independientemente de que hayan sido previamente analizadas por la Comisión), omisión de requisitos procesales previos, extemporaneidad, vulneración al derecho a la defensa del Estado, entre otras[853].

Posteriormente se inicia la etapa de fondo del proceso interamericano, el cual coincide con fase de audiencias, donde la CIDH y el Estado presentan sus alegatos orales a la Corte, asimismo se valoran las aportaciones que puedan realizar los representantes de la víctima al caso previamente estructurado por la CIDH. Durante las audiencias también se llama a los testigos para prestar declaración.

Así se transita hasta el procedimiento final escrito, en el que se presentan los alegatos conclusivos de cada parte interviniente[854], cada una de estas interacciones se traslada a la otra para mantener el balance procesal. Este período también es propicio para recibir los planteamientos de los *amicus curiae* sobre el caso[855]. De seguida se procede al establecimiento de los hechos por parte de la Corte y a la valoración de las pruebas presentadas.

En lo que se refiere a la determinación de la plataforma fáctica que da lugar al contradictorio, corresponde valorar la prueba sobre los hechos controvertidos[856]. Para ello, la CtIDH tiene la libertad de examinar y analizar lo

852. Artículo 42 Reglamento CtIDH.

853. Faúndez, H. (2004), *Ob. cit*. 630-672. En autor realiza un detallado estudio sobre la creatividad de los Estados al momento de presentar excepciones preliminares.

854. Artículo 56 Reglamento CtIDH.

855. Artículo 44 Reglamento CtIDH.

856. Sobre la complejidad de la etapa probatoria ante la CtIDH véase: García-Chavarria, A. B. (2019). «Debates sobre la prueba en el litigio ante la Corte Interamericana». *Anuario mexicano de derecho internacional*, *19*, 293-325; Paúl-Díaz, Á. (2015). «Análisis sistemático de la evaluación de la prueba que efectúa la Corte Interamericana de Derechos Humanos». *Revista chilena de derecho*, *42*(1), 297-327; Faúndez, H. (2004), 773-771.; Burelli, A. A. (2003). «La prueba en los procesos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos». En: CtIDH (ed.) *Memoria del seminario: el Sistema Interamericano de protección de los derechos humanos en el umbral del siglo XXI*. (pp. 113-125). San José C.R: CtIDH.

presentado, además de la capacidad de ordenar diligencias probatorias adicionales[857], así como exigir la cooperación[858] del Estado para la mismas[859].

En este punto el Estado demandado puede reconocer y aceptar las pretensiones de los demandantes[860], también puede darse el supuesto de una solución amistosa[861] o simplemente proseguir con el examen del caso, en este último escenario se procede a la etapa de sentencia. Durante la misma, los jueces analizan de los hechos, las pruebas, realizan las calificaciones pertinentes y deliberan a los fines de determinar si hay o no lugar a la atribución de la responsabilidad internacional del Estado.

Resulta oportuno hacer notar que frente a un tema tan novedoso como el cambio climático, durante la etapa de sentencia la CtIDH es libre de observar el tratamiento jurisprudencial desarrollado a nivel interno por países que integran el Sistema Interamericano[862] e incluso incorporar el tratamiento aportado por países externos a la región[863]. Esto con el fin de invocar voces autorizadas que tienen un efecto persuasivo durante el proceso de construcción argumentativa de un posible esquema de responsabilidad internacional, donde se pueden integrar diferentes regímenes normativos para potencian la efectividad de los derechos humanos en un contexto climático a la luz de la fijación de nuevos estándares de interpretación de la CADH.

De encontrarse una violación convencional se acuerdan las reparaciones e indemnizaciones correspondientes. Igualmente, se efectuará el pronunciamiento sobre las costas procesales a las que haya lugar y se ordenará la notificación de la sentencia y su publicación[864]. Es importante tener en cuenta

---

857. Véanse los artículos 56 al 60 del Reglamento CtIDH. Sobre la prueba véase: García-Chavarría, A. B. (2016). *La prueba en la función jurisdiccional de la Corte Interamericana de Derechos Humanos*. Colección Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Recuperado de: https://bit.ly/36VPqWM

858. Artículo 24 Reglamento CtIDH. Aunque no siempre se logra la cooperación del Estado en los procesos interamericanos, de hecho, han existido casos en los cuales el Estado se ha retirado del recinto como sucedió recientemente en: Jineth Bedoya v. Colombia. Audiencia 15 Mar. 2021. Así como situaciones de no comparecencia en la etapa de fondo en: CtIDH. Caesar v. Trinidad y Tobago. Fondo, Reparaciones y Costas (Ser. C), (11 Mar. 2005), en el cual se aplicó el artículo 27 Reglamento CtIDH.

859. Faúndez, H. (2004), 721.

860. Artículo 62 Reglamento CtIDH.

861. Artículo 63 Reglamento CtIDH.

862. Lo cual resulta de especial valor debido a la oleada de litigaciones climáticas en las Américas. Véase: Burger, M & Tigre, M. A. (2023) *Global Climate Litigation… Ob. cit*.

863. Véase los ejemplos expuestos en el Capítulo II de esta investigación. Asimismo, véanse las resultas de las litigaciones climáticas al 2023 en: Burger, M & Tigre, M. A. (2023) Global Climate Litigation… *Ob. cit*.

864. Procediendo su ejecución y cumplimiento. Véase sobre este punto a: Faúndez, H. (2004), 778-908.

que las sentencias del tribunal interamericano son inapelables y definitivas[865], de allí que surten efectos inmediatos. Ciertamente, existe el recurso de interpretación mediante el cual las partes pueden solicitar esclarecer el alcance y contenido del fallo dentro de los (90) noventa días contados a partir de la fecha de notificación de la sentencia[866]. Pero en ningún caso puede ser confundido como un recurso de impugnación frente a la sentencia de la Corte.

Por último, un aspecto de vital importancia para tener en cuenta en este apartado es el alcance y efecto de las decisiones de la CtIDH, lo cual conduce a mencionar brevemente la doctrina del control de convencionalidad, esencial para comprender la permeabilidad de las decisiones de la CtIDH con relación a la protección del medio ambiente en la región. Esta doctrina incorporada a través del caso *Almonacid Arellano v. Chile*[867] (2006), funciona como una suerte de control de constitucionalidad internacional, es decir que se mueve entre lo interamericano y lo nacional[868]. Este mecanismo de supervisión fue creado con el fin de mejorar el cumplimiento de los parámetros convencionales por parte de los órganos de los Estados interamericanos[869].

Así el derecho internacional de los derechos humanos recogido en la CADH y en las interpretaciones deliberadas por CtIDH es aplicado directamente por las autoridades nacionales a manera de un bloque de convencionalidad[870]. Esto se traduce en que ante un supuesto de incompatibilidad de la norma interna con ese corpus iuris interamericano, los órganos del Estado deberán actuar *ex officio* aplicando el control de convencionalidad dentro de las esferas de su propia competencia nacional[871]. La doctrina del control de convencionalidad es entendida como una herramienta de diálogo que se ampara en complementariedad del Sistema[872], con el fin de que sean los tribunales nacionales quienes puedan brindar tutela en la primera línea[873].

---

865. Artículo 67 CADH.

866. Artículo 67 CADH y 58 Reglamento CtIDH. Es importante tener en cuenta que el recurso de interpretación no suspende la ejecución del fallo

867. CtIDH. Almonacid Arellano y otros v. Chile. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas (Ser. C) No. 154 §124 (26 sep. 2006).

868. Zúñiga, N. (2013). «Control de convencionalidad y protección multinivel de los derechos humanos en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos». *Derecho PUCP*, (70), 347-369.

869. Ferrer Mac-Gregor, E. (2016). «El control de convencionalidad como un vehículo para el diálogo judicial entre la Corte Interamericana de Derechos Humanos y los tribunales de América». *Anuario de Derecho Constitucional Latinoamericano*, 23, 340

870. *Loc. cit.*

871. Ferrer Mac-Gregor, E. (2016), *Ob. cit*. 337.

872. Ferrer Mac-Gregor, E. (2016), *Ob. cit*. 343.

873. CtIDH. Gelman v. Uruguay, Supervisión de Cumplimiento de Sentencia (Ser. C) (20 Mar. 2013) §69-70.

Igualmente, debe tenerse en cuenta que el alcance y efecto de las decisiones de la CtIDH tuvo su máxima expansión en el *Caso Gelman v. Uruguay*[874], a partir del cual tribunal interamericano distinguió entre eficacia subjetiva de la sentencia y eficacia objetiva, con el fin de incorporar (como en efecto lo hizo) la autoridad de *res interpretata*, la cual va más allá de la cosa juzgada con el propósito de producir un efecto vinculante para todos los Estados interamericanos. Así entre los tribunales locales y el tribunal internacional se genera un control dinámico para el respeto y garantía de los derechos humanos[875].

A favor de la doctrina del control de convencionalidad se señala que la interpretación evolutiva aplicada a por la CtIDH responde a un proceso colaborativo proveniente de las aportaciones de múltiples actores, alejándose de la idea de un mecanismo unilateral de interpretación[876], a lo cual se le debe sumar la legitimación brindada por el bloque de constitucionalidad[877] edificado por la integración de las constituciones con la CADH y en la cual esa interpretación progresiva de los derechos humanos es la base metodológica para el cambio[878]. Es decir que es justificable a través del llamado constitucionalismo transformador pero trasladado a los derechos humanos.

Es necesario aclarar que esta postura sobre el control de convencionalidad no se encuentra exenta de críticas. Debe tenerse en cuenta que los efectos expansivos de análisis de convencionalidad que surge de la función consultiva y contenciosa de la CtIDH siguen siendo discutible[879] principalmente porque: Primero, la aplicación de esta doctrina no está unificada dentro de los Estados Parte de la CADH, es decir que se integra en diferentes grados y velocidades. Segundo, no es considerada como obligatoria por todos los Estados, ya que cada Estado atendiendo al principio de soberanía decide si acogerla y cual medida[880]. Tercero, realmente la CtIDH no está obligada a seguir sus propias

874. CtIDH. Gelman v. Uruguay, Supervisión de Cumplimiento de Sentencia (Ser. C) (20 Mar. 2013) §65-90.

875. CtIDH. Gelman v. Uruguay, Supervisión de Cumplimiento de Sentencia (Ser. C) (20 Mar. 2013) §71.

876. Von Bogdandy, A. (2019), *Ob. cit*. 103-104.

877. Sobre el bloque de constitucionalidad véase: Góngora. E. (2014) «La Difusión del Bloque de Constitucionalidad en la Jurisprudencia Latino Americana y su Potencial en la Construcción del *Ius Constitucionales Commune* Latinoamericano. *Ius Constitucionales Commune en América Latina, Razgos, Potencialidades y Desafíos».* En: Von Bogdandy, A., M. Morales, Fix-Fierro, H. (eds.) *Ius constitucionales Commune en América Latina: rasgos, potencialidades y desafíos.* (pp. 301-327). Ciudad de México: UNAM.

878. Von Bogdandy, A. (2019), *Ob. cit*. 103-104. «La doctrina del cambio constitucional muestra la profundidad en la que pueden impactar los cambios morales y políticos en las sociedades cuando al significado de la ley, sin que se produzca ningún cambio formal (Georg Jellinek, Bruce Ackerman). Se trata sobre todo de disposiciones estructurada de manera abiertas, representado los derechos humanos el referente clásico. La doctrina de la interpretación evolutiva constituye la base metodológica para este cambio».

879. Zúñiga, N. (2022). The Inter American… *Ob. cit*.

880. Sobre Fontevecchia y otros v. Argentina Véase: Centro de Información Judicial. (2017) La Corte sostuvo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos no puede revocar

decisiones, por lo cual sigue siendo discutible la figura del precedente en sentido estricto del término. Cuarto, es una práctica que debe irse perfeccionando con el tiempo debiendo llenar vacío para gozar efectividad práctica.

Aunque la obligatoriedad del control difuso de convencionalidad es cuestionable, debe reconocerse que el mismo permitiría dar un viraje sobre el simbolismo de una condena ejemplificadora. Hasta ahora representa un vehículo idóneo (aunque modulable), para impulsar la adopción de medias que puedan ayudar a amplificar la protección de los derechos humanos en un contexto ambiental. De allí que resulta congruente hacer uso de ella frente a la emergencia climática en la región[881].

La aplicación de la doctrina de control de convencionalidad implica que partir de la jurisprudencia de la CtIDH, particularmente sobre el derecho de propiedad, medio ambiente, existen bases suficientes para exigir normas más ambiciosas a nivel interno debido a la capacidad del modelo de convencionalidad concentrado de influir en la modificación del derecho nacional para hacerlo acorde a la CADH y a la interpretación dinámica brindada por la CtIDH[882]. Por otra parte, impacta también desde el control de convencionalidad difuso, desde donde los operadores de justicia, en concreto los jueces locales son los llamados a asegurar la cesación de las vulneraciones sobre derechos humanos[883], ya que la competencia de exigir, por ejemplo, estándares más elevados que contribuyen a la consecución de las metas fijas en el Acuerdo de París[884].

Es oportuno destacar el valor de autoridad moral que posee la CtIDH, su influencia trasciende la esfera regional ha llegado a extenderse incluso hasta el sistema universal de derechos humanos. De hecho, los informes del Relator Especial sobre el Medio Ambiente han tomado en consideración como tercera categoría de fuentes las decisiones de los tribunales regionales sobre medio ambiente, destacando el trabajo de la CtIDH y de las actividades desplegadas por CIDH en su función cuasi-judicial como mecanismos que permiten activar la protección interamericana frente a los daños ambientales[885].

---

sentencias del Máximo Tribunal argentino. Recuperado el 30 de noviembre de 2023 de: https://bit.ly/3BRvD4C ; Tigroudja, H. (2020), *Ob. cit*. 306. Sobre la Resistencia de algunos Estados señala que: *«while the bad relations between the Inter-American organs and the States may be linked to specific judgments of the Court against Trinidad and Tobago on the death penalty, against Peru on its counter-terrorism strategy, against Venezuela on political rights, or specific reports and decisions adopted by the Inter-American Commission».*

881. Especialmente en la opinión consultiva pendiente de pronunciamiento.

882. CtIDH, Boyce y otros v. Barbados, Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas (Ser. C) No. 169 §78 y 79 (20 nov. 2007).

883. Ferrer Mac-Gregor, E. (2016), *Ob. cit*. 343.

884. Esta última actividad judicial también sujeta a revisión a través del control concentrado de la CtIDH.

885. Véase: UNHRC. A/HRC/22/43 (24 dic. 2012). §24, 41.; UNHRC. A/HRC/25/53 (30 dic. 2013). §13, 40 y 42. UNHRC. A/HRC/28/61 (3 feb. 2015). §53 y 98. A/HRC/34/49 (2017) (19 Ene.

Debe destacarse que los Reportes antes mencionados fueron utilizados en parte para sustentar la declaración del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas mediante la cual se reconoció el derecho universal a un medio ambiente sano y sostenible[886] en octubre del 2021. Esta expresión de política también ha sido influenciada por los avances de la CtIDH del año 2017 y 2021. No puede olvidarse, que la jurisprudencia interamericana es también un punto de partida para la creación de nuevas reglas de derecho y práctica regional, que influye en la conducta de las terceras partes involucradas de la escena internacional[887] y nacional.

Aclarado lo anterior, debe considerarse más allá de la disponibilidad normativa, cual es potencialidad de que los órganos del Sistema Interamericano puedan pronunciarse frente a al cambio climático. Es decir, si es un foro adecuado para abordar la delicada cuestión. Como punto de partida, debe recordarse que la inestabilidad climática se ha convertido en un tema de interés tanto para la CtIDH[888], como para la CIDH[889], su REDESCA[890] y para algunos Estados interamericanos.

2017). §56 y 58.; UNHRC A/73/188 (19 jul. 2018). §35, donde expresamente se cita la OC 23/17.; UNHRC A/74/161 (15 julio 2019). §23, 40, 42, 48 y 61.; A/HRC/43/54 (23 Ene. 2020). §13 y 36. UNHRC. A/76/197 (19 jul. 2021). § 49 haciendo referencia a la sentencia del caso Comunidades Indígenas Miembros de la Asociación Lhaka Honhat v. Argentina, mediante la cual la CtIDH declaró la violación autónoma del derecho a un medio ambiente sano.

886. UNHRC. Res. A/HRC/RES/48/13 (8 nov. 21) Sobre el derecho humano a un medio ambiente limpio, saludable y sostenible, la cual ha servido de base para promover acuerdos climáticos en el marco de la COP 26. Véanse también: A/HRC/RES/48/13 sobre el reconocimiento global del derecho a un medio ambiente limpio, sano y sustentable, la A/RES/76/300 donde la Asamblea General confirmó el mismo derecho.

887. Entre los cuarenta y tres (43) votos a favor se encontraban seis (6) Estados Latinoamericanos: Argentina, Bolivia, Brasil, México, Uruguay y Venezuela.

888. OC 23/17. Véase también: CtIDH. Kawas Fernández v. Honduras, Fondo, Reparaciones y Costas. (Ser. C) No. 196 §148. (3 abr. 2009). Donde realizó una referencia a las discusiones planteadas en el seno de la OEA y de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre el cambio climático y las afectaciones sobre el goce efectivo de los derechos humanos en el continente. Recientemente, a través de algunas referencias: CtIDH. Asociación Lhaka Honhat v. Argentina, Fondo, Reparaciones y Costas (Ser. C) No 400. § (6 Feb. 2020).

889. CIDH. «Emergencia climática alcance de las obligaciones interamericanas en materia de derechos humanos», CIDH Doc. 3/21 (31 dic. 2021).; CIDH, (2020) IV Informe Anual REDESCA. Doc. 28 OEA/SER.L/V/II. Recuperado de: https://bit.ly/3JHaaAh.; CIDH Audiencia temática sobre cambio climático y DESCA de mujeres, NNA, pueblos indígenas y comunidades rurales. 173 Período de Sesiones (25 sep. 2019). Véase en la misma línea: OEA|CIDH. (2021, 22 de abril). En el día de la Tierra, CIDH y REDESCA, saludan la entrada en vigor del Acuerdo de Escazú y llaman a los Estados de la región a fortalecer sus políticas públicas ambientales frente a la emergencia climática. [comunicado de prensa] recuperado de: https://bit.ly/2YnMTAX.

890. CIDH|REDESCA. (2019). *Empresas y Derechos Humanos: Estándares Interamericanos*. Doc. OEA /Ser.L/V/II. | CIDH/ REDESCA INFO 1/19. 1 nov. 2019. § 233-253. Además, véase: CIDH/REDESCA. (2021, 4 de noviembre). «En el marco de la COP 26 de la Convención Marco sobre Cambio Climático, la CIDH y la REDESCA llaman a los Estados Miembros

No obstante, es crucial acentuar que el registro de la preocupación de los órganos interamericanos por el creciente riesgo climático peligroso no significa que la CtIDH esté dispuesta superar los límites de su propia competencia. Menos aún, que los Estados Americanos estén dispuesto a aceptar sin resistencia que el climático se consolide como una nueva forma de violación autónoma de la CADH. De allí la necesidad de identificar en la nueva opinión consultiva cual es la fórmula interamericana que permite activar las obligaciones internacionales[891] de proteger los derechos humanos frente al daño ambiental[892] y cumplir con los compromisos internacionales en relación con el cambio climático.

Marco normativo ambiental del sistema interamericano de Derechos Humanos

Ahora corresponde revisar los instrumentos normativos con componente ambiental que fundan el Sistema Interamericano. A continuación, se incluyen los principales instrumentos que pueden aportar a la consolidación de la justicia climática en el continente americano utilizando las premisas argumentativas sobre enfoque sistémico y reverdecimiento del derecho internacional de los derechos humanos expuesta en el Capítulo I.

En primer término, debe abordarse la Declaración Americana sobre Derecho y Deberes del Hombre de 1948[893] (DADHH), no solo por seguir una línea temporal, sino por constituir junto con la CADH la medula central del Sistema Interamericano. A pesar de que en sus orígenes la Declaración fue adoptada a través de un instrumento de derecho indicativo, con el tiempo su contenido

---

de la OEA a poner la protección de los derechos humanos en el centro de sus políticas y acciones climáticas» [comunicado de prensa]. Recuperado de: https://bit.ly/3BJJvy4

891. En el mismo sentido al tratar el tema general: Knox, J. H. (2009), *Ob. cit*. 165. *«Not all infringements of human rights violate legal obligations; human rights may have ethical or moral import without having correlative duties under human rights law. Climate change interferes with the enjoyment of rights recognized in human rights treaties, but a treaty's recognition of a human right does not mean that any interference with that right by any actor, anywhere in the world, violates a legal duty».*

892. Principio ampliamente reconocido desde el arbitraje: Trial Smelter (U.S v. Can) 3 R.I.A.A. 1907-1965 (1941), también consagrado en los principios 21 y 22 de la Declaración de Rio e igualmente reconocido en el preámbulo y artículo 3 CMNUCC,

893. Declaración Americana sobre Derechos y Deberes del Hombre. Acta Final Novena Conferencia Internacional de los Estados Americanos Doc. Res. XXX, 30 mar. 1948 [DADH]. Véase: Interpretación de la Declaración Americana sobre Derechos y Deberes del Hombre en el Marco del Artículo 64. CtIDH. OC 10-89 (Ser. A) No. 10 (14 de jul. 1989). Esta opinión consultiva considera además que la DADHH tiene una función interpretativa que llena los vacíos de la CADH, por lo tanto, funciona como una norma de remisión. Igualmente, véase: La titularidad de derechos de las personas jurídicas en el Sistema Interamericano de derechos humanos. CtIDH. OC 22-16 (Ser. A) No.16, §18 (26 feb. 2016). Estos soportan la naturaleza vinculante de la DADHH.

adquirió carácter consuetudinario y se transformó en una fuente de obligaciones internacionales.

Lo anterior producto de la aplicabilidad práctica que le confirió la actividad de la Comisión al utilizarla como parámetro de control para aquellos Estados no signatarios de la Convención. Además de la posterior codificación de los derechos en ella reconocidos, los cuales resultaron trasladados a otros instrumentos vinculantes interamericanos.

En lo que respecta al derecho al medio ambiente sano, ciertamente, no está establecido de forma expresa en el texto de la DADHH. Sin embargo, su reconocimiento es el resultado de la interpretación dinámica realizada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Bajo esta visión, se considera que el derecho a un medio ambiente sano es parte integrante del artículo I relativo al derecho a la vida, libertad, seguridad e integridad de la persona, del artículo XI dedicado a la preservación de la salud y el bienestar, del artículo XIII sobre el derecho a los beneficios de la cultura, y del artículo XXIII mediante el cual se reconoce el derecho a la propiedad.

De esta manera, la DADHH funciona como instrumento de reenvío interpretativo, donde queda plasmado con claridad el principio de interdependencia entre estos derechos humanos, incluida la preservación ambiental. De forma tal, que el medio ambiente sano es considerado como un segmento del derecho al desarrollo integral, posteriormente reconocido en la Carta de la OEA. En pocas palabras, la DADHH «contiene y define aquellos derechos humanos esenciales a los que la Carta se refiere»[894].

Así las cosas, la Corte Interamericana adoptó una combinación interpretativa de estos instrumentos, lo que inexorablemente incide sobre los parámetros de seguimiento que aplica la CIDH a los Estados no parte de la Convención Americana. Esto permite asumir una visión de protección de los derechos humanos en un contexto ambiental, tanto a nivel individual como colectivo.

Si se traslada este análisis a la situación concreta del cambio climático, los argumentos anteriores conducen a establecer que la DADHH, puede ser invocada por los peticionarios de tutela climática, dada la competencia plausible de la Comisión Interamericana para efectuar el seguimiento/control sobre el comportamiento diligente del Estado con relación a las contribuciones de CO_2, cuando estas vulneran los derechos reconocidos en la DADHH.

894. Interpretación de la Declaración Americana sobre Derechos y Deberes del Hombre en el Marco del Artículo 64. CtIDH. OC 10-89 (Ser. A) No. 10 §43 (14 de jul. 1989). «Puede considerarse entonces que, a manera de interpretación autorizada, los Estados Miembros han entendido que la Declaración contiene y define aquellos derechos humanos esenciales a los que la Carta se refiere, de manera que no se puede interpretar y aplicar la Carta de la Organización en materia de derechos humanos, sin integrar las normas pertinentes de ella con las correspondientes disposiciones de la Declaración, como resulta de la práctica seguida por los órganos de la OEA».

En lo que respecta a la Carta de la Organización de los Estados Americanos[895], en ella se recoge un extenso abanico de derechos bajo el título del desarrollo integral. Básicamente esta sección contiene la estructura de lo que se considera el derecho humano al desarrollo sostenible. De esta manera en sus artículos 30, 31, 33 y 34, este instrumento internacional sienta las bases normativas para construir el largo camino de lo que hoy se conoce como los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales en las Américas.

Es importante tener en consideración que la Carta de la OEA también tiene significativas implicaciones para evaluar el alcance de los compromisos de los Estados no parte de la CADH. Esto es esencial a la hora de supervisar el cumplimiento de las obligaciones de medio de los grandes emisores del continente, como Estados Unidos y Canadá

En relación con el otro instrumento medular del Sistema, la Convención Americana de Derechos Humanos[896], esta recoge los principios reconocidos por sus antecesoras, tanto la Carta de la OEA, la DADDH, como la Declaración Universal de los Derechos Humanos. En lo que respecta a su contenido ambiental, la más reciente interpretación del artículo 26, ofrece una oportunidad extraordinaria de judicialización autónoma del derecho a un medio ambiente sano.

Por otra parte, este instrumento internacional también permite la protección ambiental a través de la tutela del derecho de propiedad comunal de los pueblos indígenas, cuya norma es el corolario para el aseguramiento de la explotación sostenible de los recursos naturales localizados en territorios ancestrales, los cuales se encuentran estrechamente conectados con la cosmovisión y cultura de estas comunidades. Esto como parte de su derecho a la autodeterminación[897], sin que de ninguna manera implique una la atribución de un derecho de separación de la territorialidad del Estado del cual forman parte.

Históricamente, la CADH también brindaba protección subyacente al medio ambiente como espacio para la realización de otros derechos, entre ellos el derecho a vida consagrado en el artículo 4, el derecho a la integridad personal establecido en el artículo 5, el derecho a la tutela judicial efectiva y

---

895. Véase Carta OEA.

896. Fue adoptada tras la Conferencia Especializada Interamericana de DDHH en 1969. Entró en vigor el 18 de julio de 1978.

897. Por su parte: Remiro-Brotóns, A. Riquelme, R & *et. al.* (2007). *Derecho Internacional*. Valencia: Tirant Lo Blanch: Valencia. p. 201. Reconocen el desarrollo de derechos propios y especiales frente a patrones discriminatorios específicos que justifican un tratamiento particularizado y mejorado a los indígenas, es decir aún mejor al que ya de por sí le provee el estatus de minorías étnicas. Los autores limitan este estatus a «grupos relativamente reducidos, que guardan una relación ancestral con la tierra y son especialmente vulnerables a lo que solemos llamar *progreso* justifica un régimen particular que mezcla la reparación histórica con la protección del *hábitat* natural del que forman parte».

acceso a la justicia[898] consagrados en los artículos 8 y 25, respectivamente. Todas estas aproximaciones, desde la más recientes hasta las tradicionales interpretaciones de los derechos civiles contenidos en la CADH, representan una puerta de acceso a la justicia climática en la Américas.

En lo que se refiere al Protocolo de San Salvador de 1988, es el único instrumento interamericano que de forma literal y expresa contiene el derecho a un medio ambiente sano en su artículo 11[899]. Además, desde su preámbulo pone de manifiesto el principio de interdependencia e indivisibilidad de los derechos humanos civiles y políticos con los DESCA, considerándoles como un todo indisolubles construidos sobre la base de la dignidad humana[900]. Por lo cual, uno de sus objetivos es asegurar su vigencia plena, a través de su continua tutela.

Desde sus orígenes, este protocolo reafirma la dinámica de reforzamiento mutuo entre los derechos humanos en la región latinoamericana, dejando claro que la consecución de unos no justifica la vulneración de otros[901]. El reconocimiento del derecho a un medio ambiente sano implica para los Estados Parte del Protocolo, que tienen la obligación de garantiza este derecho a todas las personas[902], y el mismo debe estar informado por criterios de disponibilidad, accesibilidad, sostenibilidad, aceptabilidad y adaptabilidad[903].

Aunque no está ratificado[904] por todos los Estados del Sistema, este instrumento sigue trabajando por asegurar la vigencia de sus disposiciones a través de la CADH, con el fin de consolidad sus estándares como derechos exigibles. Con relación al cambio climático, la regulación ambiental del protocolo representa un escudo de protección frente a la desestabilización del sistema meteorológico de la tierra como componente de la naturaleza. Si el mismo pudiese

---

898. En asuntos conectados con casos ambientales, tal como ocurrió en: CtIDH. Pueblos Indígenas Kuna de Madungandí y Emberá de Bayano y sus miembros v. Panamá, Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas (Ser. C) No. 284. §157 -163 (14 oct. 2014).

899. Protocolo de San Salvador Artículo 11: «1) Toda persona tiene derecho a vivir en un medio ambiente sano y a contar con servicios públicos básicos. 2) Los Estados parte promoverán la protección, preservación y mejoramiento del medio ambiente». Debe recordarse que el derecho a un medio ambiente sano se considera incorporado por vía interpretativa en el artículo 26 de la CADH, y como señalamos en los párrafos precedentes en la Carta de la OEA y en la Declaración Americana.

900. Sobre la dignidad como derecho exigible y judicializable ante tribunales véase: May, J. & Daly, E. (2020). «The Indivisibility of Human Dignity and Sustainability» En: Atapattu. S., Gonzalez. C. & et. al., (Eds.), *The Cambridge Handbook on Environmental Justice and Sustainable Development.* Cambridge University Press.

901. Véase el preámbulo del Protocolo de San Salvador. Igualmente véase: CtIDH, OC 23-17 §47.

902. OEA/ GTPSS. (2015) *Indicadores de progreso para la medición de derechos contemplados en el Protocolo de San Salvador*. Washington, D.C: OEA p. 105. Recuperado de: https://bit.ly/3IR40fE

903. OEA/ GTPSS. (2015), *Ob. cit*. 105-106.

904. Ratificado por: Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Surinam y Uruguay.

ser implementado de forma efectiva, implicaría a los Estados Parte el deber ineludible de disminuir responsablemente de las emisiones que se producen desde sus territorios, así como actuar de forma diligente frente a la dramática degradación de los sumideros naturales de carbono bajo su control.

Otro instrumento interamericano que debe tenerse en cuenta a la hora de analizar el sistema regional de derecho humanos a luz de posibles litigios climáticos es Carta Democrática Interamericana de 2001[905]. Debido a que la democracia y la estabilidad de las instituciones (en este caso concreto con competencia ambiental), tienen un impacto directo sobre las políticas públicas climáticas implementadas por los Estados miembro, así como sobre la efectividad de los mecanismos internos de acceso y de tutela a la justicia ambiental. A la larga, su funcionamiento eficiente permitiría remediar el problema desde la raíz, sin necesidad de acudir al Sistema Interamericano.

De allí que el rol desplegado por el artículo 15 de la Carta Democrática funciona como un mecanismo que facilita la preservación y gestión del medio ambiente. Este artículo, además representa un trampolín para impulsar la adecuación de políticas ambientales transparentes que robustecen su implementación climática en terrenos tan complejo como el latinoamericano. De esta manera, en ella se establece un llamado al cumplimiento no solo de los estándares interamericanos, sino que invita al cumplimiento de otros tratados y convenciones en materia de medio ambiente.

Igualmente, este documento sirve para incentivar el cumplimiento de las decisiones de los órganos del Sistema Interamericano y su línea interpretativa progresista sobre cuestiones atinentes al medio ambiente/cambio climático. Todo ello, en el marco de la consolidación de resiliencia democrática y su impacto sobre transformación positiva de las instituciones ambientales nacionales de los Estados Parte.

Mención adicional merece la Declaración Americana de los Pueblos Indígenas de 2016[906], ya que esta reconoce la protección del medio ambiente desde una cosmovisión muy particular. A partir de la aceptación legal del entendimiento socio cultura y espiritual de los pueblos originarios, se enlaza a la naturaleza, de manera que sirve como escudo de protección ambiental Inter temporal. En conjunto, la puesta en práctica de esta percepción pluralista a través de una Declaración regional conduce a la unificación de los criterios interpretativos sobre la protección transversal de los derechos humanos, así como a la consolidación de los objetivos de desarrollo sostenible y la ordenación ambiental de las Américas[907].

905. OEA. Carta Democrática Interamericana. 28 Período Extraordinario de Sesiones OEA Doc. Res. AG/Res1 (XXVIII-E/01) 11 Sep. 2001 [Carta Democrática].

906. OEA. Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. AG Res. 2888 (XLVI-O-16). 14 jun. 2016 [Declaración Americana de los Pueblos Indígenas].

907. Véase: preámbulo Declaración Americana de los Pueblos Indígenas.

El rol de este instrumento jurídico es fundamental pues permite estableces estándares ambientales mínimos para grupos vulnerables[908], y paralelamente para los componentes naturales integrados como parte de la esencia vital del colectivo pueblos indígenas[909]. Esta Declaración, marca un avance significativo para la protección de la Tierra a través de estos pueblos, pues consagra de forma expresa el derecho de las comunidades a vivir en armonía con la naturaleza y a la protección de su entorno, como condición preexistente para la realización de otros derechos fundamentales como la vida en diferentes dimensiones[910].

El reconocimiento jurídico de la cosmovisión indígena/ecológico, permite abrir una nueva vertiente para el tratamiento del cambio climático; siempre y cuando sea combinada con otros instrumentos de carácter vinculantes como la CADH. Esta conjunción implicaría la articulación de normas con el propósito común de alcanzar la superación de obstáculos para el goce de derechos fundamentales de estos grupos frente a los cambios abruptos causados por factores de alteración climática antropogénica, que a la larga afectan a todas las nacionalidades que integran un país. El reconocimiento de estas relaciones son el reflejo de la comprensión evolutiva de los derechos humanos con base ambiental.

La anterior revisión de los instrumentos interamericanos y ambientales disponibles ponen de manifiesto la riqueza normativa regional, potenciando aún más un abordaje desde la visión sistémica. De esta manera, los derechos humanos plurales[911] entran a balancear los compromisos climáticos estatales hasta ahora matizados por los pasivos históricos y por el escudo de protección brindado desde las responsabilidades comunes pero diferenciadas de cada uno de los sujetos involucrados.

Los deberes de protección y garantía de derechos humanos levantan el velo de la inmunidad ante la falta de adopción de medidas suficientes para enfrentar las consecuencias del fenómeno climático peligroso cuando se ven afectados los derechos fundamentales. La reordenación climática de nuestra sociedad es posible si se apoya entre otros enfoques en la litigación estratégica nacional con base en los derechos humanos inspirando así el litigio ambiental regional.

---

908. La región de América Latina y el Caribe representan el tercer mayor porcentaje poblacional de indígenas a nivel mundial. Véase: OIT. (2019) *Aplicación sobre el Convenio de Pueblos Indígenas y Tribales núm. 169 de la OIT: hacia un futuro inclusivo, sostenible y justo*. Ginebra: OIT., p. 13. Recuperado de: https://bit.ly/381QKYN

909. Véase el Artículo XIX Declaración Americana de los Pueblos Indígenas.

910. Declaración Americana de los Pueblos Indígenas Artículo XIX.1: «Los pueblos indígenas tienen derecho a vivir en armonía con la naturaleza y a un ambiente sano, seguro y sustentable, condiciones esenciales para el pleno goce del derecho a la vida, a su espiritualidad, cosmovisión y al bienestar colectivo».

911. Véase a: Sánchez Rubio, D. (2022). «Humanismo intercultural»… *Ob. cit*. 251- 274.

Los derechos humanos tienen un rol protagónico[912] frente a la paradoja climática, pues son el mecanismo de acción para hacer exigible la protección y garantía de obligaciones tangibles a nivel nacional y subsidiariamente en el plano internacional. El Derecho Internacional vive un proceso de ecologización que se manifiesta en diferentes grados generando las condiciones propicias para adoptar una postura determinante con relación a la gestión de los riesgos que asechan a los derechos humanos de las poblaciones localizadas en las zonas más vulnerables del planeta.

Es por ello, que deben forjarse estrategias con bases jurídicas sólidas e implementarse políticas adecuadas que permitan asegurar el equilibrio del ambiente, la protección de los derechos humanos, así como la exigibilidad de mecanismos de reparación, compensación y restauración de los daños generados por conductas estatales insuficientes[913]. Ante esta compleja realidad, es importante reconocer que no existe más alternativa que capturar cuidadosamente la oportunidad ofrecida los derechos humanos y los instrumentos ambientales para superar esta batalla. La clave para el futuro está en la implementación de esas innovaciones plurales desarrolladas a través del Derecho.

En este punto, debe destacarse que la CADH también enriquece su interpretación a través de instrumentos ambientales ajenos al sistema. La CtIDH ha definido al *corpus iuris* internacional como «un conjunto de instrumentos internacionales de contenido y efectos jurídicos variados»[914], «establecidas en tratados internacionales o recogidas en el derecho internacional consuetudinario como prueba de una práctica generalmente aceptada como derecho»[915]. En este tam-

---

912. Sánchez-Rubio. D. (2020). «Crítica al poder constituyente: entre lo constituido, lo instituyente y la praxis de liberación». En: D. Sánchez-Rubio & P. Cruz-Zúñiga. *Poderes constituyentes, alteridad y derechos humanos. Miradas críticas a partir de lo instituyente, lo común y los pueblos indígenas*. (p.71). Madrid: Dykinson. «Los derechos humanos pueden ser concebidos como el conjunto de prácticas, acciones y actuaciones sociopolíticas, simbólicas, culturales e institucionales tanto jurídicas como no jurídicas, realizadas por seres humanos cuando reaccionan contra los excesos de cualquier tipo de poder que les impide auto-construirse como sujetos plurales y diferenciados».

913. Un ejemplo es la propuesta de reparación del proyecto de vida en el litigio nacional Álvaréz v. Perú, así como las recomendaciones del CRC. Observación General No. 26 (2023), CRC/C/GC/26.

914. Véase: Condición Jurídica y Derechos de los Migrantes Indocumentados. CtIDH. OC18-03 (Ser. A) No. 18, §120 (17 Sep. 2003).; El Derecho a la Información sobre la Asistencia Consular en el Marco de las Garantías del Debido Proceso Legal. OC 16-99 (Ser. A) No. 16 §115 (1 oct. 1999) «El *corpus juris* del Derecho Internacional de los Derechos Humanos está formado por un conjunto de instrumentos internacionales de contenido y efectos jurídicos variados (tratados, convenios, resoluciones y declaraciones). Su evolución dinámica ha ejercido un impacto positivo en el Derecho Internacional, en el sentido de afirmar y desarrollar la aptitud de este último para regular las relaciones entre los Estados y los seres humanos bajo sus respectivas jurisdicciones. Por lo tanto, esta Corte debe adoptar un criterio adecuado para considerar la cuestión sujeta a examen en el marco de la evolución de los derechos fundamentales de la persona humana en el derecho internacional contemporáneo».

915. CtIDH. OC 23/17, §45.

bién se incluyen principios generales como prueba de una práctica estatal extendida y aceptada, normas de *soft law* como guía interpretativa[916], que «dotan de mayor precisión a los contenidos mínimos fijados convencionalmente»[917].

En lo que respecta a los instrumentos internacionales que pueden ser utilizados de forma indirecta por los órganos del Sistema Interamericano bajo el paraguas del *corpus iuris* internacional ambiental frente a un eventual caso climático, deben mencionarse primero: la CMNUCC[918] y Acuerdo de París. Por otra parte y a modo general, el máximo tribunal interamericano con competencia en derechos humanos también puede invocar: la Declaración de Estocolmo sobre el Medio Ambiente Humano, la Declaración Rio sobre el Medio Ambiente y Desarrollo, el Convenio sobre Diversidad Biológica, la Declaración de Johannesburgo sobre el Desarrollo Sostenible, el Convenio OIT 169, la Carta Mundial de la Naturaleza, la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas e incluso hasta podría invocar el recién consolidado Acuerdo de Escazú[919].

Además, debe recordarse que ante vulneraciones de derechos humanos intrínsecamente conectados con afectaciones a componentes concretos de la naturaleza puede hacerse un llamado a la extensa variedad de instrumentos normativos con dimensión ambiental. A modo ejemplificativo, en conexión con alteraciones al medio marino se acudiría a la Convención sobre Derecho del Mar e instrumentos que desarrollan la misma[920]. Por otra parte, en lo que se refiere a afectaciones a la atmosfera, la interpretación de la

916. *Loc. cit.* Sobre la expansión del *soft law* especialmente en la Unión Europea véase: Treves., T. (2018). «The expansion on International Law». *Recueil des Cours / Collected Courses*. 398 (1), 290-291. Menciona entre ellos el asunto ambiental de pesca regulado a través la figura de «memoranda» proveniente de la Organización Marítima Internacional, también en la FAO y seguidas por la Unión Europea en sus Directivas.

917. CtIDH. OC 23/17, §45.

918. Véase la OC 23/17, §126, 134 y 176. Igualmente se incluyen referencia al reconocimiento de principios en su texto normativo §157, 180, 479 y 230. También pudiese acudir a la eventual aproximación que tome ITLOS sobre el Caso n. 31, *Request for an Advisory Opinion submitted by the Commission of Small Island* (12 Dec. 2022).

919. ONU. Acuerdo Regional sobre Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe [Acuerdo de Escazú]. En vigor (22 abr. 2021). Este acuerdo nació en el seno de la CEPAL y sigue los pasos de su hermano europeo, el Convenio de Aarhus. Además, este acuerdo se contextualiza en un plano democrático donde el acceso a la justicia es punto focal del proceso de transición ambiental latinoamericano. Sobre el Convenio de Aarhus en relación con un país de la región véase: Sánchez-Bravo, A. (2018a). «A experiência de Aarhus e as políticas públicas ambientais de participaçao e deliberaçao e deliberaçao comunitárias no Brasil». *Revista International de Direito Ambiental*, 7(21), 11-38.

920. Así como otros instrumentos regionales entre ellos: el Convenio para la Protección y el Desarrollo del Medio Marino en la Región del Gran Caribe. En vigor (11Oct. 1986) [Convenio de Cartagena]. Siempre que correspondan a la delimitación geográfica de un caso concreto y que estén abrazados por el consentimiento de los Estados involucrados.

CADH podría nutrirse del Convenio de Viena para la Protección de la Capa de Ozono[921], el Convenio sobre Aviación Civil Internacional[922] y su Anexo 16. Mientras que, con relación al deterioro de la Amazonía, puede invocarse la implementación del Tratado de Cooperación Amazónica. En lo referente al sector marítimo[923], el Convenio Internacional para Prevenir la Contaminación por los Buques «MARPOL» y sus Anexos. Esto por mencionar solo cuatro supuestos afectados por el hiperobjeto cambio climático en la región[924].

Para ilustrar este punto, debe recordarse que el volumen de los gases emitidos y acumulados, alteran el delicado balance de los sumideros naturales, causando una reacción en cadena que termina afectado a las especies que ellos habitan, así como aquellas que dependen de estos espacios para subsistir. De forma tal, que todos los casos con componente climático sometidos a un órgano de tutela en materia de derechos humanos deben por lo menos considerar en su análisis interpretativo la intervención de otros regímenes que regulan las actividades en estos espacios a la hora de examinar el artículo 26 CADH.

El anterior esquema de análisis permitiría elaborar una interesante propuesta interpretativa de la violación CADH, para impulsar el control de las emisiones de CO_2 e incluso coadyuvar a la determinación de responsabilidad internacional de los Estados a la luz de la integración de los derechos humanos y el clima. De allí que los procesos de compensación natural deben ser además contrastado en su análisis con el cumplimiento de obligaciones ambientales provenientes de otros instrumentos destinados a asegurar la conservación y protección de esos espacios.

En lo que se refiere a la Declaración de Estocolmo sobre el Medio Ambiente Humano de 1972[925], además de su reconocido valor como norma de *soft law* de corte intergeneracional, el intérprete puede analizar sus principios a la altura del desafío climático actual para el derecho. Particular atención requie-

---

921. Véase la OC 23/17, §134, seguida por varias referencias cruzadas sobre el reconocimiento de obligaciones de los Estados en el texto del Convenio en las citas de los §188 y 126

922. Con relación al modelo de recorte aplicado por la aviación véase: Giménez. I. (2017). «La Disminución de las Emisiones de CO_2 del Sector Aerocomercial desde la Perspectiva de la Declaración Consolidada de las Políticas y Prácticas Permanentes de la OACI Relativas a la Protección del Medio Ambiente. Hacía la Construcción de una Aviación Verde». *Revista Internacional de Direito Ambiental* (17), 99.116.

923. Sobre una aproximación al tratamiento desde la industria marítima véase: Petit. E. (2018) «Vers un régime juridique global limitant la pollution atmosphérique des navires sur la base des mesures fondées sur le marché: entre le multilatéral, l'unilatéral et l'institutionnel». *Annuaire du Droit de la Mer*, 22, 179-182.

924. Podemos incluir Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres 1973 [CITES], Convención Relativa a los Humedales de Importancia Internacional Especialmente como Hábitat de Aves Acuática 1982 [RAMSAR], entre otras.

925. Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente Humano. Declaración de Estocolmo sobre el Medio Ambiente Humano, Doc. ONU A/CONF.48/14/Rev.1 (16 de jun. 1972).

ren los principios 1[926], 2[927], 3[928], 4[929], 13[930], 14[931], 18[932] y 22[933], aunque siguen encontrado limitaciones para su implementación efectiva. Precisamente, este es uno de los grandes desafíos regionales, pues algunos Estados han logrado encontrar la cortapisa para evadir acciones tan significativas como la reducción de emisiones[934] y la prevención del daño ambiental.

Por otra parte, es necesario mencionar en orden cronológico la consolidación del Convenio OIT 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en los Países Independientes de 1989[935], el mismo está centrado en asegurar la protección de los derechos asociados a la cultura, al respeto de su forma de vida, así como de sus propias instituciones. Este Convenio busca proteger los dere-

926. Principio 1: «El hombre tiene el derecho fundamental a la libertad, la igualdad y el disfrute de condiciones de vida adecuadas en un medio de calidad tal que le permita llevar una vida digna y gozar de bienestar, y tiene la solemne obligación de proteger y mejorar el medio para las generaciones presentes y futuras. A este respecto, las políticas que promueven o perpetúan el *apartheid,* la segregación racial, la discriminación, la opresión colonial y otras formas de opresión y de dominación extranjera quedan condenadas y deben eliminarse».

927. Principio 2: «Los recursos naturales de la Tierra, incluidos el aire, el agua, la tierra, la flora y la fauna y especialmente muestras representativas de los ecosistemas naturales, deben preservarse en beneficio de las generaciones presentes y futuras mediante una cuidadosa planificación u ordenación, según convenga».

928. Principio 3: «Debe mantenerse y, siempre que sea posible, restaurarse o mejorarse la capacidad de la Tierra para producir recursos vitales renovables».

929. Principio 4: El hombre tiene la responsabilidad especial de preservar y administrar juiciosamente el patrimonio de la flora y fauna silvestres y su hábitat, que se encuentran actualmente en grave peligro por una combinación de factores adversos. En consecuencia, al planificar el desarrollo económico debe atribuirse importancia a la conservación de la naturaleza, incluidas la flora y fauna silvestres.

930. Principio 13: «A fin de lograr una más racional ordenación de los recursos y mejorar así las condiciones ambientales, los Estados deberían adoptar un enfoque integrado y coordinado de la planificación de su desarrollo de modo que quede asegurada la compatibilidad del desarrollo con la necesidad de proteger y mejorar el medio humano en beneficio de su población».

931. Principio 14: «La planificación racional constituye un instrumento indispensable para conciliar las diferencias que puedan surgir entre las exigencias del desarrollo y la necesidad de proteger y mejorar el medio».

932. Principio 18: «Como parte de su contribución al desarrollo económico y social, se debe utilizar la ciencia y la tecnología para descubrir, evitar y combatir los riesgos que amenazan al medio, para solucionar los problemas ambientales y para el bien común de la humanidad».

933. Principio 22: «Los Estados deben cooperar para continuar desarrollando el derecho internacional en lo que se refiere a la responsabilidad y a la indemnización a las víctimas de la contaminación y otros daños ambientales que las actividades realizadas dentro de la jurisdicción o bajo el control de tales Estados causen a zonas situadas fuera de su jurisdicción».

934. Sobre la invocación de esta Declaración por la CtIDH véase: OC 23/17, §52, 98, 128, 134, 183 y 206

935. Convenio OIT 169. Ratificado por veintitrés (23) Estados, la mayoría de la Región Latinoamérica.

chos de participación efectiva de las comunidades indígenas en materias que afectan su desarrollo económico, social y cultural, por cuanto han existido y existen intromisiones ilegítimas que pueden alterar su forma de vida, auto identificación, creencias, bienestar, autonomía y la integridad de sus territorios tradicionales[936].

El Convenio, al ser un instrumento que establece los estándares mínimos de interpretación sobre los derechos de los pueblos indígenas y tribales ha sido reiteradamente citado por la CtIDH[937], como parte del *corpus iuris* internacional, para reforzar la argumentación en materia de protección de estos grupos vulnerables y subsecuentemente del medio ambiente[938]. Esto en relación con el derecho de propiedad colectiva[939]. De allí que la CtIDH ha tratado de preservar sus conocimientos, tradiciones y su autodeterminación a través del balance del principio que le permite a los Estados explotar sus recursos naturales frente a la protección de los derechos humanos de estas comunidades indígenas.

Es importante tener en cuenta que este instrumento, además ha sido incorporado en las legislaciones internas de la mayor parte de los Estados miembro de la CADH. Este reconocimiento regional generalizado imprime al Convenio OIT 169 un halo de especial importancia, pues pudiese ser utilizado de forma innovadora para asegurar la estabilización del clima, a través del reconocimiento de la cosmovisión indígena y de su rol como guardianes de la naturaleza. Además, impulsado por la creciente conceptualización jurídica de los derechos de la madre tierra en las Américas.

---

936. Véase: Convenio OIT 169, artículo 5c) sobre medidas de participación y cooperación encaminadas a allanar las dificultades de dichos pueblos.; artículo. 6.a) sobre consulta a los pueblos procedimientos apropiados a través de sus instituciones representativas.; artículo 7 sobre el derecho a decidir sus prioridades.; artículo 13 sobre su modo de relacionarse con sus tierras o territorios.; artículo 14 derecho de propiedad.; artículo 15 administración de sus recursos y artículo 16.4 derecho a la reubicación y entrega de tierras de igual calidad.

937. CtIDH. Pueblo Indígena Kichwa de Sarayaku v. Ecuador, Fondo y Reparaciones. (Ser. C) No. 245., §204 (27 jun. 2012).; CtIDH. Comunidad Indígena Yakye Axa v. Paraguay, Fondo, Reparaciones y Costas. (Ser. C) No. 125, §127, 128, 136 (17 jun. 2005).; CtIDH. Comunidad Garífuna Triunfo de la Cruz y sus miembros v. Honduras, Fondo, Reparaciones y Costas. (Ser. C) No. 305 §168, 179 (8 oct. 2015).

938. Incluso la CtIDH ha utilizado lo que Pascuel-Vives denomina «la evolución de los tratados regionales de derechos humanos a través de la noción de consenso: para aplicar las ideas de autodeterminación del Convenio 169 OIT a un Estado no Parte (aunque de forma indirecta y cubierta bajo la capa del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos como el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de los que si era parte Surinam). Esto en el marco de la búsqueda de la CtIDH de la interpretación evolutiva de los derechos de los pueblos indígenas a través del *corpus juris gentium* del de los DDHH». Véase: Pascual-Vives, F. (2019). «Consensus and Evolutive Interpretation». *Consensus-Based Interpretation of Regional Human Rights Treaties.* Leiden: Brill | Nijhoff., (pp. 71-72).Igualmente véase: CtIDH. Pueblo Saramaka v. Surinam, Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas (Ser. C) No. 172 §93. (28 nov. 2007).

939. Artículo 21 CADH.

En cuanto a la Declaración Rio sobre el Medio Ambiente y Desarrollo de 1992[940], esta extiende el alcance de los principios ambientales mencionados en la Declaración de Estocolmo, así como incorpora el reconocimiento de otros. Gracias a su reafirmación y a la aceptación universal de su texto[941], muchos de estos principios se transformaron en costumbre internacional[942]. La Declaración de Río, es otro de los tantos instrumentos que le permite a la CtIDH[943] invocar principios esenciales[944], pero sobre los cuales no se ha definido su significado concreto a nivel internacional para extender la salvaguarda del medio ambiente, con el propósito de mejorar el escudo de protección actual de los derechos humanos con conexión ambiental.

Lo anterior conduce a adelantar que, en la próxima opinión consultiva sobre emergencia climática y derechos humanos la CtIDH, puede desplegar su audaz fórmula interpretativa para permear con mayor profundidad los principios la Declaración Rio sobre el Medio Ambiente y Desarrollo en derechos concretos de la CADH, de manera tal que pueda propiciar la comprensión y dotar de significado concreto a cuestiones ambientales prácticas que carecen de claridad dentro del Sistema Interamericano, incluidas aquellas con matices climáticos. Por ejemplo: la cuestión de la evaluación de impacto ambiental en actividades no prohibidas, pero que están amparadas en la errónea idea de aprovechamiento ilimitado de los recursos naturales de un Estado[945], hoy de obligatorio cumplimiento.

Otro instrumento que ha sido invocado como parte del *Corpus Iuris* internacional ambiental por la CtIDH[946] es el Convenio de Diversidad Biológica

940. Véase Declaración de Río.

941. Legitimado por la actividad propia de los Estados y por la incorporación de sus principios en la legislación interna, así como en tratados y acuerdos de aceptación universal.

942. De esta manera la Declaración de Río fue el punto de partida para la creación de preceptos jurídicos ambientales que hoy en día cuentan con total autoridad normativa

943. CtIDH. Pueblos Kaliña y Lokono v. Surinam, Fondo, Reparaciones y Costas. (Ser. C) No. 309. §179 (25 nov. 2015). Es citado el principio 22 con relación al papel que juegan los grupos indígenas ante la ordenación del medio ambiente y desarrollo. Enlazados con: CtIDH. Pueblo Saramaka. Interpretación de la Sentencia de Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas (Ser. C) §41 (12 ago. 2008). Véase igualmente: CtIDH. Pueblo Indígena Kichwa de Sarayaku v. Ecuador, Fondo y Reparaciones. (Ser. C) No. 245 §206 (27 jun. 2012)., así como la OC 23/17, §52, 98, 128, 134, 183, 206 y 230.

944. Como lo son: prevención, precaución, obligaciones de cooperación mutua, intercambio de información y consultas, entre otros.

945. Como una distorsión interpretativa del principio de soberanía que le confiere a los Estados el derecho/poder de explotación de sus recursos naturales, el cuál debe encontrar sus límites en afectaciones transfronterizas y en daños ambientales significativos que afectan derechos fundamentales. Debe acotarse que para la determinación del alcance de esta obligación deberá acudirse a otros instrumentos internacionales y a la práctica aceptada en materia de evaluación de impacto ambiental.

946. Véase: CtIDH. Pueblos Kaliña y Lokono v. Surinam, Fondo, Reparaciones y Costas. (Ser. C) No. 309. §177-179 (25 nov. 2015). Véase igualmente OC 23/17, §. 67, 126, 134, 157, 176 y 216.

de 1992[947] (CDB). Las cláusulas del CDB permiten especificar el alcance las obligaciones asumidas en la CADH, al orientar sobre la ponderación de las medidas que pueden adoptar los Estados en función a sus capacidades concretas. Este convenio es conocido por contar con una sólida interacción e integración con diferentes áreas del derecho internacional en general y con cambio climático en particular.

En lo que respecta al cambio climático destacan las continuas interconexiones surgidas tanto desde su texto normativo[948] como desde las propias conclusiones alcanzadas en las Conferencias de Parte de ambos regímenes[949]. Además, la CDB coincide en la preservación de sumideros naturales de carbono (bosques, selvas, mares), componentes profundamente afectados en las Américas por el flagelo climático.

La integración al menos interpretativa de los derechos humanos, la protección de la diversidad biológica[950] y el clima, proporcionan un interesante engranaje que permitiría el despliegue coherente entre los regímenes con miras a logar beneficios comunes. A la larga, esto puede consolidar la aplicación de estándares climáticos y ambientales de mayor nivel frente al riesgo peligroso generado por las emisiones antropogénicas.

Igualmente, es de mención obligada la Declaración de Johannesburgo sobre el Desarrollo Sostenible de 2002[951], la cual nació con el objetivo de detener la pobreza y la degradación del medio ambiente. Considerando que la pobreza es uno de los factores que profundiza la vulnerabilidad sobre los efectos del cambio climático. El desarrollo sostenible representa uno de los pilares esenciales para alcanzar la meta de protección sobre la región más desigual del mundo, integrada por grupos tradicionalmente afectados por

947. Convenio sobre la Diversidad Biológica. Adoptado (5 jun. 1992). En vigor (29 dic. 1993) [Convenio Diversidad Biológica].

948. Véase: preámbulo Convenio de Diversidad Biológica, artículo 5 sobre cooperación, el artículo 6.b), mediante el cual se invita al mayor nivel de integración en el marco de la adopción de medidas generales de conservación y utilización sostenible de los recursos biológicos en los planes, programas y políticas sectoriales o intersectoriales, el artículo 14.1 a) sobre evaluación de impacto ambiental aplicable a actividades y procesos que afecta significativamente la biodiversidad, tal como lo es el cambio climático. Asimismo, el artículo 21 puente con otros instrumentos internacionales, lo cual tiene implicación directa sobre la CADH. Sobre estos puntos véase: Morgera, E. (2011). «Far away, so close: A legal analysis of the increasing interactions between the Convention on Biological Diversity and climate change law». *Climate Law*, *2*, 85-115.

949. *Loc. cit.*

950. Igualmente, puede incluirse el Protocolo de Cartagena sobre Seguridad de la Biotecnología del Convenio sobre la Diversidad Biológica y el Protocolo Suplementario de Nagoya - Kuala Lumpur sobre Responsabilidad y Compensación, para supuestos donde se vean implicadas vulneraciones asociadas con organismos genéticamente modificados y riesgos a la salud humana, intrínsecamente asociados al medio ambiente.

951. Véase: Declaración de Johannesburgo.

problemáticas ambientales, a la par que funciona como aliado para obtener la tan anhelada neutralidad de carbono.

Por lo tanto, resulta claro que la ruptura contra circulo de pobreza iniciado con los objetivos del milenio y secundado por los actuales objetivos de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible[952], son esenciales para contener la dramática transformación del entorno de las Américas[953]. Esto con especial incidencia sobre cuestiones climáticas, pues sus postulados hoy abordados desde una base de derechos humanos continúan informando la interpretación en materia de eficiencia energética, comercio, globalización, explotación de recursos naturales, biodiversidad y desarrollo.

En la misma línea debe hacerse referencia al Acuerdo de Escazú[954], a pesar de no encontrase arropado por la competencia de la CtIDH [955], cuenta con referencias cruzadas sobre protección de derechos humanos[956], de hecho, fue invocado por primera vez en el caso *Baraona Bray v. Chile* en 2022[957]. Con lo cual, existe una alta posibilidad de que progresivamente su contenido pase a integrar el *corpus iuris* internacional ambiental interamericano. Esto a la hora de interpretar la CADH y los derechos relativos al acceso a la justicia[958] y a la tutela judicial efectiva vinculados a causas ambientales[959], en el caso

952. Aunque todos los objetivos funcionan de forma transversa (ODS 17: Asociación para los Objetivos/ 17.), debe tenerse en cuenta a los efectos de esta investigación: el ODS 13: Acción por el clima: 13.2 Integrar las medidas de cambio climático en las políticas, estrategias y planificación nacionales; 13.3 Mejorar la educación, la sensibilización y la capacidad humana e institucional en materia de mitigación, adaptación, reducción de impactos y alerta temprana al cambio climático; 13. b) Promover mecanismos para aumentar la capacidad de planificación y gestión eficaces relacionadas con el cambio climático en los países menos adelantados, incluso centrándose en las mujeres, los jóvenes y las comunidades locales y marginadas. En relación con el ODS 15: Vida en tierra (15.1, 15.2, 15.5), el ODS 11: Ciudades y comunidades sostenibles (11.4), el ODS 12: Producción y consumo responsables (12.2, 12.7), y el ODS 16: promover sociedades justas pacíficas e inclusivas.

953. Véase igualmente OC 23/17, §52

954. Véase el Acuerdo de Escazú.

955. Cuenta con su propio Comité de Apoyo a la Aplicación y el Cumplimiento (artículo 18), así con medios específicos de solución de controversia delegados a la Corte Internacional de Justicia y a los procedimientos de Arbitraje fijados por la Conferencia de Parte (artículo 19).

956. Véase el artículo 4.1 sobre disposiciones generales del Acuerdo de Escazú.

957. CtIDH. Baraona Bray v. Chile. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas, (Ser. C) No.481, §114 (24 nov. 2022).

958. Sobre la facilitación del acceso a la justicia en el marco de los ODS véase: Belloso, N. (2020). «El ODS 16 en la agenda 2030 de la indefinición a algunas propuestas (iusfilosóficas) para su concreción». *Quaestio Iuris,* 13(4), 1939-1974. En lo que respecta a la dimensión ambiental en los términos de las escalas de justicias véase: Fraser, N. (2008) *Escalas de Justicia*. A. Martínez-Riu, (trad.) Barcelona: HERDER., p. 18.

959. CtIDH. Claude Reyes v. Chile, Fondo, Reparaciones y Costas. (Ser. C) No.151 (19 Sep. 2006). Hasta ahora la CtIDH se ha pronunciado por la vulneración del derecho al acceso

de aquellos Estados que hayan ratificado el Acuerdo de Escazú[960] o eventualmente, cuando la práctica de la mayoría de los Estados que integran el Sistema identifique su contenido con el carácter de *opino iuris* internacional[961].

El Acuerdo es relevante para este tema de estudio, pues uno de sus ejes de trabajo es precisamente el cambio climático. De allí que, este instrumento será un trampolín para fortalecer las capacidades en la materia[962], incluida la protección defensores ambientales, quienes tienen un rol protagónico en el florecimiento de este tipo de proyectos de litigación en América Latina y el Caribe. Esto es esencial en un contexto de fortalecimiento del acceso y aseguramiento de las garantías al debido proceso en materia ambiental. El tratamiento del acceso a la justicia climática forma parte de casos abiertos ante el Sistema Interamericano; con lo cual, Escazú es una oportunidad novedosa para generar una interpretación inédita sobre la dimensión climática de los artículos 8, 25, 26 y 13 de la CADH en la región[963].

Tal como se mencionó al inicio de este apartado, es de vital importancia tener en cuenta que la dimensión del *corpus iuris* internacional ambiental es por demás extensa, por no decir inagotable. De allí que, estos instrumentos deben ser invocados por los peticionarios para reforzar sus solicitudes, atendiendo a la particularidad del caso concreto. Además, como es usual la CtIDH, siempre podrá realizar un llamado a *motu proprio* con el propósito de desarrollar el contenido de la CADH y de alcanzar una mayor protección de los derechos humanos afectados.

Por otra parte, debe mencionarse que la CtIDH, como órgano judicial autónomo, siempre podrá utilizar proyectos de artículos, en general instrumentos no vinculantes y decisiones judiciales de una extensa variedad de jurisdicciones[964], para nutrir y legitimar su argumentación sobre la interpre-

---

a la información pública en el caso de deforestación de un territorio haciendo exigible este derecho sin necesidad de demostrar un interés directo y concreto, debido a que el ambiente es un derecho que compete a todos los ciudadanos. Con lo cual el Acuerdo de Escazú le permitiría ir más allá.

960. Al 22 de mayo de 2021, el acuerdo ha sido ratificado por veintidós (22) Estados. De los cuales son signatarios de la CADH: Argentina, Bolivia, Brasil, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Haití, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay.

961. Sobre la evolución interpretativa del consenso de los Estados en materia de derechos humanos como un elemento que puede erosionar la antigua conceptualización del principio de soberanía véase: Pascual-Vives, F. (2019), *Ob. cit*. 71-72.

962. Véase además el Artículo 6.3 g) Acuerdo de Escazú sobre generación y divulgación de la información ambiental y el Artículo 8 sobre acceso a la justicia.

963. Sobre este punto se volverá al tratar la petición de los derechos de los niños y niñas en Cité Soleil v. Haití.

964. Para profundizar sobre estas interacciones en el derecho internacional véase: Institut de Droit Internacional. Report of the Special Rapporteur Shinya Murase on Epidemic and

tación progresista de la CADH con relación a cuestiones ambientales y en particular sobre cambio climático, en caso de presentarse una petición para su revisión judicial.

A partir de la integración normativa propuesta, se abre un universo de posibilidades para abordar la problemática climática en la región de las Américas. De esta manera, es posible elaborar una línea argumentativa coherente que le permita a los operadores jurídicos hacer uso del derecho internacional; entendido como un sistema interconectado, donde el intérprete puede no solo identificar la ley aplicable, sino que cuenta con la plasticidad normativa para hacer frente a las necesidades contemporáneas de una sociedad amenazada por el cambio climático peligroso.

Considerando la clara existencia de preceptos normativos para guiar a la región a través de un mecanismo jurídico que soporte las metas mundiales de recorte de emisiones, se espera que el llamado al *corpus iuris* internacional ambiental antes identificado, pueda ser aplicado de forma consistente de cara a la inmensa gama de supuestos climático que presenten vacíos normativos concretos dentro del Sistema Interamericano. Esto solo es posible a mediante la integración de otras áreas del derecho, interpretadas con una mirada innovadora que transcienda a las conceptualizaciones tradicionales para transformar estas herramientas jurídicas en auténticos mecanismos de la estabilización del clima.

Ahora bien, para dar respuesta a la interrogante sobre ¿Quiénes serían los actores jurídicos con legitimidad para hacer valer estas nuevas visiones integradas? Es posible identificar al Estado, tal y como ha quedado demostrado en la solicitud de opinión consultiva de 2023 sobre cambio climático. Adicionalmente, desde la perspectiva del sujeto pasivo del daño se deben mencionar: los pueblos indígenas, los pueblos tribales y las futuras generaciones. Estos son hasta el momento los guardianes idóneos para custodiar los derechos del sistema viviente en el que habitan.

International Law. Recuperado de: https://bit.ly/3uCAWmW. El Profesor Shinya Murase, tuvo la precisión de identificar las interacciones entre el derecho internacional, el derecho ambiental y los brotes epidémicos, para lo cual expuso instrumentos de *hard law*, así como como guías para el abordaje de las interacciones jurídicas, destacando el importante rol de proyectos de artículos como un medio para identificar la costumbre internacional (Artículos de Responsabilidad Internacional de los Estados por Actos Ilícitos, Artículos de Responsabilidad de las Organizaciones internacionales, Artículos sobre la Prevención de Daños Transfronterizos por Actividades Peligrosas, Proyecto Guía sobre la protección de la Atmósfera). Igualmente, las resoluciones del Instituto de Derecho Internacional, las cuales ayudan a iluminar el camino sobre temas actuales y en pleno desarrollo en el derecho internacional (Por ejemplo: la resolución sobre Contaminación Aérea Transfronteriza, Medio Ambiente, Responsabilidad Bajo el Derecho Internacional por Daños Ambientales, Procedimientos de Adopción e Implementación de Reglas en el Campo Ambiental, Obligaciones y Derechos erga omnes en el Derecho Internacional.

En la actualidad el tratamiento de los derechos humanos en un contexto ambiental es más profundo desde los órganos del Sistema[965] y también desde los Estados, incluso es posible identificar un paralelismo interesante en cuanto al desarrollo de aproximaciones ambientales entre ambos[966]. Esta visión generalizada reviste especial importancia para asegurar la mejora de los compromisos de mitigación, tanto desde un sano control nacional donde debería imperar el respeto y garantía de los derechos humanos, como subsidiariamente por el tribunal interamericano cuando el Estado falla. Sin embargo, en ambos casos, persiste la necesidad de dar respuesta al fenómeno peligros del cambio climático[967].

A pesar de los avances normativos[968] y del esfuerzo de los Estados[969], los objetivos de mitigación y de acceso a la justicia climática no han sido alcan-

965. Tan solo debe considerarse: CIDH. (2021). Derecho a la libre determinación de los pueblos indígenas y tribales. Doc OEA /Ser.L/V/II 413/21. 28 dic. 2021.; CIDH. «Emergencia climática alcance de las obligaciones interamericanas en materia de derechos humanos», CIDH Doc. 3/21 (31 dic. 2021).; CIDH|REDESCA. (2019). *Empresas y Derechos Humanos: Estándares Interamericanos*. Doc. OEA /Ser.L/V/II. | CIDH/ REDESCA INFO 1/19. 1 nov. 2019. § 233-253. Véase igualmente: CIDH (2020) IV Informe Anual de la Relatoria de Derechos Económicos Sociales, Culturales y Ambientales (REDESCA). En: https://www.oas.org/es/cidh/docs/anual/2020/capitulos/redesca.PDF En lo que respecta a la CtIDH, sin duda debe mencionarse la OC 23/17, entre otras decisiones que serán evaluadas a lo largo de este capítulo.

966. Especialmente en lo que se refiere al pluralismo jurídico indígena enraizado en la mayoría de las constituciones latinoamericanas. En este sentido véase: Botero, E. S. (2021). «Pluralismo jurídico en Colombia: Aplicaciones jurisdiccionales edificantes». *ABYA-YALA: Revista sobre Acesso á Justiça e Direitos nas Américas*, *5* (1), 117-142. En la misma línea de pensamiento: Aguilar, V., Marciales, G. & *et. al.* (2021). *La jurisdicción especial indígena en Venezuela como derecho propio.* Mérida: Universidad de Los Andes. Recuperado de: https://bit.ly/3ING0tG. Cuando señalan que estos modelos constitucionales buscan romper con la «hegemonía de la sociedad occidental y el monismo jurídico como modelo único a seguir».

967. Con relación al limitado efecto que tienen las decisiones sobre los recortes de emisiones a nivel macro.

968. CEPAL. (2018). «El acceso a la justicia ambiental en América Latina y el Caribe». En: CEPAL. *Acceso a la información, la participación y la justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe: hacía el logro de la agenda 2030 para el desarrollo sostenible*. Santiago: CEPAL., p. 143. Recuperado de: https://bit.ly/3tOGknU. No se desconoce que los Estados que integran la región cuentan con entidades y normas dedicadas al tratamiento de los asuntos ambientales, que incluyen el avance en el diseño e implementación de instancias especializadas, mecanismos de prevención, reparación y compensación por daños ambientales. Sin embargo, el acceso a la justicia ambiental sigue presentado limitaciones tanto el inicio de procesos administrativos y judiciales. A lo anterior debe agregarse el obstáculo de la onerosidad de los procesos para la tramitación y seguimiento de litigios, los cuales se traducen en serias trabas para materializar una tutela judicial efectiva en temas ambientales.

969. En cuanto a garantizar el derecho a un ambiente sano, legitimar un discurso generalizado de recorte de emisiones ajustado al principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas, a la par de intentar procurar un mayor acceso a la justicia ambiental

zados. De hecho, sus ejes de trabajo siguen siendo metas aspiracionales en vías de concreción. Una muestra de esta necesidad latente de justicia ambiental es la situación de peligro en la que desarrollan su trabajo los promotores y defensores de los derechos ambientales en las Américas[970]. Tan solo en 2018, más de la mitad de los asesinatos por activismo ambiental ocurrieron en la región[971]. A lo anterior debe sumarse, la desprotección de los grupos más vulnerables frente al bloqueo de la justicia ambiental nacional[972], así como la falta de aplicabilidad de la narrativa DDHH/derechos ambientales ante la realidad que enfrentan quienes paradójicamente son los más afectados por los efectos climáticos adversos.

Peticiones de tutela climática e implicaciones de las opiniones consultivas sobre medioambiente y cambio climático

La construcción de un *locus standi* climático interamericano

Debe tenerse en cuenta que el acceso a la justicia para tutelar el derecho a vivir en un medio ambiente sano en América Latina es un proceso en construcción que requiere de la creación de capacidades nacionales donde intervengan todos los actores[973]. Este camino ha transitado por importantes etapas de reconocimiento, siendo una de ellas el empoderamiento de individuos y comunidades, quienes ahora tienen la oportunidad de participar e influir en la toma de decisiones[974], a la par de ser en un mecanismo de protección y diálogo entre los derechos humanos y la preservación del medio ambiente.

Ahora más que nunca, resulta vital contar con órganos regionales de protección de derechos humanos, en cuya función de seguimiento[975], consul-

970. Considerada la más letal del planeta para este trabajo según: AIDA (2020). «Proteger a las y los defensores ambientales, deber impostergable del Estado». Recuperado el 30 de noviembre de 2023: https://bit.ly/3qHR0mg.

971. Global Witness. (2019) *¿Enemigos del Estado? De cómo los gobiernos y las empresas silencian a las personas defensoras de la tierra y del medio ambiente.* Recuperado de: https://bit.ly/3qIhT9N

972. Niños, niñas, pueblos indígenas, mujeres y afrodescendientes. Lovantón, D. (2009). «Experiencias de acceso a la justicia en América Latina». *Revista Instituto Interamericano de Derechos Humanos*, *50*, 227-282.

973. CEPAL. (2018), *Ob. cit*. 133. Esto incluye al Estado, la sociedad civil, la academia y el sector privado.

974. Boyle, A. (2007). «Human rights or environmental rights? A reassessment». *Fordham Environmental Law Review*, 18(3), 498.

975. Comisión (competencia cuasijurisdiccional).

tiva[976] y contenciosa[977], sean capaces de velar por el cumplimiento efectivo de la CADH en su dimensión ambiental. Esto ocurre en un momento histórico donde las afectaciones de derechos humanos en un contexto climático se agudizan y donde la inactividad estatal expande el circulo de impunidad. De allí que existe un imperativo para avanzar hacia nuevas reivindicaciones socio ambientales y climáticas en la región.

Tanto la CIDH como la CtIDH, juegan un papel crucial para acortar la brecha que separa a los países americanos de metas funcionales de mitigación a través de la protección de los derechos humanos y subsidiariamente de los componentes de la naturaleza. Claramente, la primavera climática necesita ir más allá de la jurisdicción nacional[978]. Como problema global es preciso contener la transformación acelerada del clima desde el ámbito internacional, particularmente desde los derechos humanos.

Precisamente, los derechos humanos permiten la implementación de fórmulas jurídicas vinculantes para hacer frente a aquellos Estados que no están dispuesto a modificar sus patrones de emisiones en detrimento de sus propios ciudadanos y de otros Estados. Los estándares ambientales internacionales fijados por la CtIDH, pueden ser los catalizadores para redefinir la protección del ambiente y ayudar significativamente a la estabilización del sistema climático en el bloque regional. Pero estos cambios solo pueden ser impulsados por personas naturales y jurídicas que tengan la legitimación para presentarse en Corte[979].

El florecimiento de los litigios climáticos nacionales[980], no es más que la proyección del reverdecimiento del derecho internacional de los derechos humanos en el derecho interno. A pesar de que la problemática del cambio climático antropogénico encontró en los derechos humanos una formula judicial exitosa a nivel nacional, esta conceptualización no ha logrado despegar del todo ante los tribunales internacionales. Hasta ahora, solo los tri-

976. CtIDH recordando además su importantísima función consultiva. Solicitud de Opinión Consultiva sobre Emergencia Climática y Derechos Humanos a la Corte Interamericana de Derechos Humanos de la República de Colombia y la República de Chile (9 ene 2023). (fecha de última consulta: 30 de noviembre de 2023): https://bit.ly/3CQwLsa.

977. CtIDH.

978. Futuras Generaciones v. la Presidencia de la República de Colombia, Álvarez v. Perú, Institute *Amazonian Studies* v. Brasil, PSB *et al.* v. Brasil., por citar algunas.

979. Artículo 44 CADH

980. Quienes invocaron el deber de protección de derechos fundamentales consagrados a nivel constitucional para enfrentar la insuficiente actividad del Estado frente al fenómeno cambio climático. Esto como un efecto espejo de la evolución de las obligaciones de los Estados en materia ambiental, específicamente aquellas derivadas de derechos humanos reconocidos universalmente. En cuanto al seguimiento de litigios climáticos y peticiones no judiciales enlazados con la protección de derechos humanos a nivel mundial hasta el 2020, véase: Savaresi, A. & Setzer, J. (2021), *ob. cit*.

bunales regionales de derechos humanos se han enfrentado a solicitudes de tutela, pero las mismas no superan la fase de admisibilidad, siendo uno de los mayores desafíos la demostración de la condición de víctima en relación con un daño directo.

La experiencia derivada de la presentación de solicitudes climática ante la Comisión Interamericana, como instancia de control previo a la jurisdicción de la CtIDH, permite identificar la construcción progresiva de un *locus Standi* climático. Esta evolución se ha producido a través de tres (3) peticiones emblemáticas. La primera, la petición del pueblo *Inuit v. Estados Unidos*. La segunda, la petición del pueblo *Athabaskan v. Canadá*, y la tercera, la petición de los niños del distrito residencial *Cité Soleil* v. *Haití*, estas dos últimas solicitudes de tutela climática aún pendientes de decisión ante la CIDH. Este apartado busca identificar cuáles son los filtros procesales que hasta ahora bloquean la admisión de este tipo de solicitudes en sede contenciosa.

Quizá el silencio inicial y la lentitud en la resolución de estas solicitudes de tutela se deba, por una parte, a la complejidad de la problemática abordada en términos de impacto político dentro de la Comisión y por la otra, a la dificultad de extender la legitimación para peticionar. Afortunadamente, ahora existe un terreno fértil para edificar un esquema robusto de responsabilidad climática accesible a los ciudadanos.

Es lo cierto, que en el presente tanto el derecho, como la interpretación las Cortes internacionales en materia de derechos humanos cuentan con interesantes abordajes jurídico-ambientales. En el caso del Sistema Interamericano desde el año 2001 reconoció la necesidad de proteger a una minoría étnica como son los pueblos y comunidades indígenas que requieren de la naturaleza elementos fundamentales para su subsistencia[981]. Es así como la protección de la propiedad colectiva de los pueblos indígenas y tribales ha creado una legitimación especial para enfrentar las problemáticas ambientales en la región.

En lo que respecta a la CIDH[982], debido a su funcionamiento fue el primer órgano del Sistema en conocer sobre la violación de los derechos humanos

981. Knox, J. H. (2009), *Ob. cit*. 185. El autor identifica este tipo de tratamiento dentro de la categoría de «members of certain groups enjoy rights in addition to the right not to be discriminated against».

982. Artículo 23 del Reglamento CIDH: «Cualquier persona o grupo de personas, o entidad no gubernamental legalmente reconocida en uno o más Estados miembros de la OEA puede presentar a la Comisión peticiones en su propio nombre o en el de terceras personas, referentes a la presunta violación de alguno de los derechos humanos reconocidos, según el caso, en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, la Convención Americana sobre Derechos Humanos 'Pacto de San José de Costa Rica, el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 'Protocolo de San Salvador, el Protocolo a la Convención Americana sobre Derechos Humanos Relativo a la Abolición de la Pena de Muerte, la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, la Convención

de comunidades indígenas en el marco de la amenaza climática. La aplicación de estas peticiones fue incentivada por el desarrollo jurisprudencial que desde hacía décadas venía creando la CtIDH, en materia de protección de pueblos indígenas y medio ambiente.

La semilla para asegurar el *Standi* climático en el presente, fue sembrada desde el momento en el cual la CtIDH amplió el concepto tradicional del derecho de propiedad. Tal cambio interpretativo no es casual, fue el resultado del complejo proceso de remoción gradual del marco utilitarista de la propiedad heredado del siglo XVIII[983] aplicado a un grupo sometido a una discriminación sistemática y estructurada dentro de su propio territorio. Es así como, en *Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni v. Nicaragua*[984], la Corte reconoció la dimensión colectiva del derecho de propiedad a favor de los miembros de la comunidad.

De esta manera comenzó a expandirse la tutela de la propiedad vinculándola con la cosmovisión indígena, es decir, considerando los elementos materiales y espirituales con el fin de dar respuesta a la necesidad de «preservar su legado cultural y transmitirlo a las generaciones futuras»[985], a través de la protección de su territorio[986], aunque reconociendo los límites de este derecho.

El criterio antes expuesto se ha sido ampliado por la CtIDH a lo largo del tiempo[987]. En el año 2005, se pronunció sobre caso *Comunidad Indígena Yakye Axa v. Paraguay*[988], para entrelazar el concepto de territorios colectivos

---

Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer 'Convención de Belém do Pará', conforme a sus respectivas disposiciones, el Estatuto de la Comisión y el presente Reglamento. El peticionario podrá designar en la propia petición, o en otro escrito, a un abogado u a otra persona para representarlo ante la Comisión».

983. Coyle, S. & Morrow, K. (2004). *The philosophical foundations of environmental law: property, rights and nature*. Oxford: Hart Publishing., 107-108.

984. CtIDH. Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni v. Nicaragua, Fondo, Reparaciones y Costas (Ser. C) No. 79, (31 ago. 2001).; CtIDH. Pueblo Saramaka v. Surinam, Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas (Ser. C) No. 172 §93. (28 nov. 2007).; CtIDH. Pueblo Indígena Kichwa de Sarayaku v. Ecuador, Fondo, Reparaciones y Costas (Ser. C) No .245 (jun. 27, 2012).; CtIDH. Asociación Lhaka Honhat v. Argentina, Fondo, Reparaciones y Costas (Ser. C) No 400. § (6 Feb. 2020).

985. CtIDH. Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni v. Nicaragua, Fondo, Reparaciones y Costas (Ser. C) No. 79, § 149 (31 ago. 2001).

986. Ferrer Mac-Gregor, E., (2020) «Lhaka Honhat y los derechos sociales de los pueblos indígenas», *Revista Electrónica de Estudios Internacionales*, 39, 1-5. Recuperado de: https://bit.ly/3iXNakj

987. CtIDH. Pueblo Indígena Kichwa de Sarayaku v. Ecuador, Fondo, Reparaciones y Costas (Ser. C) No .245 (27 jun. 2012)

988. CtIDH. Comunidad Indígena Yakye Axa v. Paraguay, Fondo, Reparaciones y Costas (Ser. C) No. 125, (17 jun. 2005).

con la realización de los DESCA y otros derechos civiles[989]. Esta línea jurisprudencia que fue reafirmada también en *Pueblo Saramaka. v. Surinam* (2007), incorporando elementos de vital importancia como las obligaciones de procedimiento con relación a la consulta y consentimiento previo, así como la evaluación de impacto ambiental, esta última dentro de las garantías de no repetición. En el año 2012, el caso *Pueblo Indígena Kichwa de Sarayaku v. Ecuador*[990], le brindó a la Corte la oportunidad de ampliar el tratamiento del derecho de propiedad y el medio ambiente, lo que le ha dado pie a la CtIDH para expandir la interpretación de la CADH a través del *corpus iuris*[991]internacional ambiental en posteriores decisiones como en la sentencia *Pueblos Kaliña y Lokono v. Surinam*[992].

Es así como, la CtIDH ha reafirmado las obligaciones de los Estados con relación al respeto de la propiedad comunal y a las posibles perturbaciones causadas por proyectos desarrollados dentro de los territorios indígenas o tribales. De manera tal que ha permitido la expansión del tratamiento de los derechos humanos en un contexto ambiental de dos colectivos excluidos en la región, los pueblos indígenas y tribales. El *locus standi* en juicio de estas comunidades ante la CtIDH ha evolucionado, pues no se trata solo de peticiones individuales, sino que la Corte ha dado paso a la restauración de poblaciones enteras[993].Aunque debe recordarse que, en el presente, la víctima no tiene capacidad procesal para presentar por sí misma las demandas ante la CtIDH, pero se hace parte del proceso una vez la demanda es admitida.

Esta corriente de interpretación pro-derechos indígenas y medio ambiente como era de esperarse, dio paso a la interposición de denuncias climáticas ante la CIDH. Esto debido a que el cambio climático es un tipo de degra-

989. CtIDH. Comunidad Indígena Yakye Axa v. Paraguay, Fondo, Reparaciones y Costas (Ser. C) No. 125, §167 (17 jun. 2005).

990. CtIDH. Pueblo Indígena Kichwa de Sarayaku v. Ecuador, Fondo, Reparaciones y Costas (Ser. C) No .245 (27, jun. 2012)

991. La CtIDH ha definido en varias oportunidades el concepto de corpus iuris, véase: La condición jurídica de los migrantes indocumentados OC 18-03 (Ser. A) No. 18, §120 (7 Sep. 2003).; y Derecho a la información sobre asistencia consular OC 16-99 (Ser. A) No. 16 §115 (1 oct. 1999). «El corpus juris del Derecho Internacional de los Derechos Humanos está formado por un conjunto de instrumentos internacionales de contenido y efectos jurídicos variados (tratados, convenios, resoluciones y declaraciones). Su evolución dinámica ha ejercido un impacto positivo en el Derecho Internacional, en el sentido de afirmar y desarrollar la aptitud de este último para regular las relaciones entre los Estados y los seres humanos bajo sus respectivas jurisdicciones».

992. CtIDH. Pueblos Kaliña y Lokono v. Surinam, Fondo, Reparaciones y Costas (Ser. C) No. 309. (nov. 25, 2015).

993. Tinta, M. F. (2006). «La víctima ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos a 25 años de su funcionamiento». *Revista Instituto Interamericano de Derechos Humanos*, *43*, 159-203. Véase: Artículo 50 Reglamento CtIDH.

dación ambiental manifestado en una crisis de derechos humanos[994]. Debe aclararse que, a pesar de que la Corte ha centrado casi por completo el tratamiento de cuestiones ambientales sobre pueblos indígenas también ha formulado estándares de protección para otros grupos en los fallos *Salvador Chiriboga v. Ecuador*[995], en materia de defensores ambientales *Kawas Fernández v. Honduras*[996], *Luna López v. Honduras*[997], *Baraona Bray v. Chile*[998]. Mientras que sobre el derecho de acceso a la información ambiental se pronunció en *Claude Reyes v. Chile*[999].

También se tejen interesantes perspectivas alrededor de conceptos como equidad intergeneracional[1000] y solidaridad[1001], principios que auspician la protección de los derechos ambientales «de múltiples grupos a nivel Inter temporal e Inter dimensional»[1002]. De lo anterior se desprende que, a partir del año 2005, la región americana comenzó a construir una ruta hacía este tipo particular de litigaciones climáticas, donde nuevos sujetos se están convirtiendo en auténticos promotores de cambio ambiental e impulsando el florecimiento de litigaciones climáticas.

En esta categoría también deben incluirse los niños y niñas (quienes representan a las futuras generaciones), en relación a la Inter temporalidad de sus derechos humanos[1003], pues tal y como lo señalan los Principios Maas-

---

994. Special Rapporteur on human rights and the environment. Policy Brief No. 5 sobre un llamado a la implementación de un enfoque de derechos humanos en las finanzas climáticas (nov. 2023). El sr. Boyd reconoce *«The climate crisis is a human rights crisis. The situation for billions of people is already dire today and will be worse tomorrow and, in the years, ahead unless the world wakes up and takes urgent actions that are long overdue».*

995. CtIDH. Caso Salvador Chiriboga v. Ecuador, Excepción Preliminar y Fondo (Ser. C) No. 179 (6 May 2008).

996. CtIDH. Kawas Fernández v. Honduras, Fondo, Reparaciones y Costas. (Ser. C) No. 196. (3 abr. 2009).

997. Luna López v Honduras, Fondo, Reparaciones y Costas. (Ser. C) No. 269. (10 Oct. 2013)

998. *Baraona Bray v. Chile*. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas, (Ser. C) No.481, §114 (24 nov. 2022).

999. CtIDH. Claude Reyes v. Chile, Fondo, Reparaciones y Costas. (Ser. C) No. 151 (19 Sep. 2006).

1000. CtIDH. OC 23/17. §59.; CtIDH. Comunidad Garífuna de Punta Piedra y sus miembros v. Honduras, Fondo, Reparaciones y Costas (Ser. C) No. 304 §166 (8 oct. 2015).; CtIDH. Pueblos Kaliña y Lokono v. Surinam, Fondo, Reparaciones y Costas (Ser. C) No. 309. §189 (25 nov. 2015).; CtIDH. Bámaca Velásquez V. Guatemala. Reparaciones y Costas (Ser. C) No. 91 §81 (22 Feb. 2002).

1001. Véase: Llano-Alonso, F. (2020). «Sobre la solidaridad como concepto, valor y principio». En: A. Sánchez-Bravo. & D. Sánchez-Rubio., (Eds.) *Temas de teoría y filosofía del derecho en contextos de pandemia*. (pp. 55-77) Madrid: Dykinson.

1002. Giménez. I. (2022), *Ob. cit*.

1003. Petition and request for precautionary measures CIDH. Six childrend of Cité Soleil Haití and Sakala Community Center for peaceful alternative petitioners. (2021).

tricht[1004], ningún instrumento internacional de derechos humanos «contiene una restricción temporal ni limita los derechos a la actualidad»[1005]. Por lo tanto, se entiende que los derechos humanos se extienden a la humanidad, sin discriminación entre las generaciones presentes y futuras.

Como se verá a continuación, la jurisprudencia del Sistema Interamericano ha abonado el camino de las posibles víctimas climáticas para que puedan tener legitimidad como peticionarios. Estos avances muestran que el Sistema Interamericano representa una vía útil para hacer frente al incumplimiento de los Estados en relación no solo a los derechos indígenas, sino que permite la incorporación de la tutela del medio ambiente y subsidiariamente del clima. Este es un proceso que tiene su propio tiempo de gestación, actualmente se encuentra en sus primeras etapas.

Petición 1413-05 Sheila Watt-Cloutier

En lo que respecta a la Petición 1413-05 Sheila Watt-Cloutier con el soporte del *Inuit Circumpolar Conference v. Estados Unidos*[1006] (2005), los representantes del pueblo indígena *Inuit* alegaron que sus derechos a la vida e integridad cultural estaban siendo directamente afectados por el cambio climático, cuyo principal emisor era los Estados Unidos[1007]. Para los peticionarios el calentamiento global representaba un medio para la destrucción del Ártico y por ende de la forma de vida tradicional de las comunidades que habitaban la región[1008]. Para los *Inuit*, tales eventos climáticos alteraban sus actividades de caza, recolecta y almacenamiento de alimentos, así como también sus vínculos con el territorio, espacio de interacción social donde desplegaban sus tradiciones y prácticas ancestrales, con lo cual se causaba una seria afectación a su cultura y vida.

1004. Maastricht Principles on The Human Rights of Future Generations (3 Feb. 2023).

1005. Véase el preámbulo de Maastricht Principles on The Human Rights of Future Generations (3 Feb. 2023).

1006. Petition 1413-05 CIDH. Sheila Watt-Cloutier with support of Inuit Circumpolar Conference v. United State of America (2005).

1007. Estados Unidos firmó la CADH el 1 de junio de 1977, pero nunca ratificó el instrumento ni aceptó la competencia de la CtIDH. Véase: OEA & CtIDH (2008). EN consecuencia, la CIDH solo puede evaluar presuntas violaciones de los Derechos consagrados en la Declaración Americana contra Estados Unidos.

1008. Un análisis profundo de esta petición ha sido elaborado por: Jodoin, S. Snow, S. & Corobow, A. (2020). «Realizing the right to be cold? Framing processes and outcomes associated with the Inuit petition on human rights and global warming». *Law & Society Review*, *54*(1), 168-200. *«[…]the petition articulated a novel ´climate rights´ frame that, like the broader climate justice frame, emphasizes the moral dimensions of climate change by stressing its costs and consequences for particular communities and bringing to the forefront the voices of marginalized communities. In particular, the climate rights frame advanced in the petition focuses attention on the human rights impacts of climate change for Inuit communities and the related obligations of states who are responsible for these impacts under international law».*

Además, los peticionarios señalaron que el calentamiento global generado por factores antropogénicos era el causante de un marcado aumento de las temperaturas, cuestión que a su vez generaba el progresivo deshielo marino, de los glaciares, del *permafrost* y el aumento del nivel del mar. Tales eventos climáticos perturbaban de forma permanente el hábitat humano y de las especies de las cuales dependían los *Inuit*. De esta manera el pueblo indígena denunció el riesgo concreto frente a severos daños a la salud a causa del desabastecimiento y disminución de la calidad del agua[1009].

Igualmente, los *Inuit* basaron su reclamo en la exacerbación del riesgo de padecer de enfermedades endémicas, así como daños a la salud mental en virtud de la inestabilidad del clima del Ártico sobre su comunidad. Para los peticionarios, Estados Unidos era internacionalmente responsable por ser el mayor emisor de gases de efecto invernadero, específicamente de CO_2, por lo cual sus emisiones históricas y per-capital representaban la principal causa del deterioro del ecosistema Ártico. Por ende, le consideraban la fuente generadora de la amenaza a los derechos humanos de los Inuit.

En este caso, la base legal de la petición fue la DADDH[1010], la cual amparaba a los *Inuit* en la protección del derecho a su cultura, al disfrute pacifico de su territorio, de sus tradiciones, derecho a la salud, vida, integridad física, seguridad, el derecho a la libertad ambulatoria e inviolabilidad del hogar. Además, los peticionarios incorporaron en su solicitud la violación de una serie de principios de derecho ambiental internacional, entre ellos: el de sostenibilidad y aproximación precautoria, así como la transgresión de la obligación internacional de no causar daños ambientales transfronterizos. Todo ello, en el marco del incumplimiento de los acuerdos internacionales del clima vigentes para Estados Unidos en el momento.

Ante tales hechos, los *Inuit* consideraban por un lado que, Estados Unidos tenía la obligación de remediar las violaciones al derecho internacional causadas por su conducta omisiva, traducida en la deficiente adopción de normas y políticas climáticas que abordaran de forma eficiente la problemática. Por otro lado, observaban que la actuación concreta de Estados Unidos estuvo orientada a minimizar los hallazgos científicos que ponían en evidencia el aumento desproporcionado del riesgo climático, aunado al despliegue de una conducta no cooperativa para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero a nivel global.

1009. Posteriormente, en el año 2017 la Corte reafirmó que son condiciones necesarias para una vida digna el gozar de acceso al agua de calidad, alimentación, salud y a la protección del medio ambiente. Véase: CtIDH. OC 23/17, 109.

1010. Véase: Declaración Americana: Artículo I (Derecho a la vida, a la libertad, a la seguridad e integridad de la persona), Artículo VIII (Derecho de residencia y tránsito), Artículo IX (Derecho a la inviolabilidad del domicilio), Artículo XI (Derecho a la preservación de la salud y al bienestar), Artículo XIII (Derecho a los beneficios de la cultura), Artículo XXIII Derecho a la propiedad.

Esta petición fue rechazada por la CIDH, al considerar que no cumplía los parámetros necesarios para superar la revisión inicial establecida en el artículo 26 del Reglamento de la CIDH[1011]. Específicamente, por una falla en el establecimiento de violaciones concretas de la Declaración Americana, por lo cual no entró a conocer el fondo del caso[1012]. En suma, la petición no pudo avanzar más allá, pues los representantes del pueblo Inuit no lograron identificar como Estados Unidos había violentado la DADDH y la correspondiente relación de causalidad entre el cambio climático y el daño[1013].

Aunque el caso no prosperó, de la experiencia se puede rescatar que la conexión entre las violaciones ambientales con los derechos consagrados en los instrumentos interamericano es un imperativo superable a través de la invocación de monitorio de las obligaciones de medio de los Estados para de la DADHH.

Superar el complejo análisis de admisibilidad jurídico ante la CIDH implica identificar dos estructuras de atribución diferentes, ninguna de ellas expuestas exitosamente en la petición presentada. La primera, hasta ahora la única aceptada en litigios nacionales, pasa por demandar el cumplimiento de los estándares de diligencia debida[1014] en materia ambiental. La segunda, a su vez subdividida en tres partes implica: a) individualizar un evento climático concreto[1015], en el caso de los Inuit el deterioro de las capas del hielo del Ártico; b) crear una línea temporal donde se especifique el momento preciso de ocurrencia de tal suceso o por lo menos, la progresión del evento climático a lo largo de un *iter* temporal demostrable[1016], y c) establecer un vínculo plausible entre la conducta del Estado y el deterioro causado por el cambio climático sobre los derechos humanos afectados[1017].

1011. Véase: Reglamento CIDH

1012. CIDH Decision 1413-05 Sheila Watt-Cloutier with support of Inuit Circumpolar Conference v. United State of America (16 Nov. 2006).

1013. Knox, J. H. (2009), *Ob. cit*. 165. *«Despite the factual and legal support the petition provided for its assertions, the Inter-American Commission said that it was not possible to process the complaint 'at present'. In explanation, the Commission stated only that "the information provided does not enable us to deter- mine whether the alleged facts would tend to characterize a violation of rights protected by the American" Declaration"».*

1014. Sobre la aplicación del principio de diligencia debida en el derecho ambiental internacional véase: Krieger, H., Peters, A. & Kreuzer, L. (2020). *Due Diligence in the International Legal Order*. Oxford: Oxford University Press.

1015. Viñuales, J. E. (2016). «A human rights approach to extraterritorial environmental protection?» En: Butha, N. (ed.) *The frontiers of human rights: extraterritoriality and its challenges* (pp. 177-221). Oxford: Oxford University Press. Véase en el mismo sentido: Maljean-Dubois, S. (2018), *Ob. cit*.

1016. Viñuales, J. E. (2016), *Ob. cit*.

1017. Véase en este sentido a Viñuales, J. E. (2016), *Ob. cit*. *«The causality inquiry has two main components in this more localized context: linking state action or inaction to such threats or degradation (first link) and linking the latter to an individual impairment of a human right (second link)».*

En suma, la petición presentada, por el pueblo indígena solo logró establecer una correlación entre las emisiones históricas y el aumento progresivo de la temperatura[1018]. Además, los *Inuit* fallaron en establecer el vínculo entre el cambio climático, la actuación del Estado con relación a la vulneración de Declaración Americana como consecuencia del deterioro del Ártico.

Por otra parte, con relación a cuestiones de naturaleza procedimental ante la CIDH, debe tenerse en cuenta para futuras denuncias que la violación de una obligación de profunda gravedad requiere demostrar elementos de tipo estratégicos que favorezcan a la visibilizarían del caso en la región. Entre ellos, los solicitantes deben manifestar la necesidad de allanar el tema climático ante la Comisión y los Estados Americanos.

Asimismo, ante el objetivo de superar el informe de fondo debe exponerse la necesidad de elevar la problemática hasta la CtIDH, por ser un asunto sin tratamiento suficiente, pero de especial trascendencia para la región. Esto a los fines de demostrar que una decisión de la CtIDH[1019] tendría un impacto significativo en los sistemas nacionales de los Estados que integran el Sistema.

Además de los elementos objetivos del proceso, las razones expuestas tienen un peso extraordinario al momento de admitir y posteriormente decidir una denuncia ante la CIDH, pues este órgano realiza la ponderación de intereses en juego y selecciona los pocos casos que efectivamente merecen un tratamiento pormenorizado por parte de la CtIDH. Estos criterios van acompañados de la naturaleza controvertida del tema, la necesidad de un desarrollo interpretativo y del interés de los órganos interamericanos de sentar un nuevo parámetro de conducta para los Estados.

A pesar de lo expuesto anteriormente, esta petición climática aportó significativamente al avance de los litigios climáticos a nivel global. En lo que respecta al mérito, esta solicitud trae una interesante lección: Ante futuras solicitudes, es fundamental el establecimiento de una argumentación que permita articular la competencia de la CIDH y posteriormente de la CtIDH. Lo anterior implica sin lugar a duda, la invocación del *corpus iuris* internacional en materia ambiental.

Asimismo, la referencia a la OC 23-17 donde precisamente se aprecia una labor interpretativa expansiva para abordar las cuestiones asociadas a problemas ambientales complejas, argumentos soportados por visiones alternativas, que ya encuentran recepción en la más reciente jurisprudencia contenciosa sobre medio ambiente. De manera tal que sea posible articular la violación

1018. Viñuales, J. E. (2016), *Ob. cit*. «[…] of note is the fact that whereas the first causal link could be addressed scientifically, albeit through 'correlation', the second link seemed far more difficult to bridge in this way».

1019. La identificación de caso contencioso contra un Estado parte de la CADH que cumpla con estos criterios ha sido una tarea titánica, de allí la decisión de acudir a la vía consultiva para obtener un dictamen.

bidireccional tanto de la DADDH como de la CADH, para enlazar con el aporte de los instrumentos del clima[1020] y de derecho ambiental internacional.

Es fundamental que, en futuras solicitudes, los peticionarios y sus representantes sean capaces demostrar la existencia de una afectación directa, concreta, personal y determinada en asociación a la vulneración de uno o varios derechos consagrado en los instrumentos base del Sistema Declaración Americana, según corresponda[1021]. Bajo estos términos, el eje central de una petición de esta naturaleza siempre deben ser los derechos humanos severamente impactados por el cambio climático peligros y las alteraciones del entorno[1022] (riesgo grave e inminente).

Así las cosas, el principio de especialidad por la materia «climática», dejaría de represente un obstáculo y se convertiría en un aliado para la protección de los derechos humanos en un contexto ambiental[1023]. Por consiguiente, ante las solicitudes pendientes, deberán sumarse la superación definitiva de las enseñanzas anteriores, así como la demostración del agotamiento de recursos internos[1024], la condición de víctimas y el detrimento surgido por la falta de adopción de medidas de mitigación y adaptación frente al peligro climático que recae sobre los miembros de la comunidad. A falta de ello, le será imposible entrar a considerar a la CtIDH como vía adecuada para tratar la problemática.

Petición Athabaskan v. Canadá

En lo referente a la petición de los *Athabaskan* por el calentamiento del Ártico y deshielo causado por las emisiones de carbono negro de Canadá[1025]

1020. La aplicación de este último está supeditada al ámbito de vigencia del tratado.

1021. Como se señaló con anterioridad la CIDH solo se podía limitar a la identificación de violaciones contenidas en la Declaración Americana. Sin embargo, en caso de Estados Parte de la CADH existiría un margen de maniobra superior para justificar la existencia de violaciones y por lo tanto elevarlo a la CtIDH. En la misma línea se pronunció el TEDH en Cangi *et al*. v. Türkiye (no. 48173/18), ECHR 14.11.23 §§36-38.

1022. CtIDH. OC 23/17, §133. «[…] en el marco de las relaciones interestatales, las obligaciones que impone son similares al deber general de prevenir violaciones de derechos humanos. Por tanto, la Corte reitera que la obligación de prevención aplica para daños que puedan ocurrir dentro o fuera del territorio del Estado de origen»

1023. En todo caso debe privar la ley especial en este caso sobre derechos humanos por ser el punto focal de protección del individuo, aunque conectada con el régimen especial del clima. Véase: Artículo 103 Carta de Naciones Unidas.

1024. Aunque en el caso de pueblos indígenas aparecen elementos a considerar por la CtIDH como los son la sistemática discriminación histórica, sesgos raciales sobre estos pueblos y la ausencia de recursos judiciales para tutelar derechos colectivos.

1025. Petition CIDH. Seeking relief from violations of the rights of arctic Athabaskan peoples resulting from rapid Arctic warming and melting caused by emissions of black carbon by Canada. Athabaskan People Law v. Canada (23 abr. 2013).

(2013), esta solicitud, también forma parte de las primeras etapas del acceso a la justicia climática a nivel internacional. Nuevamente, es un pueblo indígena quien presenta la segunda petición de tutela ante la CIDH. Esta denuncia pendiente de admisión busca consolidar una nueva vertiente interpretativa para las obligaciones ambientales de Canadá[1026], con relación al derecho de propiedad comunal indígena y su conexión con la estabilidad climática.

Esto no es casual, ya que la petición corresponde al enfoque jurisprudencial que ha venido desarrollando la CtIDH con relación a la dimensión colectiva del derecho de propiedad y a su profunda comprensión de la cosmovisión de los pueblos indígenas en América Latina. Ecuación interpretativa de protección que es trasladable *mutatis mutandis* a la apreciación de presuntas violaciones que realiza la CIDH durante el examen preliminar de peticiones.

En su rol de velar por la garantía y protección de los derechos humanos, ambos órganos del Sistema venían defendiendo la interdependencia de los derechos civiles y políticos en relación con los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales «DESCA», especialmente en el caso de las comunidades indígenas. A partir de lo cual, creció una corriente interpretativa que transformó el concepto de propiedad clásico.

De allí que, los *Athabaskan*[1027] utilizaran esta aproximación con el fin de extender la efectividad de la protección de los derechos de su pueblo en relación con los derechos a la salud, el medio ambiente y la cultura. Esta petición es el resultado de la madurez de las ideas esbozadas ocho años atrás en la petición *Inuit*, soportada por las audaces interpretaciones de la CtIDH antes del 2013. Factores que motivaron a este pueblo a impulsar una solicitud de tutela climática mejorada.

A diferencia de la petición *Inuit*, los representantes del pueblo *Athabaskan* trataron de establecer como causa concreta para el calentamiento acelerado y transformación del ecosistema Ártico, el carbono negro emitido por Canadá. En este sentido, plantearon que las regulaciones canadienses sobre este gas de efecto invernadero eran escasas, fragmentadas e insuficientes. Por lo cual, Canadá causaba una afectación directa sobre el terri-

1026. Canadá es miembro de la OEA desde 1990, como Estado miembro, la CIDH da seguimiento a la evolución de los derechos humanos en este país. En el marco de su competencia la CIDH solo puede considerar presuntas violaciones de los derechos consagrados en la Declaración Americana y emitir recomendaciones.

1027. Véase el análisis crítico entre esta petición y la formulada por el pueblo Inuit en el trabajo desarrollado por: McCrimmon, D. (2016). «The Athabaskan Petition to the Inter-American Human Rights Commission: using human rights to respond to climate change». *The Polar Journal*, *6*(2), 398-416. Véase igualmente: de la Rosa-Jaimes, V. (2015). «The Arctic Athabaskan petition: where accelerated Arctic warming meets human rights». *California Western International Law Journal*, 45(2), 213-260.

torio indígena y por ende sobre sobre su tradición cultural, modo de vida y prácticas de subsistencia[1028]. Esto representaba una afectación de los derechos humanos de los miembros que integraban la comunidad.

Es interesante destacar que esta petición encuentra cierto paralelismo con la decisión adoptada por el Tribunal Nacional Verde de la India para hacer frente a la degradación ambiental producida en el Estado Himachal Pradesh[1029]. Por lo cual, en este caso se darían las condiciones teóricas para que la CIDH haga uso de la positiva experiencia del Tribunal Verde, donde precisamente el carbono negro estaba causando el deshilo acelerado de las capas de nieve del Himalaya y afectando severamente la estabilidad de este preciado espacio.

Entre los impactos climáticos alegados por los *Athabaskan* se encontraban el aumento de las temperaturas, el incremento de las precipitaciones, la reducción de la nieve y el hielo, el deshielo del permafrost, incendios, aumento de plagas, impacto en la salud y alimentación de la población a causa de las transformaciones del ecosistema. Era precisamente en la transformación del entorno, donde se encontraba un vínculo directo entre el cambio climático antropogénico y la identificación de afectaciones a los derechos humanos de los miembros de la comunidad. Puntualmente, los *Athabaskan* expusieron que la disminución de especies alimenticias tradicionales afectaba su subsistencia diaria, ya que el pueblo dependía en 65 % de esta dieta tradicional.

Igualmente, incorporaron otros daños en materia de infraestructura. Los peticionarios invocaron la violación de la DADDH, por la vulneración especifica del derecho a la salud y del derecho a la vida, como consecuencia de daños ambientales causados por las condiciones climáticas extremas. Así como de la vulneración de la integridad cultural de los *Athabaskan* a la luz de la violación del derecho de propiedad en su dimensión colectiva, el cual trae implícito el derecho al disfrute pacifico de sus territorios indígenas[1030]. Por otra parte, hicieron alusión a la violación de principios internacionales de derecho ambiental, así como a la obligación de no causar daños transfronterizos a otros Estados[1031].

1028. Esta argumentación ha servido de inspiración para los argumentos analizados en el capítulo segundo.

1029. Green National Tribunal on its own motion Sher Singh v. State of Himachal Pradesh *et al*. (6 Feb. 2014). Caso abortado en el capítulo II de este libro.

1030. Véase el paralelismo con: CCPR/C/135/D/3624/2019. Daniel Billy *et al* v. Australia (21 jul. 2022).

1031. Aspectos sobre los cuales la CtIDH ya ha prestado atención en la OC 23/17 y sobre los cuales se han planteado una seria de preguntas específicas en la nueva solicitud de OC ante la CtIDH.

Esta petición a pesar de haber sido instaurada en el año 2013 se encuentra pendiente[1032]. En suma, su objetivo es obtener un informe por parte de la Comisión que permita detener el daño ambiental progresivo que sigue causado el carbono negro, así como la declaratoria de que Canadá ha fallado en su deber de cuidado en cuanto a la adopción de medidas suficientes para reducir la incidencia de este gas de efecto invernadero sobre el Ártico[1033].

A la luz de la interpretación progresiva que ha venido realizando el Sistema Interamericano en materia de derecho ambiental y pueblos indígenas en las últimas dos décadas, la petición de los *Athabaskan* tiene interesantes proyecciones de éxito[1034]. El reconocimiento del «innegable vínculo entre la protección del medio ambiente y la realización de otros derechos humanos»[1035] es un elemento esencial para el tratamiento de asuntos climáticos que sean presentados para su conocimiento en estos tiempos.

Igualmente, la CtIDH ha aceptado el valor de los pronunciamientos realizados por la OEA[1036,] así como de las resoluciones del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, así como las manifestaciones provenientes de otros órganos de protección con relación al efecto de la degradación ambiental y el cambio climático en el disfrute efectivo de derechos fundamentales[1037]. En estos pronunciamientos además se puede detectar una intención generalizada en la que se reafirman los compromisos climáticos e

1032. Es interesante considerar que los órganos del Sistema exigen a los Estados Parte el pronunciamiento en un período razonable de tiempo. Sin embargo, los procedimientos ante la CIDH y la CtIDH no está sometidos a este elemento integrante del debido proceso. Lo cual resulta paradójico, pues a la larga representa otra barrera para el acceso a la justicia en materia ambiental.

1033. Declaración Americana: Artículo XI sobre el derecho a la salud, artículo XIII relativo al derecho al beneficio cultural, artículo XXIII correspondiente al derecho de propiedad. La petición tiene como brindar mayor protección a los *Athabaskan* en lo que respecta al goce del beneficio de su cultura, de su propiedad ancestral y a la salud.

1034. Dado los antecedentes jurisprudenciales de la Corte en los casos: CtIDH. Pueblo Indígena Kichwa de Sarayaku v. Ecuador, (Ser. C) Res. 4/2/2010, 17/6/2005 y 6/7/2004.; CtIDH. Comunidad Indígena Sawhoyamaxa v. Paraguay, Fondo, Reparaciones y Costas (Ser. C) No. 146, (29 Mar. 2006)., CtIDH. Pueblo Saramaka v. Surinam, Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas (Ser. C) No. 172 (28 nov. 2007).; CtIDH. Comunidad Indígena Xákmok Kések v. Paragua, Fondo, Reparaciones y Costas (Ser. C) No .214, (24 ago. 2010).; CtIDH. Asociación Lhaka Honhat v. Argentina, Fondo, Reparaciones y Costas (Ser. C) No 400. (6 Feb. 2020). Solo por mencionar algunos de los más significativos.

1035. CtIDH. Kawas Fernández v. Honduras, Fondo, Reparaciones y Costas. (Ser. C) No. 196. §148 (3 abr. 2009).

1036. OEA. OEA Doc. AG/ RES 2429. «Derechos humanos y cambio climático en las Américas», (3 jun. 2008). Recuperado de: https://bit.ly/3Nwalve.; OEA. OEA Doc AG/RES. 2588. «El cambio climático en los países del hemisferio» (7 jun. 2011). Recuperado de: https://bit.ly/3qJA9iV.; OEA. OEA Doc AG/RES. 2818. «El cambio climático en el marco del desarrollo sostenible en el hemisferio» (4 jun. 2014). Recuperado de: https://bit.ly/3DjtaCw.

1037. CtIDH. Kawas Fernández v. Honduras, Fondo, Reparaciones y Costas. (Ser. C) No. 196. §148 (3 abr. 2009).

invitan a continuar en el fortalecimiento de los derechos humanos, marcando de esta manera una pauta para la expansión progresiva a favor de la estabilización del sistema climático.

La anterior fue abordada con en la OC 23/17[1038], referencia que le da mayor fuerza, permitiendo extraer con claridad la interrelación de los derechos humanos y el medio ambiente, de la cual se deduce que la presencia del cambio climático peligroso es una amenaza hacia los derechos humanos y requiere de tratamiento a través de múltiples instrumentos de protección ambiental y de derechos humanos a nivel global.

Por otra parte, dado el planteamiento de los peticionarios, la CIDH cuenta con las herramientas jurídicas necesarias, así como con experiencias jurídicas similares[1039] para evaluar la diligencia del Estado en el marco de sistemas jurídicos hermanos. Los ejemplos exitosos han logrado identificar afectaciones clave a los derechos humanos. Estos iluminan el camino hacia la elaboración de un esquema responsabilidad climática interamericana por vía refleja de la Declaración. De esta manera, los desafíos de la petición de este pueblo indígena más que en los antecedentes se localizan en superar las cuestiones de procedimentales naturales de la fase previa a la admisibilidad.

En todo caso, en esta petición los representantes de las presuntas víctimas deberán enfocar su batería argumentativa en demostrar que no aplica la exigencia de agotamiento de los recursos internos, cuestión tremendamente compleja contra un Estado como el canadiense[1040]. En este sentido, deberán apostar a la fórmula de inefectividad de los recursos. En lo que respecta al reconocimiento del estatus de víctimas y desventaja significativa[1041] frente a los embates del cambio climático, quizá serían cuestiones menos problemáticas de trabajar, dadas las características propias del caso, además de las interesantes aproximaciones que siguen surgiendo para tratar supuestos similares alrededor del mundo. Si la CIDH encuentra la vulneración de derechos del pueblo *Athabaskan*[1042], esto influenciará positivamente las políticas y acciones gubernamentales no solo de Canadá, sino que repercutirá sobre los demás Estados de la OEA.

1038. CtIDH. OC 23-17

1039. Tales como la interesante aportación generada por la decisión del caso Urgenda v. State of the Netherlands o el caso Futuras Generaciones v. Colombia.

1040. Hasta el 30 de noviembre de 2023 se han instaurado (35) litigios climáticos entre centrales y periféricos según la base de datos del Sabin Center Climate Change Law. En consecuencia, como el Estado puede argumentar que las presuntas víctimas tratan de utilizar a la CtIDH como una cuarta instancia, privándole la oportunidad de brindar remedios efectivos dentro de su propia jurisdicción.

1041. Esto con relación a la adopción de medidas de mitigación y/o adaptaciones tomadas por Canadá.

1042. De la Rosa-Jaimes, V. (2014), *Ob. cit*. 233. Debe tenerse en cuenta que: «The role of the IACHR is important because these recommendations are not only expected to be implemented, but also to influence government policies and actions».

Petición planteada por los de los niños y niñas en Cité Soleil Haití

Con respecto a la petición planteada[1043], en fecha 4 de febrero de 2021 un grupo de niños de nacionalidad haitiana presentaron una petición ante la CIDH contra Haití[1044], en la cual se aborda la presunta violación de derechos humanos a causa del cambio climático. Aunque ciertamente, es un caso que entra en la categoría de litigio climático periférico[1045], plantean un interesante tratamiento de la cuestión climática.

Esta novísima solicitud de control presentada resulta de vital importancia, ya que pone de manifiesto la afectación directa que padece el grupo vulnerable compuesto por niñas y niños[1046], siendo la primera vez que se realiza una petición intergeneracional ante el Sistema Interamericano. Los peticionarios consideraron que son la categoría más afectada por la contaminación proveniente de desechos sólidos, del agua, de humos tóxicos y por ende son los receptores del impacto de este deterioro ambiental y climático, lo cual incide directamente sobre la salud física y psicológica de los solicitantes[1047].

Para ellos, el fenómeno cambio climático es producto de una alteración antropogénica prevenibles o al menos contenibles, sin cuyo tratamiento ven reducidas sus oportunidades de educación, su estructura comunitaria, su seguridad alimentaria, acceso al agua y hasta la manera en la que interactúa a través del núcleo familiar. Igualmente, alegaron que el cambio climático afecta sus derechos de acceso a la información y el acceso a la justicia.

En lo que respecta a la base legal invocada por los peticionarios para tratar la cuestión de cambio climático, la misma se concentra en el derecho a la protección de la dignidad (Art. 11.1 CADH), a su vez sustentado en el goce

---

1043. Petition and request for precautionary measures CIDH. Six childrend of Cité Soleil Haití and Sakala Community Center for peaceful alternative petitioners. (2021). Recuperado de: https://climatecasechart.com/non-us-case/petition-to-the-inter-american-commission-on-human-rights-seeking-to-redress-violations-of-the-rights-of-children-in-cite-soleil-haiti/

1044. Haití es parte de la Convención Americana desde el 27 de septiembre de 1977 y aceptó la jurisdicción de la CtIDH desde el 20 de marzo de 1998.

1045. Lin, J. (2015). «Climate change litigation in Asia and the Pacific». En: Van G, Calster, G, Vandenberghe & L, Reins. *Research handbook on climate change mitigation law* (pp. 581-584) Cheltenham: Edward Elgar Publishing.

1046. En total la petición fue presentada por (6) seis niños y niñas. Los peticionarios no fueron identificados por temor a represalia y serán presentados a solicitud de la CIDH. Cabe destacar que la individualización de las víctimas es esencia dentro del proceso interamericano, ya que no se trata de violaciones masivas o colectivas ocurridas en el marco de situaciones excepcionales. Además, el Sistema Interamericano no admite la *actio popularis*. Hasta ahora, la única «víctima» correctamente identificada es el centro recreacional SAKALA del cual forman parte los peticionarios, pero las personas morales no están amparadas por la protección de la CADH.

1047. En todos los casos de cambio se aprecia una vinculación con el derecho a la salud, pues se ve afectado en múltiples dimensiones como, por ejemplo: exacerbación del riesgo de epidemias por el aumento vectores de contagio que atienden a la alteración de los patrones del climática.

del derecho a un medio ambiente sano. Los peticionarios argumentaron que frente a condiciones ambientales adversas se viola la dignidad humana.

Esta aseveración encuentra respaldo en varios trabajos y declaraciones de agencias y organismos que integran el sistema de las Naciones Unidas. Entre ellos el Consejo de Derechos Humanos[1048] y el Comité de Derechos del Niño[1049], quienes incluyen recomendaciones sobre la implementación de acciones para asegurar el derecho a la vida en su dimensión vida digna con la preservación del ambiente, así como sobre la garantía de otros DESCA con el objetivo de hacer frente al daño proveniente de la contaminación difusa (incluido el cambio climático), acelerado tanto por actores públicos como privados.

En la petición también se alegaron serias violaciones a los derechos de los niños y niñas, además de la vulneración del derecho a la dignidad, derecho a la vida en un ambiente sano y derecho a la protección judicial[1050]. Este último con relación al debilitado estado de derecho del sistema de justicia haitiano, bajo el cual presuntamente no hay acceso a recursos efectivos para proteger el medioambiente y los derechos de los peticionarios.

Otra novedad es el tratamiento del acceso a la justicia climática, la cual coincidente con la entrada en vigor del Acuerdo de Escazú, instrumento que abre un abanico de posibilidades para el acceso a la información sobre temas ambientales y a la participación ciudadana[1051], que despertará el interés de la CIDH y de CtIDH para pronunciarse sobre esta dimensión del debido proceso en un contexto climático.

No obstante, esta petición presenta el desafío de superar los mismos filtros de admisibilidad que las anteriores. Entre ellos la individualización de las presuntas víctimas y particularmente de la dimensión Inter temporal de los derechos presuntamente afectados. Será un auténtico desafío para los representantes de las víctimas la demostración de un vínculo entre el daño y el Estado. Incluso, se acepta el estatus de víctima aún quedaría por articular la cadena de responsabilidad. Ante la imposibilidad de atribución directa, quizá los representantes de la víctima puedan estructurar su argumento bajo el requerimiento estándares mínimos de diligencia debida. Sin embargo, las condiciones de emergencia en las cuales se encuentra sumergido Haití operarían como claros eximentes de responsabilidad parcial para el Estado[1052].

1048. Véase el informe sobre los derechos del niño y el medio ambiente (A/HRC/37/58).

1049. CRC. Observación General No. 26 (2023), CRC/C/GC/26., también el dictamen CRC/C/88/D/104/2019. Chiara Sacchi *et al*. v. Argentina, communication 23 Sep. 2019, (11 nov. 2021).

1050. Véanse los artículos 19, 22, 4, 26 y 25 de la CADH.

1051. Aunque a este caso no le será aplicable el Acuerdo de Escazú, debido a su irretroactividad, además de ser un ajeno al Sistema Interamericano. Aunque la CtIDH puede invocarlo por vía refleja como integrante del corpus iuris ambiental regional.

1052. Por una situación de Estado de necesidad o hasta pudiese invocarse fuerza mayor por las calamidades a las que está sometida contantemente el país.

A diferencia del caso *Athabaskan*, la superación del requisito procesal de agotamiento de los recursos internos[1053], es un poco más sencillo, ya que en el país no parece posible asegurar la efectividad de los recursos disponibles para enfrentar la amenaza ambiental. En todo caso, corresponderá a la CIDH en fase de exámenes preliminares evaluar el estado de la administración de justicia en Haití[1054]. El Sistema Interamericano atendiendo a su naturaleza subsidiaria[1055] del orden nacional pueden entrar a conocer la petición solo ante la imposibilidad de impartir justicia en el territorio del Estado Parte de la CADH.

Otro aspecto con menor grado de desafío será el demostrar la vulnerabilidad del grupo frente al cambio climático peligroso, pues los niños y niñas reciben y recibirán una carga negativa desproporcionada del impacto climático. Si la CIDH, decidiera crear un precedente ejemplificarte para todos los Estados de la región pudiese admitir este caso para ser presentado ante la CtIDH. Quizá hoy se escribe sobre el que será el primer litigio climático interamericano propiamente dicho. De ser así, la parte más intrincada del proceso estaría por llegar, ya que las victimas deben enfrentar las complejidades de fondo intrínsecas de un caso ante la Corte.

Las peticiones anteriores evidencian que el continente americano está inscrito en la búsqueda de acciones para estabilizar el clima de la región. La madurez que ha alcanzado el Sistema Interamericano con relación al medio ambiente permite impulsar estos litigios climáticos. Además, debe mencionarse que la sociedad civil está cada día más involucrada y espera respuestas concretas de sus autoridades.

Una muestra de ello es la solicitud de audiencia temática[1056] presentada en 2019 por organizaciones no gubernamentales regionales y de Ecuador, Colombia, Argentina, Brasil, Honduras, México y Costa Rica, para informar a la CIDH sobre los avances y medidas actualizadas para combatir el cambio climático y promover políticas que permitan proteger los derechos reconocidos en países sobre los cuales el Sistema Interamericano ejerce su jurisdicción. Esta comunicación hace énfasis en el impacto negativo que tiene la inestabilidad del clima en las generaciones presentes y futuras, así como

1053. Artículo 46.1 CADH. La jurisprudencia de la Corte Interamericana es pacífica en este sentido. Véase: CtIDH. Brewer Carías v. Venezuela, Excepciones Preliminares (Ser. C) No. 278 §84 (26 May. 2014).; CtIDH. Acevedo Jaramillo y otros v. Perú, Interpretación de la Sentencia de Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. (Ser. C) No. 144, 66. (24 nov. 2006), solo por ilustrar dos casos.

1054. Sobre la administración de justicia en Haití véase: CIDH. *Haití: ¿Justicia frustrada o estado de derecho? desafíos para Haití y la comunidad internacional*. Recuperado el 30 de noviembre de 2023 de: https://www.cidh.org/countryrep/Haiti05sp/Haiti05cap2sp.htm

1055. Sobre el tema de subsidiariedad véase: Contesse, J. (2016), *Ob. cit*. 127-141.

1056. Véase: Fundación Pachamama, Dejusticia *et al* (2019). «Solicitud de audiencia temática ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre los impactos del cambio climático en los derechos en las Américas». Recuperado de: https://bit.ly/3JWfKiw

sobre grupos especialmente vulnerables en los que se incluyen a las mujeres, niños, niñas, pueblos indígenas y comunidades rurales.

Como se expuso a lo largo de este apartado, ahora es el momento propicio para que el Sistema Interamericano desarrolle una profunda narrativa sobre la cuestión climática. Para ello tiene las dos peticiones de tutela climática, más una solicitud de opinión consultiva en curso.

El terreno es lo suficientemente fértil para dar paso al florecimiento definitivo de la prolija y profunda jurisprudencia ambiental, aunque esta vez con una dimensión climática delimitada, a pesar de que el Sistema Interamericano no cuenta con un caso líder donde se atribuya responsabilidad climática, el impacto de las litigaciones exitosas en los sistemas nacionales ha incentivado las movilizaciones sociales y hasta estatales[1057].

Implicaciones de la OC 23-17 sobre el litigio climático estratégico

Los Estados de la región mantienen como corolario el derecho al desarrollo, frente al daño y riesgo de daño ambiental significativo. Sin embargo, tales principios no pueden ni deben representar un eximente de responsabilidad ante la violación de derechos humanos. Así las cosas, Latinoamérica se encuentra enmarcada en un panorama caracterizado por promesas estatales blandas, particularmente con respecto al cambio climático, donde las metas de reducción auto-delimitadas están por debajo de las necesarias para contribuir de forma significativa al anclaje de la temperatura del planeta. Precisamente, para dar respuesta a la espiral de impunidad que acompaña a los desafíos ambientales multinivel de la región, surgió la Opinión Consultiva 23/17.

La opinión consultiva sobre medio ambiente y derechos humanos solicitada por Colombia a la CtIDH, plantea novedosos criterios interpretativos para el tratamiento de la afectación de derechos protegidos por la CADH en un contexto ambiental[1058]. En la opinión consultiva aparecen ideas sugestivas como la tutela autónoma del medio ambiente sano[1059], la aplicación extra-

1057. Para profundizar sobre la promoción del cambio social a través del derecho véase: Bradlow, D. & Hunter, D. B. (2020). «Introduction: Exploring the Relationship between Hard and Soft International Law and Social Change». In *Advocating Social Change through International Law* (pp. 1-15). Leiden. Brill | Nijhoff.

1058. Banda, M.L. (2018) «Inter-American Court of Human Rights' Advisory Opinion on the Environment and Human Rights», *ASIL Insights* 22(6). Recuperado de: https://bit.ly/3tJB57J

1059. Debe destacarse, aunque la OC 23-17 fue adoptada por la unanimidad de los jueces de la CtIDH, los magistrados Humberto Sierra Porta y Eduardo Vía Grossi dejaron sentado en sus votos concurrentes su disentimiento puntual sobre la cuestión de judicialización autónoma del derecho a un medio ambiente sano.

territorial de la CADH[1060], las obligaciones especiales de naturaleza ambiental, la aplicación de los principios de prevención, precaución, cooperación y obligaciones de procedimiento en el marco de un tratado de derechos humanos[1061], la responsabilidad de las empresas[1062], entre otras. Todas ellas, englobadas por el deber general de cumplir con el respeto y garantía de los derechos humanos[1063].

Igualmente, aunque de modo menos concreto aborda las posibles implicaciones ambientales sobre los derechos a la vida privada, salud, agua, alimentación, vivienda, participación en la vida cultural, propiedad y el derecho a no ser desplazado[1064], así como hace alusión a los regímenes especiales[1065] y a los daños transfronterizos[1066].

Asimismo, deben destacarse sus aportes con relación al deber de diligencia, obligación de cuidado fundamental para abordar la cuestión climática, pues implica una valoración que ayuda a la compleja delimitación de las obligaciones de conducta razonablemente esperada de los Estados en relación con el cumplimiento del deber de garantía y respeto de los postulados convencionales. De esta manera la Corte sienta las bases para el cambio de paradigma ambiental dentro del Sistema Interamericano.

Esta contribución a la interpretación dinámica de la CADH[1067] de la Corte, parte de la premisa de que las preguntas planteadas por Colombia trascien-

---

1060. OC 23/17, §234, ya que los Estados tienen la obligación de garantizar el pleno ejercicio de este derecho incluso a las personas afectadas que no residan o se encuentren fuera del Estado donde se originó la causa del daño. Sobre la extraterritorialidad de la CAHD véase: Viñuales, J. (2016), *Ob. cit*. 177-221.

1061. OC 23/17, §213 y 241.

1062. Sobre responsabilidad de las empresas en materia de derechos humanos véase: Márquez, C. & Iglesias, D. (2021). «Retos y oportunidades de la agenda internacional sobre empresas y derechos humanos en tiempos de la COVID-19». *Anuario Español de Derecho Internacional*, *37*, 78. Véase también: Márquez, C. (2015) «La implementación de los principios rectores de las Naciones Unidas sobre empresas y derechos humanos por medio de los planes nacionales de acción». *Revista de Responsabilidad Social de la Empresa*, 20, 55-87.

1063. OC 23-17 §242 y 243.

1064. OC 23-17 §68. Véase en este sentido: Giménez, I. (2021a), *Ob. cit*.

1065. OC 23-17 §83 -94

1066. OC 23-17 § 95 -103

1067. Resulta fundamental tener en cuenta que la CtIDH ha ampliado el parámetro de control de convencionalidad donde se entienden incluida tanto su interpretación en el ejercicio de su competencia contenciosa como consultiva. Véase: Los Derechos y garantías de niñas y niños en el contexto de la migración y/o en necesidad de protección internacional. CtIDH. OC 21-14 (Ser. A) No. 21 §31.; la titularidad de derechos de las personas jurídicas en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos CtIDH. OC 22-16 (Ser.) A No. 22 §26. «las Opiniones Consultivas cumplen, en alguna medida, la función propia de un control de convencionalidad preventivo». Criterio reiterado en la OC 23/17.

den el interés de los signatarios del Convenio de Cartagena[1068], por ser de gran importancia para todos los «Estados del planeta»[1069], por lo cual decidió extender el ámbito de su respuesta más allá de la relación planteada entre la CADH y el Convenio de Cartagena.

En segundo lugar, atendiendo a la relevancia entre el medio ambiente y los derechos humanos, La Corte consideró inadecuado circunscribir sus interpretaciones solo al medio marino, por lo cual abrazó de forma general las relaciones que surgen de las obligaciones de respetar y garantizar los derechos humanos en un contexto ambiental general, donde se incluyen múltiples tipos de contaminación, así como de daños, entre los que encuadra el cambio climático peligroso.

Así las cosas, la CtIDH abordó las obligaciones de los Estados sobre cuestiones ambientales, incluidas las implicaciones sobre derechos humanos causadas por daños transfronterizos al medio ambiente, directamente atadas a los compromisos convencionales del artículo 1.1 de CADH. Todo ello en relación con el extenso *corpus iuris* ambiental internacional. En sí, la Corte reafirmó lo que desde hace unas décadas venia construyendo, es decir que tiene la obligación de considerar esa normativa internacional sobre medio ambiente para delimitar el contenido y el alcance de las obligaciones Estatales asumidas en el marco de la CADH[1070].

De esta manera, la CtIDH utiliza la interpretación dinámica de instrumentos jurídicos vivos (de derechos humanos y medio ambiente), con el propósito de adecuar su interpretación y aplicación a las realidades contemporáneas[1071]. Sin dejar de utilizar instrumentos de *soft law*, jurisprudencia propia y ajena para dotar de mayor precisión a la interpretación de la CADH. Las mencionadas herramientas permitieron a la CtIDH abordar un extenso número de peligros ambientales asociados al cambio climático con serias implicaciones sobre los derechos humanos, entre ellos: la deforestación, la minería, contaminación de los mares, cambio del uso de los suelos, emisiones a la atmosfera y en general una serie de actividades desarrolladas por privados[1072] que

1068. Colombia preguntó a la Corte sobre el alcance interpretativo del artículo 1.1 de la CADH y el Convenio para la Protección y el Desarrollo del Medio Marino en la Región del Gran Caribe.

1069. OC 23-17 §35.

1070. Esto hilado a la luz del principio pro persona (artículo 29 de la CADH) y de la interpretación sistémica que marca la pauta de interpretación de los tratados internacionales, sin que ello implique una usurpación de competencias pues se produce como una interpretación periférica, para nutrir a la convención y dar respuestas a las necesidades actuales en materia de derechos humanos. Puntos extensamente abordados en el primer apartado de este capítulo.

1071. Véanse las consideraciones generales de la OC 23/17.

1072. La CIDH viene trabajando en la identificación de las obligaciones Estatales ante actividades empresariales que vulneran o impiden la realización de los derechos protegidos

requieren de la diligente supervisión Estado debido a su impacto sobre el goce efectivo de derechos humanos.

Expresamente, la CtIDH planteó la estrecha relación entre la «protección del medio ambiente y la realización de los derechos humanos, en tanto la degradación ambiental y los efectos adversos del cambio climático que afectan el goce efectivo de los derechos humanos»[1073]. Igualmente, la Corte recordó con absoluta determinación que los DESCA forman un todo indivisible con los derechos civiles y políticos, por lo cual deben estar siempre tutelados para asegurar su vigencia[1074].

De manera que esto le permitió enlazar con la protección que ha brindado a través de la interpretación del derecho a la propiedad en su dimensión ambiental frente a las vulneraciones sufridas por los pueblos indígenas y tribales. Para terminar de amalgamar con la tradicional concepción del medio ambiente sano como precondición para el goce efectivo de los derechos fundamentales.

La Corte, pasó a considerar las declaraciones universales que informan el derecho ambiental desde elementos claramente humanizadores[1075], es decir bajo una conceptualización del derecho internacional ambiental por y para el hombre[1076]. Desde donde tuvo el acierto de estrechar los lazos entre las amenazas directas e indirectas que surgen del deterioro ambiental, incluyendo al cambio climático[1077] como detonante peligroso que menoscaba los derechos humanos.

Así la Corte entiende que la degradación del medio ambiente en términos generales no solo afecta al núcleo duro de los derechos humanos, sino que en igual medida transgrede los DESCA en su vertiente autónoma, entre los cuales se encuentra el derecho humano a un medio ambiente sano consa-

---

por la CADH. Véase: CIDH|REDESCA. (2019). *Empresas y Derechos Humanos: Estándares Interamericanos*. Doc. OEA /Ser.L/V/II. 1 nov. 2019.; CIDH. «Emergencia climática alcance de las obligaciones interamericanas en materia de derechos humanos», CIDH Doc. 3/21 (31 dic. 2021). Sobre responsabilidad empresarial véase: Márquez, C. (2018). «Las relaciones entre el derecho internacional y la práctica interna en el ámbito de los derechos humanos y la responsabilidad de las empresas». *Anuario Español de Derecho Internacional*, 34, 707-728.; Bonfanti, A. (2018). «Business and Human Rights in Europe». En: A. Bonfanti (ed.) *Business and Human Rights in Europe: International Law Challenges.* (pp.1-8) Londres: Routledge.

1073. OC 23-17 §47

1074. OC 23-17 §47 haciendo una clara referencia a los conceptos de interdependencia e indivisibilidad de los derechos humanos. Véase también: CIDH. (2020). Informe Anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 2019. III Informe Anual de la REDESCA. Doc. 5 OEA/Ser.L/V/II, p. 204-206.

1075. Desde un enfoque antropocéntrico.

1076. Derechos humanos, medio ambiente y desarrollo sostenible.

1077. Identificadas por el Consejo de Derechos Humanos

grado en el artículo 26 de la CADH[1078]. Norma que tienes reflejo en un extenso número de legislaciones internas de los Estados parte de la Convención[1079].

Sin embargo, en breve da un vuelco inesperado que va desde una visión puramente utilitarista hacía una perspectiva donde se valora al medio ambiente de forma integrada con el todo que le rodea. Es decir, como un espacio donde el hombre (aunque importante), es una parte del complejo y preciado engranaje que compone el sistema de la Tierra. De esta forma, la Corte entra a considerar la autonomía del derecho al medio ambiente, como un canal más para la *protección* de los componentes de la naturaleza, aún sin necesidad de identificar un riesgo o vulneración de los derechos de la persona humana.

Así, el tribunal regional pondera la importancia de los componentes de la naturaleza[1080], en relación con «los demás organismos vivos con quienes se comparte el planeta, también merecedores de protección en sí mismos»[1081]. Esto se traduce en que la Corte considera la protección de los componentes (tanto con conexión como sin conexión con el individuo y/o sus posibles afectaciones a derechos fundamentales), como bienes merecedores de tutela, apreciando los intereses intrínsecos de la naturaleza.

Contrario a lo que algunos pudiesen pensar, esto no quiere decir que la CtIDH reconozca a los elementos de la naturaleza como sujetos de derecho[1082]. Esto se reafirma en que basta con atender a los múltiples ejemplos

1078. OC 23-17 para. 59. La CtIDH citando al Grupo de Trabajo sobre el Protocolo de San Salvador, considera que este derecho implica «a) garantizar a toda persona, sin discriminación alguna, un medio ambiente sano para vivir; b) garantizar a toda persona, sin discriminación alguna, servicios públicos básicos; c) *promover la protección del medio ambiente; d) promover la preservación del medio ambiente, y e) promover el mejoramiento del medio ambiente*. Asimismo, ha establecido que el ejercicio del derecho al medio ambiente sano debe guiarse por los criterios de disponibilidad, accesibilidad, sostenibilidad, aceptabilidad y adaptabilidad, común a otros derechos económicos, sociales y culturales» Para cuyos efectos de monitorio a tiende a los siguientes indicadores: «a) las condiciones atmosféricas; b) la calidad y suficiencia de las fuentes hídricas; c) la calidad del aire; d) la calidad del suelo; e) la biodiversidad; f) la producción de residuos contaminantes y manejo de estos; g) los recursos energéticos, y h) el estado de los recursos forestales».

1079. Véase: Daly, E. & May, J. R. (2020). «Environmental Policy: Constitutional Environmental Rights». In *Encyclopedia of Public Administration and Public* Policy (pp. 1136-1143). Londres: Routledge; May, J. R. & Daly, E. (2015). *Global environmental constitutionalism*. Cambridge University Press. Donde se incluyen análisis del reverdecimiento de las constituciones latinoamericanas. Véase en el mismo sentido: Esborraz, D. (2016). «El modelo ecológico alternativo latinoamericano entre protección del derecho humano al medio ambiente y reconocimiento de los derechos de la naturaleza». *Revista Derecho del Estado*, (36), 93-129.

1080. Rios, selvas, bosques, mares, etc

1081. OC 23-17 §62

1082. Y como es lógico, tampoco tendría competencia para tutelar de forma autónoma una violación de los derechos de la madre tierra sin afectaciones de los derechos fundamentales de la persona humana.

de protección de espacios naturales valiosos por sí mismos, sin que se les otorgue el reconocimiento jurídico como sujetos. Solo por menciona algunos de ellos, deben tomarse en cuenta los dos mil cuatrocientos cincuenta y un (2451) humedales de importancia internacional[1083] salvaguardados por la Convención RAMSAR, la protección del medio marino a través de CONVEMAR o incluso desde una mirada más nacionalista, la tradicional designación de espacios naturales resguardados por las legislaciones internas de los Estados.

La tilde diferenciadora del pronunciamiento de la CtIDH con respecto a sus decisiones en el pasado, está en destacar el valor autónomo de los componentes de la naturaleza[1084], así como la trascendencia de su protección/conservación como una necesidad donde se integra a lo humano en lo natural. Ciertamente, la CtIDH hace referencia a la tendencia marcada por Ecuador y Bolivia en cuanto al reconocimiento de derechos subjetivos de la madre tierra. Pero, esta acotación en opinión de quien escribe surge debido a que ambas constituciones están construidas atendiendo a la espiritualidad y cosmovisión que profesan las múltiples naciones indígenas de los dos países.

Esto resulta especialmente interesante a la luz de las implicaciones que puede tener esta opinión consultiva para el tratamiento de cuestiones ambientales (en particular del cambio climático), cuando estén involucrados la vulneración de los derechos humanos de estos pueblos y comunidades ancestrales. Esta idea, de cómo la CtIDH pudiese aproximarse a cuestiones climático/ambientales está basada en la comprensión de conexiones antropológicas similares en materia indígena dentro de la región.

Es decir, sobre aquellos Estados en donde coinciden las expresiones culturales y prácticas religiosas hacia la tierra como un organismo vivo/sagrado. El entendimiento de esta cosmovisión en forma de ley constitucional a través del derecho interno de los Estados, le permitiría a la CtIDH expandir el ámbito de protección de los derechos que ya otorga a estos grupos vulnerable, pero esta vez incluso en un contexto climático.

El desarrollo de la idea anterior tiene el propósito no solo de proteger los derechos de estos grupos, su integridad territorial, cultural, física y espiritual, a la vez de constituir una oportunidad extraordinaria para dotar de contenido a las nuevas categorías de derechos ambientales, utilizando para ellos las bases legales nacidas de ese pluralismo indígena nacional extendido hacia el nivel regional bajo el amparo de la CADH. Esto resulta especialmente útil en un área geográfica donde los efectos del cambio climático antropogénico

1083. Véase: RAMSAR. *Servicio de Información sobre sitios RAMSAR*. Recuperado el 30 de noviembre de 2023 de: https://bit.ly/36XF0WE

1084. Pero no un derecho autónomo de carácter subjetivo arraigado en alguno de los derechos humanos reconocidos por la CADH.

se han extendido profundamente[1085]. Tanto dentro de las fronteras de los Estados miembros del Sistema Interamericano, como desde una perspectiva transfronteriza que sobrepasa el continente americano[1086].

Al igual que ocurre con otros derechos humanos la evolución que ahora mismo se está gestando dentro del Sistema Interamericano tiene un efecto de refuerzo bidireccional[1087] entre el derecho nacional y el convencional mediante el cual se protegen los derechos humanos[1088]. A través de este fenómeno se filtran los estándares de protección interamericanos y por ende una capa del derecho internacional en las constituciones nacionales[1089]. De esta manera, los Estados han optado por otorgar rango supra constitucional, constitucional o legal a los instrumentos sobre derechos humanos, así como también se han decantado por establecer criterios especiales de interpretación constitucional ajustados a las regulaciones internacionales en la materia[1090].

De la práctica anterior se desprende un interesante grado mínimo de unificación en bloque de los derechos humanos. Sin embargo, debe aclararse que la misma no es del todo uniforme, pues la integración de la interpreta-

1085. Un ejemplo claro de ello es la situación de la Amazonía. Sobre este y otros impactos véase: Azócar, G., Billi, *et al* (2021). «Climate change perception, vulnerability, and readiness: inter-country variability and emerging patterns in Latin America». *Journal of Environmental Studies and Sciences*, *11*(1), 23-36. Véase igualmente: Reguero, B., Losada, I., *et al* (2015). «Effects of climate change on exposure to coastal flooding in Latin America and the Caribbean». *PLoS One*, *10*(7). Recuperado de: https://bit.ly/38eqH0V

1086. Sobre todo, en territorios ancestrales durante las últimas décadas. Un ejemplo claro de ello es la situación de la Amazonía compartida por Colombia, Perú, Venezuela, Bolivia, Surinam y Brasil.

1087. Los antecedentes interamericanos de este fenómeno de la adaptación del derecho domestico al internacional tiene sus inicios en los procesos de transición del autoritarismo hacia la democracia en la región, aunque originalmente enfocado en ciertos derechos civiles y políticos. Véase: Contesse, J. (2019), *Ob. cit*..186. *«A key feature of this Latin American constitutional moment was States´ commitment to international human rights principles. Countries enshrined norms that gave international human rights treaties constitutional rank. In a legal culture where statutes are the main source of law, enshrining human rights law in constitutions was an unequivocal message about States´ commitment to abide by international human rights law».*

1088. Véase: Contesse, J. (2019), *Ob. cit*. 187. «But national courts contribute to the expansion of human rights law. Latin American constitutional courts began using inter-American human rights jurisprudence in their local adjudication, albeit in non-uniform ways».

1089. Brewer-Carías, A. R. (2007). «La aplicación de los tratados internacionales sobre derechos humanos en el orden interno de los países de América Latina». *Revista Instituto Interamericano de Derechos Humanos*, 46, 229. Este proceso se carácteriza precisamente por «la incorporación al derecho constitucional interno de los sistemas internacionales de protección de los derechos humanos»

1090. Brewer-Carías, A. R. (2007), *ob. cit*. 229-230. «incluso estableciendo que norma debe prevalecer en caso de conflicto» Permitiendo «la aplicación de los tratados y convenios internacionales en materia de derechos humanos, directamente por los tribunales internos».

ción de la CtIDH a los sistemas nacionales se realiza en diferentes grados y con matices muy particulares que depende de cada Estado. El fenómeno de permeabilidad de los derechos humanos en el derecho interno de los Estados parte de la CADH es conocido como el *Ius Constitutionale Commune* de América Latina[1091].

Hasta ahora, los abordajes de la CtIDH en materia ambiental se han venido robusteciendo con la progresividad de sus decisiones, como consecuencia los Estados buscan adaptarse a los estándares cada vez más altos de protección y esto favorece en paralelo la expansión hacia nuevas reivindicaciones a favor de la persona y del medio ambiente. De allí que, a corto y mediano plazo, sea posible sentir el impacto de las decisiones de la CtIDH sobre cuestiones climática.

De hecho, la CtIDH a partir de esta opinión consultiva cambió su línea jurisprudencial para dotar de judicialización autonómica a los DESCA[1092], concretamente sobre el medio ambiente. La progresiva línea de interpretación jurisprudencia de los DESCA hace que el planteamiento aquí esbozado cobre fuerza, ya que abre la puerta hacia la consolidación de una nueva practica que permite reformular la responsabilidad del Estado sobre materias tan novedosa antes alejadas de su alcance como el cambio climático.

En este sentido, se aprecia como la CtIDH viene construyendo un reconocimiento a la epistemología del sur de América[1093] mediante el cual brinda un valor especial al entorno. Sin embargo, esta reafirmación no implica que las tierras ancestrales o el medio ambiente tengan que gozar de la condición de sujeto de derecho para alcanzar la protección del medio ambiente. La concientización que hace la Corte sobre las realidades indígenas da cuenta de una interesante, aunque potencial interpretación holística del marco jurídico de estos Estados a luz de la Convención. Palabras más, palabras menos representa una oportunidad invaluable para exponer el pluralismo interno ambiental/indígena de las Américas a la luz del derecho internacional[1094].

1091. Von Bogdandy, A. (2015), *ob. cit*.

1092. Véase: Este es el primer caso con posterioridad a la emisión de la opinión consultiva sobre medio ambiente que la Corte judializa de forma autónoma un DESCA que está estrechamente conectado con el ambiente, la salud. Véase: CtIDH. Poblete Vilches y otros v. Chile, Fondo, Reparaciones y Costas (Ser. C) No.334 (8 Mar 2018).

1093. Aceptando la existencia de visiones alternativas como La Pachama, a quien Boaventura de Sousa identifica con el pensamiento de Spinoza al señalar que Pachamama corresponde a lo que se «llamaba *natura naturata* —la naturaleza naturalizada—, y la *natura naturans*, la naturaleza naturalizante, la que es un cuerpo vivo, que es un ser viviente, está dentro de nosotros y que no podemos separar de nuestro cuerpo ni de nuestra alma». De Sousa, S. B. (2018). «Epistemología del sur: un pensamiento alternativo de alternativas políticas». *Geograficando*,*14*(1), 1. Recuperado de: https://bit.ly/3Dk8lXv

1094. *Loc. cit.* Remarcando la necesidad de crear un pluralismo externo «la convivencia del conocimiento científico con otros conocimientos que se pueden articular».

Esto con el fin último de reforzar estos sistemas de derecho desde los derechos humanos a la par de hacer útil y digerible la protección del hombre y lo natural frente cuestiones tan complejas como el cambio climático. Precisamente estas situaciones de peligro requieren con carácter de urgencia una visión multicéntrica que termine de romper las obsoletas estructuras del derecho que impiden avanzar hacia la efectividad de las estrategias de mitigación desde una visión poco convencional.

En una línea de pensamiento no disociada de la anterior, sino más bien legitimadora de estas corrientes multicéntrica, la CtIDH hizo referencia al reconocimiento jurisprudencial de los derechos de la naturaleza en el sur del continente. Esta vez, con el objetivo de dejar en evidencia la aplicabilidad práctica del mecanismo de cumplimiento judicial a través de los cuales se pueden transformar las relaciones del ser humano con la naturaleza. Aunque en estos litigios encuentran su fundamentación en la ética ambiental y de las estructuras del derecho occidental, incluyen a las comunidades locales como agentes de aseguramiento social para la protección de espacios naturales concretos.

En este sentido, la CtIDH toma nota de las interpretaciones mediante las cuales se le otorgan derechos subjetivos a un rio en la India. Mientras que, por la otra, reconoce los pronunciamientos de la Corte Constitucional de Colombia sobre el río Atrato[1095], así como sobre la violación de los derechos constitucionales de la naturaleza a causa de la explotación minera en Ecuador, estos últimos sancionados también por una Corte Constitucional[1096]. Pareciera que la CtIDH buscaba evidenciar la existencia de una emergente *opinio juris* así como la viabilidad ejecutoria de este tipo de construcciones dentro de la tradición legal latinoamericana. Cabe destacar que estos apartados ponen de manifiesto un nuevo entendimiento de la naturaleza y el hombre en el seno del derecho Interamericano, orientándolo hacía la edificación de un auténtico estado de Derecho ambiental[1097] y ecológico en el derecho internacional.

1095. Corte Constitucional de Colombia, sentencia T622/16 (27 Ene. 2015).

1096. Corte Constitucional del Ecuador, Sentencia No. 218-15-SEP-CC (21 Sep. 2015). Recuperado de: https://bit.ly/36FHs4p. A través de la cual se declara la vulneración de los derechos de la naturaleza, ordenándose una reparación integral

1097. Véase: Brunnée, J. (2019) «The Rule of International (Environmental) Law and Complex Problems». En: Krieger, H., Nolte, G. & Zimmermann, A. (Eds.), *The International Rule of Law: Rise Or Decline?* (pp.230-231). Oxford: Oxford University Press. *«In the context of a multifaceted, global challenge, a treaty-based regimen is needed to facilitate a comprehensive, long term response action and to harness the potential power of legally softs norms and practices»*. Precisamente, la CtIDH está construyendo una mayor protecciónn Ambiental a través del registro de prácticas plurales y normas de derecho indicativo dentro de los derechos humanos. Véase: UNEP (2023). *Environmental…Ob. cit*. *«the principles of rule of law applied in the environmental context". Rule of law describes a governance system in which all persons, including public and private individuals and institutions, are accountable to laws that are public, equally enforced, independently adjudicated and consistent with human rights».* En este mismo documento véase la evolución del *environmetal rule of law*.

Así las cosas, las aproximaciones de la CtIDH en la opinión consultiva reafirman la idea de construcción de un nuevo *locus standi* en materia climática para los miembros de las comunidades y pueblos originarios. De esta manera es posible asegura que estas interpretaciones brindan un mayor respaldo para asegurar una progresiva transición hacía las respuestas climáticas exigidas al derecho contemporáneo. Básicamente, la identificación de las aproximaciones tanto sustantivas como adjetivas destacadas a lo largo de este apartado ponen en cabeza de los Estados interamericanos la obligación de asegurar y cumplir las normas de la Convención, así como procurar su integración en el derecho interno[1098].

El análisis de estas referencias normativas y jurisprudenciales latinoamericanas por parte de la CtIDH, permiten inferir que efectivamente se está produciendo *el reverdecimiento de la humanización del derecho* ante un eventual litigio climático, donde se vean amenazados derechos humanos en un contexto ambiental dentro de los Estados[1099]. En estos casos la Corte entraría a valorar la afectación directa tanto de los derechos como del peligro que encierra la inestable conservación de los componentes naturales directamente afectados por las alteraciones climática, favoreciendo así una protección integrada a través del aseguramiento de los derechos de sus potenciales guardianes.

En lo referente a la aplicación extraterritorial de la Convención[1100], debe recordarse que antes de la OC 23-17 la CtIDH no se había planteado la posibilidad de aplicación extraterritorial[1101] en un contexto ambiental[1102]. Esto

1098. Rousset-Siri., A. (21 jun. 2021). «Reflexiones sobre la convencionalización del derecho interno de los Estados. Agenda Estado de Derecho». *Agenda del Estado*. Recuperado de: https://bit.ly/3iQYQWh

1099. Especialmente aquellos que cuentan con una tradición interna plurinacional, así como aquellos donde se ha dado el reconocimiento constitucional del valor ético de la naturaleza.

1100. Sobre la Extraterritorialidad véase: Milanovic., M. (2011) *Extraterritorial Application of Human Rights Treaties: Law, Principles and Policy*. Oxford: Oxford University Press.

1101. Kamminga, M. T. (2012). «Extraterritoriality». En: Wölfrum, R. (ed.). *The Max Planck Encyclopedia of Public International Law*. Oxford: Oxford University Press. Recuperado de: https://bit.ly/3umFNsB. Señala que los términos*: «'extraterritoriality' and 'extraterritorial jurisdiction' refer to the competence of a State to make, apply and enforce rules of conduct in respect of persons, property or events beyond its territory. Such competence may be exercised by way of prescription, adjudication or enforcement».*

1102. Véase: Wenzel, N. (2008). «Human rights, treaties, extraterritorial application and effects». En: Wölfrum, R. (ed.). *The Max Planck Encyclopedia of Public International Law*. Oxford: Oxford University Press. Recuperado de: https://bit.ly/3umFNsB. Quien señala que la aplicación de la extraterritorialidad en el campo de los derechos humanos por los distintos tribunales de en la materia ha estado centrada en el tratamiento de derechos civiles y políticos. *«A question that will have to be answered by those treaty bodies that follow the authority and control test is if and how to adjust this test to scenarios that involve positive human rights obligations. This will be a crucial issue in cases of transboundary environmental harm caused by private actors, for example, where the only possibility of establishing the emitting State's human rights responsibility would be to argue that the State refrained from*

partiendo del hecho de que el principio de territorialidad es la regla y la extraterritorialidad la excepción, al amparo del cumplimiento de requisitos específicos que permiten extender el marco de la aplicación de la CADH. Sin embargo, el comportamiento de fenómenos asociados con el deterioro del medio ambiente y de forma subsecuente a los derechos humanos ha puesto de manifiesto la necesidad de evitar la perpetuación de un círculo de impunidad en el caso de daños transfronterizos que impactan seriamente sobre los derechos humanos de sujetos localizados en otro Estado.

Precisamente, en el marco de la evolución del tratamiento de las cuestiones relacionadas con el medio ambiente en un contexto de derechos humanos, la Corte identificó situaciones donde grupos vulnerables se ven especialmente afectados a causa de eventos que discurren dentro de una espiral de deterioro ambiental. Es usual que ante este tipo de realidades se vean vulnerados de forma conexa los derechos a la vida, a la integridad personal, a la integridad cultural, a la familia, al desplazamiento forzoso de territorios, a la salud, a la educación, al desarrollo, al medio ambiente, al acceso a la justicia, entre otros.

En estos casos, la CtIDH traslada su mirada hacía la nutrida jurisprudencia sobre los estándares de cumplimiento en materia ambiental e innova dotando de mayor protección a los derechos de la Convención a través de la extensión de su ámbito de aplicación territorial. Es así como la Corte ante situaciones de vulneración ambiental decide ensanchar sus horizontes hacia un «concepto más amplio que incluye ciertas formas de ejercicio de la jurisdicción fuera del territorio del Estado»[1103] cuando se ha producido una significativa transgresión ambiental.

Para ello, la Corte desarrolló su discurso argumentativo a partir de los trabajos preparatorios de la CADH, sumado a la interpretación que la CIDH hace sobre el alcance del término jurisdicción[1104]. Haciendo énfasis en las situaciones o actividades que se encuentran sometidas al control de un Estado diferente a aquel donde se perciben los efectos dañosos[1105]. La CtIDH además

preventing the private actors from causing environmental harm and thus violated its positive obligations vis-à-vis the persons affected by the harm on foreign soil. The State only has positive obligations vis-à-vis these persons, however, if they are subject to its jurisdiction».

1103. OC 23-17 §74.

1104. Aunque la opinión consultiva no hace referencia a ello en materia de jurisdicción internacional deben considerarse los casos de la CIJ: Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons, Advisory Opinion, 1996 ICJ. 244, §29. (July 8).; Legal Consequences of the Construction of a Wall in the Occupied Palestinian Territory, Advisory Opinion, 2004 ICJ. 178-181, §107-113. (July 9); Armed Activities on the Territory of the Congo (DRC v. Uganda), 2005 ICJ. 78-79 §216 (December 19).

1105. Aunque no se trata de un tema directo de extraterritorialidad, debe considerarse la invocación de responsabilidad extendida hacia sujetos que despliegan actividades en el territorio de un Estado con impacto sobre los derechos humanos. Véase en este sentido

realiza una referencia trascendente sobre la jurisprudencia utilizada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en casos de aplicación extraterritorial del Convenio Europeo, específicamente sobre las situaciones de control efectivo en operaciones militares desplegadas por un Estado en un territorio extranjero[1106].

De esta forma, creó una suerte de argumento análogo mediante el cual concluye que los supuestos de daños transfronterizos encuentran suficiente base legal para una aplicación extraterritorial del tratado, ya que el Estado detenta el control efectivo de las operaciones y por lo tanto cuenta con capacidad de impedir la materialización del daño que afecta los derechos humanos más allá de su jurisdicción[1107].

Debe recordarse que la extraterritorialidad[1108] como elemento de vulneración de una obligación internacional implica control efectivo sobre el territorio extranjero o control efectivo sobre individuos por parte de agentes del Estado. El cumplimiento de alguna de las condiciones anteriores es esencial para la atribución de responsabilidad. La CtIDH pareciera plantear la extraterritorialidad desde la diligencia debida, es decir desde las obligaciones de supervisión, control y monitoreo sobre las corporaciones o empresas que desarrollan actividades en un territorio extranjero.

Lo anterior puede dar lugar a la vulneración de derechos como la vida e integridad personal, núcleo sobre el cual versó la opinión consultiva, así como extenderse también hacia derechos económicos, sociales, culturales y ambientales[1109]. Aunque la Corte no profundizó en cómo puede operar la

---

Velásquez Rodríguez v. Honduras, Excepciones Preliminares (Ser. C) No. 1, §176 (26 jun. 1987). «El Estado está, por otra parte, obligado a investigar toda situación en la que se hayan violado los derechos humanos protegidos por la Convención. Si el aparato del Estado actúa de modo que tal violación quede impune y no se restablezca, en cuanto sea posible, a la víctima en la plenitud de sus derechos, puede afirmarse que ha incumplido el deber de garantizar su libre y pleno ejercicio a las personas sujetas a su jurisdicción. Lo mismo es válido cuando se tolere que los particulares o grupos de ellos actúen libre o impunemente en menoscabo de los derechos humanos reconocidos en la Convención».

1106. OC 23-17 §79. Citando los casos europeos Loizidou V. Turquía No. 15318/89.ECHR 1995.; Al-Skeini y otros V. Reino Unido [GS], No. 55721/07. ECHR 2011, Catan v. Moldavia & Rusia [GS], Nos. 43370/04, 8252/05 y 18454/06. ECHR 2012.

1107. OC 23/17, §102

1108. Sobre este punto véase: McCorquodale, R. & Simons, P. (2007). «Responsibility beyond borders: state responsibility for extraterritorial violations by corporations of international human rights law». *The Modern Law Review*, *70*(4), 598-625. Igualmente véase: Deva, S. & Birchall, D. (2020). *Research Handbook on Human Rights and Business*. Cheltenham: Edward Elgar Publishing.

1109. A título de ejemplo véase la cuestión sobre la afectación de derechos socioeconómicos específicos afectados por el cambio climático en la sección III de: African Commission on Human and People's Rights. Zero Draft In relation to the Study on the Impact of the Cli-

atribución de responsabilidad por extraterritorialidad en un asunto ambiental, parece lógico acudir a los Artículos sobre Responsabilidad internacional del Estado[1110] «ARI», concretamente el artículo 5 sobre el comportamiento de una persona o entidad que ejerce atribuciones del poder público[1111], el artículo 8 en razón del comportamiento de agentes bajo la dirección o control de un Estado, así como al artículo 16 por asistencia o ayuda en la comisión de un ilícito internacional.

En la opinión, la Corte analizó los posibles supuestos de aplicación extraterritorial de la Convención en un contexto ambiental, a partir de las obligaciones nacidas en el marco de un régimen especial de protección al medio ambiente. De allí que es posible establecer la responsabilidad de un Estado a partir de tratados de derechos humanos por la realización de actividades privadas que causan efectos adversos, aunque dichas consecuencias no se hayan manifestado dentro de su límite territorial. Al buscar un fenómeno de deterioro ambiental que encuadre bajo los supuestos señalados, puede subsumirse el cambio climático[1112], tipo de contaminación transfronteriza[1113] por excelencia. Aunque debe reconocerse que esto implica la activación de una compleja arquitectura de responsabilidad internacional[1114].

En este sentido, los Estados tienen la obligación de prevenir e impedir que las actividades realizadas bajo su jurisdicción causen daños a otros Esta-

---

mate Change on Human and Peoples' Rights in Africa. Recuperado de: https://bit.ly/3u4A-CRq. Esta identificación encuentra se encuentra directamente vinculada al emblemático caso: African Commission on Human and People's Rights. Social and Economic Rights Action Centre and Centre for Economic and Social Rights v. Nigeria (2001). Caso relativo a la responsabilidad de la Nigerian National Petroleum Company, empresa cuya mayoría accionaria pertenecía a un consorcio con la empresa holandesa Shell. Véase también: el laudo arbitral Hamester v. Ghana, ICSID Case No ARB/07/24 (2010).

1110. Int'l Law Comm'n. Draft of articles on state responsibility on its Fifty-third Session U.N. Doc. A/56/10 (Apr. 23-jun.1 & jul. 1- Aug. 10).

1111. A los fines de ilustrar el comportamiento de agentes privados y del poder público véase el escándalo por los hechos de corrupciónn entre Australian Wheat Board e Irak en violación flagrante de las regulaciones de Naciones Unidas para el programa de intercambio de petróleo por comida en: Buckley, R & Danielson, M. (2008). «Facilitation payments in international business: A proposal to make Criminal Code», s 70.4, workable. *Australian Law Journal*, *82*(2), 92.

1112. De hecho, la CtIDH se refiere expresamente al cambio climático, fenómeno que tiene la capacidad de cruzar fácilmente las fronteras, viajando por el aire y el agua en relación con la existencia de tratados que atiende a la aplicación del principio de prevención y regulación de la contaminación. Véase: OC 23-17 §96.

1113. OC 23/17, §96 -97

1114. Sobre el cambio climático y extraterritorialidad véase: Seck., S. (2021) «Climate Justice and The ETO's». En: M. Gibney., G. Erdem., *et al* (eds.) *Handbook on Extraterritorial Human Rights Obligations*. (pp. 421-433). Londres: Routledge. Véase también: Berkes., A. (2021) «Cross-border Pollution». En: M. Gibney., G. Erdem., *et al* (eds.) *Handbook on Extraterritorial Human Rights Obligations* (pp. 434-444). Londres: Routledge.

dos[1115]. De allí que exista una obligación de evitar los daños ambientales transfronterizos derivados de actividades que potencian el cambio climático peligroso. Así las cosas, la CtIDH plantea responsabilidad extraterritorial de la CADH extendiendo sus efectos protectores hasta la jurisdicción del Estado de origen del daño[1116].

Esto implica, que una presunta víctima localizada dentro de la jurisdicción de un Estado Parte de la CADH puede demandar a otro Estado Parte (es decir, diferente al Estado donde se han producido los efectos ambientales dañosos). Se entiende que el Estado de origen se encuentra sujeto a la Convención con relación a los denunciantes a pesar de que estos sujetos están localizados fuera de su territorio. A los efectos de la reclamación, desde este último Estado nace la causa o la fuente del daño que traspasa la frontera y afecta sus derechos humanos.

Resulta interesante evaluar como la Corte traslada la responsabilidad que tradicionalmente recae sobre un *Estado A*[1117]*,* en cuanto a la protección de las personas sujetas a su jurisdicción hacía un *Estado B.* Atendiendo a que la inobservancia de los estándares ambientales interamericanos sobre autorización, monitoreo y seguimiento de actividades llevadas a cabo en su territorio estarían afectando los derechos humanos de los habitantes de otro Estado *(Estado A)*. En el sentido, la Corte hace referencia a que las actividades desplegadas por el *Estado B* «no deben privar a otro Estado de la capacidad de asegurar a las personas en su jurisdicción el goce y disfrute de los derechos bajo la Convención»[1118].

Además, pareciera que la Corte se inclinó por exaltar las obligaciones que surgen de compañías trasnacionales[1119], quienes tienen el deber de evitar interferencia sobre el goce efectivo de los derechos humanos. De este tipo de situaciones pueden surgir varios supuestos, revistiendo especial interés para el tratamiento del cambio climático el comportamiento de empresas trasnacionales[1120] en otro territorio y el daño transfronterizo causado por empresas localizadas fuera del territorio de ubicación geográfica de los presuntos afectados.

1115. Siendo necesario incorporar la aclaración de que tal obligación surge independientemente de que la actividad sea el resultado de actos permitidos o prohibidos a la luz del derecho internacional. En este caso un daño ambiental es un daño que requiere ser reparado y respaldado por una garantía de no repetición.

1116. OC 23/17, §101

1117. Obligación de respetar y garantizar los derechos humanos de los ciudadanos sujetos a su jurisdicción conforme al artículo 1.1 y artículo 2 relativo al deber de adoptar disposiciones de derecho interno, ambos de la CADH.

1118. OC 23/17, §101

1119. Sobre la responsabilidad empresarial corporativa en el contexto de daños climáticos véase: Márquez., C. (2022). «Casos ambientales, daños climáticos y responsabilidad corporativa». En: F. Zamora, L. Sales & M.C. Marullo (eds.) *La lucha en clave judicial frente al cambio climático*, (pp.) Madrid: Aranzadi Thomson Reuters.

1120. Sobre la responsabilidad empresarial en el contexto de daños climáticos

Mientras que, por otra parte, está el supuesto centrado en empresas cuyas actividades causan efectos adversos más allá del espacio físico donde despliegan su actividad, incidiendo negativamente sobre el goce efectivo de los derechos humanos. Un ejemplo de ello, son las actividades aéreas y de transporte marítimo[1121], cuyas crecientes emisiones representan un riesgo significativo para los océanos y el hombre que depende de estos en cuanto a su interrelación con ciertos derechos humanos[1122].

Bajo este tipo de panorama, se puede subsumir las obligaciones mencionadas ante el tratamiento negligente de la Amazonía[1123]. Con relación al supuesto donde las empresas trasnacionales[1124] funcionan amparadas bajo una política nacional de extractivismo intensivo para explotar los recursos localizados en espacios concretos[1125], o incluso para la explotación de «energías limpias»[1126].

1121. A pesar de circular alrededor del mundo, sus emisiones están circunscritas al Estado de registro.

1122. En cuando su absorción por los mares que forman parte de la soberanía de los Estados y que ven alterados sus especies de pesca de subsistencia, el aumento del nivel del mar causando el desplazamiento de poblaciones enteras, entre otros.

1123. De hecho, existe el interesante caso pendiente de decisión en Brasil donde se plantea la afectación de los derechos fundamentales del grupo indígena y de las futuras generaciones como resultado de la deforestación de la Amazonía. Véase: PSB *et al.* v. Brazil, ADPF 760, «petition Supreme Court of Brazil», (5 jun. 2020). Recuperado de: https://climatecasechart.com/non-us-case/psb-et-al-v-federal-union/. En el mismo sentido: Institute of Amazonian Studies (IEA) v. Brazil.

1124. Una interesante aproximación sobre responsabilidad corporativa y la aplicación extraterritorial del derecho en un litigio climático es el caso: Norwegian Supreme Court. Greenpeace Nordic Ass'n v. Ministry of Petroleum and Energy, (22 dic. 2020). Recuperado de: https://climatecasechart.com/non-us-case/greenpeace-nordic-assn-and-nature-youth-v-norway-ministry-of-petroleum-and-energy/. Véase igualmente: Gociu, A. & Roy, S., (16 Feb. 2021). «Extraterritoriality of Oil Constitutionalism in People v.s Arctic Oil». *EJIL:Talk!* Recuperado de: https://bit.ly/36vXo9z. Estos casos responden a la influencia de los derechos humanos en las relaciones privadas. Para un ejemplo sobre este fenómeno en el ámbito europeo véase: Pereira, A., Monteiro, J., Pereira, A. *et al.* (2016). «Human Rights and Private Law in Portugal». En: V. Trstenjak & P. Weingerl (Eds.) *The Influence of Human Rights and Basic Rights in Private Law* (pp. 483-533). Springer, Cham.

1125. Como el caso del Arco Minero del Orinoco en Venezuela, las afectaciones de la minería entorno al agua en Perú, la disminución de la biodiversidad en Bolivia, los pasivos ambientales en Brasil y Colombia. Escenarios devastadores que se extienden a lo largo y ancho del Sur de América. Véanse los trabajos de: AIDA. (2021). «Recursos para el estudio del extractivismo». Recuperado el 30 de noviembre de 2023 de: https://bit.ly/3uzC62J.

1126. Véase el caso del impacto de las empresas energéticas en la Guajira colombiana. INDEPAZ. (19 abr. 21). «La Guajira, entre un nuevo aire o un desastre: panorama actual de la violencia en la guajira con la llegada de las empresas energéticas al territorio wayuu». Recuperado el 30 de noviembre de 2023 de: https://bit.ly/3iGYQbD Estos casos representan una espada de doble filo pues implican la paralización de proyectos que favorecen medidas de mitigación climática frente a intereses sociales concretos. Son conocidos como casos anti climáticos.

En los supuestos antes mencionados, queda en evidencia la actuación de entidades privadas bajo la aquiescencia de terceros Estado, concretamente nos referimos a la pasividad proveniente de los estados donde se localiza la casa matriz de la empresa, ante los cuales es posible invocar la aplicación extraterritorial de la Convención al amparo del principio de diligencia debida en materia de derechos humanos[1127].

La clave de abordaje de la compleja cuestión de la extraterritorialidad[1128] estará en demostrar que este deterioro es principalmente debido a la falta de diligencia[1129] de uno o varios de estos Estados basados en la relación de control que puede ejercer un Estado sobre el privado causante del daño. De seguida, sería posible enlazarlo con las amenazas a los derechos humanos de personas concretas y/o grupos individualizables localizados más allá de del límite territorial del Estado afectado por el daño. Esta aproximación jurídica representa una oportunidad extraordinaria para abordar una dimensión de la tutela climática desde la institución procesal de la jurisdicción internacional, permitiendo de esta manera la aplicación extraterritorial de la CADH.

Adicionalmente, con respecto al ámbito de aplicación de la CADH y su relación con regímenes de protección ambiental especiales, la CtIDH fue clara al reiterar que el establecimiento de la jurisdicción depende de que un Estado este «ejerciendo autoridad sobre la persona o cuando la persona se encuentre bajo el control efectivo de dicho Estado»[1130], atendiendo «a las circunstancias fácticas y jurídicas particulares de cada caso concreto»[1131]. Además de recordar que no siempre tendrá competencia con relación a la vulneración de obligaciones ambientales, ni esto representa que se crea una jurisdicción ambiental común al amparo de la CADH. La Corte solo entrará a

1127. Véase: UNHR| COEIGWG. «Legally binding instrument to regulate, in international human rights law, the activities of transnational corporations and other business enterprise» (Second revised draft 6/08/2020). Recuperado de: https://bit.ly/3Lpiipv. En cualquier caso, siempre deberá evaluarse los supuestos de corresponsabilidad del Estado parte de la CADH también a la luz de los estándares interamericanos. Véase: CtIDH. Pueblos Kaliña y Lokono v. Surinam, Fondo, Reparaciones y Costas (Ser. C) No. 309. §132 y RF III (25 nov. 2015).

1128. Aunque como señala: Márquez, C. (2018), *ob. cit*. «No es sorprendente que cualquier esfuerzo judicial para responsabilizar a las corporaciones por su actuación en materia de derechos humanos sería cuestionado al abordar cuestiones como el levantamiento del velo, la extraterritorialidad o la responsabilidad de las empresas en el ámbito de los derechos humanos en diferentes jurisdicciones».

1129. Es importante tener en cuenta que en lo que respecta a la aplicación del deber de diligencia debida en materia ambiental, la CIJ ha seguido las lineas marcadas por el: Int'l Law Comm'n. Draft of articles on prevention of transboundary harm from hazardous activities with commentaries on its Fifty-third Session U.N. Doc. A/56/10 (Apr. 23-jun.1 & jul. 1- Aug. 10). De allí que, es altamente probable que, en relación con la ponderación del riesgo y su prevención, la CtIDH siga estaa proximación en la resolución de casos contenciosos relativos a actividades peligrosas, aunque atendiendo a las singularidades propias del Sistema.

1130. OC 23-17 §88.

1131. OC 23-17 §81 y 93.

conocer de casos en los cuales exista riesgo o se hayan vulnerado derechos humanos a causa de un incumplimiento de estas obligaciones especiales[1132].

Sobre la cuestión de los daños transfronterizos, la CtIDH invocó el tratamiento brindado por la CIJ para gestionar las obligaciones internacionales que surgen de los daños ambientales transfronterizos[1133], en virtud de la obligación de no usar el territorio para realizar actos contrarios a los derechos de otros Estados[1134].

En concreto hizo referencia a casos históricos como el Canal de Corfú (Reino Unido v. Albania), la opinión consultiva sobre Legalidad de la Amenaza o el Uso de Armas Nucleares. Asimismo, trajo a colación el caso de Las Papelerías del Río Uruguay (Argentina v. Uruguay), Ciertas Actividades Realizadas por Nicaragua en la Zona Fronteriza (Costa Rica v. Nicaragua / Nicaragua v. Costa Rica). Por otra parte, la CtIDH también incluyó en su argumentación la referencia al landmark *Trail Smelter Case*. Estas decisiones no hacen más que reiterar la obligación en el derecho internacional[1135] de evitar daños transfronterizos.

La OC 23-17 tiene fuertes implicaciones para los litigios climáticos debido a las conclusiones a las que llega la Corte con respecto al contenido ambiental que envuelve la obligación de respetar y garantizar los derechos establecidos en la CADH, pues estas permiten atribuir responsabilidad internacional, incluso en un el marco de una concepción extendida jurisdicción cuando la degradación ambiental amenaza los derechos reconocidos por el instrumento interamericano. Por lo cual, los Estados deben asegurarse de que su territorio no sea usado para causar daños a otros Estados, actuando con la diligencia necesaria para evitar en la medida de lo posible el menoscabo de derechos humanos.

Debe tenerse en cuenta que esta opinión consultiva se ha convertido en la piedra angular argumentativa tanto para las peticiones en curso como para las futuras solitudes de tutela ante los órganos del sistema, pues permite incluir el abordaje de problemas globales. Así, la OC 23-17 representa una guía para mitigar la contaminación transfronteriza, por lo que puede ser utilizada como soporte jurídico para argumentar que la acumulación de emi-

1132. OC 23/17, §88.

1133. Sobre la nutrida práctica desplegada por los tribunales internacionales en materia ambiental véase: Voigt, C. (2019). *International Judicial Practice on the Environment: Questions of Legitimacy*. Cambridge: Cambridge University Press.

1134. OC 23/17, §97.

1135. CtIDH. OC 23/17, 15/11/2017, §103. La obligación de prevenir daños ambientales «no depende del carácter licito o ilícito de la conducta que genere el daño, pues los Estados deben reparar de forma pronta, adecuada y efectiva a las personas y Estados víctimas de un daño transfronterizo resultante de actividades desarrolladas en su territorio o bajo su jurisdicción, independientemente de que la actividad que causó dicho daño no esté prohibida por el derecho internacional».

siones de gases de efecto invernadero en cabeza de un Estado dan lugar a la responsabilidad internacional del Estado y a su consecuente obligación de reparar las vulneraciones de derechos humanos aun cuando sus efectos se produzcan fuera del territorio del Estado donde se despliega la actividad contaminante[1136].

Usando como referencia la OC, así se pronunció la CIDH en su análisis sobre la extraterritorialidad en materia climática, donde reconoció la aplicación de esta figura frente a las acciones y omisiones no solo en el territorio de un Estado Parte de la CADH. También extendió el alcance del tratado regional hacia aquellas actividades que puedan impactar a los habitantes o territorios de otro Estado[1137]. En consecuencia, los países Interamericanos tienen la obligación de «regular, supervisar y fiscalizar actividades que puedan afectar significativamente el ambiente dentro o fuera de su territorio»[1138]. Igualmente, exhortó al establecimiento de un plan de contingencia que minimice accidentes ambientales de grandes proporciones, así como que tenga la capacidad de mitigar el daño ambiental surgido como consecuencia del cambio climático.

Lo expuesto anteriormente, abre una ventana para una elaboración más específica de la doctrina interamericana climática y prepara al continente para hacer frente a daños ambientales causados desde el incumplimiento de las obligaciones de derechos humanos. Recordemos que el impacto climático trasciende a la conceptualización del medio ambiente sano, entendido como aquel espacio esencial para la realización de derechos fundamentales[1139].

Partiendo de la indivisibilidad[1140] e interdependencia[1141] de los derechos humanos se asegura la vigencia y efectividad de los DESCA en su dimensión climática. De allí que el reconocimiento de estas conexiones transversales entre los derechos humanos y la inestabilidad climática invitan la evaluación

1136. Feria-Tinta, M. & Milnes, S. (26 Feb. 2018) «The Rise of Environmental Law in International Dispute Resolution: Inter-American Court of Human Rights issues landmark advisory opinion on environment and human rights». *EJIL. Talk!.* Recuperado de: https://bit.ly/35jCdqu

1137. CIDH. «Emergencia climática alcance de las obligaciones interamericanas en materia de derechos humanos», CIDH Doc. 3/21 (31 dic. 2021), 22.

1138. CIDH. «Emergencia climática alcance de las obligaciones interamericanas en materia de derechos humanos», CIDH Doc. 3/21 (31 dic. 2021), 14.

1139. Caney, S. (2008). «Human rights, climate change, and discounting». *Environmental politics*, *17*(4), 536-555. Véase: OC 23-17, la CtIDH recordó la innegable relación entre la protección del medio ambiente y su relación con la realización de otros derechos humanos.

1140. Sobre la fuerte dinámica generada por la indivisibilidad entre los derechos ambientales y los derechos humanos véase: Daly, E. & May, J. (2019), *Ob. cit*. 171-182.

1141. Piovesan, F. & Antoniazzi, M. M. (2020). «Interdependencia e indivisibilidad de los derechos humanos: Una nueva mirada frente al covid-19». *Anuario de Derechos Humanos*, 35-58. Recuperado de: https://bit.ly/3qIQPqM

del cumplimiento del deber los Estados de la obligación de mitigar y de compensar apropiadamente sus emisiones[1142].

Sin embargo, para cristalizar esta visión, es necesario cambiar el modelo tradicional de responsabilidad y entender que la estabilidad climática del planeta es un bien público, que a su vez reviste una responsabilidad colectiva entre los Estados, corporaciones y los ciudadanos[1143].

Implicaciones de la solicitud de opinión consultiva sobre la Emergencia Climática y Derechos Humanos

En fecha 9 de enero de 2023 la República de Chile y la República de Colombia presentaron ante la CtIDH una solicitud de opinión consultiva sobre «Emergencia Climática y Derechos Humanos»[1144], en virtud el artículo 64.1 de la CADH. Esta consulta constituye una oportunidad idónea para brindar conocimiento y profundizar sobre la desafiante cuestión del cambio climático a la luz de las obligaciones de respetar y garantizar los derechos consagrados en la Convención, cuestión que escapó del centro del debate en la OC 23-17[1145].

Debe destacarse, que la Corte adelantó en su OC 23-17 que los daños ambientales transfronterizos[1146], son un tipo de consecuencia del cambio climático. Sin embargo, ahora es el momento propicio para que la Corte regional expanda la narrativa sobre la cuestión climática dando paso a la posible interposición exitosa de litigios de esta naturaleza en el futuro cercano.

Dado que el análisis y contenido de todas las preguntas formuladas por Chile y Colombia escapan del alcance de este libro, solo se hará referencia a aspectos generales y a una cuestión concreta, la cual forma parte del hilo vertebrador de las litigaciones climáticas analizadas en los capítulos anteriores, la protección de los intereses desde la equidad intergeneracional. Específicamente, en lo referente a las «obligaciones diferenciales de los Estados

1142. Caney, S. (2008), *Ob. cit*. 536-555.

1143. Eckersley, R. (2016). «Responsibility for climate change as a structural injustice». En: T. Gabrielson, C. Hall, *et al* (eds.) *The Oxford Handbook of Environmental Political Theory*, 346-361.

1144. Solicitud de Opinión Consultiva sobre Emergencia Climática y Derechos Humanos a la Corte Interamericana de Derechos Humanos de la República de Colombia y la República de Chile (9 ene 2023). (fecha de última consulta: 28 de junio de 2023): https://bit.ly/3CQwLsa

1145. CtIDH OC 23/17 §47,49,54, 96, 126. Cabe destacar que en materia contenciosa este Tribunal solo se ha pronunciado sobre el tema de forma tangencial en CtIDH. Kawas Fernández v. Honduras, Fondo, Reparaciones y Costas. (Ser. C) No. 196 §148. (3 abr. 2009), y en CtIDH Baraona Bray v. Chile. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas, (Ser. C) No. 481, §114 (24 nov. 2022).

1146. Tipo de daños que son una consecuencia natural del cambio climático por ser una problemática de naturaleza global que amenaza al ser humano más allá de un límite territorial determinado.

con respecto a los derechos de los/as niños/as y las nuevas generaciones frente a la emergencia climática»[1147].

Como se ha señalado en las secciones precedentes el impacto del clima despierta interés en la región por su especial vulnerabilidad. Asimismo, se ha detectado una creciente necesidad de delimitar la existencia de obligaciones especiales por parte del interprete autorizado de la Convención, con lo cual esta solicitud de opinión consultiva invita a la Corte a profundizar e innovar a través de formas autónomas de vulneración de derechos humanos, a reevaluar la cuestión de legitimidad procesal entre otros importantes elementos que permitan mejorar el cumplimiento efectivo de los deberes de respeto y garantía de los derechos humanos (artículo 1.1) por parte de los Estados miembros de la CADH.

Debe recordarse que la actuación en sede consultiva de la CtIDH es una invaluable herramienta para clarificar y avanzar sobre las complejas cuestiones que envuelven las consecuencias de la emergencia, concretamente sobre las implicaciones relativas al derecho a la vida y la integridad personal (artículos 4 y 5 CADH) de las generaciones presentes y futuras.

Así las cosas, esta opinión consultiva marca la tilde sobre las obligaciones de prevención de daños ambientales, clarificación sobre el estándar interamericano aplicable a los planes de contingencia, mitigación de daños significativos, la evaluación de impacto ambiental en el contexto climático, la imbricación entre las obligaciones de participación y consulta con atención a los contextos culturales y sociales de potencialmente afectados[1148].

Como punto de partida, la corte tiene entre sus manos la posibilidad de clarificar el alcance y contenido del término futuras generaciones y sus correspondientes implicaciones en materia de justicia climática intergeneracional. La Corte tiene a su favor, el hecho de que la equidad intergeneracional encuentra un amplio tratamiento en el ámbito internacional y nacional. Sus antecedentes se remontan a diferentes áreas que abarcan cosmologías indígenas, religiones, tradiciones, constituciones y leyes[1149], de cuyos sistemas tradicionales, brota un respeto profundo por los componentes de la naturaleza, elementos propios de la herencia de las generaciones venideras[1150].

1147. Solicitud de Opinión Consultiva sobre Emergencia Climática y Derechos Humanos a la Corte Interamericana de Derechos Humanos de la República de Colombia y la República de Chile (9 ene 2023). (fecha de última consulta: 28 de junio de 2023): https://bit.ly/3CQwLsa

1148. Igualmente, la consulta incluye lo relativo a la obligación de cooperar entre los Estados, así como las implicaciones sobre las garantías relativas a los derechos de participación, información y acceso a la justicia. Aspectos que no serán objeto de tratamiento en esta sección.

1149. Maastricht Principles on The Human Rights of Future Generations. Adopted 3702/2023.

1150. Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons, Advisory Opinion, 1996 ICJ. (July 8). (Dissenting Opinion of Judge *J. Weeramantry),* (b) Damage to future generations, §233; *Maritime Delimitation in the Area between Greenland and Jan Mayen (Denmark v. Norway)* I.C.J Reports 1997, Judgment of 14 June 1993, Separate opinion by Judge Weeramantry) §242.

Es así como la Corte puede identificar la permeabilidad de un deber intergeneracional desde las diferentes culturas y tradiciones jurídicas hasta su incardinación positiva en el ámbito universal. Desde la Declaración de Estocolmo sobre el medio humano[1151], pasando por el concepto de desarrollo sostenible del Informe Brundtland[1152], el preámbulo y artículo 3 de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático[1153] (CMNUCC), así como en el preámbulo del Acuerdo de París, abren paso para establecer una conexión directa con las obligaciones relativas a los derechos humanos[1154].

Asimismo, debe destacarse la relevancia de brindar protección a los intereses de las generaciones futuras tomada de las litigaciones domésticas, donde destacan especialmente el tratamiento brindado por el juzgador en casos regionales como *Futuras Generaciones v. Colombia*[1155]*, Held v. Montana*[1156]*,* y *Urgenda*[1157] en el ámbito europeo. Igualmente, la oportunidad está servida si se considera el tratamiento internacional en *Sacchi v. Argentina*[1158], y *Daniel Billy et al v. Australia*[1159], así como en *Duarte Agostinho v. Portugal et al*[1160], donde la conceptualización de las futuras generaciones pareciera comenzar a transitar de un concepto normativo no vinculante a una posible forma de salvaguarda existente en la dimensión temporal a mediano y a largo plazo.

1151. Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente Humano. Declaración de Estocolmo sobre el Medio Ambiente Humano, Doc. ONU A/CONF.48/14/Rev.1 (16 jun. 1972).

1152. U.N. Secretary-General. Development and International Co-operation: Environment. Report of the World Commission on the Environment and Development. U.N. Doc. A/42/427 (Aug. 4 ,1987). [Brundtland Report].

1153. Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, 20 ene. 1994, ONU Doc. A/RES/48/189.

1154. En el ámbito interamericano se aprecia un creciente interés por la salvaguarda de derechos afectados por el cambio climático. Véase: CIDH. «Emergencia climática alcance de las obligaciones interamericanas en materia de derechos humanos», CIDH Doc. 3/21 (31 dic. 2021), p. 7. CIDH. (2020). Informe Anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 2019. III Informe Anual de la REDESCA. Doc. 5 OEA/Ser.L/V/II, p. 204-206. Recuperado de: https://bit.ly/3DvFLCz.

1155. Corte Suprema de Colombia. Futuras Generaciones v. la Presidencia de la República de Colombia *et al*., sentencia 4360-2018 (5 de abr. 2018).

1156. Montana District Court. Held v. Montana CDV-2020-307, judgment (14 Aug. 2023)

1157. Supreme Court of Netherlands. Urgenda Foundation v. State of the Netherlands, judgment (20 dic. 2019).

1158. Committee on the Rights of the Children. Sacchi v. Argentina, communication (23 Sep. 2019).

1159. Human Rights Committee. Daniel Billy *et al* v. Australia (21 jul. 2022). Véanse los comentarios sobre este dictamen en: Giménez, I &. Petit de Gabriel. E. (24 oct. 2022) «Cambio climático y derechos humanos: el caso de los Isleños del Estrecho de Torres», *Aquiescencia. Blog de Derecho internacional.* En: https://bit.ly/44aD5Hm.

1160. Duarte Agostinho v. Portugal *et al* (2020). 3971/20 (02 Sep. 2020)

En esta solicitud de opinión la Corte puede desarrollar los postulados identificados en Principios Maastricht y en los Principios Comunes de la Naciones Unidas sobre las Futuras Generaciones[1161], a partir de los cuales se promueve una visión basada en los derechos humanos y la equidad, en la condición de seres humanos, independientemente del lugar y el espacio temporal del nacimiento[1162].

Claramente, la tarea más compleja para la Corte será el desarrollar la protección de intereses futuros desde la garantía sobrevenida de derechos existentes en la Convención, concretamente, en este libro nos decantamos por la judicialización de los derechos a la vida, a la integridad personal, a la familia, los derechos de los niños y niñas, el derecho a un medio ambiente sano, el acceso a la información y propiedad colectivo, ya que tienen el potencial de asegurar la supervivencia del género humano hacia el futuro.

Ahora bien, desde la perspectiva de la legitimación procesal es fundamental recordar que la Corte solo pueda pronunciarse sobre afectaciones concretas de sujetos o grupos existentes hoy, pero no sobre «aquellas generaciones que aún no existen pero que existirán y que heredarán la Tierra»[1163]. Sin embargo, en el presente existen fundamentos normativos y morales para proteger los intereses de personas, grupos y pueblos a largo plazo. Así las cosas, esta Corte tiene en los pueblos indígenas, en los niños, niñas y jóvenes el vehículo procesal (*proxy*) para asegurar los intereses Inter temporales en el marco de la CADH.

Una vez analizadas en este Capítulo las cuestiones relativas a los órganos del sistema interamericano, el marco normativo y los aportes del litigio estratégico climático regional para garantizar la protección de los grupos vulnerables pueblos indígenas y generaciones jóvenes, es el momento de pasa al Capítulo IV en el cual se elabora una propuesta de atribución de responsabilidad estatal a la luz de las obligaciones convencionales en vigor.

1161. United Nations System Common Principles on Future Generations (4 May 2023).

1162. Véase el principio 1 United Nations System Common Principles on Future Generations (4 May 2023).

1163. Maastricht Principles on The Human Rights of Future Generations (3 Feb. 2023).

CAPÍTULO CUARTO

RESPONSABILIDAD ESTATAL Y LAS LITIGACIONES ANTE LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS

La responsabilidad climática del Estado en el marco de la Convención Americana de Derechos Humanos

Pueblos indígenas y tribales como promotores de la justicia climática ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos

El impacto del cambio climático acelerado por las actividades del hombre[1164] ha generado alteraciones significativas en todo el planeta. En lo que respecta a la región de América Latina y el Caribe resulta especialmente preocupante los cambios extremos del clima[1165], el deshielo de los glaciares andinos, la sequía en el Amazonas, la desforestación, los incendios, la inseguridad alimentaria, los cambios en los patrones meteorológicos, la intensificación de la temporada de huracanes, así como otras amenazas multinivel que exacerban el riesgo de desastres[1166] y atentan contra los derechos reconocidos en la CADH.

1164. IPCC (2021), *Ob. cit*. 5. *«It is unequivocal that human influence has warmed the atmosphere, ocean and land. Widespread and rapid changes in the atmosphere, ocean, cryosphere and biosphere have occurred»*. Cuestión que había sido adelantada originalmente en: IPCC. (2014a), *Ob. cit*. 2, 5, 7.

1165. WMO | Arizona State University. (2021). World Meteorological Organization Global Weather & Climate Extremes Archive. Hemispheric Weather & Climate Extremes. Recuperado el 30 de noviembre de 2023 de: https://bit.ly/328mDME WMO. (2021). State of the climate in Latin America and the Caribbean 2020. WMO-No. 12-72. Ginebra: WMO. Recuperado el 30 de noviembre de 2023: https://bit.ly/3a4l82G

1166. WMO. (2021), *Ob. cit*.

Dado que los derechos humanos están indisolublemente entrelazados con la protección del medio ambiente[1167], el cambio climático representa una peligrosa forma de daño que debe ser contenida. Precisamente, la preocupación generada por la inestabilidad climática y su erosión sobre los derechos fundamentales ha sido el motor para reforzar la investigación en torno a la localización de fórmulas jurídicas alternativas para la consecución de las metas de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. Aunque todas las personas son titulares de derechos humanos y por ende pueden exigir la protección de sus derechos en un contexto climático, en este apartado se abordará la potencialidad del litigio climático desde la óptica de los pueblos indígenas como guardianes de la naturaleza y grupo especialmente vulnerable, lo cual facilita el acceso a la justicia en el plano interamericano.

La CtIDH como órgano jurisdiccional, vela por la vigencia de unos derechos humanos dinámicos, abiertos e integrados por la multiculturalidad, en su rol de garante propone un método alternativo para enfrentar las problemáticas ambientales. En ambas facetas contribuye a la ruptura del paradigma de opresión y exclusión de los grupos especialmente vulnerables, con particular énfasis en los pueblos indígenas[1168], siendo capaz de ayudar a la transformación de la realidad ambiental latinoamericana de estas comunidades. Además, el tribunal regional tiene una dilatada experiencia en materia de protección del medio ambiente a través de los derechos a la vida, a la propiedad, a la cultura, además de derechos procedimentales con contenido ambiental como el acceso a la información, la participación y consulta[1169].

Aunque las relaciones internacionales con los pueblos indígenas no son nuevas. De hecho, su reconocimiento se remonta a tiempos coloniales, época en la que tenían capacidad para celebrar tratados como sujetos de

1167. Gabcíkovo-Nagymaros Project (Hung. v. Slovk.), Judgment, 1997 ICJ. 91 (September 25) (Separate Opinion of Judge Weeramantry). Señalando que la protección del medio ambienta se encuentra profundamente arraigada en la doctrina contemporánea de los derechos humanos.

1168. Schettini, A. (2012). «Toward New Paradigm of Human Rights Protection for Indigenous Peoples: Critical Analysis of the Parameters Established by the Inter-American Court of Human Rights». *Sur International Journal on Human Rights,* 17, 62. Recuperado de: https://bit.ly/36AHACI.

1169. Véase: Fraser, N. (2011) «Redistribución, reconocimiento y participación. Hacia una concepción integrada de la justicia», En: N., Fraser; M., Carbonero & Valdivieso., J. *Dilemas de Justicia en el siglo XXI: Género y Globalización* (pp. 292 y 293). Palma: Universitat de les Illes Balears. En el mismo sentido, pero haciendo referencia a los casos de reivindicación de derechos contra Paraguay dentro del Sistema Interamericano véase: Clérico, L. & Aldao, M. (2011). «La igualdad como redistribución y como reconocimiento: derechos de los pueblos indígenas y Corte Interamericana de Derechos Humanos». *Estudios constitucionales*, *9* (1), 157-198. «Para discutir, cuáles son las necesidades, sus intereses; por ejemplo, cómo quieren satisfacer su existencia de acuerdo con sus costumbres ancestrales ligadas al contacto con sus tierras».

derecho internacional[1170]. Incluso esta subjetividad histórica fue recogida por la propia CtIDH en *Comunidad Moiwana v. Surinam,* al hacer referencia a los grupos *Maroons* en el marco de la suscripción de tratados de paz con los conquistadores[1171]. Sin embargo, la aproximación presentada a continuación está fundamentada en el análisis de la dinámica individuo/Estado sobre la cual gira actualmente el Sistema Interamericano.

Ahora bien, resulta necesario reconocer que durante siglos en la región americana ha prevalecido el modelo eurocéntrico sobre las diversas manifestaciones jurídicas indígenas, esto se ha traducido en complejas barreras que persisten en materia de acceso a la justica ambiental. De hecho, los casos presentados ante la CtIDH, demuestran en reiteradas ocasiones que el aumento del riesgo de daño ambiental sobre estas poblaciones encuentra su raíz en una política de Estado que no es capaz de trasladar satisfactoriamente el texto de las leyes ecologizadas más avanzadas a las realidades locales.

De allí la necesidad de establecer un puente que guíe al Estado en su camino hacia la vigencia de los derechos que reconoce tanto su propio ordenamiento como la CADH. Precisamente, la inoperatividad de las vías judiciales en el derecho interno o su inexistencia, hacen cada vez más frecuente el que comunidades indígenas y tribales soliciten la tutela de sus derechos a nivel regional. Estos grupos vulnerables han encontrado en el Sistema Interamericano una forma de minimizar el riesgo de daño ambiental de los espacios naturales donde habitan, además de una oportunidad extraordinaria para generar una ola de cambio socioambiental.

A lo largo de esta sección se busca exponer el rol de los pueblos indígenas como depositarios de los conocimientos tradicionales asociados a protección ambiental[1172], elemento esencial en el desarrollo e implementación de políticas de gobernanza climática basada en los derechos humanos[1173]. De

---

1170. Remiro-Brotóns, A., Riquelme, R., *et al.* (2010) *Derecho Internacional curso general*. Valencia. Trant Lo Blanch. pp. 136-137. Señalando que entre «las autoridades coloniales o estatales emergentes con las tribus y jefes locales», señalado que en la actualidad el plano de estas relaciones se denomina *compacts* o arreglos constructivos.

1171. CtIDH. Comunidad Moiwana V. Surinam, Fondo, Reparaciones y Costas (Ser. C) No. 124. §5-6 (15 Jun. 2005).

1172. IPCC (2022), *Ob. cit*. 9. *«This report recognises the value of the diverse forms of knowledge such as scientific, as well as indigenous knowledge and local knowledge in understanding and evaluating climate adaptation process and actions to reduce risks from human-induced climate change. AR6 highlights adaptation solutions which are effective, feasible, and conform principles of justice».* Véase también: UNHRC, Informe del Relator sobre los derechos de los pueblos indígenas, U.N. Doc. A/HRC/36/46 §22. (01Nov. 2017). *«los conocimientos indígenas habían sido eficaces en la elaboración de medidas para hacer frente a los riesgos climáticos y habían contribuido a aumentar la seguridad alimentaria en muchas partes del mundo».*

1173. UNDG. (2003). The Human Rights Based Approach to Development Cooperation Towards a Common Understanding Among UN Agencies. Recuperado el 30 de noviembre de 2023 de: https://bit.ly/3iL8slB. *«Human rights principles guide all programming in all phases of*

allí la importancia de su participación activa[1174] en los planes y políticas con impacto climática que pretendan ser aplicadas en sus territorios.

En estas líneas se propone explorar el desarrollo multicéntrico aplicado por la jurisprudencia de la CtIDH. En ningún caso esto implica la imposición de una visión sobre otra; por el contrario, se reconoce la existencia de un planteamiento jurídico abierto caracterizado por diversas formas de preservación ambiental y por ende de potenciales catalizadores para sumar a la meta de estabilización de las emisiones regionales de CO_2.

Lo anterior es posible a través del registro conjunto de la cosmovisión indígena y de la cultura jurídica occidental en las sentencias interamericanas. A partir de esta visión, la CtIDH ha logrado conectar los derechos a la vida, propiedad, cultura y medio ambiente, marcando un avance notable que repercute en un mayor bienestar de las personas y la naturaleza.

De allí que esta invitación se aleja de cualquier modelo que pretenda arrogarse la auto representación de las comunidades o pueblos indígenas y tribales[1175], el objetivo es contribuir a la visualización de un diálogo jurídico que ha surgido entre los pueblos indígenas y tribales, el Estados y la CtIDH. Siempre desde el respeto y desde el reconocimiento de las complejidades propias del contexto plurinacional americano en las que se sitúan estas claves de diálogo hasta configurar un discurso ambiental propio, el cual permitiría a corto y mediano plazo impulsar litigios climáticos estratégicos[1176]. Es decir, un análi-

the programming process, including assessment and analysis, programme planning and design (including setting of goals, objectives and strategies); implementation, monitoring and evaluation […] these human rights principles are: universality and inalienability; indivisibility; inter- dependence and inter-relatedness; non-discrimination and equality; participation and inclusion; accountability and the rule of law».

1174. La participación siempre va acompañada de los mecanismos de consulta previa e informada como una forma de respeto por sus derechos, costumbres jurídicas y tradiciones, las cuales a su vez envuelven el aseguramiento de la propiedad intelectual de estos saberes sobre el impacto del hombre en el clima. Véase: UNHRC. Consentimiento libre, previo e informado: un enfoque basado en derechos humanos: Estudio del mecanismo de expertos sobre derechos humanos. U.N. Doc. A/HRC/39/62 de (10 ago. 2018).

1175. No existe un término univoco para definir la identidad indígena, cuando se hace referencia a los pueblos y comunidades puede tener implicaciones de tipo racial, étnico, cultural, multiculturalidad, aculturación, entre muchos otros. Sobre este punto véase: Weaver, H. N. (2001). «Indigenous identity: what is it, and who really has it?». *American Indian Quarterly*, *25*(2), 240-255. El autor se enfoca en tres características: la autoidentificación, la identificación comunitaria y la identificaciónn extra-comunitaria. Véase igualmente: Béteille, A. (1998). «The idea of indigenous people». *Current anthropology*, *39* (2), 187-192. En este trabajo se adopta la terminología de pueblos indígenas y tribales utilizada por la CtIDH.

1176. Raible, L. (15/11/2021). «Expanding Human Rights Obligations to Facilitate Climate Justice? A Note on Shortcomings and Risks». *EJIL: Talk!* Recuperado de: https://bit.ly/30utxdW «Human rights are powerful tools for advocacy: they can give voice to the voiceless, protect vital individual interests against overriding economic concerns, and – at their best – can be transformative and subversive of the very systems that created them».

sis de la arquitectura jurídica aplicada por la CtIDH como posible herramienta complementaria en la contención del cambio climático a nivel regional.

Antes de entrar en materia, es importante aclarar que no existe una definición única sobre pueblos indígenas e identidad indígena. De hecho, sigue siendo un tópico carente de consenso universal[1177]. Por su parte, el movimiento global de derechos indígena, así como el Sistema de las Naciones Unidas está en contra de establecer un concepto estricto, limitado o una definición cerrada, pues a la larga esto también constituiría otra forma de exclusión[1178].

Entre los pueblos originarios subyace una extraordinaria diversidad que «revela la riqueza cultural de lo que se conoce como América Latina»[1179], lo cual da paso a una multiplicidad de aproximaciones antropológicos, biológicos y humanistas. Partiendo de la dimensión pluralista de los derechos humanos resulta innecesario establecer un concepto restringido[1180], con lo cual, en esta obra se adopta la línea de la CtIDH, quien aplica una visión abierta e inclusiva donde se integran en una misma categoría tanto los pueblos indígenas como a los tribales[1181], aunque respetando las características que conforman su identidad cultural[1182].

Así, esta investigación se suma a la delineación conceptual general seguida por el Sistema Interamericano, el cual encuentra su fuente en las categorías empleadas por el Convenio OIT 169[1183], así como por la Declaración de las

---

1177. McElwee, P., Fernandez-Llama zares, A. & *et al* (2018). «Indigenous Ecologies». *Oxford bibliography.* Recuperado de: https://bit.ly/3AtB9tH. Además, señalan que: «Currently more than 350 million people worldwide identify themselves as indigenous, although their legal status varies depending on recognition by states. Thus, struggles for sovereignty have been a key process for many peoples, and claims to sovereignty have been intimately linked to land and resource claims as well».

1178. Zavala J & Oliva,. J. (2017). «Derecho de los Pueblos Indígenas: Textos y Materiales». *Colección Electrónica Institutos de Estudios Internacionales y Europeos Francisco de Vitoria.* No. 8. Universidad Carlos III de Madrid. Recuperado de: https://bit.ly/3DUwHFW

1179. CtIDH. Comunidad Moiwana V. Surinam, Fondo, Reparaciones y Costas (Ser. C) No. 124. (15 jun. 2005). (Voto razonado Juez Antonio Cançado Trindade). § 9. «El presente caso […] revela la riqueza cultural de lo que se conoce como "América Latina", de la cual podemos y debemos sentirnos orgullosos como seres humanos (…) ofrece un testimonio elocuente de la necesidad de plantear y avanzar en esta visión universalista del derecho de gentes».

1180. CIDH. Derechos de los pueblos indígenas y tribales sobre sus tierras ancestrales y recursos naturales. Normas y jurisprudencia del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. § 25. Recuperado el 30 de noviembre de 2023 de: https://bit.ly/3BYCniy.

1181. *Loc. cit.*

1182. CtIDH. Comunidad Indígena Yakye Axa v. Paraguay, Fondo, Reparaciones y Costas (Ser. C) No. 125 §51 (17 jun. 2005).; CtIDH. Pueblo Saramaka v. Surinam, Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas (Ser. C) No. 172 §178 (28 nov. 2007).;CtIDH. Asociación Lhaka Honhat v. Argentina, Fondo, Reparaciones y Costas (Ser. C) No 400. § 284 (6 Feb. 2020).

1183. Véase Convenio 169 OIT.

Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas[1184]. Además, estos instrumentos son parte esencial del *corpus iuris* internacional de los derechos humanos para nutrir el alcance y contenido a la Convención Americana[1185]. Concretamente, el Convenio OIT 169 se encarga de dibujar sin contornos estrictos cuales criterios orientativos pueden ayudar a identificar a unos y otros. Para ello, utiliza la descendencia, aunque lo fundamental es la autoidentificación[1186] como elementos principales.

En este sentido el Convenio 169 señala que los pueblos indígenas nacen de «poblaciones que habitaban en el país o en una región geográfica a la que pertenece el país en la época de la conquista o la colonización o del establecimiento de las actuales fronteras estatales»[1187], sin que sea relevante la situación jurídica actual de estos pueblos, siempre y cuando conserven en todo o en parte sus instituciones económicas, sociales, culturales y políticas. En lo que a pueblos tribales se refiere, el mismo instrumento internacional incluye en este grupo a aquellos colectivos que tiene característica socioculturales y económicas distintivas de otros sectores de la nación, siempre que «estén regidos total o parcialmente por sus propias costumbres o tradiciones o por una legislación especial»[1188].

Por su parte, la CtIDH en *Saramaka v. Surinam* tuvo oportunidad de pronunciarse sobre la equiparación entre estos colectivos a los efectos de asegurarles la recepción de un estándar mínimo de protección. Decisión a partir de la cual reconoció que las características similares que comparten y debido a la conexión con sus territorios ancestrales, tradiciones y costumbres propias en comparación con otros segmentos de la población de un país, les hacía merecedores de un mismo nivel de garantías[1189]. Recientemente, en *Lhaka Honhat,* la Corte efectuó una interesante aclaración sobre la naturaleza evolutiva y dinámica de la cultura, a través de cuyas conexiones entre los pueblos indígenas y grupos externos, generan cambios a través del tiempo, sin que esto implique la pérdida del carácter de pueblo indígena[1190]. Por lo tanto, no altera su condición ni disminuye su escudo especial de protección.

El criterio de autoidentificación será el determinante para aplicar los derechos reconocidos por el Convenio y la CADH. En todo caso, los Estados tie-

1184. Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas ONU. AGRO 61 Sesión., U.N Doc. A/61/53 (13 sep.2007).

1185. Tratado que funciona como la columna vertebral de las propuestas aquí presentadas.

1186. Artículo I Declaración Americana de los Pueblos Indígenas.

1187. Art. 1.b) Convenio 169 OIT

1188. Art. 1.a) Convenio 169 OIT

1189. CtIDH. Pueblo Saramaka v. Surinam, Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas (Ser. C) No. 172 §79 (28 nov. 2007).

1190. CtIDH. Asociación Lhaka Honhat v. Argentina, Fondo, Reparaciones y Costas (Ser. C) No 400. § 284 (6 Feb. 2020).

nen la obligación de establecer condiciones judiciales y administrativas[1191] que permitan reconocer la personalidad jurídica de las comunidades indígenas o tribales conforme al artículo 3 CADH[1192], siendo un acto declarativo que les permite ejercer sus derechos sobre la tierra conforme a sus costumbres y tradiciones[1193]. El incumplimiento del deber estatal de reconocer viene a obstaculizar la realización de derechos preexistentes, ejercidos históricamente por las comunidades[1194]. De allí, que los derechos de estos grupos permanecen inalterables con o sin el reconocimiento del Estado.

De lo anterior se desprende que tanto los grupos indígenas como los tribales, están sujetos a medidas especiales de protección con el fin de asegurar el ejercicio y disfrute efectivo de sus derechos humanos. Fundamentalmente aquellos relacionados con la dimensión colectiva de la propiedad[1195], donde implícitamente se encuentra la protección del entorno natural, así como del medio ambiente de forma autónoma. De allí que estos colectivos vulnerables a través de su cosmovisión representan la oportunidad idónea para establecer nuevas formas de preservación ambiental que coadyuven a la estabilización del clima en la región americana.

Debe aclararse que el análisis aquí presentado está basado en el florecimiento de la ecología indígena dentro da la CADH y la CtIDH, este último como mecanismo plural, comunitario y participativo[1196] que funciona como una herra-

---

1191. CtIDH. Pueblo Indígena Xucuru y sus miembros v. Brasil. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas (Ser. C) No. 346 §130-131 (05 Feb. 2018); CtIDH. Pueblos indígenas Kuna de Madungandí y Emberá de Bayano y sus Miembros v. Panamá. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas (Ser. C) No. 284 §166 (14/ oct. 2014).

1192. CtIDH. Pueblo Saramaka v. Surinam, Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas (Ser. C) No. 172 §164-175 (28 nov. 2007).; CtIDH. Pueblos Kaliña y Lokono v. Surinam, Fondo, Reparaciones y Costas (Ser. C) No. 309. §105-114 (25 nov. 2015).

1193. CtIDH. Pueblo Saramaka v. Surinam, Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas (Ser. C) No. 172 §167-170 (28 nov. 2007).;

1194. CtIDH. Comunidad Indígena Yakye Axa v. Paraguay, Fondo, Reparaciones y Costas (Ser. C) No. 125 §65 (17 jun. 2005).

1195. FAO/FILAC. (2021). *Los pueblos indígenas y tribales y la gobernanza de los bosques. Una oportunidad para la acción climática en el Caribe y América Latina.*, p. 44. Santiago: FAO. Recuperado de: https://bit.ly/3lOcGvi. Con relación a la titulación y demarcación de tierras indígenas señala que: «el reconocimiento formal de los derechos de tenencia de los territorios colectivos es una buena práctica para mitigar el cambio climático, conservar la biodiversidad y hacer posible el manejo sostenible de los bosques» siguiendo el patrón identificado por el IPCC sobre la rehabilitación de tierras degradas y mitigación climática del: IPCC (2019). «Summary for Policymakers». En: P.R. Shukla, J. Skea *et al* (eds.). *Climate Change and Land: an IPCC special report on climate change, desertification, land degradation, sustainable land management, food security, and greenhouse gas fluxes in terrestrial ecosystems*. (pp. 10, 30). Recuperado de: https://bit.ly/31WSK1Y.

1196. Wolkmer, C. (2018). *Pluralismo jurídico: fundamentos de una nueva cultura del Derecho*. Madrid: Dykinson., p. 143. «El pluralismo jurídico, de características comunitarias y participativas, está concebido a partir de una nueva cosmovisión y una nueva ética, por el

mienta óptima entre las múltiples alternativas disponible para mejorar la preservación de los espacios naturales, pero más importante para sumar a la estabilización del clima. La incorporación de la riqueza multicultural a este tipo de derechos es esencial «en un momento en el que la armonía entre la humanidad y su herencia planetaria es un prerrequisito para la supervivencia humana»[1197].

La aplicación de unos derechos humanos plurales responde adecuadamente a la realidad ambiental interamericana, una región en la que se localizan extraordinarios sumideros naturales, desafortunadamente convertidos en fuentes emisoras de gases de efecto invernadero[1198]. LA región está acompañada de una diversidad, riqueza, y potencialidad que hacen posible revertir la crisis ecológica actual, aunque debe reconocerse que la ventana de tiempo para actuar es realmente estrecha.

Una forma de contribuir a la solución es la preservación de las fuentes naturales de captura de gases de efecto invernadero localizadas dentro de los territorios originarios americanos[1199]. Aproximación que se justifica por sí sola, ya que los mismos gozarían de un mayor grado de conservación si se les aplicase un esquema de aseguramiento ambiental de la mano de sus propios habitantes, respaldado por las formas de exigibilidad práctica que brinda el sistema regional de derechos humanos.

Si bien es cierto que la Corte Interamericana representa una oportunidad de acceso a la justicia climática, se es consciente de la existencia de una fuerte crítica sobre el uso de la aproximación basada en los derechos humanos para solventar las problemáticas indígenas. En este sentido, se ha cuestionado el uso de la teoría clásica por ser el traslado de la visión occidental, constantemente marcada por la cláusula colonial modulada a través de «efectos discriminatorios por su universalismo en abstracto e individualista»[1200]. De allí que, pueda resultar controvertido pretender reivindicaciones sobre la base de su condición abstracta de humanos y de pueblos indígenas[1201].

---

reflujo político y jurídico de nuevos sujetos —los colectivos; de nuevas necesidades deseadas, los derechos construidos por el proceso histórico; y por el reordenamiento de la sociedad política— la descentralización normativa del centro para la periferia; del Estado para la sociedad; de la ley para los acuerdos, los arreglos, la negociación».

1197. Gabcíkovo-Nagymaros Project (Hung. v. Slovk.), Judgment, 1997 ICJ. 107 (September 25) (Separate Opinion of Judge Weeramantry).

1198. Gatti, L., Basso, L., *et al* (2021). «Amazonia as a carbon source linked to deforestation and climate change». *Nature*, *595*(7867), 388-393.

1199. FAO/FILAC. (2021), *Ob. cit*. 34.

1200. Sánchez-Rubio, D. (2018). «Derechos humanos, no colonialidad y otras luchas por la dignidad: una mirada parcial y situada». En: D. Sánchez-Rubio. *Derechos humanos instituyentes, pensamiento crítico y praxis de la liberación*. (pp. 90-93) Ediciones Akal: Ciudad de México. Además agrega: «siendo el tratamiento negativo y de rechazo dado a los pueblos y de las llamadas minorías uno de sus máximos exponente».

1201. Schettini, A. (2012), *ob. cit*.

No obstante, se rompe con la conceptualización arcaica[1202] anteriormente mencionada, cuando se integran y activan derechos impregnados de pluralismo[1203]. Es decir, cuando el derecho internacional[1204], en particular el de los derechos humanos se instrumentaliza[1205] a través de una estructura formal[1206], en este caso la Corte Interamericana como foro que promueve una práctica colectiva interestatal para proteger la cultura, la propiedad en su dimensión colectiva, el medio ambiente y otros derechos revestidos con un especial estándar de protección para los pueblos indígenas. Así, es posible identificar una innovadora práctica plural que puede funcionar como escudo primario frente a la problemática climática.

De allí que en esta investigación se valoran los derechos humanos que buscan reconocer las diferencias y aportar desde visiones interculturales[1207]

1202. CIDH (2015). «Pueblos indígenas comunidades afrodescendientes y recursos naturales: protección de derechos humanos en el contexto de actividades de extracción, explotación y desarrollo». Doc. OEA /Ser.L/V/II. Doc. 47/15 §149 (31 dic. 2015). Recuperado de: https://bit.ly/3otZ0qs «[…] marcada por la exclusión histórica, sumadas a prácticas de asimilación, despojo territorial y denegación de sus derechos, han dado lugar a importantes brechas sociales, y de goce de derechos entre los pueblos indígenas de las Américas, y el resto de la población».

1203. Wolkmer, C. (2018), *Ob. cit*. 190 y 192. Entiende el pluralismo como: «múltiples formas de normatividades conflictivas o consensuales, formales o informales y, por otro lado, a que el derecho no se identifique con, y no resulte exclusivamente del Estado» […] un espacio donde «dos o más sistemas jurídicos coexisten en el mismo campo social». Véase también: Sánchez-Bravo, A. (2019). *Democracia, pluralismo y derechos humanos: 500 años. Facultad de Derecho. Universidad de Sevilla. X años de Encuentros hispanos-brasileños de filosofía del derecho y derechos humanos*. Madrid: Aranzadi.; Wolkmer, C. (2003). Pluralismo jurídico: nuevo marco emancipatorio en América Latina. Buenos Aires: CLACSO.

1204. Gabcíkovo-Nagymaros Project (Hung. v. Slovk.), Judgment, 1997 ICJ. 107 (September 25) (Separate Opinion of Judge Weeramantry). *«There are many routes of entry by which they can be assimilated into the international legal system, and modern international law would only diminish itself were it to lose sight of them embodying as they do the wisdom which enabled the works of man to function for centuries and millennia in a stable relationship with the principles of the environment».*

1205. Véanse las obligaciones en el contexto de actividades de explotación, extracción y desarrollo: CIDH (2015). CIDH (2015). «Pueblos indígenas comunidades afrodescendientes y recursos naturales: protección de derechos humanos en el contexto de actividades de extracción, explotación y desarrollo». Doc. OEA /Ser.L/V/II. Doc. 47/15 §55-148 (31 dic. 2015).

1206. Véase: Jodoin, S. & Savaresi, A., *et al.* (2021). «Rights-based approaches to climate decision-making». *Current Opinion in Environmental Sustainability*, *52*, 45-53. Recuperado de: https://bit.ly/3s7I7TG. Véase también: Belfer, J. Ford, M. Maillet *et al.* (2019) «Pursuing an indigenous platform: exploring opportunities and constraints for indigenous participation in the UNFCCC». *Global Environmental Politics*, 19(1), 12-33.

1207. Sánchez-Rubio, D. (2018), *Ob. cit*. 194. El autor señala: «Los derechos humanos junto con otros procesos de lucha por la dignidad humana contextual e histórica deben contribuir al desarrollo de propuestas y miradas interculturales que desde el respeto y la capacidad de los seres humanos de dotar de sentido a sus propias realidades en tanto sujetos plurales

en la defensa de los espacios naturales americanos como una manifestación esencial de la expansión del tradicional entendimiento de los derechos humanos[1208], protegiendo con mayor efectividad frente al impacto causado por el cambio climático[1209]. Precisamente, la CtIDH enmarca sus decisiones en una visión descolonizada[1210], planteando una alternativa a las problemáticas complejas que día a día avanzan en el terreno de derechos humanos.

Los pueblos indígenas son reconocidos como uno de los mayores afectados por el cambio climático[1211] debido a la dependencia de su modo de vida con el medio ambiente y sus recursos[1212]. Situación exacerbada por las condiciones de discriminación histórica a las cuales han estado sometidos[1213]. Además, a esto debe sumarse el problema de justicia distributiva[1214] que les aqueja, pues su huella de carbono es a penas marginal en la escala de contribución de emisiones[1215].

---

y diferenciados, defienden divisiones del ser, del saber, del poder y del hacer humano no coloniales y basadas en solidaridades reciprocidades que no reniegan de ámbitos de encuentros comunes interculturales». Véase: Sánches-Rubio, D. (2019). «Praxis instituyente, común y multigarantías de derechos humanos». En: A. Sánchez-Bravo (ed.). *Democracia, pluralismo y derechos humanos: 500 años. Facultad de Derecho. Universidad de Sevilla. X años de Encuentros hispanos-brasileños de filosofía del derecho y derechos humanos.* (pp. 133-158). Madrid: Aranzadi.

1208. Solo por mencionar un ejemplo véase: CIDH Audiencia temática sobre cambio climático y DESCA de mujeres, NNA, pueblos indígenas y comunidades rurales. 173 Periodo de Sesiones (25 sep. 2019).

1209. Ramírez, J. (2021), *Ob. cit*. 17.

1210. Sánchez-Rubio, D. (2018), *ob. cit*. 194.

1211. OHCHR|HCDH, Informe sobre como corregir el déficit de protección de los derechos humanos en el contexto de la migración y el desplazamiento de personas a través de fronteras internacionales a raíz de los efectos adversos del cambio climático y apoyar los planes de adaptación y mitigación de los países en desarrollo destinados a corregir dicho déficit de protección, U.N. Doc. A/HRC/38/21 §19 (23 abr. 2018). UNHRC, Informe del Relatora Especial sobre los derechos de los pueblos indígenas, U.N. Doc. A/HRC/36/46 §6-15. (01 nov. 2017).

1212. UNHRC, los derechos humanos y los pueblos indígenas U.N. Doc. A/HRC/4/11 (8 oct. 2021). Véase también: *Cumbre Mundial de los Pueblos Indígenas sobre el Cambio Climático. Declaración de Anchorage* (24 abr. 2009). Recuperado de: https://bit.ly/3DU8xfS

1213. CIDH. *Pueblos indígenas comunidades afrodescendientes industrias extractivas* CIDH Doc. 47/15 § 149 (31 dic. 2015). «Las diferencias culturales en la región no han sido entendidas siempre en términos de reconocimiento y protección, sino que históricamente los pueblos indígenas y tribales han sido sujetos a condiciones de marginación y discriminación».

1214. Véase sobre este tema: Whyte, K. (2016). «Is it colonial déjà vu? Indigenous peoples and climate injustice». En: D. Adamson,. & M. Davis (eds.) *Humanities for the Environment* (pp. 102-119). Londres: Routledge.; Grossman, Z. & Parker, A. (2012). *Asserting native resilience: Pacific Rim indigenous nations face the climate change*. Oregon: Oregon State University Press.

1215. CIDH/REDESCA. (2021, 4 de noviembre). [comunicado de prensa], *Ob. cit*.

Sin embargo, los pueblos indígenas y tribales perciben el impacto climático con gran intensidad[1216], al sufrir graves consecuencias como variaciones en los ciclos de abastecimiento del agua[1217], brotes epidémicos[1218], la alteración de la seguridad alimentaria[1219] y la erosión generalizada de sus medios de vida tradicional[1220], entre muchos otros. Esta realidad exige una aproximación transformadora del tratamiento de los problemas ambientales desde el lente de los derechos humanos afectados.

En lo que se refiere al tratamiento propuesto desde los escenarios globales en materia climática y pueblo indígenas, la CMNUCC a través de las Conferencias de Partes consideró a los integrantes de estas comunidades ancestrales como grupos de interés y en el presente les reconoce como auténticas salvaguardas de la naturaleza[1221], mientras que el Acuerdo de París ha puesto en funcionamiento la plataforma LCIPP[1222]. Por su parte, los Objetivos de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible[1223] reconocen la importancia de la

1216. IPCC (2022), *Ob. cit*. 11.

1217. Waldmüller, J. (2020). «Pueblos Indígenas y Cambio Climático». *Letras Verdes. Revista Latinoamericana de Estudios Socioambientales*, (27), 9-10.

1218. WHO/PAHO. (2021) Climate change and health. 30 de noviembre de 2023 de: https://www.paho.org/en/topics/climate-change-and-health El cambio climático y su incidencia en enfermedades tropicales.

1219. Véase: OIT (2018). «Los pueblos indígenas y el cambio climático. De víctimas a agentes del cambio por medio del trabajo decente». Ginebra: OIT. Recuperado de: https://bit.ly/3uGeKs2 Tal como reseña el informe, esto puede acontecer debido a que los desastres naturales están estrechamente vinculados con el aumento de la desigualdad y desvinculan a estos grupos del crecimiento económico.

1220. *Loc. cit.* Esto debido a que los indígenas dependen de los recursos naturales, además de estar localizados en aéreas especialmente vulnerables al cambio climático, quedando más expuesto al desplazamiento y a la migración forzada a causa de fenómenos ambientales.

1221. Delgado-Pugley, D. (2019). «La participación de los pueblos indígenas en la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático. De: actores "tradicionales" a actores frente al Antropoceno». *Documentos de Trabajo Fundación Carolina.* 22, 2da Época., p. 11-17. Recuperado de: https://bit.ly/2ZOy6Qa

1222. Es oportuno tener en consideración que en el marco de la COP 23 se creó «The Local Communities and Indigenous Peoples Platform (LCIPP)», plataforma que permite integrar los conocimientos de este grupo en la lucha climática. Véase: UNFCC. (2020) The initial two-year workplan of the LCIPP for the period 2020-2021. 30 de noviembre de 2023 de: https://bit.ly/2ZVulIR *«The platform has been established to strengthen the knowledge, technologies, practices, and efforts of local communities and indigenous peoples related to addressing and responding to climate change, to facilitate the exchange of experience and the sharing of best practices and lessons learned on mitigation and adaptation in a holistic and integrated manner and to enhance the engagement of local communities and indigenous peoples in the UNFCCC process».*

1223. Giménez,. I. (2021a), *Ob. cit*. 419. *«In 2020, the UNEP supported the SDG formula from a human rights approach toward development to tackle COVID-19 and conquer the 2030 outcomes»*. Demostrando que la aproximación sistémica DDHH es una herramienta funcional.

participación de estos colectivos en los planes de estabilización climática y en la vida de los ecosistemas terrestres[1224]. Aunque todas estas aproximaciones ciertamente contribuyen a la consolidación de las estrategias de mitigación frente al cambio climático, por sí solas resultan inefectivas[1225].

En lo que respecta al Sistema Universal[1226], a pesar de sus respectivas consideraciones en materia de pueblos indígenas[1227], cambio climático[1228] y de la innovadora aproximación trasnacional para presentar Comunicaciones[1229] a través de los procedimientos especiales del Consejo de Derechos Humanos[1230]

1224. Aunque todos los ODS son transversales, en esta obra se valora la combinación del ODS 13 cambio climático y ODS 15 vida de ecosistemas terrestres en relación los pueblos indígenas en los indicadores 2.3, 1.4 y 5.a.1., así como el ODS 16 asociado al acceso a la justicia.

1225. Así lo demuestra: «Climate Action Tracker (2021) Analysis: Despite "code red" on climate, target update momentum at standstill». Recuperado el 30 de noviembre de 2023 de: https://bit.ly/3qCMTIT *«The new comprehensive CAT rating system reveals [...] most government targets and actions remain highly or critically insufficient. [...] Developing countries also need to update their targets and policies, but also show a pathway for how they could also reduce their emissions as fast as possible if they were supported financially - and to clearly indicate the support they need».*

1226. Wewerinke-Singh., M. (2018), *Ob. cit*. 158. Sobre las quejas individuales: *«Most of this individual complaint procedures are stablished under Optional Protocols to the core of human rights treaties. Not all States whose population are particularly affected by climate change have ratified these Protocols, which means that the possibilities for summitting complaints before human rights treaties bodies about human rights violations allegedly committed by those States are limited».* Véase un ejemplo en este sentido los avances del Comité de Derechos del Niño Sacchi v. Arg. (23 Sep. 2019). La petición fue declarada inadmisible para las Comunicaciones 104/2019 (Argentina), 105/2019 (Brasil), 106/2019 (Francia), 107/2019 (Alemania) y 108/2019 (Turquía).

1227. A título de ejemplo véase: CCPR, Dictamen aprobado por el Comité a tenor del artículo 5, párrafo 4 del Protocolo Facultativo. Comunidad Indígena Campo Agua'e v. Paraguay, U.N. Doc. CCPR/C/132/D/2552/2015 (12 oct. 2021). Donde se declaró la violación de los artículos 2.3 (respetar y garantizar los derechos humanos), 17 (vida privada y domicilio) y 27 (vida cultural) del Pacto de Derechos Civiles y Políticos, partiendo de la especial relación que tienen los pueblos indígenas con el territorio, por lo que la falta de control del Estado sobre las actividades contaminantes vulneró los mencionados derechos. Con lo cual el Estado debería tomar medida para solventar la situación en 180 días contados a partir de la emisión del dictamen.

1228. Véase. HRC, mandato del relator sobre la promoción y protección de los derechos humanos en el contexto del cambio climático. U.N. Doc. A/HRC/48/14 (8 oct. 2021).

1229. UNHROHC| ACNUDH. Special procedures. What are Comunications? Recuperado el 30 de noviembre de 2023 de: https://bit.ly/3xG3b5n

1230. UNHROHC |ACNUDH. (2021) Preguntas frecuentes sobre los derechos humanos y el cambio climático. Folleto Informativo No. 38. Ginebra: ACNUDH., 54. Recuperado de: https://bit.ly/3LoBofI. «El Consejo ha contribuido a dar a conocer mejor los vínculos entre los derechos humanos y el cambio climático mediante sucesivas aclaraciones específicas sobre las formas en que el cambio climático afecta a los derechos humanos, entre otras cosas mediante la adopción de una serie de resoluciones relacionadas con el cambio

y de la potencialidad que tienen las denuncias particulares[1231], entre Estados e Informes Periódicos[1232] del Comité de Derechos Humanos, estos mecanismos dan cuenta de las violaciones, pero siguen careciendo de la fuerza vinculante que permita asegurar la consecución de las metas de contención de la amenaza climática.

De hecho, las resoluciones del Consejo en la materia[1233] y las recomendaciones derivadas del profundo examen técnico de los Expertos del Comité de Derechos Humanos, aunque constituyen por una parte a incentivar la conciencia sobre la problemática, mientras que por la otra abren el camino hacia una vía de acción plausible para alegar una violación de un tercer Estado con relación al cambio climático[1234]. No obstante, persiste el efecto no obligatorio. De allí que en esta obra se valora su aporte, especialmente el estado del arte brindado a través de los informes temáticos, pero se le considera aún en una etapa embrionaria en cuanto a la actividad de supervisión. Lo anterior conduce inexorablemente a posar la mirada sobre otras alternativas como la litigación regional en materia de derechos humanos[1235], donde particularmente destaca el avanzado e interesante tratamiento ambiental desarrollado por el Sistema Interamericano[1236].

---

climático y los derechos humanos». Véase: CEPAL. (2019b). «Cambio climático y derechos humanos. Contribución desde y para América Latina y el Caribe». Santiago: CEPAL., 20. Recuperado de: https://bit.ly/32X7JsL. Donde se destaca la importancia del Examen Periódico Universal realizado por el Consejo, a partir de los cuales se desprenden hasta 2019 por lo menos setenta y seis (76) recomendaciones conectadas con medio ambiente, cambio climático y derechos humanos.

1231. Bantekas, I. & Oette., L. (2020). *International human rights law and practice*. Cambridge: Cambridge University Press., 304. «Complaints procedures offer a unique opportunity for individuals and groups to have claims of human rights violations considered and their rights vindicate in a judicial or quasi-judicial procedure».

1232. Los Estados Parte del Pacto deben presentar informes periódicos sobre la forma en la cual se ejercitan tales derechos dentro de su jurisdicciónn.

1233. A/HRC/RES/7/23 (2008), A/HRC/RES/710/04 (2009), A/HRC/RES7/18/22 (2011), A/HRC/RES7/26/27 (2014), A/HRC/RES/29/15 (2015), A/HRC/RES/32/33 (2016), A/HRC/RES/35/20 (2017), A/HRC/RES/38/04 (2018), A/HRC/RES/41/20 (2019), A/HRC/RES/44/7 (2020) y A/HRC/48/L.23 (2021).

1234. Aunque el Estado de su domicilio no sea parte de estos Protocolos. En este sentido se pronuncia: Wewerinke-Singh., M. (2018), 158-159.

1235. Aunque el TEDH ha desarrollado un despliegue de extraordinaria innovación, no aborda la cuestión ambiental desde los pueblos indígenas salvo en lo referente a casos puntuales como: Handölsdalen Sami v. Swed. App. No. 39013/04 2010, https://bit.ly/3tP9GTe. Dado que el foco de atención en capítulo son los pueblos indígenas afectados en un contexto ambiental, el capítulo se concentra en el Sistema Interamericano.

1236. Véase: CtIDH. (2018) «Cuadernillo de jurisprudencia de la Corte Interamericana No. 11: Pueblos Indígenas y Tribales». Recuperado de: https://bit.ly/3mKiqGu; CtIDH. (2019) «Cuadernillo de jurisprudencia de la Corte Interamericana Nro. 22: Derechos económicos, sociales culturales y ambientales». Recuperado de: https://bit.ly/3FghW1n

Las anteriores son razones suficientes para justificar la elección y aplicación de unos derechos humanos interpretados a la luz del pluralismo[1237], como herramienta de acción por el clima. Elegir esta iniciativa permitiría a los pueblos indígenas y tribales pasar de víctimas afectadas por los efectos climáticos a operadores de cambio socioambiental utilizando como vehículo el proceso de ecologización de la humanización del derecho internacional de los derechos humanos dentro del Sistema Interamericano[1238].

Aunque la aproximación jurídica propuesta en principio tiene un sesgo que puede ser calificado como antropocéntrico, pues está basada en el aseguramiento y protección de los derechos del hombre. A lo largo de estas líneas se demostrará que las dinámicas expuestas por la jurisprudencia de la CtIDH, permiten construir un espacio de comunicación multicéntrico para consolidar una respuesta jurídica holística que protege al hombre como integrante de la naturaleza y al entorno ecológico frente al cambio climático, utilizando como base instrumentos de derechos humanos nutridos por otros de raíz medio ambiental, social, comercial y cultural.

Esta aproximación interamericana contesta a las reclamaciones expresadas por los pueblos indígenas en las que los conocimientos tradicionales y la visión holística que tienen estas comunidades sobre el medio ambiente son un recurso de vital importancia, aunque no utilizado para la adaptación y mitigación de los efectos de cambio climático[1239]. Los pueblos indígenas tienen una visión que trasciende el individualismo de las sociedades occidentales, «para las comunidades, aquello que perturba al territorio, afecta en lo colectivo, a la identidad que fluye con el territorio, a las generaciones pasadas, presentes y futuras»[1240], por lo cual se aseguran de preservar su entidad material y espiritual.

La clave de esta aproximación está en que es posible invocar la vulneración de la obligación estatal de garantía y respeto de los derechos humanos

---

1237. Sánchez-Rubio. D. (2020), p.73. Madrid. Dykinson. El autor plantea unos derechos humanos entendidos desde: «La cultura matriarcal (frente a la cultura patriarcal) y el saber del *frater* (frente al saber del *dominus*), deber ser lo que predomine en nuestras sociabilidades, a través de una praxis permanente, abierta e inacabada de lo colaborativo, desde lo plural y diferenciado de la condición humana, digna de vivir y de ser vivida en armonía con el medio ambiente».

1238. Aunque se coincide con el planteamiento esbozado por Raible, L. (15/11/2021), *Ob. cit*. *«Human rights can of course assist in evaluating the imminence of a particular need, or they could guard against overriding vital individual interests in the face of cumulative priorities. But they do not, in and of themselves, provide those principles of priority that are needed to distribute resources fairly in the first place».*

1239. UNHRC, Informe del Relatora Especial sobre los derechos de los pueblos indígenas, U.N. Doc. A/HRC/36/46 §23. (01 nov. 2017).

1240. Ñushpi Quilla Mayhuay Alancay, responsable del Área de Pueblos Indígenas de XUMEK Asociación para la Promoción de los Derechos Humanos de Mendoza Argentina. Entrevista realizada el 07 dic. 2021.

(artículo 1.1 CADH), en virtud de un daño o riesgo climático significativo, cuando están involucrados los pueblos indígenas y tribales. Debe recordarse que existen otras obligaciones de garantía específicas de los Estados en relación con los pueblos indígenas que acompañan la activación del artículo 1.1 de la Convención.

Las mencionadas obligaciones pueden sintetizarse en: Primero, el deber de respetar y garantizar los derechos sin discriminación[1241]. Segundo, adecuar la normativa interna a la CADH[1242]. Tercero, asegurar que las restricciones a la propiedad colectiva no impliquen la denegación de la supervivencia cultural y física de los pueblos. Cuarto, garantizar el derecho de participación, la realización del estudio de impacto ambiental y social, así como el acceso a los beneficios compartidos[1243], y quinto, establecer medidas de protección especial para niños y ancianos[1244], por ser grupos que enfrentar mayor riesgo dentro del grupo ya de por sí vulnerable.

Los deberes antes expuestos dan cuenta no solo de las obligaciones estatales de carácter especiales, sino de condiciones que permiten agregar fuerza argumentativa al *locus Standi* interamericano en materia de cuestiones ambientales/climática[1245]. En todo caso, y como se verá más adelante, la forma para evaluar la configuración o no de la vulneración escapa de la atribución lineal donde se requiere la prueba del daño ambiental. En esta

1241. CtIDH. Rosendo Cantú y otros v. México. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia (Ser. C) No. 225 §185 (31 ago. 2010). CtIDH. Pueblo Indígena Kichwa de Sarayaku v. Ecuador, Fondo, Reparaciones y Costas (Ser. C) No. 245 § 264 (27, jun. 2012).

1242. CtIDH. Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni v. Nicaragua, Fondo, Reparaciones y Costas (Ser. C) No. 79, § 137-138. (31 ago. 2001).; CtIDH. Comunidad Indígena Yakye Axa v. Paraguay, Fondo, Reparaciones y Costas (Ser. C) No. 125 §100-104 (17 jun. 2005).; CtIDH. Comunidad Indígena Sawhoyamaxa v. Paraguay, Fondo, Reparaciones y Costas (Ser. C) No. 146, §177 (29 Mar. 2006).; CtIDH. Pueblo Indígena Kichwa de Sarayaku v. Ecuador, Fondo, Reparaciones y Costas (Ser. C) No. 245 § 100-198 (27, jun. 2012).; CtIDH. Comunidad Garífuna Triunfo de la Cruz y sus Miembros v. Honduras. Excepciones Preliminares Fondo, Reparaciones y Costas (Ser. C) No. 305 §172 y 175 (08 oct. 2015).

1243. CIDH. *Pueblos indígenas comunidades afrodescendientes industrias extractivas* CIDH Doc. 47/15 § 149 (31 dic. 2015). Dentro de la garantía del derecho a la participación se incluye: consulta, consentimiento previo, libre e informado, así como la realización de la EIA/ social y el derecho de participación en los beneficios resultantes del proyecto. Sobre el principio de la utilización y participación equitativa véase: Álvarez, I. (2021) «El principio de la utilización y participación equitativa y razonable y la protección del medio ambiente en la Convención de Naciones Unidas sobre los cursos de agua internacional». *Revista Jurídica Universidad Autónoma de Madrid* (44), 95-125.

1244. CtIDH. Comunidad Indígena Yakye Axa v. Paraguay, Fondo, Reparaciones y Costas (Ser. C) No. 125 §100-104 (17 jun. 2005).

1245. Aunque se espera que en el futuro el ámbito de protección se extienda substancialmente hacia otros grupos vulnerables a corto plazo, principalmente sobre aquellos identificados en el Preámbulo del Acuerdo de París.

oportunidad el análisis se inicia desde el deber de cuidado del Estados en relación con el cumplimiento de los mínimos estándares exigidos a través de la interpretación autorizada de la CADH, a su vez nutrida por los instrumentos del clima y ambientales frente a los deberes especiales que se tienen ante los pueblos indígenas y tribales para mitigar el riesgo peligroso que acecha sobre sus derechos.

Además, debe considerarse que estas colectividades han sido reconocidas como protectores natos de los bosques, ríos y selvas que se extienden a lo largo y ancho de sus territorios ancestrales. Su cultura, su conocimientos y tradiciones orientadas hacia la preservación de los componentes de la naturaleza *el buen vivir andino*[1246], así como la mejor forma de vivir pensamiento enraizado también en los pueblos amazónicos[1247], constituyen parte esencial y congruente de la acción climática que tanto necesita el planeta. Igualmente, han sido reconocidos como piedra fundamental en la ordenación medioambiental.

Ejemplo de lo anteriormente expuesto es su inclusiónn dentro del régimen del clima[1248], mediante el cual se reconoce el valor de sus conocimientos tradicionales como fuente de inspiración para las políticas climáticas universales, mientras que desde otros instrumentos vitales aparecen incorporados dentro de las estrategias de conservación y colaboración para la estabilización del sistema del clima, entre ellos destacan especialmente el Principio 22 de la Declaración de Rio sobre Medio Ambiente y Desarrollo[1249], el Convenio de Diversidad Biológica en su Preámbulo y artículos 8. J) y 10. C), solo por mencionar dos de los más conocidos.

1246. Bedriñana, K. & Umaña, B. (2019). «Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Otra lectura, desde el Buen Vivir». *Revista de Paz y Conflictos*, *12*(1), 253-254. «buena existencia en armonía y equilibrio, con los ciclos de la Madre Tierra, del cosmos, de la vida y de la historia y con toda forma de existencia en permanente respeto»

1247. Véase sobre el pueblo Pemón de Venezuela a: Aguilar, V., Castro, G.; *et al.* (8 ago. 2121). «Cambio climático: entre pandemia, protección de los bosques y derechos territoriales indígenas». *Wataniba*. Recuperado de: https://bit.ly/2YqEi0A. «WAKÜPE/WAKÜ:PE KOWANNÖTOK, o la *mejor forma de vivir* expresa las aspiraciones del pueblo asociado a la seguridad territorial en la que se encuentra la fauna y flora, zona de pesca, cacería, prácticas agrícolas, que en sus enseñanzas y aprendizajes fortalece lo cultura».

1248. Véase el Preámbulo y el Art. 7.5 Acuerdo de París: «[…] tomando en consideración a los grupos, comunidades y ecosistemas vulnerables, y que dicha labor debería basarse e inspirarse en la mejor información científica disponible y, cuando corresponda, en los conocimientos tradicionales, los conocimientos de los pueblos indígenas y los sistemas de conocimientos locales, con miras a integrar la adaptación en las políticas y medidas socioeconómicas y ambientales pertinentes, cuando sea el caso».

1249. Principio 22 Declaración de Río: «Las poblaciones indígenas y sus comunidades, así como otras comunidades locales, desempeñan un papel fundamental en la ordenación del medio ambiente y en el desarrollo debido a sus conocimientos y prácticas tradicionales. Los Estados deberían reconocer y apoyar debidamente su identidad, cultura e intereses y hacer posible su participación efectiva en el logro del desarrollo sostenible».

Además, al 2021 la protección de los espacios localizados en los territorios indígenas y tribales es fundamental, pues estas poblaciones habitan[1250] en aéreas forestales ricas en biodiversidad, que a su vez son importantes reservorios naturales de carbono[1251]. De hecho, sus territorios contienen aproximadamente «un tercio de todo el carbono almacenado en los bosques de América Latina y el Caribe y el 14 % del carbono almacenado en los bosques tropicales a nivel mundial»[1252].

Debido a la importancia de estas poblaciones para el anclaje de la temperatura del planeta y atendiendo al canal de acción que brinda el Sistema Interamericano para salvaguardar su identidad, cosmovisión, riqueza cultural y medio ambiente como manifestación del escenario que permite la realización plena de sus derechos. Así, la Convención Americana vulnerada en un contexto ambiental despliega a favor de pueblos indígenas y tribales una serie de obligaciones cuya vulneración puede ser invocada a través de la activación de la vía cuasi jurisdiccional de la CIDH y posteriormente ante la CtIDH.

Para comprender la potencialidad de los litigios climáticos en el Sistema Interamericano, debe comenzarse por el proceso de identificación de las obligaciones estatales en materia de derechos humanos[1253], medio ambiente, y cambio climático frente a los pueblos indígenas. En este orden, es necesario hacer mención del trabajo realizado por los dos Relatores Especiales del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas[1254]. Particularmente, sobre el resultado arrojado por el Reporte 2019, donde se identificó un catálogo de obligaciones susceptibles exigibilidad en la materia[1255], lo cual viene

1250. Así como también son propietarios de estos espacios aplicando una cosmovisión que abraza de estos sumideros naturales de carbono. De manera que su participación activa envuelve el manejo sustentable de estos territorios. Véanse los hallazgos del IPCC (2022), *Ob. cit*. 23 y 30.

1251. UNFCCC. (2021) Indigenous people increasingly engaging in climate action. Recuperado el 30 de noviembre de 2023: https://bit.ly/3cjyFUX

1252. FAO/FILAC. (2021), *Ob. cit*. viii.

1253. Sobre la definición de obligaciones climática en cabeza del Estado véase también: DE VILCHEZ, P. (2022). *Climate in Court. Defining State Obligations on Global Warming Through Domestic Climate Litigation*. Cheltenham: Edward Elgar.

1254. El primer mandato como experto independiente fue creado en el 2012 donde se designó al Sr. John H. Knox hasta 2018 cuando fue nombrado el Sr. David R. Boyd, actual Relator Especial. Véase: ONU. Secretario General, obligaciones de derechos humanos relacionadas con el disfrute de un medio ambiente sin riesgos, limpio, saludable y sostenible. U.N. Doc. A/74/161(15 jul. 2019) [UNHRC A/74/161 (2019)]. Debe reconocerse que este trabajo que fue la continuación de los hallazgos plasmados Sr. John H. Knox, quién analizó la profunda conexión entre los derechos humanos y medio ambiente.

1255. Ya que tiene un valor intrínseco por las implicaciones sobre la modulación de la conducta de los Estados. Véase: UNHROHC |ACNUDH. (2021), *Ob. cit*. 38. En este documento se estructuraron las obligaciones de la forma siguiente: 1) Mitigar el cambio climático y prevenir y prevenir sus efectos negativos en los derechos humanos. 2) Velar porque todas las

a legitimar la línea adoptada por el tribunal interamericano con relación a la protección de derechos vulnerados en un contexto ambiental.

Cuestiones de capital importancia pues el Reporte puede servir como hoja de ruta para la articulación de compromisos especiales dentro de la CADH. A través sus hallazgos se han identificado (2) dos obligaciones estatales principales, a saber de: 1) la obligación de proteger los derechos humanos frente al daño ambiental[1256], y 2) la obligación de respetar los compromisos internacionales asumidos[1257]. Ambas moduladas mediante otras dos (2) categorías básicas: obligaciones de naturaleza sustantivas y las de tipo instrumental o de procedimiento[1258], amalgamadas por deberes estatales específicos para asegurar la protección de sujetos en una especial condición de vulnerabilidad[1259].

Esto se traduce en que los problemas ambientales, en particular el climático debería ser abordado desde un enfoque basado en derechos humanos para reforzar su efectividad[1260]. De lo anterior se desprende que los «derechos humanos se reafirman en las obligaciones ambientales»[1261], con lo cual es posible delimitar un estándar de protección climática mínimo con rela-

personas tengan la capacidad necesaria para adaptarse al cambio climático. 3) Asegurar la rendición de cuentas y la reparación efectiva de los daños a los derechos humanos causados por el cambio climático. 4) Movilizar el máximo de recursos disponibles para un desarrollo sostenible y basado en los derechos humanos. 5) Cooperar con otros Estados. 6) Velar por la equidad climática. 7) Velar porque todas las personas disfruten de los beneficios de la ciencia y sus aplicaciones. 7) Proteger los derechos humanos de los daños causados por las empresas. 8) Garantizar la igualdad y la no discriminación. 8) Velar por una participación activa, significativa e informada.

1256. UNHRC A/74/161 (2019), 21.

1257. UNHRC A/74/161 (2019), 21.

1258. Sobre las obligaciones sustantivas e instrumentales: CtIDH. OC 23/17. §125. La Corte señala entre las obligaciones estatales a examinar en casos ambientales se encuentran: «(A) la obligación de prevención; (B) el principio de precaución; (C) la obligación de cooperación, y (D) las obligaciones procedimentales en materia de protección del medio ambiente».

1259. UNHRC A/74/161 (2019), 22. Véase también el Preámbulo del Acuerdo de París que incluye una lista orientativa de categorías de sujetos especialmente vulnerables con relación a la afectación de sus derechos humanos. Véase también: CIDH. *Pueblos indígenas comunidades afrodescendientes industrias extractivas* CIDH Doc. 47/15 § 149 (31 dic. 2015). «Como ha sido extensamente desarrollado por los órganos del Sistema Interamericano, los Estados tienen obligaciones específicas con relación a los pueblos indígenas y tribales en tanto sociedades originarias preexistentes a la colonización o instauración de las actuales fronteras estatales. El reconocimiento de derechos específicos a estos pueblos se encuentra igualmente vinculado al respeto y valorización de las diferentes visiones culturales, concepciones de bienestar y desarrollo, y en última instancia a su derecho a existir como pueblos étnicos y culturalmente diferenciados».

1260. UNHRC A/74/161 (2019), 21. Véase también: CEPAL. (2019b), *Ob. cit*. 13. Donde se trasladan los elementos centrales del enfoque de derechos humanos para la región.

1261. UNHRC A/74/161 (2019). 22. Véase también: Ramírez, J. (2021)., *Ob. cit*. El autor señala que: *«This principle is one of the ideas that structure environmental law in general and that has particular importance in the fight against climate change […] The basis of this principle*

ción a estos. Los Estados se encuentran ante deberes exigibles mediante los mecanismos de cumplimiento aceptados para la tutela y garantías de los derechos humanos[1262], lo cual facilita la adecuación de políticas climática nacionales conforme a los parámetros regionales de protección de los derechos del hombre.

De esta manera, sería posible activar la vía procesal climática para iniciar el análisis de responsabilidad de uno o varios Estados frente al presunto quebrantamiento de las obligaciones de proteger y garantizar los derechos convencionales afectados o en riesgo grave de daños, así como ante la falta de compatibilidad del derecho interno con la CADH en relación con escasos o ausentes planes de mitigación frente el cambio climático peligroso. En concreto con el mandato de los artículos 1.1 y 2 CADH en conexión con la vulneración de los derechos sustantivos a la propiedad/ medio ambiente, y/o la trasgresión de garantías procesales que obstaculizan el acceso a la justicia climática[1263].

A pesar de que esta investigación se acoge a la línea de pensamiento antes expuesta, no se desconoce que el planteamiento esbozado encuentra resistencia[1264]. De hecho, un sector de la doctrina afirma que los instrumentos del clima cuentan con mecanismos propios, entre ellos: las Contribuciones Nacionales Determinadas enlazados con las obligaciones de comunicación y transparencia, las cuales conducen al cumplimiento del objetivo primario de reducción de emisiones[1265]. Para los defensores de esta postura, la activación de las cortes regionales de derechos humanos resulta una vía procesal inadecuada pues la reducción de emisiones fue expresamente encargada al régimen internacional del clima[1266].

No obstante, a lo anterior debe responderse que: En primer lugar, la crítica presentada pierde de vista la dilatada estructura temporal requerida y aun cuando es viable su implementación no logra alcanzar las metas de anclaje de la temperatura a un nivel que efectivamente minimice el riesgo de daño

is that countries are obliged to respect the rights of other member states of the international community».

1262. Véase la situación regional a grandes rasgos en: CEPAL. (2019b), *Ob. cit*. 8-9.

1263. Ya que los Estados tienen el deber de adoptar medidas, positivas y específicas que aseguren la salvaguarda de los derechos humanos en especial cuando se trata en situaciones de vulnerabilidad y riesgo. De esta manera, es posible exigir planes y acciones climática que demuestren una conducta diligente del Estado con relación a la mitigación del riesgo climático.

1264. Mayer, B. (2021b). «Temperature Targets and State Obligations on the Mitigation of Climate Change». *Journal of Environmental Law*, 33 (3), 593. El autor también discute sobre: *«NDCs as unilateral declaration, as well as form customary international law and human rights treaties».*

1265. En resumen, el mecanismo binario del Acuerdo de París.

1266. Mayer, B. (2021b), *Ob. cit*. 593. El autor también discute sobre: «NDCs as unilateral declaration, as well as form customary international law and human rights treaties».

causado por el cambio climático peligroso. En segundo lugar, no se vislumbra una salida inmediata a la debilidad y opacidad de la Contribuciones Nacionales Determinadas[1267], lo cual evidencia las dificultades que enfrenta el sistema para fortalecer el proceso de informes sobre el que descansa la estructura del Acuerdo de París[1268]. En tercer lugar, el problema de la afectación de los derechos fundamentales no puede verse con miopía, pues esto no ayuda a evitar la perpetuación del círculo de impunidad que gira en torno a la conculcación de los derechos fundamentales. En cuarto lugar, el régimen del clima hasta ahora se ha mostrado insuficiente para contener por sí solo el cambio climático[1269].

El régimen del clima sigue buscando fórmulas alternativas coadyuvantes. Precisamente esta contingencia climática encuentra soporte transversal en la efectividad de los derechos humanos aplicados a los pueblos indígenas para favorecer su evolución, entonces ¿Por qué no utilizar la complementariedad? Herramienta doblemente protectora ofrecida por ambos regímenes para tratar de mantener la temperatura de la tierra a 1.5 grados por debajo de los niveles preindustriales. Esta es una opción plausible ante la inactividad o comportamiento defectuoso del Estado, donde los litigios climáticos representan una oportunidad de anclaje del riesgo y justicia.

Los litigios climáticos en el Sistema Interamericano de derechos humanos tendrían un impacto regulatorio más allá del efecto de la cosa juzgada *inter partes*, ya que estos procesos son capaces de generar un cambio social y en la escala valores que asumen los Estados ligados a la competencia contenciosa de la Corte, además de motivar acciones desde diferentes flancos propiciando la transformación de las conductas de los *stakeholders*[1270] (terceras partes interesadas o involucradas). Frente a esto la respuesta debería ser utilizar los derechos humanos como mecanismo de acción y modulación para enfrentar el desafío climático actual en la región.

1267. Entregada antes del inicio de la COP 26 de Glasgow 2021.

1268. Mooney. C., *et al.* (7 noviembre 2021) «Countries' climate pledge built on flawed data, Post investigation finds». *The Washington Post.* Recuperado de: https://wapo.st/322n4YH «*An examination of 196 country reports reveals a giant gap between what nations declare their emissions to be v. the greenhouse gases they are sending into the atmosphere. The gap ranges from at least 8.5 billion to as high as 13.3 billion tons a year of underreported emissions — big enough to move the needle on how much the Earth will warm. The plan to save the world from the worst of climate change is built on data. But the data the world is relying on is inaccurate».*

1269. Climate Action Tracker (15/09/2021), *Ob. cit*. *«"The assessment shows that most net zero targets are formulated vaguely and do not yet conform with good practice. Robust short-term targets and pathways towards achieving them are required to fully realise their ambition". Aunque debe reconocerse que la arquitectura del Acuerdo de París sigue siendo innovadora frente a la imposibilidad de extender el mandato de Kyoto a nivel universal».*

1270. Sobre el modelo para entender el impacto regulatorio directo e indirecto de las litigaciones climáticas en Australia y Estados Unidos véase: Peel, J. & Osofsky, H. M. (2015), *Ob. cit*.

Debe tenerse en cuenta que hasta ahora, ningún Estado ha sido declarado como responsable inmediato de causar el cambio climático acelerado y peligroso[1271], si bien los Artículos sobre Responsabilidad Internacional por Hechos Ilícitos contemplan la posibilidad de atribuirla de forma compartida, supuesto que puede ser trasladado al cambio climático[1272], la complejidad de atribución ante una pluralidad de sujetos responsables desborda la capacidad del derecho ambiental actual y de los derechos humanos, por lo que corresponde acudir a la vía que proporciona la evaluación de los estándares diligencia debida[1273] del Estado en relación a este deber cuidado y de garantía arraigado en los derechos humanos[1274].

A partir de este momento se intentará ensamblar la arquitectura normativa que permite asegurar la salvaguarda de los derechos frente al riesgo o daño climático significativo en relación con el deber intrínseco de los Estados de cumplir con los compromisos internacionales asumidos al ratificar la Convención Americana de Derechos Humanos. Sin embargo, abordar las obligaciones surgidas de cada uno de los derechos convencionales resultaría una tarea inagotable que escapa del alcance de este libro.

El análisis aquí presentado se circunscribe a los pueblos indígenas y tribales[1275], a través de los cuales es posible exigir el cumplimiento de las obligaciones ambientales de cuidado, relacionados a la afectación de ciertos

---

1271. Mayer, B. (2021a), *Ob. cit*. 413. El autor señala que: *«At any rate, attributing a weather event to climate change is only one of the links in the causal chain that must be established to prove that individuals are victims of a state's failure to take appropriate measures to protect their human rights».*

1272. Bertamini, M. (5 May 2021). «The check-Incentivizing states to pay for climate change?» *EJIL: Talk!* Recuperado de: https://bit.ly/3DuYRYh. En relación con el artículo 47 del ARI y sobre la Guía de Principios sobre Responsabilidad Internacional compartida, planteando que su compleja aplicación no implica un eximente de responsabilidad para los Estados.

1273. Véase: Lanners, J. (2001) «Prevention of transboundary harms from hazardous activities from the ILC Draft Articles». En: A, Kiss & J. Lammers, (eds). *Hague Yearbook Of International Law* (pp. 3-24) Leiden: Martinus | Nijhoff. En el mismo sentido véase: Giménez, I. (2021c) «La minería submarina frente a la protección de la diversidad biológica en los fondos marinos y oceánicos fuera de los límites de la jurisdicción de los Estados». En: *La Contribución de la UE a la protección de los recursos biológicos en espacios marinos de interés internacional*. Casado, R., Martínez, E., Jiménez, E. (eds.). Tirant Lo Blanch. «El deber de diligencia debida no de los Estados no busca garantizar que los peligros significativos sean prevenidos en su totalidad, esta obligación si implica que los operadores deben procurar y aplicar un mayor esfuerzo para minimizar los riesgos».

1274. Tal y como ha sido invocado por los litigios nacionales que sirven de inspiración para el tratamiento del cambio climático en el sistema regional. Véase: Green National Tribunal on its own motion Sher Singh v. State of Himachal Pradesh *et al*. (6 Feb. 2014).; High Court. Leghari v. Federation of Pakistan, judgment (4 Sep. 2015)., así como en la solicitud de tutela presentada Corte Suprema de Colombia. Futuras Generaciones v. la Presidencia de la República de Colombia *et al*., sentencia 4360-2018 (5 de abr. 2018).

1275. Aunque debe recordarse que actualmente cursa una petición periférica climática sobre la presunta violación de los derechos de los niños en Cité Soleil Haití.

derechos en concreto. Por un lado, obligaciones ambientales de naturaleza sustantiva que surgen del derecho a la propiedad, a un medio ambiente sano. Por el otro, las obligaciones de procedimiento que se desprenden del derecho de acceso a la justicia, debido proceso, el derecho a la información y participación en asuntos ambientales.

Estos derechos han sido particularmente abordados por la CtIDH en diferentes contextos, permitiendo apreciar con claridad la línea argumentativa del Tribunal, para demostrar un posible hilo conductor que asegure la protección de estos derechos trasladados a situaciones ambientales y climáticas. En su mayoría estas decisiones han adoptado la forma del precedente interamericano, por lo cual tienen un peso significativo en la construcción de la doctrina ambiental de la CtIDH[1276], aunque sin perder de vista que parte de las conclusiones del Tribunal también descansan sobre jurisprudencia y normas localizadas en el ámbito interno de los países interamericano, así como en decisiones de otros órganos jurisdiccionales que le permiten demostrar el acompañamiento internacional en el que se enfilan sus conclusiones.

Lo anterior no quiere decir que sea posible colocar en cabeza de los Estados cargas desproporcionadas o de imposibles cumplimiento[1277] con relación a la estabilización del sistema climático. Por ejemplo, sería irrazonable establecer en una sentencia la neutralidad de carbono de los países interamericanos para finales del año 2030, pero si es posible detener o revertir la deforestación a través de acciones y prácticas nacionales concretas en un umbral temporal a mediano plazo[1278] que permita la supervivencia física y cultural de los pueblos que habitan los bosques americanos.

1276. Sobre los elementos del precedente véase: Guillaume., G. (2011). «The use of precedent by international judges and arbitrators». *Journal of International Dispute Settlement*, 2(1), 10. *«[…] judgments or advisory opinions adopted as a full Court, unanimously or by a very large majority—as well as oft-cited decisions—naturally carry more weight than isolated judgments, adopted by Chambers, or decided by a narrow majority. Similarly, the reasons behind the operative paragraphs will weigh heavier than obiter dicta inserted to address one judge's concerns. However, it is difficult to generalize in this area. Everything is case by case».*

1277. Sobre la previsibilidad de un riesgo real e inmediato sobre la vida digna véase: CtIDH. Comunidad Indígena Xákmok Kések v. Paragua, Fondo, Reparaciones y Costas (Ser. C) No .214, (24 ago. 2010). §188-192.

1278. En medio de fuertes críticas la COP28 dará inicio el 30 de noviembre de 2023. Sobre la COP 27 véase: UNFCCC (2022, 20 de noviembre). «La COP27 llega a un acuerdo decisivo sobre un nuevo fondo de "pérdidas y daños" para los países vulnerables» [comunicado de prensa] Recuperado de: https://unfccc.int/es/news/la-cop27. Adicionalmente, sobre las conclusiones en materia de los compromisos unánimes alcanzados en la COP 26 véase: UN. (2021, 13 de noviembre). «COP 26 close with "compromise" deal on climate, but it's not enough, says UN Chief» [comunicado de prensa] Recuperado de: https://bit.ly/30p5pcY. Estos dos últimos sirven de termómetro para evaluar la diligencia debida. Véase también: CIDH. «Emergencia climática alcance de las obligaciones interamericanas en materia de derechos humanos», CIDH Doc. 3/21 (31 dic. 2021). Mediante la cual se hizo referencia a la obligación de desplegar los máximos recursos para una gradual descarbonización de la economía.

De allí, que se puede exigir a los Estados la aplicación de un mínimo de diligencia/deber de cuidado con relación a la prevención de un riesgo tan extensamente conocido como lo es el cambio climático frente a los pueblos indígenas y tribales. En la actualidad, resulta insostenible obviar las conclusiones científicas que soportan la afectación de las peligrosas transformaciones del clima sobre los derechos de las personas[1279], por lo cual la fórmula derechos humanos/clima-medioambiente aquí propuesta permite enfrentar desde el litigio estratégico la amenaza climática.

Identificación de obligaciones sustantivas y procedimentales susceptibles de vulneración en relación con el cambio climático

Derecho a la propiedad

En lo referente a las obligaciones sustantivas y procedimentales del derecho a la propiedad debe considerarse que tratamiento actual desde la dimensión colectiva es el resultado del cambio de paradigma sobre la propiedad[1280], hasta consolidar una visión donde se entiende incluido el derecho al medio ambiente por su valor propio. Para ser más precisos, la doctrina actual sobre derecho ambiental encuentra sus bases filosóficas en la relación que surge de la convergencia entre el derecho, la naturaleza y la propiedad[1281]. De allí que no es casual el que la CtIDH haya utilizado principalmente a la propiedad para extender su esfera de protección[1282].

Ciertamente el cariz innovador aplicado por el Sistema Interamericano lo proporciona el foco de atención en la protección de los pueblos indígenas. El punto de partida mediante el cual la CtIDH introdujo una interpretación

1279. UNHRC, el derecho humano a un medio ambiente sin riesgo, limpio, saludable y sostenible. U.N. Doc. A/HRC/48/L.23. Rev.1 (8 oct. 2021). Donde el Consejo de Derechos Humanos además de reconocer el derecho a un medio ambiente sano, seguro y limpio recalcó que el cambio climático es una de las «amenazas más urgentes y graves a la capacidad de las generaciones presentes y futuras de disfrutar de los derechos humanos, incluido el derecho a la vida». Esta resolución fue aprobada por los cuarenta y tres (43) Estados miembro, con las abstenciones de China, India, Japón y Rusia.

1280. Coyle, S. & Morrow, K. (2004), *Ob. cit*. 107 -108.

1281. Coyle, S. & Morrow, K. (2004), *Ob. cit*. 215. *«To connect the modern environmental law with its philosophical foundations, in the form of reflections on the relationship between property, rights and nature. Environmental law imbued with a sense of philosophy and history is a pale and bloodless creature, environmental law imbued with a sense of intrinsic value and philosophical and philosophical depth represent and intellectual achievement only provisionally available, and soon forever lost».*

1282. Aunque desde 2017 intenta introducir un enfoque antropocéntrico atenuado que dota de simbolismo el otorgamiento de un valor propio y separado de otros derechos al medio ambiente sano.

evolutiva del derecho de propiedad[1283] se sitúa a partir de la *Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni v. Nicaragua*[1284] en el 2001, desde ese entonces se convirtió en un precedente de referencia obligatoria para comprender el alcance de la propiedad a favor de las comunidades indígenas. Así introduce el concepto de una propiedad ampliada a la luz del artículo 29.b CADH[1285] y fundada en el respeto de las tradiciones comunitarias y grupales[1286] frente a las concesiones para la explotación maderera en sus territorios ancestrales[1287].

En aquella ocasión la CtIDH remarcó que los indígenas debido a su existencia propia tienen el derecho a vivir en sus territorios, por esa profunda y cercana relación que mantienen con la tierra, base de «su cultura, vida espiritual, su integridad y su supervivencia económica»[1288]. El territorio indígena se entendió como un elemento material y espiritual que va más allá del concepto de posesión y producción, componentes esenciales para la conservación y transmisión del legado cultural en el marco de la Inter temporalidad generacional de las Américas[1289].

La Corte tuvo oportunidad de continuar desarrollando su doctrina sobre la relación de los pueblos indígenas con la tierra y los recursos naturales en una serie de casos donde claramente se podía apreciar un patrón histórico discriminatorio, bajo el cual los pueblos indígenas se veían desbordados por una desigualdad estructural[1290]. Así entró a conocer del caso *Comunidad Indígena Yakye Axa v. Paraguay*[1291] (2005), donde se pronunció nuevamente sobre la

1283. Artículo 21 CADH: «1. Toda persona tiene derecho al uso y goce de sus bienes. La ley puede subordinar tal uso y goce al interés social. 2. Ninguna persona puede ser privada de sus bienes, excepto mediante el pago de indemnización justa, por razones de utilidad pública o de interés social y en los casos y según las formas establecidas por la ley. 3. Tanto la usura como cualquier otra forma de explotación del hombre por el hombre, deben ser prohibidas por la ley».

1284. CtIDH. Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni v. Nicaragua, Fondo, Reparaciones y Costas (Ser. C) No. 79 (31 ago. 2001).

1285. Véase el Artículo 29 CADH sobre las reglas de interpretación de la CADH.

1286. CtIDH. Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni v. Nicaragua, Fondo, Reparaciones y Costas (Ser. C) No. 79 §149 (31 ago. 2001).

1287. Concesiones otorgadas sin el consentimiento de la Comunidad para la explotación del recurso natural. Igualmente se vinculó el otorgamiento de estas y la falta de un recurso efectivo para tutelar su propiedad comunal con la falta de protección judicial consagrada en el artículo 25 CADH (violación de una obligación ambiental de procedimiento).

1288. CtIDH. Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni v. Nicaragua, Fondo, Reparaciones y Costas (Ser. C) No. 79 §149 (31 ago. 2001).

1289. CtIDH. Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni v. Nicaragua, Fondo, Reparaciones y Costas (Ser. C) No. 79 §149 (31 ago. 2001).

1290. Clérico, L. & Aldao, M. (2011), *Ob. cit*..157-198.

1291. CtIDH. Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni v. Nicaragua, Fondo, Reparaciones y Costas (Ser. C) No. 79 §149 (31 ago. 2001). En este caso también se hace referencia a la

propiedad y posesión de un territorio conforme al derecho consuetudinario indígena, sus valores, tradiciones[1292] y usos, así como del derecho a la delimitación y titulación de su territorio en un plazo razonable[1293].

Así es posible apreciar como la Corte Interamericana reconoce a los pueblos indígenas como sujetos plurales, entendiendo que el derecho de propiedad colectiva pasa por reconocer sus «tradiciones y expresiones orales, sus costumbres y lenguas, sus artes y rituales, sus conocimientos y usos relacionados con la naturaleza, sus artes culinarias, el derecho consuetudinario, su vestimenta, filosofía y valores»[1294]. De manera que logra explicar cuál es el rol del entorno, ese proceso de integración con lo natural e histórico que traspasa una generación tras otra como parte de su patrimonio cultural[1295].

A partir de esta conceptualización dinámica de la propiedad, el Tribunal Interamericano dio cabida al desarrollo de un derecho internacional de los derechos humanos desde la integración de la diversidad de cultura y tradiciones. Esta visión de avanzada aplicada al caso *Yakye Axa v. Paraguay* coincide con la reflexión que ocho años antes realizara el entonces Vice-Presidente de la Corte Internacional de Justicia, el Juez Weeramantry en el *Caso Gabčíkovo-Nagymaros Project*, al destacar en su opinión separada la necesidad de un derecho internacional abierto a la riqueza que brinda la diversidad de culturas, tradiciones legales y civilizaciones, con el propósito de armonizar el desarrollo y protección del medio ambiente[1296], a través del enriquecimiento de los principios del derecho ambiental desde las civilizaciones ancestrales.

---

protección de su forma de vida, a pesar de que resulte diferente a la comprensión occidental de la misma desde el derecho a una vida digna.

1292. Véase Artículo 27 del Pacto de Derechos Civiles y Políticos. Asimismo el artículo 34 de la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. A modo de contextualización en el marco de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, desde inicios del 2000 existieron pronunciamientos el ámbito universal, entre ellos: UN CESCR, General Comment No. 14, The Right to the Highest Attainable Standard of Health, U.N. Doc. E/C.12/2000/4 (2000), §27. *«In this respect, the Committee considers that development related activities that lead to the displacement of indigenous peoples against their will from their traditional territories and environment, denying them their sources of nutrition and breaking their symbiotic relationship with their lands, has a deleterious effect on their health»*

1293. CtIDH. Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni v. Nicaragua, Fondo, Reparaciones y Costas (Ser. C) No. 79 §65(31 ago. 2001).

1294. CtIDH. Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni v. Nicaragua, Fondo, Reparaciones y Costas (Ser. C) No. 79 §154 (31 ago. 2001).

1295. CtIDH. Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni v. Nicaragua, Fondo, Reparaciones y Costas (Ser. C) No. 79 §154 (31 ago. 2001).

1296. Gabcíkovo-Nagymaros Project (Hung. v. Slovk.), Judgment, 1997 ICJ. 96 (September 25) (Separate Opinion of Judge Weeramantry). *«cite in this connection an observation of Sir Robert Jennings that, in taking note of different legal traditions and cultures, the International Court (as it did in the Western Sahara case): "was asserting, not negating, the Grotian subjection of the totality of international relations to international law. It seems to the writer,*

Esto demuestra que las Cortes pueden y deben nutrirse de la sabiduría que brota de las distintas tradiciones y civilizaciones como un mecanismo para hacer florecer el conocimiento legal, permitiendo abordar desde diversas dimensiones las intrincadas cuestiones ambientales que son sometidas a su revisión[1297]. Pues, la crisis global actual demanda respuestas tanto de los líderes mundiales y legisladores, pero especialmente de los tribunales llamados a impartir justicia. En cualquier caso, «*The Court cannot afford to be monocultural, especially where it is entering newly developing areas of law*»[1298].

A través de su extenso desarrollo, el Tribunal regional ha tenido el acierto de responder en cierta medida a las demandas socio ambientales actuales, reconociendo la importancia de la integración y el respeto de las tradiciones ancestrales de los pueblos indígenas americanos como mecanismo de acompañamiento y protección del medio ambiente. Este pensamiento se reafirma en una integración pluralista indígena que adquiere más relevancia «*at a time when such a harmony between humanity and its planetary inheritance is a prerequisite for human Survival*»[1299].

El tipo de jurisprudencia creada por la CtIDH, pone de relieve la importancia de unos derechos humanos vivos e inclusivos que además están fortalecidos por una capacidad trasformadora de las condiciones de vulnerabilidad de estos grupos. Así, a través de sus decisiones, la CtIDH eleva la riqueza cultural de América Latina, ofreciendo «un testimonio elocuente de la necesidad de plantear y avanzar en esta visión universalista del derecho de gentes»[1300]. En concreto, a través del desarrollo del derecho a la propiedad comunal, gra-

---

indeed, that at the present juncture in the development of the international legal system it may be more important to stress the imperative need to develop international law to comprehend within itself the rich diversity of cultures, civilizations and legal traditions"».

1297. Gabcíkovo-Nagymaros Project (Hung. v. Slovk.), Judgment, 1997 ICJ. 97 (September 25) (Separate Opinion of Judge Weeramantry). *«see the Court as being charged with a duty to draw upon the wisdom of the world's several civilizations, where such a course can enrich its insights into the matter before it».*

1298. Véase: Gabcíkovo-Nagymaros Project (Hung. v. Slovk.), Judgment, 1997 ICJ. 97 (September 25) (Separate Opinion of Judge Weeramantry). *«the Court as being charged with a duty to draw upon the wisdom of the world's several civilizations, where such a course can enrich its insights into the matter before it. The Court cannot afford to be monocultural, especially where it is entering newly developing areas of law».*

1299. Gabcíkovo-Nagymaros Project (Hung. v. Slovk.), Judgment, 1997 ICJ. 96 (September 25) (Separate Opinion of Judge Weeramantry). 106, 119. *«As this vital branch of law proceeds to develop, it will need al1 the insights available from the human experience, crossing cultural and disciplinary boundaries which have traditionally hemmed in the discipline of international law»*.

1300. CtIDH. Comunidad Moiwana V. Surinam, Fondo, Reparaciones y Costas (Ser. C) No. 124. (15 jun. 2005). CtIDH. (Voto razonado Juez Antonio Cançado Trindade). §9. Véase: Gabcíkovo-Nagymaros Project (Hung. v. Slovk.), Judgment, 1997 ICJ. 106 (September 25) (Separate Opinion of Judge Weeramantry). 106. Quien se refiere a la cultura Inca en los siguientes términos: *«in this respect we can consider the Inca civilization triumphant, since*

cias al cual puede apreciarse un planteamiento actualizado del pluralismo, como una manifestación moderna capaz de acompañar las profundas transiciones que viven las sociedades del Sur global[1301].

Cuando se habla de pluralismo en esta obra se sigue el pensamiento de «ruptura y denuncia de los mitos sacralizados de lo instituido y como expresión más directa de los reales intereses y exigencias de la experiencia interactiva multicultural»[1302]. En este sentido la Corte Interamericana práctica esta formulación alternativa a través del tratamiento que ha brindado a los pueblos indígenas y tribales en cuanto a la necesidad de preservar su entorno compuestos por elementos materiales, espirituales y culturales[1303] de extraordinario valor en nuestros tiempos.

Esta fórmula de inclusión dentro del derecho internacional de los derechos humanos continuó diseminándose a través de otros casos enraizados en la protección de poblaciones indígenas y tribales, entre ellos *Comunidad Indígena Sawhoyamaxa v. Paraguay*[1304]*.* En este último se acudió nuevamente a la estrecha relación entre la tierra y los recursos naturales como un elemento característico de su cultura, no solo por ser esencial para su subsistencia, sino como parte de su identidad, manifestada a través de una «vida particular, de ser, de ver y actuar en el mundo»[1305]. La Corte haciendo uso del Convenio 169 OIT y del artículo 29 de la Convención Americana, interpretó una vertiente cultural-ambiental, esta vez más definida dentro la dimensión colectiva la propiedad.

Así la Corte retomó otra vez el concepto de propiedad, alejándose de su concepción clásica con el propósito de dotar de contenido a esa dimensión comunitaria tan necesaria y características de los pueblos indígenas. Además, igualó en valor jurídico, la cultura, las costumbres y las creencias ancestrales sobre las diversas formas de uso y disfrute de los bienes con el derecho de propiedad privada. Esto con el fin de asegurar la protección

---

it conquered the eternal problem of maximum use and conservation of soil. Here, too, we note the harmonization of developmental and environmental considerations».

1301. Wolkmer, C. (2018), *Ob. cit*. 143.

1302. *Loc. cit.*

1303. La CtIDH también ha considerado que la separación de la tierra de los pueblos indígenas constituye una forma adicional de vulneración del derecho a la integridad personal (artículo 5.1 CADH), pues a la luz de su cultura esto causa sufrimiento emocional, psicológico, espiritual y económico. Véanse en este sentido: CtIDH. Comunidad Indígena Xákmok Kések v. Paragua, Fondo, Reparaciones y Costas (Ser. C) No .214, §243 (24 ago. 2010).; CtIDH. Comunidad Moiwana V. Surinam, Fondo, Reparaciones y Costas (Ser. C) No. 124. §102-103 y 244 (15 jun. 2005).

1304. CtIDH. Comunidad Indígena Sawhoyamaxa v. Paraguay, Fondo, Reparaciones y Costas (Ser. C) No. 146, (29 Mar. 2006).

1305. CtIDH. Comunidad Indígena Sawhoyamaxa v. Paraguay, Fondo, Reparaciones y Costas (Ser. C) No. 146, §118 (29 Mar. 2006).

de entendimientos alternativos[1306], constituidos por elementos materiales e inmateriales susceptibles y merecedores de protección[1307].

Otro aporte significativo de este caso fue el sancionar el reconocimiento en abstracto de derechos. Esto con relación a la falta de demarcación de tierras y entregas de títulos de propiedad a la comunidad, siendo el antecedente para impulsar sucesivas reclamaciones frente la omisión de las autoridades que reconocían derechos a través de la letra muerta de la ley, es decir sin aplicabilidad práctica[1308]. De manera tal que no solo se vulneró el derecho de respeto y garantía de la propiedad colectiva en relación con el artículo 1.1 CADH, sino que también se sumó la falta de adopción de disposiciones de derecho interno para hacerlo efectivo a la luz del artículo 2 CADH.

Posteriormente, la CtIDH se pronunció en el icónico caso del *Pueblo Saramaka. v. Surinam*[1309], el cual representa la continuidad en la lucha por el reconocimiento del despojo histórico al que han sido sometidos las comunidades en relación con el control y gobernanza de su territorio originario. En aquella ocasión, la CtIDH se pronunció sobre un tema de medular importancia, pues permitió anticipar su orientación favorable a la tutela ambiental de ciertos componentes de la naturaleza a través del derecho de propiedad. Esto debido a que se entendían como parte intrínseca del derecho, el goce y disfrute de los recursos naturales ubicados en sus tierras, cuando estos eran utilizados tradicionalmente por el pueblo tribal.

Es así como elabora la importante distinción entre tierra[1310] y territorio[1311]. Mediante esta interpretación, la CtIDH aclaró que dentro del concepto de territorio se consideraba incluida tanto la tierra, como los recursos naturales en ella localizados de los cuales dependía la supervivencia física y cultural de

1306. CtIDH. Comunidad Indígena Sawhoyamaxa v. Paraguay, Fondo, Reparaciones y Costas (Ser. C) No. 146, §120 (29 Mar. 2006).;

1307. CtIDH. Comunidad Indígena Sawhoyamaxa v. Paraguay, Fondo, Reparaciones y Costas (Ser. C) No. 146, §121 (29 Mar. 2006).

1308. CtIDH. Comunidad Indígena Sawhoyamaxa v. Paraguay, Fondo, Reparaciones y Costas (Ser. C) No. 146, §144 (29 Mar. 2006). Debe acotarse que la mayoría de los Estados Americanos están en deuda con sus pueblos indígenas en lo que se refieren a los procesos de demarcación y de titulación real de tierras al 2021.

1309. CtIDH. Pueblo Saramaka v. Surinam, Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas (Ser. C) No. 172 §167-170 (28 nov. 2007).

1310. Según el derecho interno de Surinam los Saramaka solo tenían un mero privilegio de usar y ocupar la tierra, ya que los derechos sobre los recursos naturales pertenecen al Estado CtIDH. Pueblo Saramaka v. Surinam, Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas (Ser. C) No. 172 §119 (28 nov. 2007).

1311. CtIDH. Pueblo Saramaka v. Surinam, Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas (Ser. C) No. 172 §119 (28 nov. 2007). En contraposición con las leyes consuetudinarias del pueblo indígena que le otorgaba propiedad sobre todos los recursos localizados en su territorio, un «derecho general a 'poseer todo, desde la copa de los árboles hasta los lugares más profundos que se puedan llegar debajo de la superficie».

los miembros del pueblo[1312]. En este caso en concreto, el territorio del pueblo *Saramaka* estaba siendo objeto de un extractivismo intensivo maderable y minero, que afectaban recursos esenciales para su subsistencia, entre ellos el agua y los bosques, por lo cual la tierra y los recursos debían quedar bajo la esfera de protección del artículo 21 CADH[1313].

A pesar del avance, la CtIDH acertadamente colocó un techo a las reivindicaciones aceptando que el derecho de propiedad en su dimensión colectiva también podía estar sujeto a restricciones siempre que: Primero, hubiesen sido establecida con anterioridad por una ley. Segundo, que fuesen necesarias. Tercero, que fuesen medidas proporcionales. Cuarto, que el fin de estas lograse un objetivo legítimo en una sociedad democrática, y quinto, que la restricción de la propiedad en ningún caso significase la denegación de la subsistencia del pueblo[1314]. Esto se traduce en que las concesiones realizadas por un Estado si bien no están prohibidas, deben quedar sujetas al cumplimiento de unas garantías mínimas[1315] con relación a los derechos humanos.

Otro aspecto de especial importancia para entender la evolución de la protección del medio ambiente a través de los pueblos indígenas y sus territorios es que la sentencia estableció la obligación de consulta de buena fe y de procedimientos acordes con la cultura de la comunidad en cuestión[1316]. Así se aprecia una conjugación entre el cumplimiento de obligaciones sustantivas realizables a través de obligaciones procedimentales, ya que este mecanismo implicaba develar el nivel de riesgo ambiental al que podían estar expuestos los miembros de la comunidad[1317].

1312. CtIDH. Pueblo Saramaka v. Surinam, Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas (Ser. C) No. 172 §120-122 (28 nov. 2007).;. La «conexión entre el territorio y los recursos naturales necesarios para su supervivencia física y cultural, es exactamente lo que se precisa proteger conforme al artículo 21 de la Convención a fin de garantizar a los miembros de los pueblos indígenas y tribales el uso y goce de su propiedad».

1313. CtIDH. Pueblo Saramaka v. Surinam, Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas (Ser. C) No. 172 §120-121 (28 nov. 2007).

1314. CtIDH. Pueblo Saramaka v. Surinam, Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas (Ser. C) No. 172 §127 (28 nov. 2007).

1315. Bantekas, I. & Oette, *Ob. cit*. 426-427. *«At the very least, states are under an obligation to ensure the satisfaction of the minimum essential levels of each ESC right […] It has been suggested that minimum core obligations anticipate three accomplishments: 1) provision of a specific direction in the implementation of ESC rights by disassembling the inherent relativism of their otherwise 'progressive realization'; 2) advancement of a base line level of protection irrespective of socio-economic policies and disparate levels of available resources; and 3. Signaling an acceptable global redistributive debate».*

1316. Véase su evolución como derecho autónomo en relación con el medio ambiente en el apartado relativo a las obligaciones procedimentales surgidas de los artículos 13, 26, 25 y 8 CADH.

1317. CtIDH. Pueblo Saramaka v. Surinam, Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas (Ser. C) No. 172 §123 (28 nov. 2007).

Además, este precedente exigió en el caso de proyectos de inversión y explotación a gran escala dentro de los territorios indígenas, la obtención del «consentimiento previo libre e informado de estos pueblos, conforme a sus costumbres y tradiciones»[1318] como requisito previo al inicio del mismo. En consecuencia, la CtIDH entendió que el quebrantamiento de la consulta y/o la falta de consentimiento de la comunidad también violaba el contenido procesal del artículo 21 CADH[1319].

Asimismo, la CtIDH reconoció la existencia de otra obligación procedimental ambiental dentro del derecho de propiedad, la realización del estudio de impacto ambiental y social previo «EIA», esto con el objeto de evitar la privación de «los medios de subsistencia, los problemas espirituales y sociales»[1320] que traía aparejado el daño ambiental para los pueblos conectados con la naturaleza. De esta manera, quedó instituida la obligación de realizar evaluaciones independientes y técnicamente capaces como una forma de prevención de daño para casos futuros, convirtiéndose en una regla ambiental de obligatorio cumplimiento dentro del alcance del derecho a la propiedad[1321] en el Sistema Interamericano[1322].

De esta manera, la Corte aseguró la reducción del impacto de las concesiones legales mediante el fortalecimiento de la participación activa e informada en cumplimiento de las típicas obligaciones de procedimiento ambiental sobre asuntos que afecten a los pueblos indígenas y tribales, brindando además una protección subyacente a otros DESCA[1323]. Así, el derecho de propiedad se fue convirtiendo progresivamente en un corolario que protegía bienes materiales

1318. CtIDH. Pueblo Saramaka v. Surinam, Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas (Ser. C) No. 172 §134 (28 nov. 2007).

1319. Cuestión que sería abordada trece (13) años después desde otra interesante perspectiva, el derecho a un medio ambiente sano en: CtIDH. Asociación Lhaka Honhat v. Argentina, Fondo, Reparaciones y Costas (Ser. C) No 400. § 284 (6 Feb. 2020).

1320. CtIDH. Pueblo Saramaka v. Surinam, Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas (Ser. C) No. 172 §153 (28 nov. 2007).

1321. Al 2022 integrado como parte del derecho a un medio ambiente sano, véase: CIDH. «Emergencia climática alcance de las obligaciones interamericanas en materia de derechos humanos», CIDH Doc. 3/21 (31 dic. 2021), 14.

1322. Cabe destacar que los estándares internacionales de aplicación de la EIA no encuentran sus bases dentro del Sistema Interamericano, por lo cual puede acudirse a declaraciones y tratados internacionales, así como en la jurisprudencia Internacional que han logrado delimitarlos: Pulp Mills on the River Uruguay (Arg. v. Uru.), Judgment, 2010, ICJ. 58 (April 2010); Responsibilities and Obligations of States with Respect to Activities in the Area (No. 17) Case No. 17, Advisory Opinion of Feb. 1, 2011, ITLOS Rep., 42. §113-116. Véase también: Certain Activities Carried Out by Nicaragua in the Border Area (Costa Rica v. Nicar.) and Construction of a Road in Costa Rica along the San Juan River (Nicar v. Costa Rica), Judgment, 2015, ICJ. (December 2015).

1323. CtIDH. Pueblo Saramaka v. Surinam, Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas (Ser. C) No. 172 §194 (28 nov. 2007).

e inmateriales, a través de los cuales se filtraba la cosmovisión indígena hasta cubrir con su manto protector los recursos naturales, como parte esencial para la realización efectiva del derecho colectivo de estos pueblos.

Otro caso de referencia obligada es *Pueblo Indígena Kichwa de Sarayaku v. Ecuador*[1324], oportunidad en la que el Tribunal retomó con mayor fuerza la relación entre el medio ambiente y el territorio, como elementos esenciales de subsistencia. Las reflexiones planteadas en este caso tienen el valor agregado de expandir el alcance la CADH mediante el Convenio 169 OIT, recordando que este último no funciona como un instrumento autónomo, pero si como uno que viene a enriquecer las reglas interpretativas para asegurar la participación de las comunidades y la aplicación del estudio de impacto ambiental y social previo[1325].

Quizá el tema más representativo es que la EIA es incluida de manera subyacente en esta sentencia, no solo desde el principio prevención tradicionalmente entendido como parte de la costumbre internacional creada por la práctica extendida de los Estados, sino que colocó en el centro del argumento el deber de cumplimiento de las obligaciones especiales hacia los pueblos indígenas y tribales. Así, combinó el acceso a la información ambiental, la participación en asuntos ambientales y la evaluación de impacto con el derecho indígena que también garantiza la participación activa y consulta desde el respeto de las prácticas tradicionales de los pueblos, reafirmando la existencia de una innovadora doctrina interamericana donde se mezclan obligaciones de procedimiento ambientales e indígenas para hacer efectivo el goce y disfrute de la dimensión colectiva de la propiedad[1326].

Posteriormente, aparece *Pueblos Kaliña y Lokono v. Surinam*[1327]*,* mediante el cual la CtIDH se atrevió a realizar un viraje más radical al planteamiento que mantuvo en *Xákmok Kásek. v. Paraguay*[1328], donde se limitó a responder a la demanda territorial para promover su recuperación definitiva frente a la declaratoria de un área silvestre protegida[1329]. En este caso, el Tribunal

1324. CtIDH. Pueblo Indígena Kichwa de Sarayaku v. Ecuador, Fondo, Reparaciones y Costas (Ser. C) No. 245 (27, jun. 2012).

1325. CtIDH. Pueblo Indígena Kichwa de Sarayaku v. Ecuador, Fondo, Reparaciones y Costas (Ser. C) No. 245 § 204 (27, jun. 2012).

1326. Giménez,. I. (2021a), *Ob. cit*. 428.

1327. CtIDH. Pueblos Kaliña y Lokono v. Surinam, Fondo, Reparaciones y Costas (Ser. C) No. 309. (25 nov. 2015).

1328. Comunidad Indígena Xákmok Kásek v. Paragua, Fondo, Reparaciones y Costas (Ser. C) No .214, (24 ago. 2010).

1329. Sentencia en la que declaró la vulneración del artículo 4 CADH, debido a los obstáculos al acceso al agua, alimentación y salud. De esta manera se protegió el derecho a la vida, aunque no se asomaba la posibilidad de abordar la interdependencia entre los derechos, como se hace actualmente.

reflexionó sobre el rol de los pueblos indígenas y la preservación de los recursos de la naturaleza. Así, aclaró que la propiedad colectiva es un aliado para impulsar la conservación, ya que estos colectivos enriquecen con sus usos tradicionales las prácticas de sustentabilidad, consideradas «fundamentales para la eficacia de las estrategias de conservación»[1330].

Si se analiza en retrospectiva la modulación del derecho de propiedad realizada hasta el 2015, se aprecia que las bases fundamentales para edificar cualquier litigio climático por violación del artículo 21 CADH han estado disponibles desde ese entonces, pues era y es posible articular con facilidad una serie de obligaciones procedimentales doblemente aseguradas por los estándares interamericanos que exigen su cumplimiento por parte del Estado, tanto desde la dimensión ambiental, como desde la dimensión de protección a la cultural.

De allí que se puede demandar la realización del EIA previo, el monitoreo de las amenazas y del riesgo de daño significativos por cambio climático. En consecuencia, es plausible litigar su violación si se localiza un efecto climático significativo y concreto dentro de un territorio indígena. Además, tan solo en relación con la ponderación el riesgo y la evaluación de conducta del Estado, sería igualmente exigible el cumplimiento de las obligaciones de consulta, intercambio de información y la exigencia de la participación activa en las estrategias de gobernanza climática que planean ser aplicadas en sus territorios[1331].

Además, este caso utilizó el *corpus iuris* ambiental mediante el llamado de tres (3) instrumentos internacionales clave para asegurar las estrategias de preservación ambiental de la mano con las prácticas de conservación y conocimientos ancestrales[1332]. De manera que el argumento se ve reforzado primero, por la Declaración Río, como instrumento que reconoce el rol de estas comunidades en materia de ordenación ambiental. Segundo, por la Declaración de Naciones Unidas sobre los Pueblos Indígenas, en cuanto a la reiteración de sus derechos de participación activa[1333] y el derecho a

1330. CtIDH. Pueblos Kaliña y Lokono v. Surinam, Fondo, Reparaciones y Costas (Ser. C) No. 309. § 173 (25 nov. 2015).

1331. FAO/FILAC. (2021), *Ob. cit*. 27. «Estos incluyen algunos de sus valores, creencias, costumbres, practicas productivas y experiencias de campo, todos íntimamente vinculados con sus lenguas e identidades culturales. Dada la importancia de estos aspectos, tanto para la conservación de la biodiversidad y la estabilidad climática como para la misma sobrevivencia de los pueblos como tales, los procesos de revitalización cultural y trasmisión intergeneracional de los conocimientos revisten gran importancia en cualquier esfuerzo integral para proteger los territorios indígenas y tribales».

1332. CtIDH. Pueblos Kaliña y Lokono v. Surinam, Fondo, Reparaciones y Costas (Ser. C)No. 309. § 177 (25 nov. 2015). Que en la mayoría de los casos resultan compatibles con las líneas de sostenibilidad aceptadas en el presente.

1333. Reafirmado en la jurisprudencia interamericana en reiterados fallos, entre ellos: CtIDH. Pueblos Kaliña y Lokono v. Surinam, Fondo, Reparaciones y Costas (Ser. C) No. 309. §

«mantener y fortalecer su propia relación espiritual con las tierras, territorios, aguas, mares costeros y otros recursos que tradicionalmente han poseído u ocupado y utilizado»[1334], y tercero, con la Convención sobre Diversidad Biológica con el objetivo de incentivar el respeto y mantenimiento las tradiciones compatibles con la sostenibilidad y preservación ambiental[1335].

La mesa está servida para abordar un problema de contaminación complejo como el cambio climático desde el derecho de propiedad, pues la jurisprudencia del Tribunal ha logrado desdibujar las fronteras entre territorio y medio ambiente, mediante el reconocimiento plural de la relación espiritual con la tierra, los recursos y el modo de vida, esenciales para la supervivencia cultural y física de los pueblos.

Por lo tanto, el cambio climático peligros es un riesgo que puede y debe ser modulado por los Estados a través de la adopción de políticas y planes de mitigación que protejan los territorios en su concepción amplia. Las formas de inclusión aplicadas por la CtIDH al abordar la propiedad colectiva es una muestra más de la efectividad que tiene diálogo intercultural donde se incorpora la herencia del Sur Global para proteger a los colectivos vulnerables y de forma paralela al medio ambiente, siendo una interesante alternativa jurídica que fortalece los derechos humanos ante la emergencia climática.

Derecho a un Medio Ambiente Sano

Por otra parte, en lo atinente a las obligaciones sustantivas y procedimentales[1336] derivadas del derecho a un medio ambiente sano, debe destacarse que como derecho autónomo[1337] tiene su aparición formal en el Sistema Interamericano a partir de la consulta realizada por Colombia en 2017, cuya solicitud propició un innovador desarrollo de la protección ambiental por parte de la CtIDH, quien reconoció el valor intrínseco del medio ambiente en el marco del esquema de salvaguarda conferido por la CADH. Así la CtIDH creó otra doctrina innovadora[1338], mediante la cual transformó obli-

179-181 (25 nov. 2015).

1334. Véase: Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas ONU. AGRO 61 Sesión., U.N Doc. A/61/53 (13 sep.2007). Artículo 25.

1335. CtIDH. Pueblos Kaliña y Lokono v. Surinam, Fondo, Reparaciones y Costas (Ser. C) No. 309. § 177 (25 Nov. 2015).

1336. Sobre la dimensión de estas obligaciones véase: Brunnée, J. (2020), *Ob. cit*. 190-196.

1337. Tigre, M. (2020). «Inter-American Court of Human Rights Recognizes the Right to a Healthy Environment». *ASIL Insights*, 24(14). Recuperado de: https://bit.ly/37p3nJP; Feria-Tinta, M. & Milnes, S. C. (2019). International environmental law for the 21st century: the constitutionalization of the right to a healthy environment in the Inter-American Court of Human Rights Advisory Opinion 23. *Anuario Colombiano de Derecho Internacional*, *12*(43), 47.

1338. Sobre esta OC véase: Abello, R. & Arevalo, W. (2019). «Inter-American Court of Human Rights Advisory Opinion OC-23/17: Jurisdictional, procedural and substantive implica-

gaciones blandas en deberes ambientales exigibles a los Estados parte de la CADH[1339].

En todo caso, debe mantenerse presente que el tratamiento del derecho a un medio ambiente sano sigue siendo un tema sometido a calurosas discusiones, se trata de un tópico en pleno desarrollo. Durante el discurrir argumentativo de la OC 23/17, la Corte puso de manifiesto que su tutela es diferente en contenido a la vulneración que se desprende de otros derechos humanos como consecuencia de un daño o riesgo ambiental significativo[1340]. De forma tal que, por primera vez en la historia, un tribunal de derechos humanos adelantó la posibilidad de deslindar la tutela ambiental de las fórmulas de transgresión vinculadas a los derechos a la vida, a la integridad personal, a la protección judicial y a la propiedad.

La CtIDH, señaló en su función consultiva[1341] que el derecho a un medio ambiente sano es capaz de proteger a elementos de la naturaleza como «intereses jurídicos en sí mismos»[1342], incluso frente a la incertidumbre del riesgo sobre los individuos[1343]. Sin embargo, no desarrolló los elementos que permitirían delimitar con mayor precisión el alcance de estos términos, especialmente cuando no están en riesgo la vida o la integridad personal, derechos sobre los cuales versó principalmente la opinión[1344]. La Corte se circunscribió a expresar su importancia más allá de la visión utilitarista del medio ambiente para darle valor a los demás organismos con los que el hombre comparte el planeta[1345].

La Corte pareciera haberse inclinado por un enfoque orientado hacia el igualitarismo litosférico, pero en ningún momento reconoce a los componen-

---

tions of human rights duties in the context of environmental protection». *Review of European, Comparative & International Environmental Law*, *28*(2), 217-222. Igualmente, véase: López-Zamora, L. A. (2021). «Perplejidades Normativas y Límites de la Actividad Consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Algunas Lecciones Provenientes de la Adopción de la Opinión Consultiva OC-23/17 sobre "Medio Ambiente y Derechos Humanos"». *Anuario Español de Derecho Internacional*, *37*, 199-248.

1339. Un resumen de estos estándares ambientales/climáticos interamericanos se localiza en: CIDH. «Emergencia climática alcance de las obligaciones interamericanas en materia de derechos humanos», CIDH Doc. 3/21 (31 dic. 2021)

1340. OC 23-17 §63

1341. Sobre el controvertido poder de las opiniones consultivas en el contexto de Resistencia de la Corte interamericana. Véase: Contesse, J. (2021), *Ob. cit*., 408. *«Human rights courts are the focus of significant scholarly attention. But most of that well-deserved attention focuses on contentious jurisdiction, despite the prevalent exercise by human rights courts of their advisory powers».*

1342. OC 23-17 §62. «[…]bosques, ríos, mares y otros, como intereses jurídicos en sí mismos, aún en ausencia de certeza o evidencia sobre el riesgo a las personas individuales».

1343. OC 23-17 §62.

1344. OC 23-17 §108-114.

1345. OC 23-17 §62.

tes de la naturaleza como seres sintientes, personas no humanas de interés o con personalidad jurídica. Lo que sí hizo fue reconocer la existencia de un *pensamiento plural* que ha fructificado en formulas alternativa de protección ambiental surgida del reconocimiento de personalidad y derechos a la naturaleza dentro de algunos ordenamientos internos de países latinoamericanos, como es el caso de Colombia, Bolivia y Ecuador, así como en otros sistemas jurídico-abiertos a una visión holística, entre ellos la India[1346].

En este punto debe tenerse presente que la reivindicación simbólica de la naturaleza como sujeto de derecho no es un rol que le corresponda a un tribunal regional de derechos humanos. Sin embargo, el aseguramiento y registro del pensamiento plural de la ecología indígena latinoamericana, la cual envuelve la exploración del valor cultural/espiritual de los espacios naturales como parte de la manifestación de esa la identidad de los pueblos indígenas y tribales, si está sujeta a tratamiento y protección en el marco de la evolución de la CADH.

En consecuencia, las perspectivas sobre una posible manifestación donde se le otorgue una protección especial a un componente de la naturaleza en peligro de pérdida o deterioro significativo está orientada hacia una interpretación expansiva del derecho a un medio ambiente sano, pero en todo caso enraizado en la necesidad de preservar la identidad de los derechos de los pueblos indígenas y tribales, más no en el reconocimiento de la naturaleza como sujeto o destinatario de la protección brindada por los derechos humanos.

De lo contrario, el vanguardismo[1347] latinoamericano de esta Corte, escaparía de su esfera de competencia, pues la naturaleza no tiene la capacidad de ser titular de derechos humanos y se trata de pretensiones que difícilmente pueden ser trasplantadas entre sí. Una declaración de este tipo corre el riesgo de minimizar los grandes logros en materia de protección de derechos fundamentales, muchos de ellos en pleno campo de batalla para acceder a su disfrute pleno en América Latina. De allí que las perspectivas se orientan hacia una tutela autónoma centrada en la protección del hombre y en la preservación de la identidad cultural de grupos humanos.

1346. OC 23-17 §62. En contra: Montalbán-Zambrano, D. (2020). «El derecho al medio ambiente sano como un derecho autónomo en el Sistema Interamericano de derechos humanos». *Anales de la Facultad de Derecho* (1), 37, 78. «La Corte parece reconocer un nuevo bien jurídico dentro del Sistema Interamericano, la naturaleza en sí misma».

1347. Mayer, B. (2021a), *Ob. cit*. 451. Una fuerte crítica sobre este tipo de posturas es planteada por el autor: *«This inherent tension between national interests and international cooperation will not be solved through an incremental extension of international human rights law, be it through the recognition of new rights (e.g., to a healthy environment or a sustainable climate), the identification of fictitious rights-holders (e.g., "future generations" or "Mother Earth"), or the extension of the extraterritorial application of human rights treaties—not, that is, without betraying the text, and the object and purpose, of human rights treaties, and using them as a Trojan horse at the service of extraneous objectives».*

Por eso, no es de extrañar que la Corte centrara su análisis consultivo en como los derechos humanos pueden ser afectados por los daños ambientales, ilustrando las posibles formas de vulneración de la CADH con énfasis en los derechos a la vida e integridad personal. Así, la CtIDH trató de elaborar una composición armónica y funcional de un derecho ambiental para grupos vulnerables al amparo de la Convención. Aunque sin perder de vista que al mismo tiempo tiene la potencialidad de proteger el valor intrínseco de la naturaleza, a través de la salvaguarda de la cultura y del derecho a un medio ambiente sano.

Lo anterior implica que no es necesario reconocer derechos a la naturaleza para dotar a las obligaciones ambientales de efectividad[1348], pues la CtIDH puede invocar un *corpus iuris* ambiental cada vez más extenso que penetra en los ordenamientos nacionales a través de la capacidad autoaplicativa de la CADH. Así se reivindica el rol del derecho ambiental como vía efectiva para abordar problemas complejos[1349], entre ellos el cambio climático. Por lo tanto, dentro del Sistema regional existe la posibilidad de establecer el quebrantamiento de obligaciones ambientales, sin que ello represente un obstáculo para mantener abierta la puerta a violaciones conectadas con los derechos civiles y políticos.

La Premisa general de esta opinión consultiva es que los daños ambientales (incluido el cambio climático[1350]) tienen un impacto sobre todos los derechos humanos[1351]. En su desarrollo argumentativo se aprecia lo que un sector de la doctrina ha identificado como los tres posibles acercamientos teóricos al esquema de atribución de responsabilidad en materia de cambio climático y derechos humanos[1352]. La primera, el medio ambiente como precondición para el disfrute de estos derechos[1353]. La segunda, los derechos humanos como una herramienta que permite abordar los complejos problemas ambientales desde obligaciones de naturaleza sustantiva[1354] y procesal[1355], es decir a través de un

1348. En contra de otorgar derechos a la naturaleza se pronuncia: Bétaille, J. (2021), *Ob. cit*. 32. Véase igualmente: Bétaille, J. (2019). «Rights of Nature: Why it Might Not Save the Entire World». *Journal for European Environmental & Planning Law*, *16*(1), 35-64.

1349. Bétaille, J. (2021), *Ob. cit*. 32. El autor reivindica el rol del derecho ambiental como vía on mayor efectividad

1350. OC 23-17 §47, 49, 54 y 97.

1351. OC 23-17 §48 y 64.

1352. Boyle, A. (2018), *Ob. cit*. 776.

1353. Boyle, A. (2018), *Ob. cit*. 776.

1354. Se recuerda que en de este libro precisamente se han seleccionados los derechos propiedad (art. 21) y medio ambiente (art. 26) y los derechos de naturaleza procesal que se abordaran en el apartado 2.b

1355. Acceso a la justicia y garantías judiciales actuando de forma conjunta para los efectos de este análisis climático. Boyle, A. (2018), *Ob. cit*. 776. El autor los identifica de forma general.

extenso catálogo de normas primarias cuyo incumplimiento activa al Tribunal, y la tercera, una aproximación integradora que engloba los derechos humanos y medio ambiente a través del concepto de desarrollo sostenible[1356].

A partir de estos pilares, es posible establecer la base para hacer exigible el derecho a un medio ambiente sano en sus múltiples dimensiones. Sin lugar a duda, las reflexiones de la CtIDH son el resultado de esta evolución híper-dinámica de la CADH, que requiere de una construcción teórica y filosófica más profunda. Sin embargo, su audacia le permitió abordar e innovar en la protección del medio ambiente, recibiendo cada vez mayor aceptación[1357].

Aclaradas las cuestiones más relevantes de la opinión consultiva sobre medio ambiente y pueblos indígenas, conviene plantear la discusión sobre el valor jurídico de las interpretaciones ambientales en ella propuestas. Debe recordarse que el deber de protección y garantía al que están obligados los Estados interamericanos, viene acompañado por el deber de efectuar un control de convencionalidad[1358], el cual implica incorporar las interpretaciones de la CtIDH al ordenamiento y práctica interna *ex officio* de los órganos de los Estados[1359], como un método para fortalecer la subsidiariedad y complementariedad del Sistema Interamericano[1360]. En pocas palabras, esto quiere decir que la opinión consultiva sobre medio ambiente tiene carácter vinculante para todos los Estados parte de la CADH[1361].

Esta idea además encuentra su fundamentación en que los tratados de derechos humanos interpretados en la función consultiva envuelven el sometimiento de estos a un orden legal por el bien común, donde los Estados donde «asumen varias obligaciones, no en relación con otros Estados, sino

1356. *Loc. cit.* Véase también: Montalván-Zambrano, D. (2020), *Ob. cit*. 77. Por su parte sostiene que de la dimensión colectiva e individual del derecho al medio ambiente emerge «la sostenibilidad como un complemento a la idea del desarrollo en favor de la continuidad exclusiva de la especie humana».

1357. Una muestra de ello son las múltiples referencias a la OC 23-17 empleadas en las decisiones adoptadas por el Comité de Derechos del Niño en el marco de CRC. Sacchi v. Arg. (23 Sep. 2019).

1358. CtIDH. Almonacid Arellano y otros v. Chile. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas (Ser. C) No. 154 §124 (26 sep. 2006).

1359. Ferrer Mac-Gregor, E. (2016), *Ob. cit*. 337.

1360. Ferrer Mac-Gregor, E. (2016), *Ob. cit*. 343.

1361. Esto se desprende del análisis jurisprudencial derivado de: CtIDH. Gelman v. Uruguay, Supervisión de Cumplimiento de Sentencia (Ser. C) (20 Mar. 2013) §65-90. Posteriormente reiterado a través de la aplicabilidad del control de convencionalidad en materia consultiva en: Los derechos y garantías de niñas y niños en el contexto de la migración y/o en necesidad de protección internacional. CtIDH OC 21-14 (Ser. A) No. 21, (18 ago. 2014).; La titularidad de derechos de las personas jurídicas en el Sistema Interamericano de derechos humanos. CtIDH. OC- 22-16 (Ser. A) No. 22, §49 (26 feb. 2016).; así como en CtIDH. OC 23/17.

hacia los individuos bajo su jurisdicción»[1362]. Con lo cual se requiere del ejercicio de un control de convencionalidad que emerge también de la interpretación brindada por la CtIDH en función consultiva[1363].

No obstante, debe mantenerse presente que este sigue siendo un tema sobre el que no existen verdades absolutas. Pero en todo caso, además del control de convencionalidad, existe otra fundamentación para apostar por el seguimiento voluntario de los Estados, esta vez arraigado en el efecto de autoridad moral que impulsa la observancia de las interpretaciones propuestas por la Corte, como un faro que ilumina el camino a través de una invitación a la autorregulación y adecuación de su derecho interno con el fin de dotar de mayor efectividad a las garantías ambientales.

Plantear el tratamiento de la cuestión ambiental en el Sistema Interamericano sin abordar el caso la *Asociación Lhaka Honhat (Nuestra Tierra) v. Argentina*[1364] sería un sin sentido, ya que esta es una pieza esencial dentro el estudio de la doctrina ambiental de la CtIDH debido a los cambios que introduce. A través de este caso por primera vez se separa la tutela de la propiedad (artículo 21) y el medio ambiente (artículo 26), alejándose del tratamiento convencional al establecer la responsabilidad internacional del Estado por su falta de probidad ante la conducta de terceros en relación con la tala, alambrado, el pastoreo y la contaminación de recursos hídricos. De su contenido se puede verificar que esta sentencia intenta reafirmar el efecto de *res interpretata*[1365] de algunos de los planteamientos más controvertidos de la

1362. El efecto de las reservas sobre la entrada en vigor de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. CtIDH. OC 2-82 (Ser. A) No. 2 §29 (24 sept. 1982).

1363. Los derechos y garantías de niñas y niños en el contexto de la migración y/o en necesidad de protección internacional. CtIDH OC 21-14 (Ser. A) No. 21, §31 (18 ago. 2014). «A su vez, a partir de la norma convencional interpretada a través de la emisión de una opinión consultiva, todos los órganos de los Estados Miembros de la OEA, incluyendo a los que no son Parte de la Convención pero que se han obligado a respetar los derechos humanos en virtud de la Carta de la OEA (artículo 3.l) y la Carta Democráticas Interamericana (artículos 3, 7, 8 y 9), cuentan con una fuente que, acorde a su propia naturaleza, contribuye también y especialmente de manera preventiva, a lograr el eficaz respeto y garantía de los derechos humanos y, en particular, constituye una guía a ser utilizada para resolver las cuestiones sobre infancia en el contexto de la migración y así evitar eventuales vulneraciones de derechos humanos». Fragmento utilizado también en Gelman v. Uruguay.

1364. Véanse los comentarios de los representantes de las Víctimas sobre la sentencia: Duarte, M.; Morales, D.; & Schmidhuber, E. (2020) «C. De la sentencia al derecho real ¿Qué futuro hay para las comunidades indígenas de Lhaka Honhat después de su victoria en la Corte Interamericana de Derechos Humanos?», *Situación de los Derechos Humanos en Mendoza Informe 2020*.

1365. Sobre la dimensión objetiva e indirecta de las sentencias interamericanas véase: CtIDH. Gelman v. Uruguay, Supervisión de Cumplimiento de Sentencia (Ser. C) (20 Mar. 2013) (Voto razonado del Juez Eduardo Ferrer Mac-Gregor) § 31 y33.
Véase: «Identidad de género e igualdad y no discriminación a parejas del mismo sexo». OC 24-17 (Ser. A) No. 24, (24 nov. 2017). (Voto individual del Juez Eduardo Vio Grossi) §149-150. Recuperado de: https://bit.ly/3vCt4C2. Véase también: Acheriteguy, F. (2021). «El

OC 23/17[1366], para hacerlos de obligatorio cumplimiento tanto para Argentina como para los demás Estados parte de la CADH.

Aclarado lo anterior, y aras de contextualizar el tema ambiental que da lugar a la condena del Estado, deben destacarse que el vehículo para dar curso a la petición lo constituyó *Lhaka Honhat v. Argentina,* integrada por ocho pueblos indígenas[1367] distribuidos en más de (130) ciento treinta comunidades[1368]. El combustible que activó la causa ambiental interamericana fue el conocimiento y falta de diligencia del Estado en relación con la presencia de colonos no indígenas que afectaron la integridad del territorio a través de la ganadería, tala ilegal y colocación de alambrados[1369], hechos que en el pasado se hubiesen configurado como perturbaciones típicas al derecho de propiedad colectiva[1370], pero que ahora pasaron a ser violaciones DESCA.

Es importante adelantar que si bien es cierto que la CtIDH dedicó una sección específica de la sentencia al tema del derecho a un medio ambiente sano[1371], la determinación final y la declaratoria de violación de la CADH se realizó mediante la conexión del derecho a la alimentación adecuada, al acceso al agua[1372], el derecho a la identidad cultural y medio ambiente, englobados como parte de un todo interdependiente contenido en el artículo 26 CADH. La suma de todos los elementos condujo a calificar la conducta del Estado Argentino como incompatible con los parámetros convencionales[1373].

---

control de convencionalidad en el contexto de la tensión entre el margen de apreciación nacional y el 'ius contitutionale commune' latinoamericano». *Revista Derecho Constitucional Universidad Blas Pascal*, (2), 52-104.

1366. En concreto la judicialización autónoma del derecho al medio ambiente.

1367. Wichí (Mataco), Iyjwaja (Chorote), Komlek (Toba), Niwackle (Chulupí) y Tapy'y (Tapiete).

1368. CELS (23/12/2020). «Más derechos para las comunidades indígenas por una nueva interpretación de la sentencia Lhaka Honhat». Recuperado el 30 de noviembre de 2023 de: https://bit.ly/3qIkQI8

1369. CtIDH. Asociación Lhaka Honhat v. Argentina, Fondo, Reparaciones y Costas (Ser. C) No 400. § 186 (6 Feb. 2020).

1370. Sobre el tema de la propiedad véase: De Moerloose. S & de Casas. I., (16 jul. 2020). «The Lhaka Honhat Case of The Inter-American Court of Human Rights: The Long-Awaited Granting of 400,000 Hectares Under Communal Property Rights». *EJIL: Talk!*. Recuperado de: https://bit.ly/3C9ELmF

1371. OC 23-17 § 202 ss. Véase íntegramente la sección B.1.1.1.

1372. Véase: Navarro, M. S. (2020). «El acceso a agua limpia y saneamiento: Un análisis comparado del derecho al agua desde el derecho internacional de los derechos humanos y del derecho ambiental». *Actualidad Jurídica Ambiental*, (106), 40-78. Véase igualmente: Sánchez-Bravo, A. (2017). «Hacia un reconocimiento del agua como derecho humano universal». *Revista de Direito Econômico e Socioambiental*, 8(3), 220-238.; Sánchez-Bravo, A. (2013b). «Injusticia ambiental y derecho humano al agua». En: A. Sánchez-Bravo (ed.). *Justicia y Medio Ambiente*. (pp. 151-170). Sevilla: Punto Rojo.

1373. Paradójicamente, fijados a través de la jurisprudencia interamericana desarrollada sobre otros derechos, específicamente propiedad.

En esta decisión el Tribunal trató de delimitar el nuevo alcance y contenido de la dimensión ambiental del artículo 26 CADH[1374], apoyándose en las líneas previamente arrojadas por la OC 23/17. Donde la Corte interpretó que el derecho a un medio ambiente sano estaba construido sobre un esquema de dos (2) caras. Por una parte, un perfil individual[1375], con incidencia directa e indirecta sobre la persona[1376], y por la otra, una vertiente colectiva, entendida como un «interés universal, que se debe tanto a las generaciones presentes y futuras»[1377].

Este caso se enfocó en el impacto sobre una colectividad específica, lo cual indica que la Corte mantienen su postura en cuanto no establecer responsabilidades sobre víctimas abstractas o a través de acciones populares. Aunque no se descarta que en el futuro la idea de interés universal se expanda hasta abrir paso a la admisibilidad de algún tipo de *class action*[1378], especialmente si se considera que la figura del precedente interamericano a pesar de ser ajena a la tradición legal de la región ha ido ganando espacios dentro de las doctrinas establecidas por la CtIDH.

El resultado del caso *Lhaka Honhat* puede categorizarse como un litigio correctivo ante la situación jurídica infringida por parte del Estado Argentino, pero de alto impacto en materia de derechos humanos y medio ambiente para toda la región, pues trata de redefinir las doctrinas ambientales previas, proyectadas desde los derechos humanos, específicamente aquellas arraigadas en las problemática derivadas de la falta de demarcación de tierra, perturbaciones en el disfrute pacífico de los territorios ancestrales frente a la explotación de recursos naturales con impacto significativo sobre el medio ambiente[1379], problema medular del que deriva la vulneración del artículo 26 CADH.

1374. De cuya interpretación expansiva brotan una amplia gama de derechos. Véase: Artículo 26 CADH: «Los Estados Partes se comprometen a adoptar providencias, tanto a nivel interno como mediante la cooperación internacional, especialmente económica y técnica, para lograr progresivamente la plena efectividad de los derechos que se derivan de las normas económicas, sociales y sobre educación, ciencia y cultura, contenidas en la Carta de la Organización de los Estados Americanos, reformada por el Protocolo de Buenos Aires, en la medida de los recursos disponibles, por vía legislativa u otros medios apropiados». Hasta ese entonces solo el artículo 11 del Protocolo de San Salvador reconocía el derecho a un medio ambiente sano.

1375. OC 23-17, §59.

1376. Montalván Zambrano, D. J. (2020), *Ob. cit*. 77.

1377. OC 23-17, §59.

1378. Legal Information Institute| Cornell Law School. Class Action. Recuperado el 30 de noviembre de 2023 de: https://bit.ly/3qSbokV. «A class action is a procedural device that permits one or more plaintiffs to file and prosecute a lawsuit on behalf of a larger group, or "class"».

1379. Véase en este sentido: Garavito, R. & Díaz, B. (2020). *Conflictos socio ambientales en América Latina: el derecho, los pueblos indígenas y la lucha contra el extractivismo y la crisis climática*. Buenos Aires: Siglo XXI Editores Argentina. Recuperado de: https://bit.ly/3ClDdpK

Sobre este caso debe puntualizarse que durante la revisión de fondo se verificaron por una parte los estándares interamericanos con relación al derecho a la propiedad colectiva para declarar su violación en relación con los artículos 1.1 y 2 CADH, atendiendo a la falta de adaptación de medidas legislativa internas y a la falta de adopción de otro tipo de herramientas para dar satisfacción al derecho[1380]. Además del incumplimiento de la obligación de consulta libre e informada *ex ante*[1381] vinculada al desarrollo de proyectos u obras conforme a los artículos 21. 23.1 y 1.1[1382].

Este planteamiento de violación separada entre propiedad y medio ambiente fue un intento inacabado de justificar formas de condena alternativa por hechos estrechamente conectados. Así la CtIDH creo un espacio para dar cabida a la argumentación sobre la vulneración directa del derecho a un medio ambiente sano, debido a las perturbaciones causadas por los pobladores no indígenas en el modo de vida tradicional de los pueblos indígenas, específicamente en lo que respecta a la alimentación física/cultural[1383], el acceso al agua[1384], contaminación hidrológica, entre otros eventos que estaban en pleno conocimiento de la autoridad pública.

La protección del derecho a un medio ambiente sano en relación con la obligación de garantía del artículo 1.1 CADH, fue el resultado de la interpretación desarrollada desde 2009 para judicializar otros derechos económicos, sociales y culturales[1385], cambio iniciado *Acevedo Buendía v. Perú*[1386] con relación a las debidas garantías en materia de prestaciones sociales, seguido

1380. CtIDH. Asociación Lhaka Honhat v. Argentina, Fondo, Reparaciones y Costas (Ser. C) No 400. §168 (6 Feb. 2020). Con relación al reconocimiento y determinación del derecho de propiedad el Estado lo vulneró «en relación con el derecho a contar con procedimientos adecuados y con las obligaciones de garantizar los derechos y adoptar disposiciones de derecho interno. Por ello, Argentina incumplió el artículo 21de la Convención en relación con sus art. 8.1, 25.1, 1.1 y 2».

1381. Posteriormente en la interpretación de la sentencia se ordenó la implementación y creación de una legislación y otros mecanismos especiales de consulta, además de medios adecuados de reclamación y reconocimiento de la propiedad. Véase: CtIDH. Asociación Lhaka Honhat v. Argentina, Fondo, Reparaciones y Costas (Ser. C) No 420. (24 nov. 2020).

1382. CtIDH. Asociación Lhaka Honhat v. Argentina, Fondo, Reparaciones y Costas (Ser. C) No 400. §184 (6 Feb. 2020). Violación de los artículos 21. 23.1 y 1.1 en relación con la participación en proyectos u obras sobre la propiedad comunitaria.

1383. La tala y los alambrados causaron un impacto ambiental negativo en la flora y fauna del territorio indígena, que a su vez afectó la alimentación tradicional de las comunidades, además de alteraciones en su cultura por su modo de relacionarse con la naturaleza mermada.

1384. Atendiendo al principio *iura novit curia*, ya que no había sido invocado por los representantes de las víctimas.

1385. Así lo había adelantado la CtIDH en la OC 23-17 §57.

1386. CtIDH. Acevedo Buendia v. Perú, Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas (Ser. C) No. 198 § 100-103 (1 jul. 2009).

por el amparo al derecho a la salud en *Poblete Vilches v. Chile*[1387], así como en *Cuscul Pivaral v. Guatemala*[1388]. Decisiones que rompieron con la jurisprudencia pacífica de la CtIDH, según la cual originalmente se argumentaba que los DESCA, a pesar de ser vinculantes[1389], solo resultaban justiciables[1390] los derechos sindicales[1391] y el derecho a la educación[1392].

La CtIDH tuvo la audacia de someter a escrutinio judicial derechos típicamente asociados a obligaciones de medio no sujetas a control del Tribunal Interamericano[1393] por su naturaleza progresiva. Como contrapeso, para justificar el cambio de corriente la CtIDH desmitificó la jerarquía artificial de los derechos políticos frente a los DESCA[1394], aplicando una interpretación «literal, sistemática y teleológica»[1395] de la CADH que permitió

1387. CtIDH. Poblete Vilches v. Chile. Fondo, Reparaciones y Costas (Ser. C) No. 349 (8 Mar.2018).

1388. CtIDH. Cuscul Pivaral v. Guatemala, Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas (Ser. C) No. 359 §97 (23 oct. 2018).

1389. Véase también: Bantekas, I. & Oette., L. (2020), *Ob. cit*. 417. La autora reconoce la vinculación de los derechos económicos y culturales para los Estados con relación al art. 2.1 de Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, espejo del artículo 26 CADH. «This is so because every right in the ICESCR entails obligation of conduct and obligation of result […] The obligation to protect requires states to take measures that prevent third parties from interfering with the right […] The obligation to fulfil is concerned, the ICESCR has iterated that it involves an obligation to facilitate and a duty to provide».

1390. Medina, C. (2005). *La Convención Americana: teoría y jurisprudencia. Vida, integridad personal, libertad personal, debido proceso y recurso judicial*. Santiago: Universidad de Chile., 16. La autora coincidía en que los derechos recogidos por el artículo 26 CDH se enfrentaban a un régimen especial y no tan efectivo al otorgado a los derechos civiles y políticos, por lo cual no les abrazaban las obligaciones de respeto y garantía establecidas en los artículos 1 y 2 CADH. Véase también: Bantekas, I. & Oette., L. (2020), *Ob. cit*. 417. La autora reconoce la vinculación de los derechos económicos y culturales para los Estados en recon relación al 2.1 de Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, espejo del artículo 26 CADH. «This is so because every right in the ICESCR entails obligation of conduct and obligation of result… The obligation to protect requires states to take measures that prevent third parties from interfering with the right».

1391. Artículo 8 del Protocolo de San Salvador.

1392. Artículo 13 del Protocolo de San Salvador.

1393. Artículo 19.6 Protocolo de San Salvador: «En el caso de que los derechos establecidos en el párrafo a) del artículo 8 y en el artículo 13 fuesen violados por una acción imputable directamente a un Estado parte del presente Protocolo, tal situación podría dar lugar, mediante la participación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y cuando proceda de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a la aplicación del sistema de peticiones individuales regulado por los artículos 44 a 51 y 61 a 69 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos».

1394. Véase: *Conferencia Mundial de Derechos Humanos. Declaración y Programa de Acción de Viena*. U.N. Doc. A/CONF.157/23 (25 jun. 1993). Donde se planteó esta idea. Recuperado de: https://bit.ly/3lTwbdZ.

1395. Dentro de la propia CtIDH existe una corriente que entiende fuera del sistema de protección contencioso al artículo 26 CADH . Véase: CtIDH. Lagos Campos v. Perú, Excepciones

proteger una extensa gama de derechos contenidos tácitamente en el artículo 26 CADH.

Para ello, la Corte se ha mantenido firme en su nueva visión señalando que los DESCA están protegidos por la Carta OEA, a partir de la cual surge la obligación de alcanzar el derecho al desarrollo sostenible de los pueblos[1396] de conformidad con los artículos 30 al 34. Argumento reforzado por la Declaración Americana, en la cual se definen esos derechos esenciales de la Carta OEA[1397], en su conjunto interpretados a la luz del artículo 29 CADH, cuya evolución dicta una forma acumulada y sin jerarquías[1398] que hace a los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales exigibles[1399] y por lo tanto justiciables[1400].

Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas (Ser. C) No. 340 (31 ago. 2017). (Voto parcialmente disidente el Juez Eduardo Vio Grossi).; CtIDH. Trabajadores Cesados Petroperú v. Perú, Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas (Ser. C) No. 344 (32 nov. 2017). (Voto individual del Juez Eduardo Vio Grossi).; y CtIDH. OC 23-17. (Voto Individual concurrente del Juez Eduardo Vio Grossi). En el mismo sentido: CtIDH. Gonzales Lluy v. Perú. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas (Ser. C) No. 298 (1 Sept. 2015). Voto Individual concurrente del Juez Humberto Sierra Porto); CtIDH. Lagos Campos v. Perú, Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas (Ser. C) No. 340 (31 ago. 2017). (Voto parcialmente disidente del Juez Humberto Sierra Porto); y CtIDH. OC 23-17. (Voto Individual concurrente del Juez Humberto Sierra Porto).

1396. En materia del pluralismo con relación al desarrollo sostenible véase: Gabcíkovo-Nagymaros Project (Hung. v. Slovk.), Judgment, 1997 ICJ. 110 (September 25) (Separate Opinion of Judge Weeramantry). El Juez les consideraba *«not merely a principle of modern international law. It is one of the most ancient of ideas in the human heritage. Fortified by the rich insights that can be gained from millennia of human experience, it has an important part to play in the service of international law».*

1397. CtIDH. Asociación Lhaka Honhat v. Argentina, Fondo, Reparaciones y Costas (Ser. C) No 400. §202 (6 Feb. 2020).; y OC 23-17. §57. «Una serie de políticas que trabajan conjuntamente para fomentar el desarrollo sostenible».

1398. Mora., V. (2020). «Los derechos a un ambiente sano, a la alimentación adecuada, al agua ya la identidad cultural. Caso comunidades indígenas miembros de la asociación Lhaka Honhat (Nuestra Tierra) v. Argentina ante la CIDH»*.e-Revista Internacional de la Protección Social, 5(2), 336.* «La base para la declaración directa de la justiciabilidad de los DESCA ante la Corte IDH es que todos los derechos, sean civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, a la luz de la interdependencia e indivisibilidad existente, entre todos los derechos humanos reconocidos en la Convención Americana, no tienen jerarquía entre sí, de tal forma que pueden ser justiciables de manera directa, tanto los DCP, como los DESCA», refiriendo al voto concurrente del juez Eduardo Ferrer Mac-Gregor en la sentencia CtIDH Suárez Peralta v. Ecuador.

1399. OC 23-17. § 57, citando: CtIDH. Acevedo Buendia v. Perú, Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas (Ser. C) No. 198 § 100 (1 jul. 2009). Posteriormente reafirmado en CtIDH. Asociación Lhaka Honhat v. Argentina, Fondo, Reparaciones y Costas (Ser. C) No 400. §195 (6 Feb. 2020).

1400. Bantekas, I. & Oette., L. (2020), *Ob. cit*. 431. *«a free and independent judiciary plays an important role in clarifying the exact content of obligation, monitoring their implementation against possible discrimination, and determining the validity of omissions to fulfil based on reasonableness and proportionality, sometimes this role is further enhanced by its ability to demand specific action».*

Debe tenerse en cuenta que la Corte conecta el razonamiento del artículo 29 CADH relativo a las normas de interpretación[1401] con el artículo 31. 3 .c) de la Convención de Viena de Derecho de los Tratados para justificar la invocación del *corpus iuris* internacional y así tener la capacidad de actualizar los derechos asociados al desarrollo contemplados en la Carta de la OEA[1402]. De allí que la decisión alcanzada en el caso *Lhaka Honhat* en teoría no infringió reglas de competencias ni otorgó «jerarquía convencional a normas contenidas en otros instrumentos nacionales o internacionales relacionados con los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales»[1403].

La argumentación anterior fue completada con las normas ambientales de la legislación interna Argentina[1404] y en el *corpus iuris* internacional[1405], donde también se incluyó al Protocolo de San Salvador, instrumento que sí reconoce expresamente el derecho a un medio ambiente sano (artículo 11). Concretamente, la Corte estableció en su interpretación que al estar el derecho a un medio ambiente sano contenido en el artículo 26 CADH, el mismo quedaba sujeto al control exigido por el artículo 1.1 CADH, pues de este último surge tanto la obligación negativa de respeto, como la obligación positiva de garantía, ampliando el esquema de protección hasta el derecho a un medio ambiente sano. De manera que se expande ese deber de supervisión en cabeza de los Estados interamericanos.

Así las cosas, resultaba exigible no solo una observancia voluntaria tendiente a la protección del entorno. A partir de la aplicación de esta interpretación al caso contencioso de 2020, la CtIDH declaró expresamente que el derecho a un medio ambiente está cobijado por un deber de garantía del cual brota una obligación de prevenir vulneraciones ambientales[1406], es decir, un deber de medio articulado a través de acciones como la adopción de medidas preventivas acordes con la situación de riesgo[1407] y conforme con un estándar de diligencia debida que por lo menos tratase de evitar dentro de lo razonable la violación del derecho.

1401. Sobre la interpretación de los tratados de derechos humanos en relación con el cambio climático véase: Wewerinke-Singh., M. (2018), *Ob. cit*. 32-33.

1402. CtIDH. Asociación Lhaka Honhat v. Argentina, Fondo, Reparaciones y Costas (Ser. C) No 400. §197-199 (6 Feb. 2020). Véase en este sentido. Giménez, I. (2021a), *Ob. cit*. 409-432.

1403. OC 23-17, §85.

1404. En el caso concreto de la Argentina, se reconoce ampliamente el derecho a un medio ambiente sano a nivel constitucional.

1405. CtIDH. Asociación Lhaka Honhat v. Argentina, Fondo, Reparaciones y Costas (Ser. C) No 400. §198 (6 Feb. 2020), siguiendo lo adelantado en la OC 23-17. 58.

1406. CtIDH. Asociación Lhaka Honhat v. Argentina, Fondo, Reparaciones y Costas (Ser. C) No 400. §207 (6 Feb. 2020).

1407. Sobre este tipo de obligaciones véase: Economides, C. (2010) «Content of the obligation: obligations of means and obligation of the result». En: Crawford, J., Pellet, A., Olleson, S. & Parlett, K. (eds.). *The law of international responsibility*. (pp. 374-375) Oxford: Oxford University Press.

De allí que, el compromiso del Estado se extiende hasta un deber de supervisión sobre actividades privadas y estatales, incluyendo dentro de estas últimas medidas de tipo administrativo, jurídico, político y cultural de cuya infracción surgen hechos ilícitos[1408], susceptibles de control judicial a nivel regional. Así la CtIDH en el marco del principio de prevención de daños ambientales trajo a colación el deber de establecer mecanismos de supervisión y fiscalización sobre actividades que puedan afectar los derechos humanos[1409]. Lo anterior le permitió concentrarse en la revisión del cumplimiento de las obligaciones de procedimiento para determinar la violación del derecho[1410].

Aunque no lo señaló expresamente, el Tribunal Interamericano no hizo más que seguir la línea argumentativa establecida por la Corte Internacional de Justicia en el *landmark case Pulp Mills* en el cual se aplicó un análisis detallado sobre funcionamiento de este tipo de deberes de procedimiento ambiental (aunque a nivel interestatal). Así quedó claramente establecido que la obligación de diligencia debida sobre daños o riesgos ambientales no solo contempla la adopción de medidas apropiadas, sino que va acompañada de la aplicabilidad de un cierto nivel de control y vigilancia, entre los que se incluyen el monitoreo de actividades[1411] sospechosas de causar un daño significativo. En suma, la diligencia debida es una obligación que implica a los Estados la utilización de todos los medios a su alcance para impedir que las actividades realizadas dentro de su jurisdicción sean las causantes de daños[1412].

En pocas palabras, el cumplimiento de la diligencia con relación a la obligación de prevención puede sintetizarse a través de una obligación de medio,

---

1408. CtIDH. Asociación Lhaka Honhat v. Argentina, Fondo, Reparaciones y Costas (Ser. C) No 400. §207 (6 Feb. 2020). Véase: Stern, B. (2010). «The elements of an internationally wrongful» act. En: Crawford, J., Pellet, A., Olleson, S. & Parlett, K. (Eds.). *The law of international responsibility*. (pp. 200-201). Oxford: Oxford University Press. *«[…] behavior which is attributable to the State […], and the breach of an international obligation by a State as a result of such behavior. In other words, on the one hand, there must be conduct which is attributable to a State, and the other hand, that conduct must be wrongful*». Véase: Int'l Law Comm'n. Draft of articles on state responsibility on its Fifty-third Session U.N. Doc. A/56/10 (Apr. 23-Jun.1 & Jul. 1-Aug. 10).

1409. CtIDH. Asociación Lhaka Honhat v. Argentina, Fondo, Reparaciones y Costas (Ser. C) No 400. §207 (6 Feb. 2020)

1410. Realmente, este puede ser uno de los aportes más interesante a la doctrina ambiental interamericana, la referencia vertical a las obligaciones procesales ambientales y sustantivas sin necesidad de requerir el tamiz brindado por la propiedad el cual nutría del corpus iuris en materia de pueblos indígena para exigir las obligaciones de consulta, participación y prevención a través de la EIA. Cuestión que ha sido ampliamente abordada al tratar el derecho a la propiedad colectiva.

1411. Pulp Mills on the River Uruguay (Arg. v. Uru.), Judgment, 2010, ICJ. 58 § 197 (April 2010). En el mismo sentido: Responsibilities and Obligations of States with Respect to Activities in the Area (No. 17) Case No. 17, Advisory Opinion of Feb. 1, 2011, ITLOS Rep., 42. §113- 116

1412. CtIDH. Asociación Lhaka Honhat v. Argentina, Fondo, Reparaciones y Costas (Ser. C) No 400. §242-247 (6 Feb. 2020).

por lo que no requiere para demostrar su violación la materialización del daño[1413]. De allí que la escala con la cual se midió el comportamiento del Estado estuvo sustentada en el conocimiento que tenía Argentina sobre los eventos ocurridos durante años, conducta contrastada con los medios adoptados para enfrentar la problemática. Es decir, la evaluación del comportamiento preventivo asumido por el Estado frente al riesgo de daño ambiental, situación que además se vio exacerbada al tratarse de víctimas integrantes de un grupo especialmente vulnerable, *ergo* los pueblos indígenas.

Aunque la Corte solo hizo referencia al estándar genérico en proporción al riesgo, refiriéndose a ciertos mecanismos no limitados a la evaluación de impacto ambiental, mitigación de daños, regulación, supervisión, entre otros[1414]. Debe destacarse que la formula abierta descrita por el tribunal permitiría incluir en el futuro una amplia gama de mecanismos relacionados con el deber de fiscalización sobre problemáticas de contaminación difusa como el cambio climático, pues las obligaciones de diligencia son cambiantes en el tiempo y su exigencia puede ser modulada atendiendo a la evolución del conocimiento tecnológico y científico disponible que se tenga al momento de analizar la cuestión[1415].

Para un sector de la doctrina *Lhaka Honhat v. Argentina* tiene el acierto de desagregar e individualizar los componentes del territorio, antes judicializables a través del derecho a la propiedad colectiva[1416]. De manera que el Tribunal interamericano traslada la deconstrucción del territorio hacia el tratamiento directo y particular del derecho al medio ambiente sano, el derecho a la identidad cultural, alimentación[1417] y el derecho al acceso al agua,

1413. CtIDH. Asociación Lhaka Honhat v. Argentina, Fondo, Reparaciones y Costas (Ser. C) No 400. §207 (6 Feb. 2020). Véase también: OC 23-17. §242 b), c). Para una compresión acabada sobre este tipo de obligaciones: Brunnée, J. (2020), *Ob. cit*. 157. *«the harm prevention regime and the State responsibility regime operate alongside one another. They do so harmoniously, in the sense that the harm prevention regime specifies the primary obligations to which States are subject. The State responsibility regime comes into play when these primary obligations have been breached. [...], such a breach occurs when a State fails to exercise due diligence. Whether or not transboundary harm is caused matters, of course, but not because harm is an element of the primary obligation»*.

1414. CtIDH. Asociación Lhaka Honhat v. Argentina, Fondo, Reparaciones y Costas (Ser. C) No 400. §208 (6 Feb. 2020).

1415. Así lo ha señalado: Responsibilities and Obligations of States with Respect to Activities in the Area (No. 17) Case No. 17, Advisory Opinion of Feb. 1, 2011, ITLOS Rep., 42 §117. Sobre las obligaciones de diligencia téngase en cuenta el artículo 3 de la Comisión de Derecho Internacional sobre prevención de daños transfronterizos resultantes de actividades peligrosas, como guía orientativa aplicable en algunos aspectos a los daños ocurridos dentro de la jurisdicción de los Estados.

1416. Ferrer Mac-Gregor, E., (2020), *Ob. cit*. 3.

1417. En el Sistema Interamericano el derecho a la alimentación se encuentra consagrado en el artículo 30, 45.f, 47 y 48 Carta OEA. Así como en los Artículos XIII de la Declaración Americana y en el artículo 14.1.a Protocolo de San Salvador.

respectivamente[1418]. Debido a que dentro de las amplias categorías ofrecidas por los DESCA cobra mayor sentido[1419]. Sin embargo, es una postura que no queda del todo clara, pues no se distingue la necesidad protección diferenciada, cuando el eslabón principal de la cadena de eventos que afectaron el medio ambiente, cultura, alimentación y agua estuvo siempre anclada en el derecho de propiedad.

En concreto, en este fallo la CtIDH propuso articular los cuatro derechos DESCA, estableciendo una estrecha vinculación frente a las afectaciones sufridas por las comunidades indígena, en el contexto de unos derechos humanos interdependientes, indivisibles e indisolubles con el medio ambiente[1420]. Para ello, hizo alusión al Convenio 169 OIT, a la estrecha relación que mantienen estos pueblos con los recursos naturales[1421]. Igualmente, acompañó su argumentación con el papel de ordenación ambiental que tienen los pueblos indígenas[1422] y con las diversas formas de manifestación que envuelven el bienestar físico, espiritual y cultural arropado por un medio ambiente de calidad[1423]. Todas ellas, cuestiones previamente desarrolladas por la doctrina interamericana con relación al derecho de propiedad colectiva.

Debe destacarse en referencia a la seguridad alimentaria que la misma fue afectada en el marco del problema ambiental, lo que le permitió acudir al *corpus iuris*, a los instrumentos regionales[1424] y nacionales[1425] para forti-

---

1418. Ferrer Mac-Gregor, E., (2020), *Ob. cit*. 4. «En este sentido, la sentencia identificó que hay ciertos derechos que, si bien están relacionados con la "tierra", en realidad cobran más sentido dentro de lo que comprende el concepto de "territorio" conforme a la cosmovisión de los pueblos indígenas. De esta manera, derechos como participar en la vida cultural (en lo atinente a la identidad cultural), al medio ambiente sano, a la alimentación adecuada y al agua podrían ser justiciables de manera directa a la luz del artículo 26 del Pacto de San José». Bantekas, I. & Oette., L. (2020), *Ob. cit*. 432. La autora recuerda que: «justiciability does not only encompass claims against public authorities, the actions and omissions of private actors may also be challenged before the courts».

1419. Ferrer Mac-Gregor, E., (2020), *Ob. cit*. 4.

1420. CtIDH. Asociación Lhaka Honhat v. Argentina, Fondo, Reparaciones y Costas (Ser. C) No 400. §244 (6 Feb. 2020).

1421. CtIDH. Asociación Lhaka Honhat v. Argentina, Fondo, Reparaciones y Costas (Ser. C) No 400. §247 (6 Feb. 2020).

1422. CtIDH. Asociación Lhaka Honhat v. Argentina, Fondo, Reparaciones y Costas (Ser. C) No 400. §250 (6 Feb. 2020).

1423. CtIDH. Asociación Lhaka Honhat v. Argentina, Fondo, Reparaciones y Costas (Ser. C) No 400. §251 (6 Feb. 2020).

1424. En el Sistema Interamericano el derecho a la alimentación se encuentra consagrado en el artículo 34.J) Carta de la OEA, Artículo XI de la Declaración Americana y artículo 12.1 Protocolo de San Salvador.

1425. Entre ellos la Constitución Argentina

ficar las bases convencionales que le permitieron dictaminar la ruptura del estándar de diligencia esperado[1426] sobre el artículo 26 CADH. En la misma línea, abordó la cuestión del acceso al agua para incorporar el derecho en el esquema de vulneraciones[1427], con el fin de hacerlo susceptible de tutela a la luz del artículo 1.1 CADH[1428].

La CtIDH trató de establecer el análisis de responsabilidad del Estado advirtiendo que: Primero, las comunidades no se encontraban en la posesión pacífica y sin perturbaciones de sus territorios (propiedad colectiva). En segundo lugar, que el ganado, la tala ilegal y los alambrados impuestos por terceros generaron graves perturbaciones ambientales, los cuales repercutieron en la seguridad alimentaria, a raíz de las trasformaciones de la flora[1429] y fauna[1430], así como en un impacto negativo sobre el acceso al agua[1431], desencadenando la desertificación de algunas áreas, la reducción del agua disponible para el consumo, y la contaminación del recurso hídrico.

Todos estos sucesos fueron considerados a través de la valoración de informes de peritos y expertos, los cuales resultaron pruebas suficientes para desmostar que el Estado tenía conocimiento de estos acontecimientos, pero no adoptó medidas suficientes. La CtIDH señaló que las obligaciones tendientes a asegurar progresivamente[1432] la plena efectividad de los DESCA pasa por exigir de forma inmediata ciertos aspectos de los derechos incluidos en el artículo 26 CADH[1433].

1426. Esto puede resultar paradójico pues hasta la decisión de *Lhaka Honhat* los Estados no tenían como medir con exactitud el umbral de diligencia ambiental esperado a nivel interamericano, pues la realidad es que la OC 23-17 no lo había delimitado. Ciertamente la CIDH a través de informes especiales, se ha dado a la tarea de delimitar algunos de estos estándares, aunque debe recordarse que los mismos son instrumentos de derecho indicativo.

1427. CtIDH. Asociación Lhaka Honhat v. Argentina, Fondo, Reparaciones y Costas (Ser. C) No 400. §222 (6 Feb. 2020).

1428. CtIDH. Asociación Lhaka Honhat v. Argentina, Fondo, Reparaciones y Costas (Ser. C) No 400. §229 (6 Feb. 2020).

1429. CtIDH. Asociación Lhaka Honhat v. Argentina, Fondo, Reparaciones y Costas (Ser. C) No 400. §260 (6 Feb. 2020).

1430. CtIDH. Asociación Lhaka Honhat v. Argentina, Fondo, Reparaciones y Costas (Ser. C) No 400. §259 (6 Feb. 2020).

1431. CtIDH. Asociación Lhaka Honhat v. Argentina, Fondo, Reparaciones y Costas (Ser. C) No 400. §261 (6 Feb. 2020).

1432. Sobre la progresividad de los DESC véase: Bantekas, I. & Oette., L. (2020), *Ob. cit*. 419. «The CESR's view is in full conformity with the accepted position that water and food, among other things, should not be treated as commodities but as means necessary for survival and welfare».

1433. CtIDH. Asociación Lhaka Honhat v. Argentina, Fondo, Reparaciones y Costas (Ser. C) No 400. §274 (6 Feb. 2020).

Dada la infectividad de las medidas adoptadas por el Estado Argentino[1434] respecto al territorio y la aquiescencia en relación con la presencia de ganado y alambrado, conducta permisiva que dio continuidad a las actividades lesivas de los derechos de las comunidades indígenas, sumado a la falta de consulta adecuada[1435] determinaron la violación del artículo 26 en relación con el 1.1 CADH. Adicionalmente, la CtIDH recordó que a los daños ambientales también les resulta aplicable el artículo 2 de la CADH, en virtud del deber de adoptar disposiciones de derecho interno para asegurar la salvaguarda de los derechos convencionales, aunque debe destacarse que no declaró la violación de este último con respecto al medio ambiente, pero dejó abierta la posibilidad de hacerlo en futuros casos contenciosos.

No obstante, esta visión de avanzada y sustentada en los fallos sobre propiedad colectiva de la Corte no ha sido del todo convincente para justificar la aplicación del artículo 26 en relación con el 1.1 CADH como normas sustantivas que determinan por si solas la responsabilidad del Estado. Las sentencias mediante la cual se declaró la violación del medio ambiente, cultura y acceso al agua presenta una fuerte crítica desde el punto vista procesal por la falta de competencia de la Corte para revisar la materia litigiosa DESCA.

A razón de lo anterior la sentencia encontró resistencia entre (3) tres de los (6) seis jueces de la CtIDH[1436], uno de ellos su propio relator el magistrado Humberto Sierra Porto[1437], además de los jueces Ricardo Pérez Manrique y Eduardo Vio Grossi[1438], con lo cual la decisión sobre la violación de la CADH se produjo en un escenario de opiniones divididas[1439]. De hecho,

1434. CtIDH. Asociación Lhaka Honhat v. Argentina, Fondo, Reparaciones y Costas (Ser. C) No 400. §276 (6 Feb. 2020). Aunque «el Estado no ha admitido un daño ambiental, y ha sostenido, en relación con la alimentación y la identidad cultural, que no hay prueba de desnutrición o déficit alimentario y que son las mismas comunidades las que han introducido cambios a su forma de vida».

1435. CtIDH. Asociación Lhaka Honhat v. Argentina, Fondo, Reparaciones y Costas (Ser. C) No 400. §288 (6 Feb. 2020). Todas estas formas de vulneración reconocidas en el pasado como supuesto de violación del derecho de a la propiedad colectiva.

1436. Aunque la CtIDH está compuesta por siete (7) jueces, en este caso el Magistrado Eugenio Raúl Zaffaroni de nacionalidad argentina no integraba el Tribunal de conformidad con lo dispuesto en los artículos 19.1 y 19.2 del Reglamento de la CtIDH.

1437. Quien rechazó la condena del Estado con relación a la vulneración del derecho a un medio ambiente sano por su postura de no judialización de los DESCA.

1438. Véanse los puntos resolutivos de: CtIDH. Asociación Lhaka Honhat v. Argentina, Fondo, Reparaciones y Costas (Ser. C) No 400. §251 (6 Feb. 2020).

1439. En este caso se impuso la doctrina que desde 2015 viene impulsando el Juez Eduardo Ferrer Mac-Gregor. Puede decirse que en este caso operó el llamado elenco de salvaguardias al que hace referencia: Von Bogdandy, A. (2019), *Ob. cit*. 115-116. Cuando señala que «Las controversias entre jueces están incorporadas en los sistemas y disponen una característica central para enmarcar y restringir cualquier decisión».

la condena final de Argentina en esta materia DESCA tuvo que ser zanjada por el voto de desempate de la presidenta del Tribunal en aquel momento, la jueza Elizabeth Odio[1440], prerrogativa conferida por el artículo 23.3 del Estatuto CtIDH[1441]. Esto hace que por lo menos en este caso sobre medio ambiente la figura del precedente pierda fuerza por no haber sido adoptado por unanimidad, encontrando fundados argumentos en contra dentro de los votos disidentes[1442].

Otra crítica que puede plantarse con relación a la declaratoria de violación del derecho a un medio ambiente sano en conexión con el derecho a la alimentación y cultura es sobre la interpretación por violaciones autónomas[1443] sin delimitar exactamente las obligaciones que comprende cada derecho, es decir sin clarificar los límites del artículo 26 CADH. Si bien es cierto que la CADH es un instrumento vivo y dinámico que se ajusta a las necesidades demandadas por la sociedad contemporánea, esto no quiere decir que las normas convencionales puedan ser revestidas de tal ambigüedad que sirvan para favorecer la discrecionalidad de los jueces con el propósito de establecer nuevas formas de incumplimiento a través de innovadores catálogos normativos. Pues esta práctica se convertiría en un instrumento peligroso que atenta contra la seguridad jurídica y suma al lamentable fenómeno de *backlash* interamericano.

Ahora bien, esto no quiere decir que se esté en contra de la tesis sobre la violación autónoma de un medio ambiente sano. Por el contrario, se aplaude la iniciativa de sistematización donde se le otorga protección independiente a los entornos medio ambientales que durante años se trabajaron a través de la propiedad. La crítica está en una parte de la argumentación empleada, pues *Lhaka Honhat* es un caso donde la trasgresión de la propiedad desencadena la del medio ambiente. Se pierde de vista cual es la justificación de sancionar al Estado en dos bloques aislados de la sentencia y no como parte de un todo donde se lograrían engranar en perfecta sincronía la violación de los derechos a la propiedad, y las violaciones autónomas a la cultura, al medio ambiente, a la alimentación y al agua.

1440. Lima, L. (2021). «A juridisção da Corte Interamericana de Direitos Humanos sobre o Direito ao Meio Ambiente Saudável». *Revista Catalana de Dret Ambiental*, 12(1) 1-37. Recuperado de: https://bit.ly/3u6tOyM.

1441. Artículo 23.3 Estatuto CtIDH «En caso de empate, el voto del presidente decidirá».

1442. Véase CtIDH. Asociación Lhaka Honhat v. Argentina, Fondo, Reparaciones y Costas (Ser. C) No 400. §274 (6 Feb. 2020). (Voto individual disidente Eduardo Vio Grossi) (Voto individual disidente Humberto Antonio Sierra Porto). (Voto individual disidente Ricardo Pérez Manrique).

1443. La CtIDH utilizó puntos clave previamente expuestos en la OC 23-17. §59, 62 y 64, particularmente aquellos sobre el carácter universal como derecho fundamental para la humanidad y como un derecho autónomo que protege los componentes de la naturaleza, aunque sin ahondar en su basamento.

De hecho, en este caso el Tribunal propone la revisión de la conexión entre el derecho de propiedad y medio ambiente, distinguiendo entre «"tierra" y "territorio"»[1444], tema profundamente desarrollado como parte de un todo desde *Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni v. Nicaragua*[1445]. Pareciera que, en el afán de crear nuevas vías susceptible de acción individualizada, la Corte retrocede en una doctrina en la que había logrado una integración plural y efectiva entre el derecho consuetudinario de los pueblos indígenas y los derechos humanos. En *Lhaka Honhat v. Argentina,* la CtIDH reduce el tratamiento de la propiedad colectiva a una problemática de demarcación y titulación comunal de tierras indígenas, mientras que expande el medio ambiente y la cultura por separado.

Aunque cae en la paradoja de utilizar una y otra vez el argumento principal de la propiedad colectiva, es decir el territorio como vínculo fundamental para la sobrevivencia de su cultura y la subsistencia alimentaría[1446] y como derecho que se deslinda de la concepción puramente utilitarista[1447], aunque esta vez refiriéndose brevemente a su capacidad innovadora de proteger a los componentes de la naturaleza en conexión con la OC 23/17[1448]. En pocas

1444. Ferrer Mac-Gregor, E., (2020), *Ob. cit*. 3. La sentencia del caso Lhaka Honhat abona a esta línea jurisprudencial resultando novedosa en dos aspectos fundamentales. Primero, se hizo una distinción implícita entre «tierra» y «territorio».

1445. CtIDH. Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni v. Nicaragua, Fondo, Reparaciones y Costas (Ser. C) No. 79 §149 y151 (31 ago. 2001). Asunto profundamente tratado en CtIDH. Pueblo Saramaka v. Surinam, Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas (Ser. C) No. 120 y 122 §194 (28 nov. 2007). Véase: Calderón, J. (2017) «Medio ambiente frente a la Corte Interamericana de Derechos Humanos: una ventada de protección». *Instituto Interamericano de Derechos Humanos*. 113-144. Recuperado de: https://bit.ly/30wQvBJ.
La CtIDH empezó a tratar la cuestión del territorio (con todos los elementos que lo componen), desde casos asociados a la posesión sin demarcación, delimitación ni titulación, despojos de mala fe; pérdida de tierras por posesión de terceros de buena fe y proximidad, titulación sin saneamiento, conflictos entre derechos de propiedad entre indígenas y pueblos tribales, y reservas naturales localizadas dentro de territorios indígenas.

1446. CtIDH. Asociación Lhaka Honhat v. Argentina, Fondo, Reparaciones y Costas (Ser. C) No 400. §252 (6 Feb. 2020).

1447. En esta línea de pensamiento véase: Belloso., N. (2021b) «Dos propuestas relativas a los conflictos medioambientales: mediación ambiental y tribunal internacional ambiental». En: Sánchez., A. (ed.) *De Sevilla a Filipéia: Estudios ambientales en homenaje al profesor Marcos Augusto Romero.* (p. 160). Sevilla. AADMDS. «De ahí que además de proteger el medio ambiente por su valor intrínseco, sea inseparable de los Derechos humanos. La protección del medioambiente no deja de ser, de forma implícita, una defensa de los derechos del ser humano. La globalización y los diecisiete Objetivos de Desarrollo Sostenible establecidos en la Agenda 2030 exigen repensar los conflictos medioambientales en una óptica internacional».

1448. CtIDH. Asociación Lhaka Honhat v. Argentina, Fondo, Reparaciones y Costas (Ser. C) No 400. §203 (6 Feb. 2020). Sin embargo, continúa dejando en la oscuridad la respuesta sobre cuál es el contenido de esa dimensión multicéntrica en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos.

palabras, la argumentación presentada por los redactores de la sección de medio ambiente de la sentencia *Lhaka Honhat* en parte responde a una versión reciclada de la doctrina de pueblos indígenas y propiedad colectiva, cuyos elementos principales fueron trasladados a los derechos económicos sociales, culturales y ambientales del artículo 26 CADH.

De lo anterior se desprende que la CtIDH sanciona los derechos de forma autónoma, pero continúa enraizada en el argumento principal que ha utilizado durante diecinueve (19) años para determinar la vulneración del derecho de propiedad. Aunque era posible agregar valoraciones argumentativas adicionales, especialmente cuando el marco de la doctrina armonizada entre propiedad/medioambiente había alcanzado su mayor esplendor a través de la protección de las diversas manifestaciones cultures que abrazan a todos los componentes del territorio.

Un abordaje integrado podía minimizar la resistencia y tensión que gira alrededor de las condenas DESCA Interamericanas, a la par de abonar el camino que permitiese exponer la riqueza argumentativa que soporta una formulación con mayor contenido de autonomía ambiental, así como el desarrollo del medio ambiente por su valor propio dentro del Sistema[1449]. Estas son (2) dos tareas pendientes de la CtIDH, quizá tenga la oportunidad de desarrollarlas en *Comunidad de la Oroya v. Perú*, presentado para conocimiento del Tribunal en 2021[1450].

Como puede apreciarse la doctrina sobre la tutela autónoma del medio ambiente a penas se encuentra en formación, por lo que es altamente probable que sea sometida a interesantes cambios que le permitan florecer y reverdecer aún más el contenido de la CADH. Tan solo la alteración de la composición del tribunal actual[1451] puede llevar a la Corte a centrarse en el tratamiento del medio ambiente desde una perspectiva menos controvertida y más precisa, por lo menos en lo que se refiere al tratamiento brindado desde el caso *Lhaka Honhat* al medio ambiente[1452]. No obstante, el riesgo de regresión persiste.

1449. Gillespie, A. (2014). *International environmental law, policy, and ethics*. Oxford: Oxford University Press., p. 15. El autor plantea el valor propio a través de la identificación de valores metafísicos vinculados al individuo con el ecosistema, el valor intrínseco o el valor ecológico holístico, el beneficio entre las especies y la igualdad ecosistémica.

1450. OEA|CIDH. (2021, 14 de octubre). «CIDH presenta caso ante la Corte IDH sobre responsabilidad de Perú por efectos de la contaminación en la Comunidad de la Oroya». [comunicado de prensa]. Recuperado de: https://bit.ly/3nkxJGa

1451. El 12 de noviembre de 2021 fueron elegidas cuatro (4) de las (7) sillas de los jueces que integran las CtIDH. Así pasaron a integrar la CtIDH los juristas: Rodrigo Bittencourt (Brasil), Verónica Gómez (Argentina), Nancy Hernández (Costa Rica) y Patricia Pérez (Chile).

1452. Sobre la fragilidad de la sentencia también alertaban los litigantes del caso: Duarte, M; Morales D; & Schmidhuber, E. (3 jul. 2020). «Argentina: una luz para los pueblos indígenas por un fallo sin precedente de la Corte IDH». *Open Global Rights*. Recuperado el 30 de noviembre de 2023 de: https://bit.ly/3ckL8Ys

La clave para la superación del desafío y el avance en temas tan complejos quizá está en reforzar el razonamiento argumentativo utilizado hasta ahora, colmando las lagunas y elementos que no lograron conectar a plenitud en el razonamiento de la sentencia de 2020. Además de consolidar en el tiempo las interesantes fórmulas de reparación ambiental aplicada por *Lhaka Honhat*. Este caso expuso un modelo de reparación interamericano único en su tipo en el que se incorporaron la presentación de informes semestrales de cumplimiento con relación a las medidas de restitución de la propiedad,[1453] problema medular del que deriva la vulneración del derecho a un medio ambiente sano, así como un plan de acción y trabajo continuo con las comunidades[1454]. La réplica de este modelo puede ser la antesala para la creación un método de reparación[1455] climática que promueva acciones más ambiciosas y supervisadas por la Corte en la región.

Sea cual sea la corriente adoptada en el futuro por la CtIDH su tratamiento debe obedecer a las condiciones particulares del caso concreto. No obstante, interesantes perspectivas se tejen sobre temas tan intrincados como medio ambiente, pueblos indígenas y en especial cambio climático, donde debe trabajarse a través de la articulación con otros derechos civiles y político, como de la mano con la autonomía del medio ambiente. La aproximación anterior favorece la permeabilidad de la protección ambiental a través de la doctrina del control de convencionalidad concentrado y difuso. Esto incluso puede favorecer a la consolidación de doctrinas positivas como *res intrepretata*[1456] cuyo fin último es lograr un mayor grado de protección de los derechos humanos fijando «criterios que influyan en la reelaboración del orden doméstico a través de leyes, jurisprudencia y políticas públicas»[1457].

1453. Es decir, que fue más allá de la usual creación del fondo comunitario de reparaciones y agregó una suerte de *rolling review* o *continuing mandamus* empleada en casos climáticos *como* Leghari v. Federation of Pakistan, judgment (4 Sep. 2015) y en Futuras Generaciones v. la Presidencia de la República de Colombia (5 de abr. 2018).

1454. CtIDH. Asociación Lhaka Honhat v. Argentina, Fondo, Reparaciones y Costas (Ser. C) No 400. §444-445. (6 Feb. 2020). Aunque también es un modelo perfectible, pues pudo incluir estrategias de reforestación y medidas contra la tala ilegal. Sin embargo, es la semilla del cambio que demanda la región en materia de tratamiento ambiental desde los derechos humanos.

1455. Sobre el histórico de reparaciones de la CtIDH véase: Rousset-Siri, A. (2011). «El concepto de reparación integral en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos». *Revista Internacional de Derechos Humanos* (1), 59-79. Recuperado de: https://bit.ly/3iUQFIU. Igualmente, sobre la repación integral véase también: Rousset-Siri, A. (2018) *Ejecución de sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos*. Buenos Aires, EDIAR, p. 190.

1456. De hecho, no existe ningún caso interamericano en el que la Corte haya condenado a un Estado basado exclusivamente en la doctrina del control de convencionalidad y sigue siendo particularmente controvertida.

1457. Véase: Rousset-Siri, A. (2021), *Ob. cit*. 270.

El caso *Lhaka Honhat v. Argentina* representa la semilla transformadora no solo en el imaginario del Tribunal sino de los Estados e incluso de las terceras partes involucradas en la explotación de los recursos naturales de la región. Como puntos a favor de esta decisión se puede mencionar: Primero, busca impulsar la efectividad de los DESCA. Segundo, exige un mayor estándar de diligencia al Estado. Tercero, promueve la adopción de disposiciones de derecho interno tanto de carácter administrativas, legales, presupuestarias y judiciales que permitan asegurar el ejercicio pleno del derecho ambiental. Cuarto, expone una nueva narrativa mediante la cual se rompe con el paradigma ambiental clásico. Quinto abre puertas y ventanas para tratar complejas formas de daños a través de obligaciones ambientales puras. Sexto presenta una suerte de monitoreo continua/ *rolling review* que en teoría permitiría implementar con mayor efectividad las medidas adoptadas en materia de reparaciones.

Obligaciones de procedimiento ambiental aplicable a los derechos a la información, participación y consulta.

Las obligaciones de procedimiento van de la mano con las obligaciones sustantiva, es decir que no pueden entenderse las unas en ausencia de las otras, pues funcionan bajo una relación simbiótica donde las de tipo sustantivo proporcionan el marco para el funcionamiento de las de tipo procedimental[1458]. Si son correctamente aplicadas operan en armonía, asegurando la prestación de una conducta diligente frente a una problemática ambiental. Sin embargo, pueden ser tratadas por separado e incluso se puede invocar su vulneración cuando el daño no se ha materializado[1459].

Usualmente al hablar de obligaciones de procedimiento en materia de derecho ambiental internacional es necesario situarse en un contexto transfronterizo, es decir, bajo una relación Estado/Estado. Pero en general, de los miembros de la comunidad internacional se espera el cumplimiento de la obligación mínima de llevar a cabo la evaluación de impacto ambiental ante el desarrollo de proyectos, esto como una forma de efectivizar la obligación de prevención y el principio de precaución según las características de cada

1458. Brunnée, J. (2017). «International environmental law and community interests: Procedural aspects». En: Benvenisti., E & Nolte., G. (eds.) *Community Obligations in International Law*., (p. 5). Recuperado de: https://bit.ly/36E1LPZ. La autora además señala: «In turn, procedure has the potential to reinforce and develop, and to give concrete meaning and effect to, substance».

1459. Brunnée, J. (2017), *Ob. cit*. 9. Respecto al caso de la planta de celulosa del Río Uruguay: *«The ICJ emphasized that procedural obligations have a separate existence – they can be violated, for example, even when significant transboundary harm does not ultimately occur».*

caso concreto. A lo anterior, deben también sumarse las obligaciones asociadas de consulta, notificación e intercambio de información[1460].

A pesar de que las obligaciones mencionadas anteriormente son las más conocidas, su tipo no se encuentra limitado al catálogo señalado. Las obligaciones de procedimiento presentan una amplia gama de variaciones dependiendo del área de derecho ambiental en el que se localice el operador jurídico[1461], pues las misma atienden a características propias de los tratados ambientales que se analicen[1462].

Solo a modo de ejemplo, pueden mencionarse dos *leading cases* en los cuales estuvieron involucrados cuatro países de la región americana ante la Corte Internacional de Justicia, a saber del caso sobre la *Pulp Mills (Argentina v. Uruguay)*[1463]*,* cuyas obligaciones de procedimiento giraron en torno al Estatuto del Río Uruguay de 1975, y el caso sobre *Ciertas actividades en el borde del Río San Juan Costa Rica v. Nicaragua/ Nicaragua V. Costa Rica* [1464] en conexión con la Convención RAMSAR y el Convenio para la Conservación de la Biodiversidad y Protección de Áreas Silvestres Prioritarias en América Central.

Ahora bien, si el análisis se enfoca en las obligaciones de procedimiento[1465] que surgen del régimen especial del clima, debe mencionarse en primer lugar el artículo 6.a.ii de la CMNUCC y el artículo 14.1.a del Protocolo de Kioto[1466].

1460. Desde el punto de vista general encuentra raíz en el principio 10 Declaración de Río. Sin embargo, los instrumentos multilaterales ambientales hacen referencia en sus propios términos a este tipo de obligaciones.

1461. Convenio sobre Diversidad Biológica, Convenio sobre la Evaluación del Impacto Ambiental en un Contexto Transfronterizo [Convenio de Espoo], Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación en los Países Afectados por Sequía Grave o Desertificación, en Particular en África, Convenio de Rotterdam sobre el Procedimiento de Consentimiento Fundamentado Previo Aplicable a Ciertos Plaguicidas y Productos Químicos Peligrosos Objeto de Comercio Internacional, entre una extensa lista de tratados multilaterales en materia ambiental.

1462. Okowa, P. N. (1997). «Procedural obligations in international environmental agreements». En: I. Brownlie & J. Crawford (Eds.) *The British Yearbook of International Law*,*67*, (pp. 276-277). Oxford: Oxford University Press.

1463. Pulp Mills on the River Uruguay (Arg. v. Uru.), Judgment, 2010, ICJ. 58 (April 2010). Aunque no puede perderse de vista que el tema de la evaluación de impacto ambiental fue trabajado primero en: Gabcíkovo-Nagymaros Project (Hung. v. Slovk.), Judgment, 1997 ICJ. 106 (September 25).

1464. Certain Activities Carried Out by Nicaragua in the Border Area (Costa Rica v. Nicar.) and Construction of a Road in Costa Rica along the San Juan River (Nicar v. Costa Rica), Judgment, 2015, ICJ. (December 2015).

1465. Sobre el estado actual de este proceso véase el interesante análisis de: Fernádez Egea, R. M (14 nov. 2021), *Ob. cit*.

1466. Este último sin vigencia desde el año 2020 y limitado a un número reducido de Estados contratantes.

En segundo lugar, es necesario remitirse al proceso de Determinación de las Contribuciones Nacionales (NDC) fijado por el Acuerdo de París en su artículo 4.2 relativo al deber de preparar, comunicar y mantener las NDC [1467], artículo 4.3 sobre la sujeción las NDC a una progresión específica en el plano interno del Estado[1468] y el artículo 4.8 con relación al deber de comunicar las correspondientes contribuciones [1469]. El cumplimiento de estas normas funciona como parámetro mínimo de prevención y mitigación que ayudarían a contrarrestar el avance del cambio climático.

Debe recordarse que, aunque las metas de estabilización de la temperatura establecidas en el artículo 2.1 a) del Acuerdo de París no son de obligatorio cumplimiento para los países en desarrollo[1470], si lo es el deber implementar un plan de las NDC a los fines evaluar la proyección de las emisiones de cada Estado[1471]. En resumen, los Estados, incluidos los interamericanos están obligados a presentar comunicaciones[1472], reportes y actualizaciones de sus contribuciones de gases de efecto invernadero a la atmósfera[1473] en virtud del artículo 13 Acuerdo de París en el marco de los arreglos de transparencia sobre la información periódica. Este es precisamente el aporte innovador del Acuerdo a través de la puesta en práctica de la llamada formula binaria

1467. Artículo 4.2 Acuerdo de París: «Cada Parte deberá preparar, comunicar y mantener las sucesivas contribuciones determinadas a nivel nacional que tenga previsto efectuar. Las Partes procuraran adoptar medidas de mitigación internas, con el fin de alcanzar los objetivos de esas contribuciones».

1468. Artículo 4.3 Acuerdo de París: «La contribución determinada a nivel nacional sucesiva de cada Parte representará una progresión con respecto a la contribución determinada a nivel nacional que esté vigente para esa Parte y reflejará la mayor ambición posible de dicha Parte, teniendo en cuenta sus responsabilidades comunes pero diferenciadas y sus capacidades respectivas, a la luz de las diferentes circunstancias nacionales».

1469. Artículo 4.8 Acuerdo de París «Al comunicar sus contribuciones determinadas a nivel nacional, todas las Partes deberán proporcionar la información necesaria a los fines de la claridad, la transparencia y la comprensión, con arreglo a lo dispuesto en la decisión 1/CP.21 y en toda decisión pertinente que adopte la Conferencia de las Partes en calidad de reunión de las Partes en el presente Acuerdo».

1470. En general los Estados interamericanos con la excepción de Brasil que representa que entra en la categoría de económica emergente.

1471. Para evaluar el progreso de la NDC en América Latina véase: CEPAL (2021b). NDC LAC seguimiento de las contribuciones nacionalmente determinadas en América Latina y el Caribe. Recuperado 30 de noviembre de 2023 de: https://bit.ly/3wJgEJn. Igualmente véase: WWF (2021) NDC de América Latina y el Caribe: Recomendaciones para los Tomadores de Decisión. Recuperado de: https://bit.ly/3lU4j9G. Mooney. C., *et al*. (7 noviembre 2021), *Ob. cit*.

1472. Artículo 3 del Acuerdo de París.

1473. Mayer, B. (2021a), *Ob. cit*. 419. *«While it is largely understood that the NDCs that have been communicated to date lack ambition, it remains that every party to the Paris Agreement has also a general (albeit ill-defined) obligation under the UNFCCC to formulate and implement measures on the mitigation of climate change. Climate treaties thus provide at least a plausible legal basis to challenge a state's lack of ambition on climate change mitigation».*

En pocas palabra, las obligaciones procedimentales climáticas son de naturaleza vinculante y por tanto exigibles a los Estados Parte del Acuerdo de París, mecanismo asegurado en 2018 por el paquete de medidas de Katowice[1474], guía de implementación «*Paris Rulebook*», instrumento que contempla las fórmulas para activar y ejecutar los compromisos de naturaleza procedimental descritos en los párrafos precedentes, pero que fueron objeto de ajuste y negociación en 2021 durante la COP 26[1475]. No puede perderse de vista que estas obligaciones por si solas son inoperantes a corto plazo. De allí que su complemento con normas sustantivas y de procedimiento en materia de derechos humanos las blindaría con mayor efectividad [1476] y celeridad, por lo menos en teoría. Esta idea estaría también respaldada por la propia OC 23/17, en la cual se reiteró que el principio de cooperación incluye la obligación de notificar consultar y negociar de buena fe[1477] en el marco de la situación ambiental de riesgo o de daño ambiental, donde debe entenderse incluido el cambio climático.

Aclarado lo anterior, corresponde evaluar cuáles son esas obligaciones de naturaleza procesal reconocidas por los derechos humanos[1478], específicamente por la Convención, las cuales facilitan la creación, fortalecimiento y consolidación de políticas ambientales en materia climática, así como la identificación de las normas instrumentales que pueden coadyuvar al cumplimiento de los derechos humanos afectados bajo la dinámica internacional desarrollada entre individuos y el Estado.

Precisamente, la OC 23-17 ha iluminado el camino sobre esta cuestión, aunque refiriéndose concretamente a la protección del derecho a la vida y a la integridad en el marco de problemáticas ambientales[1479]. Así ha identificado una serie de derechos que se cumplen a través de la exigencia de procesos o procedimientos internos en los Estados miembros de la CADH. Entre ellos aparece el artículo 13 relativo al derecho a la información, el artículo

1474. Véase: World Resources Institute (2020). «Setting the Paris Agreement in Motion: Key requirements for the implementing guidelines». Recuperado de: https://bit.ly/36Clyhz. En el mismo sentido: Rajamani, L. & Bodansky, D. (2019). The Paris rulebook: Balancing international prescriptiveness with national discretion. *International & Comparative Law Quarterly*, *68* (4), 1023-1040.

1475. Fernádez Egea, R. M (14/11/2021), *Ob. cit*.

1476. Un análisis sobre el carácter vinculante de las obligaciones de mitigación contenidas en el artículo 4 del Acuerdo París en relación con los derechos humanos fue propuesto por: Franzius & Kling (2021), *ob. cit*. 197-216.

1477. OC 23/17. §187-210 y 242 e).

1478. Treves., T. (2018), *Ob. cit*. 103. *«The importance of the procedural rights in human rights proceedings consist in that, through these procedural rights, the individuals obtain, in practice, a right very similar to the sustentive right corresponding to the State obligation whose violation the procedures have to ascertain».*

1479. OC 23/17. §211.

23.1.a) en materia de derecho a la participación, el artículo 25 sobre acceso a la justicia[1480] y el artículo 8 CADH sobre garantías judiciales.

La justicia ambiental implica que las personas impactadas por problemáticas como el cambio climático tengan derecho a participar en la toma de decisiones y que su visión sea considerada dentro de la formulación de normas y políticas ambientales[1481]. De allí que dos elementos esenciales del acceso a la justicia ambiental y en particular la climática contemplan: Primero, el ser informado y participar activamente en las decisiones relacionadas con actividades que pueden causar impacto ambiental o sobre las que existe un riesgo de daño ambiental, y segundo, tener la posibilidad de tomar acciones frente a la transgresión de una norma ambiental, riesgo o daño ambiental[1482].

En lo que se refiera a esa primera visión de justicia, aparece el acceso a la información, derecho que contempla la obligación de los Estado de proveer información transparente, accesible y oportuna sobre asuntos ambientales con el propósito de facilitar la adopción de planes y políticas que aseguren la preservación del espacio esencial para la realización de otros derechos[1483]. Debe destacarse que el derecho a la información se encuentra profundamente vinculado con el derecho a la participación de las comunidades y de los interesados en general[1484], así como con el derecho al desarrollo sostenible[1485], lo cuales pudiesen ser activados de forma conjunta atendiendo al principio de interdependencia e indivisibilidad de los derechos humanos.

Si bien es cierto que la CtIDH no se ha pronunciado concretamente sobre la cuestión climática, ha establecido que el derecho a obtener información está acompañado por el deber del Estado de suministrar información de oficio accesible para que las personas puedan conocerla y valorarla[1486]. Esta obligación es conocida como transparencia activa[1487] y la misma procura asegurar la garantía de los derechos convencionales que puedan verse afectados por un problema ambiental[1488]. Por lo cual, de este derecho además se desprenden

1480. OC 23/17. §212.

1481. Millner, F. (2011). Access to environmental justice. *Deakin Law Review*, 16(1), 191.

1482. *Loc. cit.* Esta obligación estatal fue explícitamente formulada como deber ambiental en la OC 23/17. §242.

1483. Esta obligación fue expresamente declarada en relación con el derecho a la vida e integridad personal enmarcados en una afectación ambiental en la OC 23/17. §242.e)

1484. *CtIDH*. Pueblos Kaliña y Lokono v. Surinam, Fondo, Reparaciones y Costas (Ser. C) No. 309. §261 (25 nov. 2015), sin que se requiera demostrar un interés directo.

1485. OC 23/17. §217

1486. CtIDH. Claude Reyes v. Chile, Fondo, Reparaciones y Costas. (Ser. C) No.151 § 77 (19 Sep. 2006).; OC 23/17. §221.

1487. OC 23/17. §221.

1488. Esta obligación fue explícitamente formulada en materia de medio ambiente en la OC 23/17. §242. f.

obligaciones procedimentales accesorias derivadas de fórmulas y mecanismos disponibles en el derecho interno para acceder a la información ambiental.

Los Estados tienen la obligación de informar sobre cuestiones de vital importancia para la colectividad como lo son: «la calidad ambiental, el impacto ambiental en la salud y los factores que lo influencian, además de información sobre la legislación, políticas y asesoramiento sobre cómo obtener esa información»[1489]. Adicionalmente, debe recordarse que la CtIDH ha establecido una serie de estándares en relación con los pueblos indígenas y tribales[1490] que pueden servir de fundamento para el establecimiento de litigios estratégicos climáticos basados en la vulneración de esta obligación de procedimiento asociados a obstrucción de información o la falta de transparencia sobre las contribuciones nacionales determinadas y su impacto sobre la población de que se trate.

Además de lo anteriormente expuesto, debe tenerse presente el derecho a la información no es un derecho absoluto por lo cual su goce y ejercicio puede estar sujeto a restricciones siempre y cuando las mismas estén enmarcadas en los parámetros convencionales, los cual exigen que: a) esté previamente establecida la restricción por ley; b) sea necesaria; c) responda a un objetivo permitido por la Convención, y d) atienda a los intereses de una sociedad democrática[1491].

En lo que al derecho a la participación se refiere [1492] el mismo se encuentra consagrado en el principio 22 de la Declaración Río. Sin embargo, la CtIDH ha realzado un extraordinario trabajo al desarrollar su alcance[1493] en situaciones que afectan directamente a los pueblos indígenas y tribales, especialmente en el marco del respeto y garantía del derecho de propiedad colectiva[1494] e

1489. OC 23/17. §223.

1490. CtIDH. Pueblo Indígena Kichwa de Sarayaku v. Ecuador, Fondo, Reparaciones y Costas (Ser. C) No. 245 §206-230 (27, jun. 2012). «Los Estudios de Impacto Ambiental deben realizarse conforme a los estándares internacionales y buenas prácticas al respecto; respetar las tradiciones y cultura de los pueblos indígenas; y ser concluidos de manera previa al otorgamiento de la concesión, ya que uno de los objetivos de la exigencia de dichos estudios es garantizar el derecho del pueblo indígena a ser informado acerca de todos los proyectos propuestos en su territorio».

1491. OC 23/17. §225. En materia de pueblos indígenas sobre la restricción de los derechos de propiedad violaciones típicamente asociados a la obstrucción de información y de participación en asuntos que les afecten véase: CtIDH. Pueblo Saramaka v. Surinam, Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas (Ser. C) No. 120 y 122 §128-129 (28 nov. 2007).

1492. Salmón. E., Bregaglio Lazarte, R., *et al.* (2012). *La consulta previa, libre e informada en el Perú: la inclusión del interés indígena en el mundo de los derechos humanos*. Lima: IDEH-PUCP | Konrad Adenauer Stiftun. En: https://bit.ly/3EUXjYC

1493. Esta obligación estatal fue explícitamente planteada en un contexto ambiental en la OC 23/17. 242.

1494. CtIDH. Pueblo Saramaka v. Surinam, Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas (Ser. C) No. 120 y 122 §154 (28 nov. 2007). CtIDH Comunidad Indígena Xákmok

identidad cultural[1495] frente a perturbaciones causadas por la exploración de los recursos localizados en su territorio.

De manera que conforme a la doctrina interamericana se le exige a los Estado la participación de las comunidades[1496] que puedan ver mermadas sus condiciones de vida por la afectación del espacio natural que consideran su hogar. La CtIDH ha realizado una interpretación armónica que recoge las aspiraciones de los pueblos indígenas y tribales para permitirles asumir el control de sus propias instituciones, formas de vida y desarrollo[1497] a través de la invocación del *corpus iuris* internacional.

El Tribunal interamericano ha reiterado que «los pueblos indígenas tienen derecho a participar en la adopción de decisiones en las cuestiones que afecten a sus derechos, por conducto de representantes elegidos por ellos de conformidad con sus propios procedimientos, así como a mantener y desarrollar sus propias instituciones de adopción de decisiones», y precisamente, esta obligación es efectiva a través del establecimiento de mecanismos instrumentales de derecho interno de los Estados para garantizar el ejercicio pleno de su participación[1498].

Además, en el supuesto de proyectos a gran escala también se requiere que los pueblos otorguen su consentimiento libre, como resultado del intercambio de información fidedigna y previa al inicio de las actividades, atendiendo a sus costumbres y tradiciones[1499]. Igualmente, y en el marco de la interpretación de la CADH se entiende que la participación en los asuntos ambientales es una de las bases de las obligaciones recogidas en los derechos instrumentales, pues «es por medio de la participación que las personas ejercen el control democrático de las gestiones estatales y así pueden cuestionar, indagar y considerar el cumplimiento de las funciones públicas»[1500].

Kásek v. Paraguay, Fondo, Reparaciones y Costas. (Ser. C) No.214 §157-170.; CtIDH. Pueblo Indígena Kichwa de Sarayaku v. Ecuador, Fondo, Reparaciones y Costas (Ser. C) No. 245 §206-207 (27, jun. 2012).

1495. CtIDH. Pueblo Indígena Kichwa de Sarayaku v. Ecuador, Fondo, Reparaciones y Costas (Ser. C) No. 245 §214 (27, jun. 2012).

1496. UNHRC. Consentimiento libre, previo e informado: un enfoque basado en derechos humanos. U.N Doc. A/HRC/39/62 (10 ago. 2018). En conexión con a la interpretación que ha brindado el Fondo Verde sobre el clima sobre el consentimiento libre, previo e informado de los pueblos indígenas y su respectiva aplicación.

1497. Preámbulo del Convenio OIT 169.

1498. Véase el artículo 6.b) y 7 Convenio OIT 169. CtIDH. Pueblo Saramaka v. Surinam, Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas (Ser. C) No. 120 y 122 §28-129 (28 nov. 2007). Igualmente véase: Carrasco-Quiroga, E. (2013). «Razonabilidad y proporcionalidad: criterios para la determinación de la consulta indígena en proyectos de inversión en el marco del Convenio n.° 169 de la OIT». *Revista chilena de derecho,* 40(1), 301-316.

1499. OC 23/17. §134

1500. OC 23/17. §226,

En consecuencia, los Estados tiene la obligación de garantizar la participación de quienes se encuentran en su jurisdicción, lo cual incluye acciones sobre planes y política que tengan repercusiones ambientales[1501] y climáticas[1502]. Ahora bien, los procesos deben estar encuadrados en los principios de no discriminación, equidad y transparencia para garantizar realmente el derecho a la información[1503].

Por otra parte, al hablarse del derecho a la información y participación debe realizarse una mención especial sobre el Acuerdo de Escazú[1504], pues a pesar de no ser un instrumento perteneciente a Sistema Interamericano, su entrada en vigencia en el año 2021 plantea interesantes perspectivas en cuanto a su proyección sobre los derechos consagrados en los artículo 8, 13, 23.1 y 25 CADH, debido a que su objetivo es la promoción, la participación pública y acceso a la justicia en asuntos ambientales dentro de la región latinoamericana.

Este instrumento multilateral busca que los Estados signatarios implementen dentro de su derecho interno mecanismos procedimentales conforme a las disposiciones establecidas en los artículos 4.3, 5, 7, 8.3 y 13 del Acuerdo de Escazú[1505], con el fin de asegurar la participación pública en la toma de decisiones ambientales, la información y la protección de los derechos a un medio ambiente sano, así como el derecho al desarrollo en un plano intergeneracional[1506].

Debe recordarse que desde el año 2017, la CtIDH tomó nota de los trabajos preparatorios y las negociaciones que en ese momento se desarrolla-

---

1501. OC 23/17. §231

1502. CIDH. «Emergencia climática alcance de las obligaciones interamericanas en materia de derechos humanos», CIDH Doc. 3/21 (31 dic. 2021), 14 §13.

1503. OC 23/17. §231

1504. U.N| CEPAL. «Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe» (3 abr. 2018). [Acuerdo de Escazú]. Recuperado de: https://bit.ly/36Xn3aV. Como ejemplo de aproximación al acceso a la justicia ambiental en Europa véase: Sánchez-Bravo, A. (2019) «Acceso a la justicia en materia ambiental en la Unión Europea». En: A. Sánchez-Bravo (ed.). *Democracia, pluralismo y derechos humanos: 500 años. Facultad de Derecho. Universidad de Sevilla. X años de Encuentros hispanos-brasileños de filosofía del derecho y derechos humanos.* (pp. 65-77). Madrid: Aranzadi. Mientras que en América Latina véase: García-Pachón. M. (2020), *Información, participación y justicia ambiental: Herramientas para alcanzar el desarrollo sostenible y la democracia ambiental*. Bogotá: Universidad del Externado.

1505. CEPAL. (2019), *Ob. cit*. 48. «[…]es, también, un acuerdo de derechos humanos esencial para la acción climática. Además de reconocer y desarrollar expresamente derechos humanos procedimentales, sirve de base para el ejercicio pleno de derechos sustantivos como el derecho a un medio ambiente sano, el derecho a la vida, a la salud o a la alimentación en el contexto del cambio climático. Asimismo, se enfoca en las personas y grupos en situación de vulnerabilidad, aspirando a no dejar a nadie atrás».

1506. Artículo 1 Acuerdo de Escazú.

ban[1507]. Esto resulta de particular interés pues una vez que los Estados Parte de la CADH y a su vez parte del Acuerdo de Escazú incorporen las obligaciones de procedimiento dentro de la legislación interna, el acceso efectivo a cada uno de esos mecanismos puede estar sujeto al control del Tribunal interamericano. Aunque no de forma directa, pues el Acuerdo de Escazú no contempla una vía contenciosa o punitiva para asegurar el cumplimiento de las obligaciones. No obstante, una vez el Estado las incorpora como propias, su idoneidad y efectividad deben cumplir con los parámetros convencionales o de lo contrario podrá invocarse la responsabilidad internacional del Estado en virtud de los artículos 8, 13, 23.1, 25 en relación con el 1.1 y 2 CADH.

En lo que respecta a esa segunda dimensión de la justicia ambiental en el Sistema Interamericano[1508], se activa precisamente cuando el derecho a la información y participación no son respetados por el Estado o en su defecto cuando el Estado a través de sus acciones infringe normas ambientales sin permitir a los interesados revisar el control de estas actuaciones mediante procedimientos administrativos y judiciales óptimos. El acceso a la justicia es considerado como «la posibilidad efectiva de las personas de acudir a mecanismos institucionalizados de resolución de conflictos […] para la tutela de sus derechos»[1509], en este caso de aquellos afectados en un contexto ambiental o como derecho ambiental autónomo.

El acceso a la justicia permite asegurar la rendición de cuentas y la reparación del impacto del cambio climático sobre los derechos humanos[1510]. El

1507. OC 23/17., §218.

1508. Es decir, se podrán tomar acciones frente al impacto del cambio climático sobre los derechos humanos en la CtIDH una vez sea superado el principio de subsidiariedad, demostrando que se agotaron los remedios internos (si los hubiera y fuesen efectivos), persistiendo la vulneración del derecho. Véase sobre la subsidiariedad: Vera, G. (2018). «La aplicación del Principio de Subsidiariedad en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos: avances y retos». *Iuris Dictio* 21(1), 99-109. Recuperado de: https://bit.ly/39QvhzN

1509. Errandonea, J. & Martin, A. (2015). «El acceso a la justicia en el Sistema Interamericano y su impacto en el ámbito interno». En: H. Ahrens., F. Rojas & Sainz, J. (eds.). *El acceso a la justicia en América Latina: retos y desafíos*. (p. 347) San José CR: Universidad para la Paz. Véase también: Cançado-Trindade. A. (2003) «El acceso a la justicia en el internacional y las condiciones para su realización en el Sistema Interamericano de protección de los derechos humanos». *Revista Instituto Interamericano de Derechos Humanos* (37), 53-83.

1510. ACNUDH. (2021), *Ob. cit*. 38. «Los Estados deberían rendir cuentas ante las personas titulares de derechos por su contribución al cambio climático, entre otras cosas por no regular adecuadamente las emisiones de las empresas bajo su jurisdicción, independientemente de dónde se produzcan realmente esas emisiones o los daños que provoquen». En el marco de fertilización cruzada entre mecanismos de protección, debe tomarse en cuenta: African Commission on Human and People's Rights. Res. 489 on the Recognition and Protection of the Right of Participation, Governance and Use of Natural Resources by Indigenous and Local Populations in Africa', ACHPR/Res. 489 (LXIX) 2021. Aunque sin perder de vista que el derecho a la participación e información está viviendo ciertos

derecho a la protección judicial interpretado por la CtIDH tiene contenido propio, lo cual le permite ir más allá de la existencia de una sede jurisdiccional formal, es decir que involucra no solo el acceso a un tribunal, sino que implica que el derecho de acceso a la justicia se filtra a través múltiples normas convencionales[1511]. Lo anterior hace posible la realización de «un verdadero *derecho al Derecho*»[1512].

El acceso a la justicia consagrado en el artículo 25.1 CADH se encuentra profundamente conectado[1513] con las garantías del debido proceso legal, asegurado a nivel interamericano por el artículo 8 CADH[1514]. Su funcionamiento conjunto se debe principalmente a que los Estados además de cumplir con el deber de proveer las vías de acceso a la justicia idóneas y efectivas[1515], tienen la obligación de sustanciar los recursos disponibles de conformidad con una serie de garantías procesales y procedimentales mínimas que hacen posible el control sobre las acciones u omisiones de las autoridades pública frente al incumplimiento de obligaciones ambientales[1516].

La CtIDH ha desarrollado una extensa jurisprudencia mediante la cual ha fijado los principios y estándares generales en materia de acceso a la justicia y salvaguarda de las garantías procesales en aras de promover un funcionamiento eficiente y oportuno a nivel del aparato administrativo y judicial[1517] de los países Parte de la CADH. Además, esta obligación se ve especialmente reforzada en relación con los grupos vulnerables[1518], con lo cual se complementa y refuerza la protección de los derechos fundamentales a nivel nacional.

---

retrocesos promovidos a través de litigaciones estratégicas anticlimáticas. Véase la situación en África: C Vinti (15 Feb. 2021) «SLAPP suits as a 'weapon' against environmental activism in South Africa». GNHRE. Recuperado de: https://gnhre.org/?p=12961.

1511. Derecho a la vida, integridad, propiedad, medio ambiente, salud, participación, información, libertad de expresión, solo por citar algunos ejemplos.

1512. Cançado Trindade., A. A (2003), *Ob. cit*. 72 y 73.

1513. CtIDH. Comunidad Moiwana V. Surinam, Fondo, Reparaciones y Costas (Ser. C) No. 124. §164 (15 jun. 2005). El primer caso de pueblos tribales en el que fue invocada la interpretación conjunta de ambos derechos.

1514. Medina, C. (2005), *Ob. cit*. 265-340.; Salmón, E. & Blanco, C. (2012). *El Derecho al Debido Proceso en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos*. Lima: IDEHPUCP., p. 74.

1515. CtIDH. Comunidad Indígena Sawhoyamaxa v. Paraguay, Fondo, Reparaciones y Costas (Ser. C) No. 146, §164 (29 Mar. 2006). Sobre la falta de razonabilidad del plazo para el desarrollo de procedimientos: CtIDH. Comunidad Garífuna Triunfo de la Cruz y sus miembros v. Honduras, Fondo, Reparaciones y Costas. (Ser. C) No. 305 §250-253 (8 oct. 2015).

1516. OC 23/17. §233 y 237.

1517. CtIDH. Baena Ricardo v. Panamá. (Ser. C) No. 72 §124-127 (2 Feb. 2001)., CtIDH. Claude Reyes v. Chile, Fondo, Reparaciones y Costas. (Ser. C) No.151 §119 (19 Sep. 2006).

1518. Bernales., G. (2019) «El acceso a la justicia en el Sistema Interamericano de protección de los derechos humanos». *Ius et Praxis*, 25, (3). Recuperado de: https://bit.ly/2YoXvzD

Lo anterior resulta fundamental pues quiere decir que las garantías mínimas no solo son aplicables de forma genérica al derecho ambiental, además son trasladables a futuras litigaciones climáticas tanto de naturaleza periférica como central. De allí que el acceso a la justicia climática interamericana implica el cumplimiento de esos estándares mínimos fijados por la CtIDH a través de la interpretación realizada sobre el alcance y contenido de los artículos 8 y 25 CADH.

Esto se traduce en que los sujetos afectados, en particular los pueblos indígenas sometidos a un mayor riesgo de afectación climática gocen del acceso efectivo a un órgano competente; independiente e imparcial, cuyo procedimiento sea sustanciado en apego a las normas del debido proceso legal, bien sea en sede judicial o en sede administrativa para recibir la tutela sobre los derechos que puedan verse afectados.

De allí que los Estados interamericanos tienen la obligación de generar las condiciones para brindar justicia material, accesible, efectiva, sin barreras, sencilla y dentro de un plazo razonable[1519] que permitan alcanzar el derecho a la realización de la justicia[1520] ambiental y climática. El objetivo de asegurar el acceso a la justicia ambiental y en particular a la justicia climática a través del sistema interamericano es brindar un remedio subsidiario a las vulneraciones producidas a raíz del incumplimiento de normas, daño ambiental o riesgo de daño[1521]. Se reitera que el acceso a la justicia es esencial pues garantiza la plena realización de los derechos a la participación y a la información, esta vez a través de los mecanismos judiciales correspondientes[1522].

Por último, antes de entrar a abordar el tema de la atribución de responsabilidad en el marco de los derechos humanos afectados por cambio climático, es imperativo recordar que las obligaciones ambientales estatales serían: 1) proteger los derechos humanos frente el riesgo o daño ambiental resultante del cambio climático peligros, y 2) respetar los compromisos internacionales, particularmente la CADH en caso de litigios ante la CtIDH.

En el ámbito interamericano[1523] lo expuesto en párrafo anterior implica: Primero, la obligación de prevenir daños ambientales significativos, la cual incluye el deber de regular, monitorear y fiscalizar las actividades y emisiones generadas en su jurisdicción y que puedan impactar significativamente el medio ambiente. Segundo, la obligación actuar de conformidad con los postulados del principio de precaución[1524]. Tercero, la obligación de cooperar,

1519. CtIDH. Pueblos Kaliña y Lokono v. Surinam, Fondo, Reparaciones y Costas (Ser. C) No. 309. §251 (25 nov. 2015).

1520. Bernales, G. (2019), *ob. cit*.

1521. OC 23-17. §234.

1522. OC 23-17. §234.

1523. OC 23-17. §242.

1524. Con lo cual la CtIDH parece reconocer su obligatoriedad en la escena interamericana.

de buena fe en materia ambiental, donde se incluye el deber de notificación, consulta e información en materia de riesgo o daños transfronterizos. Cuarto, garantizar el acceso a la información sobre asuntos ambientales. Quinto, garantizar el derecho a la participación en un contexto ambiental y sexto, garantizar el acceso a la justicia y debido proceso en materia de medio ambiente.

Determinación de responsabilidad del Estado por la violación de los Derechos Humanos en un contexto climático

Delimitación de la responsabilidad del Estado como consecuencia del impacto climático

El cambio climático como preocupación común de la humanidad[1525], da cuenta del alcance global de la problemática[1526]. Por lo tanto, debería pasar de utilizarse esta denominación simbólica a convertirse en una autentica obligación exigible[1527] a los Estados a través de los mecanismos efectivos de mitigación de riesgos y de cesación de daños.

Los instrumentos del clima permiten crear puentes con otras áreas del derecho, ya que explícitamente reconocen el deber estatal de tomar acciones conducentes al aseguramiento de las obligaciones[1528], particularmente en materia de derechos humanos. Es precisamente este último régimen el que permite incentivar la modulación de la conducta estatal a través de la determinación de responsabilidad internacional cuando los Estados se mues-

---

1525. Preámbulo de la CMNUCC y en el Preámbulo del Acuerdo de París. El concepto de preocupación común de la humanidad fue expuesto por primera vez en relación al clima en: UNGA, on protection of global climate for present and future generations of mankind U.N Doc. /Res/43/53 (6 dic. 1988).

1526. Véase sobre las implicaciones jurídicas de este término a: Brunnée, J. (2017), *Ob. cit*. 21. *«This common concern/responsibility framework provides the normative anchor for the climate regime and accounts for its global scope».*

1527. Boisson-De Chazournes, L., (2021) «Only Once … Upon a Time?. In Crisis Narratives In International Law». En: M. Mbengue. & J. D'Aspremont.) *Crisis Narrative in International Law* (p. 143). Leiden: Brill| Nijhoff. *«The prevailing economic conditions are not the same anymore, scientific and technological knowledge has drastically evolved, political dynamics are much more plural, the protection of the environment has become a "common concern of humankind",13 and international law has gone through the human rights revolution, with all people now under their protection. Words and actions need to be reconciled. Human rights and labour conditions should be reasserted as the primary purposes of the international governance system, together with environmental protection. Managerial approaches, programmes, reforms, or projects cannot constitute in themselves a "raison d'être" for institutions».*

1528. En pocas palabras abordado a través de un enfoque sistémico con un contenido basado también en los derechos humanos. ILC Rep. on the Protection of the Atmosphere., p. 22.

tran reticentes a minimizar los efectos del cambio climático peligros sobre los derechos humanos.

Aunque debe reconocerse que los Estados interamericanos ha incorporado los derechos humanos dentro del marco normativo climático interno e incluso en las proyecciones para la implementación de las Contribuciones Nacionales Determinadas por país[1529], la región sigue enfrentando fuertes desafíos para garantizar el goce efectivo de los derechos humanos con contenido ambiental.

Hasta hace pocos años persistía la visión de limitar la resolución de asuntos ambientales a procedimientos no adversariales con el fin de facilitar el cumplimiento voluntario de los objetivos fijados en acuerdos multilaterales ambientales[1530], este bajo nivel de exigibilidad/obligatoriedad sigue desatando críticas y generando formas alternativas de aproximación a la realidad. Ante los retos que imponen las demandas de una sociedad en crisis surge la ruptura de esquemas tradicionales en aras de acceder a la justicia. Por ello, hoy es posible invocar las normas de responsabilidad internacional del Estado por hechos lícitos[1531] en el marco de las obligaciones de derechos humanos dentro de un contexto climático[1532].

La evolución del derecho forma parte de la adaptación a la realidad contemporánea que exige de los derechos humanos respuestas dinámicas y oportunas. Por ello, han comenzado a florecer peticiones ambientales[1533] y

1529. CEPAL. (2019), *ob. cit*. 43-44. Señalando el caso de Bolivia, Brasil, Chile, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Guyana, Honduras, México, Nicaragua, Uruguay y Venezuela.

1530. Así lo destaca Fernández-Egea, R. M. (2011). «State Responsibility for Environmental Harm, "Revisited" within the Climate Change Regime». En: S. Maljean-Bubois. & Rajamani., L. (eds.). *Implementation of international environmental law*. (pp. 375-418). Leiden: Brill Nijhoff.

1531. En este trabajo se propone una aproximación a la luz del artículo 4 del ARI, por lo tanto distinta al esquema de atribución correspondiente a acciones u omisiones provenientes de una pluralidad de Estados (artículo 47 ARI). Aunque se reconoce que es otra de las vías disponibles para abordar la problemática climática, tal y como lo expone: Bertamini, M. (5 May 2021), *Ob. cit*. Igualmente, se desliga de las formas de atribución de responsabilidad conforme a los artículos Art. 8, 9.10 y 11 ARI.

1532. Wewerinke-Singh., M. (2018), *Ob. cit*..; Boyle, A. (2018), *Ob. cit*. 759-777.; Knox, J. (2009)., *Ob. cit*. 163-218.

1533. Véase la solicitud presentada en 2008 por Ecuador ante la Corte Internacional de Justicia: Memorial of Colombia, Aerial Herbicide Spraying (Ecuador v. Colm.), 2008 ICJ. Pleading (2 jun. 2008), https://bit.ly/3DRoNgG. En el memorial de Ecuador se realiza una interesante articulación en materia de responsabilidad por la vulneración de varios intrumentos de derechos humanos en un contexto ambiental y de pueblos indígenas. Concretamente, Ecuador invocó e la violación del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Convención Americana de Derechos Humanos, Protocolo de San Salvador, Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer y Convención sobre los Derechos del Niño.

climáticas a nivel nacional e internacional. Todas ellas impregnadas por un enfoque sistémico que ha contribuido a reducir la resistencia sobre la utilización de obligaciones enraizadas en dos regímenes separados por barreras imaginarias, articuladas mediante procesos judiciales a su vez activados por las reglas operativas aportadas por el régimen general de responsabilidad[1534].

Al plantearse la litigación climática estratégica en el Sistema Interamericano lo primero que debe considerarse es la vigencia de las obligaciones internacionales que serán invocada ante el incumplimiento del Estado[1535]. Esto como consecuencia del principio *pacta sunt servanda* según el cual los Estados están obligado a cumplir los compromisos pactados de buena fe[1536]. De allí que, para acceder a la supervisión de la CtIDH[1537], se exigirá que el Estado demandado haya ratificado sin restricciones la CADH, además de una declaración expresa del reconocimiento pleno de la competencia de la Corte para conocer de cualquier caso relativo a la interpretación y aplicación de la Convención[1538].

Una vez superados el análisis relativo a la jurisdicción y competencia temporal que puede girar alrededor de las potenciales violaciones de derechos humanos en un contexto climático, se debe proceder a la revisión de las demás cuestiones previas pendientes de resolución, así como de las excep-

---

Todos ellos como consecuencia de la fumigación con químicos tóxicos y sus efectos sobre la población localizada entre el borde fronterizo colombo-ecuatoriano.

1534. Bantekas, I. & Oette., L. (2020), *Ob. cit*. 93. *«The ILC's ARSIWA are regularly referred to by international courts an in state practice and are largely seen as codifying customary international law on the attribution of state responsibility and its consequences».*

1535. Artículo 13 ARI: «Un hecho del Estado no constituye violación de una obligación internacional a menos que el Estado que se halle vinculado por dicha obligación en el momento en que se produce el hecho».

1536. Sobre la expectative de la Buena fe en el ejercicio de la diligencia debida véase: Rajamani, L. (2020), *Ob. cit*..90.

1537. Debe recordarse que las víctimas solo podrán denunciar ante la CIDH a los Estados parte de la Organización de Estados Americanos y de la Declaración Americana, por una parte. Por la otra, a los Estados parte de la CADH.

1538. Artículo 62 CADH. Salvo que se logre establecer la aplicación de la doctrina del *forum prorogatum*. Para algunos Estados cuyas acciones fomentan el *backlash* interamericano, existe un margen razonable de dudas con relación a la determinación de jurisdicción de la CtIDH. Por ejemplo: Venezuela y República Dominicana. Aunque esta forma de atribución nunca ha sido aplicada por la CtIDH y resulta especialmente controvertida. Sobre este punto véase: Contesse, J. (2019), *Ob. cit*. 179-238. Sobre el *forum prorogatum* véase: Yee., S. (2003). «forum prorogatum returns to the International Court of Justice». *Leiden Journal of International Law*, 16, 701-713. Por otra parte véase: Certain questions of mutual assistance in criminal matters (Djib. v. Fr.), Judgment, 2008. ICJ. Rep. §64 (jun. 4).; Application of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide (Bosn. & Herz v. Serb. & Montenegro), Order further requests for the indication of provisional measures, 1993. ICJ. (Sep. 1993) (Separate opinion of Judge *ad hoc* Lauterpacht) 416 §24.; Corfu Channel (U.K v. Alb.), Preliminary objections, 1948 Rep. 27-28. (Mar. 1948).

ciones preliminares que regularmente plantean los Estado[1539], para entrar con éxito al examen del fondo del asunto, y según corresponda su consecuente determinación de responsabilidad internacional por la violación de los derechos conculcados en un contexto climático.

Así las cosas, debe partirse del principio básico según el cual todo hecho internacionalmente ilícito genera responsabilidad[1540]. De allí la necesidad de evaluar cuales son los criterios o elementos que dan lugar a la invocación y posterior atribución de la ilicitud de una conducta del Estado. En este orden, es oportuno referirse al artículo 2 del ARI[1541], norma que identifica los elementos del ilícito internacional, permitiendo exponer cuando el comportamiento del Estado bien sea una acción específica o una omisión[1542] constituyen el quebrantamiento de una obligación internacional. Debe recordarse que la regla de atribución de responsabilidad no solo se sustenta en las vulneraciones nacidas de la relación de causalidad agente/daño, por lo que además es necesario evaluar el comportamiento desplegado por el Estado[1543].

De lo anterior se desprende que existirá incumplimiento de una obligación internacional cuando el comportamiento del Estado no se ajusta a lo exigido por la norma primaria[1544], en este caso el baremo aplicable sería la evaluación de la acción u omisiones a la luz de las reglas contenidas en la CADH, así como por los estándares definidos por la interpretación de la CtIDH sobre los derechos humanos vulnerados en un contexto ambiental, bien sea de forma subyacente o autónoma. En todo caso, cuando el proceder del Estado no resulte compatible con los niveles de diligencia mínimos esperados para

1539. Siendo la cuestión más problemática de superar en materia climática el agotamiento de los recursos internos.

1540. Int'l Law Comm'n. Draft of articles on state responsibility on its Fifty-third Session U.N. Doc. A/56/10 (Apr. 23-Jun. & Jul. 1- Aug. 10). Commentaries article 1. En los comentarios se señala que esta responsabilidad internacional se extiende a los Estados e incluso a otros sujetos de derecho internacional.

1541. Artículo 2 ARI: «Hay hecho internacionalmente ilícito del Estado cuando un comportamiento consistente en una acción u omisión: a) es atribuible al Estado según el hecho internacional; y b) constituye una violación de una obligación internacional del Estado».

1542. A título de ejemplo véanse: Corfu Channel (U.K v. Alb.), Preliminary objections, 1948 Rep. 27-28. (Mar.1948).; Gabcíkovo-Nagymaros Project (Hung. v. Slovk.), Judgment, 1997 ICJ. 76 §133(September 25).

1543. Crawford., J. (2004) *Los artículos de la Comisión de Derecho Internacional sobre la responsabilidad internacional del Estado: Introducción, texto y comentarios*. Madrid: Dykinson., p. 130.

1544. Art. 12: ARI: «Hay violación de una obligación internacional por un Estado cuando un hecho de este Estado no está de conformidad con lo que él exige esta obligación, sea cual fuere el origen o la naturaleza de esa obligación». Véase: Crawford., J. (2004), *Ob. cit*. 168. «[…] la violación de una obligación internacional por un Estado constituye un hecho internacionalmente ilícito, cualquiera sea el objeto o contenido de la obligación violad, y cualquiera que sea la descripción que pueda darse del comportamiento que la incumple».

mitigar el cambio climático que amenaza los derechos humanos, es altamente probable que se esté ante el incumplimiento de las obligaciones de proteger y garantizar.

En relación a la invocación de justicia frente al comportamiento del Estado ante la CtIDH, los individuos o colectivos que vean afectados directamente sus intereses[1545] tiene el derecho a exigir el cese de la violación y el restablecimiento de la situación jurídica infringida, para lo cual pueden invocar la vulneración del artículo 1.1 CADH relativo a la obligación respetar y garantizar los derechos y libertades convencionales; así como el artículo 2 CADH, el cual impone la obligación de adoptar disposiciones de derecho interno de tipo legislativo, administrativo, judicial o de cualquier otra índole para hacer efectivo el contenido del tratado interamericano[1546].

El menoscabo de derechos instrumentales y sustantivos se hace exigible ante el incumplimiento de las obligaciones de respeto y garantía[1547], así como el deber de adecuación del derecho interno. Por lo cual, las obligaciones generales de los artículos 1.1 y 2 CADH no pueden entenderse disociadas de las vulneraciones concretas de derechos humanos, ya que la infracción de una va directamente conectada con las vulneraciones de la otra[1548]. Puntualmente, a través de estas líneas se pretende demostrar la potencialidad de la invocación de responsabilidad climática a la luz de la afectación del derecho a la propiedad colectiva (artículo 21), del derecho a un medio ambiente sano (artículo 26), del derecho a la información (artículo 13), del derecho a la participación y consulta (artículo 23.1.a), así como de los derechos al acceso a la justicia y debido proceso (artículo 8 y 25 CADH), en relación con las obligaciones generales contenidas en los artículos 1.1 y 2 CADH[1549].

1545. La Corte además debe realizar un análisis de la competencia *ratione personae*, *ratione materiae* y *ratione locit*.

1546. Cuando ha operado con plenitud el principio de subsidiariedad del Sistema Interamericano. Pues la CtIDH no puede actuar como un tribunal de cuarta instancia salvo el supuesto excepcionalísimo de vulneración del debido proceso en decisiones judiciales concretas.

1547. Sobre la obligación de garantía con relación al Sistema Interamericano y africano: Bodansky, D. (2010). «Climate change and human rights: unpacking issues». *Georgia Journal of International and Comparative Law*, 38(3), 520. *«[…] a negative duty not to engage in actions that adversely affect the enjoyment of a human right – the duty to protect is a positive duty that potentially requires states to prevent non-governmental actors from infringing on human rights as well as to alleviate the harm».*

1548. Faúndez., H (2004), *Ob. cit*. 75.

1549. En esta misma línea se pronunció: CEPAL. (2019), *Ob. cit*. 13. Al señalar que: los Estados «deben adoptar y aplicar marcos jurídicos e institucionales para proteger a las personas de los daños ambientales que interfieran o puedan interferir en el disfrute de los derechos humanos. En el plano nacional, cada Estado está en la obligación de proteger a quienes se encuentran en su territorio y bajo su jurisdicción de los efectos perjudiciales del cambio climático».

Por otra parte, es esencial mencionar la invocación de responsabilidad internacional del Estado a la luz de la doctrina del control de convencionalidad[1550] en dos niveles[1551]. El primero, en la dimensión internacional, supervisión que realizará la CtIDH para valorar la compatibilidad de las normas en todos los grados, incluida la constitución con la CADH, conocida como de tipo concentrado o externo[1552]. El segundo, es el examen sobre la actuación de los órganos del Estado[1553] para hacer compatible sus normas en el plano interno con la Convención. Esta supervisión del control difuso[1554] se enfoca en la labor de los jueces, tribunales nacionales e incluso puede llegar a ampliarse hasta los diferentes órganos de la administración quienes actuando en la esfera de sus competencias tienen la obligación de modular el comportamiento del Estado a los parámetros interamericano so pena de quebrantar la CADH.

De esta manera y con relación al cambio climático, los órganos nacionales son quienes tienen la obligación de revisar y compatibilizar las disposiciones del ordenamiento jurídico interno tanto con la Convención como con la interpretación que haya brindado la CtIDH sobre esos derechos humanos con contenido ambiental. De allí que a la luz del control difuso de convencionalidad los Estados deben adecuar la normativa interna hasta hacerla acorde con los estándares ambientales mínimos fijados[1555] y actuar conforme a esos parámetros. De lo contrario se demuestra una complementariedad negativa del Estado dando lugar a una o varias vulneraciones de

1550. Sobre la doctrina del control de convencionalidad véanse: CtIDH. Myrna Mack Chang v. Guatemala, Fondo, Reparaciones y Costas (Ser. C) No. 101. (15 nov. 2003) (Voto concurrente del Juez Sergio García Ramírez) §27.; CtIDH. Tibi v. Ecuador, Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas (Ser. C) No.114 (7 Sep. 2004) (Voto concurrente del Juez Sergio García Ramírez) §2-3.; CtIDH. Almonacid Arellano y otros v. Chile. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas (Ser. C) No. 154 §124 (26 sep. 2006).; CtIDH. Gelman v. Uruguay, Supervisión de Cumplimiento de Sentencia (Ser. C) (20 Mar. 2013). Considerando 65-90.

1551. Mac-Gregor, E. F. (2016). *Ob. cit*. 337.

1552. Véase: Brewer-Carías, A. & Santofimio, J. (2013) Control de convencionalidad y responsabilidad del Estado. Bogotá: Universidad Externado de Colombia.

1553. Véase: CtIDH. Lemoth Morris v. Honduras, Fondo (Ser. C) No. 432. §45 (31 ago. 2021).; CtIDH. López Mendoza v. Venezuela, Fondo, Reparaciones y Costas (Ser. C) No. 233 §227 (1 Sep. 2011). Donde la Corte destaca la aplicación de la doctrina del control de convencionalidad por parte de «la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica, el Tribunal Constitucional de Bolivia, la Suprema Corte de Justicia de República Dominicana, el Tribunal Constitucional del Perú, la Corte Suprema de Justicia de la Nación de Argentina y la Corte Constitucional de Colombia».

1554. Debe recordarse que el control de convencionalidad difuso opera de forma diferente en cada Estado.

1555. CtIDH, Boyce v. Barbados, Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. (Ser. C) No. 169 §78 y 79. (20 nov.2007).

los derechos humanos[1556] y en consecuencia podrá ser posible invocar la responsabilidad internacional[1557].

El fenómeno del cambio climático peligroso en sí mismo representa un problema ambiental continuado y difuso que deja una estela de daños a lo largo y ancho del planeta a distintas escalas temporales. Invocar la responsabilidad pasa por analizar si el Estado ha desplegado el «máximo de los esfuerzos disponible»[1558] con el propósito de atenuar el riesgo de daño sobre los derechos humanos. Como obligación de conducta envuelve la utilización esos medios disponibles[1559] e incluso puede ser vulnerada cuando el daño ambiental no se ha materializado, pues la ocurrencia de este no es una precondición para que se infrinja el deber internacional de prevenir[1560], ya que la prevención no implica la desaparición completa del riesgo.

Lo anteriormente expuesto está sustentado en los comentarios sobre los Artículos de Responsabilidad del Estados por Hechos Internacionalmente Ilícitos donde se distinguen una serie de supuestos que permiten identificar la duración temporal de la violación con relación a la obligación de prevención. Esta última, representan el centro neurálgico de los deberes básicos impuestos a los Estados en materia ambiental, y el propio comentario señala que las mismas son concebidas «como obligaciones de realizar máximos esfuerzos»[1561], por lo que la falta de prevención puede ser perfectamente catalogada como un hecho ilícito de carácter continuado.

Por ello, las vulneraciones de las obligaciones de la Convención a causa de la amenaza climática tienden a ser también de naturaleza preventiva, aunque no se traduzcan en la desaparición definitiva del riesgo. Será el comportamiento específico desplegado por cada Estado (prevención/mitigación), el

1556. Mac-Gregor, E. F. (2016), *Ob. cit*. 337.

1557. Como lo hizo la Corte en: CtIDH. CtIDH. López Mendoza v. Venezuela, Fondo, Reparaciones y Costas (Ser. C) No. 233 §226 y 228 (1 Sep. 2011).

1558. ACNUDH. (2021), *Ob. cit*. 38. La Oficina del Alto Comisionado identifica como parte de las obligaciones estatales incluye el «movilizar el máximo de los recursos disponibles para un desarrollo sostenible y basado en los derechos humanos […] No adoptar las medidas razonables necesarias para movilizar los recursos disponibles a fin de prevenir los daños previsibles a los derechos humanos causados por el cambio climático constituye un incumplimiento de esta obligación». Véase igualmente: CIDH. «Emergencia climática alcance de las obligaciones interamericanas en materia de derechos humanos», CIDH Doc. 3/21 (31 dic. 2021), 15 §15.

1559. Pulp Mills on the River Uruguay (Arg. v. Uru.), Judgment, 2010, ICJ. 58 § 101 (April 2010).

1560. Véase haciendo referencia a la postura adoptada por la ICJ sobre obligaciones de comportamiento en el caso sobre el genocidio de Bosnia a: Brunnée, J. (2020), *Ob. cit*. 155.-156 *«the duty to prevent genocide is an obligation of conduct, triggered by risk, then the occurrence of genocide could not be a precondition for the violation of the duty. Rather, a State should be held responsible for its failure to take appropriate preventive measures 'even if the event was averted».*

1561. Véase en relación con el carácter continuado a Crawford., J. (2004), *Ob. cit*. 180.

que determinará la duración cierta y la gravedad de estas. En todo caso, los presuntos incumplimientos presentados por las víctimas y la CIDH deberán ser evaluados a la luz los hechos compuestos que conduzcan a demostrar o no la efectiva transgresión de los derechos durante el período de vigencia de la Convención.

El artículo 14.3 ARI[1562] ayuda a dibujar el alcance de la obligación climática de prevención desde el régimen general de responsabilidad. Además, como se ha expuesto en los párrafos precedente en el Sistema Interamericano existe una obligación general de garantía, la CtIDH en sus interpretaciones exige el despliegue de una actividad preventiva frente a los daños ambientales en casos de amenaza a la propiedad indígena y en relación con los derechos a un medio ambiente sano y a la cultura. De allí que la falta absoluta de mitigación del riesgo climático sobre estos derechos humanos constituye una violación de la obligación de prevención.

Es por lo que, la evaluación de diligencia del Estado debe ser consistente con la protección de los derechos humanos [1563] a través de la adopción y búsqueda de la aplicación efectiva de medidas de mitigación frente al cambio climático con el fin de evitar en lo posible el daño, incluso aquel derivado de actividades provenientes de terceros. Las fórmulas de evaluación del riesgo incluyen no solo la adopción de medidas, sino su exigibilidad[1564] en las relaciones interindividuales[1565]. De lo contrario será considerado incumplido el deber

1562. Artículo 14.3 ARI: «La violación de una obligación internacional en virtud de la cual el Estado debe prevenir un acontecimiento determinado tiene lugar cuando se produce el acontecimiento y se extiende durante todo el período en el cual ese acontecimiento continúa y se mantienen su falta de conformidad con esa obligación».

1563. Baade., B. (2020). «Due diligence and the duty to protect human rights». En H., Krieger. A., Peters. A. & L., Kreuzer. (eds.), *Due Diligence in the International Legal Order* (p. 92). Oxford: Oxford University Press. *«In human rigths law. The term 'due diligence' is used to describe the standard of conduct necessary to comply with a duty to protect. While it is often highlighted as a tool that allows to oblige states to protect human rights against conduct not directly attributable to them».*

1564. Viñuales., J. (2020). «Due diligence in International Environmental Law. A fine-grained cartography». En H., Krieger. A., Peters. A. & L., Kreuzer. (eds.), *Due Diligence in the International Legal Order* (p. 124). Oxford: Oxford University Press. El autor señala *«more that the mere adoption of measures is required: states must proactively seek to enforce the measures. Thus parameter could be conceptually clarify by reference to three stages: adoption of measures; the enforcement of the measures; and the occurrence of the negative outcome. The outer boundary of the duty is located between the second and the third stages».*

1565. Efecto conocido como la eficacia horizontal de los derechos humanos interprivatos o *Drittwirkung der Grundrechte.* Al respecto entre otros, vid: Pérez-Luño., A. (2003), *Ob. cit*. 93-94. Véase igualmente: Canaris, C. W. (2006). *Dereitos Fundamentais e Dereito Privado.* Coimbra: Almedina. Knox, J. H. (2008). «Horizontal Human Rights Law», *American Journal of International Law*, 102(1), 1-47. Así como los pronunciamientos de la Corte con relación al tema: CtIDH. Lemoth Morris v. Honduras, Fondo (Ser. C) No. 432. §44 (31 ago. 2021).; La condición jurídica de los migrantes indocumentados OC 18-03 (Ser. A) No. 18, § 140 y 146. (7 Sep. 2003), solo por mencionar dos casos emblemáticos.

de garantía en el marco de una violación continuada, por lo menos en lo que se refiere al derecho a un medioambiente sano, a la cultura y a la propiedad.

Si se mira hacia el pasado, esta aproximación encuentra respaldo en el ejemplo clásico del arbitraje del *Trail Smelter case*[1566], donde la violación no solo persistió, sino que se agravó debido a la emisión continuada de humos[1567], es decir, cuando el Estado no es capaz de adoptar las medidas mínimas necesarias tendientes a prevenir la continuidad del daño o por lo menos conducentes a reducir el riesgo[1568]. Situación aplicable *mutatis muntandis* a la extensión de la violación que produce la falta de incorporación de la contención climática oportuna[1569] frente a los efectos internos y trasfronterizos[1570] del fenómeno climático peligroso sobre los derechos humanos[1571].

Aclarado lo anterior, ahora corresponde plantearse como puede invocarse la responsabilidad del Estado con relación a las obligaciones de naturaleza instrumental o procesal, particularmente debido a que dependiendo del área del derecho y del tratado en el que se localicen, las mismas pueden ser tratadas como obligaciones de diligencia debida o como de resultado[1572], cambiando el patrón para reclamar y por ende establecer la responsabilidad Estado.

1566. TriaTrial Smelter (U.S v. Can) 3 R.I.A.A. 1907-1965 (1941), t

1567. Crawford., J. (2004), *Ob. cit*. 180. «[…] la violación únicamente continúa si el Estado se haya vinculado por la obligación durante el período en que el acontecimiento continúa y se mantiene su falta de conformidad con esa obligación. Por ejemplo, la obligación de prevenir que se produzca un daño transfronterizo a causa de la contaminación atmosférica, en que se basó el arbitraje relativo a la *Fundición Trail* fue violada en tanto continuó la emisión de contaminantes. De hecho, en estos casos la contaminación puede verse agravada progresivamente al no ponerle fin».

1568. De allí que la persistencia de la contaminación atmosférica fue considerada como un quebrantamiento continuado de la obligación de no causar daño a otro Estado.

1569. Baade., B (2020), *Ob. cit*. 93. El autor señala que el deber de protección *«was also extended to infringements caused by natural hazards (section 2.1.3). This duty may require preventive and reacted actions by the states: they must safeguard the human rights in question by preventive harm in first place, and take remedial actions if harm nonetheless occurs».*

1570. Sobre la obligación general de prevenir el daño ambiental por actividades realizadas dentro de la jurisdicción de los Estados véase: Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons, Advisory Opinion, 1996 ICJ. 244, §29. (July 8).; Gabcíkovo-Nagymaros Project (Hung. v. Slovk.), Judgment, 1997 ICJ. §53(September 25).; Pulp Mills on the River Uruguay (Arg. v. Uru.), Judgment, 2010, ICJ. §193 (April 2010).; Iron Rhine Railway (Belg. v. Neth.) (Perm. Ct. Arb. May. 2005) §59, https://bit.ly/3GCBNIQ.

1571. Véase: CtIDH. OC 23-17. §125. La Corte señala entre las obligaciones estatales que debe adoptar los estados para garantizar los derechos humanos a la vida e integridad física frente al riesgo de daño ambiental: «(A) la obligación de prevención; (B) el principio de precaución; (C) la obligación de cooperación, y (D) las obligaciones procedimentales en materia de protección del medio ambiente».

1572. Krieger. H. & Peters. A. (2020). «Due diligence and structural change in the international legal order». En: H. Krieger. A., Peters. A. & L., Kreuzer. (eds.), *Due Diligence in the International Legal Order* (p. 363). Oxford: Oxford University Press. *«In multilateral environmen-*

En lo que respecta a las obligaciones de consulta informada y de realización de la evaluación de impacto ambiental integradas dentro de las periferias ambientales del derecho a la propiedad colectiva reconocido en el artículo 21 CADH, ambas se complementan entre si como obligaciones de resultado y de diligencia, respectivamente. La CtIDH de forma continuada se ha referido estas obligaciones como métodos para garantiza la consulta y participación real, así como parte integrante del deber de respeto del derecho a la identidad cultural[1573] de los pueblos en el marco de las vulneraciones del derecho de propiedad colectiva[1574].

Aunque la Corte también ha señalado que la falta de realización de la consulta es un tipo de vulneración del derecho de propiedad, es decir como obligación de resultado que se consuma con la formulación o no de la consulta, debe considerarse al balancear la ecuación que el Tribunal además valora el proceso bajo el cual se efectúa la misma. Así, la CtIDH examina que se haya realizado de buena fe, la intención de alcanzar acuerdos, si ha sido adecuada, si es accesible conforme a las costumbres y tradiciones de los pueblos, así como el hecho de que haya sido realizada directamente por el Estado antes del inicio del proyecto causante de la perturbación en el territorio.

Como se puede apreciar la garantía del derecho a la participación y consulta es parte de jurisprudencia pacífica del Tribunal Interamericano[1575]; en consecuencia, es una de las obligaciones que los Estados tienen frente a las comunidades indígenas y tribales cuando en sus territorios se plantea la realización de planes y proyectos de inversión[1576]. El deber de consulta activa

tal agreements, substantive due diligence obligations coupled with specifically enumerated procedural obligations allow long term regimes to continuously evolve».

1573. Reconocido en el artículo 26 CADH despues de: CtIDH. Asociación Lhaka Honhat v. Argentina, Fondo, Reparaciones y Costas (Ser. C) No 400. (6 Feb. 2020). El derecho a la identidad cultural tiene también forma autónoma.

1574. CtIDH. Pueblo Saramaka v. Surinam, Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas (Ser. C) No. 120 y 122 §133 (28 nov. 2007).; CtIDH. Pueblo Indígena Kichwa de Sarayaku v. Ecuador, Fondo, Reparaciones y Costas (Ser. C) No. 245 §166 (27, jun. 2012).; Comunidad Garífuna de Punta Piedra y sus miembros v. Honduras, Fondo, Reparaciones y Costas (Ser. C)No. 304 §216 (8 oct. 2015).; CtIDH. Comunidad Garífuna Triunfo de la Cruz y sus Miembros v. Honduras. Excepciones Preliminares Fondo, Reparaciones y Costas (Ser. C) No. 305 §162 (08 oct. 2015).; CtIDH. OC 23-17. §223.

1575. CIDH. *Pueblos indígenas comunidades afrodescendientes industrias extractivas* CIDH Doc. 47/15 §82-114 (31 dic. 2015). Dentro de la garantía del derecho a la participación se incluye: consulta, consentimiento previo, libre e informado, así como la realización de la EIA/ social y el derecho de participación en los beneficios resultantes del proyecto. Igualmente, la CtIDH ha establecido que los Estados están obligados a respetar y garantizar los derechos sin discriminación, a adecuar la normativa interna y establecer medios de protección especiales para niños y ancianos indígenas.

1576. Desde CtIDH. Pueblo Saramaka v. Surinam, Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas (Ser. C) No. 120 y 122 §133 (28 nov. 2007).; CtIDH. Pueblo Indígena Kichwa de Sarayaku v. Ecuador, Fondo, Reparaciones y Costas (Ser. C) No. 245 §201 (27, jun. 2012).;

intrínsecamente incluye el derecho a la participación y al acceso a la información sobre el impacto ambiental y climático en la explotación de los recursos naturales localizados en tierras ancestrales.

El fomento de la información climática es esencial dentro de los procesos de consulta de los pueblos, para que sean ellos como depositarios de la protección del territorio quienes puedan consolidar la salvaguarda de los derechos humanos en un contexto climático. El derecho a la participación consulta e información[1577] de buena fe hacia los pueblos asegura el cumplimiento de las obligaciones ambientales y de derecho indígenas reconocidos en el marco de las garantías convencionales.

Esta conjugación permite crear un puente entre las obligaciones de naturaleza sustantivas e instrumentales que fortalecen la interdependencia e indivisibilidad de todos los derechos reconocidos en la CADH antes del inicio de cualquier proyecto de exploración y explotación en un territorio ancestral que pueda afectar su supervivencia[1578] física y cultural. Los estándares interamericanos sobre participación y acceso a la información climática pueden nutrirse a través del Acuerdo de Escazú cuando el Estado demandado lo haya ratificado.

De allí que las comunidades indígenas y tribales se les debe proporcionar información climática y en caso de negativa por parte de las autoridades estatales están en el derecho de exigirla por vía regional. Solo a título ejemplificativo el tipo de información que el Estado debería proporcionar a los pueblos indígenas y tribales debería incluir: las fuentes relativas a las emisiones de gases de efecto invernadero dentro de sus territorios, si no existen datos acordar mecanismos que permitan determinarlas como parte de la evaluación de impacto ambiental[1579].

Por otra parte, las comunidades también deben ser incluidas en la formulación de planes de contención del riesgo climático en las zonas donde pretenda implementarse la actividad, pues tienen tanto la propiedad colectiva sobre el territorio como la propiedad intelectual sobre los patrones de uso

1577. Véase: Memorial of Colombia, Aerial Herbicide Spraying (Ecuador v. Colm.), 2008 ICJ. Pleading §9103-9107 (2 jun. 2008), https://bit.ly/30qnfww. El Estado demandante articuló la vulneración del derecho a la información partiendo de la premisa según la cual Colombia había fallado en su obligación de proveer información adecuada en el marco de las fumigaciones, además del quebrantamiento de la obligación de realizar una consulta adecuada con las comunidades indígenas afectadas.

1578. CtIDH. OC 23-17. §223.; CtIDH. Comunidad Garífuna Triunfo de la Cruz y sus Miembros v. Honduras. Excepciones Preliminares Fondo, Reparaciones y Costas (Ser. C) No. 305 §160 (08 Oct. 2015).; CtIDH. OC 23-17. §223.

1579. Comunidad Garífuna de Punta Piedra y sus miembros v. Honduras, Fondo, Reparaciones y Costas (Ser. C) No. 304 §215 (8 oct. 2015). «i) efectuar un proceso adecuado y participativo que garantice su derecho a la consulta; ii) realizar un estudio previo de impacto ambiental y social; y iii) en su caso, compartir razonablemente los beneficios que se produzcan de la explotación de los recursos naturales».

del suelo, conocimientos culturales y tradiciones[1580] que contribuyen a una gobernanza[1581] integrada de los sumideros naturales de carbono que requieren especial protección para asegurar los derechos humanos de las pobladores locales frente al cambio climático.

Igualmente, pueden supeditar el otorgamiento del consentimiento en el marco de los procesos de consulta a mecanismos de vigilancia y fiscalización que permita suspender la autorización conforme a la información disponible. Esto con el fin de prevenir mayores daños o incluso ante el riesgo incierto que puede desprenderse de la realización de megaproyectos en las áreas que corresponden a la propiedad indígena.

Además, debe recordarse, que estos derechos deben ser garantizados mediante procedimiento culturalmente adecuados para las comunidades de que se trate, es decir que la consulta previa no se cumple con la mera formulación de asambleas[1582], las mismas deben llevarse a cabo a través de mecanismos culturales efectivos que allanen el camino para un acuerdo equitativo entre las comunidades, el Estado y los realizadores de la actividad en el territorio[1583].

De lo anterior se desprende la imposibilidad de encasillar en una sola categoría a las obligaciones instrumentales de derechos humanos en un contexto ambiental nacidas de la CADH. Sin embargo, esta falta de precisión también se ha manifestado en el campo del derecho ambiental internacional, siendo una muestra de ello el *Pulp Mills Case*[1584], en el que se aprecia un tipo de inconsistencia similar, al calificar la evaluación de impacto ambiental como

1580. FAO/FILAC. (2021), *Ob. cit*. 34-38.

1581. IPCC (2019), *Ob. cit*. *«The effectiveness of decision-making and governance is enhanced by the involvement of local stakeholders (particularly those most vulnerable to climate change including indigenous peoples and local communities, women, and the poor and marginalised) in the selection, evaluation, implementation and monitoring of policy instruments for land-based climate change adaptation and mitigation (high confidence)».*

1582. CtIDH. Pueblo Indígena Kichwa de Sarayaku v. Ecuador, Fondo, Reparaciones y Costas (Ser. C) No. 245 §166 (27, jun. 2012). «Esto implica el deber de organizar adecuadamente todo el aparato gubernamental y, en general, de todas las estructuras a través de las cuales se manifiesta el ejercicio del poder público, de manera tal que sean capaces de asegurar jurídicamente el libre y pleno ejercicio de los derechos. Lo anterior conlleva la obligación de estructurar sus normas e instituciones de tal forma que la consulta a comunidades indígenas, autóctonas, nativas o tribales pueda llevarse a cabo efectivamente, de conformidad con los estándares internacionales en la materia. De este modo, los Estados deben incorporar esos estándares dentro de los procesos de consulta previa, a modo de generar canales de diálogos sostenidos, efectivos y confiables con los pueblos indígenas en los procedimientos de consulta y participación a través de sus instituciones representativas».

1583. CtIDH. Pueblo Indígena Kichwa de Sarayaku v. Ecuador, Fondo, Reparaciones y Costas (Ser. C) No. 245 §177 (27, jun. 2012).

1584. Pulp Mills on the River Uruguay (Arg. v. Uru.), Judgment, 2010, ICJ. §204 (April 2010).

una obligación que permite determinar el riesgo y por lo tanto cumplir con el deber de diligencia, a la par que se le identifica como un requerimiento obligatorio proveniente de una norma de derecho internacional general[1585].

Lo interesante, es mantener presente como lo señala la Corte Internacional de Justicia que la satisfacción de las obligaciones sustantivas no implica el cumplimiento *per se* de las obligaciones de procedimiento, o que al cumplir con las primeras el Estado esté eximido de ejecutar las segundas, ya que el vínculo también se rompe con el incumplimiento de las obligaciones procesales incluso cuando se abandona el desarrollo de la actividad que da lugar a la disputa[1586].

En todo caso, al examinar en detalle la conducta estatal a luz del derecho internacional en general, pero especialmente a través del cristal interamericano definido por la Corte, tanto las obligaciones de resultado como las de conducta son parte del deber de prevención que debe integrar el comportamiento estatal diligente[1587]. Esto a los fines de determinar si se ha infringido o no del derecho el derecho de propiedad.

En todo caso, cuando se suma el impacto climático a la vulneración de la propiedad colectiva indígena, deberán complementarse los estándares interamericanos con los esquemas colectivos de comportamiento que se desprenden de la CMNUCC y el Acuerdo de París. Puntualmente, deberá analizarse el contenido de las comunicaciones nacionales, así como las contribuciones nacionales determinadas reportadas, el acatamiento de las guías de procedimiento y el monitoreo del cumplimiento de los compromisos voluntarios[1588], en relación con el ámbito territorial indígena o tribal que haya motivado la supervisión de la Corte.

1585. Krieger,. H. & Peters., A. (2020), *Ob. cit*. 364. Haciendo referencia al Pulp Mills Case.; En este mismo sentido: Brunnée, J. (2017). «International environmental law and community interests: Procedural aspects». En: *Benvenisti., E & Nolte., G. Community Obligations in International Law*., p. 9. Con relación a la vulneración de la obligación de prevención planteada por Argentina la autora señala que: *«The Court's decision is ambiguous to the extent that its comments on this point focused on the interpretation of the treaty between the parties while, elsewhere in the judgment, it clearly connected procedural duties and due diligence».*

1586. Pulp Mills on the River Uruguay (Arg. v. Uru.), Judgment, 2010, ICJ. §78 (April 2010). *«Likewise, the fact that the parties have complied with their substantive obligations does not mean that they are deemed to have complied ipso facto with their procedural obligations or are excused from doing so. Moreover, the link between these two categories of obligations can also be broken, in fact, when a party which has not complied with its procedural obligations subsequently abandons the implementation of its planned activity».*

1587. Brunnée, J. (2017), *Ob. cit*. 5. *«[…] the standard of due diligence that is at the core of the harm prevention obligation in customary law. The due diligence standard, in turn, has emerged as a potential bridge between harm prevention and the duty to take precautionary measures, including to avert harm to the global commons».*

1588. Brunnée, J. (2017), *Ob. cit*. 26.

De esta manera, se procede al análisis de la falta de diligencia debida[1589] como un hecho compuesto frente a los derechos humanos afectados por el cambio climático peligroso. El cambio climático como evento que coloca al filo del abismo a los derechos humanos es producto de acciones insuficiente y/o omisiones que exacerban el riesgo[1590] de daño sobre los derechos de las personas y el medioambiente por su valor propio. Variadas son las aproximaciones que se plantean desde la doctrina e inspiran la práctica litigiosa.

En este orden de ideas, la doctrina ha propuesto la determinación de responsabilidad como una violación directa del régimen del clima, específicamente para los países atados a los compromisos definidos por el Anexo I de la CMNUCC y el Protocolo de Kioto[1591]. Sin embargo, a los efectos de invocar la responsabilidad internacional aquí se plantea acudir a la CADH, pues es el tratado derecho humanos que da competencia a la CtIDH.

En este sentido la invocación de responsabilidad se realizaría en dos (2) pasos: Primero, establecer cual norma de la CADH ha sido quebrantada y la duración de la violación. Segundo, se nutre el alcance y contenido del derecho convencional conculcado con los instrumentos que integran el *corpus iuris* ambiental interamericano, entre ellos la normativa marco de diligencia debida establecida en la CMNUCC y el Acuerdo de París. Todo ello, con el fin de determinar el nivel de diligencia empleado por el Estado en relación con las violaciones de derechos humanos causadas por el cambio climático.

Debe considerarse que el cumplimiento eficiente de los compromisos de protección de derechos fundamentales en el marco de la amenaza climática implica el despliegue del máximo esfuerzo o por lo menos la aplicación de acciones significativas [1592], entre ellas: la entrega oportuna de las

1589. Sobre la diligencia debida en materia de cambio climático véase: Rajamani, L. (2020). «Due diligence in international climate change law». En: H., Krieger. A., Peters. A. & L., Kreuzer. (eds.), *Due Diligence in the International Legal Order* (p. 164). Oxford: Oxford University Press. *«In the context of international climate change law due diligence depending on the specific treaty provision from which emerge could be a normative expectation, an obligation or a standard. […] Thus, for instance, the Paris Rulebook elaborates the Paris Agreement's procedural obligations and obligations of conduct, from which the normative expectation of due diligence emerges, and in so doing contributes toward a due diligence standard for states».*

1590. Beck, U. & Hartmunt. R. (2022). «Escalating side effects the transformation of modern society through processes of cosmopolitanization, acceleration and increasing global risk». En: B., Bornemann., H., Knappe., P. Nanz (eds.) *The Routledge Handbook of Democracy and Sustainability* (160-161). Nueva York: Routledge.; Beck, U. (1997). «La teoría de la sociedad del riesgo reformulada». F. Robles (trad.) *Revista Polis México*, 1(1), 171-196.

1591. Véase el interesante planteamiento de Fernández Egea, R. M. (2011), *ob. cit*. 397. La autora además señala que el marco temporal establecido por el anexo ayudaría a establecer la duración del ilícito.

1592. A título orientativo, véanse las obligaciones identificadas por la Comisión Interamericana: CIDH. «Emergencia climática alcance de las obligaciones interamericanas en materia de derechos humanos», CIDH Doc. 3/21 (31 dic. 2021), 11-24.

comunicaciones, la presentación de las NDC, la incorporación de medidas de mitigación en el ordenamiento interno, el seguimiento y exigibilidad de su cumplimiento, el acceso a la información y la consulta, el acceso a la justicia climática.

Asimismo, resulta crucial mencionar la supervisión de las empresas, el diseño de planes fiscales, la movilización de recursos económicos y humanos, la cooperación internacional para obtener mayor capacidad financiera, el avance en el diseño e implementación de programas climáticos efectivos, el cumplimiento de los principios de progresividad y no regresión en relación con los avances alcanzados en materia de protección climática, entre otra extensa lista de obligaciones.

A lo anterior deben sumarse los indicadores de progreso para la medición de los derechos consagrados en el Protocolo de San Salvador, debidamente aprobados por los Estados Miembro de la OEA en 2015[1593]. Además, de los estándares Interamericanos sobre Empresas y Derechos Humanos[1594], así como sobre la libre determinación de los pueblos en su dimensión ambiental[1595], sus tierras y recursos naturales[1596], entre otros que correspondan.

La ejecución cabal de las medidas anteriores son indicios que permiten identificar un umbral mínimo de comportamiento esperado de los Estados para contribuir diligentemente a la meta global de anclaje de la temperatura de la Tierra a 1.5 C y por debajo de 2 C a niveles preindustriales y, por ende, suma a la protección de los derechos fundamentales. Sin embargo, estas son obligaciones de medio, de allí que se espera de los Estados la aplicación de sus máximos esfuerzos (conducta razonable) para prevenir el daño.

Es simplemente el cumplimiento de las obligaciones de garantías, cuyos estándares se encuentran repartidos en los aportes jurisprudenciales de la CtIDH en materia de protección autónoma y subyacente del medio ambiente, especialmente frente a grupos vulnerables. En los próximos meses será determinante la interpretación de la Corte sobre las obligaciones derivadas de la emergencia climática[1597].

1593. OEA/ GTPSS. (2015) *Indicadores de progreso para la medición de derechos contemplados en el Protocolo de San Salvador*. Washington, D.C: OEA.

1594. *Empresas y Derechos Humanos: Estándares Interamericanos*. Doc. OEA /Ser.L/V/II. | CIDH/ REDESCA INFO 1/19. 1 nov. 2019

1595. Derecho a la libre determinación de los pueblos indígenas y tribales. Doc OEA /Ser.L/V/II 413/21. 28 dic. 2021.

1596. Derechos de los pueblos indígenas y tribales sobre sus tierras ancestrales y recursos naturales. Normas y jurisprudencia del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Doc. OEA 56/09 OEA/Ser.L/V/II. 30 dic. 2009.

1597. Se espera que a finales de 2024 o principio de 2025 la CtIDH emita su pronunciamiento sobre la solicitud de opinión consultiva sobre cambio climático formulada por Chile y Colombia en enero de 2023.

Aunque esto no es una tarea sencilla, el enfoque es posible a través de la salvaguarda que el Estado debe proporcionar frente al riesgo climático[1598]. Ciertamente, dentro del Sistema Interamericano el epicentro del litigio climático seguirá siendo los derechos fundamentales, pero el riesgo solo puede ser minimizado a través de las medidas anticipatorias de naturaleza ambiental. Por ello, en este análisis se requiere una especial mención a los Artículos, ahora Principios sobre la Prevención de Daños Transfronterizos por Actividades Peligrosas de la Comisión de Derecho Internacional[1599] (CDI).

El mencionado trabajo de la CDI[1600] ilumina el camino de la determinación de responsabilidad pues es un régimen que opera armoniosamente al lado del sistema general de responsabilidad[1601] que a su vez informa el funciona-

1598. HRC, Report of the Office of the United Nations High Commission for Human Rights on the Relationship between Climate Change and Human Rights, UN Doc. A/HRC/10/61 (Jan. 15, 2009). *«The physical impacts of global warming cannot easily be classified as human rights violations, not least because climate change-related harm often cannot clearly be attributed to acts or omissions of specific States. Yet, addressing that harm remains a critical human rights concern and obligation under international law. Hence, legal protection remains relevant as a safeguard against climate change-related risks and infringements of human rights resulting from policies and measures taken at the national level to address climate change».*

1599. Originalmente presentados como artículos en el Informe de la Comisión de Derecho Int'l Law Comm'n. Draft of articles on prevention of transboundary harm from hazardous activities with commentaries on its Fifty-third Session U.N. Doc. A/56/10 (Apr. 23-Jun.1 & Jul. 1- Aug. 10). Véase el artículo 3 «El Estado de origen adoptará todas las medidas apropiadas para prevenir un daño transfronterizo sensible o, en todo caso, minimizar el riesgo de causarlo». Véase: Shelton, D. (2015). «Reparations». En: R. Wölfrum (ed.) *The Max Planck Encyclopedia of International Law*. Oxford: Oxford University Press. Recuperado de: https://bit.ly/3umFNsB. La autora señala que: *«In May 2006, the ILC adopted the Draft Principles on the Allocation of Loss in the Case of Transboundary Harm Arising out of Hazardous Activities ('Draft Principles'). To a large extent, these efforts supplement and complete the ILC Draft Articles on State Responsibility, although the content of the adopted rules appears largely to repudiate State liability when the State has complied with the Preventive Draft Articles».*

1600. Krieger. H. & Peters., A. (2020), *ob. cit*. 355-356. *«An older International Law Commission (ILC) project has dealt with "international liability for injurious consequence arising out of acts not prohibited by international law. Liability for 'acts no prohibited' is, in other words, liability for lawful acts. However, this project faced numerous conceptual problems at its interface with the traditional law of responsibility including question as to whether 'fault' is required to establish state responsibility for environmental harm. In response, the ILC split the liability project and first focused on harm prevention rules which result in the Draft Articles of Prevention of Transboundary Harm from Hazardous Activities adopted in 2001". Only five years later, in 2006, the ILC adopted the Draft Principles on the Allocation of loss in Case of Transboundary Harm Arising from Hazardous Activities».*

1601. Brunnée, J. (2020), *Ob. cit*. 156-157. *«The harm prevention regime and the State responsibility regime operate alongside one another. They do so harmoniously, in the sense that the harm prevention regime specifies the primary obligations to which States are subject. The State responsibility regime comes into play when these primary obligations have been breached».*

miento de la atribución de la conducta ilícita en materia de derechos humanos. Los principios, detallan las obligaciones procedimentales que deben cumplirse para prevenir el daño, mientras que la Convención Americana entra en juego cuando se ve infringida alguna de sus normas primarias con contenido ambiental.

Por otra parte, debe reconocerse que tanto las fórmulas de derechos humanos como aquellas derivadas del deber de diligencia ambiental[1602] en un contexto transfronterizo están articuladas a través del mismo tipo obligaciones instrumentales que deben ser aplicadas dentro de territorio de los Estados para resguardar los derechos humanos amenazados por la inestabilidad del clima.

Lo anterior demuestra la complementariedad entre uno y otro para identificar la dimensión de la obligación de diligencia ambiental, de manera que es posible trasladarla la problemática climática en el sistema interamericano. De allí que las líneas expuestas por la Comisión de Derecho Internacional[1603] permiten identificar ciertas pautas estandarizadas que encuentran paralelismo en la interpretación de derechos convencionales. Es decir, el cumplimiento de las obligaciones de prevención, la realización de la evaluación de impacto ambiental *ex ante*[1604], el cumplimiento del deber de notificación[1605], el actuar ante la incertidumbre, el deber de informar, el deber permitir la participación y la consulta en asuntos ambientales.

1602. Shelton, D. (2015), *Ob. cit*. *«The ILC Draft Principles approach the issue as one of allocating the risk of loss due to harm resulting from lawful economic or other activities, when the relevant State has complied with its due diligence obligations to prevent transboundary harm».*

1603. García-San José, D. (2005). «La prevención de daños medioambientales transfronterizos resultantes de actividades peligrosas: recientes desarrollos en el derecho internacional». En: M. Gómez. & A. Salinas. *Soberanía del Estado y Derecho Internacional. Homenaje al profesor Juan Antonio Carrillo* Salcedo (pp. 661-678). Sevilla: UCA|US|UMA. Entre otras el autor menciona la diligencia debida se concreta a través de la aplicación de medidas internas de los Estados, tales como: la evaluación de impacto ambiental o riesgo, la notificación, la consulta e información.

1604. Certain Activities Carried Out by Nicaragua in the Border Area (Costa Rica v. Nicar.) and Construction of a Road in Costa Rica along the San Juan River §153 (Nicar v. Costa Rica), Judgment, 2015, ICJ. (December 2015). *«[…] a State obligation to exercise due diligence in preventing significant transboundary harm requires that State to ascertain whether there is a risk of significant transboundary harm prior to undertaking an activity having the potential adversely to affected environment of another State. If that is the case, the State concerned must conduct an environmental impact assessment».* Véase también: Responsibilities and Obligations of States with Respect to Activities in the Area (No. 17) Case No. 17, Advisory Opinion of Feb. 1, 2011, ITLOS Rep., 42. §145.; Pulp Mills on the River Uruguay (Arg. v. Uru.), Judgment, 2010, ICJ. §204 (April 2010).

1605. Aunque se reconoce que claramente las obligaciones de notificación y consulta a la que hace referencia la jurisprudencia ICJ citada se refiere al plano de relaciones interestatales, en este libro se abordan las obligaciones convencionales de participación y consulta, la cuales atienden a la dinámica individuo Estado.

Ahora bien, con relación a las obligaciones nacidas de los derechos convencionales asociados al acceso a la justicia y al debido proceso (artículos 8 y 25 CADH), así como de los derechos autónomos a la información[1606] (artículo 13 CADH) y a la participación (artículo 23.1.a CADH), los mismos son instrumentos que permiten la realización de otros derechos, así como el afianzamiento de valores y principios esenciales en una sociedad democrática.

Es lo cierto que el operador jurídico a quien corresponda analizar la plataforma fáctica que dé lugar a la vulneración de los derechos en un contexto climático se encontrará con supuestos de vulneración consumada al momento[1607], así como podrá situarse en otros donde el Estado no haya brindado las garantías de prevención necesarias para evitar la conculcación del derecho[1608]. En suma, dependerá del escenario concreto y de la invocación de la violación de la norma primaria específica que activen las víctimas.

En lo que se refiere al establecimiento de la arquitectura de responsabilidad del Estado por la vulneración de los derechos al acceso a la justicia y al debido proceso en relación con los derechos convencionales que pueden verse afectados por el cambio climático, se proponen (2) dos evaluaciones principales: Primero, el examen sobre la existencia de recursos judiciales efectivos para atender el control de la actividad del Estado[1609], así como la fiscalización de las actividades privadas por parte de las autoridades competentes[1610]. Segundo, la verificación de que estos procedimientos en caso de existir hayan sido sustanciados conforme al debido proceso[1611].

1606. Reconocido además en el artículo 54 Carta OEA. Véase también: OEA. Acceso a la información pública: fortalecimiento de la democracia. OEA Doc. AG/Res. 1932 (XXXIII-O/03) (10 jun. 2003).

1607. Es el caso de la denegación del acceso a la justicia o de las garantías procesales, aunque los efectos ambientales que motivaron solicitud perduren en el tiempo. En cuanto a la determinación de la dimensión temporal de la violación de una obligación que no tienen carácter continuado véase: Artículo 14.1 ARI, sobre aquellos los de naturaleza continuada artículo 14.2 ARI.

1608. Mientras que sobre las obligaciones de prevención véase: Artículo 14.3 ARI.

1609. Por ejemplo, frente a la violación de una obligación de prevención del riesgo de daño ambiental extendido en el tiempo en el contexto de los derechos convencionales amenazados por el cambio climático.

1610. Artículo 25.1 CADH.

1611. Artículo 8 CADH. En el marco del debido proceso véase: Garantías judiciales en estado de emergencia y excepción. OC 9/87, (Ser. A) No. 9, § 30 (6 oct. 1987). Igualmente: Von Bogdandy., A. Casal., J.M. Morales., M. (2020). *La resistencia del Estado Democrático de Derecho en América Latina frente a la pandemia de Covid-19. Un enfoque desde el ius commune*. Max Planck Institute for Comparative Public Law & International Law. Research Paper Serie No. 2020-35. Recuperado de: https://bit.ly/3DUxqHc.; Casal, J. M. (2020). *Los derechos fundamentales y sus restricciones. Constitucionalismo comparado y jurisprudencia interamericana*. Bogotá: Temis. Bogotá. Recuperado de: https://bit.ly/3mbmChh.

De allí que, en caso de encontrarse violado el acceso a la justicia climática, es decir ante la inexistencia o la obstrucción de vías judiciales que permitan exigir respuestas estatales en un plazo razonable frente a problemática asociadas al impacto de la inestabilidad del clima en los territorios indígenas y como consecuencia sobre los derechos humanos, estos procedimientos internos constituirían mecanismos incompatibles con la CADH y con la interpretación brindada por la CtIDH para asegurar el goce de derechos asociados a la propiedad[1612], al medio ambiente[1613], a la cultura y al acceso a la información.

Igualmente, la conculcación de los derechos reconocidos en los artículos 8 y 25 CADH puede ser invocada cuando: 1. No han sido escuchados conforme a sus costumbre y tradiciones en los procesos judiciales y administrativos existentes para abordar las cuestiones climáticas que les afecten. 2. Cuando aun existiendo, estos mecanismos no son capaces de dar respuesta efectiva en un plazo razonable para subsanar la vulneración de derechos. 3. Cuando las normas internas que abren vía judicial son incompatibles con la Convención. 4. Cuando ha existido cualquier omisión o acción en relación con la participación, consulta e información ambiental[1614] y esta ilegalidad no ha podido someterse a control judicial.

En la actualidad los Estados deben ser capaces de proveer mecanismos, transparente, imparciales, oportunos, efectivos y sin costos prohibitivos para defender la estabilidad climática, así como vías que posibiliten la solicitud y acuerdo de medidas cautelares que puedan detener el daño o el riesgo inminente frente al mismo[1615]. Además, los estados deberían estar en la capacidad de proveer medios para facilitar la prueba ambiental, así como formas de ejecución y cumplimiento de decisiones judiciales y administrativas[1616] que hayan determinado alguna forma de protección para que la misma no se convierta en ilusoria.

Debe recordarse que la CtIDH ha creado una extensa línea jurisprudencial sobre el respeto a las garantías y protección judiciales, trasladables a

1612. Pueblos Indígenas Kuna de Madungandí y Emberá de Bayano y sus miembros v. Panamá, Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas (Ser. C) No. 284. §79 (14 oct. 2014).; CtIDH. Comunidad Garífuna Triunfo de la Cruz y sus Miembros v. Honduras. Excepciones Preliminares Fondo, Reparaciones y Costas (Ser. C) No. 305 §237-253 (08 oct. 2015).; CtIDH. Pueblos Kaliña y Lokono v. Surinam, Fondo, Reparaciones y Costas (Ser. C) No. 309. §243-268. (25 nov. 2015).

1613. CtIDH. Asociación Lhaka Honhat v. Argentina, Fondo, Reparaciones y Costas (Ser. C) No 400. §305 (6 Feb. 2020).

1614. CEPAL. (2019), *Ob. cit*. 50. La CEPAL lo plantea con relación al Acuerdo de Escazú, pero como se ha explicado las fórmulas de este instrumento pueden servir para modular la exigencia de obligaciones convencionales conforme a la introducción del *corpus iuris* en la interpretación de los derechos de la CADH.

1615. *Loc. cit.*

1616. *Loc. cit.*

los complejos problemas ambientales, incluido el cambio climático del cual brotan vulneraciones específicas para los pueblos indígenas y tribales. De allí que el quebrantamiento de estas obligaciones se configurará por falta de cumplimiento no solo de la CADH, sino también de los parámetros que la CtIDH ha definido en las interpretaciones realizadas sobre los artículos 25 y 8 CADH. Así, será posible localizar hechos que encuadran en supuestos catalogados como ilícitos internacionales que abren otra puerta a la atribución de responsabilidad internacional[1617].

Sin embargo, es de vital importancia tener en cuenta que los derechos a la protección judicial y al debido proceso son normas instrumentales especialmente complejas que deben ser analizadas según las condiciones propias de cada caso, pues responden directamente a las pautas establecidas dentro del ordenamiento jurídico interno de cada uno de los Estados que forman parte de la CADH. En consecuencia, aquí se han presentado solo algunos supuestos en los cuales es posible atribuir responsabilidad internacional del Estado por la vulneración de obligaciones ambientales en el marco de estos derechos procesales, pero el horizonte se expande cada día frente a la amenaza climática que va incrementando su impacto en la región, por lo cual deberá ser analizado a profundidad según las circunstancias particulares de cada petición.

Una vez aclaradas estas cuestiones generales que permiten identificar criterios suficientes para invocar la responsabilidad internacional del Estado por su falta de diligencia en la protección de derechos humanos en un contexto climático, corresponde analizar el complejo tema de la atribución bajo el lente de la Convención Americana.

Marco de atribución de responsabilidad por la violación de derechos convencionales

Debe recordarse que no todas las transgresiones de derechos humanos implican por sí mismas la violación de una obligación internacional[1618]. Considerando que en la Parte I de este capítulo se identificaron cuáles eran esos compromisos legales climáticos/ambientales nacidos de la vulneraciones a los pueblos indígenas en el marco de la CADH, ahora es posible construir la estructura de atribución de responsabilidad, siempre y cuando se logre establecer una falta de diligencia manifiesta por parte de algunos de los órganos

1617. Tanto obligaciones de medio como de resultados.

1618. Knox, J. H. (2009), *Ob. cit*. 165. *«Not all infringements of human rights violate legal obligations; human rights may have ethical or moral import without having correlative duties under human rights law. Climate change interferes with the enjoyment of rights recognized in human rights treaties, but a treaty´s recognition of a human right does not mean that any interference with that right by any actor, anywhere in the world, violates a legal duty».*

de Estado con competencia para adoptar las medidas apropiadas frente al cambio climático peligroso y en relación con los derechos a la propiedad/ medio ambiente sano.

En este orden, es vital recordar que se considera como hecho del Estado al comportamiento de cualquiera de sus órganos, bien sea en función legislativa, ejecutiva o judicial[1619]. Justamente, sobre estos tres estamentos del poder público recae la evaluación primaria de diligencia frente al cambio climático. Es común en cuestiones ambientales y climáticas encontrar solapadas las actuaciones de los órganos del gobierno central y de las diferentes divisiones territoriales, especialmente en aquellos Estados de tipo federal, tema extensamente abordado por la doctrina internacional y resuelto a través del principio de unidad del Estado[1620].

Sobre la materia litigiosa que ocupa esta investigación debe mencionarse que es cada vez más frecuente encontrar demandas por la vulneración de derechos fundamentales directamente asociadas a la actuación concreta del poder ejecutivo de un Estado. Esto es lógico, pues el Presidente o el Jefe de Gobierno y los funcionarios que integran la alta plana ministerial son quienes han ratificado y comprometido al Estado, a la par también son quienes tienen sobre sus hombros la responsabilidad por el adecuado abordaje del riesgo intrínseco del cambio climático.

Sin lugar a duda, el desempeño de la rama ejecutiva debería ser coherente con los compromisos nacionales asumidos como parte de una política de Estado uniforme. En consecuencia, se esperaría de estos órganos dentro del ámbito de competencia fijado por el principio de legalidad, que estableciesen una política climática nacional, planes de acción, así como el desarrollo de reglamentos y normas de rango sublegal que permitiesen asegurar la implementación de esas estrategias de mitigación nacional con base en los derechos humanos reconocidos por la Convención, lo cual trae implícito el deber

1619. Artículo 4 ARI: «1) Se considerará hecho del Estado según el derecho internacional el comportamiento de todo órgano del Estado, ya sea que ejerza funciones legislativas, ejecutivas, judiciales o de otra índole, cualquiera que sea su posición en la organización del Estado y tanto si pertenece al gobierno central como a una división territorial del Estado. 2) Se entenderá que órgano incluye toda persona o entidad que tenga esa condición según el derecho interno del Estado».

1620. Por su parte, la CtIDH también ha formulado la configuración de responsabilidad por la vulneración del derecho a un medio ambiente sano en el caso Lhaka Honhat V. Argentina al considerar que el comportamiento desplegado correspondía a diversas autoridades integrantes del país federal, pero representadas como el Estado Argentino ante el banquillo de la Corte. Véase: CtIDH. Asociación Lhaka Honhat v. Argentina, Fondo, Reparaciones y Costas (Ser. C) No 400. (6 Feb. 2020). Nota al pie No.1, Igualmente: Green National Tribunal on its own motion Sher Singh v. State of Himachal Pradesh *et al*. (6 Feb. 2014). Donde el gobierno en sus diferentes niveles tenía la obligación de establecer políticas de desarrollo y conservación sostenible sobre los recursos naturales para las generaciones presentes como para las futuras.

de asegurar la supervisión y monitoreo de la actuación de particulares[1621] que despliegan actividades con impacto climático.

Para evaluar el estándar de conducta de las autoridades estatales es necesario considerar que el riesgo en si sea previsible[1622], que el interés legal este sujeto a protección[1623] de la CADH y que exista un interés compensatorio[1624], en cuanto a la capacidad de actuar para proteger el derecho en peligro, es decir que no es requerida la certeza del daño, pero si la posibilidad de ocurrencia. Todo ello, en el marco de la razonabilidad y en la aplicación de los máximos esfuerzos que debe guiar el accionar del Estado. Se requiere a los Estados actuar con la diligencia debida necesaria con el fin de prevenir daños significativos al medio ambiente[1625].

Como soporte en mataría de litigio estratégico en la identificación del órgano ejecutivo pueden mencionarse: *Urgenda Foundation,* donde se demandó al Ministerio de Infraestructura y Ambiente determinándose la responsabilidad internacional de Países Bajos debido a que el ejecutivo tenía la obligación de tomar medidas razonables y concretas frente a una amenaza real e inminente en relación con los derechos a la vida y familia reconocidos por el Convenio Europeo. Igualmente, el caso *Futuras Generaciones* donde se evaluó el cumplimiento del deber de la oficina del presidente en la adopción de medidas para evitar la degradación del ambiente a través de la deforestación del Amazonas. Mientras que en *Leghari* se solicitó el control de la actividad del Ministerio de Cambio Climático, Ministerio de Finanzas, Ministerio de Relaciones Exteriores, Coordinación Ministerial Interprovincial, Ministerio de Derecho y Justicia, Ministerios de Seguridad Alimentaria e Investigación, Ministerio del Agua y Energía, Departamento de Irrigación y a la Autoridad Nacional de Manejo de Desastres. Estos últimos litigios en conexión con los derechos fundamentales reconocidos constitucionalmente. Otro asunto destacable contra el gobierno federal es *Institute Amazonian Studies v.* Brasil.

1621. CtIDH. Lemoth Morris v. Honduras, Fondo (Ser. C) No. 432. §46 (31 ago. 2021). Aunque ciertamente a la CtIDH no le corresponde supervisar la actividad de los particulares, pero si «establecer si los Estados son responsables por la violación a los derechos humanos reconocidos en la Convención». Con relación al control que puede ejercer el Estado sobre los particulares véase también: La condición jurídica de los migrantes indocumentados OC 18-03 (Ser. A) No. 18, §140 y 146 (7 Sep. 2003). Aunque pueda pensarse que la obligación de respeto y la obligación de garantía de los derechos humanos está fundada en la dinámica individuo-Estado, la misma también se proyecta en las relaciones *interprivatos*. Véase: Baade., B. (2020), *Ob. cit*. 93. *«The most commonly associated states´ due diligence obligation in human rights law is the protection of individuals from the infringement of their rights by other individuals».*

1622. Baade., B (2020), *Ob. cit*. 97 y 99).

1623. *Loc. cit.*

1624. *Loc. cit.*

1625. Viñuales., J. (2020), *Ob. cit*. 111.

En lo referente al poder judicial, debe tenerse presente que esta rama pública tiene la obligación de actuar como un juez interamericano[1626] ejerciendo un control difuso de convencionalidad, mediante el cual se debe asegurar de cumplir en el marco de sus competencias con la compatibilidad de las leyes y la interpretación brindada por la CtIDH en relación con la protección de los derechos fundamentales. Igualmente, los tribunales nacionales tienen incidencia directa en el aseguramiento del acceso directo y efectivo al aparato de justicia. Esto con el fin de garantizar que los grupos afectados pueda solicitar el control judicial de la actividad del ejecutivo y legislativo con relación a su obrar deficiente, regresivo o inexistente frente al impacto del cambio climático sobre los derechos humanos reconocidos por la Convención.

En relación con el poder legislativo y la amenaza climática debe tenerse en cuenta que precisamente el marco de sus competencias se le permite formular, aprobar y derogar leyes para regular la conducta de los órganos del Estado, de los particulares, así como también puede definir los porcentajes de reducción de emisiones que el país debería incorporar dentro de su política voluntaria de contribución para alcanzar las metas definidas por el artículo 2 del Acuerdo de París.

Igualmente, debe considerarse que la normativa interna de los Estados interamericanos debe ir de la mano con la garantía de los derechos a un medio ambiente sano, propiedad colectiva y cultura[1627], así como con la incorporación de normas de procedimiento que aseguren la efectividad de los derechos hoy amenazados por el cambio climático. Esto requiere asegurar un auténtico acceso a la justicia y al debido proceso, así como el reconocimiento en el plano interno del derecho al acceso a la información ambiental, a la consulta y a la notificación frente a la amenaza o incertidumbre del daño climático. Estos son algunos de los aportes mínimos que deberían ser acatados por los parlamentos interamericanos.

Precisamente, un ejemplo interesante frente a una actuación insuficiente de este poder público lo constituye la reclamación presentada por el pueblo indígena *Wet'suwet'* contra el legislativo canadiense. A través de la querella planteada se estableció la invocación de tutela por falta del debido deber de cuidado hacia esta comunidad. El objetivo principal de la querella buscaba exigir el cese de la amenaza climática hacia sus derechos fundamentales directamente vinculados con el territorio mediante una actuación más ambiciosa del Parlamento que permitiría hacer frente real a la situación de riesgo

1626. Mac-Gregor, E. F. (2016), *Ob. cit*... Igualmente véase: Von Bogdandy, A. (2019), *Ob. cit*. 102. «[…]cada juez nacional se convierte en un juez interamericano, lo que expande enormemente el alcance de la Convención Americana».

1627. En caso de mayor avanzada que la CADH deberá aplicarse el ordenamiento interno en atención al principio pro persona.

climático que afecta al grupo vulnerable[1628]. En una línea similar debe mencionarse *Daniel Billy et al v. Australia.*

Una vez identificados los posibles órganos que tiene incidencia directa sobre la adopción de medidas climáticas y a su vez tienen la capacidad de comprometer la responsabilidad del país, debe procederse a la conjugación entre los derechos afectados y el comportamiento ilícito nacido de la falta de garantías para asegurar el disfrute pacífico de los derechos reconocidos por la CADH. Es decir, el no adoptar las medidas positivas de mitigación necesarias frente al cambio climático.

La forma para evaluar la configuración del ilícito internacional se concentra en determinar si se ha cumplido con ese deber de cuidado[1629] mínimo hacia el colectivo vulnerable. Para ello, la CtIDH tomará lo que corresponda del *corpus iuris* internacional, como pauta mínima exigible para delimitar el alcance de las obligaciones de mitigación y reducción del impacto climático sobre los derechos humanos. Esto permitirá demostrar si el Estado cumplió satisfactoriamente con su deber de prevenir razonablemente[1630] los efectos del cambio climático.

Para ello también debe atenderse a la verificación del proceso de delimitación de las Contribuciones Nacionales Fijadas por el artículo 4.2[1631], 4.3[1632] y 4.8[1633] del Acuerdo de París, ya que estas normas funcionan como parámetro mínimo de prevención. Es decir, como esa medida apropiada para

1628. Federal Court. Lho'imggin *et al*. v. Her Majesty the Queen in the Right of Canada, decision granting motion to strike and dismissing the case (16 Nov. 2020).

1629. Con relación a las consecuencias de un hecho ilícito internacional véase: Maljean-Dubois, S. (2018), *Ob. cit*. *«It must simply establish that State B did not set sufficient emissions reduction targets. Thanks, in particular, to the work of the IPCC, it will be quite easy to establish that State B has failed to act with the required due diligence».*

1630. Véase: Baade, B. (2020), *Ob. cit*. 92. «In human rights law. The term 'due diligence' is used to describe the standard of conduct necessary to comply with a duty to protect. While it is often highlighted as a tool that allows to oblige states to protect human rights against conduct not directly attributable to them».

1631. Artículo 4.2 Acuerdo de París: Cada Parte deberá preparar, comunicar y mantener las sucesivas contribuciones determinadas a nivel nacional que tenga previsto efectuar. Las Partes procuraran adoptar medidas de mitigación internas, con el fin de alcanzar los objetivos de esas contribuciones.

1632. Artículo 4.3 Acuerdo de París: «La contribución determinada a nivel nacional sucesiva de cada Parte representará una progresión con respecto a la contribución determinada a nivel nacional que esté vigente para esa Parte y reflejará la mayor ambición posible de dicha Parte, teniendo en cuenta sus responsabilidades comunes pero diferenciadas y sus capacidades respectivas, a la luz de las diferentes circunstancias nacionales».

1633. Artículo 4.8 Acuerdo de París: «Al comunicar sus contribuciones determinadas a nivel nacional, todas las Partes deberán proporcionar la información necesaria a los fines de la claridad, la transparencia y la comprensión, con arreglo a lo dispuesto en la decisión 1/CP.21 y en toda decisión pertinente que adopte la Conferencia de las Partes en calidad de reunión de las Partes en el presente Acuerdo».

demostrar que el Estado hizo todo lo que estaba a su alcance para asegurar la protección y garantía de los derechos a la propiedad, el medio ambiente sano y la cultural.

En pocas palabras el cumplimiento de los estándares obligatorios del Acuerdo de París en su fórmula innovadora binaria además de ser una forma de cooperación internacional[1634] son la pauta indicadora del comportamiento del Estado con relación a la protección de los derechos reconocidos por la CADH en un contexto climático. Así puede establecerse si existió la adopción de medidas suficientemente adecuada como para reducir el impacto climático peligroso sobre los derechos afectados. Esta estructura permitiría ver a la CtIDH «si el Estado generó condiciones que agudizaron las dificultades de acceso»[1635] al derecho presuntamente conculcado o si por el contrario adoptó la diligencia mínima requerida para garantizar su goce efectivo.

Debe recordarse que el artículo 2.1 a) del Acuerdo de París por sí solo no es de obligatorio cumplimiento para los países en desarrollo[1636]. No obstante, la infracción de las metas del artículo 2.1 del Acuerdo de París a la luz de la Convención Americana representa un ataque directo a los derechos humanos cuyo impacto se extiende desde los civiles y políticos hasta los económicos, sociales, culturales y ambientales, esto considerando que los mismos son interdependientes e indivisibles.

Navegando en aguas más profundas y puramente asociadas al régimen internacional del clima también puede argumentarse que la meta de mantener la temperatura de la Tierra por debajo de los 2 grados a niveles preindustriales depende del plan de implementación de las autoimpuestas contribuciones nacionales determinada, por lo que es exigibles a los Estados independientemente de si se encuentran catalogados[1637] como Estados desarrollados o en vías de desarrollo[1638].

En consecuencia, si los Estados quieren *intentar* asegurar la garantía del derecho a medio ambiente sano, a la propiedad colectiva y a la cultura

---

1634. ACNUDH. (2021), *Ob. cit*. 38-39.

1635. CtIDH. Comunidad Indígena Yakye Axa v. Paraguay, Fondo, Reparaciones y Costas (Ser. C) No. 125 §162 (17 jun. 2005).

1636. Como serían los Estados interamericanos, con la excepción de Brasil que representa que entra en la categoría de economía *emergente.*

1637. Rajamani, L. *(2020)., Ob. cit. 90. «And, the pervasive and cross-cutting differentiation in favour of developing countries in the climate regime is a critical factor in determining the nature and extent of due diligence required of Parties in relation to obligations of conduct such as in Paris Agreement's crucial Article 4 (2). However, there has been a gradual dilution of differentiation in favor of developing countries over time and the demands of due diligence in specific contexts should be progressively interpreted accordingly».*

1638. Sobre el carácter vinculante de las obligaciones de mitigación contenidas en el artículo 4 del Acuerdo París en relación con los derechos humanos véase: Franzius & Kling (2021), *Ob. cit*. 197-216.

para las poblaciones más vulnerables, por lo menos debería cumplir con las comunicaciones, reportes y actualizaciones de sus contribuciones con miras a asumir compromisos[1639] cada vez más ambiciosos[1640]. En suma, las NDC representan una obligación estatal vinculante a los Estados Parte conforme al *Paris Rulebook* y por vía refleja como estándar que delimita el alcance de los artículos 21 y 26 CADH.

Si bien es cierto que la CtIDH no podrá entrar a sancionar el incumplimiento de las NDC de forma directa, si es competente para declarar la responsabilidad a la luz del incumplimiento del deber cuidado de un Estado interamericano con relación a la adopción de medidas de prevención y protección ante el riesgo peligroso[1641] que causa el cambio climático sobre los derechos concretos a la propiedad, al medio ambiente y a la cultura.

Además, el problema climático ha llegado a un punto de inflexión[1642] donde los Estados deben cooperar y promover la protección de los espacios naturales que optimizan la absorción de gases de efecto invernadero[1643], así como procurar el intercambio de información en la medida en que esto constituye también una forma de prevención del daño ambiental al tratar de localizar una respuesta colectiva sobre el problema[1644].

A pesar de que el principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas mantiene vigencia[1645], el mismo no puede entenderse frente a la Conven-

---

1639. Mayer, B. (2021), *Ob. cit*. 419. *«While it is largely understood that the NDCs that have been communicated to date lack ambitambition, itins that every party to the Paris Agreement has also a general (albeit ill-defined) obligation under the UNFCCC to formulate and implement measures on the mitigation of climate change. Climate treaties thus provide at least a plausible legal basis to challenge a state's lack of ambition on climate change mitigation».*

1640. De hecho, las estimaciones de las NDC son objeto de seguimiento vinculante de conformidad con los arreglos de transparencia establecidos por el artículo 13 Acuerdo de París

1641. Sobre el límite de la responsabilidad del Estado véase: Comunidad Garífuna de Punta Piedra y sus miembros v. Honduras, Fondo, Reparaciones y Costas (Ser. C) No. 304 §261 (8 oct. 2015). Donde la Corte recordó que la responsabilidad del Estado no es Ilimitada, sino que está condicionada al «conocimiento de una situación de riesgo real e inmediato para un individuo o grupo de individuos determinado, y a las posibilidades razonables de prevenir o evitar ese riesgo».

1642. CEPAL. (2020) *La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible en el nuevo contexto mundial y regional. Escenarios y proyecciones en la presente crisis.* CEPAL: Santiago., p. 51. Recuperado de: https://bit.ly/304EIdN. Según el informe el ODS 13 (acción por el clima) se ubica en un umbral de retroceso por lo cual no se cumplirá esta meta regional de la Agenda 2030.

1643. Véanse los hallazgos de: Fa, J. E., Watson, J. E., *et. al.* (2020). «Importance of Indigenous Peoples' lands for the conservation of Intact Forest Landscapes». *Frontiers in Ecology and the Environment*, 18(3), 135-140.

1644. Véase: The MOX Plant (No. 10) (Ir. v. U.K.), Case No. 10, Provisional Measures of Dec. 3, 2001, ITLOS Rep., 110 §82

1645. Artículo 4.1 CMNUCC

ción Americana como un pase dorado que permita la consecución de objetivos de desarrollo por encima del respeto y garantía de los derechos humanos, por el contrario, debe ir acompañado en todo momento por los términos de sostenibilidad[1646], solidaridad y equidad intergeneracional. Aplicar una clave distinta sería inconsistente y contrario a toda la doctrina interamericana.

Aquí se plantea el establecimiento de una responsabilidad razonada y limitada a los conocimientos que hoy día tienen los Estados Interamericanos sobre los efectos del cambio climático peligroso[1647]. Este conocimiento puede tomar como referencia los reporte IPCC 2007, IPCC 2014 e IPCC 2021, los cuales han sido utilizado como evidencia conclusiva para el establecimiento de la relación de causalidad entre las emisiones de gases de efecto invernadero, el aumento del riesgo del daño al bienestar humano[1648], por lo que el comportamiento del Estado debe necesariamente responder a este riesgo profundo[1649]. Además, los reportes del IPCC son reconocidos como «una expresión del consenso científico internacional»[1650].

Es una realidad jurídica que el valor probatorio de los hallazgos científico permite aproximarse mejor al tratamiento de la incertidumbre frente a supuestos complejo de determinación estricta de una relación de causalidad[1651]. De hecho, los aportes de la ciencia han pasado a integrar parte de los argumentos tanto en las decisiones de tribunales nacionales[1652] como internacionales[1653] relacionadas con el medio ambiente y cambio climático.

1646. Sobre sostenibilidad y políticas públicas véase: Sánchez-Bravo. A. (2018b). «Derechos humanos, sostenibilidad y políticas públicas ambientales». *CADE: doctrina y jurisprudencia.* 46, 59-66.

1647. IPCC. (2007), *Ob. cit*. 13. IPCC. (2014a), *Ob. cit*. 13-63.

1648. Wewerinke-Singh, M. (2018), *Ob. cit*. La autora menciona a Título de ejemplo menciona el caso australiano que obligó al gobierno local a reconsiderar la planta eléctrica local Australian conservation fudantion v. Ministery of planning (2004), el historico caso estadounidense Massachuserrs v. EPA y Urgenda v. Netherlands, este último abordado en el Capítulo II de esta investigación.

1649. Rajamani, L. (2020), *Ob. cit*. 90. *«The risks of climate change are profound. The IPCC's Fifth Assessment Report found that the warming of the climate system is 'unequivocal', that climate change has caused 'impacts on natural and human systems on all continents and across the oceans'. and that, '[c]ontinued emission of [GHGs] will cause further warming and… increas[e] the likelihood of severe, pervasive and irreversible impacts'. The Special Report on 1.5 C stresses that the risks of 'irreversible' impacts is higher at higher levels of temperature increase».*

1650. Maljean-Dubois, S. (2018), *Ob. cit*.

1651. Véase: Sulyok, K. (2020), *Ob. cit*.

1652. A nivel nacional puede mencionarse: Urgenda v. Netherlands y el caso Futuras Generaciones v. Colombia.

1653. Véase: Sulyok, K. (2020), *Ob. cit*. A nivel internacional la autora muestra la incorporación de la perspectiva cientifica por parte ITLOS en los casos: Southerm Bluefin Tuna, Provisional Measures, Mox Plant, y Streits oh Johor.

En pocas palabras, «el enorme riesgo de impactos climáticos potencialmente irreversibles a temperaturas superiores a 1.5 ° C sugiere un nivel correspondientemente alto de debida diligencia»[1654] en materia de derechos humanos.

En todo caso, la CIDH y los representantes de las víctimas pueden plantear la atribución de responsabilidad del Estado a la luz del Artículo 4 del ARI en relación con una concienzuda evaluación de la obligación de diligencia en conexión la actuación de los órganos del Estado. Esto permite establecer la vulneración de los derechos humanos a un medio ambiente sano, a la propiedad, incluso es posible extenderlo hasta el derecho a la identidad cultural por la falta de aplicación de normas y políticas públicas suficientes para enfrentar de forma más eficiente el cambio climático[1655].

La falta de adopción de medidas e implementación de prácticas adecuadas en cabeza de los agentes del Estado transformaría la conducta deficiente u omisión directa en un hecho ilícito. Ahora, el comportamiento debe evaluarse a la luz de las obligaciones de medio, teniendo en cuenta la capacidad del Estado[1656]. Resulta imperativo mantener presente que uno de los factores que define el estándar de diligencia es la capacidad económica como una forma de balancear el derecho al desarrollo y de explotación de los recursos naturales. Sin embargo, la tumultuosa situación económica de los estados interamericanos no puede utilizarse como eximente de responsabilidad climática[1657] y menos frente al incumplimiento derechos humanos.

Igualmente, debe valorase la gestión aplicada en el cumplimiento de su deber de cuidado en relación con los estándares interamericanos donde expresamente se reconocen incluido los principios de prevención y precaución[1658] frente a actividades ambientales con impacto climático que amena-

1654. Rajamani, L. (2020), *Ob. cit*. 90.

1655. E incluso por ellos mismos, a través de las declaraciones oficialmente presentadas en las Conferencias de Partes de la CMNUCC, Acuerdo de París, así como otros foros done han expuesto su preocupación, intención y compromiso en esta lucha.

1656. Viñuales., J. (2020), *Ob. cit*. 125. Haciendo énfasis en que la capacidad del Estado sigue siendo una materia sujeta a discusión especialmente porque el propio principio de precaución establece que estará sujeto a las capacidades del Estado. Sin embargo, también destaca la postura ITLOS en la Opinión Consultiva sobre las actividades llevadas a cabo en La Zona *«the Chamber conclude that 'general provisions concerning the responsibility and liability of the sponsoring state apply equally to all sponsoring states, whether developing or developed, and the rationale is to prevent 'state of convenience', that is, states where companies could register themselves to benefit from less demanding requirements».*

1657. Sobre la valoración de la diligencia del Estado y su capacidad económica: Rajamani, L. (2020), *Ob. cit*. 90. *«The ILC recognizes that one of the factors in determining the standard of due diligence required of a State is its "economic level" or capacity, but notes however that "a State's economic level cannot be used to dispense the State from obligation under the present Articles"».*

1658. Véase: CtIDH. OC 23-17. §125 y180. Por lo que a partir de esta opinión consultiva se le considera una obligación de carácter vinculante.

zan los derechos humanos. Por lo cual, es razonable exigir el mismo nivel de diligencia correspondientes a la garantía de los derechos de las comunidades indígenas frente a la realidad climática concreta que aqueja sus territorios.

Es pública y notoria la crisis deforestación[1659] y el progresivo deterioro de los territorios indígenas debido a la minería, tala, contaminación de diversas fuentes, así como de la presión para el desarrollo de proyectos de infraestructura como represas y canales de comunicación. Adicionalmente, debe sumarse el problema de cambio de uso del suelo a causa de la explotación agrícola intensiva. Actividades que se traducen en el deterioro significativo o destrucción de sumideros naturales de carbono localizados en tierras ancestrales y además que impactan en los derechos humanos de los pueblos originarios americanos[1660].

El cambio de estas realidades con impacto climático negativo se logra a través del cumplimiento de las obligaciones de procedimiento ambiental que se encuentran doblemente imbuidas dentro de la doctrina ambientalista creada por la CtIDH y también en el marco de las obligaciones especiales hacia los pueblos indígenas y tribales. De esta manera, la subsistencia de los pueblos se garantiza a través de intercambio de información, la consulta, la EIA, así como mediante la explotación «prudente y con precaución» [1661] del territorio, en la medida en que estas constituyen formas de prevención del daño y localizan una respuesta colectiva a la problemática[1662].

A pesar de que el principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas mantiene vigencia[1663], el mismo no puede entenderse como un muro que separa a la Convención Americana de las vulneraciones de derechos nacidas del cambio climático. Es inadmisible que las disparidades de desarrollo perpetúen la impunidad frente a las violaciones de los derechos humanos. El Estado tendrá la obligación de demostrar que actuó con la diligencia esperada consolidando estrategias de mitigación, para contribuir a las metas asentadas en el Acuerdo de París.

1659. CEPAL (2021a). «La pérdida de los bosques de América Latina y el Caribe 1990-2020: evidencia estadística». *Temas Estadísticos de la CEPAL*. Recuperado de: https://bit.ly/3pOgKfA

1660. Por la incidencia de esas actividades en los ciclos naturales del agua, generación de áreas de inundación, perdida de la biodiversidad, entre otros eventos concretos especialmente graves que integran la extensa lista de afectaciones a los derechos de los pueblos.

1661. A los fines de determinar el riesgo sobre la explotación del territorio. Esto proviene de la interesante aproximación planteada por el Relator. Shinya Murase sobre la modificación a gran escala de la atmosfera en: ILC Rep. on the Protection of the Atmosphere, 35. Guideline 7 «…prudence and caution is inspired by the language of the International Tribunal for the Law of The Sea ins the in the *Southern Bluefin Tuna Case,* the *MOX Plant Case,* and the *Case concerning Land Reclamation by Singapore in and around the straits of Johor».*

1662. Véase sobre la obligación de intercambiar información y cooperación de Buena fe: The MOX Plant (No. 10) (Ir. v. U.K.), Case No. 10, Provisional Measures of Dec. 3, 2001, ITLOS Rep.

1663. Artículo 4.1 CMNUCC

Así, los Estados tendrán la carga probatoria de demostrar que han garantizado el derecho a la propiedad colectiva y a un medio ambiente sano en cuanto a la adopción y supervisión de medidas que contribuyan a la estabilidad de los territorios indígenas y por ende al sistema climático. Esto puede incluir, pero no está limitado a la creación, al desarrollo y al fortalecimiento de un marco legal climático que permita incorporar la participación indígena en los planes climáticos que integran las comunicaciones presentadas ante Naciones Unidas, así como en las estrategias de compensación aplicadas en las NDC y la contabilización de nuevos sectores y gases en territorio indígenas como parte del protocolo de control nacional frente al cambio climática.

En general, el Estado debe establecer que adoptó políticas públicas climáticas y realizó acciones tendientes a satisfacer los derechos a la propiedad y medio ambiente[1664] en relación con el grupo vulnerable. Así las cosas, el Estado puede mostrar que se aproximó a realizar un recorte efectivo que contribuye a la desaceleración del problema climático, protegiendo el territorio los pueblos indígenas y tribales. Esto se traduce en que quizá la aplicación de su máximo esfuerzo puede que no consiga evitar el daño climático sobre las tierras de las víctimas, pero al obrar con diligencia salva su responsabilidad internacional.

Sin embargo, esta tarea puede resultar cuesta arriba para los Estados interamericanos, especialmente a luz de los últimos hallazgos arrojados por las filtraciones expuestas en noviembre del 2021 por el Diario *Washington Post* en el que se revela evidencia de informes incompletos (cuando los hay), errores aparentemente deliberados, además de una brecha enorme entre las emisiones de diferentes gases de efecto invernadero generados dentro las jurisdicciones de los Estados[1665], en contraste con aquellas cifras declarada como parte de las Contribuciones Nacionales Determinadas[1666] reportadas previo al inicio de la COP 26[1667]. Esto no hace más que evidenciar el

1664. Incluido el cumplimiento de las obligaciones procesales aplicables.

1665. Según el reporte la principal discrepancia se encuentra en la contabilización proveniente del suelo y su cambio de uso. Tal y como se ha venido exponiendo a lo largo de este libro, el extractivismo intensivo de recursos naturales en gran parte es el causante de la deforestación, una de las mayores amenazas que enfrentan los pueblos indígenas a sus derechos humanos.

1666. Véanse las contribuciones comunicadas por los países interamericanos: UNFCCC. (2022) INDCs as communicated by Parties. Recuperado el 30 de noviembre de 2023 de: https://bit.ly/3Ez56eT. Igualmente, considerese el análisis realizado antes de la COP 26 por: Comisión Europea. (2019) «Avances en la acción climática Contribuciones Nacionalmente Determinadas al 2019». *Serie de Estudios Temáticos EUROCLIMA+13*. Bruselas: Comisión Europea. Recuperado de: https://bit.ly/3GlhzTO

1667. Mooney. C., *et al.* (7 noviembre 2021), *Ob. cit*. *«The Post's analysis is based on a data set it built from emissions figures countries reported to the United Nations in a variety of formats. To overcome the problem of missing years of data, reporters used a statistical model to estimate the emissions each country would have reported in 2019, then compared that*

incumplimiento[1668] de las obligaciones de comunicación y transparencia en relación con las medidas climáticas estatales para los Estados no parte del Anexo I CMNUCC.

La situación climática de los países de los miembros de la CADH permite plantear un panorama sobre alguna de las amenazas climáticas más relevantes conectadas con el territorio indígena, en contraste con las políticas climáticas diseñadas y adoptadas por los Estados interamericanos[1669]. La identificación de potenciales litigios climáticos basados en un análisis de diligencia climática con base en derechos humanos puede ser completada con el seguimiento del cumplimiento de las recomendaciones en materia climática que se realizaran a cada país en su respectico Examen Periódico Universal[1670]. La lectura de estas realidades permite vislumbrar una exponencial cantidad de potenciales litigaciones climáticas en la región.

Como se puede apreciar a lo largo de este capítulo la falta de diligencia del Estado y de su deficiente deber de cuidado sobre los pueblos indígenas y tribales sigue teniendo un punto de convergencia constante, la degradación del territorio indígena, exacerbada por la falta de diligencia en demarcación y titulación. Estos importantes espacios naturales están amenazados por el cambio de dinámicas de emisiones que desembocan sin lugar a duda en una afectación de derechos humanos en cascada. Lo anterior se traduce en un intensivo abuso de las tierras sustraídas del control, preservación y conservación de las comunidades indígenas conforme a los parámetros del Convenio OIT 169[1671] y de la doctrina de la CtIDH.

En esta obra, se reitera la posibilidad de establecer el incumplimiento del deber de diligencia partiendo del ataque sistemático que continúan padeciendo los pueblos indígenas y tribales sobre sus derechos a la propiedad colectiva, al medio ambiente, a la cultura, al acceso a la información, a la justicia y al respeto a sus garantías procesales. Estas vulneraciones se pro-

---

total to other scientific data sets measuring global greenhouse gases». Sobre el método de cálculo utilizado para el reportaje véase: Muyskens. J., Narayanswamy., A. & Mooney. C. (7 noviembre 2021). «Measuring the invisible: How the Post did its global emissions analysis». *The Washington Post.* Recuperado de: https://wapo.st/3Dqwjii.

1668. Climate Action Tracker (15/09/2021), *Ob. cit*. *«The assessment shows that most net zero targets are formulated vaguely and do not yet conform with good practice. Robust short-term targets and pathways towards achieving them are required to fully realize their ambition».*

1669. Para obtener un análisis general de las estrategias, políticas y planes de acción climática en la región, así como la conexión de estas con los pueblos indígenas y afrodescendientes véase: CEPAL. (2019), *Ob. cit*. 68-84.

1670. Véanse algunas referencias del Examen Periódico Universal en las resoluciones del Consejo de Derechos Humanos: A/HRC/37/5, A/HRC/28/7, A/HRC/36/11, A/HRC/41/6, A/HRC/36/4, A/HRC/34/14, A/HRC/30/15, A/HRC/37/8, A/HRC/33/4.

1671. Véase: OIT (2017). «Análisis comparativo Convenio 169: convergencias y divergencias entre OIT y Corte IDH. Documento de trabajo. ACT/EMP». Recuperado de: https://bit.ly/3dwZjua.

ducen ante la mirada silenciosa del Estado[1672] que permite perturbaciones de terceros al territorio u otorga concesiones bajo estándares interamericanos deficientes, donde brilla la ausencia de fiscalización/monitoreo de las actividades desarrolladas en territorios indígenas.

Las perspectivas sobre la degradación del territorio indígena a corto y mediano plazo serían más alentadoras si existiese una gestión compartida de los recursos y espacios esenciales para la neutralización de las emisiones. Precisamente, los litigios climáticos ante la CtIDH plantean esta posibilidad, la propuesta litigiosa de caso *Lhaka Honhat v. Argentina* evidencia la importancia de la conexión entre la pertenencia de los denunciantes/demandantes a las comunidades indígenas americanas para lograr la atribución de responsabilidad.

El informe sobre pueblos indígenas, comunidades afrodescendientes e industrias extractivas, la Resolución CIDH 3/21 y demás estándares interamericanos aplicables a los pueblos indígenas y tribales, recopilan una serie de obligaciones (previamente establecidas por la jurisprudencia de la CtIDH), las cuales permite dibujar un margen razonable para la evaluación de diligencia del Estado en materia climática, pues los territorios ancestrales inciden en la matriz de emisiones causante del cambio climático peligroso.

Entre estas obligaciones se encuentran: Primero, el deber de diseño e implementación efectiva de un marco normativo adecuado. Segundo, la disponibilidad de normas que aborden las inversiones extranjeras. Tercero, prevenir, mitigar y suspender los impactos negativos sobre los derechos humanos. Cuarto, supervisar y fiscalizar en materia de actividades extractivas, de explotación y desarrollo. Quinto, garantizar mecanismos de participación y acceso a la información. Sexto, prevenir actividades ilegales contra la población en las áreas afectadas por actividades extractivas y, séptimo, garantizar el acceso a la justicia[1673]. Asimismo, deben sumarse el cumplimiento de los deberes de garantía especial a favor de los pueblos indígenas[1674].

1672. CtIDH. Lemoth Morris v. Honduras, Fondo (Ser. C) No. 432. §44 (31 ago. 2021). «[L]a obligación de garantía se proyecta más allá de la relación entre los agentes estatales y las personas sometidas a su jurisdicción, y abarca el deber de prevenir, en la esfera privada, que terceros vulneren los bienes jurídicos protegidos».

1673. CIDH. *Pueblos indígenas comunidades afrodescendientes industrias extractivas* CIDH Doc. 47/15, 27-68 (31 dic. 2015).

1674. «Emergencia climática alcance de las obligaciones interamericanas en materia de derechos humanos», CIDH Doc. 3/21 (31 dic. 2021).; *Empresas y Derechos Humanos: Estándares Interamericanos*. Doc. OEA /Ser.L/V/II. | CIDH/ REDESCA INFO 1/19. 1 nov. 2019. § 233-253.; CIDH. *Pueblos indígenas comunidades afrodescendientes industrias extractivas* CIDH Doc. 47/15 §82-114 (31 dic. 2015).; Derechos de los pueblos indígenas y tribales sobre sus tierras ancestrales y recursos naturales. Normas y jurisprudencia del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Doc. OEA 56/09 OEA/Ser.L/V/II. 30 dic. 2009. En líneas generales se pueden resumir en: 1) Asegurar que las restricciones a la propiedad colectiva la denegación de su supervivencia cultural y física. 2) garantizar su derecho

Si a lo anteriormente expuesto se añade la situación de los reportes estatales en materia de Contribuciones Nacionales de emisiones de los países interamericanos[1675] y falta de exigibilidad de los planes de acción climáticos (cuando los hay), es posible diseñar una hoja de ruta fortalecida para litigar con miras a reducir la alarmante brecha entre la degradación sumideros naturales de carbono y la amenaza a la supervivencia física, cultural y espiritual de los pueblos indígenas y tribales de las Américas.

La deforestación y de la degradación del hábitat natural[1676], menoscaba la cultural y cosmovisión de los pueblos originarios quienes son uno con el territorio[1677]. Impulsar el rol de garantes efectivo de los derechos humanos en un contexto ambiental es una tarea pendiente de la mayor parte de los Estados interamericanos, especialmente si se considera que doce (12) Estados Parte de la Convención han hecho mención expresa en su reporte de Contribuciones Nacionales Determinadas a los derechos humanos como criterio orientador en su implementación[1678]. De allí que el sistema regional es una herramienta de utilidad para procurar una autentica expansión de la protección de los derechos.

Por lo tanto, las omisiones y actuación del Estado por debajo de los estándares constitucionales[1679], pero especialmente de los interamericanos[1680]

---

de participación, la realización del estudio de impacto ambiental y social, así como los beneficios compartidos. Dentro de la garantía del derecho a la participación se incluye: consulta, consentimiento previo, libre e informado, así como la realización de la EIA/ social y el derecho de participación en los beneficios resultantes del proyecto. 3) La protección del medio ambiente 4) la creación de capacidades ambientales y climáticas.

1675. Existe una criticable forma de comunicar el nivel de contribuciones nacionales de cada país. Pareciera que el objetivo es minimizar el número de emisiones en el reporte, pero no el conteo de emisiones reales desde la aplicación de políticas de mitigación colaborativas y compartida que además aseguren los derechos humanos de estos grupos vulnerables y repercutan positivamente en la protección de la colectividad nacional

1676. Véase: Walker, W., Gorelik, S., Baccini, A., *et. al.* (2020), *Ob. cit*. 3015-3025. Véase sobre la data regional por país en América Latina: Butler, R. (2019), *Ob. cit*.

1677. Véanse*: Amazon Frontlines* (18/11/2021). *Ob. cit*. Algunos de los testimonios transcritos expresan: José Gualinga, ex presidente de los Kichwa de Sarayaku quien explicaba en el contexto de planes de extracción petroleta en ecuador que «explotar nuestros territorios sagrados es como minar en las antiguas ruinas de Roma o en Notre Dame en París». En el mismo sentido: Wiña Omaka, anciana Waorani, «Nuestra tierra lo es todo. Para nosotros y para ustedes. Allá lo tenemos todo. Peces, animales, medicinas. Se come del mercado de la ciudad, se come del bosque».

1678. CEPAL. (2019), *Ob. cit*. 23.

1679. Debe recordarse que la mayor parte de las constituciones latinoamericanas están marcadas por el movimiento de reverdecimiento constitucional nacido en la región a finales de los noventa. Por lo cual su ordenamiento interno también demanda unos umbrales mínimos de diligencia que se encuentra desatendidos.

1680. Pues son lo que aplican con preferencia en caso establecer mayor garantía y protección, además de ser la base para el análisis de responsabilidad ante la Corte. Por ejemplo,

nutridos por el *corpus iuris* ambiental e indígena que rechazan el quebrantamiento de la obligación de garantía de los derechos humanos permiten acabar con la paradoja de la inefectividad de la mitigación climática. El tribunal interamericano hasta ahora se ha mostrado abierto a reconocer un ámbito de protección especial a estos pueblos en materia ambiental, con lo cual es lógico presionar buscando una eventual declaración de responsabilidad en un caso contencioso.

Una vez invocada y atribuida la responsabilidad internacional del Estado corresponde realizar unas breves consideraciones sobre la consecuencia de la determinación del lícito internacional, es decir la obligación de reparar. El tema de las reparaciones en la Corte Interamericana de Derechos Humanos es fuente inagotable de riqueza[1681], donde la doctrina reparatoria[1682] va más allá de la reiteración de medidas clásicas indemnizatorias[1683]. Sin embargo, en esta sección de la investigación solo se mencionarán alguno de los elementos más relevantes a la hora de ilustrar las posibles consecuencias de la declaración de responsabilidad internacional del Estado en un asunto climático, esto con el fin presentar unas pinceladas sobre las posibles implicaciones del litigio estratégico propuesto en esta obra.

---

véase: CtIDH. Lemoth Morris v. Honduras, Fondo (Ser. C) No. 432. §43-44 (31 ago. 2021). «[En esta sentencia el tribunal reafirma que: "La obligación de garantizar el libre y pleno ejercicio de los derechos humanos no se agota con la existencia de un orden normativo dirigido a hacer posible el cumplimiento de esta obligación, sino que comparta la necesidad de una conducta gubernamental que asegure la existencia, en la realidad, de una eficaz garantía del libre y pleno ejercicio de los derechos humanos. […] abarca el deber de prevenir, en la esfera privada, que terceros vulneren los bienes jurídicos protegidos". Debiendo ser analizado el asunto a la luz del caso concreto, pues el Estado tampoco puede ser responsable de todas las acciones de los particulares».

1681. En materia de las contribuciones doctrinaria de mayor relevancia en materia de reparaciones véase: Arévalo-Ramírez, W., Rousset-Siri., A. (2021). «Inter-American Commission on Human Rights (IACHR) and Inter-American Court of Human Rights» (IACtHR). *Oxford Bibliographies*. Recuperado de: https://bit.ly/3iVwjPu.

1682. Véase: El primer caso de reparaciones complementarias, CtIDH. Aloeboetoe v Surinam, Reparaciones y Costas (Ser C.) No. 15 §46 (10 Sep. 1993). CtIDH. Suárez Rosero v. Ecuador, Reparaciones y Costas (Ser C.) No. 44 §68-76 (20 Ene. 1999)., CtIDH. Olomedo Bustos v. Chile, Fondo, Reparaciones y Costas (Ser C.) No. 73 §97-99 (5 Mar. 2001)., CtIDH. Comunidad Indígena Yakye Axa v. Paraguay, Fondo, Reparaciones y Costas (Ser. C) No. 125 §205 (17 jun. 2005)., CtIDH. Almonacid Arellano y otros v. Chile. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas (Ser. C) No. 154 §145-147 (26 sep. 2006).; CtIDH. Pueblos Kaliña y Lokono v. Surinam, Fondo, Reparaciones y Costas (Ser. C) No. 309. §295. (25 nov. 2015).; CtIDH. Asociación Lhaka Honhat v. Argentina, Fondo, Reparaciones y Costas (Ser. C) No 400. §332-336 (6 Feb. 2020).

1683. Rousset-Siri., A. (2018), *Ob. cit*. 199. Además, el autor menciona las consecuencias de la responsabilidad desde el pasado y hacia el futuro en relación con la reparación como consecuencia de la violación del derecho y una justa reparación, haciendo referencia a: CtIDH. Aloeboetoe v Surinam, Reparaciones y Costas (Ser C.) No. 15 §46 (10 Sep. 1993).

En general, las reparaciones buscan recompensar a quien ha sido afectado por una lesión legal, con el fin de proveer una restitución, satisfacción o compensación por el gravamen causado por el Estado[1684]. Esto no es más que el principio universalmente reconocido de reparar como consecuencia lógica y automática de la comisión de un hecho ilícito internacional[1685]. De allí que si se declara la vulneración de uno o varios derechos de la CADH el Estado tiene naturalmente la obligación de reparar, bien a través de medidas patrimoniales y/o extramatrimoniales estimadas como pertinentes por la CtIDH.

Estas formas de reparación pueden ir desde la restitución integral (cuando es posible), la compensación, la rehabilitación, la restauración, la satisfacción, la garantía de no repetición[1686], así como otras especiales que acuerde el tribunal según las características particulares del caso. La CtIDH, es especialmente conocida por plantear reparaciones que van más allá de las indemnizaciones de tipo pecuniario, sin llegar a un fin punitivo o sancionatorio[1687]. Al declarar la responsabilidad del Estado, la CtIDH le ordena cumplir con fórmulas específicas para restaurar la situación jurídica infringida[1688], en los términos del artículo 63.1 CADH[1689].

De esta manera, la Corte buscará en primer lugar recuperar el goce de los derechos conculcados a partir de sentencia. En segundo lugar, promoverá medidas para evitar la repetición de estas indeseables vulneraciones de cara al futuro[1690]. Así las reparaciones del Sistema Interamericano oscilante entre las de tipo integral para subsanar el daño y medidas extrapatrimoniales que trascienden a las víctimas e impacta seriamente en la sociedad, por ello la

1684. Shelton, D. (2015), *Ob. cit*. *«Reparation means recompense given to one who has suffered legal injury at the hands of another; to make amends, provide restitution, or give satisfaction or compensation for a wrong inflicted; it also refers to the thing done or given to the injured party»*

1685. Artículo 31ARI: «1. El Estado responsable está obligado a reparar integralmente el perjuicio causado por el hecho internacionalmente ilícito. 2. EL perjuicio comprende todo daño, tanto material como moral, causado por el hecho internacionalmente ilícito del Estado».

1686. Véanse las breves consideraciones sobre reparación realizadas por: CIDH. «Emergencia climática alcance de las obligaciones interamericanas en materia de derechos humanos», CIDH Doc. 3/21 (31 dic. 2021), 14-15.

1687. Rousset-Siri., A. (2018), *Ob. cit*. 201. El autor expresamente excluye los daños punitivos y señala que la CtIDH busca cesar los efectos de las violaciones.

1688. Sobre la función reparatoria de la CtIDH. Véase: Rousset-Siri., A. (2021), *Ob. cit*. .270.

1689. Artículo 63. CADH: «Cuando decida que hubo violación de un derecho o libertad protegidos en esta Convención, la Corte dispondrá que se garantice al lesionado en el goce de su derecho o libertad conculcados. Dispondrá, asimismo, si ello fuera procedente, que se reparen las consecuencias de la medida o situación que ha configurado la vulneración de esos derechos y el pago de una justa indemnización a la parte lesionada».

1690. Bantekas, I. & Oette., L. (2020), *Ob. cit*. 691. *«The various form of reparation can be distinguished into material and non-material (moral), remedial and preventive measures of an individual or collective nature».*

naturaleza de estas reparaciones además buscan reparar el daño social que causa la vulneración de un derecho humano[1691].

Aunque la sentencia por sí misma constituye una forma de reparación[1692], la CtIDH ha sido creativa en la forma de reparar pues atiende a la naturaleza propia de cada caso. Cuando se tratan daños ambientales la restitución a la situación anterior de violación resulta poco probable, mientras que en materia climática es irreversible desde el punto de vista científico[1693]. Así que probablemente una forma de reparación sea la creación de un fondo económico ambiental para restaurar en la medida de lo posible el territorio indígena, lo cual permitiría aumentar progresivamente la capacidad de compensación de emisiones del sumidero natural de carbono afectado.

En relación con los pueblos indígenas y su derecho a la propiedad colectiva, el Tribunal regional ha buscado asegurar el retorno de los miembros de las comunidades indígenas[1694] afectadas como una fórmula más o menos cercana a la restitución *in integrum*, pues de alguna manera empodera a los pueblos para retomar el control de sus territorios mediante la demarcación y titulación[1695], incluyendo de forma subyacente la preservación del medioambiente amenazado por actividades extractivas. Además, ha decidido acompañar estas medidas con la imposición al Estado del deber de adoptar acciones legislativas, administrativas, judiciales y de cualquier otro carácter que sean necesarias para asegurar a las víctimas el disfrute efectivo de su territorio bajo sus leyes y costumbres tradicionales[1696].

Con relación al derecho de consulta y participación la Corte ha señalado en reiteradas ocasiones que los Estados deben abstenerse de perturbar el goce pacífico del territorio a través de actividades propias o concesiones a terceros

---

1691. Véase: Rousset., A. (2021), *Ob. cit*. 271. Aclarando que: «Por ello se sostiene que el daño causado por una violación a los derechos humanos tiene una doble dimensión: por un lado, una particular, en cuanto a la individualización de la víctima concreta y su grupo familiar, y por otro, una colectiva, que se refiere al daño que se le causa a la "sociedad en su conjunto y al tejido social de esta"».

1692. CtIDH. Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni v. Nicaragua, Fondo, Reparaciones y Costas (Ser. C) No. 79 §166 (31 ago. 2001). Algo que ha reiterado en cada una sus sentencias.

1693. IPCC. (2021), *Ob. cit*.

1694. CtIDH. Comunidad Indígena Sawhoyamaxa v. Paraguay, Fondo, Reparaciones y Costas (Ser. C) No. 146, §210 (29 Mar. 2006).; CtIDH. Comunidad Indígena Yakye Axa v. Paraguay, Fondo, Reparaciones y Costas (Ser. C) No. 125 §144-154 y 217 (17 jun. 2005).

1695. CtIDH. Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni v. Nicaragua, Fondo, Reparaciones y Costas (Ser. C) No. 79 §164 (31 ago. 2001). CtIDH. Asociación Lhaka Honhat v. Argentina, Fondo, Reparaciones y Costas (Ser. C) No 400. §327 (6 Feb. 2020).

1696. Grossman., C., del Campo., A. & Trudeau., M. (2018). *International Law and Reparations: The Inter-American System*. Atlanta: Clarity Press. Recuperado de: https://bit.ly/3dyMYG2 haciendo referencia a los casos: Comunidad Indígena Xákmok Kásek v. Paraguay y Caso del Pueblo Saramaka. v. Surinam.

que afecten estos espacios[1697]. De allí que se impone la obligación de realizar con anterioridad al inicio de cualquier proyecto dentro de sus tierras la realización de la consulta previa e informada. Esto tipo de reparaciones repercute positivamente en la estabilización del clima pues promueve la participación sobre decisiones ambientales y acceso a la justicia climática, ya que la información se configura como una herramienta que mejora la gestión y protección en áreas como gobernanza de los recursos naturales, biodiversidad, cambio del uso del suelo[1698], elementos esenciales para la mitigación del cambio climático.

En marco a la protección de la periferia ambiental del derecho a la propiedad la CtIDH ha establecido como otra medida de reparación la realización de la evaluación de impacto ambiental y social en aras de prevenir la ocurrencia del daño *ex ante*. Igualmente, el Tribunal ha propuesto la restauración del territorio a través de medidas de reforestación[1699]. Esta última es un método indispensable para revitalizar los ecosistemas afectados y también para recuperar paulatinamente la capacidad de importantes sumideros naturales de gases de efecto invernadero[1700], además de ser una parte esencial para la supervivencia física y espiritual de los pueblos indígenas americanos.

En lo que respecta al núcleo duro de las reparaciones ambientales la mayor innovación que aporta el —hasta ahora único— caso en materia de protección autónoma del derecho a un medio ambiente sano destaca por la exigencia al Estado de un plan de acción en el que se incluyan las acciones estatales a seguir con miras a solventar las problemáticas asociadas al medioambiente, acceso al agua y alimentación[1701]. Lo anterior resulta especialmente interesante debido a que incluye la realización de estudios y el monitorio por parte de la CtIDH, quien evaluará la progresión de este, asegurando que la dimensión ambiental de la sentencia vaya más allá que de la declaratoria de responsabilidad[1702].

1697. CtIDH. Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni v. Nicaragua*,* Fondo, Reparaciones y Costas (Ser. C) No. 79 §153.2 (31 ago. 2001).; CtIDH. Pueblo Saramaka v. Surinam, Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas (Ser. C) No. 172 §133 (28 nov. 2007).; CtIDH. Pueblos Kaliña y Lokono v. Surinam, Fondo, Reparaciones y Costas. (Ser. C) No. 309. §282 (25 nov. 2015).

1698. CEPAL. (2019b), *ob. cit*. 48.

1699. CtIDH. Pueblo Indígena Kichwa de Sarayaku v. Ecuador, Fondo, Reparaciones y Costas (Ser. C) No. 245 §295 (27, jun. 2012). Anteriormente ha adoptado reparaciones similares en los casos: CtIDH. Comunidad Indígena Yakye Axa v. Paraguay, Fondo, Reparaciones y Costas (Ser. C) No. 125 §205 (17 jun. 2005). CtIDH. Pueblos Kaliña y Lokono v. Surinam, Fondo, Reparaciones y Costas. (Ser. C) No. 309. §295 (25 nov. 2015).

1700. Véase en este mismo sentido: COP26. Glasgow Leaders' Declaration on Forest and Land Use (02 Nov. 2021). Recuperado de: https://bit.ly/33hnjQh.

1701. CtIDH. Asociación Lhaka Honhat v. Argentina, Fondo, Reparaciones y Costas (Ser. C) No 400. §332-336 (6 Feb. 2020).

1702. CtIDH. Asociación Lhaka Honhat v. Argentina, Fondo, Reparaciones y Costas (Ser. C) No 400. §334-345 (6 Feb. 2020).

Igualmente debe mencionarse la creación del fondo de desarrollo cultural comunitario, pues no puede entenderse disociado de la cuestión ambiental/territorial, ya que las comunidades indígenas se realizan y fluyen a través de su conexión con el entorno natural que es uno más dentro de los integrantes de su comunidad. De manera que trata de consolidar una reparación a la identidad cultural de los pueblos, a través de una forma de compensación del daño material en inmaterial[1703].

Adicionalmente, como garantía reparatoria sería interesante desarrollar mecanismos previamente incorporados por la CtIDH, por ejemplo, la reparación del proyecto de vida[1704], pues implicaría cesar la conculcación de los derechos de las víctimas en especial condición de vulnerabilidad, mientras es capaz de extender sus efectos en el tiempo, generando un impacto colateral que repercute en el bienestar de la sociedad al establecer medidas concretas para promover estrategias de mitigación y adaptación climáticas con el fin de proteger derechos humanos.

La vulneración de los derechos en materia climática, permiten vislumbrar no solo el impacto lesivo en las víctimas, sino que el incumplimiento de los deberes de prevención del daño ambiental, junto con las garantías de consulta, participación, información, acceso a la justicia y debido proceso llegan a afectar sensiblemente el tejido de la sociedad democrática de forma transversal por el problema multicapas del cambio climático. De allí que tanto la opinión consultiva sobre emergencia climática como un eventual caso contencioso de esta naturaleza representan una oportunidad extraordinaria para abordar la delicada cuestión e incidir en el desarrollo de normas y políticas que salvaguarden efectivamente estos derechos mediante estas garantías de no repetición de cara al futuro[1705].

No puede dejar de mencionarse las medidas de satisfacción cuya finalidad es reconocer la dignidad de los sujetos lesionados, así como elevar la voz sobre las vulneraciones de los derechos humanos en señal de reprobación de la conducta asumida por los Estados[1706]. Estas incluyen, pero no están

1703. CtIDH. Asociación Lhaka Honhat v. Argentina, Fondo, Reparaciones y Costas (Ser. C) No 400. §338-342 (6 Feb. 2020).

1704. Esta propuesta es tomada del caso Álvarez v. Perú. Sobre el proyecto de vida véase: CtIDH. *Loayza Tamayo v. Perú*. Reparaciones y costas (Ser. C) No. 42, §147-148 (27 Nov 1998); *Caso de los Niños de la calle (Villagrán Morales y otros) v. Guatemala*. Reparaciones y Costas. (Ser. C) No. 77. Voto razonado juez A.A. Cançado Trindade §33; Ct.IDH. *Caso Furlán y Familiares v. Argentina*. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. (Ser. C) No. 246, §285 (31 Agos. 2012); CtIDH. *Caso Alvarado Espinoza y otros vs. México*. Fondo, Reparaciones y Costas. Serie C No. 370, §314. (28 Nov 2018).

1705. Especialmente si se considera que la sociedad como víctima ha sido principalmente abordad en casos contenciosos sobre la libertad de expresión y la participación política. Véase en este sentido el trabajo de: Grossman, C., del Campo, A. & Trudeau, M. (2018), *ob. cit*.

1706. Calderón,. J. (2013). «La reparación integral en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos: Estándares aplicables al nuevo paradigma mexicano». En:

limitadas a un acto de reconocimiento público de responsabilidad y formas de reparación colectiva socioeconómicas. Cuando se trata de comunidades indígenas y tribales las mismas deben tomar en consideración las costumbres y tradiciones del grupo en cuestión.

Igualmente, debe destacarse la importancia de las garantías de no repetición como forma de reparación y prevención. Entre sus diferentes manifestaciones se encuentra la modificación o adecuación del derecho interno a los parámetros convencionales, exigiéndose la adopción de medidas que eviten una nueva conculcación de los derechos. En la misma línea aparece la capacitación como una forma de promover el respeto a los derechos fundamentales, sensibilizar y capacitar a los *stakeholders* sobre los asuntos climáticos, garantizar la participación y consulta informada de las comunidades y grupos vulnerables para introducir formas alternativas de mitigación climática[1707] a todos los niveles, así como la obligación de investigar, juzgar sancionar como una forma de activar la complementariedad positiva de los Estados, asegurándose que la vulneración de los derechos pueda ser atendida en la primera línea.

De esta manera, queda establecida la posibilidad de atribuir responsabilidad climática y de reparar en cabeza de los estados interamericanos en el marco de la protección de los derechos humanos a la propiedad colectiva, a la identidad cultural, al medio ambiente, a la información, al acceso a la justicia ambiental y al debido proceso a causa del despliegue de actividades con impacto climático en territorios pertenecientes a las comunidades indígenas y tribales, desde una mirada inter e intra generacional.

Como se ha observado, entre los retos prácticos que enfrentará esta propuesta se encuentra no solo la superación de los filtros procesales para el concomimiento del asunto por parte de la CtIDH, sino la oportunidad/desafío de implementar efectivamente un fallo cambio climático en una región que cuyo corazón económico se encuentra enquistado el extractivismo intensivo. Sin embargo, la Corte Interamericana se caracteriza por ser pionera en la determinación de la violación del derecho humanos y en impactar significativamente el comportamiento de los Estados de la región, así como abrir

E., Ferrer Mac-Gregor., J., Caballero. & C., Steiner. (pp. 145-219) *Derechos humanos en la constitución. Comentarios de jurisprudencia interamericana,* Ciudad de México: SCJN|UNAM|FKA.

1707. IPCC (2019), *Ob. cit*. *«Land-use zoning, spatial planning, integrated landscape planning, regulations, incentives (such as payment for ecosystem services), and voluntary or persuasive instruments (such as environmental farm planning, standards and certification for sustainable production, use of scientific, local and indigenous knowledge and collective action), can achieve positive adaptation and mitigation outcomes (medium confidence). They can also contribute revenue and provide incentive to rehabilitate degraded lands and adapt to and mitigate climate change in certain contexts (medium confidence). Policies promoting the target of land degradation neutrality can also support food security, human wellbeing and climate change adaptation and mitigation (high confidence)».*

nuevos caminos para invitar a otros tribunales internacionales y órganos del sistema universal a desplieguen formas de protección expandidas de los derechos humanos.

Así, la situación regional y el cariz innovador de la Corte Interamericana permiten identificar el *momentum* para establecer responsabilidad internacional haciendo despegar los litigios estratégicos climáticos con base en los derechos humanos. La contribución presentada a lo largo de este capítulo permite promover desde la académica una alternativa jurídica para reforzar las obligaciones climáticas estatales e impulsar su efectividad en el marco de la CADH. De allí que la estructura de atribución propuesta representa un escudo normativo práctico para contener el impacto del cambio climático peligroso en América Latina, promoviendo la actividad litigiosa de las terceras partes interesadas mientras la ventana de acción climática continúa abierta.

RECAPITULACIÓN

Primera

La lectura histórica de la protección de individuos y el medio ambiente en el derecho internacional muestran un camino para expandir el ámbito de protección de grupos vulnerables cuando el cambio climático impacta los derechos humanos. Sin embargo, la necesidad de protección frente a este problema complejo clama por un derecho dinámico, adaptable a los tiempos corrientes, donde precisamente la integración del pensamiento jurídico holístico sea capaz de abrir puertas hacia estructuras efectivas que tiendan a la contención de los efectos adversos del cambio climático.

El fenómeno del reverdecimiento del derecho internacional de los derechos humanos a pesar de no ser nuevo, continua un proceso de consolidación en el derecho internacional. Aunque algunas decisiones de la CIJ dan cuenta del inicio de una ecologización gradual, donde se introdujeron innovaciones sobre el entendimiento y alcance de las obligaciones ambiental interestatales con impacto en la persona humana, hasta ahora esta idea ecologizadora ha recibido mayor acogida en el campo los derechos humanos, aunque no se desconoce que el tratamiento climático representa un desafío para la aplicación de instrumentos internacionales de protección.

No obstante, la integración inteligente de los derechos humanos con otras áreas de raíz ambiental es una fuente de oportunidades para dotar de exigibilidad a las obligaciones climáticas. La crisis actual ha puesto de manifiesto las alternativas regionales que pueden ser aplicables. Un enfoque climático basado en los derechos humanos fortifica la relación entre el *principio pro persona* y el *principio pro natura* asegurando la salvaguarda grupos especialmente vulnerables.

De esta manera, por una parte, se ha logrado identificar la conexión que ofrece el régimen internacional del clima, concretamente el Acuerdo de París con los derechos humanos. Mientras que, por la otra, se aprecia en el marco normativo del sistema interamericano la oportunidad para integrar armoniosamente ambos regímenes internacionales en aras de expandir el abanico de protección existente.

Segunda

La exacerbación del impacto del cambio climático sobre los derechos humanos proveniente de fuentes difusas sigue siendo un problema sin una respuesta determinada. Sin embargo, los órganos jurisdiccionales de países como Colombia, India, Países Bajos y Pakistán ofrecen a través de sus decisiones una posible salida con base en los derechos fundamentales. Modelo que ha sido replicado a través de nuevas peticiones en la India, Perú, Corea del Sur y Canadá, aunque con los matices propios de cada jurisdicción. Igualmente, las nuevas litigaciones nacionales, aunque inspiradas en las acciones iniciales han evolucionado, dando pie a la formulación de otros abordajes jurídicos, como en el caso de Francia.

El núcleo central de los casos analizados puede resumirse en que todos buscaban activar el rol judicial de supervisión y de tutela sobre derechos fundamentales con el fin de proteger a las víctimas frente al riesgo peligroso del cambio climático. La vía exitosa de acción ha sido el establecimiento indirecto de responsabilidad estatal, ya que esta opción permite superar la dificultad de determinar las cuotas exactas de contribución, trasladando la evaluación a las obligaciones de medio esperadas de un Estado diligente.

Las decisiones adjudicadas a favor de la contención climática, así como las peticiones de tutela aún pendientes de decisión se concentraron en la evaluación del cumplimiento de las obligaciones positivas por parte del Estado, es decir, en la valoración del desempeño de los órganos del Estado con relación a la adopción de planes, medidas y acciones de mitigación/adaptación ante un riesgo climático real e inminente.

Sobre la base de la investigación desarrollada a lo largo de los últimos cuatro años, el esquema de violación aplicado durante la revisión judicial estuvo centrado en: i) la acción permisiva de los Estados; ii) la creación y adjudicación de incentivos gubernamentales establecidos para desarrollar actividades no sostenibles con impacto climático; iii) políticas climáticas blandas sin proyección en el tiempo; iv) la falta de adopción medidas concretas; v) la deficiente implementación de acciones que permitieran hacer frente a las transformaciones climáticas extremas. En suma, el común denominador eran acciones/omisiones que amenazaban los derechos consagrados en las respectivas constituciones nacionales.

La muestra de casos seleccionados evidencia el valor de la activación de los órganos judiciales como mecanismo de acceso a la justicia climática, con lo cual el anclaje de la temperatura del planeta no quedaba exclusivamente en mano de los instrumentos internacionales del clima, del poder ejecutivo o legislativo. Sino que el poder judicial entraba a balancear y a supervisar la actuación de los otros poderes, demostrando la importancia del juez de derechos humanos en un contexto climático a nivel local.

El análisis discursivo de los fallos presentados en el Capítulo II permitió identificar la forma en la cual los jueces nacionales están seleccionando las

reglas de derecho aplicable, la utilización de la máxima experiencia para la valoración probatoria con alto componente científico, la coherencia y fundamentación de los argumentos jurídicos empleados para responder a la problemática, elementos inspiradores y necesarios para consolidar una vía de acción climática en el derecho procesal nacional e internacional.

El estudio de casos presentado refleja una gestión jurídica integrada del problema, donde los tribunales son los llamados a aplicar un estándar de doble control para asegurar el cumplimiento del Estado tanto en mitigación como en adaptación climático cuando esta impacta sensiblemente los derechos humanos. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que para generar una verdadera transformación en el discurso ambiental de los derechos humanos es necesario trasladar este tipo de reclamaciones a foros internacionales con un impacto extendido bien a nivel regional o universal.

Resulta fundamental elevar las peticiones a plataformas con capacidad de filtrar sus decisiones sobre un mayor número de Estados, esto con el fin de propiciar la modificación de los objetivos autoimpuesto hacia metas climáticas más ambiciosas que aseguren la protección de los grupos más vulnerables a la amenaza climática. Los órganos jurisdiccionales internacionales tienen la función de asegurar el cumplimiento de las normas primarias y secundaria de protección de forma subsidiaria, aunque debe tenerse en cuenta que este proceso de internacionalización de las litigaciones climática se encuentra en pleno desarrollo con los casos activos ante el Tribunal Europeo, la Corte Interamericana y el Consejo de Derechos Humanos.

Tercera

La litigación climática encuentra en el Sistema Interamericano un camino prometedor. Primero, la Comisión en su rol de velar por la promoción y respeto de los derechos humanos ha mostrado especial interés en expandir la protección del derecho a un medio ambiente sano. En segundo lugar, este órgano de la OEA ha abordado con éxito la violación de otros DESCA arraigados en la degradación ambiental. En tercer lugar, la CIDH ha prestado especial atención al impacto del cambio climático en los derechos humanos a través de sus audiencias públicas, informes sobre grupos vulnerables, declaraciones e informes de país en respuesta a las crecientes demandas socioambientales de los últimos años.

De allí que el órgano cuasijurisdiccional del Sistema parece contar con las herramientas necesarias para iniciar la tutela de derechos afectados por el cambio climático peligroso. De esta manera se muestra proclive a exhortar a los Estados al cumplimiento de medidas destinadas a asegurar el respeto de los derechos afectados en un contexto climático dentro de una petición. Actualmente, las solicitudes presentadas ante la CIDH tienen alta probabilidad de superar el filtro de admisibilidad. Lo anterior, sin desmerecer la complejí-

dad y obstáculos políticos que giran alrededor de este sensible tema, pues es crucial balancear las necesidades de desarrollo de los países Interamericanos.

Ahora bien, una vez superadas las cuestiones de admisibilidad, así como una eventual reticencia de los Estados para dar cumplimiento a las recomendaciones del informe final de la CIDH, las peticiones climáticas tienen grandes expectativas de éxito, si es activada la vía contenciosa de la CtIDH. Pues, en el despliegue de esta función, el tribunal ha desarrollado una creativa línea jurisprudencial sobre medio ambiente, enraizada en la protección de derechos fundamentales y en la vigencia de los DESCA, con lo cual encontraría una oportunidad única para brindar una respuesta climática adaptable a la realidad ambiental regional.

La CtIDH, tiene a su disposición las normas convencionales, instrumentos de derecho indicativo regional, así como un extenso *corpus iuris* con el que puede nutrir el alcance y contenido de los derechos humanos vulnerados en un contexto climático. Todo ello, respaldado por la innovadora doctrina sobre protección de pueblos indígenas y sobre medio ambiente. Las decisiones de la Corte, por una parte, representan un faro orientador para los jueces que integran el tribunal, mientras que, por la otra, permiten invocar el control de convencionalidad, así como exigir en el más audaz de los casos un eventual cumplimiento a través de la figura de la *res interpretata,* tanto de los pronunciamientos realizados en función contenciosa como en la consultiva.

En lo que respecta a las peticiones sometidas con anterioridad a la CIDH, cada una de ellas deja un legado para incentivar la promoción del litigio estratégico climático en la región. Las solicitudes del pueblo *Inuit* y del pueblo *Athabaskan* han sido pioneras en su tipo, aunque la primera fue desestimada y la segunda se encuentra pendiente de admisibilidad, ambas exponen situaciones y argumentos que plantean vías transformadoras para cesar violaciones de derechos humanos derivadas del cambio climático. Igualmente, la petición intergeneracional presentada por los niños y niñas de *Cité Solei,* representa un hito significativo, pues expone que la responsabilidad climática y ambiental no deja de existir ante condiciones sociopolítica adversa.

Igualmente, debe remarcarse el impacto trascendental de la OC 23-17 para los casos pendiente de decisión, así como para futuros litigios climáticos. En su interpretación autorizada de la Convención, la CtIDH plantea una nueva dimensión de acceso a la justicia ambiental y climática en América Latina, lo cual se traduce en un incentivo para exigir la tutela de derechos constantemente amenazados por el extractivismo intensivo de los recursos del continente.

Esta opinión consultiva propone la implementación de fórmulas jurídicas vinculantes basadas en una aproximación de derechos humanos para promover entre los Estados el despliegue de una conducta diligente en términos de sostenibilidad, además de plantear ideas sugestivas sobre la tutela autónoma del derecho a un medio ambiente sano y de su efectivización autónoma y subya-

cente mediante otros derechos, la implementación de principios ambientales, la aplicación de extraterritorial de la Convención, la responsabilidad horizontal de terceros, así como el deber de supervisión de los Estados, para mejorar la ratio de cumplimiento y garantía de los derechos amparados por la CADH.

Asimismo, debe incluirse la solicitud de opinión consultiva sobre emergencia climática y derechos humanos de 2023, pues constituye una oportunidad extraordinaria para brindar claridad frente a los desafíos jurídicos que plantea el cambio climático en la región, especialmente, en lo referente a la delimitación de obligaciones concretas de respetar y garantizar los derechos convencionales amenazados por el fenómeno peligroso.

De esta manera las cuatro (4) experiencias iniciales ante el sistema interamericano dan cuenta de un entendimiento profundo sobre el impacto climático en grupos vulnerable, especialmente avanzado con relación a los pueblos indígenas y futuras generaciones, por lo cual este análisis refleja una apertura hacia nuevos sujetos legitimados en diferentes categorías de vulnerabilidad. En consecuencia, se estima un incremento de solicitudes de tutela dada la construcción de un robusto *locus standi* climático.

Cabe destacar que actualmente se están produciendo vulneraciones exponencialmente graves en contextos aún más dramáticos que el planteado en las pioneras solicitudes interamericanas. A pesar de lo desafortunado de los acontecimientos, pero dado que estos hechos se producen en países sometidos a la jurisdicción de la CtIDH, el traslado de estas violaciones al conocimiento del tribunal aseguraría una mayor permeabilidad del tratamiento que pueda proporcionar la interpretación de la CADH tanto en un dictamen como en un caso contencioso. Esto atendiendo al fenómeno de integración entre el derecho internacional de los derechos humanos y el derecho constitucional que se manifiesta a través del bloque de constitucionalidad y del movimiento constitucional climático americano.

Cuarta

La CtIDH se ha ocupado de reclamos ambientales casi exclusivamente en casos que involucran violaciones de derechos de pueblos indígenas y tribales. Por ello, es altamente probable que una futura decisión/dictamen en materia climática esté centrada en este grupo especialmente vulnerable a las transformaciones de los patrones meteorológicos. De allí que se requiera un enfoque integrado para combatir el problema.

A lo largo del Capítulo IV, se ha analizado el acceso a la justicia climática en el sistema interamericano y cómo los derechos humanos pueden minimizar los impactos sufridos por las comunidades indígenas y tribales, profundamente conectadas con sus territorios ancestrales, a su vez reservorios de almacenamiento de carbono. Todo ello, como respuesta a la ausencia de control y supervisión del Estado sobre las actividades realizadas por terceros.

La fórmula propuesta en este libro involucra la protección de los derechos humanos y del medio ambiente desde una perspectiva intergeneracional, englobada por el respeto y reconocimiento de la cosmovisión indígena. Entender los derechos humanos desde el pluralismo jurídico latinoamericano podría brindar respuestas prácticas a los impactos del cambio climático peligros en la región. Además, los derechos reconocidos por la CADH son una alternativa para enfrentar un precario cumplimiento del deber de cuidado climático con relación a la falta de prevención en la vulneración de derechos humanos.

La fundamentación central ofrecida en este capítulo gira en torno a la evaluación de la debida diligencia frente al tratamiento del riesgo climático peligroso por parte de los estados signatarios de la CADH. La guía para abordar el problema puede sintetizarse a través de una fórmula de delimitación de la responsabilidad que incluye la identificación de los derechos vulnerados como consecuencia de la falta de cumplimiento de los compromisos climáticos asumidos voluntariamente por los Estados Interamericanos.

Concretamente, con respecto a los derechos de propiedad colectiva, a un medio ambiente sano, acceso a la información, a la participación pública en la toma de decisiones ambientales, así como el acceso a la justicia y al debido proceso. Estos derechos plantean diversas formas de vulneración que pueden ser abordadas desde las obligaciones sustantivas y procedimentales.

En cuanto a la atribución de responsabilidad esta requiere verificar la previsibilidad del daño y el interés compensatorio para exigir un comportamiento mínimo del Estado que prevenga un daño significativo en materia ambiental y sobre los derechos humanos. El mayor desafío se localiza en determinar si el deber de cuidado hacia el grupo vulnerable se ha cumplido.

Los instrumentos de *soft law* y *hard law* que conforman el *Corpus iuris* contienen los lineamientos para definir cuáles son los estándares mínimos requeridos para fusionar las obligaciones y determinar si el comportamiento estatal se ajusta a esta expectativa razonable de conducta interamericana, independientemente de que se produzca o no el daño. Esto incluye los compromisos asumidos a través de las NDC y otras reglas provenientes del régimen del clima, así como de diversos instrumentos ambientales que permiten avanzar en la interpretación convencional actual. Asimismo, debe incluirse la evaluación de los indicadores para medir la situación de progreso de derechos según los estándares interamericanos.

En síntesis, la atribución de responsabilidad responde a la evaluación de debida diligencia del Estado (artículo 4 ARI). Además, esta evaluación debe incluir el acceso a una protección judicial adecuada para cada uno de los derechos en la jurisdicción nacional, así como la acreditación del incumplimiento de las obligaciones especiales en materia ambiental y sobre pueblos indígena.

De esta manera es posible exigir el control y supervisión de la actuación del Estado frente al cambio climático ante el tribunal interamericano. El mecanismo antes señalado permite restituir aquellas situaciones jurídicas

infringidas a causa de un comportamiento estatal por debajo de los estándares constitucionales y convencionales. Así, los pueblos indígenas y tribales tienen la posibilidad de acudir al sistema para romper con la paradoja de la ineficacia en la mitigación climática y consecuente cascada de vulneración de los derechos humanos.

En el Capítulo IV se demostró que existe un marco jurídicamente vinculante para atribuir la responsabilidad del Estado frente a la violación de los derechos convencionales por riesgo climático. La emergencia climática exige una ampliación de la responsabilidad internacional sustentada en bases argumentativas robustas (pluralismo y derechos humanos) que promueven litigios estratégicos en el sistema interamericano para ayudar a alcanzar la meta climática.

Bajo la presente propuesta metodológica, la atribución de responsabilidad tendría un impacto significativo más allá de la cosa juzgada debido al efecto de las decisiones de la Corte Interamericana en la arquitectura jurídica nacional de los Estados parte de la Convención. Un fallo/dictamen donde se determine la responsabilidad internacional del Estado, generaría una transformación social con capacidad para mejorar la escala de valores ambientales/climáticos en la región. Este enfoque impacta el comportamiento de los emisores directos e indirectos de gases de efecto invernadero, ecologizando la base de derechos humanos utilizada por los formuladores de políticas públicas regionales.

Esta obra espera contribuir a la edificación de una narrativa de responsabilidad climática multicéntrica, aunque se es consciente de que sigue siendo un problema ávido de respuesta universal. A primera vista, puede pensarse solo en los veintiún (21) Estados sujetos a la jurisdicción de la CtIDH. Sin embargo, este tipo de decisiones interamericanas son fuente de perspectivas inspiradoras para otros mecanismos de protección internacional, dejando una huella más allá del sistema regional.

Las ideas aquí esbozadas pueden traducirse también como una apuesta a favor de la fertilización cruzada entre los tribunales regionales de derechos humanos[1708] y de otras formas de protección, pues el objetivo es plantear una alternativa para ampliar el alcance de estos derechos frente al cambio climático. En suma, la riqueza jurisprudencial de la CtIDH ha contribuido sustancialmente a la evolución de los asuntos ambientales en las últimas décadas. Se espera que este Tribunal siga desarrollando su actividad judicial con su habitual progresividad en el contexto climático de los derechos humanos.

1708. Sobre el diálogo entre las Cortes regionales y su papel legitimador véase: Sandholtz, W. (2021). «Human rights courts and global constitutionalism: Coordination through judicial dialogue». *Global Constitutionalism*, *10* (3), 439-464.

BIBLIOGRAFÍA

Normas y otros documentos de Derecho Internacional (orden cronológico)

Normas de Derecho Internacional

- Organización de Naciones Unidas [ONU|UN]. Carta de las Naciones Unidas. 26, jun. 1945
- Declaración Americana sobre Derechos y Deberes del Hombre. Acta Final Novena Conferencia Internacional de los Estados Americanos Doc. Res. XXX, 30 mar. 1948.
- OEA. Carta de la Organización de Estados Americanos. 30 abr. 1948. U.N.T.S. No. 1609. Vol. 119.
- Declaración Universal de los Derechos Humanos. GA. Res. 217.ª (III), (10 dic. 1948).
- Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, nov. 4, 1950.
- Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. 16 dic. 1966.
- Convención Americana sobre Derechos Humanos. Conferencia Especializada Interamericana sobre Derechos Humanos (B-32) 22 nov. 1969.
- Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, 23 may. 1969, U.NT.S, vol. 1155.
- Declaración de Estocolmo sobre el Medio Ambiente Humano, Doc. ONU A/CONF.48/14/Rev.1 (16 de jun. 1972).
- Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres 1973.
- OEA. AG/RES.372 (VII-0/78) de 1 jul. 1978.
- Estatuto de la Comisión Interamericana. Doc. OEA Res. 447, oct. 1979.
- OEA. Estatuto de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Doc. OEA Res. 448, oct. 1979.

- Convención Relativa a los Humedales de Importancia Internacional Especialmente como Hábitat de Aves Acuática 1982.
- Convenio para la Protección y el Desarrollo del Medio Marino en la Región del Gran Caribe. En vigor (11 oct. 1986).
- Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (A-52), 17 nov. 1988.
- Convenio sobre Pueblos Indígenas y Tribales, 7 jun. 1989.
- Convención sobre los Derechos del Niño (1989). UNTS. Vol1577. 20 nov. 1989.
- Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo. ONU. Doc. A/CONF.151/26 vol. 1 (3-14 jun. 1992).
- Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, 20 ene. 1994, ONU Doc. A/RES/48/189.
- OEA. Carta Democrática Interamericana. 28 Período Extraordinario de Sesiones OEA Doc. Res. AG/Res1 (XXVIII-E/01) 11 Sep. 2001.
- CtIDH. Reglamento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. 49 Ses. (16-25 Nov. 2000). Modificado 85 Ses. (16-28 Nov. 2009).
- Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas ONU. AGRO 61 Sesión., U.N Doc. A/61/53 (13 sep. 2007).
- Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. 10 dic. 2008.
- GA Res. 65/162, (20 Dec. 2010).
- CIDH. Reglamento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Modificado 147 Ses. (2. Sept. 11). En vigor (1 ago. 2013).
- Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. AG Res. 2888 (XLVI-O-16). 14 jun. 2016.
- ONU. Acuerdo Regional sobre Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe. En vigor (22 abr. 2021).

Documentos no vinculantes del Sistema Universal (orden cronológico)

- Int'l Law Comm'n. Draft of articles on the law of treaties with commentaries on its Eighteen Session, U.N. Doc. A/CN.4/183 at 218 § 4 (1966).
- Informe de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano (1972) UN. Doc. A/CONF.48/14. Rev.1, (5-16 Jun.1972).
- GA Res.2997 (XXVII), (Dec. 15, 1972).

- ONU. Carta Mundial de la Naturaleza. 37 Sesión, ONU. Doc. A/Res. 37/7 (28 oct. 1982).
- ONU. Declaración sobre el Derecho al Desarrollo. GA Doc. A/ Res.41/128 (4 dic. 1986).
- U.N. Secretary-General. Development and International Co-operation: Environment. Report of the World Commission on the Environment and Development. U.N. Doc. A/42/ 427 (Aug. 4, 1987).
- Conferencia Mundial de Derechos Humanos. Declaración y Programa de Acción de Viena. U.N. Doc. A/CONF.157/23 (25 Jun. 1993).
- UNESCO. Declaración UNESCO sobre las Responsabilidades de las Generaciones Actuales para con las Generaciones Futuras, (12 nov. 1997).
- UN CESCR, General Comment No. 14, The Right to the Highest Attainable Standard of Health, U.N. Doc. E/C.12/2000/4 (2000).
- Int'l Law Comm'n. Draft of articles on state responsibility on its Fifty-third Session U.N. Doc. A/56/10 (Apr. 23-Jun.1 & Jul. 1- Aug. 10 2001).
- Int'l Law Comm'n. Draft of articles on prevention of transboundary harm from hazardous activities with commentaries on its Fifty-third Session U.N. Doc. A/56/10 (apr. 23-jun.1 & jul. 1- aug. 10 2001).
- ONU. Declaración de Johannesburgo sobre el Desarrollo Sostenible. ONU. Doc. A/CONF.199/20 (4 sept. 2002).
- OHCHR. General Comment No. 15 (2003) on the Right to Water E/C. 12/ 2002/11. (20 Jan 2003).
- Int'l Law Comm'n Rep. on the Fragmentation of International Law: Difficulties Arising from the Diversification and Expansion of International Law of its Fifty-eighth Session, U.N. Doc. A/CN.4/L.682 at 178 (April 13, 2006).
- HRC, Report of the Office of the United Nations High Commission for Human Rights on the Relationship between Climate Change and Human Rights, UN Doc. A/HRC/10/61 (Jan. 15, 2009).
- HRC, Report Independent Expert John Knox on the issue of human rights obligations relating to enjoyment of a safe, healthy and sustainable environment), U.N. Doc. A/HRC/22/43. (24 Dic. 2012).
- UNHRC. A/HRC/25/53 (30 Dic. 2013).
- UNHRC. A/HRC/28/61 (3 Feb. 2015).
- A/HRC/34/49 (2017) (19 Ene. 2017).
- OHCHR. General Comment No. 24 on State Obligations under the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights in the Context of Business Activities. E/C.12/GC/24 (23 Jun. 2017).

- UNHRC, Informe del Relator sobre los derechos de los pueblos indígenas, U.N. Doc. A/HRC/36/46 §22. (01Nov. 2017).
- U.N. Secretary-General, A/HRC/37/58 Report of the Special Rapporteur on the issue of human rights obligations relating to the enjoyment of a safe, clean, healthy and sustainable environment.
- OHCHR A/HRC/38/21 (23 Abr. 2018).
- UNGA. Toward a global pact for the environment. U.N. Doc. A/72/L.51 (7 May. 2018).
- UNHRC A/73/188 (19 Jul. 2018).
- UNHRC. Consentimiento libre, previo e informado: un enfoque basado en derechos humanos: Estudio del mecanismo de expertos sobre derechos humanos. U.N. Doc. A/HRC/39/62 de (10 ago. 2018).
- U.N. Secretary-General. Report on gaps in international environmental law and environment-related instruments: towards a Global Pact for the Environment: report of the Secretary-General, U.N Doc. A/73/419 (30 nov. 2018).
- WHO. Director-General, Health environment and climate change Draft WHO global strategy on health, environment and climate change: the transformation needed to improve lives and well being sustainably through healthy environments. WHO. Doc. Res. A72/15 Resolution (18 April 2019).
- U.N. Secretary-General, Report of the Special Rapporteur David Boyd on the issue of human rights obligations relating to the enjoyment of a safe, clean, healthy and sustainable environment, U.N Doc. A/74/161 (July 15, 2019).
- UNHR| COEIGWG. Legally binding instrument to regulate, in international human rights law, the activities of transnational corporations and other business enterprise (Second revised draft 6/08/2020).
- Int'l Law Comm'n Rep. on the Protection of the Atmosphere of its Seventy-second Session, U.N. Doc. A/76/10 at. 189-197 (2021).
- UNHRC. A/76/197 (19 jul. 2021).
- UNHRC, los derechos humanos y los pueblos indígenas U.N. Doc. A/HRC/4/11 (8 oct. 2021).
- UNHRC, el derecho humano a un medio ambiente sin riesgo, limpio, saludable y sostenible. U.N. Doc. A/HRC/48/L.23. Rev.1 (8 oct. 2021).
- HRC, mandato del relator sobre la promoción y protección de los derechos humanos en el contexto del cambio climático. U.N. Doc. A/HRC/48/14 (8 oct. 2021).
- COP26. Glasgow Leaders' Declaration on Forest and Land Use (02 nov. 2021).

- Maastricht Principles on The Human Rights of Future Generations (3/02/2023).
- UNGA Res A/77/L.58 (1 Mar. 2023).
- United Nations System Common Principles on Future Generations (4 May 2023).
- UNCRC. Draft General Comment No. 26 (2023) on Children's Rights and the Environment with a special Focus on Climate Change.
- UNGA A/RES/77/276, (4 de abril de 2023).

Documentos no vinculantes de la OEA

- OEA. Acceso a la información pública: fortalecimiento de la democracia. OEA Doc. AG/Res.1932 (XXXIII-O/03) (10 jun. 2003).
- OEA Doc. AG/ RES 2429. Derechos humanos y cambio climático en las Américas, (3 jun. 2008).
- OEA Doc. AG/RES. 2588. El cambio climático en los países del hemisferio (7 jun. 2011).
- OEA Doc. AG/RES. 2818. El cambio climático en el marco del desarrollo sostenible en el hemisferio (4 jun. 2014).

Documentos no vinculantes de la CIDH

- Derechos de los pueblos indígenas y tribales sobre sus tierras ancestrales y recursos naturales. Normas y jurisprudencia del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Doc. OEA 56/09 OEA/Ser.L/V/II. 30 Dic. 2009.
- OEA/ GTPSS. (2012) Aprobación de indicadores de progreso para medición de derechos contemplados en el Protocolo de San Salvador. Doc OEA. AG Res. 2713, 4 Jun. 2012.
- OEA/ GTPSS. (2012) Adopción de mecanismos de seguimiento para la implementaciónn del Protocolo de San Salvador. Doc. OEA. AG Res. 282/23, 4 Jun. 2014.
- Pueblos indígenas comunidades afrodescendientes industrias extractivas CIDH Doc. 47/15 (31 dic. 2015).
- OEA/Ser.L/V/II.161 Doc. 27/17. 20 Mar. 2017. CIDH. Plan Estratégico 2017-2021. REDESCA. Agenda Estratégica 2021-2023.
- Empresas y Derechos Humanos: Estándares Interamericanos. Doc. OEA /Ser.L/V/II. | CIDH/ REDESCA INFO 1/19. 1 nov. 2019.
- Informe Anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 2019. III Informe Anual de la REDESCA. Doc. 5 OEA/Ser.L/V/II.

– IV Informe Anual REDESCA. Doc. 28 OEA/SER.L/V/II. (24 Feb. 2020).
– Digesto de decisiones sobre admisibilidad y competencia de la Comisión interamericana de Derechos Humanos. Doc. OEA 20. OEA/Ser.L/V/II.175. 4 mar. 2020.
– Derecho a la libre determinación de los pueblos indígenas y tribales. Doc OEA /Ser.L/V/II 413/21. (28 dic. 2021).
– Emergencia climática alcance de las obligaciones interamericanas en materia de derechos humanos, CIDH Doc. 3/21 (31 dic. 2021).
– Pobreza, cambio climático y DESCA en Centro América y México en el contexto de movilidad humana, CIDH /REDESCA. OEA/Ser.L/V/II. doc.158/23 (28 jul. 2023).

Documentos no vinculantes del Foro de las Islas del Pacífico

– Pacific Islands Forum Secretary. Forum comuniqué fiftieth (50th) Pacific Islands Forum (13-16 Aug 2019).
– Propuesta de las Misiones Permanentes de los Países Bajos y Fiji ante las Naciones Unidas, Documento de Elementos de la Declaración para las Generaciones Futuras (2022).

Decisiones (orden cronológico)

Competencia contenciosa de la CtIDH

– Velásquez Rodríguez v. Honduras, Excepciones Preliminares (Ser. C) No. 1 (26 jun. 1987).
– Viviana Gallardo y otras v. Costa Rica, decisión del (13 nov. 1981).
– Aloeboetoe v Surinam, Reparaciones y Costas (Ser C.) No. 15 (10 Sep. 1993).
– CtIDH. Suárez Rosero v. Ecuador, Reparaciones y Costas (Ser C.) No. 44 (20 Ene. 1999).
– «Niños de la Calle» Villagrán Morales y otros v. Guatemala,, Fondo (Ser. C) No .63, (19 nov. 1999).
– Baena Ricardo v. Panamá. (Ser. C) No. 72 (2 Feb. 2001).
– Olomedo Bustos v. Chile, Fondo, Reparaciones y Costas (Ser C.) No. 73 (5 Mar. 2001).
– Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni v. Nicaragua, Fondo, Reparaciones y Costas (Ser. C) No. 79, (31 ago. 2001).

- Bámaca Velásquez V. Guatemala. Reparaciones y Costas (Ser. C) No. 91 (22 Feb. 2002).
- Myrna Mack Chang v. Guatemala, Fondo, Reparaciones y Costas (Ser. C) No. 101. (15 Nov. 2003). (Voto concurrente del Juez Sergio García Ramírez).
- Hermanos Gómez Paquiyauri v. Perú, Fondo, Reparaciones y Costas (Ser. C) No. 110 (8 jul. 2004).
- Tibi v. Ecuador, Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas (Ser. C) No.114 (7 Sep. 2004). (Voto concurrente del Juez Sergio García Ramírez).
- Caesar v. Trinidad y Tobago. Fondo, Reparaciones y Costas (Ser. C), (11 Mar. 2005).
- CtIDH. Comunidad Moiwana V. Surinam, Fondo, Reparaciones y Costas (Ser. C) No. 124. (15 Jun. 2005). (Voto razonado Juez Antonio Cançado Trindade).
- Comunidad Indígena Comunidad Indígena Yakye Axa v. Paraguay, Fondo, Reparaciones y Costas (Ser. C) No. 125, (17 Jun. 2005).
- Comunidad Indígena Sawhoyamaxa v. Paraguay, Fondo, Reparaciones y Costas (Ser. C) No. 146, (29 Mar. 2006).
- Claude Reyes v. Chile, Fondo, Reparaciones y Costas. (Ser. C) No.151 (19 Sep. 2006).
- Almonacid Arellano y otros v. Chile. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas (Ser. C) No. 154, (26 sep. 2006).
- Acevedo Jaramillo y otros v. Perú, Interpretación de la Sentencia de Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. (Ser. C) No.144 (24 Nov. 2006).
- Nogueira de Carvalho v. Brasil. Excepciones Preliminares y Fondo (Ser. C) No.161 (28 Nov. 2006).
- Boyce y otros v. Barbados, Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas (Ser. C) No. 169 (20 Nov. 2007).
- Pueblo Saramaka v. Surinam, Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas (Ser. C) No. 172 (28 nov. 2007).
- Caso Salvador Chiriboga v. Ecuador, Excepción Preliminar y Fondo (Ser. C) No. 179 (6 May. 2008).
- Pueblo Saramaka. Interpretación de la Sentencia de Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas (Ser. C) (12 Ago. 2008).
- Kawas Fernández v. Honduras, Fondo, Reparaciones y Costas. (Ser. C) No. 196 (3 Abr. 2009).
- Comunidad Indígena Xákmok Kések v.Paragua, Fondo, Reparaciones y Costas (Ser. C) No .214, 24 Ago. 2010).

- Rosendo Cantú v. México. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia (Ser. C) No. 225 (31 ago. 2010).
- López Mendoza v. Venezuela, Fondo, Reparaciones y Costas (Ser. C) No. 233 (1 Sep. 2011).
- Pueblo Indígena Kichwa de Sarayaku v. Ecuador, Fondo y Reparaciones. (Ser. C) No. 245 (27 jun. 2012).
- Gelman v. Uruguay, Supervisión de Cumplimiento de Sentencia (Ser. C) (20 Mar. 2013).
- Luna López v. Honduras, Fondo, Reparaciones y Costas. (Ser. C) No. 269. (10 Oct. 2013).
- Brewer Carías v. Venezuela, Excepciones Preliminares (Ser. C) No. 278 (26 May. 2014).
- Pueblos Indígenas Kuna de Madungandí y Emberá de Bayano y sus miembros v. Panamá, Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas (Ser. C) No. 284. (14 oct. 2014).
- Gonzales Lluy v. Perú. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas (Ser. C) No. 298 (1 Sept. 2015). Voto Individual concurrente del Juez Humberto Sierra Porto).
- Comunidad Garífuna Triunfo de la Cruz y sus miembros v. Honduras, Fondo, Reparaciones y Costas. (Ser. C) No. 305 179 (8 oct. 2015).
- CtIDH. Comunidad Garífuna de Punta Piedra y sus miembros v. Honduras, Fondo, Reparaciones y Costas (Ser. C) No. 304 (8 Oct. 2015).
- Pueblos Kaliña y Lokono v. Surinam, Fondo, Reparaciones y Costas. (Ser. C) No. 309. (25 Nov. 2015).
- Lagos Campos v. Perú, Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas (Ser. C) No. 340 (31 Ago. 2017). (Voto parcialmente disidente el Juez Eduardo Vio Grossi).
- Trabajadores Cesados Petroperú v. Perú, Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas (Ser. C) No. 344 (32 Nov. 2017). (Voto individual del Juez Eduardo Vio Grossi), (Voto parcialmente disidente del Juez Humberto Sierra Porto).
- Pueblo Indígena Xucuru y sus miembros v. Brasil. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas (Ser. C) No. 346 (05 Feb. 2018).
- Poblete Vilches y otros v. Chile, Fondo, Reparaciones y Costas (Ser. C) No.334 (8 Mar 2018).
- Cuscul Pivaral v. Guatemala, Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas (Ser. C) No. 359 (23 oct. 2018).
- Alvarado Espinoza y otros vs. México. Fondo, Reparaciones y Costas. Serie C No. 370 (28 Nov 2018).

– Asociación Lhaka Honhat v. Argentina, Fondo, Reparaciones y Costas (Ser. C) No 400. (6 Feb. 2020). (Voto individual disidente Eduardo Vio Grossi); (Voto individual disidente Humberto Antonio Sierra Porto).; (Voto individual disidente Ricardo Pérez Manrique).
– Lemoth Morris v. Honduras, Fondo (Ser. C) No. 432. (31 Ago. 2021).
– Baraona Bray v. Chile. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas, (Ser. C) No.481. (24 nov. 2022).

Competencia consultiva de la CtIDH

– «Otros Tratados» objeto de la función consultiva de la Corte. CtIDH. OC-1/82 (Ser. A) No. 1, (24 sept. 1982).
– El efecto de las reservas sobre la entrada en vigor de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. CtIDH. OC 2-82 (Ser. A) No. 2 (24 sept. 1982).
– Restricciones a la pena de muerte. CtIDH. OC 3-83 (Ser. A) No. 3 (08 sep.1983).
– Garantías judiciales en estados de emergencia y excepción. OC 9/87, (Ser. A) No. 9, § 30 (6 Oct. 1987).
– Interpretación de la Declaración Americana sobre Derechos y Deberes del Hombre en el Marco del Artículo 64. CtIDH. OC 10-89 (Ser. A) No. 10 (14 de jul. 1989).
– Ciertas atribuciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. CtIDH. OC 13/93, (Ser. A) No. 13, (16 Jul. 1993).
– Informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. CtIDH. OC 15-97 (Ser. A) No. 15 (14 Nov. 1997).
– El derecho a la información sobre la asistencia consular en el marco de las garantías del debido proceso legal. CtIDH. OC-16/99 (Ser. A) No. 16, (1 oct. 1999).
– Condición Jurídica y Derechos de los Migrantes Indocumentados. CtIDH. OC18-03 Serie A No. 18, (17 Sep. 2003).
– Los derechos y garantías de niñas y niños en el contexto de la migración y/o en necesidad de protección internacional. CtIDH OC 21-14 (Ser. A) No. 21, (18 Ago. 2014).
– La titularidad de derechos de las personas jurídicas en el Sistema Interamericano de derechos humanos. CtIDH. OC- 22-16 (Ser. A) No. 22, (26 feb. 2016).
– Obligaciones estatales en relación con el medio ambiente CtIDH. OC-23/17, (Ser. A) No. 23 (15 nov. 2017).

– Identidad de género e igualdad y no discriminación a parejas del mismo sexo. OC 24-17 (Ser. A) No. 24, (24 Nov. 2017). (Voto Individual concurrente del Juez Eduardo Vio Grossi); (Voto Individual concurrente del Juez Humberto Sierra Porto).
– La denuncia de la Convención Americana de Derecho Humanos y de la Carta de la Organización de Estados Americanos y sus efectos sobre las obligaciones en materia de derechos humanos. CtIDH. OC 26-20 (Ser. A) No. 26 (09 Nov. 2020).

Informes y peticiones ante la CIDH

– Informe 504/03 Petición 69-04. Admisibilidad. Comunidad de San Mateo de Huanchor v. Perú. 28 de febrero de 2003.
– Petition 1413-05 CIDH. Sheila Watt-Cloutier with support of Inuit Circumpolar Conference v. United State of America (2005).
– Decision 1413-05 Sheila Watt-Cloutier with support of Inuit Circumpolar Conference v. United State of America (16 nov. 2006).
– Seeking relief from violations of the rights of arctic Athabaskan peoples resulting from rapid Arctic warming and melting caused by emissions of black carbon by Canada. Athabaskan People Law v. Canada. (23 abr. 2013).
– Informe 62/14 Petición 1216-03. Admisibilidad. Quishque-Tapayrihua v. Perú. 24 de Julio de 2014.;
– Informe No. 4/15, Petición 582-01. Admisibilidad. Raúl Rolando Romero Feris. Argentina. 29 de enero de 2015.
– Informe No. 67/15, Petición 211-07. Admisibilidad. Jorge Marcial Tzompaxtle Tecpile y otros. México. 27 de octubre de 2015, §34.
– Informe No. 30/17, Petición 1118-11. Admisibilidad. Comunidad Maya Q'eqchi' Agua Caliente. Guatemala. 18 de marzo de 2017.
– Petition and request for precautionary measures CIDH. Six childrend of Cité Soleil Haití and Sakala Community Center for peaceful alternative petitioners. (2021).

Informes y resoluciones de Comisión Africana sobre Derechos Humanos y de los Pueblos

– African Commission on Human and People's Rights. Social and Economic Rights Action Centre and Centre for Economic and Social Rights v. Nigeria (2001).
– African Commission on Human and People's Rights. Res. 489 on the Recognition and Protection of the Right of Participation, Governance

and Use of Natural Resources by Indigenous and Local Populations in Africa', ACHPR/Res. 489 (LXIX) 2021.

– African Commission on Human and People's Rights. Zero Draft In relation to the Study on the Impact of the Climate Change on Human and Peoples' Rights in Africa (2023).

Jurisprudencia y peticiones ante el TEDH

– Öneryildiz Turgut v. Turk., No. 1411/03; 2008.
– Papastavrou v. Greece, No. 46372/99. 2003.
– Lopez Ostras v. Spain No. 16798/90 1994.
– Guerra v. It. No. 116/1996/735/932/1998 90. 1998.
– Handölsdalen Sami v. Swed. No. 39013/04. 2010.
– Duarte Agostinho and Others v. Portugal and 32 Others (no. 39371/20)
– Duarte Agostinho v. Portugal *et al* (2020). 3971/20 (02 Sep. 2020) Complaint. Law.
– Duarte Agostinho *et al* v. Portugal *et al*, Statement Request No. 39371/20 (13 Nov. 2020).
– Council of Europe Commissioner for Human Rights. ECHR No. 39371/20 Duarte Agostinho *et al* v. Portugal *et al*., Third party intervention (5 May. 2021).
– Verein KlimaSeniorinnen Schweiz and Others v. Switzerland (No. 53600/20).
– Carême v. France (No. 7189/21).
– Müllner v. Austria (No. 18859/21).
– Greenpeace Nordic and Others v. Norway (No. 34068/21).
– Uricchio v. Italy and 31 other States (No. 14615/21).
– De Conto v. Italy and 32 other States (No. 14620/21).
– The Norwegian Grandparents' Climate Campaign and Others v. Norway (No. 19026/21).
– Soubeste and four other applications v. Austria and 11 Other States4 (Nos. 31925/22, 31932/22, 31938/22, 31943/22 and 31947/22).
– Cangi *et al*. v. Türkiye (No. 48173/18).
– Humane Being and Others v. the United Kingdom (No. 36959/22)
– Plan B. Earth and Others v. the United Kingdom (No. 35057/22).
– Engels v. Germany (No. 46906/22).
– Cangi *et al*. v. Türkiye (No. 48173/18). Voto parcialmente disidente del juez Frédéric Krenc.

Decisiones y dictámenes sobre procedimientos especiales del sistema universal

- CRC. Decision adopted by the Committee on the Rights of the Child under the Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on a communications procedure in respect of Communication No. 104/2019, Doc. CRC/C/88/D/104/2019.
- CCPR, Dictamen aprobado por el Comité a tenor del artículo 5, párrafo 4 del Protocolo Facultativo. Comunidad Indígena Campo Agua'e v. Paraguay, U.N. Doc. CCPR/C/132/D/2552/2015 (12 Oct.2021).
- CCPR/C/135/D/3624/2019. Daniel Billy *et al* v. Australia (21 Jul. 2022).

Corte Internacional de Justicia

- Corfu Channel (U.K v. Alb.), Preliminary objections, 1948 Rep. 27-28. (Mar.1948).
- Corfu Channel (UK Gr. Brit. N. Ir. v. Alb.), Judgment, 1949, ICJ. 22 (April 1949).
- Certain Expenses of the United Nations (Article 17, paragraph 2, of the Charter), Advisory Opinion, 1962 ICJ. (July 20).
- Nuclear test case (Austl.v. Fr.), Judgment, 1974 ICJ. 270 § 53 (December 1974).
- Certain Phosphate Lands in Nauru (Nauru v. Austl.), Preliminaty Objections, Judgment, 1992 ICJ. 248-250 § 16-21(June 1992).
- Application of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide (Bosn. & Herz v. Serb. & Montenegro), Order further requests for the indication of provisional measures, 1993. ICJ. (Sep. 1993). (Separate opinion of Judge ad hoc Lauterpacht).
- Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons, Advisory Opinion, 1996 ICJ. 244, (July 8).
- Gabcíkovo-Nagymaros Project (Hung. v. Slovk.), Judgment, 1997 ICJ. (September 25) (Separate Opinion of Judge Weeramantry)
- Legal Consequences of the Construction of a Wall in the Occupied Palestinian Territory, Advisory Opinion, 2004 ICJ. (July 9).
- Armed Activities on the Territory of the Congo (DRC v. Uganda), 2005 ICJ. 78-79 (December 19).
- Memorial of Colombia, Aerial Herbicide Spraying (Ecuador v. Colm.), 2008 ICJ. Pleading (2 Jun. 2008),
- Certain questions of mutual assistance in criminal matters (Djib. v. Fr.), Judgment, 2008. ICJ. Rep. (Jun. 4).

- Dispute regarding navigational and related rights (Costa Rica v. Nicar), Judgment, 2009, ICJ. § 141-144. (13 July).
- Pulp Mills on the River Uruguay (Arg. v. Uru.), Judgment, 2010, ICJ. 58 (April 20). (Separate Opinion of Judge Cançado Trindade).
- Accordance with International Law of the Unilateral Declaration of Independence in Respect of Kosovo, Advisory Opinion, 2010 (22 July) 415 §26-27.
- Whaling in the Antarctic (Austl.v. Jap.), Judgment, 2014. ICJ. § 56 (March 31)., (Separate opinion of Judge Cançado-Trindade.
- Certain Activities Carried Out by Nicaragua in the Border Area (Costa Rica v. Nicar.) and Construction of a Road in Costa Rica along the San Juan River (Nicar v. Costa Rica), Judgment, 2015, ICJ. 101-120. (December 2015).
- Dispute over the Status and Use of the Waters of the Silala (Chile v. Bol.), Judgment, 2022. ICJ. (December 2022)., (Declaration of Judge Charlesworth).
- Obligations of States in respect of Climate Change, Request for Advisory Opinion, (April 2023).

Tribunal Internacional de Derecho del Mar

- The MOX Plant (No. 10) (Ir. v. U.K.), Case No. 10, Provisional Measures of Dec. 3, 2001, ITLOS.
- Responsibilities and Obligations of States with Respect to Activities in the Area (No. 17) Case No. 17, Advisory Opinion of Feb. 1, 2011, ITLOS Rep., 10.
- Request for an Advisory Opinion submitted by the Commission of Small Island States on Climate Change and International Law (No.31), introduced on 12 Dec. 2022.

Jurisprudencia dentro de jurisdicciones nacionales

- Tribunal Supremo de Filipinas. Menores Oposa v. Secretario del Departamento de Medio Ambiente y Recursos Naturales. (1991).
- Corte Constitucional de Colombia, Sentencia T-411/92 (17 jun. 1992).
- Corte Suprema de Chile. Empresa Forestal Trillium Ltda (19 de mar. 1997).
- Corte Constitucional de Colombia, Sentencia C-431/00 (12 abr. 2000).
- Green National Tribunal on its own motion Sher Singh v. State of Himachal Pradesh *et al*. (6 Feb. 2014).

- The Hague District Court. Urgenda Foundation v. State of the Netherlands, judgment (24 jun. 2015).
- Corte Constitucional de Colombia, sentencia T622/16 (27 Ene. 2015).
- Lahore High Court. Leghari v. Federation of Pakistan, judgment (4 Sep. 2015).
- Corte Constitucional del Ecuador, Sentencia No. 218-15-SEP-CC (21 Sep. 2015).
- Corte Constitucional de Colombia, sentencia C-035/16. (8 Feb. 2016).
- Corte Constitucional de Colombia, T- 622 (10 nov. 2016).
- Corte Alta de Uttarakhand de Nainital. Petición Writ (PIL), No 126. Sentencia (20 Mar. 2017).
- Corte Suprema de Colombia. Futuras Generaciones v. la Presidencia de la República de Colombia *et al*., sentencia 4360-2018 (5 de abr. 2018).
- The Hague Court of Appeal. Urgenda Foundation v. State of the Netherlands, judgment (9 oct. 2018).
- Corte Constitucional de Colombia, Sentencia C-032/19 (30 Ene. 2019).
- Corte Constitucional de Colombia, Sentencia T-614/19 (16 dic. 2019).
- Supreme Court of Netherlands. Urgenda Foundation v. State of the Netherlands, judgment (20 dic. 2019).
- PSB *et al*. v. Brazil (on Climate Fund) (06 May. 2020).
- Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso administrativo. Personería Municipal de Ibagué v. y Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible *et al*. Rad: 73001-23-31-000-2011-00611-03 (14 Sept. 2020).
- PSB *et al*. v. Brazil (on deforestation and human rights) (11 nov. 2020).
- Federal Court. Lho'imggin *et al*. v. Her Majesty the Queen in the Right of Canada, decision granting motion to strike and dismissing the case (16 Nov. 2020).
- Mathur, *et al*. v. Her Majesty the Queen in Right of Ontario, decision motion to dismiss denied (12 Nov. 2020).
- Norwegian Supreme Court. Greenpeace Nordic Ass'n v. Ministry of Petroleum and Energy. (22 Dic. 2020).
- German Federal Constitutional Court in Neubauer, *et al*. v. Germany (24 Mar. 2021).
- The Hague District Court. Milieudefensie *et al*. v. Royal Dutch Shell plc., judgment (26 May. 2021).
- Conseil d'Etat. Commune de Grande-Synthe v. France, judgment (11 Jun. 2021).
- Notre Affaire à Tous and Others v. France, judgment (14 Oct. 2021).

- Tribunal Regional Federal Da 4 Region. Institute of Amazonian Studies (IEA) v. Brazil, (7 Dic. 2021).
- Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Procuraduría General de la Nación v. la Presidencia de la República de Colombia. Rad: 25000234100020220155l-00 (23 feb. 2023).
- Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso administrativo. Rad: 25000-23-41-000-2022-01551-01 (27 abr. 2023).
- Juzgado Promiscuo Municipal de Cumbal-Nariño. *Diana Patricia Puenguenán et. al, «Gran Cumbal» v. SVP Business SAS et al*. Acción de tutela N.° 522274089001-2023-00095-00 (21 Jul. 2023).
- Montana District Court. Held v. Montana CDV-2020-307, judgment (14 Aug. 2023).

Laudos Arbitrales

- Trial Smelter (U.S v. Can) 3 R.I.A.A. 1907-1965 (1941).
- Iron Rhine Railway (Belg. v. Neth.) (Perm. Ct. Arb. May. 2005).
- Hamester v. Ghana, ICSID Case No ARB/07/24 (2010).

Procedimientos bajo el Protocolo de Kyoto

- Non-compliance Procedure of Greece Under the Kyoto Protocol (2007) Report. CC-2007-1/ Greece/E/B.
- Non-compliance Procedure of Croatia Under the Kyoto Protocol (2009) Report. CC-2009-1-8/ Croatia/E/B.
- Non-compliance Procedure of Canada Under the Kyoto Protocol (2008) Report. CC-2008-1/Canada/EB.
- Non-compliance Procedure of Bulgaria Under the Kyoto Protocol (2010) Report. CC-2010-1-17/Bulgaria/E/B.
- Non-compliance Procedure of Lithuania Under the Kyoto Protocol (2011) Report. CC-2011-3-8/ Lithuania/E/B.
- Non-compliance Procedure of Ukraine Under the Kyoto Protocol (2011) Report. CC-2011-2-9/ Ukraine E/B.
- Non-compliance Procedure of Romania Under the Kyoto Protocol (2011) Report. CC-2011-1-8/ Romania/E/B.
- Non-compliance Procedure of Slovakia Under the Kyoto Protocol (2012) Report. CC-2012-1-9/ Slovakia E/B.
- Non-compliance Procedure of Ukraine Under the Kyoto Protocol (2016) Report. CC-2016-1-6/ Ukraine E/B.

– Non-compliance Procedure of Monaco Under the Kyoto Protocol (2018) Report. CC-2018-1/ Monaco/E/B.
– Non-compliance Procedure of Kazakhstan Under the Kyoto Protocol (2019) Report. CC-2019-1/ Kazakhstan/E/B. (pending).

Solicitudes de Opinión Consultiva sobre Cambio Climático (orden cronológico)

– ITLOS. Request for an Advisory Opinion submitted by the Commission of Small Island States on Climate Change and International Law, 12 December 2022.
– CtIDH. Solicitud de Opinión Consultiva sobre Emergencia Climática y Derechos Humanos por parte de la República de Colombia y la República de Chile, 9 ene, 2023.
– ICJ, Obligations of States in respect of Climate Change, General Assembly Request for Advisory Opinion, 12 April 2023.

Doctrina (orden alfabético)

Abate, R. S. (2019). *Climate change and the voiceless: Protecting future generations, wildlife, and natural resources*. Cambridge University Press.

Abello, R. & Arevalo, W. (2019). «Inter-American Court of Human Rights Advisory Opinion OC-23/17: Jurisdictional, procedural and substantive implications of human rights duties in the context of environmental protection». *Review of European, Comparative & International Environmental Law*, *28*(2), 217-222.

Acheriteguy, F. (2021). «El control de convencionalidad en el contexto de la tensión entre el margen de apreciación nacional y el "ius contitutionale commune" latinoamericano». *Revista Derecho Constitucional Universidad Blas Pascal*, (2), 52-104.

Agarwal, S., *et al.* (14 May. 2020) «The Link Between Climate Change and Human Health», *Jurist.org*.

Aguilar, V., **Marciales, G.** & *et. al.* (2021). *La jurisdicción especial indígena en Venezuela como derecho propio.* Mérida: Universidad de Los Andes.

Aguilar, V., Castro, G; *et al.* (8 ago. 2121). «Cambio climático: entre pandemia, protección de los bosques y derechos territoriales indígenas». *Wataniba.*

AIDA (2020). «Proteger a las y los defensores ambientales, deber impostergable del Estado».

AIDA. (2021). «Recursos para el estudio del extractivismo».

Alexy, R. (1994). *El concepto y la validez del derecho*. Barcelona: Gedisa.

Amazon Frontlines. «Defendiendo territories». Impactos ambientales.

Amini, A., Abedi, M., Nesari, E., *et al.* (2023). «The Paris Agreement's approach toward climate change loss and damage». *World Affairs*, 186(1), 46-80.

Álvarez, I. (2021) «El principio de la utilización y participación equitativa y razonable y la protección del medio ambiente en la Convención de Naciones Unidas sobre los cursos de agua internacional». *Revista Jurídica Universidad Autónoma de Madrid* (44), 95-125.

Arévalo-Ramírez, W., Rousset., A. (2021). «Inter-American Commission on Human Rights (IACHR) and Inter-American Court of Human Rights (IACtHR)». *Oxford Bibliographies*.

Attenborough. D. (2020) *A life on our planet My Witness Statement and a Vision for the Future*. New York: Penguin Random House.

Atapattu, S. (2016). «Climate Change, Human Rights, and COP 21». *Georgetown Journal of International Affairs*, 17 (2).

Autin, W. J. (2016). «Multiple dichotomies of the Anthropocene». *The Anthropocene Review*, *3*(3), 218-230.

Aylwin, V., Betroni, S. & Castilla, K. (2023). *Impacto del cambio climático en los derechos humanos.* Institut de Drets Humans de Catalunya.

Azócar, G., Billi, *et al* (2021). «Climate change perception, vulnerability, and readiness: inter-country variability and emerging patterns in Latin America». *Journal of Environmental Studies and Sciences*, *11*(1), 23-36.

Baade., B (2020). «Due diligence and the duty to protect human rights». En H., Krieger. A., Peters. A. & L., Kreuzer. (eds.), *Due Diligence in the International Legal Order* (p. 92-108). Oxford: Oxford University Press.

Bailliet, C. (2018) «The Strategic Prudence of the Inter-American Court of Human Rights: Rejection of Requests for an Advisory Opinion». *Revista de Dereito Internacional*. (15),1, 255-276.

Banda, M. L. (2018) «Inter-American Court of Human Rights' Advisory Opinion on the Environment and Human Rights», *ASIL Insights* 22(6).

Bantekas, I. & Oette., L. (2020). *International human rights law and practice*. Cambridge: Cambridge University Press.

Barritt, E. & Sediti, B. (2019). «The Symbolic Value of Leghari v Federation of Pakistan: Climate Change Adjudication in the Global South». *King's Law Journal*, *30* (2), 203-210.

Becerra, M. & Cappuccio, E. (2013). «El Defensor Interamericano: Un nuevo sujeto procesal para garantizar el acceso a la justicia de las víctimas de violaciones de derechos humanos». *Revista Institucional de la Defensa Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires*. 3 (4), 61-66.

Beck, U. (1997). «La teoría de la sociedad del riesgo reformulada». F. Robles (trad.) *Revista Polis México*, 1(1), 171-196.

Beck, U. (2017). *La metamorfosi del mondo*. Gius. Laterza & Figli Spa.

Beck, U. & Hartmunt. R. (2022). «Escalating side effects the transformation of modern society through processes of cosmopolitanization, acceleration and increasing global risk». En: B., Bornemann., H., Knappe., P. Nanz (eds.) *The Routledge Handbook of Democracy and Sustainability* (160-161). Nueva York: Routledge.

Beck, S. & Burleson, E. (2014). «Inside the System, Outside the Box: Palau's Pursuit of Climate Justice and Security at the United Nations». *Transnational Environmental Law*, 3(1), 17-29.

Bedriñana, K. & Umaña, B. (2019). «Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Otra lectura, desde el Buen Vivir». *Revista de Paz y Conflictos*, *12*(1), 251-254.

Belfer, J. Ford, M. Maillet *et al.* (2019) «Pursuing an indigenous platform: exploring opportunities and constraints for indigenous participation in the UNFCCC». Global Environmental Politics, 19(1), 12-33.

Belloso., N. (2019). *El debate sobre la tutela institucional: generaciones futuras y derechos de la naturaleza*. Madrid: Universidad de Alcalá.

Belloso, N. (2020). «El ODS 16 en la agenda 2030 de la indefinición a algunas propuestas (iusfilosóficas) para su concreción». *Quaestio Iuris,* 13(4), 1939-1974.

Belloso., N. (2021a). «El diálogo euro-americano mediante los «diálogos judiciales»: ¿otras formas de cooperación regional para la armonización de la jurisprudencia sobre derechos humanos o algo más?». *Revista de Humanidades y Ciencias Sociales*, 8(1), 331-359.

Belloso., N. (2021b) «Dos propuestas relativas a los conflictos medioambientales: mediación ambiental y tribunal internacional ambiental». En: Sánchez., A. (ed.) *De Sevilla a Filipéia: Estudios ambientales en homenaje al profesor Marcos Augusto Romero.* Sevilla. AADMDS.

Belloso, N. (2022). «Un intento de fundamentar derechos de los no-humanos (derechos de la naturaleza) a partir del desarrollo sostenible». *Revista Catalana de Dret Ambiental*, *13*(1).

Berkes., A. (2021) «Cross-border Pollution». En: M. Gibney., G. Erdem., *et al* (eds.) *Handbook on Extraterritorial Human Rights Obligations* (pp. 434-444). Oxon: Routledge.

Bétaille, J. (2019). «Rights of Nature: Why it Might Not Save the Entire World». *Journal for European Environmental & Planning Law*, *16*(1), 35-64.

Bétaille, J. (2021). *État des conaissances. Justice écologie panorama des principals rechercher*. Mission De Recherche Droit & Justice., p.16.

Béteille, A. (1998). «The idea of indigenous people». *Current anthropology*, *39*(2), 187-192.

Bernales., G. (2019) «El acceso a la justicia en el Sistema Interamericano de protección de los derechos humanos». *Ius et Praxis,* 25, (3).

Bertamini, M. (5 May2021). «The check- Incentivizing states to pay for climate change?» *EJIL: Talk!.*

Bodansky, D. (2010). «Climate change and human rights: unpacking issues». *Georgia Journal of International and Comparative Law*, 38(3), 511-524.

Bodansky, D. (2015). «Legally binding versus non-legally binding instruments». En: S. Barrett, C. Carraro & J. De Melo. *Towards a workable and effective climate regime*.

Bodansky, D. (2023) «Advisory opinions on climate change: Some preliminary questions». *Review of European, Comparative & International Environmental Law.*

Boisson-De Chazournes, L., (2021) «Only Once … Upon a Time?. In Crisis Narratives In International Law». En: M. Mbengue. & J. D'Aspremont.) *Crisis Narrative in International Law* (pp.139-145). Leiden: Brill| Nijhoff.

Bogojević, S. (2020). «COVID-19, Climate Change Action and the Road to Green Recovery». *Journal of Environmental Law*, *32*(3), 355-359.

Bonfanti, A. (2018). «Business and Human Rights in Europe». En: A. Bonfanti (ed.) *Business and Human Rights in Europe*: *International Law Challenges*. (pp.1-8) Oxon: Routledge.

Bosselmann, K. (2009). «Environmental Ethics». En: Wölfrum, R. (ed.). *The Max Planck Encyclopedia of Public International Law*. Oxford: Oxford University Press.

Botero, E. S. (2021). «Pluralismo jurídico en Colombia: Aplicaciones jurisdiccionales edificantes». *ABYA-YALA: Revista sobre Acesso á Justiça e Direitos nas Américas*, *5*(1), 117-142.

Boyd, D. R. (2017). «Recognizing the rights of nature: lofty rhetoric or legal revolution». *Natural Resources & Environment*, *32*(4), 13-17.

Boyle, A. (2007). «Human rights or environmental rights? A reassessment». *Fordham Environmental Law Review,* 18 (3), *471-511.*

Boyle, A. & Ghaleigh, N. S. (2016). «Climate change and international law beyond the UNFCCC». En: K Gray, R. Tarasofsky &C. Carlane (eds.) *The Oxford Handbook of International Climate Change Law*. Oxford: Oxford University Press.

Boyle, A. (2018). «Climate change, the Paris Agreement and human rights». *International & Comparative Law Quarterly*, *67*(4), 759-777.

Boyle, A. (2019). «The Choice of a Treaty. Hard law versus Soft Law». En: S. Chesterman, D. Malone, S. Villalpando (eds.) *The Oxford Handbook of United Nations Treaties.* (p. 103). Oxford: Oxford University Press.

Bowman, M. (2010). «Environmental protection and the concept of common concern of mankind». En: M. FitzMaurice, M, D. Ong & P. Merkouris (eds.) *Research Handbook on International Environmental Law*. (p. 501) Cheltenham: Edward Elgar Publishing.

Bradlow, D. & Hunter, D. B. (2020). «Introduction: Exploring the Relationship between Hard and Soft International Law and Social Change». In *Advocating Social Change through International Law*. Leiden. Brill | Nijhoff.

Brems, E. (2018). «Smart human rights integration». En E. Brems & S. Ouald-Chaib (ed.) *Fragmentation and Integration in Human Rights Law: Users´ Perspectives* (p. 3). Cheltenham: Edward Elgar Publishing. R.

Brewer-Carías, A. R. (2007). «La aplicación de los tratados internacionales sobre derechos humanos en el orden interno de los países de América Latina». *Revista Instituto Interamericano de Derechos Humanos, 46,* 221-271.

Broude, T. (2019) «Complexity rules (or ruling complexity) comment on Jutta Brunnée». En: Krieger, H., Nolte, G. & Zimmermann, A. (Eds.), *The International Rule of Law: Rise Or Decline?* (pp. 232-241). Oxford: Oxford University Press.

Brunnée, J. (2007). «Common areas, common heritage, and common concern». En: D. Bodansky., J. Brunnée & E. Hey. (eds.) *The Oxford handbook of international environmental law*. Oxford: Oxford University Press.

Brunnée, J. & Toope, S. (2010). «Climate change: Building a global legal regime». En: J. Brunnée,. & S., Toope. *Legitimacy and Legality in International Law: An Interactional Account* (pp. 126-219). Cambridge: Cambridge University Press.

Brunnée, J. (2017). «International environmental law and community interests: Procedural aspects». En: Benvenisti., E & Nolte., G. (eds.) *Community Obligations in International Law*., (pp. 1-35).

Brunnée, J. (2019) «The Rule of International (Environmental) Law and Complex Problems» En: Krieger, H., Véase: Brunnée, J. (2019) «The Rule of International (Environmental) Law and Complex Problems» En: Krieger, H., Nolte, G. & Zimmermann, A. (Eds.), *The International Rule of Law: Rise Or Decline?* (pp.211-231). Oxford: Oxford University Press.

Brunnée, J. (2020). *Procedure and substance in international environmental law*. The Pocket Books of The Hague Academy of International Law. Leiden: Brill | Nijhoff.

Buckley, R & Danielson, M. (2008). «Facilitation payments in international business: A proposal to make Criminal Code», s 70.4, workable. *Australian Law Journal*, *82*(2), 92.

Buergenthal, T. & Cassel, D. (2004). «Recordando los inicios de la Corte Interamericana de Derechos Humanos». *Revista IIDH*, *39*, 11-31.

Burelli, A. A. (2003). «La prueba en los procesos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos». En: CtIDH (ed.) *Memoria del seminario: el Sistema Interamericano de protección de los derechos humanos en el umbral del siglo XXI*.(pp. 113-125). San José C.R: CtIDH.

Burger, M. & Wentz, J. (2019). «Climate change and human rights». M. Faure (ed.) *Elgar Encyclopedia of Environmental Law* (pp. 198-212). Cheltenham: Edward Elgar Publishing.

Burger, M & Tigre, M. A. (2023) Global *Climate Litigation Report: 2023 Status Review.* New York: UNEP/SABIN.

Burgorgue-Larsen, L. (2014) «La Corte Interamericana de los Derechos Humanos como tribunal constitucional». En: Von Bogdandy, A., M. Morales, Fix-Fierro, H. (Ed.) *Ius constitucionales Commune en América Latina: rasgos, potencialidades y desafíos.* (pp. 421-457). Ciudad de México: UNAM.

Calderón,. J. (2013). «La reparación integral en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos: Estándares aplicables al nuevo paradigma mexicano». En: E., Ferrer Mac-Gregor., J., Caballero. & C., Steiner. (pp. 145-219) *Derechos humanos en la constitución. Comentarios de jurisprudencia interamericana,* Ciudad de México: SCJN|UNAM|FKA.

Calderón, J. (2017) «Medio ambiente frente a la Corte Interamericana de Derechos Humanos: una ventada de protección» *Instituto Interamericano de Derechos Humanos*. 103-144.

Callicott, J. B. (1984). «Non-anthropocentric value theory and environmental Ethics». *American Philosophical Quarterly*, *21*(4), 299-309. En el mismo sentido: Leopold, A. (1987). *The land ethic* (pp. 201-226). Oxford: Oxford University Press.

Campbell, K. M. & Parthemore, C. (2008). «National security and climate change in perspective». En: K. Campbell (ed.) *Climatic Cataclysm: The Foreign Policy and National Security Implications of Climate Change* (pp. 1-25). Washington, D.C: Brookings Institution Press.

Canaris, C. W. (2006). *Dereitos Fundamentais e Dereito Privado.* Coimbra: Almedina.

Cançado-Trindade. A. (2003) «El acceso a la justicia en el internacional y las condiciones para su realización en el Sistema Interamericano de protección de los derechos humanos». *Revista Instituto Interamericano de Derechos Humanos* (37), 53-83.

Cançado-Trindade, A. A. (2015). «Principle 15», En: J. Viñuales (ed.) *The Rio Declaration on Environment and Development: A Commentary* (p. 409) Oxford: Oxford University Press.

Cançado-Trindade, A. A. (2017). «The Evolving Law on Conservation of Living Species». En: A. Cançado-Trindade (ed.) *Judge Antônio A. Cançado Trindade. The Construction of a Humanized International Law* (pp. 635-672). Leiden | Brill Nijhoff.

Cançado-Trindade, A. A. (2020a). *International Law for Humankind*. Leiden: Brill | Nijhoff.

Cançado-Trindade., A. (2020b). «Reflections on the realization of justice in the era of contemporary international tribunals». *Recueil des Cours / Collected Courses*. 408 (1).

Caney, S. (2005). «Cosmopolitan justice, responsibility, and global climate change». *Leiden journal of international law*, *18*(4), 747-775.

Caney, S. (2008). «Human rights, climate change, and discounting». *Environmental politics*, *17*(4), 536-555.

Carlson, C. J., Albery, *et al.* (2020). «Climate change will drive novel cross-species viral transmission». *BioRxiv*.

Carrasco-Quiroga, E. (2013). «Razonabilidad y proporcionalidad: criterios para la determinación de la consulta indígena en proyectos de inversión en el marco del Convenio n.° 169 de la OIT». *Revista chilena de derecho,* 40(1), 301-316.

Carrillo-Salcedo, J. A. (2000). «Derechos humanos y derecho internacional». *Isegoría, 22, 69-81.*

Carrillo-Salcedo, J. A. (2004). «El entorno histórico de la Declaración Universal de Derechos Humanos». *Anales de la Real Academia Sevillana de Legislación y Jurisprudencia*, (4), 425-436.

Carrillo Salcedo, J. A. (2007). «Soberanía de los Estados y Organización Internacional: una tensión dialéctica». In *Anales de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas* (pp. 403-411). Madrid: Ministerio de Justicia.

Carrillo-Salcedo, J. A. (2011). «Los derechos humanos y la paz: hacia una relectura de la noción de Estados civilizados». *Tiempo de paz*, (100), 101-104.

Casal, J. M. (2020). *Los derechos fundamentales y sus restricciones. Constitucionalismo comparado y jurisprudencia interamericana*. Bogotá: Temis. Bogotá.

Case Comment. (2021). Federal Courts — Justiciability — Ninth Circuit Holds that Developing And Supervising Plan To Mitigate Anthropogenic Climate Change Would Exceed Remedial Powers of Article III Court. — *Juliana v. United States*, 947 F.3d 1159 (9th Cir. 2020). *Harvard Law Review. F.*, *134*, 5., p. 1929-1936.

Castilla, K. (2022). «Cambio climático e interseccionalidad». *Working Papers «El Tiempo de los Derechos» 23.*

Carvalho, D. W. & da Rosa, R. S. M. (2023). «Climate Constitutionalism as a Foundation for Climate Litigation in Latin America». *Journal of Human Rights Practice*.

CELS (2020).«Más derechos para las comunidades indígenas por una nueva interpretación de la sentencia Lhaka Honhat».

Centre for Studies and Research. (2022) The Hague Academy of International Law.

Centro de Información Judicial. (2017) La Corte sostuvo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos no puede revocar sentencias del Máximo Tribunal argentino.

CEPAL (2015). *La economía del cambio climático en américa latina y el caribe, paradojas y desafíos del desarrollo sostenible*. Santiago: CEPAL.

CEPAL. (2018). «El acceso a la justicia ambiental en América Latina y el Caribe». En: CEPAL. *Acceso a la información, la participación y la justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe: hacía el logro de la agenda 2030 para el desarrollo sostenible*. Santiago: CEPAL.

CEPAL (2019a). *La Agenda 2030 y los Objetivos de desarrollo sostenibles una Oportunidad para América Latina y el Caribe*. Santiago: CEPAL

CEPAL. (2019b). «*Cambio climático y derechos humanos. Contribución desde y para América Latina y el Caribe»*. Santiago: CEPAL.

CEPAL. (2020) *La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible en el nuevo contexto mundial y regional. Escenarios y proyecciones en la presente crisis.* CEPAL: Santiago.

CEPAL (2021a). «La pérdida de los bosques de América Latina y el Caribe 1990-2020: evidencia estadística». *Temas Estadísticos de la CEPAL*.

CEPAL (2021b). NDC LAC seguimiento de las contribuciones nacionalmente determinadas en América Latina y el Caribe.

Chacón, M. P. (2018). «La Revolución de los Derechos Humanos Ambientales y de los Derechos de la Naturaleza». *Diario Ambiental DPI*, (28).

Chacón, M. P. (2020). «Derechos humanos ambientales». *Revista Jurídica (FURB)*, *24*(53), 9063.

Charlesworth, H. (2017). «A regulatory perspective on the international human rights system». En: P. Drahos (ed.) *Regulatory Theory: Foundations and Applications.*

Chesterman, S., Owada, H. & Saul, B. (2019). *The Oxford Handbook of International Law in Asia and the Pacific*. Oxford: Oxford University Press.

Cho, H. (1999). «An Overview of Korean Environmental Law». *Environmental Law.*, *29*, 501-513.

Cho, S. (2014). «Legal and Policy Implications on the Post-Kyoto Protocol System: A Korean Lawyer's Viewpoint». *Journal of East Asia and International Lae*,*7*, 477-491.

CIDH. (S.f) *Haití: ¿Justicia frustrada o estado de derecho? desafíos para Haití y la comunidad internacional*.

CIDH. Derechos de los pueblos indígenas y tribales sobre sus tierras ancestrales y recursos naturales. Normas y jurisprudencia del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. § 25.

Clérico, L. & Aldao, M. (2011). «La igualdad como redistribución y como reconocimiento: derechos de los pueblos indígenas y Corte Interamericana de Derechos Humanos». *Estudios constitucionales*, *9*(1), 157-198.

Climate Action Tracker (2021) «Analysis: Despite "code red" on climate, target update momentum at standstill».

Cohen, H., Grossman, N., *et al.* (2018). *Legitimacy and International Courts*. Cambridge: Cambridge University Press.

Colby, H., Ebbersmeyer, A, Heim, L. & *et al* (2020). «Judging climate change: The role of the judiciary in the fight against climate change». *Oslo Law Review*, *7*(3), 168-185.

Comisión Europea. (2019) «Avances en la acción climática Contribuciones Nacionalmente Determinadas al 2019». *Serie de Estudios Temáticos EUROCLIMA+13*. Bruselas: Comisión Europea.

Contesse, J. (2016). «Contestation and Deference in the Inter-American Human Rights System». *Law and Contemporary Problems*, *79 (2)*, 123-145.

Contesse, J. (2018) «The international authority of the Inter-American Court of Human Rights: a critique of the conventionality control doctrine». *The International Journal of Human Rights*, 22,9, 1168-1191.

Contesse, J. (2019). «Resisting the Inter-American Human Rights System». *Yale Journal of International Law* 44, 179-237.

Contesse, J. (2021). «The Rule of Advice in International Human Rights Law». *American Journal of International Law*, *115*(3), p. 367-408.

Coomans, F. (2023). «Towards 2122 and beyond: Developing the human rights of future generations». *Netherlands Quarterly of Human Rights*, *41*(1), 53-60.

Coral, A., Londoño B. & Muñoz, L. (2010). «El concepto de litigio estratégico en América Latina: 1990-2010». *Vniversitas*, *59*(121), 49-76.

Cournil, C. (2019). «L'affaire du siècle devant le juge administratif Les ambitions du futur premier recours climat français». *L'Actualité juridique. Droit administratif* (437-442).

Cox, R. (2016). «A climate change litigation precedent: Urgenda Foundation v. The State of the Netherlands». *Journal of Energy & Natural Resources Law*, *34*(2), 143-163.

Coyle, S. & Morrow, K. (2004). *The philosophical foundations of environmental law: property, rights and nature*. Oxford: Hart Publishing.

Crawford., J. (2004) *Los artículos de la Comisión de Derecho Internacional sobre la responsabilidad internacional del Estado: Introducción, texto y comentarios*. Madrid: Dykinson.

Crutzen, P. J. (2006). «The «Anthropocene"». In *Earth system science in the anthropocene* (pp. 13-18). Berlin|Heidelberg: Springer.

Crutzen, P. & McNeill, J. (2011). «The Anthropocene: conceptual and historical perspectives». *Philosophical Transactions of the Royal Society A: Mathematical, Physical and Engineering Sciences*, *369*(1938), 842-867.

CtIDH. (2018) «Cuadernillo de jurisprudencia de la Corte Interamericana No. 11: Pueblos Indígenas y Tribales».

CtIDH. (2019) «Cuadernillo de jurisprudencia de la Corte Interamericana Nro. 22: Derechos económicos, sociales culturales y ambientales».

CtIDH, CIDH & OEA. (2018) *Documentos básicos en materia de derechos humanos en el Sistema Interamericano*. Ciudad de México. CIDH.

CtIDH. (2019) «Cuadernillo de jurisprudencia de la Corte Interamericana Nro. 22: Derechos económicos, sociales culturales y ambientales».

Daly, E. & May, J. R. (2020). «Environmental Policy: Constitutional Environmental Rights». In *Encyclopedia of Public Administration and Public Policy* (pp. 1136-1143). Londres: Routledge.

De Casas, I. (22 Sep. 2020). «Venezuela y el Sistema Interamericano: los derechos humanos son para proteger personas no para hacer política». *Aquiescencia.*

De la Rosa-Jaimes, V. (2015). «The Arctic Athabaskan petition: where accelerated Arctic warming meets human rights». *California Western International Law Journal*, 45(2), 213-260.

De la Torre, A., Fajnzylber, P. & Nash, J. (2009). *Low carbon, high growth: Latin American responses to climate change*. Washington, D.C: The World Bank.

Delgado-Pugley, D. (2019). «La participación de los pueblos indígenas en la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático. De: actores "tradicionales" a actores frente al Antropoceno». *Documentos de Trabajo Fundación Carolina.* 22, 2da Época., p. 11-17.

De Moerloose. S & de Casas. I., (16 Jul. 2020). «The Lhaka Honhat Case Of The Inter-American Court Of Human Rights: The Long-Awaited Granting Of 400,000 Hectares Under Communal Property Rights». *EJIL: Talk!*.

De-Shalit, A. (2005). *Why posterity matters: Environmental policies and future generations*. Routledge.

De Sousa, S. B. (2018). «Epistemología del sur: un pensamiento alternativo de alternativas» políticas. *Geograficando*, *14*(1), 1.

Deva, S. & Birchall, D. (2020). *Research Handbook on Human Rights and Business*. Cheltenham: Edward Elgar Publishing.

De Vilchez, P. (2022). *Climate in Court. Defining State Obligations on Global Warming Through Domestic Climate Litigation*. Cheltenham: Edward Elgar.

Dobos, D. (2002). «The necessity of precaution: the future of ecological necessity and the precautionary principle». *Fordham Environmental Law Journal,* 13(2), 375-408.

Donger, E. (2022). «Children and youth in strategic climate litigation: Advancing rights through legal argument and legal mobilization». *Transnational Environmental Law*, *11*(2), 263-289.

Duarte, M.; Morales, D.; & Schmidhuber, E. (2020) «C. De la sentencia al derecho real ¿Qué futuro hay para las comunidades indígenas de Lhaka Honhat después de su victoria en la Corte Interamericana de Derechos Humanos?» *Situación de los Derechos Humanos en Mendoza Informe 2020*.

Duarte, M; Morales D; & Schmidhuber, E. (3 jul. 2020). «Argentina: una luz para los pueblos indígenas por un fallo sin precedente de la Corte IDH». *Open Global Rights*.

Dubash, N.K., Winkler, H. and Rajamani, L. (4 de mayo de 2021). «Developing countries need to chart their own course to net-zero emissions». *The Conversation.*

Dupuy, P. M. (1998). «The danger of fragmentation or unification of the international legal system and the International Court of Justice». *NYU Journal of International Law & Politics*, *31*, 791-807.

Dupuy, P. M. & Viñuales, J. (2015). *International environmental law*. Cambridge: Cambridge University Press.

Dworkin, R. (2006). *Justice in robes*. Harvard University Press.

Eckersley, R. (2016). «Responsibility for climate change as a structural injustice». En: T. Gabrielson, C. Hall, *et al* (eds.) *The Oxford Handbook of Environmental Political Theory*, 346-361.

Economides, C. (2010) «Content of the obligation: obligations of means and obligation of the result». En: Crawford, J., Pellet, A., Olleson, S. & Parlett, K. (eds.). *The law of international responsibility*. (pp. 371 -381) Oxford: Oxford University Press.

Epstein, R. A. (1979). «Nuisance law: corrective justice and its utilitarian constraints». *The Journal of Legal Studies*, *8*(1), 49-102.

Esborraz, D. (2016). «El modelo ecológico alternativo latinoamericano entre protección del derecho humano al medio ambiente y reconocimiento de los derechos de la naturaleza». *Revista Derecho del Estado*, (36), 93-129.

Escobar-Hernández, C. (2015). «Naciones Unidas y el impulso del Derecho Internacional: la labor de la Comisión de Derecho Internacional». En: Xavier Pons Rafols (Dir). *Las Naciones Unidas desde España: 70 aniversario de las Naciones Unidas: 60 aniversario del ingreso de España en las Naciones Unidas* (pp. 391-410). Asociación para las Naciones Unidas en España.

ESCR-NET. (2020) On climate justice and human rights: reflections from ESCR-NET members.

Espósito, C. (2023) «The International Court of Justice and Human Rights». En: Espósito, C. & Parlett, K. (Eds.), *The Cambridge Companion to the International Court of Justice* (pp. 486-528).

Essink, J., Quintavalla, A. & Temperman, J. (2023). «The Indivisibility of Human Rights: An Empirical Analysis». *Human Rights Law Review*, *23*(3).

Estupiñan, L., Storini, C., *et al* (2019). *La Naturaleza como Sujeto de Derecho en el Constitucionalismo Democrático.* Bogotá: Universidad Libre.

Errandonea, J. & Martin, A. (2015). «El acceso a la justicia en el Sistema Interamericano y su impacto en el ámbito interno». En: H. Ahrens., F. Rojas & Sainz, J. (eds.). *El acceso a la justicia en América Latina: retos y desafíos*. (p. 347) San José CR: Universidad para la Paz.

Etty, T., Heyvaert, V., Carlarne, C., *et al* (2020). «Transnational Environmental Law in a Transformed Environment». *Transnational Environmental Law*, *9*(2), 197-209.

European Commission, Directorate-General for Communication, (2021). *European green deal: delivering on our targets*, Bruselas: EC Publications Office.

Fa, J. E., Watson, J. E., *et. al*. (2020). «Importance of Indigenous Peoples' lands for the conservation of Intact Forest Landscapes». *Frontiers in Ecology and the Environment*, *18*(3), 135-140.

FAO/FILAC. (2021). *Los pueblos indígenas y tribales y la gobernanza de los bosques. Una oportunidad para la acción climática en el Caribe y América Latina*., p. 44. Santiago: FAO.

Farah, P. D. & Ibrahim, I. A. (2023). «Urgenda vs. Juliana: Lessons for Future Climate Change Litigation Cases». *University of Pittsburgh Law Review*, *84*, 1.

Faúndez, H. (2004). *El Sistema Interamericano de protección de los derechos humanos. Aspectos institucionales y procesales*. San José de C.R.

Feria-Tinta, M. & Milnes, S. (26 Feb. 2018) «The Rise of Environmental Law in International Dispute Resolution: Inter-American Court of Human Rights issues landmark advisory opinion on environment and human rights». *EJIL. Talk!.*

Feria-Tinta, M. & Milnes, S. C. (2019). «International environmental law for the 21st century: the constitutionalization of the right to a healthy environment in the Inter-American Court of Human Rights Advisory Opinion 23». *Anuario Colombiano de Derecho Internacional*, *12*(43), 43-83.

Feria-Tinta, M (2023) «On the request for an advisory opinion on climate change under UNCLOS before the International Tribunal for the Law of the Sea». *Journal of International Dispute Settlement*.

Feria Tinta. M. (27 Sept. 22) «Torres Strait Islanders: United Nations Human Rights Committee Delivers Ground-Breaking Decision on Climate Change Impacts on Human Rights». *Ejil: Talk!*.

Fernández-Egea, R. M. (2011). «State Responsibility for Environmental Harm, «Revisited» within the Climate Change Regime». En: S. Maljean-Bubois. & Rajamani, L. (eds.). *Implementation of international environmental law*. (pp. 375-418). Leiden: Brill Nijhoff.

Fernández Egea, R. M. (2015). «La protección del medio ambiente por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos: últimos avances jurisprudenciales». *Revista Jurídica Universidad Autónoma de Madrid,* 31 (2015-I), 163-204.

Fernández-Egea, R. (2021). «La protección medioambiental en la jurisprudencia de la Corte Internacional de Justicia: ¿Un reto irresoluble?». En: S. Torrecuadrada (dir.) *Los nuevos retos de la Corte Internacional de Justicia: los desafíos de la Corte Internacional de Justicia y las sinergias entre la Corte y otros órganos jurisdiccionales* (pp. 105-132). Madrid: Wolters Kluwer.

Fernádez Egea, R. M (14 Nov.2021) «"Código rojo". La lucha contra el cambio climático: lo que se pudo y no se pudo avanzar en la COP 26 en Glasgow». *Aquiescencia.*

Fernández Egea, R. M. (2023). «La función consultiva de la CIJ al servicio de la lucha contra el cambio climático». En: S. Torrecuadrada García-Lozano & E. Rubio Fernández. *La contribución de la Corte Internacional de Justicia al imperio del derecho internacional en tiempos convulsos: Aproximaciones críticas* (pp. 209-238). Thomson Reuters Aranzadi.

Fernández Egea. R.M & García. M. (31 mar 2023). «La era de la judicialización del derecho internacional». *Aquiescencia. Blog de Derecho internacional.*

Ferrajoli, L. (2022). *Por una Constitución de la Tierra: La humanidad en la encrucijada*. Trotta.

Ferrer Mac-Gregor, E. F. (2016). «El control de convencionalidad como un vehículo para el diálogo judicial entre la Corte Interamericana de Derechos Humanos y los tribunales de América». *Anuario de Derecho Constitucional Latinoamericano*, 22, 337-356.

Ferrer Mac-Gregor, E., (2020) «Lhaka Honhat y los derechos sociales de los pueblos indígenas», *Revista Electrónica de Estudios Internacionales*, 39.

Fierro, H. (Ed.) *Ius constitucionales Commune en América Latina: rasgos, potencialidades y desafíos.* (pp. 301-327). Ciudad de México: UNAM.

Francisco. (2015) «Carta encíclica *"Laudato si"* del Santo Padre Francisco sobre el cuidado de la casa común».

Fraser, N. (2008) *Escalas de Justicia*. A. Martínez-Riu, (trad.) Barcelona: HERDER.

Fraser, N. (2011) «Redistribución, reconocimiento y participación. Hacia una concepción integrada de la justicia», En: N., Fraser; M., Carbonero & Valdivieso., J. *Dilemas de Justicia en el siglo XXI: Género y Globalización* (pp. 292 y 293). Palma: Universitat de les Illes Balears.

French, D. (2000). «Developing states and international environmental law: The importance of differentiated responsibilities». *International & Comparative Law Quarterly*, *49*(1), 35-60.

Gaete, P. (2020). «La esencialidad del principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas en el régimen internacional del cambio climático». *Revista de Derecho Ambiental*, (13), 39-58.

Ganguly, G., Setzer, J. & Heyvaert, V. (2018). «If at first you don't succeed: Suing corporations for climate change». *Oxford Journal of Legal Studies*, *38*(4), 841-868.

Garavito, R. & Díaz, B. (2020). *Conflictos socio ambientales en América Latina: el derecho, los pueblos indígenas y la lucha contra el extractivismo y la crisis climática*. Buenos Aires: Siglo XXI Editores Argentina.

García-Chavarria, A. B. (2019). «Debates sobre la prueba en el litigio ante la Corte Interamericana». *Anuario mexicano de derecho internacional*, *19*, 293-325.

García-Chavarría, A. B. (2016). «La prueba en la función jurisdiccional de la Corte Interamericana de Derechos Humanos». *Colección Sistema Interamericano de Derechos Humanos*.

García, F. J. (2023). «Cambio climático antropogénico, litigación climática y activismo judicial: hacia un consenso emergente de protección de derechos humanos y generaciones futuras respecto a un medio ambiente sano y sostenible». *Revista Electrónica de Estudios Internacionales*, (46), 7-61.

Garcia-Oliva, J. & Hall, H. (2017). «The rule of law and the religious character of the Constitution and the wider legal framework». En: *Law and the Constitution* (pp. 156-224). Londres: Routledge.

García-Pachón. M. (2020), *Información, participación y justicia ambiental: Herramientas para alcanzar el desarrollo sostenible y la democracia ambiental.* Bogotá: Universidad del Externado.

García-Ramírez, S. (2018). «La Corte Interamericana a cuarenta años de su establecimiento». *Revista del Posgrado en Derecho de la UNAM*, (9), 23-65.

García-San José, D. (2005). «La prevención de daños medioambientales transfronterizos resultantes de actividades peligrosas: recientes desarrollos en el derecho internacional». En: M. Gómez. & A. Salinas. *Soberanía del Estado y Derecho Internacional. Homenaje al profesor Juan Antonio Carrillo* Salcedo (pp. 661-678). Sevilla: UCA|US|UMA.

Gargarella, R. (2013). «Sin lugar para la soberanía popular. Democracia, derechos y castigo en el caso Gelman». Yale Law School SELA (Seminario en Latinoamérica de Teoría Constitucional y Política) *Papers SELA*.

Gatti, L., Basso, L., *et al* (2021). «Amazonia as a carbon source linked to deforestation and climate change». *Nature*, *595*(7867), 388-393.

Gerrard, M. & MacDougald, J. (2013). «An introduction to climate change liability litigation and a view to the future». *Connecticut Insurance Law Journal*, 20(1), 153-163.

Ghaleigh, N. S., Setzer, J. & Welikala, A. (2022). «The complexities of comparative climate constitutionalism». *Journal of Environmental Law*, *34*(3), 517-528.

Gibbard, P., Walker, M., Bauer, *et. al.* (2022). «The Anthropocene as an Event, not an Epoch». *Journal of Quaternary Science*, *37*(3), 395-399.

GIESCR, *et al.* (2020) «Impact of Covid-19 on Environment and Climate Change. Joint Written Statement, Global Initiative for Economic, Social and Cultural Rights, Franciscans International, Amnesty International, the Center for International Environmental Law (CIEL) and Earthjustice».

GISTEMP (2022) *NASA GISS surface temperature analysis*.

Gillespie, A. (2014). *International environmental law, policy, and ethics*. Oxford University Press.

Gill, G. N. (2016). «Environmental Justice in India: The National Green Tribunal and Expert Members». *Transnational Environmental Law*, *5*(1), 175-205.

Giménez, I. (2017). «La disminución de las emisiones de CO_2 del sector aerocomercial desde la perspectiva de la declaración consolidada de las políticas y prácticas permanentes de la OACI relativas a la protección del Medio Ambiente. Hacía la construcción de una aviación verde». *Revista Internacional de Direito Ambiental* (17), 99.116.

Giménez, I. (2018). «Efectos del Cambio Climático sobre Territorios Insulares: una Perspectiva Jurídica sobre la Desaparición de Fronteras». *Revista Internacional de Direito Ambiental* (20), 139-158.

Giménez, I &. Petit de Gabriel. E. (24 oct. 2022) «Cambio climático y derechos humanos: el caso de los Isleños del Estrecho de Torres», *Aquiescencia. Blog de Derecho internacional.*

Giménez., I. & Petit de Gabrie.,E. (08 mar. 2021). «Venezuela ante la CPI». *Aquiescencia.*

Giménez, I (2021a) «Epidemics and climate change in international law». En: S. Murase & S. Zhou (dir.) *Epidemics and International Law*. (pp. 411-433). Leiden: Brill | Nijhoff.

Giménez, I. (2021b). «Gobernanza de la salud y acceso a la vacuna en Venezuela». *Revista Iurisprudentia.* 10,(19), 122-123.

Giménez, I. (2021c) «La minería submarina frente a la protección de la diversidad biológica en los fondos marinos y oceánicos fuera de los límites de la jurisdicción de los Estados». En: *La Contribución de la UE a la protección de los recursos biológicos en espacios marinos de interés internacional*. Casado, R., Martínez, E., Jiménez, E. (eds.). Tirant Lo Blanch.

Giménez, I. (2022). «El derecho a un medio ambiente sano y la Corte Interamericana de Derechos Humanos». En: Sion. A., (ed.) *Ensaios sobre GSE* (pp.409-432). Rio de Janeiro:Synergia.

Global Carbon Atlas (2021). Emisiones CUT.

Global Witness. (2019) *¿Enemigos del Estado? De cómo los gobiernos y las empresas silencian a las personas defensoras de la tierra y del medio ambiente.*

Gociu, A. & Roy, S.,. (16 Feb. 2021). «Extraterritoriality of Oil Constitutionalism in People v.s Arctic Oil». *EJIL:Talk!.*

Goldman, R. (2009) «History and Action: The Inter-American human rights system and the role of the Inter-American Commission on Human Rights», *Human Rights Quarterly*,31(1), 856-886.

Goldsmith, J. & Levinson, D. (2009). «Law for states: international law, constitutional law, public law». *Harvard Law Review*, 1791-1868.

Góngora. E. (2014) «La Difusión del Bloque de Constitucionalidad en la Jurisprudencia Latino Americana y su Potencial en la Construcción del *Ius Constitucionales Commune* Latinoamericano. *Ius Constitucionales Commune en América Latina, Razgos, Potencialidades y Desafíos».* En: Von Bogdandy, A., M. Morales, Fix-Fierro, H. (eds.) *Ius constitucionales Commune en América Latina: rasgos, potencialidades y desafíos.* (pp. 301-327). Ciudad de México: UNAM.

Gorski, S. (2013). «Individuals in International Law». En: R. Wölfrum (ed.) *The Max Planck Encyclopedia of International Law*. Oxford: Oxford University Press.

Government of Pakistan. «Framework for Implementation of Climate Policy» (2014-2030).

Gozaíni, O. A. (2014). *Derecho procesal transnacional. Los procedimientos en la Comisión y ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.* México D.F: Tirant Lo Blanch.

González, F. (2010) «Las Medidas Urgentes en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos». *Revista Internacional de Derechos Humanos*, 7(13), 5-72.

Greco, T. (2021). *La legge della fiducia: alle radici del diritto.* Roma. Laterza.

Gross. T. (2021). «Climate change and duties to protect with regard to fundamental rights». En: W. Kahl & M. Weller (eds.) *Climate change litigation* (p. 87-88). Munchen: Beck | Hart | Somon.

Grossman., C., del Campo., A. & Trudeau., M. (2018). *International Law and Reparations: The Inter-American System*. Atlanta: Clarity Press.

Grossman, C. (2020). «Promoting Social Change through Treaties and Customary International Law: the Experience of the Inter-American Human Rights System». En: D. Bradlow & D. Hunter (eds,) *Advocating Social Change through International Law* (pp. 33-54). Leiden: Brill | Nijhoff.

Grossman, Z. & Parker, A. (2012). *Asserting native resilience: Pacific Rim indigenous nations face the climate change*. Oregon: Oregon State University Press.

Grupo Banco Mundial. (2022) *Hoja de ruta para la acción climática en América Latina y el Caribe 2021-2025*. 1-26.

Guillaume., G. (2011). «The use of precedent by international judges and arbitrators». *Journal of International Dispute Settlement*, 5-23.

Guilloux, B. G. (2020). «Ocean and Climate Regime Interactions». En: A. Chircop, S. Coffen-Smout & M. Mcconnell (eds.) *Ocean Yearbook Online* (pp. 43-88) Leiden: Brill | Nijhoff.

Hafner, G. (2003). «Pros and cons ensuing from fragmentation of international law». *Michigan. Journal of International Law*, 25, 849-863.

Hampson. F., Martin, C. & Viljoen, F. (2018), «*Inaccessible apexes:* Comparing access to regional human rights courts and commissions in Europe, the Americas, and Africa». *International Journal of Constitutional Law*, 16(1), 161-86.

Harari, Y. N. (2014). *Sapiens: A brief history of humankind*. Londres: Random House.

Hitters, J. C. (2008). «¿ Son vinculantes los pronunciamientos de la Comisión y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos?(control de constitucionalidad y convencionalidad)». *Revista Iberoamericana de Derecho Procesal Constitucional*, *10*(19), 131-156.

Hoffman, K. B. (1976). «State Responsibility in International Law and Transboundary Pollution Injuries». *International & Comparative Law Quarterly*, *25*(3), 509-542.

Hutchison, A. (2014). «The Whanganui river as a legal person». *Alternative Law Journal*, *39*(3), 17-182.

Huesa, R. (2015). «La protección del interés público global: una nueva dimensión para las normas y obligaciones internacionales». En: N. Bouza., C. García., Á. Rodrigo & P. Pareja (coord.). *La gobernanza del interés público global: XXV Jornadas de la Asociación Española de Profesores de Derecho Internacional y Relaciones Internacionales. Barcelona,* (253-286). Tecnos.

IDEAM, PNU, Cancillería. (2016). *Inventario Nacional y Departamental de Gases de Efecto Invernadero-Colombia.* Tercera Comunicación Nacional de Cambio Climático.

IDEAM. Estrategia integral de control a la deforestación y gestión de los bosques en Colombia (2016).

IEA. (2020). «Global Energy Review 2020». IEA.

INDEPAZ. (19 abr. 21). «La Guajira, entre un nuevo aire o un desastre: panorama actual de la violencia en la guajira con la llegada de las empresas energéticas al territorio wayuu».

Institut De Droit Internacional. Report of the Special Rapporteur Shinya Murase on Epidemic and International Law.

International Transport Forum (2020), «Restoring air connectivity under policies to mitigate climate change», COVID-19 Transport Brief.

IPCC. (2007) «Climate Change 2007: Synthesis Report». En: R. Pachauri & A. Reisinger. (Eds.) *Contribution Of Working Groups I, II And III To The Fourth Assessment Report of The Intergovernmental Panel On Climate Change.* Geneva: IPCC.

IPCC. (2014a). «Climate Change 2014: Synthesis Report». En: R. Pachauri & L. Mayer (eds.) *Contribution of Working Groups I, II And III To The Fifth Assessment Report of The Intergovernmental Panel on Climate Change*. Geneva: IPCC.

IPCC. (2014b). «Climate Change 2014: Impacts, Adaptation, and Vulnerability. Part A Global and Sectoral Aspects». En: C. Field, V. Barros *et al* (eds.) *Contribution of Working Group II to the Fifth Assessment Report of The Intergovernmental Panel on Climate (p. 1054). Cambridge, Cambridge University Press.*

IPCC. (2018). «Summary for Policymakers». En: Masson-Delmotte, V., P. Zhai, A *et al* (eds.) *Global Warming of 1.5°C.* An IPCC Special Report on the impacts of global warming of 1.5°C above pre-industrial levels and related global greenhouse gas emission pathways, in the context of strengthening the global response to the threat of climate change, sustainable development, and efforts to eradicate poverty (pp. 4-5).

IPCC (2019). «Summary for Policymakers». En: P.R. Shukla, J. Skea *et al* (eds.) *Climate Change and Land: an IPCC special report on climate change, desertification, land degradation, sustainable land management, food security, and greenhouse gas fluxes in terrestrial ecosystems*. (pp. 10, 30).

IPCC. (2021). «Summary for Policymakers». En: Masson-Delmotte, V., P. Zhai, A *et al* (eds.) *Climate Change 2021: The Physical Science Basis. Contribution of Working Group I to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change* (p. 15).

IPCC (2022). «Summary for Policymakers». En: H. Portner, D.C. Roberts *et al* (eds.). *Climate Change 2022: impacts, adaptations and vulnerability.*

Irwin, T. (2009). «Implications for climate-change policy of research on cooperation in social dilemmas». En: World Bank (ed.) Policy Research Working Paper. World Bank.

Jamieson, D. (2010). «Ethics, public policy, and global warming». En: S. Gardiner, S. Caney *et al* (eds). *Climate ethics: Essential readings* (pp.77-86). Oxford: Oxford University Press.

Jarvis, R. M. & Young, T. (2023). «Pressing questions for science, policy, and governance in the high seas». *Environmental Science & Policy*, *139*, 177-184.

Jeong, H., Kim, H. & Kim, H. (2020). «Optimization Procedure for Climate Change Adaptation Investment Planning: Case of Flood Disaster Prevention in Seoul». *Journal of Water Resources Planning and Management*, *146*(2).

Jiménez-García, F. (2023). «La localización en red de la comunidad internacional. El future de las ciudades ante los desafíos globales del derecho internacional». *Anuario Español de Derecho Internacional*, *39*, 209.

Jiménez, H. & Lucatello S. (2020): «Cambio climático, COVID-19 y la transición inaplazable». En: F. Huber (coord.) *La emergencia sanitaria COVID-19 a la luz de la emergencia climática*. Bogotá: Heinrich Böll Stiftung.

Jodoin, S. Snow, S. & Corobow, A. (2020). «Realizing the right to be cold? Framing processes and outcomes associated with the Inuit petition on human rights and global warming». *Law & Society Review*, *54*(1), 168-200.

Jodoin, S. & Savaresi, A., *et al.* (2021). «Rights-based approaches to climate decision-making». *Current Opinion in Environmental Sustainability*, *52*, 45-53.

Johansson, V. (2023). «Just Transition as an Evolving Concept in International Climate Law». *Journal of Environmental Law*. 35, (2). 229-249.

Johnson, G. C. & Lyman, J. M. (2020). «Warming trends increasingly dominate global ocean». *Nature Climate Change*, *10*(8), 757-761.

Jordano Fraga, J. (2007). «El derecho ambiental del siglo XXI». En: F. Contreras, A. Caraballo *et. al* (coord.) *Cultura verde: ecología, cultura y comunicación*. (114-140). Sevilla: Junta de Andalucía.

Kamminga, M. T. (2012). «Extraterritoriality». En: Wölfrum, R. (ed.). *The Max Planck Encyclopedia of Public International Law*. Oxford: Oxford University Press.

Keller, H. & Pershing, A. (2021). «Climate Change in Court: Overcoming Procedural Hurdles in Transboundary Environmental Cases», *European Convention on Human Rights Law Review*, *3*(1), 23-46.

Keller, H. & Heri, C. (2022) «The Future is Now: Climate Cases Before the ECtHR». *Nordic Journal of Human Rights*.

Kerbrat, Y. & Maljean-Dubois, S. (2019). «The Role of International Law in the Promotion of the Precautionary Principle». En: C. Oliveira, G. Lima, F. Ramos (dir.), *A interpretação do princípio da precaução no direito brasileiro, no direito comparado e no direito internacional* (pp. 275-284).

Kingsbury, B. (1998). «Foreword: Is the proliferation of international courts and tribunals a systemic problem». *NYU Journal of International Law & Politics, 31*, 679-695.

Kingsbury, B., Krisch, N. & Stewart, R. B. (2005). «The emergence of global administrative law». *Law and contemporary problems*, *68* (3/4), 15-61.

Klein, E. (2008). «Self-Contained Regime». En: R. Wölfrum (ed.) *The Max Planck Encyclopedia of International Law*. Oxford: Oxford University Press.

Kloepfer, M. & Neugärtner, R. D. (2021). «Fundamental questions». En: W. Kahl & M. Weller. (eds.) *Climate change litigation.* Munchen: Beck | Hart | Nomos.

Knox, J. (2009) «Climate change and human rights law», 50. *Virginia Journal of International* Law 50(1), 163-218.

Knox, J. H. (2008). «Horizontal Human Rights Law», *American Journal of International Law*, 102(1), 1-47.

Knox, J. H. & Morgera, E. (2022). *Human Rights and the environment: the interdependence of human rights and a healthy environment in the context of national legislation on natural resources*. FAO. Roma.

Krämer, L. (2023). «Rights of Nature in Europe: The Spanish Lagoon Mar Menor Becomes a Legal Person». *Journal for European Environmental & Planning Law*, *20*(1), 5-23.

Krieger. H. & Peters. A. (2020). «Due diligence and structural change in the international legal order». En: H. Krieger. A., Peters. A. & L., Kreuzer. (eds.), *Due Diligence in the International Legal Order* (p. 352-390). Oxford: Oxford University Press.

Koskenniemi, M. (1997). «Lauterpacht: The Victorian tradition in international law». *European Journal of International Law*, *8*(2), 215-263.

Koskenniemi, M. (2001). *The gentle civilizer of nations: the rise and fall of international law 1870–1960*. Cambridge: Cambridge University Press.

Koskenniemi, M. & Leino, P. (2002). «Fragmentation of international law? Postmodern anxieties». *Leiden Journal of International Law*, *15*(3), 553-579.

Koskenniemi, M. (2011). «Empire and international law: the real Spanish contribution». *University of Toronto Law Journal*, *61*(1), 1-36.

Kouwenberg, R. & Zheng, C. (2023). «A Review of the Global Climate Finance Literature». *Sustainability*, *15*(2), 1255.

Krieger, H., Peters, A. & Kreuzer, L. (2020). *Due Diligence in the International Legal Order*. Oxford: Oxford University Press.

Kysar, D. (2011). «What climate change can do about tort law». *Environmental Law*, 41 (1), 1-71.

Lanners, J. (2001) «Prevention of transboundary harms from hazardous activities from the ILC Draft Articles». En: A, Kiss & J. Lammers, (eds). *Hague Yearbook Of International Law*. Leiden: Martinus | Nijhoff.

Lauterpacht, H. (1943). «The law of nations, the law of nature and the rights of man». *Transactions Grotius Soc´y*, *29*, 1.

Lauterpacht, H. (1958). *The development of international law by the International Court*. Cambridge: Cambridge University Press.

Lauterpacht, H. (2013). *An international bill of the rights of man*. Oxford: Oxford University Press.

Lavrik, M. (2022). «Customary Norms, General Principles of International Environmental Law, and Assisted Migration as a Tool for Biodiversity Adaptation to Climate Change». *Jus Cogens*, 1-31.

Liceras, J. (2021). *La Corte Internacional de Justicia y la descolonización: 1949-2019*. Editorial Reus.

Liebenberg., S; Khalfan., A.; Sepúlveda, M. *et al.* (2023) *The Maastricht Principles on the Human Rights of Future Generations*.

Lima, L. (2021). «A juridisção da Corte Interamericana de Direitos Humanos sobre o Direito ao Meio Ambiente Saudável». *Revista Catalana de Dret Ambiental*, 12(1) 1-37.

Lin, J. (2015). «Climate change litigation in Asia and the Pacific». En: Van G, Calster, G, Vandenberghe & L, Reins. *Research handbook on climate change mitigation law* (pp.578-600). Cheltenham: Edward Elgar Publishing.

Lin, J. & Kysar, D. (2020). *Climate change litigation in Asia Pacific*. Cambridge: Cambridge University Press. (pp. 1-414).

Lindsey, R. (14 ago. 2020). «Climate change: atmospheric carbon dioxide». *National Oceanographic and Atmospheric Administration, News & Features*.

Llano-Alonso, F. (2013). «El derecho al desarrollo en el sistema de derechos humanos: entre los derechos de la personalidad y la actividad del Estado». *Anuario de filosofía del derecho*, (XXIX). 367-395.

Llano-Alonso, F. (2020). «Sobre la solidaridad como concepto, valor y principio». En: Sánchez-Bravo., A. & Sánchez-Rubio., D (Eds.) *Temas de teoría y filosofía del derecho en contextos de pandemia*. Madrid: DYKINSON.

López-Zamora, L. A. (2021). «Perplejidades Normativas y Límites de la Actividad Consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Algunas Lecciones Provenientes de la Adopción de la Opinión Consultiva OC-23/17 sobre "Medio Ambiente y Derechos Humanos"». *Anuario Español de Derecho Internacional*, *37*, 199-248.

Lovantón, D. (2009). «Experiencias de acceso a la justicia en América Latina». *Revista Instituto Interamericano de Derechos Humanos*, *50*, 227-282.

Mac Farlane, K. (1997). «Los derechos humanos de las generaciones futuras (La contribución jurídica de J. Costeau)». *Ultima década*, (8), 8.

Maljean-Dubois, S. (2018). «Climate change litigation». En: H. Ruiz-Fabri (ed.) *The Max Planck Encyclopedia of Procedural Law*.

Maljean-Dubois, S. & Wemaëre, M. (2017). «Biodiversity and climate change». M. Faure., (ed.) *Elgar Encyclopedia of Environmental Law* (pp. 198-212). Cheltenham: Edward Elgar Publishing.

Marcos del Cano, A. M. (2020). «La vulnerabilidad como criterio normativo para el derecho y las políticas públicas». En: A. M., Marcos del Cano (ed.) *En tiempos de vulnerabilidad: reflexión desde los derechos humanos* (pp. 17-33). Madrid. Dykinson.

Márquez, C. (2015) «La implementación de los principios rectores de las Naciones Unidas sobre empresas y derechos humanos por medio de los planes nacionales de acción». *Revista de Responsabilidad Social de la Empresa*, 20, 55-87.

Márquez, C. (2018). «Las relaciones entre el derecho internacional y la práctica interna en el ámbito de los derechos humanos y la responsabilidad de las empresas». *Anuario Español de Derecho Internacional*, 34, 707-728.

Márquez, C. & Iglesias, D. (2021). «Retos y oportunidades de la agenda internacional sobre empresas y derechos humanos en tiempos de la COVID-19». *Anuario Español de Derecho Internacional*, *37*, 71-115.

Márquez., C. (2022). «Casos ambientales, daños climáticos y responsabilidad corporativa». En: F. Zamora, L. Sales & M.C. Marullo (eds.) *La lucha en clave judicial frente al cambio climático*. Madrid: Aranzadi Thomson Reuters.

Martinez, A. N. & Porcelli, A. M. (2020). «Aportes a una nueva visión del mundo: la dimension ecológica en el derecho ambiental argentino». *LEX*, 26 (2020-II), 13-47:

May, J. & Daly, E. (2020). «The Indivisibility of Human Dignity and Sustainability» En: Atapattu. S., Gonzalez. C. & *et. al.*, (Eds.), *The Cambridge Handbook on Environmental Justice and Sustainable Development.* Cambridge University Press.

Mayer, B. (2021a) «Climate change mitigation as an obligation under human rights treaties?» *American Journal of International Law,* 115 (3) 409-451.

Mayer, B. (2021b). «Temperature Targets and State Obligations on the Mitigation of Climate Change». *Journal of Environmental Law*, 33 (3), 585-610.

Mayer, B. (2023). «International Advisory Proceedings on Climate Change». *Mich. J. Int'l L.*, *44*, 43.

Meijers, T. (2023). «Climate Change and Intergenerational Justice». In *Handbook of Philosophy of Climate Change* (pp. 1-23). Cham: Springer International Publishing.

Meyer, L. H. (Ed.). (2017). *Intergenerational justice*. Introduction. Routledge.

McElwee, P., Fernandez-Llamazares, A. & *et al* (2018). «Indigenous Ecologies». *Oxford bibliography.*

McCorquodale, R. & Simons, P. (2007). «Responsibility beyond borders: state responsibility for extraterritorial violations by corporations of international human rights law». *The Modern Law Review*, *70*(4), 598-625.

McCrimmon, D. (2016). «The Athabaskan Petition to the Inter-American Human Rights Commission: using human rights to respond to climate change». *The Polar Journal*, *6*(2), 398-416.

McGregor, D., Whitaker, S. & Sritharan, M. (2020). «Indigenous environmental justice and sustainability». *Current Opinion in Environmental Sustainability*, *43*, 35-40.

Medina, C. (2005). *La Convención Americana: teoría y jurisprudencia. Vida, integridad personal, libertad personal, debido proceso y recurso judicial*. Santiago: Universidad de Chile.

Mbengue, M. (2020). «On Sustainable Development: a Conversation with Judge Weeramantry». En: S. Forlati, M. Mbengue & B. McGarry (eds.) *The Gabčíkovo-Nagymaros Judgment and Its Contribution to the Development of International Law* (pp. 166-192). Leiden: Brill | Nijhoff.

Medici-Colombo, G. & Ricarte, T. (2023). «The Escazú Agreement contribution to environmental justice in Latin America: An exploratory empirical inquiry through the lens of climate litigation». *Journal of Human Rights Practice*.

Milanovic., M. (2011) *Extraterritorial Application of Human Rights Treaties: Law, Principles and Policy*. Oxford: Oxford University Press.

Millner, F. (2011). «Access to environmental justice». *Deakin Law Review*, 16(1), 189-207.

MINIAMBIENTE. (2022). *Visión Amazonía*.

Ministry of Environment, Conservation and Parks. «Preserving and Protecting our Environment for Future Generations: A Made-in-Ontario Environment Plan».

Mitchell, R. B., (2002-2022). «International Environmental Agreements» *Database Project (Version 2020.1).* University of Oregon.

Mondini, G. (2019). «Sustainability assessment: from Brundtland Report to sustainable development goals». *Valori e Valutazioni*, (23), p. 129-137.

Montalban-Zambrano, D. (2020). «El derecho al medio ambiente sano como un derecho autónomo en el Sistema Interamericano de derechos humanos». *Anales de la Facultad de Derecho* (1), 37, 63-83.

Molina, J. A. (2020). «Derechos de la naturaleza. Elementos para un debate». En: M.P García Pachón, *Reconocimiento de la naturaleza y sus componentes como sujeto de derecho*. Universidad Externado de Colombia.

Mora., V. (2020). «Los derechos a un ambiente sano, a la alimentación adecuada, al agua ya la identidad cultural. Caso comunidades indígenas miembros de la asociación Lhaka Honhat (Nuestra Tierra) v. Argentina ante la CIDH». *e-Revista Internacional de la Protección Social, 5(2),* 330-355.

Morales, F. G. (2009). «La Comisión Interamericana de Derechos Humanos: antecedentes, funciones y otros aspectos». *Anuario de Derechos Humanos*, (5), 35-57.

Morgan, J. C. (2016). «Fragmentation of International Environmental Law and the Synergy». *Vermont Journal of Environmental Law*, 18(1), p. 134-172.

Morgera, E. (2011). «Far away, so close: A legal analysis of the increasing interactions between the Convention on Biological Diversity and climate change law». *Climate Law*, *2*, 85-115.

Morin, E. & Pakman, M. (1994). *Introducción al pensamiento complejo*. Barcelona: Gedisa.

Morsink, J. (1999). *The Universal Declaration of Human Rights: origins, drafting, and intent*. University of Pennsylvania Press.

Mulheron, R. (2004). *The class action in common law legal systems: a comparative perspective*. Bloomsbury Publishing.

Murcott, M; Tigre, M.A & Zimmermann, N (22 Mar. 2022) «What the ECtHR Court could learn from courts in the Global South». *Verfassungblog on matters constitutional*.

Murphy, S. D. (1994). «Prospective liability regimes for the transboundary movement of hazardous wastes». *American Journal of International Law*, *88*(1), 24-75.

Nain Gill, G. (2010). «A green tribunal for India». *Journal of environmental law, 22 (3), 461-474.*

Navarro, M. S. (2020). «El acceso a agua limpia y saneamiento: Un análisis comparado del derecho al agua desde el derecho internacional de los derechos humanos y del derecho ambiental». *Actualidad Jurídica Ambiental*, (106), 40-78.

Navegador Indígena (8/12/21) Surinam.

Nevitt, M. (2020). «Is Climate Change a Threat to International Peace and Security?» *Michigan Journal of International Law*, *42*, 2021

NCE. (2018). *Unlocking the Inclusive Growth Story of the 21st Century: Accelerating Climate Actions in Urgent Times*.

Nikken, P. (2003). «La función consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos». En: CtIDH (ed.) *Memoria del seminario: el Sistema Interamericano de protección de los derechos humanos en el umbral del siglo XXI*.(pp. 161-181.) San José C.R: CtIDH.

Nolan. A., (20 oct. 2021). «Children's Rights and Climate Change at the UN Committee on the Rights of the Child: Pragmatism and Principle in Sacchi v Argentina». *EJIL:Talk!.*

Nolan, A., Skelton, A. & Ozah, K. (2023). «Child Rights Strategic Litigation: Key Principles for Climate Justice Litigation».

Nollkaemper, A. & Burger., L. M. (06 jun. 2020). «A New Classic in Climate Change Litigation: The Dutch Supreme Court Decision in the Urgenda Case». *EJIL: Talk!*.

O'Donnell, E. & Talbot-Jones, J. (2018). «Creating legal rights for rivers». *Ecology and Society*, *23*(1).

OEA/ GTPSS. (2015) *Indicadores de progreso para la medición de derechos contemplados en el Protocolo de San Salvador*. Washington, D.C: OEA.

OEA. (2016). *Climate Change: A Comparative Overview of the Rights Based Approach in the Americas*. Washington D.C, OEA.

OEA. (2022) CIDH, «Relatoría sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales, Origen».

OIT (2017). *Análisis comparativo Convenio 169: convergencias y divergencias entre OIT y Corte IDH*. Documento de trabajo. ACT/EMP.

OIT (2018). *Los pueblos indígenas y el cambio climático. De víctimas a agentes del cambio por medio del trabajo decente*. Ginebra: OIT.

OIT. (2019) *Aplicación sobre el Convenio de Pueblos Indígenas y Tribales núm. 169 de la OIT: hacia un futuro inclusivo, sostenible y justo*. Ginebra: OIT.

Okowa, P. N. (1997). «Procedural obligations in international environmental agreements». En: I. Brownlie & J. Crawford (Eds.) *The British Year Book of International Law*, *67*, (pp. 275-233). Oxford: Oxford University Press.

Oliveira, R. (2011). «La ecologización de la Corte Internacional de Justicia». *Anuario Mexicano de Derecho Internacional*, *11*,45-76.

ONU. «Objetivos de Desarrollo Sostenible», *ODS*. 13 acción por el Clima.

Organización del Tratado de Cooperación Amazónica. (2010) «Agenda estratégica de cooperación» *amazónica. X Reunión de Ministros del TAC*.

Organización del Tratado de Cooperación Amazónica. (2022). «Proyectos en ejecución».

Orihuela, E., Fernádez Egea, R. M., *et al.* (2023). «Naturaleza y derecho internacional público». *Revista Electrónica de Derecho Internacional Contemporáneo*, *6*(6).

Panarello, D. & Gatto, A. (2023). «Decarbonising Europe–EU citizens' perception of renewable energy transition amidst the European Green Deal». *Energy Policy*, *172*, 113272.

Pasqualucci, J. M. (2012). *The practice and procedure of the Inter-American Court of Human Rights*. Cambridge: Cambridge University Press.

Parker, L., Mestre, J., *et al.* (2021). «When the Kids Put Climate Change on Trial: Youth-Focused Rights-Based Climate Litigation around the World». *Journal of Human Rights and Environment*. 13 (1).

Payandeh (2021) «The role of courts in climate protection and the separation of powers». En: W. Kahl & M. Weller (eds.) *Climate change litigation* (p. 62-80). Munchen. Beck | Hart | Somon.

Paúl-Díaz, Á. (2015). «Análisis sistemático de la evaluación de la prueba que efectúa la Corte Interamericana de Derechos Humanos». *Revista chilena de derecho*, *42*(1), 297-327.

Pascual-Vives, F. (2019). «Consensus and Evolutive Interpretation». *Consensus-Based Interpretation of Regional Human Rights Treaties*. Leiden: Brill| Nijhoff.

Peel, J. (2015). «Unpacking the elements of a state responsibility claim for transboundary pollution». En: S. Jayakumar., T. Koh., *et al* (eds.) (pp. 51-78). *Transboundary Pollution: Evolving Issues of International Law.* Cheltenham: Elgar Publishing.

Peel, J. & Osofsky, H. (2015). *Climate change litigation*: Regulatory Pathway to cleaner energy. Cambridge: Cambridge University Press.

Peel, J. & Osofsky, H. M. (2020). «Climate change litigation». *Annual Review of Law and Social Science*, *16*, 21-38.

Peel, J. & Lin, J. (2019). Transnational climate litigation: the contribution of the global South. *American Journal of International Law*, *113*(4), 679-726, 681.

Pentinat, S. B. (2023). «Las migraciones climáticas: viviendo en un limbo jurídico». *Revista Catalana de Dret Ambiental*, *14*(1).

Pereira, A., Monteiro, J., Pereira, A. *et al.* (2016). «Human Rights and Private Law in Portugal». En: V. Trstenjak & P. Weingerl (Eds.) *The Influence of Human Rights and Basic Rights in Private Law* (pp. 483-533). Springer, Cham.

Pérez-Luño, A. E. (2003) *Derechos Humanos, Estado de Derecho y Constitución*. Madrid: TECNOS, p. 129.

Pérez-Luño, A. E. (2007). *Trayectorias contemporáneas de la Filosofía y la Teoría del Derecho*. Madrid: TEBAR.

Pérez-Luño, A. (2009). «¿Qué significa Juzgar?» *DOXA Cuadernos de Filosofía del Derecho*, 32. (151-176).

Pérez-Luño, A. E. (2013). *Los derechos fundamentales*. Madrid: TECNOS

Pérez-Luño, A. E. (2014). «El juez en el estado constitucional». En: De Julios-Campuzano. *El horizonte constitucional: Ciencia jurídica, Derechos Humanos y Constitucionalismo Cosmopolita* (pp. 111-141). Madrid. DIKYNSON.

Pérez-Luño, A. E. (2021). *Teoría del derecho una concepción de la experiencia jurídica*. Madrid: TECNOS.

Percival, R. V. (2007). «Massachusetts v EPA: Escaping the common law's growing shadow». *The Supreme Court Review*, *2007* (1), 111-160.

Peter, A. (2017). «The Rise and Decline of the International Rule of Law and the Job of Scholars». *MPIL Research Paper Serie. (2017-16), 9.*

Peters, A. (2021). «COVID-19 as a catalyst for the (re-) constitutionalization of international law: one health-one welfare». En: M. Mbengue & J. D'Aspremont (eds.) *Crisis Narratives in International Law* (pp. 85-99). Leiden: Brill | Nijhoff.

Petersmann, M. C. (2021). «Contested Indigeneity and Traditionality in Environmental Litigation: The Politics of Expertise in Regional Human Rights Courts». *Human Rights Law Review*, 21 (1), 132-156.

Petit de Gabriel E.W. (2018) «Vers un régime juridique global limitant la pollution atmosphérique des navires sur la base des mesures fondées sur le marché: entre le multilatéral, l'unilatéral et l'institutionnel». *Annuaire du Droit de la Mer*, 22, 179-182.

Petit de Gabriel E. W. (2020). «Derechos humanos y pandemia: entre normas excepcionales y excepciones a las normas». En: G.C. Bravo. (Ed.), Coronavirus y Derecho en el Estado de Alarma (p. 165). Sevilla: REUS.

Petit de Gabriel., E. W. (2021). «Intertwining consular and human rights law: a European contribution to the humanization of the international law». *Espaço Juridico Journal of Law*, vol. 22 (1) 11-44. 35

Pianta, M. & Lucchese, M. (2020). «Rethinking the European Green Deal: An industrial policy for a just transition in Europe». *Review of Radical Political Economics*, *52*(4), 633-641.

Pinto, M. (1993). *La denuncia en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.* Buenos Aires: El Puerto.

Piovesan, F. & Antoniazzi, M. M. (2020). «Interdependencia e indivisibilidad de los derechos humanos: Una nueva mirada frente al covid-19». *Anuario de Derechos Humanos*, 35-58.

PNUMA. (2019) «Informe sobre la disparidad en las emisiones de 2019». PNUMA.

Poddar, M. & Nahar, B. (2017). «Continuing Mandamus-A Judicial Innovation to Bridge the Right-Remedy Gap». *NUJS Law Review*, *10*, 555-608.

Prats, E. V., Neville, T., Nadeau, K. C. & Campbell-Lendrum, D. (2023). «WHO Academy education: globally oriented, multicultural approaches to climate change and health». *The Lancet Planetary Health*, *7*(1).

Preston, B. J. (16 Sep.2011). «Internalising Ecocentrism in Environmental Law». [transcripción del iscurso] 3rd *Wild Law Conference: Earth Jurisprudence - Building Theory and Practice*. Griffith University, Queensland.

Proelss, A. (2010). «International environmental law and the challenge of climate change». *German Year Book of International Law, 53*, 65-87.

Proelss, A. (2017) *United Nations Convention on the Law of the Sea: A Commentary*. Oxford: Beck|Hart|Nomos.

Raible, L. (15/11/2021). «Expanding Human Rights Obligations to Facilitate Climate Justice? A Note on Shortcomings and Risks». *EJIL: Talk!*

Rajamani, L. (2015). «The devilish details: Key legal issues in the 2015 climate negotiations». *The Modern Law Review*, *78*(5), 826-853.

Rajamani, L. (2016). «Ambition and differentiation in the 2015 Paris Agreement: Interpretative possibilities and underlying politics». *International & Comparative Law Quarterly*, *65*(2), 493-514.

Rajamani, L. & Bodansky, D. (2019). «The Paris rulebook: Balancing international prescriptiveness with national discretion». *International & Comparative Law Quarterly*, *68*(4), 1023-1040.

Rajamani, L. (2020a). *Innovation and Experimentation in the International Climate Change Regime*. Recueil des Cours / Collected Courses. 404 (1), 27.

Rajamani, L. (2020b). «Due diligence in international climate change law». En: H., Krieger. A., Peters. A. & L., Kreuzer. (eds.), *Due Diligence in the International Legal Order* (p. 163-180). Oxford: Oxford University Press.

Rajamani, L. & Wersman, J. (2021). «Climate Change». En: L. Rajamani & J. Peel, (eds.). *The Oxford handbook of international environmental law*. Oxford: Oxford University Press.

Ramírez, J. (2021). «El cambio climático frente al derecho internacional». *Revista Electrónica De Derecho Internacional Contemporáneo*, *4*(4).

REDESCA. Informes Anuales 2015, 2017. 2018.

Reguero, B., Losada, I., *et al* (2015). «Effects of climate change on exposure to coastal flooding in Latin America and the Caribbean». *PLoS One*, *10*(7).

Remiro-Brotóns, A., Riquelme, R., *et al.* (2010) *Derecho Internacional curso general*. Valencia. Trant Lo Blanch.

Remiro-Brotóns, A. Riquelme, R & *et. al*. (2007). *Derecho Internacional*. Valencia: Tirant Lo Blanch: Valencia.

Remiro-Brotóns, A. (2022). «La Corte Internacional de Justicia y la descolonización (1949-2019)». *Revista española de derecho internacional*, *74*(1), 299-300.

Rodrigo, Á. J. (2015). «El desafío del desarrollo sostenible». *Los principios del Derecho Internacional relativos al desarrollo sostenible.* Madrid: Marcial Pons.

Rodrigo, Á. J. & Abegón, M. (2017). «El concepto y efectos de los tratados de protección de intereses generales de la comunidad internacional». *Revista Española de Derecho Internacional*, 69 (1), 167-193.

Rodrigo, Á. J. (2018). «El Acuerdo de París sobre el cambio climático: un nuevo tipo de tratado de protección de intereses generales». En: S. Borràs Pentinat & P. Villavicencio. *El Acuerdo de París sobre el cambio climático: ¿Un acuerdo histórico o una oportunidad perdida?: análisis jurídico y perspectivas futuras* (pp. 69-98). Aranzadi Thomson Reuters.

Rodríguez-Rivera. L. «The Right to a Healthy Environment. A New, Internationally Recognised, Human Rights». En: A. Von Arnauld, K. Von Der Decken & M. Susi (eds.) *The Cambridge Handbook of Human Rights: Recognition, Novelty, Rhetoric* (pp. 154-162). Cambridge: Cambridge University Press.

Rogers, N. (2023). «Intergenerational Climate Justice in the Courtroom». *Australian Humanities Review*, 1-8.

Ronconi, L. & Barraco, M. (2021). «La consolidación de los DESCA en la Corte Interamericana de Derechos Humanos: reflexiones a propósito del caso Lhaka Honhat v. Argentina». *Revista de la Facultad de Derecho*, (50).

Rousset-Siri., A. (2011). «El concepto de reparación integral en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos». *Revista Internacional de Derechos Humanos* (1), 59-79.

Rousset Siri., A. (2018) *Ejecución de sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos*. BuenosAires, EDIAR.

Rousset-Siri., A. & Bayardi. C (2021) «Breves notas sobre Sistema Interamericano de derechos humanos. Mendoza: Universidad Nacional de Cuyo».

Rousset-Siri., A. (2021). «Reparaciones y jurisdicción interamericana: cinco aportes en los votos de Sergio García Ramírez». En: L., Camarillo. & A., Rousset-Siri. (eds.) *Proteger y reparar. Aportes de la Jurisdicción interamericana (Libro Homenaje al Profesor Emérito Sergio García Ramírez)* (p. 269-283) Tijuana: UABC.

Rousset, A. (21 jun. 2021). «Reflexiones sobre la convencionalización del derecho interno de los Estados. Agenda Estado de Derecho». *Agenda del Estado*.

Ruiz, J. J. (2008): «El derecho internacional frente al desafío del cambio climático». *Cursos de derecho internacional y relaciones internacionales de Vitoria-Gasteiz= Vitoria-Gasteizko nazioarteko zuzenbide eta nazioarteko herremanen ikastaroak*, (1), 19-80.

SABIN & Columbia University (2022). Climate Change Litigation Databases | Non-U.S climate change litigation.

Sagre, L. M. & Callejas, M. A. G. (2022). «El giro en el constitucionalismo colombiano. De la lectura moral de los derechos fundamentales al problema de su eficacia». *Vniversitas*, *71*.

Salmón, E. (2019). *Introducción al Sistema Interamericano de derechos humanos*. Lima: FEPUCP.

Salmón, E. & Blanco, C. (2012). *El Derecho al Debido Proceso en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos*. Lima: IDEHPUCP.

Salmón. E., Bregaglio Lazarte, R., *et al* (2012). *La consulta previa, libre e informada en el Perú: la inclusión del interés indígena en el mundo de los derechos humanos*. Lima: IDEHPUCP | Konrad Adenauer Stiftun.

Salmón, E. (2020). «El enfoque de los derechos humanos en la lucha contra el cambio climático». En: E. Salmón (Coord.) *Cambio climático y derechos humanos*. (pp.17-46). Lima. IDEHPUCP-PUCP.

Salvioli, F. (2003). «Un análisis desde el principio pro persona sobre el valor jurídico de las decisiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos». En: V. Bazan (Coord.) *Defensa de la Constitución: libro homenaje a Germán Bidart Campos* (pp. 143-155) Buenos Aires: Ediar S.A.

Salvioli, F. (2004). «La competencia consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos: marco legal y desarrollo jurisprudencial». En: S. Fabris (ed.) *Homenaje y Reconocimiento a Antônio Cançado Trindade*. (pp. 417-472). Brasilia.

Salvioli, F. (2020). *El Sistema Interamericano de protección de los derechos humanos. Instrumentos, órganos, procedimientos y jurisprudencia*. Querétaro: Instituto de Estudios Constitucionales del Estado de Queretaro.

S&L Partners/ SFOC. Summary of complaint. Constitutional Court. Do-Hyun Kim Yujin *et al*. v. South Korea (13 Mar. 2020). Sabin Center Climate Change Law.

Sánchez-Bravo, A. (2013a). «Cambio Climático y Agua en la Unión Europea». *Revista Direito em Debate*, *22*(40), 130-154.

Sánchez-Bravo, A. (2013b). «Injusticia ambiental y derecho humano al agua». En: A. Sánchez-Bravo (ed.). *Justicia y Medio Ambiente*. (pp.151-170). Sevilla: Punto Rojo.

Sánchez-Bravo, A. (2017). «Hacia un reconocimiento del agua como derecho humano universal». *Revista de Direito Econōmico e Socioambiental*, 8(3), 220-238.

Sánchez-Bravo, A. (2018a). «A experiència de Aarhus e as políticas públicas ambientais de participaçao e deliberaçao e deliberaçao comunitárias no Brasil». *Revista International de Direito Ambiental*, 7(21), 11-38.

Sánchez-Bravo. A. (2018b). «Derechos humanos, sostenibilidad y políticas públicas ambientales». *CADE: doctrina y jurisprudencia.* 46, 59-66.

Sánchez-Bravo, A. (2019) «Acceso a la justicia en materia ambiental en la Unión Europea». En: A. Sánchez-Bravo (ed.). *Democracia, pluralismo y derechos humanos: 500 años. Facultad de Derecho. Universidad de Sevilla. X años de Encuentros hispanos-brasileños de filosofía del derecho y derechos humanos.* (pp. 65-77). Madrid: Aranzadi.

Sánchez-Bravo, A. (2020). «Covid-19: Impactos y efectos. Una reflexión desde el inicio del fin del confinamiento». En: L. Pilau (Ed), *Covid-19 e seus paradoxos* (p. 77). Itajaí: Prefixo.

Sánchez-Bravo. A. (2022). «Ecología integral y doctrina social de la iglesia». En: A. Sánchez-Bravo (dir.) *Semper Sapiens: libro homenaje al Profesor Dr. Felipe Rotondo Tornaría.* (pp. 19-37). Madrid: Alma Mater.

Sánches-Rubio, D. (2019). «Praxis instituyente, común y multigarantías de derechos humanos». En: A. Sánchez-Bravo (ed.). *Democracia, pluralismo y derechos humanos: 500 años. Facultad de Derecho. Universidad de Sevilla. X años de Encuentros hispanos-brasileños de filosofía del derecho y derechos humanos.* (pp. 133-158). Madrid: Aranzadi.

Sánchez-Rubio, D. (2018). «Derechos humanos, no colonialidad y otras luchas por la dignidad: una mirada parcial y situada». En: D. Sánchez-Rubio. *Derechos humanos instituyentes, pensamiento crítico y praxis de la liberación*. Ediciones Akal: Ciudad de México.

Sánchez-Rubio. D. (2020). «Crítica al poder constituyente: entre lo constituido, lo instituyente y la praxis de lineración». En: Sánchez-Rubio, D. & Cruz-Zúñiga. P. *Poderes constituyentes, alteridad y derechos humanos. Miradas críticas a partir de lo instituyente, lo común y los pueblos indígenas*. Madrid: Dykinson.

Sánchez Rubio, D. (2022). «Humanismo intercultural biocentrado, una propuesta desde lo común». *Anuario de Filosofía del Derecho*. (38)., 251- 274.

Sandholtz, W. (2021). «Human rights courts and global constitutionalism: Coordination through judicial dialogue». *Global Constitutionalism*, *10*(3), 439-464.

Sands, P. & Peel, J. (2012). *Principles of international environmental law*. Cambridge University Press.

Sands, P. (2017). «Climate change and the rule of law: Adjudicating the future in international law». In *The Pursuit of a Brave New World in International Law* (pp. 114-134). Brill Nijhoff.

Sato, M., Gostlow, G., Higham, C., Setzer, J., *et al.* (2023). «Impacts of climate litigation on firm value». *Center for Climate Change Economics and Policy Working Paper 421/ Grantham Research Institute on Climate Change and the Environment Working Paper 397*. LSE.

Savaresi., A., Kuovesi., K. & Van Asselt., H. (17 Dic 2021). «Beyond COP26: Time for an Advisory Opinion on Climate Change?» *Ejil:Talk!*

Savaresi, A. & Setzer, J. (2021), «Mapping the Whole of the Moon: An Analysis of the Role of Human Rights in Climate Litigation». *SSRN*

Schettini, A. (2012). «Toward New Paradigm of Human Rights Protection for Indigenous Peoples: Critical Analysis of the Parameters Established by the Inter-American Court of Human Rights». *Sur International Journal on Human Rights,* 17, 62

Schlosberg, D. & Collins, L. B. (2014). «From environmental to climate justice: climate change and the discourse of environmental justice». *Wiley Interdisciplinary Reviews: Climate Change*, *5*(3), 359-374.

Schlosberg, D. (2013). «Theorising environmental justice: the expanding sphere of a discourse». *Environmental politics*, *22*(1), 37-55.

Schröder, M. (2014) «Precautionary Approach/Principle». En: Wölfrum, R. (ed.). *The Max Planck Encyclopedia of Public International Law*. Oxford: Oxford University Press.

Seck., S. (2021) «Climate Justice and The ETO's». En: M. Gibney., G. Erdem., *et al* (eds.) *Handbook on Extraterritorial Human Rights Obligations*. (pp. 421-433). Oxon: Routledge.

Shelton, D. (2015). «Réparations». En: R. Wölfrum (ed.) *The Max Planck Encyclopedia of International Law*. Oxford: Oxford University Press.

Shi, Y. (2016). «Climate Change and International Shipping: The Regulatory Framework for the Reduction of Greenhouse Gas Emissions». En: D. Freestone (ed.) *Legal Aspect of Sustainable Development* (pp. 118-176). Leiden: Brill |Nijhoff.

Shlütter, B. (2012). «Aspects of human rights interpretation by the UN treaty bodies». En H. Keller & G. Ulfstein (eds.) *UN Human Rights Treaty Bodies, Law and Legitimacy* (pp. 261-318). Cambridge: Cambridge University Press.

Shue, H. (1999). «Global environment and international inequality». *International affairs*, *75*(3), 531-545.

Shue, H. (2014). *Climate justice: Vulnerability and protection*. Oxford: Oxford University Press.

Simma, B. (2003). «Fragmentation in a positive light». *Michigan. Journal of International Law*, *25*, 845-848.

Simma, B. & Pulkowski, D. (2006). «Of planets and the universe: self-contained regimes in international law». *European Journal of International Law*, 17(3), 483-529.

Singer, P. (2016) *One World Now: The Ethics Of Globalization*. New Heaven. Yale University Press.

Soley, X. & Steininger, S. (2018). «Parting ways or lashing back? Withdrawals, backlash and the Inter-American Court of Human Rights». *International Journal of Law in Context*, *14*(2), 237-257.

Sólon, P. (2018). «The rights of mother earth». En V. Satgar (ed.) *The climate crisis. South African and global democratic eco-socialist alternatives* (pp. 107-130). Johannesburg: Wits University Press.

Stern, B. (2010). «The elements of an internationally wrongful act». En: Crawford, J., Pellet, A., Olleson, S. & Parlett, K. (Eds.). *The law of international responsibility*. (pp. 193-220). Oxford: Oxford University Press.

Steffen, W., Richardson, K., Rockström, J., *et al.* (2015). «Planetary boundaries: Guiding human development on a changing planet». *Science*, *347*(6223), 1259855.

Stevenson, J. R. (1952). «Relationship of Private International Law to Public International Law», The. *Columbia. Law. Review.*, *52*, 561.,

Stewart, R. B., Oppenheimer, M. & Rudyk, B. (2013). «Building a more effective global climate regime through a bottom-up approach». *Theoretical Inquiries in Law*, *14*(1), 273.

Stone, C. D. (1972). *Should trees have standing?—Toward legal rights for natural objects*. Southern California Law Review 45, 450-501.

Sulyok, K. (2020). *Science and Judicial Reasoning: The Legitimacy of International Environmental Adjudication*. Cambridge: Cambridge University Press.

Sulyok, K. (2023). «A rule of law revolution in future generations' litigation: intergenerational equity and the rule of law in the Anthropocene».

Tigre, M. (2020). «Inter-American Court of Human Rights Recognizes the Right to a Healthy Environment». *ASIL Insights*, 24(14).

Trigre. M. (10 Agosto 2020). «How is COVID-19 affecting Amazonia. Violations to human rights and environment». *Völkerrechtsblog.*

Tigre. M.A., Carvarho. D. & Setzer, J. (21 Dec. 2021). «IEA v. Brazil: When a Court accepts the legally disruptive nature of climate change». *Climate Law Blog Sabin Center for Climate Change Law*.

Tigre. M.A. (27 Sept. 2022) «U.N. Human Rights Committee finds that Australia is violating human rights obligations towards Torres Strait Islanders for climate inaction». *Climate Law a Sabin Center blog.*

Tigre, M.A, Urzola, N. & Goodman, A. (2023) «Climate litigation in Latin America: is the region quietly leading a revolution?» *Journal of Human Rights and the Environment*,14 (1), 2023, pp.67-93.

Tigre, M. A., Zenteno, L., Hesselman, M., *et al* (2023). «Just transition litigation in Latin America: an initial categorization of climate litigation cases amid the energy transition». *Sabin Center for Climate Change law*.

Tigroudja, H. (2020). «Procedural Developments at International Human Rights Courts and Bodies». En: F. Baetens & R. Bismuth (eds.) *The Law & Practice of International Courts and Tribunals*, (pp. 304-341). Leiden: Brill | NIjhoff.

Tinta, M. F. (2006). «La víctima ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos a 25 años de su funcionamiento». *Revista Instituto Interamericano de Derechos Humanos*, *43*, 159-203.

Torre-Schaub, M., D'ambrosio, L. & Lormeteau, B. (2019). Rapport final de recherc: «Les dynamiques du contentieux climatique». Usages et mobilisations du droit pour la cause climatique*. Paris: Droit & Justice*

Treves, T. (2010). «Human Rights and the Law of the Sea». *Berkeley Journal of International Law*, 28(1), 1-14.

Treves., T. (2018). «The expansion on International Law». *Recueil des Cours / Collected Courses*. 398 (1).

UNCC. Greenhouse Gas Inventory Data - Detailed data by Party. United Nations Climate Change Platforms.

UNCC. (2022) National communication submissions from Non-Annex I Parties. United Nations Climate Change Platforms.

UNCC. (2022) National reports from Non-Annex I Parties. United Nations Climate Change Platforms.

UNCC. (2022) National Reports from non-Annex I Parties.

UNDG. (2003). The Human Rights Based Approach to Development Cooperation Towards a Common Understanding Among UN Agencies.

UNDP. (2021) «Atrapados: Alta Desigualdad y Bajo Crecimiento en América Latina y el Caribe»*. Informe Regional de Desarrollo Humano 2021.*

UNEP (2021), Report: «The production Gap Executive Summary». UNEP. 3.

UNEP (2017). *The status of climate change litigation: a global review. UNEP/SABIN Center for Climate Change*. New York: UNEP/SABIN.

UNEP (2018). *Emissions Gap Report 2018*. UNEP.

UNEP. (2021) *The heat is on: A world of climate promise not yet delivered*. UNEP. 26.Nairobi: UNEP.

UNEP. (2023). «Environmental rule of law: tracking progress and charting future directions». UNEP.

UNESCO. (2017) One Planet, One Ocean: Intergovernmental Oceanographic Commission of UNESCO. UNESCO.

UNFCCC. (2020) The initial two-year workplan of the LCIPP for the period 2020-2021.

UNFCCC. (2021) Indigenous people increasingly engaging in climate action.

UNFCCC. (2022) INDCs as communicated by Parties.

UNHRC. (2020). «COVID-19 is devastating indigenous communities worldwide, and it's not only about health», *Special Rapporteur on the rights of indigenous peoples*, Mr. Francisco Cali Tzay.

UNHROHC| ACNUDH. Special procedures. What are Comunications?

UNHROHC |ACNUDH. (2021) Preguntas frecuentes sobre los derechos humanos y el cambio climático. Folleto Informativo No. 38. Ginebra: ACNUDH.

Van Asselt, H., Sindico, F. & *et. al.* (2008). «Global climate change and the fragmentation of international law». *Law & Policy*, *30*(4), 423-449.

Vanderheiden, S. (2016). «Environmental and climate justice». En: T. Gabrielson, C. Hall, *et al* (eds.) *The Oxford handbook of environmental political theory* (pp. 321-332) Oxford: Oxford University Press, p. 321.

Ventura R. & Zovatto, G., D. (1989). *La Función Consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos: Naturaleza y Principios*. Instituto Interamericano de Derechos Humanos. Madrid. CIVITAS.

Vera, G. (2018). «La aplicación del Principio de Subsidiariedad en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos: avances y retos». *Iuris Dictio* 21(1), 99-109.

Vio Grossi, E. (2018). «La naturaleza no vinculante de las opinions consultivas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos». *Revista Jurídica Digital UANDES* (2) 2, 200-214.

Viñuales, J. E. (2010). «Legal techniques for dealing with scientific uncertainty in environmental law». *Vanderbilt Journal of transnational Law.* 43, 437-503.

Viñuales, J. E. (2016). «A human rights approach to extraterritorial environmental protection?». En: Butha, N. (ed.) *The frontiers of human rights: extraterritoriality and its challenges* (pp. 177-221). Oxford: Oxford University Press.

Viñuales., J.E. (2020). «Due diligence in International Environmental Law. A fine-grained cartography». En: H., Krieger. A., Peters. A. & L., Kreuzer. (eds.), *Due Diligence in the International Legal Order* (p. 111-128). Oxford: Oxford University Press.

Voigt, C. (2019). *International Judicial Practice on the Environment: Questions of Legitimacy*. Cambridge: Cambridge University Press.

Voigt, C. (2020). «ANZSIL conference keynote 2019: climate change, the critical decade and the rule of law». En D. Greig, D. Rothwell, I. *et al* (eds.) *The Australian Year Book of International Law*. (50-62). Leiden: Brill | Nijhoff.

Von Bogdandy, A. (2015). «Ius Constitutionale Commune en América Latina: una mirada a un constitucionalismo transformador». *Revista Derecho del Estado*, (34), 3-50.

Von Bogdandy, A. (2019). «El mandato transformador del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Legalidad y legitimidad de un proceso iurisgenerativo extraordinario». En: Von Bogdandy., A, Ferrer-McGregor. & *et al.* (cood.) *Cumplimiento e impacto de las sentencias de la Corte Interamericano y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos transformando realidades*. (pp. 95-126). Querétaro: Instituto de Estudios Constitucinales.

Von Bogdandy., A. Casal., J.M. Morales., M. (2020). *La resistencia del Estado Democrático de Derecho en América Latina frente a la pandemia de Covid-19. Un enfoque desde el ius commune*. Max Planck Institute for Comparative Public Law & International Law. Paper No. 2020-35.

Von Bogdandy, A. & Urueña, R. (2020). «International transformative constitutionalism in Latin America». *American Journal of International Law*, *114*(3), 403-442.

Waldmüller, J. (2020). «Pueblos Indígenas y Cambio Climático». *Letras Verdes. Revista Latinoamericana de Estudios Socioambientales*, (27), 9-10

Walker, W., Gorelik, S., Baccini, A., *et. al.* (2020). «The role of forest conversion, degradation, and disturbance in the carbon dynamics of Amazon indigenous territories and protected areas». *Proceedings of the National Academy of Sciences*, *117*(6), 3015-3025.

Weaver, H. N. (2001). «Indigenous identity: what is it, and who really has it?». American Indian Quarterly, 25(2), 240-255.

Weiss, E. B. (1988). «In fairness to future generations: international law, common patrimony, and intergenerational equity».

Weiss, E. B. (1990). «Our rights and obligations to future generations for the environment». *American Journal of International Law*, *84*(1), 198-207.

Wenzel, N. (2008). «Human rights, treaties, extraterritorial application and effects». En: Wölfrum, R. (ed.). *The Max Planck Encyclopedia of Public International Law*. Oxford: Oxford University Press.

Waters, C. N., Williams, M., Zalasiewicz, J., *et al.* (2022). «Epochs, events and episodes: Marking the geological impact of humans». *Earth-Science Reviews*.

Wewerinke-Singh, M. (2018). *State responsibility, climate change and human rights under international law.* Oxford: Hart Publishing.

Whitmee, S. Haines, A. *et. al.*, (2015). «Safeguarding Human Health in the Anthropocene Epoch: Report of The Rockefeller Foundation—Lancet Commission On Planetary Health». *The Lancet*, 386 (10007), 1973-2028.

WHO. (2003). *Climate change and human health: risks and responses*. WHO.

WHO. (2014*). Quantitative risk assessment of the effects of climate change on selected causes of death, 2030s and 2050s*. Ginebra: WHO.

WHO. (2021) «Health Promotion Glossary of Terms 2021: planetary health». En: https://bit.ly/3G3258Z

WHO (2022) Alliance for Transformative Action on Climate and Health (ATACH).

WHO (12 de octubre de 2023). Climate Change. WHO.

WHO/PAHO. (2021) Climate change and health.

Whyte, K. (2016). «Is it colonial déjà vu? Indigenous peoples and climate injustice». En: D. Adamson,. & M. Davis (eds.) *Humanities for the Environment* (pp. 102-119). Londres: Routledge.

Williams, M., Leinfelder, R., Barnosky, A., *et al.* (2022). «Planetary-scale change to the biosphere signalled by global species translocations can be used to identify the Anthropocene». *Palaeontology*, *65*(4), e12618.

Winter, G. (2004) «Teh legal nature of environmental principle in international, EC and german law». En: Richard Marory *et al* (Eds.)., *Principles of European Law*. Groningen: European Law Publishing.

Wilensky, M. (2015). «Climate change in the courts: an assessment of non-US climate litigation». *Duke Environmental Law Policy & Forum.*, *26,* 171-179.

WMO. (2021). State of the climate in Latin America and the Caribbean 2020. WMO-No. 12-72. Ginebra: WMO.

WMO | Arizona State University. (2021). World Meteorological Organization Global Weather & Climate Extremes Archive. Hemispheric Weather & Climate Extremes.

World Resources Institute (2020). «Setting the Paris Agreement in Motion: Key requirements for the implementing guidelines».

Wolkmer, C. (2018). *Pluralismo jurídico: fundamentos de una nueva cultura del Derecho*. Madrid: Dykinson.

WMO. (2019). The global Climate in 2015-2019. Ginebra: WMO.

Woods, K. (2016). «Environmental human rights». En: T. Gabrielson, C. Hall, *et al* (eds.) *The Oxford handbook of environmental political theory* (pp. 333-345). Oxford: Oxford University Press.

Wood, M. & Woodward IV, C. (2016). «Atmospheric trust litigation and the constitutional right to a healthy climate system: judicial recognition at last». *Washington Journal of Environmental Law & Policy*, *6*, 634-678.

WWF. (2016). *Living Amazon Report 2016: a regional approach to conservation in the Amazon.*

WWF (2021) NDC de América Latina y el Caribe: Recomendaciones para los Tomadores de Decisión.

Wyns, A. (2023). «COP27 establishes loss and damage fund to respond to human cost of climate change». *The Lancet Planetary Health*, *7*(1), e21-e22

Yamin, F. & Depledge, J. (2004). *The international climate change regime: a guide to rules, institutions and procedures*. Cambridge: Cambridge University Press.

Yee., S. (2003). «forum prorogatum returns to the International Court of Justice». *Leiden Journal of International Law*, 16, 701-713

Yoshida, O. (2001). *The International Legal Régime for the Protection of the Stratospheric Ozone Layer*. Leiden: Brill | Nijhoff.

Zaffaroni, E. (2011). *La Pachamama y el Humano*. Buenos Aires: COLIHUE.

Zavala J & Oliva,. J. (2017). *Derecho de los Pueblos Indígenas: Textos y Materiales*. Colección Electrónica Institutos de Estudios Internacionales y Europeos Francisco de Vitoria. No. 8. Universidad Carlos III de Madrid.

Zúñiga, N. (2013). «Control de convencionalidad y protección multinivel de los derechos humanos en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos». *Derecho PUCP*, (70), 347-369.

Zúñiga, N. (2022). *The Inter American Court of Human Rights: The Legitimacy of International Courts and Tribunals*. Routledge.

Material audiovisual (orden cronológico)

CIDH. «Audiencia sobre cambio climático, acceso al agua y derechos humanos». 141 *Periodo de Sesiones. 28 mar. 2011.*

Cançado-Trindade, A. A. (27/10/2017). «La persona humana en el contencioso interestatal ante la Corte Internacional de Justicia» [video]. *Audiovisual Library of International Law* | UN Web TV.

CIDH, Audiencia «Cambio climático y DESCA de mujeres, NNA, pueblos indígenas y comunidades rurales». *173 Periodo de Sesiones*. 25 sep. 2019.

Rajamani, L. (27/09/2021) «The International Climate Change Regime Evolution and Challenges» [video]. *Audiovisual Library of International Law | UN Web TV*.

Comunicados de Prensa

UN News. (2011, 22 de septiembre). «Palau seeks UN World Court opinion on damage caused by greenhouse gases». [comunicado de prensa].

Ministerio de Relaciones Exteriores de Paraguay (2019, 24 de abril). «*Gobiernos de Argentina, Brasil, Chile, Colombia y Paraguay se manifiestan sobre el Sistema Interamericano de Derechos Humanos»*. [comunicado de prensa].

CIDH | REDESCA (2019, 3 de septiembre). «CIDH y su REDESCA expresan profunda preocupación por la deforestación y la quema en la Amazonía». [comunicado de prensa].

CIDH. (2020, 13 de agosto). «Las Américas: los gobiernos deben fortalecer, no debilitar, la protección del medio ambiente durante la pandemia de la COVID-19» [comunicado de prensa CIDH 198-20].

OEA|CIDH. (2021, 22 de abril). «En el día de la Tierra, CIDH y REDESCA, saludan la entrada en vigor del Acuerdo de Escazú y llaman a los Estados de la región a fortalecer sus políticas públicas ambientales frente a la emergencia climática». [comunicado de prensa].

OEA|CIDH. (2021, 14 de octubre). «CIDH presenta caso ante la Corte IDH sobre responsabilidad de Perú por efectos de la contaminación en la Comunidad de la Oroya». [comunicado de prensa].

CIDH/REDESCA. (2021, 4 de noviembre). «En el marco de la COP 26 de la Convención Marco sobre Cambio Climático, la CIDH y la REDESCA llaman a los Estados Miembros de la OEA a poner la protección de los derechos humanos en el centro de sus políticas y acciones climáticas» [comunicado de prensa].

UN. (2021, 13 de noviembre). «COP 26 close with "compromise" deal on climate, but it's not enough, says UN Chief» [comunicado de prensa].

CtIDH. (2022, 7 de febrero). «*Inauguración del año judicial Interamericano 2022»*. [comunicado de prensa CtIDH 10/2022].

Vanuatu ICJ Iniciative. (2023, 23 de marzo) ICJ Resolution. [comunicado de prensa].

Working Group on the Anthropocene & Max Planck Society. (2023, 12 de Julio). *«*Anthropocene Working Group proposes Crawford Lake as GSSP candidate site of the Anthropocene series*».* [comunicado de prensa Max Plank Institute of Geoanthropology].

Copernicus Europe's Eyes on Earth. (2023, 8 de agosto) «*July 2023 sees multiple global temperature records broken»*. [comunicado de prensa Copernicus Europe's Eyes on Earth & Clamete Change Service].

Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Federativa de Brasil (2023, 8 de agosto) «Presidencial por ocasião da Cúpula da Amazônia - IV Reunião de Presidentes dos Estados Partes no Tratado de Cooperação Amazônica». [comunicado de prensa Nro. 331].

NASA. (2023, 14 de Agosto) «NASA Study Reveals Compounding Climate Risks at Two Degrees of Warming» [comunicado de prensa].

NASA. (2023, 21 de agosto) «The Ocean has a Fever*»* [comunicado de prensa].

Artículos de periódicos (orden cronológico)

Flora Charner (15 mayo 2020). «Deforestation in the Amazon is accelerating despite coronavirus». *CNN*.

Poliszuk, J., Rámirez. M & *et al.* (30 enero 2022). «Corredor furtivo, las pistas ilegales que bullen en la selva venezolana». *El País*.

Tapia. A. (8 abril 2021). «El vertido de petróleo y la triple pandemia que azota la Amazonía ecuatoriana». *El País.*

Mooney. C., *et al.* (7 noviembre 2021). «Countries' climate pledge built on flawed data, Post investigation finds». *The Washington Post.*

Muyskens. J., Narayanswamy., A. & Mooney. C. (7 noviembre 2021). «Measuring the invisible: How the Post did its global emissions analysis». *The Washington Post.*

COLECCIÓN

JÓVENES INVESTIGADORES

COLEX

TÍTULOS PUBLICADOS

1. Acceso a la justicia y mediación administrativa extrajudicial en el Estado relacional
2. La justicia en la sociedad 4.0: nuevos retos para el siglo XXI
3. El cambio climático a la luz del Sistema Interamericano de Derechos Humanos

DESCUBRA MÁS OBRAS EN:

www.colex.es

Editorial Colex SL Tel.: 910 600 164 info@colex.es

EL CAMBIO CLIMÁTICO A LA LUZ DEL SISTEMA INTERAMERICANO DE DERECHOS HUMANOS

Este libro analiza la conexión entre el cambio climático y los derechos humanos, específicamente el impacto del fenómeno peligroso en el individuo, grupos y componentes de la naturaleza. Se presenta un estudio detallado de aproximaciones judiciales basadas en la protección de derechos fundamentales desde la perspectiva litigiosa de casos del Norte y Sur Global.

La obra busca promover el litigio estratégico ante los mecanismos de protección de derechos humanos, concretamente, el sistema interamericano. A lo largo de cuatro capítulos se identifican obligaciones climáticas en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, particularmente, aquellas asociadas con el cumplimiento de los deberes de respeto y garantía de los derechos a la propiedad colectiva, medio ambiente sano, acceso a la información, participación y consulta en los asuntos ambientales, así como el derecho al acceso a la justicia y el debido proceso.

El libro identifica un marco jurídicamente vinculante para atribuir la responsabilidad del Estado frente a la violación de los derechos humanos en un contexto de cambio climático peligroso. Asimismo, propone una hoja de ruta que permita modular el riesgo de daño dentro de la exigibilidad y aplicabilidad que brinda la Convención Americana.



IRAIDA ANGELINA GIMÉNEZ

Iraida A. Giménez, licenciada en Derecho por la Universidad Central de Venezuela (2009), completó su Máster en Derecho Ambiental en la Universidad Internacional de Andalucía (2017) y obtuvo su Doctorado en Derecho por la Universidad de Sevilla con calificación sobresaliente cum laude y mención internacional (2022). Actualmente desempeña como profesora de Derecho Internacional Público y es miembro de la *Global Network of Peer Reviewers on Climate Litigation del Sabin Center for Climate Change Law*. Sus principales líneas de investigación se centran en el Derecho Internacional Público, Derecho del Mar, Derecho Internacional Ambiental y Derechos Humanos.

ISBN: 978-84-1194-292-8

9 788411 942928